CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis

PROCESO LEGISLATIVO

DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2019

PROCESO LEGISLATIVO	
01	10-09-2019 Cámara de Diputados. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. Presentada por el Ejecutivo Federal. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diario de los Debates 10 de septiembre de 2019.
02	17-10-2019 Cámara de Diputados. **DICTAMEN** de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. **Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 258 votos en pro, 104 en contra y 2 abstenciones. Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. Diario de los Debates 17 de octubre de 2019. Discusión y votación 17 de octubre 2019.
03	22-10-2019 Cámara de Senadores. **MINUTA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda. Diario de los Debates 22 de octubre de 2019.
04	24-10-2019 Cámara de Senadores. **DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. **Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 59 votos en pro, 32 en contra y 5 abstenciones. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. Diario de los Debates 24 de octubre de 2019. Discusión y votación 24 de octubre de 2019.
05	29-10-2019 Cámara de Diputados. **MINUTA** con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Diario de los Debates 29 de octubre de 2019.
06	30-10-2019 Cámara de Diputados. **DICTAMEN** de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. **Aprobado** en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 273 votos en pro, 168 en contra y 5 abstenciones. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. Diario de los Debates 30 de octubre de 2019. Discusión y votación 30 de octubre de 2019.
07	05-11-2019 Cámara de Senadores. **MINUTA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. **NOTA:** El proyecto viene acompañado de un Acuerdo de la Colegisladora, en donde da su anuencia para que la Cámara de Senadores como Cámara revisora remita al Ejecutivo Federal el Decreto solo en lo que ha sido aprobado por ambas cámaras Diario de los Debates 5 de noviembre de 2019.

PROCESO LEGISLATIVO	
08	05-11-2019 Cámara de Senadores. **DISCUSIÓN** del Artículo Décimo Quinto Transitorio del proyecto de decreto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. **No es Aprobado** en lo general y en lo particular, el Artículo Décimo Quinto Transitorio, por 3 votos en pro, 108 en contra y 0 abstenciones. Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Diario de los Debates 5 de noviembre de 2019. Discusión y votación 5 de noviembre de 2019.
09	25-11-2019 Ejecutivo Federal. **DECRETO** por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2019.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Diario de los Debates

ÓRGANO OFICIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio

Director General de Crónica y Gaceta Parlamentaria Gilberto Becerril Olivares	Presidenta Diputada Laura Angélica Rojas Hernández	Directora del Diario de los Debates Eugenia García Gómez
Año II	Ciudad de México, martes 10 de septiembre de 2019	Sesión 5 Anexo "B"

SUMARIO

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. 4

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido por las fracciones III y XV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y por instrucciones del ciudadano presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, me permito enviar:

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.

Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en materia arancelaria que se presenta de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con el marco jurídico aplicable, se acompañan a dichos documentos los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2020, elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, se remite la propuesta de Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria de 2020, con su respectiva nota metodológica y la lista de dichas zonas, así como la estimación del monto de los recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios del gobierno federal en materia de vivienda y de suelo, elaborados por la Secretaría de Bienestar.

En relación con el impacto presupuestario de las iniciativas citadas en los numerales 1 y 2, éstas se sujetan al procedimiento específico previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para su elaboración y presentación ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En ese sentido, la exposición de motivos de dichos instrumentos, junto con los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2020, comprenden toda la información sobre el impacto presupuestario correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»

C. Laura Angélica Rojas Hernández,
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento del artículo 74, fracción IV del mismo ordenamiento, así como de los artículos 7o. de la Ley de Planeación y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), me permito someter por su digno conducto, ante ese Honorable Congreso de la Unión la presente **Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los motivos que sustentan la presente Iniciativa, se expresan conforme a lo manifestado en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2020, y en cumplimiento a los requerimientos establecidos por la LFPRH.

I. Pronóstico de los ingresos presupuestarios del sector público.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 32, cuarto párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, se presenta la memoria de cálculo del pronóstico de los rubros de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley que se propone en la presente Iniciativa.

1. Ingresos del sector hidrocarburos.

1.1 Ingresos propios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED).

El pronóstico de los ingresos propios de PEMEX considera la proyección que aprobó su Consejo de Administración. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con base en lo establecido en la fracción III del artículo 101 de la Ley de Petróleos Mexicanos, modificó dicha proyección, con el fin de alinearla con el marco macroeconómico incorporado en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2020, particularmente en lo relativo al Producto Interno Bruto (PIB), al precio de la mezcla mexicana de petróleo, al precio del gas natural, al tipo de cambio del peso respecto al dólar de los Estados Unidos de América y a la inflación anual, entre otros elementos.

Para el pronóstico de los ingresos procedentes de las transferencias del FMPED, se partió del marco legal aplicable a los ingresos sobre hidrocarburos que considera los regímenes de asignaciones y de contratos establecidos en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH) y en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (LFMPED). Además, se consideró la siguiente información:

a) **Interna:** marco macroeconómico incorporado en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2020, de donde se obtienen variables como el precio del petróleo, el precio del gas natural, el tipo de cambio del peso respecto al dólar de los Estados Unidos de América y la inflación anual, principalmente.

   Cabe destacar que el precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano incorporado en el marco macroeconómico mencionado

se determina de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la LFPRH.

b) **Externa:** proyecciones para 2020 proporcionadas por PEMEX, relacionadas con la producción de petróleo y la producción de gas natural, principalmente.

2. Ingresos no petroleros.

2.1 Ingresos tributarios.

Para efectuar el pronóstico de los ingresos tributarios no petroleros se consideraron los elementos siguientes:

- Serie histórica de los ingresos, de 1990 a julio de 2019.
- Pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2019.
- Marco macroeconómico para el ejercicio fiscal de 2020.

El pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2019 y el marco macroeconómico para 2020, son consistentes con lo presentado en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2020.

Para obtener la base de la proyección de los impuestos se considera la serie histórica de los ingresos de 1990 a julio de 2019, así como el cierre proyectado del ejercicio fiscal de 2019.

El pronóstico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2019 se obtiene con el promedio de los pronósticos resultantes de dos modelos:

a) Holt Winters. Es un modelo estadístico de suavizamiento exponencial, que considera el nivel de la previsión, la

tendencia y un ajuste estacional aditivo de la serie de tiempo. Además, pondera en mayor medida la información de los periodos más recientes, por lo que se denomina un modelo con "memoria de corto plazo".

b) Modelo Autorregresivo Integrado de Medias Móviles (ARIMA). Este modelo pronostica valores futuros de una serie de tiempo en función de sus propios valores y de errores pasados. Se establece como variable dependiente la recaudación de cada impuesto y como variables independientes se incluyen los términos propios del modelo, como: término autorregresivo, orden de integración y término de media móvil.

2.2 Ingresos no tributarios.

La información utilizada como base para el cálculo de los ingresos pronosticados por concepto de derechos, productos y aprovechamientos, es proporcionada por las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 y 7o. de la Ley Federal de Derechos (LFD), así como en el Oficio Circular No. 102-K-043, publicado en el DOF el 29 de mayo de 2019, que establecen que las dependencias y órganos del Estado deben informar a la SHCP, durante la primera quincena de julio, respecto de los ingresos percibidos por derechos, productos y aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo y en el ejercicio inmediato siguiente.

Los informes mencionados se solicitaron a las 19 Secretarías de Estado, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como a los 57 órganos administrativos desconcentrados de la Administración Pública Federal Centralizada, a través de las Direcciones Generales de Programación, Organización y Presupuesto o sus homólogas, las

cuales presentaron su información mediante un sistema aplicativo en el portal de Internet de la SHCP.

Para la determinación del monto a ser incluido en la Ley que se propone en la presente Iniciativa, se aplicaron los siguientes criterios:

a) Derechos por la prestación de servicios (LFD, Título I).

Para determinar los derechos por la prestación de servicios, se consideró el aumento pronosticado en el número de servicios que prestarán las dependencias en 2020, así como los precios esperados para los mismos.

b) Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público (LFD, Título II, excepto hidrocarburos).

Los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Federación, están vinculados principalmente con actividades productivas que, por lo general, crecen al ritmo de la actividad económica y del crecimiento de los precios. Por ello, estos ingresos se pronosticaron considerando el crecimiento esperado de la economía para 2020 y la inflación.

c) Productos.

En virtud de que la política de fijación de cuotas por concepto de productos se orienta principalmente a mantener el valor real de las mismas, para realizar el pronóstico de los ingresos respectivos se aplicó únicamente el factor de la inflación esperada para el ejercicio fiscal 2020.

d) Aprovechamientos.

Si bien la política de fijación de cuotas de los aprovechamientos se sustenta principalmente en su actualización, también se tomó en cuenta que la prestación de servicios y el uso o

aprovechamiento de bienes relacionados con los aprovechamientos, se vinculan con actividades productivas que crecen al ritmo de la actividad económica. Por ello, en el pronóstico de los ingresos por este concepto se aplicaron ambos factores: inflación y crecimiento económico real, esperados para 2020.

3. Ingresos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Organismos de control presupuestario directo (Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS] e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado [ISSSTE]).

3.1 Ingresos propios de la CFE.

Los ingresos propios de la CFE consideran las cifras que la empresa productiva del Estado remitió a la SHCP, tras ser aprobadas por su Consejo de Administración. El pronóstico de ingresos propios para 2020, realizado por la empresa, consideró información consistente con el marco macroeconómico incorporado en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2020, de donde se obtienen variables como el PIB nacional, el tipo de cambio del peso respecto al dólar de los Estados Unidos de América, el precio del barril de petróleo, el precio del gas natural y la inflación anual, entre otros aspectos.

3.2 ISSSTE.

Los ingresos propios del ISSSTE se pronostican por rama de aseguramiento y para cada uno de los siguientes integrantes de dicho organismo: el ISSSTE-Asegurador, SuperISSSTE y el Sistema de Agencias Turísticas del ISSSTE. Asimismo, se consideran las comisiones del FOVISSSTE y del PENSIONISSSTE.

Respecto de los ingresos por prestación de servicios, el ISSSTE-Asegurador recibe cuotas del trabajador, del patrón y del Estado. El

pronóstico está basado en las cuotas y aportaciones que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (LISSSTE), en el incremento del salario básico de cotización y en el número de cotizantes promedio. Cabe señalar que en la prestación de servicios se incluyen los recursos correspondientes al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, los ingresos provenientes de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, así como los recursos que se obtienen por los servicios de velatorios y turísticos.

Para la calendarización se considera la estacionalidad de los cotizantes, a través de factores históricos mensuales. En el caso del incremento en el salario básico de cotización, se toma en cuenta la estacionalidad con la que se van reflejando las revisiones contractuales por entidad u organismo, por lo que se consideran factores históricos mensuales sobre la evolución del mismo. Se debe señalar que la recuperación de la emisión de la quincena 24 (última del año) y los ingresos de las cuotas y aportaciones del último bimestre del año, provenientes del seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, se recuperarán en el mes de enero del siguiente ejercicio, por lo cual no se incorporan en el pronóstico de 2020.

Los ingresos por la venta de bienes representan la utilidad que se obtiene de las ventas brutas de la red de tiendas y farmacias menos el costo de ventas. Lo anterior, se calcula considerando las expectativas de inflación y el consumo privado para el ejercicio fiscal de que se trate, así como el margen de utilidad observado y su tendencia.

En el caso de los ingresos diversos, para los productos financieros se considera la magnitud y acumulación de disponibilidades financieras y la tasa de interés promedio esperada según los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal 2020, así como los intereses moratorios.

3.3 IMSS.

Desde el ejercicio fiscal de 2003, el IMSS ha remitido a la SHCP el anteproyecto de presupuesto aprobado por su Consejo Técnico, de conformidad con el artículo 276 de la Ley del Seguro Social (LSS), con el fin de que se incluya en la Iniciativa de esta Ley de Ingresos de la Federación que se somete a la aprobación del Congreso de la Unión.

En ese contexto, el IMSS remitió a la SHCP el anteproyecto de presupuesto 2020 que fue aprobado por su Consejo Técnico.

En cuanto a los ingresos por cuotas obrero-patronales, el Instituto realiza el pronóstico del incremento promedio anual en el número de cotizantes al IMSS, el incremento nominal promedio en el salario base de cotización, el promedio mensual de días de cotización y las cuotas tanto del trabajador como del patrón, por ramo de seguro, para el siguiente ejercicio fiscal conforme a lo establecido en la LSS y su Reglamento en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

En cuanto a los ingresos por productos financieros, éstos se derivan de la inversión y uso de las disponibilidades del IMSS, la variación de las reservas financieras, las tasas de interés del mercado, así como los intereses moratorios y multas.

4. Ingresos presupuestarios del sector público de los últimos cinco ejercicios fiscales y proyecciones para los ejercicios fiscales de 2021 a 2025.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 40, fracción I, inciso b), de la LFPRH, se presentan los montos de los ingresos presupuestarios del sector público de los últimos cinco ejercicios fiscales.

Ingresos presupuestarios del Sector Público, 2015-2019

(Porcentajes del PIB)

Conceptos	2015	2016	2017	2018	2019 p/

Total 1/	**23.0**	**24.1**	**22.6**	**21.8**	**21.4**
Petrolero	**4.5**	**3.9**	**3.8**	**4.2**	**3.7**
Gobierno Federal	2.2	1.5	2.0	2.3	1.8
Pemex	2.3	2.4	1.8	1.9	1.9
No petrolero	**18.5**	**20.2**	**18.8**	**17.6**	**17.7**
Gobierno Federal	14.9	16.2	15.5	14.2	14.4
Tributario	12.7	13.5	13.0	13.0	13.1
No tributario	2.2	2.7	2.5	1.1	1.3
Organismos y empresas	3.5	3.9	3.3	3.4	3.3

p/ Pronóstico de cierre.
1/ No incluye ingresos derivados de financiamientos.
Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

De igual forma, a fin de observar lo establecido en el artículo 40, fracción I, inciso c), de la LFPRH, se presenta el pronóstico de los ingresos presupuestarios del sector público para los ejercicios fiscales de 2021 a 2025.

Ingresos presupuestarios del Sector Público, 2021-2025
(Porcentajes del PIB)

Conceptos	2021	2022	2023	2024	2025
Total 1/	**21.3**	**21.5**	**21.6**	**21.7**	**21.7**
Petrolero	**4.0**	**4.1**	**4.0**	**4.0**	**4.0**
Gobierno Federal	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Pemex	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4
No petrolero	**17.3**	**17.4**	**17.5**	**17.6**	**17.7**
Gobierno Federal	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4
Tributario	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
No tributario	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Organismos y empresas	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
Participaciones	**3.6**	**3.7**	**3.7**	**3.7**	**3.7**

1/ No incluye ingresos derivados de financiamientos.

Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

5. Presupuesto de Gastos Fiscales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 40, fracción I, inciso d) de la LFPRH, se presenta a continuación la proyección de los gastos fiscales para 2020.

De conformidad con la obligación establecida en el apartado A del artículo 31 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, así como en la fracción III del artículo 22 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria (LSAT), el 28 de junio del año en curso se entregó el documento "Presupuesto de Gastos Fiscales 2019" a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores. Además, la información que integra ese documento se encuentra en la página electrónica de la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e Información del Gobierno (gob.mx/hacienda o gob.mx/shcp).

En el documento a que se refiere el párrafo anterior, se incluyen las estimaciones de los montos que deja de recaudar el erario federal por concepto de tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, en los impuestos establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. En ese sentido, las estimaciones contenidas en el Presupuesto de Gastos Fiscales pretenden mostrar la pérdida recaudatoria que se presenta en un ejercicio, dada la política fiscal aplicable en el mismo, sin considerar los efectos que tal política tendría en ejercicios futuros.

Las proyecciones de los tratamientos diferenciales que se presentan en el Presupuesto de Gastos Fiscales sólo tienen por objeto aproximar la dimensión de la pérdida fiscal derivada de los citados tratamientos, por lo que no debe considerarse como potencial recaudatorio, ya que conforme al método de pérdida de ingresos utilizado, las estimaciones se realizan en forma independiente sin considerar el efecto que tendría la eliminación de un tratamiento en la pérdida recaudatoria de otro, o el cambio en el

comportamiento de los contribuyentes por la eliminación del tratamiento preferencial. La eliminación simultánea de varios o de todos los tratamientos diferenciales no implicaría una ganancia recaudatoria similar a la suma de las estimaciones individuales de dichos tratamientos. De igual manera, no se consideran las repercusiones en el resto de la economía ni cambios en la conducta de los contribuyentes ni efectos de equilibrio general, debido a que son estimaciones de equilibrio parcial.

Por lo anterior, en el "Presupuesto de Gastos Fiscales 2019" no se incluyeron cantidades totales por impuesto o de todos los rubros de los tratamientos diferenciales del sistema tributario.

Con el fin de facilitar la interpretación de las estimaciones señaladas y atendiendo a la distinta naturaleza de los tratamientos contenidos en el sistema impositivo, en el citado documento se presentaron los tratamientos diferenciales clasificados por impuesto, así como por tipo, agrupando los tratamientos que tienen características similares en cuanto a su forma de operación o cuyas estimaciones comparten una misma interpretación.

En general, los montos de gastos fiscales que se reportan en 2019 muestran un ligero aumento respecto a los reportados el año anterior, producto de nuevos gastos fiscales asociados a los estímulos de la región fronteriza norte del país, así como al aumento del gasto fiscal del impuesto al valor agregado (IVA) y de los estímulos asociados al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) del diésel. Por su parte, los gastos fiscales relativos al IEPS a los combustibles automotrices y al impuesto sobre la renta (ISR), registran una disminución respecto al año anterior.

Los gastos fiscales del IVA derivados de la aplicación de las tasas reducidas aumentaron debido a una mayor recaudación observada, lo que implica que la pérdida recaudatoria de los tratamientos preferenciales también aumente. Por su parte, el gasto fiscal que se observa en los estímulos fiscales del IEPS del diésel previstos en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, mediante los cuales los contribuyentes pueden acreditar un monto equivalente al IEPS pagado por dicho combustible, muestra un incremento con respecto al asociado a los otorgados en 2018, debido a que

se prevé que el importe del IEPS será mayor dado el menor monto del estímulo y el mayor volumen de ventas estimadas para 2019.

Asimismo, se observa una disminución del gasto fiscal en los estímulos asociados al IEPS de combustibles automotrices, debido a menores cuotas del estímulo esperadas para el resto de 2019, las cuales responden a los precios futuros de los combustibles y el tipo de cambio. En cuanto a la reducción de los gastos fiscales del ISR a nivel empresarial, la disminución obedece principalmente a los menores gastos fiscales de los tratamientos preferenciales que representan un diferimiento, en particular por la eliminación del gasto fiscal asociado a la deducción inmediata de la inversión para las micro y pequeñas empresas vigente hasta 2018. A nivel del ISR personal, el menor monto de los gastos fiscales se debe a la reducción por los intereses exentos que reciben las personas físicas a través de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro; del ISR a los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF); y, de algunas deducciones personales, como los intereses reales pagados por créditos hipotecarios y depósitos en cuentas especiales para el ahorro.

Entre los tratamientos diferenciales que destacan para el ejercicio fiscal de 2020, por el monto estimado de la pérdida recaudatoria que implican, se encuentran la tasa cero en el IVA, que se estima generará una pérdida de ingresos para el referido ejercicio fiscal de 305,392 millones de pesos (1.17 por ciento del PIB), los ingresos exentos del ISR por salarios que se estima signifiquen una pérdida recaudatoria de 156,966 millones de pesos (0.60 por ciento del PIB) y los estímulos fiscales que representan un monto de 130,584 millones de pesos (0.50 por ciento del PIB). Asimismo, se estima que en 2020 se producirá una pérdida recaudatoria de 69,424 millones de pesos (0.27 por ciento del PIB) derivada de los bienes y servicios exentos del IVA. Por su parte, el subsidio para el empleo se estima implicaría una pérdida recaudatoria de 51,947 millones de pesos (0.20 por ciento del PIB).

II. Entorno económico

Desde mediados de 2018, el crecimiento económico global comenzó a dar señales de desaceleración. El proceso de desaceleración del ciclo económico a nivel global se vio exacerbado por las disputas comerciales, principalmente, entre los Estados Unidos de América y la República Popular de China, y la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para 2019, las disputas comerciales se intensificaron, generando una mayor incertidumbre, episodios de alta volatilidad y de mayor aversión al riesgo en los mercados financieros, afectando de manera más fuerte a las economías emergentes. Estas tensiones han tenido un efecto negativo sobre el comercio internacional y la inversión, y en mayor medida y de manera generalizada en la producción industrial, en particular la manufacturera. Las disputas entre los Estados Unidos de América y la República Popular de China han escalado a niveles mayores de lo que se podía anticipar y podrían traducirse en una reconfiguración de las cadenas globales de valor, lo cual podría tener implicaciones importantes sobre la productividad de la economía mundial.

En línea con la desaceleración observada a nivel global, durante 2019 los precios de los hidrocarburos han presentado niveles menores respecto a 2018 debido a factores de oferta y demanda. Con respecto a los factores de oferta, destacan el crecimiento de la producción de petróleo y gas de esquisto en los Estados Unidos de América, así como la expansión del mercado de gas natural licuado a nivel mundial. En cuanto a los factores de demanda, destacan la desaceleración de la producción industrial, particularmente de las manufacturas, así como las expectativas negativas generadas por el escalamiento de las tensiones comerciales mencionadas.

Dado este contexto de desaceleración de la economía mundial, de menores precios de los energéticos y de menores presiones inflacionarias, particularmente en las economías avanzadas, a principios de 2019 los principales bancos centrales replantearon el ritmo de normalización de la política monetaria y se mantuvieron a la espera de mayor información. En la segunda mitad del año, ante un mayor deterioro de los indicadores de actividad económica agregada, los bancos centrales empezaron a relajar la posición de su política monetaria.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), en sus estimaciones de julio de 2019, proyectó que el crecimiento mundial alcance una tasa real anual de 3.2 por ciento

en 2019, lo cual implica una revisión a la baja de 0.1 puntos porcentuales respecto a la tasa esperada en las proyecciones de abril, y de 0.4 puntos porcentuales respecto de la de enero de 2019. Asimismo, el FMI anticipó que el crecimiento mundial en 2020 se ubicará en 3.5 por ciento, 0.1 puntos porcentuales menos que las proyecciones previas. Al respecto, la institución destacó que las revisiones a las tasas de crecimiento son consistentes con el desarrollo de las tensiones comerciales, un aumento prolongado de la aversión al riesgo y la existencia de crecientes presiones deflacionarias.

Ante este entorno internacional complejo, la economía mexicana mostró resultados mixtos. Por un lado, la actividad industrial y la inversión han mostrado una mayor debilidad, mientras que por el otro, las exportaciones no petroleras continúan presentando una tendencia positiva, acompañadas por un desempeño estable del mercado laboral con crecimientos en el salario real.

La desaceleración observada en la actividad económica agregada, tanto en México como a nivel global, tiene que ver con factores relacionados al ciclo económico y no con los factores que tienen un efecto permanente sobre la economía y que determinan el crecimiento de la actividad en el largo plazo.

Durante 2019, a pesar de un entorno internacional con elevada volatilidad, el peso se ha mantenido dentro de los parámetros esperados. En el primer semestre del año, el tipo de cambio reflejó una apreciación, mientras que la curva de rendimientos se desplazó hacia abajo en línea con los mercados internacionales.

La inflación general anual mostró una trayectoria descendente durante 2019 debido sobre todo a reducciones en la inflación no subyacente y, en particular, a menores aumentos en los precios de los energéticos. La inflación general anual pasó de 4.83 por ciento en diciembre de 2018 a 3.29 por ciento en la primera quincena de agosto de 2019. En este contexto, en su última reunión del 15 de agosto, el Banco de México decidió disminuir la tasa objetivo en 25 puntos base a un nivel de 8.0 por ciento. La Junta de Gobierno destacó que esta acción considera que la inflación general ha disminuido conforme a lo previsto y que la ampliación en la holgura ha sido mayor a la esperada, incrementándose la brecha del producto en terreno negativo.

Para el 2019 se estima que el crecimiento del PIB se ubique entre 0.6 y 1.2 por ciento. El crecimiento en la segunda parte del año se verá impulsado por un mayor gasto corriente y de inversión pública, de acuerdo al presupuesto aprobado para 2019; por las acciones para impulsar la economía anunciadas en el mes de julio, y por mayores oportunidades de inversión por la expectativa de la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) por parte de los congresos de estos últimos dos países. Asimismo, se espera que el consumo y las exportaciones no petroleras contribuyan a la recuperación de la actividad económica, éstas últimas impulsadas por el comercio con Estados Unidos, y que el relajamiento monetario a nivel internacional y la reducción en la tasa objetivo del Banco de México generen condiciones más favorables para el consumo de bienes duraderos y la inversión. Por otro lado, el Gobierno de México está llevando a cabo acciones para generar mayor certidumbre, entre las que se incluye la solución de las controversias para reiniciar la operación de los gasoductos detenidos.

Para 2019 se estima que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo sea de 55 dólares por barril (dpb), congruente con el precio utilizado para el presupuesto, y que el tipo de cambio alcance un promedio de 19.4 pesos por dólar. Para el cierre de 2019 se prevé una inflación anual de 3.2 por ciento, que corresponde al pronóstico de inflación del Banco de México para el cuarto trimestre del año publicado en su Informe Trimestral de abril-junio.

El programa económico para 2020 se basa en un marco macroeconómico prudente y acorde con las expectativas de los mercados, dada la incertidumbre que prevalece en el entorno económico internacional. Sin embargo, se estima que el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos, el repunte del crédito y la inversión en infraestructura pública y privada generen un mayor dinamismo durante el año. Éste último también se encontraría impulsado por factores externos como mejores condiciones comerciales por la probable ratificación del T-MEC, y factores internos como la disipación de la incertidumbre ante nuevas políticas gubernamentales y de presiones inflacionarias. Así, se prevé un crecimiento real anual del PIB en 2020 de entre 1.5 y 2.5 por ciento. En particular, para las estimaciones de finanzas públicas se considera un crecimiento puntual de 2.0 por ciento real anual.

Para el cierre de 2020, se prevé una inflación anual de 3.0 por ciento, igual a la proyectada por el Banco de México para el cuarto trimestre de ese año en su Informe Trimestral de abril-junio de 2019; un tipo de cambio nominal de 20.0 pesos por dólar, y una tasa de interés nominal promedio de CETES a 28 días de 7.4 por ciento.

Para 2020 se proyecta un precio para la mezcla mexicana de exportación de 49.0 dpb, por una menor demanda del energético, resultado de el escalamiento de las tensiones comerciales, la desaceleración de la actividad industrial a nivel global, así como la entrada en vigor en 2020 de la regulación de la Organización Marítima Internacional sobre el contenido máximo de azufre del combustóleo. Asimismo, se propone una plataforma de producción de 1,951 miles de barriles de petróleo diarios, de acuerdo con el Plan de Negocios de PEMEX y las estimaciones de la producción privada de la Secretaría de Energía.

Si bien las variables consideradas están en línea con las expectativas de los analistas de los mercados, el marco macroeconómico podría verse afectado si llegaran a exacerbarse algunos riesgos, entre los que destacan: el mayor retraso en la aprobación del T-MEC; un escalamiento de los conflictos geopolíticos y comerciales a nivel mundial; una mayor desaceleración de la economía mundial, principalmente, en la producción industrial de los Estados Unidos de América; un mayor deterioro en la calificación crediticia de PEMEX con su posible contagio a la deuda soberana; y una mayor debilidad de la inversión privada.

III. Crédito Público

El Gobierno Federal implementará durante los siguientes años una política de manejo de la deuda basada en un uso estricto y responsable del endeudamiento con el fin de que la deuda pública mantenga una trayectoria sostenible que contribuya a la fortaleza de las finanzas públicas.

La política de deuda pública estará dirigida a mantener un portafolio de pasivos con bajo riesgo y costo que permita garantizar la estabilidad de las finanzas públicas ante choques externos que afecten las variables macroeconómicas.

Conforme a lo establecido en la fracción I, inciso f) del artículo 40 de la LFPRH, a continuación se detalla la evaluación de la política de deuda pública durante 2018 y lo que ha transcurrido de 2019.

Durante el ejercicio de 2018, la política de endeudamiento buscó satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal procurando el buen funcionamiento de los mercados, por lo que la estrategia contó con flexibilidad para adaptar la estrategia de colocación a las condiciones financieras prevalecientes.

En lo que se refiere al mercado interno, los programas de subastas de valores gubernamentales se diseñaron considerando las condiciones del mercado, la demanda por los diferentes tipos de instrumentos y la flexibilidad para tener un manejo de la liquidez más eficiente durante cada trimestre.

En particular, se continuó utilizando la flexibilidad en la colocación de CETES a fin de atender cambios derivados de la estacionalidad de la caja de la Tesorería de la Federación (TESOFE) y las condiciones de mercado, resaltando la flexibilidad que se añadió a las subastas de CETES a 182 días y CETES a 1 año en el tercer trimestre del año.

Por otra parte, considerando la estacionalidad que presentó la demanda de valores gubernamentales y la baja actividad por parte de los inversionistas en los mercados financieros durante las últimas semanas del año, en los meses de octubre y parte de noviembre de 2018 se incrementaron los montos de colocación de Bonos M y Udibonos y durante las últimas semanas del año, disminuyeron en la misma magnitud. Estas modificaciones buscaron contribuir a preservar el funcionamiento ordenado del mercado de deuda local a través de una reducción en la colocación de valores gubernamentales de largo plazo.

Como parte de la estrategia de deuda del Gobierno Federal, en marzo de 2018 se realizó una operación de permuta de Bonos M en el mercado interno. En dicha operación se recibieron Bonos M con vencimientos en 2018 y 2019 y se entregaron Bonos M con vencimiento entre 2023 y 2047. En total, se asignaron 19 mil 905 millones de pesos (mdp), disminuyendo las amortizaciones para 2018 y 2019 en 6 mil 845 mdp y 13 mil 060 mdp, respectivamente.

Asimismo, en julio se realizó una operación de permuta de Bonos M y Udibonos en el mercado interno. En dicha operación se recibieron Bonos M con vencimiento entre 2018 y 2021 y Udibonos con vencimiento en 2019 y 2020, y se entregaron Bonos M con vencimiento entre 2021 y 2047, así como Udibonos con vencimiento entre 2022 y 2046. En total, se asignaron 177 mil 842 mdp, disminuyendo las amortizaciones para 2018 en 51 mil 211 mdp, 2019 en 27 mil 510 mdp, 2020 en 73 mil 670 mdp y 2021 en 25 mil 450 mdp.

Con estas operaciones se suavizó el perfil de vencimientos y se aumentó la duración del portafolio de deuda, satisfaciendo así, el interés observado del mercado por bonos con mayor duración.

En lo que respecta a colocaciones sindicadas, con el fin de mejorar el perfil de vencimientos de la deuda del Gobierno Federal y aumentar su plazo promedio, el Gobierno Federal realizó en abril la colocación de un Bono M en los mercados locales de deuda por un monto total de 25 mil mdp con un plazo al vencimiento de 3 años. El nuevo bono de referencia con vencimiento en diciembre de 2021 se colocó a una tasa de rendimiento de 7.22 por ciento con una tasa cupón de 7.25 por ciento.

Por otra parte, en el ámbito de la deuda externa, en enero de 2018 se realizaron dos operaciones de financiamiento en los mercados internacionales. La primera fue por un monto de 3 mil 200 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Los recursos se obtuvieron, en parte, mediante la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en 2028 por un monto total de 2 mil 555 millones de dólares de los Estados Unidos de América (2 mil millones derivados de captación de nuevos recursos y aproximadamente 555 millones provenientes del intercambio de bonos con vencimientos entre 2021 y 2026), con una tasa de rendimiento al vencimiento de 3.802 por ciento y un cupón de 3.750 por ciento. Adicionalmente, a través de la reapertura del bono a 30 años con vencimiento en 2048, se obtuvieron recursos por 645 millones de dólares de los Estados Unidos de América (600 millones derivados de captación de nuevos recursos y aproximadamente 45 millones provenientes del intercambio de bonos con vencimientos entre 2022 y 2026), a una tasa de rendimiento al vencimiento de 4.694 por ciento con un cupón de 4.60 por ciento.

La segunda operación de enero de 2018 se realizó por un monto de 1 mil 500 millones de euros (aproximadamente 1 mil 800 millones de dólares de los Estados Unidos de América), mediante la emisión de un nuevo bono de referencia en euros a 10 años con vencimiento en abril de 2028 a una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.77 por ciento y un cupón de 1.75 por ciento.

En el mes de abril de 2018, el Gobierno Federal realizó una operación de financiamiento en el mercado japonés por un monto total de 135 mil millones de yenes, equivalente aproximadamente a 1 mil 260 millones de dólares de los Estados Unidos de América. En esta transacción se colocaron cuatro nuevos bonos de referencia en el mercado japonés a plazos de 5, 7, 10 y 20 años; por montos de 57, 24, 39 y 15 mil millones de yenes, respectivamente. Las tasas de interés alcanzadas para los bonos con vencimientos en 2023, 2025, 2028 y 2038 fueron de 0.60, 0.85, 1.05 y 2.00 por ciento, respectivamente.

Ahora bien, durante 2019, la política de crédito público se ha dirigido a cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo posible manteniendo un nivel de riesgo adecuado y buscando un manejo de liquidez más eficiente del Gobierno Federal, dadas las características de las finanzas públicas del país. En relación con este objetivo, las acciones en el manejo de los pasivos públicos se han guiado por el principio de transparencia y buscando la sostenibilidad de las finanzas públicas.

De igual manera, en lo que concierne al manejo de la deuda interna, el 13 de marzo de 2019 se llevó a cabo la colocación de un nuevo Bono a tasa fija con un plazo de 5 años. Dicha colocación se llevó a cabo a través de una subasta sindicada por un monto total de 15 mil mdp. Este nuevo bono, con vencimiento en septiembre de 2024, otorgará una tasa de rendimiento de 7.95 por ciento y pagará una tasa cupón de 8.00 por ciento.

Como parte de la estrategia de deuda del Gobierno Federal, el 27 de marzo de 2019 se llevó a cabo una operación de permuta de Bonos M en el mercado interno. En dicha operación se recibieron Bonos M con vencimientos en 2019, 2020, 2021 y 2022, y se entregaron Bonos M con vencimientos en 2024, 2026, 2029 y 2031.

En total, se asignaron 26 mil 108.4 mdp, disminuyendo las amortizaciones para 2019 en 699 mdp; 2020 en 9 mil 047.6 mdp, 2021 en 7 mil 513.7 mdp; y 2022 en 8 mil 848.1 mdp.

En ese sentido, durante el mes de junio se realizó una operación de manejo de pasivos en el mercado local para mejorar el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal, sin incurrir en endeudamiento adicional. Con esta operación se buscó atender dos objetivos, por una parte, suavizar el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal en moneda local sin incurrir en endeudamiento adicional y, por otra parte, mejorar la liquidez del mercado de deuda local ofreciendo a los inversionistas una gama más amplia de alternativas para el rebalanceo de sus portafolios

La operación antes referida, consistió en la ejecución de dos transacciones: en primer término, se llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de interés de mercado de Bonos M con vencimientos entre 2019 y 2021 por 28 mil 228 mdp. La transacción tuvo una participación tanto de inversionistas nacionales como extranjeros. En segundo término, se llevó a cabo una subasta adicional de colocación de valores gubernamentales por 27 mil 534 mdp a tasas de interés de mercado con vencimientos entre 2024 y 2047.

La demanda total de esta colocación fue de 45 mil 278 mdp y también contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros. En total, se asignaron 28 mil 228.25 mdp, disminuyendo las amortizaciones para 2019 en 2 mil 064.25 mdp; 2020 en 16 mil 748.79 mdp; y 2021 en 9 mil 415.21 mdp.

Por lo que se refiere al manejo de la deuda externa, en el mes de enero de 2019 se colocó un nuevo bono de referencia a 10 años en el mercado de dólares de los Estados Unidos de América con vencimiento en abril de 2029, por un monto de 2 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América. Este nuevo bono ofrece una tasa de rendimiento de 4.577 por ciento y una tasa cupón de 4.500 por ciento.

Cabe mencionar que la operación tuvo una demanda total de aproximadamente 8 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a 4.0

veces el monto emitido, con una participación de más de 320 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia.

En ese orden de ideas, durante el mes de abril de 2019, el Gobierno Federal realizó una operación de financiamiento en los mercados internacionales de capital, a través de la cual se colocaron dos nuevos bonos de referencia en el mercado de euros a plazos de 7 y 20 años, por un monto total de 2 mil 500 millones de euros, aproximadamente 2 mil 800 millones de dólares de los Estados Unidos de América. El nuevo bono de referencia a 7 años con vencimiento en 2026, por un monto de 1 mil 500 millones de euros, pagará un cupón de 1.625 por ciento y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 1.669 por ciento. Por su parte, el nuevo bono de referencia a 20 años con vencimiento en 2039, tiene un monto de 1 mil millones de euros, pagará un cupón de 2.875 por ciento y otorgará al inversionista un rendimiento al vencimiento de 2.969 por ciento.

Es importante resaltar que ésta es la primera vez que el Gobierno Federal emite un bono con un plazo de 20 años en el mercado de euros y, adicionalmente, que la tasa cupón alcanzada de 2.875 por ciento en el nuevo bono con vencimiento en 2039 se encuentra en mínimos históricos en comparación con emisiones pasadas que el Gobierno Federal ha llevado a cabo en el mercado de euros, a plazos de entre 15 y 100 años.

Adicionalmente, la operación tuvo una demanda cercana a los 9 mil millones de euros (3.6 veces el monto total emitido), con más de 5 mil 100 millones de euros en el tramo de 7 años (3.4 veces el monto colocado) y más de 3 mil 900 millones de euros en el tramo de 20 años (3.9 veces el monto colocado). En total, se recibieron 545 órdenes por parte de inversionistas de Europa, América y Asia: 309 órdenes para el bono a 7 años y 236 órdenes para el bono a 20 años. Esta fuerte demanda, así como la diversidad de inversionistas que participaron en la transacción, reflejaron la solidez y buen manejo de la deuda pública del Gobierno Federal.

Por otro lado, en el mes de junio se llevó a cabo una operación de financiamiento en el mercado japonés por un monto total de 165 mil millones de yenes,

equivalente aproximadamente a 1 mil 500 millones de dólares de los Estados Unidos de América.

La citada operación consistió en la emisión de cuatro nuevos bonos de referencia en el mercado japonés a 3, 5, 7 y 10 años por montos de 65.5, 41.2, 27.3 y 31 miles de millones de yenes. Las tasas de interés alcanzadas por los bonos con vencimientos en 2022, 2024, 2026 y 2029 fueron de 0.62 por ciento, 0.83 por ciento, 1.05 por ciento y 1.30 por ciento, respectivamente.

Asimismo, se contó con la participación de 107 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés y de otras partes del mundo, alcanzando una demanda total de 225 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América (equivalente a 1.36 veces el monto colocado).

Al respecto, vale la pena resaltar que tanto el monto colocado como la demanda alcanzada en esta transacción significaron máximos históricos para una emisión de deuda realizada por el Gobierno Federal en el mercado japonés.

Finalmente, el pasado 24 de julio, el Gobierno Federal realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales por un monto aproximado de 3 mil 560 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Con esta transacción, el Gobierno de México mejoró tanto su perfil de vencimientos de deuda externa de mercado como la posición financiera de su portafolio de deuda.

Los recursos para financiar esta operación se obtuvieron mediante la reapertura del bono en dólares de los Estados Unidos de América con vencimiento en 2029 y tasa cupón de 4.5 por ciento por un monto total de 1 mil 456 millones de dólares de los Estados Unidos de América a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 3.738 por ciento y con la emisión de un nuevo bono de referencia a 30 años con vencimiento en 2050 y tasa cupón de 4.5 por ciento por un monto total de 2 mil 104 millones de dólares de los Estados Unidos de América a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 4.552 por ciento.

Con los recursos obtenidos se realizó un intercambio de bonos en circulación denominados en dólares de los Estados Unidos de América con vencimientos tanto en la parte corta (2019-2026) como en la parte larga (2031-2047) de la curva

de rendimientos. Dichos bonos estaban en manos de inversionistas a los cuales se les ofreció la posibilidad de recompra o de intercambio de sus bonos, ya fuera por la reapertura del bono en dólares de los Estados Unidos de América con vencimiento en abril de 2029 o por la nueva referencia a 30 años. Además, se retiró un bono denominado dólares de los Estados Unidos de América con vencimiento en enero de 2021.

La transacción de referencia alcanzó una demanda máxima de 9 mil 500 millones de dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a 2.6 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 217 inversionistas institucionales de América, Europa y Asia.

Con las operaciones realizadas a lo largo de 2019, el Gobierno Federal logró ampliar su base de inversionistas y diversificar sus fuentes de financiamiento. Tanto el nivel de demanda recibido como la diversidad de inversionistas que participaron en cada transacción reflejaron la perspectiva positiva de la comunidad financiera internacional sobre la solidez de los fundamentos macroeconómicos de México y el buen manejo de la deuda pública por parte del Gobierno Federal. Aunado a lo anterior, las operaciones de manejo de pasivos permitieron mejorar el perfil de vencimientos y el plazo promedio de vencimiento de la deuda.

Conforme a lo expuesto en este apartado, la evolución de los indicadores de deuda es la siguiente: al cierre del primer semestre de 2019, el saldo de la deuda pública neta del Gobierno Federal como proporción del PIB es de 33.1 por ciento; adicionalmente, dentro de la deuda pública neta total del Gobierno Federal el 77.6 por ciento está denominado en moneda local. De igual manera, en el mismo periodo, el plazo promedio de los valores gubernamentales en el mercado interno fue de 7.85 años y el 81.8 por ciento de éstos son a tasa fija (nominal y real) de largo plazo.

Por su parte, el saldo de la deuda neta del sector público, el cual incluye al Gobierno Federal, la banca de desarrollo y las empresas productivas del Estado, al cierre del primer semestre de 2019 fue de 44.1 por ciento del PIB; de este total la deuda externa representa 15.6 puntos porcentuales del PIB y la deuda interna 28.5 puntos porcentuales del PIB. Dentro de la deuda pública, el saldo de la

deuda neta de las empresas productivas del Estado fue de 8.5 por ciento del PIB en donde la deuda externa e interna de estas empresas representa el 7.4 por ciento y el 1.1 por ciento del PIB, respectivamente.

Conforme a lo anterior, la política de deuda para 2020 se orientará a cubrir las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal a costos reducidos, considerando un horizonte de largo plazo y un bajo nivel de riesgo, además de mantener una trayectoria estable de la deuda pública como proporción del PIB.

En ese sentido, se tendrá como objetivo financiar la mayor parte de las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal en el mercado interno de manera que los pasivos en moneda nacional sigan representando la mayor parte de la deuda.

Ahora bien, el crédito externo se utilizará únicamente si se encuentran condiciones favorables en los mercados internacionales buscando diversificar los mercados y ampliar la base de inversionistas. Lo anterior busca utilizar de manera estratégica el financiamiento proveniente de Organismos Financieros Internacionales (OFIs).

En ese sentido, también se buscará mantener un portafolio de pasivos sólido, satisfaciendo las necesidades de financiamiento predominantemente con instrumentos de largo plazo y tasa fija, y de acuerdo a las condiciones del mercado se procurará ampliar el plazo promedio de vencimiento de la deuda. De igual forma, se buscará realizar operaciones de manejo de pasivos de manera regular para mejorar el perfil de vencimientos de deuda y ajustar el portafolio a las condiciones financieras prevalecientes.

Con lo anterior, se busca mantener un costo financiero de los pasivos públicos estable y con una variación acotada ante cambios bruscos en las variables financieras que permita una ejecución adecuada del presupuesto y liberar recursos para ser utilizados en programas de carácter social y de inversión.

Conforme a lo anteriormente expuesto, en el paquete económico propuesto para el ejercicio fiscal de 2020, se solicita autorizar al Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, un monto de endeudamiento interno neto hasta por 532,000 mdp

para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Por otra parte, se solicita a esa Soberanía autorice al Ejecutivo Federal para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5,300 millones de dólares de los Estados Unidos de América.

Cabe destacar que con el propósito de contar con mayor flexibilidad en el manejo de la deuda del sector público federal, se propone mantener las atribuciones conferidas al Ejecutivo Federal, para incurrir en un mayor endeudamiento externo al monto previsto en esta Iniciativa, por un importe equivalente al menor endeudamiento interno en relación con el importe de la autorización que se solicita. Asimismo, se propone el establecimiento de atribuciones para incurrir en mayor endeudamiento interno al monto autorizado, por un importe equivalente al menor endeudamiento externo conforme a la autorización solicitada. Con esta propuesta se podrían aprovechar las condiciones favorables que llegaran a presentarse en los mercados financieros nacionales e internacionales, para realizar operaciones de financiamiento o de canje de pasivos internos por externos y viceversa, en mejores condiciones para efectos de manejo de riesgos asociados a la deuda pública o para el desarrollo de los mercados locales.

Adicionalmente, se solicita a esa Soberanía que autorice al Ejecutivo Federal para que por conducto de PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias (EPS), contrate y ejerza créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como para canjear o refinanciar sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10,000 mdp, y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 1,250 millones de dólares de los Estados Unidos de América, asimismo se solicita que puedan contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea

menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

De igual forma, se solicita a ese Honorable Congreso de la Unión autorice al Ejecutivo Federal para que por conducto de la CFE y sus EPS, contrate y ejerza créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como para canjear o refinanciar sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9,835 mdp y un monto de endeudamiento neto externo de 508 millones de dólares de los Estados Unidos de América; asimismo, se solicita que puedan contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

La política de deuda pública del Gobierno Federal para 2020 contempla las siguientes líneas de acción para la deuda pública interna y externa:

1. Política de Deuda Interna

Para 2020 la estrategia de endeudamiento interno estará dirigida a favorecer la emisión de instrumentos de largo plazo a tasa fija tanto nominal como real con el objetivo de mantener un portafolio de deuda con bajo riesgo. Los calendarios de colocación serán flexibles considerando la demanda de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, procurando el buen funcionamiento del mercado local de deuda.

Durante 2020, se continuará con la mecánica de anunciar trimestralmente los montos mínimos y máximos a colocar semanalmente para CETES a 28, 91, 182 y 365 días. Esta mecánica permite ofrecer al mercado una referencia sobre el volumen de colocación para instrumentos de corto plazo y al mismo tiempo, incrementar la flexibilidad para un manejo de liquidez más eficiente del Gobierno

Federal, principalmente ante cambios en la estacionalidad de las disponibilidades de la caja de la TESOFE.

Con relación a los Bonos a tasa fija, se utilizará la política de reapertura de emisiones. Esta política consiste en subastar a través de las ofertas primarias semanales instrumentos que hayan sido colocados previamente en el mercado con el objetivo de incrementar su monto en circulación, buscando fortalecer su liquidez y su proceso de formación de precios. En lo que respecta a la colocación de instrumentos indizados a la inflación, Udibonos, se realizarán acciones encaminadas al fortalecimiento de las condiciones de operación de estos instrumentos, buscando fortalecer la liquidez de los mismos en el mercado secundario, al tiempo que crea una referencia para otros emisores de deuda indizada a la inflación, lo que contribuye al desarrollo de mercados relacionados.

En ese sentido, durante 2020 se analizará la conveniencia de llevar a cabo subastas sindicadas para introducir nuevas referencias. En particular, se analizará la conveniencia de realizar subastas sindicadas de nuevas referencias de Bonos a tasa fija a plazo de 3 y 5 años y de Udibonos a plazo de 3 y 30 años.

De igual forma se contempla, según las condiciones del mercado, la ejecución de operaciones de manejo de pasivos, entre ellas, operaciones de permuta, recompra de valores gubernamentales y operaciones conjuntas de recompra y colocación adicional. Lo anterior, con el fin de contribuir al funcionamiento ordenado del mercado y a mejorar el perfil de amortizaciones en moneda local del Gobierno Federal de los siguientes años.

Finalmente, se continuará fortaleciendo la venta de títulos gubernamentales en directo a personas físicas a través del programa "*cetesdirecto*".

2. Política de Deuda Externa

En cuanto a la estrategia de endeudamiento externo para 2020, estará encaminada a utilizar de manera complementaria y oportuna el crédito externo. Dependiendo de las condiciones y oportunidades que se presenten en los distintos mercados, el Gobierno Federal considerará utilizar los mercados

internacionales únicamente cuando se puedan obtener condiciones favorables de financiamiento.

De esta manera, la estrategia de endeudamiento externo estará encaminada a ampliar y a diversificar la base de inversionistas del Gobierno Federal, así como a desarrollar los bonos de referencia en los distintos mercados en los que se tiene presencia.

Adicionalmente, se evaluará la opción de llevar a cabo operaciones de manejo de pasivos, las cuales estén enfocadas a fortalecer la estructura del portafolio de deuda pública y a reducir el riesgo de refinanciamiento en los próximos años.

De igual forma, se continuará utilizando el financiamiento de OFIs como una fuente complementaria de recursos para el Gobierno Federal. De este modo, se busca utilizar estratégicamente el financiamiento proveniente de OFIs aprovechando su experiencia técnica y conocimiento de las mejores prácticas a nivel internacional en temas relacionados con la instrumentación de proyectos de inversión, con impacto en el crecimiento económico y desarrollo social. De igual forma, se mantendrá la suficiente flexibilidad en la estrategia de endeudamiento externo para que, en caso de que se presenten periodos de volatilidad o baja liquidez en los mercados financieros de capital, el endeudamiento con los OFIs pueda ser una fuente de financiamiento contracíclico.

Finalmente, se contempla seguir utilizando el financiamiento y las garantías que ofrecen las Agencias de Crédito a la Exportación (ACEs), las cuales representan una fuente alterna de crédito que está ligada a las importaciones de maquinaria especializada y equipos de alta tecnología que son realizadas por las dependencias y entidades del sector público. Al igual que el crédito con OFIs, el financiamiento con las ACEs suele estar disponible aun en momentos de volatilidad e incertidumbre financiera global. Las garantías que ofrecen este tipo de agencias permiten obtener tasas de interés preferenciales y acceder a una nueva base de inversionistas.

Como resultado de las estrategias de deuda pública para 2020 citadas en los párrafos anteriores, se estima un incremento en la deuda pública congruente con los techos solicitados, en este sentido, se estima que al cierre del ejercicio fiscal

de 2020 la deuda neta del sector público será de 45.8 puntos porcentuales del PIB anual, de la cual la deuda interna representaría 29.6 puntos porcentuales del PIB y la deuda externa 16.1 puntos porcentuales del PIB. Por su parte, la deuda pública neta del Gobierno Federal se estima será de 35.3 puntos porcentuales del PIB, en donde la deuda interna significaría 27.5 puntos porcentuales del PIB y la deuda externa 7.8 puntos porcentuales del PIB.

Las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal para el periodo 2020-2025 estarán determinadas por su déficit anual más las amortizaciones de la deuda pública interna y externa. A continuación se presenta el perfil de vencimientos de la deuda pública en dicho periodo:

Perfil de Amortizaciones de la Deuda Pública del Gobierno Federal*
2020–2025
(mmdp)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gobierno Federal	756.8	693.4	759.1	572.3	488.5	443.8

*El perfil de amortizaciones se realiza con base en el saldo contractual al 30 de junio de 2019.

Acorde con los escenarios de finanzas públicas presentados para el periodo 2019-2025 en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al ejercicio fiscal de 2020, se estima la siguiente evolución en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) en términos del PIB.

SHRFSP
(Por ciento del PIB)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SHRFSP	45.6	45.4	45.2	45.0	44.8	44.7

Asimismo, al igual que en años previos, en la presente Iniciativa se solicita a esa Soberanía que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario cuente con la

autorización para realizar operaciones de refinanciamiento a fin de continuar con la mejoría gradual del perfil de vencimientos de su deuda, al reducir las presiones sobre el presupuesto de egresos en el mediano y largo plazo. Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y en atención a las obligaciones del citado Instituto vinculadas a los programas de saneamiento.

Finalmente, se incluye la propuesta del Gobierno de la Ciudad de México de un techo de endeudamiento neto para 2020 para esa entidad federativa, de 4,000 mdp, a efecto de financiar su Presupuesto de Egresos correspondiente a dicho ejercicio fiscal.

IV. Otras Medidas

En la presente Iniciativa se propone mantener la facultad del Ejecutivo Federal para que durante 2020 otorgue los beneficios fiscales necesarios a efecto de dar debido cumplimiento a las resoluciones que se deriven de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

El 15 de julio de 2019, PEMEX remitió a la SHCP la información a que se refiere la fracción I del artículo 97 de la Ley de Petróleos Mexicanos (LPM). Con base en esta información y su análisis, la SHCP propuso al Comité Técnico del FMPED establecer que PEMEX y sus EPS no paguen un dividendo estatal. El Comité Técnico, en su sesión celebrada el 21 de agosto del presente año, opinó favorablemente la propuesta de la SHCP.

Para realizar la propuesta referida en el párrafo anterior, la SHCP se basó principalmente en los siguientes puntos: (i) en lo que resta de 2019 y potencialmente durante 2020, continuará un entorno poco favorable en las cotizaciones en el mercado de los hidrocarburos; (ii) PEMEX enfrenta diversos retos en lo que respecta a la comercialización de productos en el mercado interno, y (iii) la empresa está realizando importantes inversiones con el fin de estabilizar y, posteriormente, elevar la plataforma de producción.

En cuanto al Transitorio Décimo Cuarto de la LPM, que establece que el dividendo estatal que el Estado determine para el ejercicio fiscal 2016 será, como mínimo, equivalente al 30 por ciento de los ingresos después de impuestos que generen PEMEX y sus EPS durante el año 2015 por las actividades sujetas a la LISH. El nivel mínimo señalado se reducirá para los siguientes ejercicios hasta alcanzar un 15 por ciento en el año 2021 y 0 por ciento en el año 2026, es conveniente resaltar que dichas actividades se realizan por la EPS Pemex Exploración y Producción (PEP). Con base en la información proporcionada por PEMEX se advierte que tanto la empresa de forma consolidada como la EPS Pemex Exploración y Producción (PEP) de manera particular no generarán utilidades en 2019.

Asimismo, cabe destacar que para establecer que PEMEX y sus EPS no paguen un dividendo estatal, se utilizó el concepto de ingresos netos, calculados como ingresos brutos menos costos, que incluyen los impuestos y derechos que paga la empresa. Esta medida es un indicador de los recursos que una empresa tiene efectivamente disponibles para repartir como dividendo que los ingresos brutos; de aplicar un dividendo sobre estos últimos, se le estarían retirando recursos a la empresa sin tomar en cuenta su situación financiera real.

En el caso de la CFE, el 31 de julio de 2019 su Director de Finanzas remitió la información a la que se refiere la fracción I del artículo 99 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

Del análisis de dicha información se desprende que la CFE estima un resultado positivo al cierre del ejercicio fiscal 2019 debido principalmente a: (i) menores costos de generación, asociados a precios relativamente bajos de los combustibles; (ii) menores pagos en el mercado eléctrico mayorista, y (iii) las transferencias que el Gobierno Federal realiza a dicha Comisión.

En ese orden de ideas, es de resaltar que si se excluyeran las transferencias del Gobierno Federal, el balance financiero de CFE sería negativo, por tal motivo se propone que la CFE y sus empresas productivas subsidiarias no paguen un dividendo estatal a favor del Gobierno Federal. Lo anterior con la finalidad de que la CFE cuente con recursos necesarios para cubrir sus compromisos e

inversiones en proyectos productivos, enfocados principalmente en Generación, Transmisión y Distribución de energía eléctrica.

En otro orden de ideas, conforme a lo señalado en el artículo 17 de la LFPRH, en la presente Iniciativa se propone excluir de la meta del balance presupuestario un monto de inversión hasta por 2.0 por ciento del PIB para evaluar la contribución del gasto al equilibrio presupuestario, dicha inversión podrá ser además de la de PEMEX, la de la CFE y la del Gobierno Federal. La regla fiscal señalada contribuye a una evolución ordenada de la deuda pública en el largo plazo al restringir, como ya se mencionó, el balance presupuestal a 2.0 por ciento del PIB. Con ello, la inversión tanto de las empresas productivas del Estado como la del Gobierno Federal tienen un tratamiento similar, sin poner en riesgo los niveles de financiamiento del gasto público ante las decisiones de inversión de las empresas productivas del Estado, las cuales deberán operar con criterios de eficiencia y rentabilidad, lo que fortalece la posición de las mismas y garantiza un nivel de inversión en el sector que permitirá incrementar la calidad y oferta de su producción, así como reducir el costo de la energía para los mexicanos en los próximos años.

Por otro lado, resulta conveniente conservar en el referido artículo 1o. de la Ley cuya emisión se propone, la disposición que faculta al Gobierno Federal para continuar con la atención de la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo, misma que ha sido reconocida en el Segundo Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo de apoyo a sus ahorradores", publicado en el DOF el 28 de enero de 2004.

De igual forma, se plantea mantener la disposición que establece que el producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el Segundo Transitorio del Decreto citado en el párrafo que antecede, se utilizará para restituir los recursos públicos destinados al resarcimiento de los ahorradores afectados y, previo a su reintegro, a cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las acciones relativas a

la transmisión, administración o enajenación de dichos bienes y derechos, para atender la problemática social de los ahorradores mencionados.

Con el propósito de continuar con el apoyo a las operaciones que las entidades federativas están implementando para fortalecer su capacidad financiera, el Ejecutivo Federal a mi cargo propone conservar en el artículo 1o. de la Ley cuya emisión se plantea, la posibilidad de emplear los recursos que ingresen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, durante el ejercicio fiscal de 2020, para cubrir las obligaciones pecuniarias derivadas de la implementación del esquema de potenciación de recursos de dicho fondo.

Por otra parte, se plantea dar continuidad a la disposición que prevé que hasta un 25 por ciento de las aportaciones que corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con cargo a los Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal –actualmente Ciudad de México–, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, puedan servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que dichas entidades contraigan con el Gobierno Federal, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la SHCP en el Registro Público Único, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Lo anterior, a fin de que los referidos recursos sean aplicados con mayor agilidad.

Así también, en la presente Iniciativa se propone dar continuidad a la obligación de la SHCP de reportar la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2020, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción I de la LFPRH.

En otro orden de ideas, la meta de déficit financiero de PEMEX para el ejercicio fiscal 2020 que se estableció en el artículo 5 del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 asciende a 62,623.5 millones de pesos y considera un monto adicional de 30,771.5 millones de pesos

asociado a la disminución de los ingresos propios de PEMEX por la reducción del precio del petróleo de 55 dpb a 49 dpb.

En este contexto, para reforzar el marco de responsabilidad fiscal y dado que el aumento en el déficit financiero de la entidad está asociada a la posibilidad de una disminución súbita en el precio del petróleo con respecto a la prevista en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, se propone incluir un ajuste a la meta del déficit financiero de la entidad, para que en caso de que durante el ejercicio fiscal se obtengan ingresos excedentes derivados de un mayor precio del petróleo al previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 entre el rango de 49.01 dpb y 55.00 dpb, estos recursos no se destinen a cubrir ampliaciones de gasto sino que se reflejen en una mejora en la meta aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 del déficit financiero de PEMEX.

De igual manera, se propone mantener en el artículo 2o. de la Ley cuya emisión se plantea a esa Soberanía, la autorización que ya existe de manera permanente en la Ley Federal de Deuda Pública para que el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, emita valores y contrate empréstitos con el objeto de canjear o refinanciar obligaciones del erario federal.

Además, dentro del artículo 2o. citado en el párrafo anterior, se estima conveniente conservar la definición del déficit por intermediación financiera como el Resultado de Operación que considera la Constitución Neta de Reservas Crediticias Preventivas, fijándolo para tales efectos en un monto conjunto de cero pesos para la banca de desarrollo, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los fondos de fomento y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Por otro lado, se propone mantener, para efectos del régimen especial en materia de deuda que se encuentra establecido en la LPM y la LCFE, que las solicitudes de endeudamiento de ambas empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sigan sometiendo a la consideración del Congreso de la Unión de manera separada a la solicitud de endeudamiento para el Gobierno Federal y el resto de las entidades del sector público federal.

En otro orden de ideas, el Ejecutivo Federal a mi cargo, considera apropiado dar continuidad a la obligación a cargo de la SHCP de informar al Congreso de la Unión de manera trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento.

De igual forma, tal como en ejercicios fiscales anteriores, se propone establecer en el artículo 4o. de la Ley cuya aprobación se somete a ese Honorable Congreso de la Unión, que el monto de los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la CFE, sea por un total de 257,138.2 millones de pesos.

Por otra parte, para 2020 la CFE propone la incorporación de un nuevo Proyecto de Infraestructura Productiva de Largo Plazo de inversión directa denominado Baja California Sur VI, que consiste en la construcción de una Central de Combustión Interna, cuyo propósito es contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica esperada en el Área Baja California Sur, mediante la generación de 42.3 MW de energía.

En ese sentido, en el artículo 5o. de la presente Iniciativa, se prevé para el ejercicio fiscal 2020, autorizar al Ejecutivo Federal a contratar un nuevo proyecto de inversión financiada de la CFE en términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la LFPRH, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV de su Reglamento, por un total de 2,760.7 millones de pesos que corresponde al proyecto de inversión directa mencionado en el párrafo que antecede.

Por otro lado, como se ha venido planteando en años anteriores, se propone mantener en el artículo 7o. la facultad de la SHCP para establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos mensuales provisionales del derecho por la utilidad compartida.

Adicionalmente, se propone conservar la obligación por parte de la SHCP de informar y explicar las modificaciones a los ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, que impacten en los pagos establecidos, conforme al segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley que se plantea ante esa Soberanía, en un

informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados.

De igual forma, con el fin de asegurar que se cumplan las reglas de concentración, se propone continuar con la disposición que contempla que en el caso de que la SHCP en uso de las facultades otorgadas en la Ley, cuya consideración se somete a esa Soberanía, establezca, modifique o suspenda pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales, estos deban ser transferidos y concentrados en la TESOFE por el FMPED, a más tardar el día siguiente de su recepción, en términos de la legislación aplicable.

En otro orden de ideas, se plantea a ese Honorable Congreso de la Unión, mantener en el artículo 8o. de la Ley que se propone, la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Así pues, la tasa de recargo se mantendría en 0.98 por ciento sobre los saldos insolutos, mientras que las tasas aplicables en el pago a plazos permanecerían en 1.26 por ciento para los plazos menores a un año; en 1.53 por ciento para los plazos entre uno y dos años, y en 1.82 por ciento para los plazos mayores a dos años.

De igual modo, tal y como se ha planteado en años anteriores, se incluye en el artículo 9o. de la Iniciativa una disposición en la que se ratifiquen los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos.

Asimismo, se propone conservar en el artículo 9o. la disposición que permite que tratándose de los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal, puedan ser asignados directamente como incentivos a los estados y municipios, con lo cual se podrá dar cumplimiento a los compromisos en esta materia establecidos en los citados convenios, a fin de salvaguardar el debido cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y de los Convenios de

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados entre la Federación y las Entidades Federativas.

En otro contexto, para dar continuidad a lo dispuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, el Ejecutivo Federal a mi cargo propone que en la Ley cuya emisión se plantea a ese Congreso de la Unión se mantenga la facultad de la SHCP para autorizar los montos de los productos y aprovechamientos que cobre la Administración Pública Federal Centralizada, así como, en su caso, autorizar el destino específico de los mismos.

De igual manera, se plantea conservar en los artículos señalados en el párrafo anterior, el uso de medios de identificación electrónica para las solicitudes que realicen las dependencias que sometan a aprobación de la SHCP los montos de los aprovechamientos y productos, así como la autorización que para tales efectos emita la SHCP, por medio de la emisión de documentos y certificados digitales, los cuales tendrán el mismo valor vinculatorio que los emitidos con firma autógrafa.

En ese orden de ideas, se propone a esa Soberanía, dar continuidad al mecanismo que permite a la SHCP obtener aprovechamientos de las instituciones de banca de desarrollo para destinar los recursos obtenidos prioritariamente a la capitalización de las mismas o a fomentar acciones que les permitan cumplir con su mandato, o bien a programas y proyectos de inversión.

Adicional a lo anterior, se propone establecer en el séptimo párrafo del artículo 10 que cuando la SHCP obtenga un aprovechamiento a cargo de cualquier otra entidad paraestatal distinta de las señaladas en el párrafo anterior, dichos ingresos serán enterados a la TESOFE bajo dicha naturaleza, a efecto de que sean destinados a programas presupuestarios que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

De igual modo, se propone mantener la disposición que establece que el prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público de la Federación, deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 3o. de la LFD, en los casos en los que se incumpla con

la obligación de presentar los comprobantes fiscales de pago de los aprovechamientos en el plazo correspondiente, así como informar a la SHCP los montos y conceptos que haya percibido por concepto de aprovechamientos, para hacer frente a la obligación que tiene el Estado de administrar debidamente los bienes del dominio público de la Federación, así como de prestar servicios en el ejercicio de sus funciones de derecho público.

En ese mismo sentido, se somete a la consideración de ese Congreso de la Unión dar continuidad al esquema de actualización del monto de los productos y aprovechamientos que se cobran de manera regular, en el cual se utiliza un factor que se aplicará desde la última modificación que se hubiere efectuado hasta que se emita la autorización respectiva.

Por otro lado, se propone conservar en el artículo 11 de la Ley cuya emisión se plantea, el mecanismo por el cual el Instituto de Administración de Bienes y Activos (IABA) deberá descontar al producto de las enajenaciones realizadas de bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la TESOFE, los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia TESOFE. De igual forma, se estima conveniente mantener en el citado artículo la disposición que contempla al Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Entidad Transferente directa al IABA, en términos de la Ley de Tesorería de la Federación.

En concordancia con lo anterior, se plantea someter a esa Soberanía que los ingresos que provengan de las enajenaciones realizadas por el IABA respecto de los bienes transferidos por el SAT que pasan a propiedad del Fisco Federal conforme a las disposiciones fiscales aplicables, se les deberá realizar el descuento de los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos provenientes del SAT, y del monto que reste hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno del IABA, se depositará en un fondo que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos, y el remanente será enterado a la TESOFE. Así también, se da continuidad a la aplicación de un mecanismo como el descrito para los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, para el pago de resarcimientos de bienes de dicha procedencia, que por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional, el IABA deba realizar. Lo propuesto en

el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Derivado de lo anterior, el IABA deberá remitir un informe semestral con el desglose de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las Entidades Transferentes (TESOFE o SAT), con el objeto de dar mayor transparencia a dichas operaciones.

Asimismo, el Ejecutivo Federal a mi cargo somete a consideración de ese Congreso de la Unión conservar la disposición, en el mismo artículo 11, relativa a la posibilidad de destinar hasta en un 100 por ciento, los ingresos netos provenientes de enajenaciones realizadas por el IABA a financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como para el pago de los créditos que hayan sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos. En la propuesta señalada se aclara que lo señalado en este párrafo no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados a que se refiere el décimo tercer párrafo del artículo 13 de la Ley que se propone, y que se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

En ese mismo sentido, se propone establecer en el artículo 11 de la Ley cuya emisión se plantea, que el destino de los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes en proceso de extinción de dominio, y de aquéllos sobre los que sea declarada la extinción de dominio y de sus frutos, así como su monetización en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, serán destinados a una cuenta especial en los términos que establece el artículo 239 de la Ley antes referida, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 234 y 237 del mismo ordenamiento, a fin de dar certeza jurídica y viabilidad a dicho destino.

Por otra parte, se plantea a esa Soberanía conservar en el artículo 12 de la Iniciativa de Ley que se presenta, que se concentren en la TESOFE los derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, al igual que los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica

y los que deriven de la aplicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Así también, se propone en el artículo 12 de la Ley cuya emisión se somete a consideración de ese Congreso de la Unión, continuar con el mismo tratamiento para el manejo de ingresos para las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional, en lo que se refiere a la determinación de las obligaciones de entero, registro e informe sobre los ingresos que obtengan, así como que se concentrarán en la TESOFE en tiempo y forma.

Ahora bien, se propone dar continuidad en el artículo 12 de la presente Iniciativa, a la disposición que establece que los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y formación para el trabajo del sector público, formarán parte de su patrimonio, y serán administrados por las propias instituciones educativas para ser destinadas a sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, debiendo concentrarse en la TESOFE, con la posibilidad de establecer un fondo revolvente que garantice la entrega y aplicación de los recursos en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de su concentración.

De igual manera, se propone en el citado artículo 12 de la Ley cuya emisión se plantea, conservar la disposición que establece que los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero se destinarán para financiar el proyecto que los generó u otros proyectos de la misma naturaleza.

Además, se propone establecer en el sexto párrafo del citado precepto, que los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato análogo, así como aquellos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, deberán ser concentrados en la TESOFE bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según su origen, y se podrán destinar a los fines que determine la SHCP, salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento correspondiente.

De igual forma, se considera adecuado mantener la posibilidad de que los ingresos excedentes correspondientes a aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 6.62.01.04 del artículo 1o. de esta Ley cuya emisión se plantea, por concepto de recuperaciones de capital se puedan destinar por la SHCP a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos que se establezcan en el PND.

En otro orden de ideas, en el artículo 13 de la Ley cuya emisión se somete a consideración de ese Honorable Congreso de la Unión, se plantea dar continuidad a la obligación de enterar a la TESOFE los ingresos que se recauden hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, así como la mecánica de descuento de gastos tratándose de la enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades.

De igual forma, se propone conservar la disposición que precisa que, tratándose de operaciones que le sean encomendadas al IABA en los términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, también se podrá descontar un porcentaje autorizado por su Junta de Gobierno, por concepto de gastos indirectos de operación, a fin de que dicha entidad se encuentre en posibilidad de llevar a buen término la totalidad de las operaciones y procedimientos a su cargo, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Así también, a efecto de agilizar la terminación de los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales, se propone mantener la disposición que permite al liquidador o responsable del proceso utilizar los recursos remanentes de los procesos de desincorporación concluidos, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, para el pago de los gastos y pasivos de los procesos que, al momento de la referida conclusión, sean deficitarios, para lo cual los recursos correspondientes deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica, sin que sea necesario concentrar dichos recursos en la TESOFE.

En ese mismo sentido, se propone continuar con la disposición relativa a que los remanentes de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

En ese contexto, se plantea a esa Soberanía conservar en el párrafo décimo primero del artículo 13 de la presente Iniciativa, la disposición que permite al IABA hacer uso de los recursos disponibles para financiar las operaciones inherentes al cumplimiento de su objeto. Así también, se establece que dicha posibilidad estará sujeta al cumplimiento de las directrices que se emitan al interior del citado organismo descentralizado que garanticen el manejo eficiente de dichos recursos, y que se presente ante el órgano colegiado competente del IABA, para que posterior a ello, se someta a la autorización de la Junta de Gobierno de dicha entidad.

En otro orden de ideas, se propone establecer en el párrafo décimo segundo del artículo 13, que los ingresos que deriven de la enajenación de los bienes asegurados a favor del Gobierno Federal, incluyendo numerario, cuya administración y destino hayan sido encomendados al IABA en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (LFAEBSP), se destinen a un fondo en los términos del artículo 89 de la citada Ley, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 90, 92 y 93 del mismo ordenamiento. Asimismo, se prevé que los ingresos provenientes de numerario y de la enajenación de bienes que realice el IABA, que hayan sido declarados abandonados por parte de las instancias competentes, distintos de los vehículos declarados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y que se concentren a la TESOFE, se considerarán aprovechamientos, destinándose al financiamiento de las operaciones del Instituto, en términos de lo previsto en el artículo 90 de la LFAEBSP, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89, 92 y 93 de dicha Ley.

Por otro lado, se propone a esa Soberanía establecer la disposición en el artículo 13 de la Ley cuya emisión se plantea, que prevé el destino del numerario decomisado y de los ingresos provenientes de la enajenación de bienes

decomisados en procedimientos penales federales, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y previa deducción de los gastos indirectos de operación que correspondan, se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, así como al Fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el PND, u otras políticas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, con el propósito de armonizar lo establecido en los ordenamientos penales y fiscales, e incluso en resoluciones judiciales.

En ese orden de ideas, se propone mantener en el mismo artículo 13 de la Iniciativa de Ley que se somete a consideración de ese Congreso de la Unión que los ingresos provenientes de la venta de vehículos declarados abandonados por la SCT y transferidos al IABA, se destinen de conformidad con el artículo 89 de la LFAEBSP. Asimismo, se plantea mantener la disposición que permite que a los permisionarios se les cubran los adeudos generados hasta con el 30 por ciento de los remanentes de los ingresos antes mencionados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93 de la LFAEBSP.

En otro contexto, el Ejecutivo Federal a mi cargo propone en el artículo 15 de la presente Iniciativa, que para dar continuidad a las medidas tendientes a incentivar la autocorrección fiscal de los contribuyentes, se autorice la disminución de multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, en función del momento en el que el contribuyente efectúe la autocorrección de las mismas, a excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación.

Asimismo, con el fin de atender al principio de equidad, se propone conservar en un 40 por ciento la reducción de multas por infracciones derivadas de incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las obligaciones de pago a los contribuyentes que se encuentren sujetos a revisión electrónica en términos del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación.

En otro orden de ideas, tal como se ha realizado en años anteriores, el Ejecutivo Federal a mi cargo somete a consideración de ese Congreso de la Unión, que se

dé continuidad a los estímulos fiscales previstos en leyes precedentes, en las fracciones I a VI del Apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

En ese sentido, se mantiene en las fracciones I a IV del citado precepto, el estímulo fiscal a la adquisición e importación, para consumo final, del diésel, biodiesel y sus mezclas, que: i) se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos; ii) se usen en actividades agropecuarias o silvícolas; o iii) se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico.

Cabe destacar, que los estímulos fiscales mencionados con excepción del establecido en la fracción III del apartado A del artículo 16 tienen en común que, una vez determinados, son acreditables contra el impuesto sobre la renta (ISR); por lo que se propone que su acreditamiento proceda únicamente contra el ISR causado por el contribuyente en el ejercicio fiscal, de forma tal que no se aplique contra el ISR retenido a terceros, ya que en ese caso no se trata de un impuesto propio del beneficiario del estímulo y, por otro lado, que no se permita el acreditamiento contra los pagos provisionales que vaya realizando el contribuyente, debido a que cuando dichos pagos son mayores al ISR del ejercicio causado por el contribuyente o se obtenga pérdida fiscal, la devolución de los pagos provisionales o la compensación del saldo a favor implica una monetización de los estímulos mencionados, siendo que estos deben tener como límite el ISR causado por el contribuyente.

Asimismo, se da continuidad al estímulo fiscal aplicable a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto.

Por otra parte, el artículo 16, Apartado A, fracción VI de la Ley que se somete a consideración de esa Soberanía, establece un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen combustibles fósiles en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes, cuando en dichos procesos los combustibles no se

combustionen, asimismo, que el SAT podrá emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización de combustible no sujeto a un proceso de combustión por tipos de industria; sin embargo, se estima conveniente aclarar que el porcentaje mencionado se aplicará respecto de las cantidades de litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible, adquiridos en el mes de que se trate.

Adicionalmente, al igual que en ejercicios fiscales anteriores, se propone dar continuidad a la exención del derecho de trámite aduanero, a las personas que importen gas natural, ya que este combustible genera grandes beneficios económicos a sus usuarios, es de fácil transportación y produce menos contaminación.

En otro contexto, como en años anteriores, se propone mantener la disposición contenida en el artículo 17 de la Ley que se somete a consideración de esa Soberanía, que establece que se derogan aquellas disposiciones que contengan exenciones totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos o contribuciones federales distintos de los establecidos en leyes fiscales, incluyendo la LISH, ordenamientos legales referentes a organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales y tratados internacionales.

De igual manera, el Ejecutivo Federal a mi cargo considera oportuno conservar en el mismo artículo 17 la derogación de las disposiciones que establezcan un destino específico para los ingresos por concepto de productos, aprovechamientos o derechos distinto al previsto en las disposiciones de carácter fiscal, así como respecto de aquéllas que clasifiquen a los ingresos de las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados como ingresos excedentes del ejercicio en que se generen.

Asimismo, se plantea a ese H. Congreso mantener la clasificación y tratamiento de los ingresos excedentes que generan las dependencias, entidades, órganos autónomos y poderes de la Unión a efecto de posibilitar su destino a la unidad generadora de los mismos.

En otro orden de ideas, el régimen fiscal aplicable a los ingresos por intereses pagados a personas físicas por instituciones del sistema financiero, se basa en la aplicación de una tasa de retención sobre el capital que da lugar al pago de los intereses. En tal sentido, la retención obtenida constituye un pago provisional, debido a que los contribuyentes, posteriormente en su declaración anual acumulan los intereses reales obtenidos en el ejercicio y acreditan el ISR retenido por las instituciones financieras.

En ese sentido, para la determinación de la tasa de retención que aplicarán las instituciones financieras que efectúan pagos por intereses, el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 establece la metodología de cálculo.

Dicha metodología integra la información correspondiente a los rendimientos promedio de los instrumentos públicos y privados, ponderados por el monto en circulación de cada instrumento, así como el promedio de la inflación mensual interanual observada, correspondiente al periodo febrero a julio de 2019. La ponderación por monto en circulación permite otorgar mayor peso a los instrumentos en los cuales la población invierte más, dando como resultado una tasa de retención equitativa y acorde con la distribución de los ahorradores por tipo de instrumento.

Ahora bien, para el cálculo de la tasa de retención que aplicarán las instituciones financieras que efectúan pagos por intereses durante el ejercicio fiscal de 2020, realizado conforme a la metodología establecida, se utilizó la información publicada por el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el periodo de febrero a julio de 2019, lo que da transparencia y certidumbre al cálculo de la citada tasa de retención.

De conformidad con la metodología y los cálculos efectuados, la tasa de retención anual que aplicarán las instituciones financieras que paguen intereses durante el ejercicio fiscal de 2020 será de 1.45 por ciento.

Cabe resaltar que la tasa de retención calculada para el ejercicio fiscal de 2020 refleja el comportamiento al alza de las tasas de interés de los instrumentos públicos y privados, observado durante el periodo de febrero a julio de 2019, así

como la disminución de la inflación mensual interanual promedio, observada en el mismo periodo.

Por otra parte, con la finalidad de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pueda ejercer sus funciones de manera más eficaz, se estima conveniente conservar en el artículo 22 de la Ley cuya emisión se plantea a esa Soberanía, los criterios y rangos para imponer sanciones por esa Comisión.

Así también, se considera pertinente mantener en el artículo 23 de la Iniciativa de Ley cuya emisión se propone a ese Congreso de la Unión, el apoyo a los contribuyentes de mínima capacidad administrativa que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal siempre y cuando cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades que realicen con el público en general, para que puedan optar por pagar el IVA y el IEPS que, en su caso corresponda, mediante la aplicación del esquema de estímulos establecidos en dicho artículo.

En otro contexto, se prevé en el artículo 24 de la Ley cuya emisión se propone, dar continuidad a la disposición que establece que las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del Título IV de la LISR, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del ISR, siempre que dichos apoyos económicos o monetarios se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación. Lo anterior, tomando en cuenta que en la actualidad se siguen canalizando recursos a las familias afectadas para atender los daños ocurridos por los citados sismos.

De igual forma, se propone mantener la disposición que establece que las organizaciones civiles y fideicomisos que de forma inmediata realicen las labores de rescate en la emergencia y contribuyan en la reconstrucción y restablecimiento de las actividades económicas después de la ocurrencia de desastres naturales, puedan recibir recursos de donatarias autorizadas que cuenten con un buen historial de sus obligaciones fiscales ante el SAT. Esto permitirá una acción más oportuna y efectiva ante desastres naturales.

Adicionalmente, esta facilidad será un canal idóneo para asegurar que los recursos de la sociedad sean destinados efectivamente a atender la emergencia, garantizando la transparencia sobre el uso y destino de los recursos, así como la rendición de cuentas que demanda la sociedad.

Aunado a lo anterior, la posibilidad de que organizaciones civiles y fideicomisos puedan recibir recursos de las donatarias autorizadas requiere sujetarse a estrictos requisitos y controles, tanto en lo que hace a la donataria autorizada como a las organizaciones civiles y fideicomisos que apoyan en caso de emergencias. En ese sentido, se conservan los mismos requisitos que se establecieron en el ejercicio fiscal anterior.

Por otra parte, para la generación del Reporte de Donatarias Autorizadas (RDA) a que se refiere el artículo 27, Apartados B y C de la presente Iniciativa se propone establecer que la información de los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de los directivos análogos, se debe obtener de los datos reportados, en la página de Internet del SAT en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas. En ese sentido, se considera que la fecha oportuna para la presentación de la información en dicha sección sea el 31 de julio de 2020. Lo anterior, debido a que la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas contiene información no estandarizada que requiere un proceso para su conformación en los términos establecidos en los Apartados B y C del citado artículo. La fecha establecida asegura que el proceso de explotación, elaboración y validación de los datos se realice en tiempo y forma para entregar el RDA a las instancias correspondientes del Congreso de la Unión y su publicación en la página de Internet de la SHCP.

Por otro lado, como en ejercicios fiscales anteriores, se prevé la disposición transitoria que establece que el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el DOF el 20 de noviembre de 2013, continuará destinándose durante el ejercicio fiscal 2020, en los términos del citado precepto.

En otro contexto, con el fin de dar continuidad a la re-sectorización del programa presupuestario de Recaudación y Fiscalización con el que cuenta la Comisión Nacional del Agua, se propone a esa Soberanía conservar en la presente Iniciativa una disposición transitoria con la finalidad de auxiliar las acciones que permitan al SAT concentrar las operaciones en materia de recaudación federal, en apego a lo dispuesto en la fracción I del artículo 7 de la LSAT, que señala que es atribución de este órgano administrativo desconcentrado recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios; con el objeto de lograr una eficiencia presupuestaria.

Así también, se estima conveniente establecer una disposición transitoria mediante la cual se le permita al ISSSTE, durante el ejercicio fiscal 2020 y en ejercicio de las facultades que le confiere la LISSSTE, requerir a la SHCP los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan, sin que dichos pagos se encuentren condicionados a que se hayan suscrito, se suscriban o se actualice convenio alguno entre las entidades federativas y municipios con el ISSSTE.

De igual forma, el ISSSTE podrá suscribir con las entidades federativas, municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales los convenios de regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos, conforme al modelo que sea autorizado por su órgano de gobierno. Al respecto se propone incorporar que el Instituto podrá aceptar bienes inmuebles como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse en las cuentas individuales de los trabajadores.

En otro contexto, se propone a ese Honorable Congreso de la Unión que los contratos de fideicomisos y mandatos que constituya o celebre el Gobierno Federal, deban prever que la SHCP pueda disponer del patrimonio de éstos, así como la obligación a cargo de las instituciones fiduciarias o mandatarias de concentrar trimestralmente en la TESOFE, los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado, bajo la

naturaleza de aprovechamientos, salvo disposición de carácter general en contrario.

Asimismo, se prevé que las instituciones fiduciarias, o mandatarias de fideicomisos, mandatos o análogos públicos, deben concentrar de forma trimestral los intereses generados en la TESOFE, bajo la figura de aprovechamientos, los cuales se destinarán a gasto en salud o de inversión en infraestructura, lo anterior con excepción de aquellos vehículos financieros que por disposición expresa de ley, decreto o determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dichos recursos deban permanecer afectos a su patrimonio o destinados al objeto correspondiente.

De igual forma, es de resaltar que la presente Administración tiene el firme propósito de reducir el número de fideicomisos y mandatos públicos, a efecto de que ésta cuente exclusivamente con los que resulten indispensables para el quehacer público. En ese sentido, se considera conveniente establecer mediante disposición transitoria, que las dependencias y entidades deban remitir durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2020 a la SHCP, un informe de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos susceptibles de extinguirse en términos de las disposiciones aplicables.

Asimismo, se somete a consideración en la presente Iniciativa, se instruya a la institución fiduciaria del fideicomiso la extinción del fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria para que durante el mes de marzo concentre en la TESOFE, bajo la naturaleza de aprovechamientos, los recursos que integran el patrimonio fideicomitido a fin de destinarlos, mediante el mecanismo que determine la SHCP, a proyectos de inversión de infraestructura económica para la construcción, ampliación o rehabilitación de puertos, así como para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros que mejoren la conectividad entre los puertos.

Finalmente, se establece mediante disposición transitoria, que durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2020, la institución fiduciaria del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados deberá concentrar en la TESOFE los recursos remanentes previstos en su patrimonio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, en mi carácter del Titular del Ejecutivo Federal, y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esa Soberanía, la siguiente Iniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Capítulo I
De los Ingresos y el Endeudamiento Público

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran:

CONCEPTO	Ingreso Estimado
TOTAL	**6,096,335.8**
1. Impuestos	**3,499,425.8**
11. Impuestos Sobre los Ingresos:	1,846,455.7
01. Impuesto sobre la renta.	1,846,455.7
12. Impuestos Sobre el Patrimonio.	
13. Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones:	1,534,055.8
01. Impuesto al valor agregado.	1,007,546.0
02. Impuesto especial sobre producción y servicios:	515,733.5
01. Combustibles automotrices:	342,053.6
01. Artículo 2o., fracción I, inciso D).	313,321.0
02. Artículo 2o.-A.	28,732.6
02. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:	62,165.7
01. Bebidas alcohólicas.	18,888.4
02. Cervezas y bebidas refrescantes.	43,277.3

		03. Tabacos labrados.	43,679.4
		04. Juegos con apuestas y sorteos.	2,968.8
		05. Redes públicas de telecomunicaciones.	5,923.3
		06. Bebidas energetizantes.	11.6
		07. Bebidas saborizadas.	28,660.5
		08. Alimentos no básicos con alta densidad calórica.	23,783.2
		09. Plaguicidas.	758.1
		10. Combustibles fósiles.	5,729.3
	03.	Impuesto sobre automóviles nuevos.	10,776.3
14.		Impuestos al Comercio Exterior:	70,984.6
	01.	Impuestos al comercio exterior:	70,984.6
		01. A la importación.	70,984.6
		02. A la exportación.	0.0
15.		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables.	
16.		Impuestos Ecológicos.	
17.		Accesorios de impuestos:	41,210.2
	01.	Accesorios de impuestos.	41,210.2
18.		Otros impuestos:	6,850.3
	01.	Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.	6,850.3
	02.	Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación.	0.0
19.		Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	-130.8
2.		**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**374,003.2**
21.		Aportaciones para Fondos de Vivienda.	0.0
	01.	Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.	0.0

22.	Cuotas para la Seguridad Social.	374,003.2
01.	Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores.	374,003.2
23.	Cuotas de Ahorro para el Retiro.	0.0
01.	Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones.	0.0
24.	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social:	0.0
01.	Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores.	0.0
02.	Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares.	0.0
25.	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.	0.0
3.	**Contribuciones de Mejoras**	**44.8**
31.	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas:	44.8
01.	Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.	44.8
39.	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
4.	**Derechos**	**51,671.8**
41.	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público:	42,740.8
01.	Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	346.2
02.	Secretaría de la Función Pública.	0.0
03.	Secretaría de Economía.	2,670.7
04.	Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	8,748.2
05.	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	11,776.9
06.	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	72.3

	07.	Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	0.0
	08.	Secretaría de Educación Pública.	0.2
	09.	Instituto Federal de Telecomunicaciones.	19,126.3
	10.	Secretaría de Cultura	0.0
43.		Derechos por Prestación de Servicios:	8,931.0
	01.	Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público:	8,931.0
		01. Secretaría de Gobernación.	91.1
		02. Secretaría de Relaciones Exteriores.	4,915.0
		03. Secretaría de la Defensa Nacional.	145.5
		04. Secretaría de Marina.	445.0
		05. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	588.6
		06. Secretaría de la Función Pública.	23.0
		07. Secretaría de Energía.	0.2
		08. Secretaría de Economía.	21.9
		09. Secretaría de Agricultura, y Desarrollo Rural.	42.9
		10. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	1,081.6
		11. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	85.1
		01. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
		02. Otros.	85.1
		12. Secretaría de Educación Pública.	1,255.9
		13. Secretaría de Salud.	0.0
		14. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	9.4
		15. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.	61.1
		16. Secretaría de Turismo.	0.0
		17. Fiscalía General de la República.	0.0

		18. Instituto Federal de Telecomunicaciones.	30.1
		19. Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0
		20. Comisión Reguladora de Energía.	0.0
		21. Comisión Federal de Competencia Económica.	0.0
		22. Secretaría de Cultura.	58.4
		23. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	76.2
	44.	Otros Derechos.	0.0
	45.	Accesorios de Derechos.	0.0
	49.	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
5.	**Productos**		**10,095.3**
	51.	Productos.	10,095.3
		01. Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público.	8.8
		02. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público:	10,086.5
		01. Explotación de tierras y aguas.	0.0
		02. Arrendamiento de tierras, locales y construcciones.	0.3
		03. Enajenación de bienes:	1,859.6
		01. Muebles.	1,743.5
		02. Inmuebles.	116.1
		04. Intereses de valores, créditos y bonos.	7,687.4
		05. Utilidades:	539.1
		01. De organismos descentralizados y empresas de participación estatal.	0.0
		02. De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.	0.0

		03. De Pronósticos para la Asistencia Pública.	538.6
		04. Otras.	0.5
		06. Otros.	0.1
	59.	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
6.	**Aprovechamientos**		**98,674.4**
	61.	Aprovechamientos:	98,639.0
		01. Multas.	2,190.5
		02. Indemnizaciones.	2,531.7
		03. Reintegros:	166.5
		01. Sostenimiento de las escuelas artículo 123.	0.0
		02. Servicio de vigilancia forestal.	0.1
		03. Otros.	166.4
		04. Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica.	94.8
		05. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación.	0.0
		06. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación.	0.0
		07. Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del Sistema Escolar Federalizado.	0.0
		08. Cooperación de la Ciudad de México por servicios públicos locales prestados por la Federación.	0.0
		09. Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de particulares para	0.0

	alcantarillado, electrificación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas.	
10.	5 por ciento de días de cama a cargo de establecimientos particulares para internamiento de enfermos y otros destinados a la Secretaría de Salud.	0.0
11.	Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica.	947.8
12.	Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.	1,129.7
13.	Regalías provenientes de fondos y explotación minera.	0.0
14.	Aportaciones de contratistas de obras públicas.	7.6
15.	Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal:	0.5
	01. Aportaciones que efectúen los Gobiernos de la Ciudad de México, Estatales y Municipales, los organismos y entidades públicas, sociales y los particulares.	0.0
	02. De las reservas nacionales forestales.	0.0
	03. Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.	0.0
	04. Otros conceptos.	0.5
16.	Cuotas Compensatorias.	142.4
17.	Hospitales Militares.	0.0
18.	Participaciones por la explotación de obras del dominio público señaladas por la Ley Federal del Derecho de Autor.	0.0
19.	Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal.	0.0

	20.	Provenientes del programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras.	0.0
	21.	No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios.	0.0
	22.	Otros:	91,427.5
		01. Remanente de operación del Banco de México.	0.0
		02. Utilidades por Recompra de Deuda.	0.0
		03. Rendimiento mínimo garantizado.	0.0
		04. Otros.	91,427.5
	23.	Provenientes de servicios en materia energética:	0.0
		01. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
		02. Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0
		03. Comisión Reguladora de Energía.	0.0
62.		Aprovechamientos Patrimoniales.	35.4
	01.	Recuperaciones de capital:	35.4
		01. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de Entidades Federativas y empresas públicas.	27.6
		02. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas privadas y a particulares.	7.8
		03. Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.	0.0
		04. Desincorporaciones.	0.0
		05. Otros.	0.0
63.		Accesorios de Aprovechamientos.	0.0
69.		Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0

7.	**Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**	**1,065,166.0**
71.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social:	72,232.9
01.	Instituto Mexicano del Seguro Social.	26,920.2
02.	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.	45,312.7
72.	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado:	992,933.1
01.	Petróleos Mexicanos.	574,535.0
02.	Comisión Federal de Electricidad.	418,398.1
73.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.	
74.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.	
75.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	
76.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	
77.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.	
78.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos.	
79.	Otros Ingresos.	

8.	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**	
	81. Participaciones.	
	82. Aportaciones.	
	83. Convenios.	
	84. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.	
	85. Fondos Distintos de Aportaciones.	
9.	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**412,797.7**
	91. Transferencias y Asignaciones.	0.0
	93. Subsidios y Subvenciones.	0.0
	95. Pensiones y Jubilaciones.	0.0
	97. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.	412,797.7
	01. Ordinarias.	412,797.7
	02. Extraordinarias.	0.0
0.	**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**584,456.8**
	01. Endeudamiento interno:	569,582.1
	01. Endeudamiento interno del Gobierno Federal.	532,266.1
	02. Otros financiamientos:	37,316.0
	01. Diferimiento de pagos.	37,316.0
	02. Otros.	0.0
	02. Endeudamiento externo:	0.0
	01. Endeudamiento externo del Gobierno Federal.	0.0
	03. Financiamiento Interno.	
	04. Déficit de organismos y empresas de control directo.	-47,748.8
	05. Déficit de empresas productivas del Estado.	62,623.5
Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal (0.01.01+0.02.01)		532,266.1

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este precepto.

Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal de 2020, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos.

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2020, se proyecta una recaudación federal participable por 3 billones 389 mil 84.3 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal de 2020, el gasto de inversión del Gobierno Federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto.

Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2020, en términos monetarios, el pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, previsto en la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 895.1 millones de pesos.

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el artículo Segundo Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho Transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados.

En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por parte del Ejecutivo Federal, de los bienes y derechos del fideicomiso referido en el primer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en cuentas de orden, con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo esas operaciones.

El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará en primer término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las operaciones referidas en el párrafo anterior y, posteriormente, se destinarán para restituir al Gobierno Federal los recursos públicos aportados para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto.

Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2020 se destinen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del

ejercicio fiscal de 2020, se instrumenten para potenciar los recursos que, con cargo a dicho fondo, reciben las entidades federativas.

Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El gasto de inversión a que se refiere el párrafo sexto del presente artículo se reportará en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de los ingresos generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.61.22.04 del presente artículo por concepto de otros aprovechamientos. Asimismo, deberá informar los destinos específicos que, en términos del artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan dichos aprovechamientos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2020, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Durante el ejercicio fiscal 2020, los ingresos propios de Petróleos Mexicanos que se generen por un precio promedio anual del barril del petróleo crudo mexicano que exceda de 49.01 dólares de los Estados Unidos de América y hasta los 55.00 dólares de los Estados Unidos de América, deberá destinarlos a mejorar su meta de balance financiero aprobada en el artículo 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 532 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo.

Las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior no deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para el ejercicio fiscal de 2020.

Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente se podrán aplicar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario incluyendo sus artículos transitorios. Sobre estas operaciones de canje y refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión.

El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta propia con los valores referidos.

En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos en la cuenta que, para tal efecto, le lleve el Banco de México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el citado Banco procurará las mejores condiciones para el mencionado Instituto dentro de lo que el mercado permita.

El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco de México podrá ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Titular de dicha Tesorería, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo.

Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores un monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el Resultado de Operación que considera la Constitución Neta de Reservas Crediticias Preventivas, de cero pesos para el ejercicio fiscal de 2020.

El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización del órgano de gobierno de la entidad de que se trate y con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los montos establecidos en el artículo 1o., numeral 0 "Ingresos derivados de Financiamientos" de esta Ley, así como el monto de endeudamiento neto interno consignado en este artículo, se verán, en su caso, modificados en lo conducente como resultado de la distribución, entre el Gobierno Federal y los organismos y empresas de control directo, de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 1 mil 250 millones de dólares de los Estados Unidos de América; asimismo, se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

Se autoriza para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 835 millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de 508 millones de dólares de los Estados Unidos de América, asimismo se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

El cómputo de lo establecido en los dos párrafos anteriores se realizará en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión de manera trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento,

destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento.

Artículo 3o. Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020. Asimismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar operaciones de canje, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública de la Ciudad de México.

El ejercicio del monto de endeudamiento autorizado se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 4o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 257,138.2 millones de pesos, de los cuales 100,344.1 millones de pesos corresponden a inversión directa y 156,794.1 millones de pesos a inversión condicionada.

Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad en los términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV, del Reglamento de este último ordenamiento, por un total de 2,760.7 millones de pesos que corresponde a un proyecto de inversión directa.

Artículo 6o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y/o sus empresas productivas subsidiarias deberán presentar las declaraciones, hacer los pagos y cumplir con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, ante la Tesorería de la Federación, a través del esquema para la presentación de declaraciones que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida, previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las modificaciones a los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los pagos establecidos conforme al párrafo anterior, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente a aquél en que se generen dichas modificaciones, así como en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga uso de las facultades otorgadas en el segundo párrafo de este artículo, los pagos correspondientes deberán ser transferidos y concentrados en la Tesorería de la Federación por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a más tardar el día siguiente de su recepción, a cuenta de la transferencia a que se refiere el artículo 16, fracción II, inciso g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos que, hasta antes de la entrada en vigor del "Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en términos del artículo 32 de dicha Ley, serán registrados como inversión.

Capítulo II
De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales

Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:

I. Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate:

1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26 por ciento mensual.

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53 por ciento mensual.

3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.82 por ciento mensual.

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización realizada conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos y disposiciones de carácter general expedidos en el Ramo de Hacienda, de las que hayan derivado beneficios otorgados en términos de la presente Ley, así como por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por

la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2020, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen.

Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se estará a lo siguiente:

I. La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, de similares características, en países con los que México mantiene vínculos comerciales.

II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica y de saneamiento financiero.

III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general.

Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública Federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los aprovechamientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los aprovechamientos que perciba la dependencia correspondiente.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por dicha Secretaría, ya sea de los ingresos que obtengan o con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, o tratándose de recuperaciones de capital o del patrimonio, según sea el caso, los recursos correspondientes se destinarán por la propia Secretaría prioritariamente a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a fomentar acciones que les permitan cumplir con sus respectivos mandatos, o a programas y proyectos de inversión, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente Ley.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de cualquier otra entidad paraestatal distinta de las señaladas en el párrafo anterior, dichos ingresos serán enterados a la Tesorería de la Federación bajo dicha naturaleza, a efecto de que sean destinados a programas presupuestarios que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él deriven.

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 1o., numerales 6.61.11, 6.62.01.04 y 6.61.22.04 de esta Ley por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR

Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, aquéllos a que se refieren la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley Federal de Competencia Económica, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo en los plazos que para tales efectos se fijen, el prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio

público de la Federación de que se trate, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos.

El prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por aprovechamientos, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de carácter particular, las cuotas de los productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal de 2020, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los productos que se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la

autorización de los productos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31

de diciembre de 2019 hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones efectuadas tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como por el Instituto de Administración de Bienes y Activos y los accesorios de los productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en un fondo, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal conforme a las disposiciones fiscales, que hayan sido transferidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la citada entidad transferente, sobre bienes de la misma naturaleza; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en el fondo señalado en el párrafo anterior, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. Un mecanismo como el previsto en el presente párrafo, se podrá aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que, por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional, el

Instituto de Administración de Bienes y Activos deba realizar. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el Instituto de Administración de Bienes y Activos remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados y a su Coordinadora de Sector, un informe que contenga el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las autoridades mencionadas en los párrafos citados.

Los ingresos netos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos se podrán destinar hasta en un 100 por ciento a financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como para el pago de los créditos que hayan sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, siempre que en el acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el convenio que al efecto se celebre se señale dicha situación. Lo anterior no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados a que se refiere el décimo tercer párrafo del artículo 13 de esta Ley. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes en proceso de extinción de dominio y de aquellos sobre los que sea declarada la extinción de dominio y de sus frutos, así como su monetización en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, serán destinados a una cuenta especial en los términos que establece el artículo 239 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 234 y 237 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por productos, así como de la concentración efectuada a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 12. Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2020 se concentrarán en términos del artículo 22 de la Ley de Tesorería de la Federación, salvo en los siguientes casos:

I. Se concentrarán en la Tesorería de la Federación, a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción, los derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, incluidos entre otros las sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, así como los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

II. Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional, sólo registrarán los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente de esta Ley, salvo por lo dispuesto en la fracción I de este artículo, y deberán conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos.

Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere esta fracción, se deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, de los informes avalados por el órgano interno de control o de la comisión

respectiva del órgano de gobierno, según sea el caso, especificando los importes del impuesto al valor agregado que hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de los ingresos;

III. Las entidades de control indirecto deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en posibilidad de elaborar los informes trimestrales que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reflejen dentro de la Cuenta Pública Federal;

IV. Los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, podrán ser recaudados por las oficinas de los propios institutos o por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la Cuenta Pública Federal, y

V. Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio de la concentración en términos de la Ley de Tesorería de la Federación.

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere esta fracción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de que dichos ingresos hayan sido concentrados en la Tesorería de la Federación.

Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos.

Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se destinarán a las entidades o a las empresas productivas del Estado que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza. Las entidades o las empresas productivas del Estado podrán celebrar convenios de colaboración con la iniciativa privada.

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.

Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en la fracción que les corresponda conforme al citado artículo.

Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de concentrar los recursos públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la Federación, en los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato análogo, así como aquellos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según su origen, y se podrán destinar a los fines que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el

instrumento correspondiente. Asimismo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 6.62.01.04 del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes.

Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son accesorios.

Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán los netos que resulten de restar al ingreso percibido las erogaciones efectuadas para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a que se refiere el párrafo siguiente.

Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales son los recursos efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas. Con excepción de lo dispuesto en el séptimo párrafo de este artículo para los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, los ingresos netos a que se refiere este párrafo se enterarán o concentrarán, según

corresponda, en la Tesorería de la Federación y deberán manifestarse tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo acciones, por la enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión de derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la desincorporación de entidades, se les podrá descontar un porcentaje, por concepto de gastos indirectos de operación, que no podrá ser mayor del 7 por ciento, a favor del Instituto de Administración de Bienes y Activos, cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la citada entidad, y se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos podrán destinarse para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente con la opinión favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, sin que sea necesario concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Estos recursos deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica.

Los pasivos a cargo de organismos descentralizados en proceso de desincorporación que tengan como acreedor al Gobierno Federal, con excepción de aquéllos que tengan el carácter de crédito fiscal, quedarán extinguidos de pleno

derecho sin necesidad de autorización alguna, y los créditos quedarán cancelados de las cuentas públicas.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, podrán permanecer afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. No se considerará enajenación la transmisión de bienes y derechos al Fondo de Desincorporación de Entidades que, con la opinión favorable de dicha Comisión, efectúen las entidades en proceso de desincorporación, para concluir las actividades residuales del proceso respectivo.

Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos remanentes que les correspondan de dichos procesos ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, como parte de la estrategia de conclusión de los procesos de desincorporación de entidades, entre el Instituto de Administración de Bienes y Activos y las entidades cuyos procesos de desincorporación concluyeron, podrán ser utilizados por éste, para sufragar las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, relativo a la atención de encargos bajo su administración, cuando éstos sean deficitarios. Lo anterior, estará sujeto, al cumplimiento de las directrices que se emitan para tal efecto, así como a la autorización de la Junta de Gobierno del Instituto de Administración de Bienes y Activos, previa aprobación de los órganos colegiados competentes.

Los ingresos obtenidos por la venta de bienes asegurados a favor del Gobierno Federal, incluyendo numerario, cuya administración y destino hayan sido encomendados al Instituto de Administración de Bienes y Activos, en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, serán destinados a un fondo en los términos del artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 90, 92 y 93 de la Ley Federal para la

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Los ingresos provenientes de numerario y de la enajenación de bienes que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos, que hayan sido declarados abandonados por parte de las instancias competentes, distintos a los señalados en el párrafo décimo quinto del presente artículo y que se concentren a la Tesorería de la Federación, se considerarán aprovechamientos y se destinarán al financiamiento de las operaciones del Instituto, en términos de lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89, 92 y 93 de la Ley Federal para Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

El numerario decomisado y los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y previa deducción de los gastos indirectos de operación que correspondan, se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al Fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, u otras políticas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la presente Ley.

Los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, serán integrados al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley citada.

Los ingresos provenientes de la enajenación que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos de vehículos declarados abandonados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha dependencia, se destinarán de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. De la cantidad restante a los permisionarios federales se les cubrirán los adeudos generados hasta con el treinta por ciento de los remanentes de los ingresos y el resto se enterará a la Tesorería de la Federación. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 14. Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, entre las que se comprende de manera enunciativa a las siguientes:

I. Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los términos de dichas disposiciones.

Artículo 15. Durante el ejercicio fiscal de 2020, los contribuyentes a los que se les impongan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del citado Código, independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente.

Cuando los contribuyentes a los que se les impongan multas por las infracciones señaladas en el párrafo anterior corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su caso, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación o se notifique la resolución provisional a que se refiere el artículo 53-B, primer párrafo, fracción I del citado Código, pero antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 53-B, los contribuyentes pagarán el 60 por ciento de la multa que les corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior.

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2020, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diésel o el biodiésel y sus mezclas que importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles, en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2, según corresponda al tipo de combustible, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante fiscal de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

1. El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o el biodiésel y sus mezclas, por el número de litros de diésel o de biodiésel y sus mezclas importados o adquiridos.

En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.

2. Las personas que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en las actividades agropecuarias o silvícolas, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en aduana del pedimento de importación o el precio consignado en el comprobante fiscal de adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas en las estaciones de servicio, incluido el impuesto al valor agregado, por el

factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

III. Las personas que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final en las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2020 y enero de 2021.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diésel o de biodiésel y sus mezclas, en el que asienten mensualmente la totalidad del diésel o del biodiésel y sus mezclas que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diésel o el biodiésel y sus mezclas que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diésel o del biodiésel y sus mezclas utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y

sus mezclas cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de estos combustibles en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación.

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda según el tipo de combustible, conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el número de litros importados o adquiridos.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que

mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago por la importación o adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas a distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: monedero electrónico autorizado por el Servicio de Administración Tributaria; tarjeta de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante, o bien, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México.

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, se entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal, relacionados con sus actividades económicas, sin que por ello se genere un cobro.

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto.

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se realicen los gastos a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación del beneficio contenido en esta fracción.

VI. Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que en su proceso productivo no se destinen a la combustión.

El estímulo fiscal señalado en esta fracción será igual al monto que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda, por la cantidad del combustible consumido en un mes, que no se haya sometido a un proceso de combustión.

El monto que resulte conforme a lo señalado en el párrafo anterior únicamente podrá ser acreditado contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se adquieran los combustibles a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización del combustible no sujeto a un proceso de combustión por tipos de industria, respecto de los litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible de que se trate, adquiridos en un mes de calendario, así como las demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal.

VII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de pesos, consistente en permitir el acreditamiento del derecho especial sobre minería a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos que hayan pagado en el ejercicio de que se trate.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción, únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tengan los concesionarios o

asignatarios mineros a su cargo, correspondiente al mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación de esta fracción.

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV, V, VI y VII de este apartado quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto señalen.

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente apartado no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido en esta Ley.

Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos establecidos en la presente Ley.

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno de ellos se establece en la presente Ley.

B. En materia de exenciones:

Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo.

Artículo 17. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el

Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a empresas productivas del Estado, organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza.

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.

Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.

Artículo 18. Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los tribunales administrativos, los órganos autónomos por disposición constitucional, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades, se deberán aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados de la dependencia en la Ley de Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados efectuados por dicha dependencia a la Tesorería de la Federación, en el periodo que corresponda.

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades.

Artículo 19. Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican de la siguiente manera:

I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se generan en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades relacionadas directamente con las funciones recurrentes de la institución.

II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades que no guardan relación directa con las funciones recurrentes de la institución.

III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con las atribuciones

de la dependencia o entidad, tales como la recuperación de seguros, los donativos en dinero y la enajenación de bienes muebles.

IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como de los tribunales administrativos y de los órganos constitucionales autónomos. No se incluyen en esta fracción los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ni aquéllos por concepto de derechos y aprovechamientos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, los cuales se sujetan a lo dispuesto en el artículo 12, fracción I, de esta Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades a más tardar el último día hábil de enero de 2020 y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se modifiquen.

Los ingresos a que se refiere la fracción III de este artículo se aplicarán en los términos de lo previsto en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 20. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal de 2020 la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 1.45 por ciento. La metodología para calcular dicha tasa es la siguiente:

I. Se determinó la tasa de rendimiento promedio ponderado de los valores públicos por el periodo comprendido de febrero a julio de 2019, conforme a lo siguiente:

a) Se tomaron las tasas promedio mensuales por instrumento, de los valores públicos publicados por el Banco de México.

b) Se determinó el factor de ponderación mensual por instrumento, dividiendo las subastas mensuales de cada instrumento entre el total de las subastas de todos los instrumentos públicos efectuadas al mes.

c) Para calcular la tasa ponderada mensual por instrumento, se multiplicó la tasa promedio mensual de cada instrumento por su respectivo factor de ponderación mensual, determinado conforme al inciso anterior.

d) Para determinar la tasa ponderada mensual de valores públicos se sumó la tasa ponderada mensual por cada instrumento.

e) La tasa de rendimiento promedio ponderado de valores públicos correspondiente al periodo febrero a julio de 2019 se determinó con el promedio simple de las tasas ponderadas mensuales determinadas conforme al inciso anterior del mencionado periodo.

II. Se tomaron las tasas promedio ponderadas mensuales de valores privados publicadas por el Banco de México y se determinó el promedio simple de dichos valores correspondiente al periodo de febrero a julio de 2019.

III. Se determinó un factor ponderado de los instrumentos públicos y privados en función al saldo promedio en circulación de los valores públicos y privados correspondientes al periodo de febrero a julio de 2019 publicados por el Banco de México.

IV. Para obtener la tasa ponderada de instrumentos públicos y privados, se multiplicaron las tasas promedio ponderadas de valores públicos y privados, determinados conforme a las fracciones I y II, por su respectivo factor de ponderación, determinado conforme a la fracción anterior, y posteriormente se sumaron dichos valores ponderados.

V. Al valor obtenido conforme a la fracción IV se disminuyó el valor promedio de la inflación mensual interanual del índice general correspondiente a cada uno

de los meses del periodo de febrero a julio de 2019 del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

VI. La tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el valor obtenido conforme a la fracción V de este artículo por la tasa correspondiente al último tramo de la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 22. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por el incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades competentes, con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de 1 hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con base en los criterios que se establezcan para tal efecto, los cuales podrán considerar, entre otros, los días de atraso en la atención de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los requerimientos que se hubieran incumplido, o la probable afectación de los intereses patrimoniales de los clientes o usuarios de los servicios financieros.

Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al terrorismo, cometidas por las entidades financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y asesores en inversiones, serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del reporte de la operación inusual que no se hubiera enviado, del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario de la que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas conforme a las disposiciones señaladas anteriormente, o bien con multa equivalente en moneda nacional de 10 hasta 100,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el caso de cualquier otro incumplimiento a las referidas disposiciones.

Artículo 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título

IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios que, en su caso, corresponda a las actividades mencionadas, mediante la aplicación del esquema de estímulos siguiente:

I. Calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma siguiente:

a) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado en el bimestre de que se trate, considerando el giro o actividad a la que se dedique el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

	Sector económico	Porcentaje IVA (%)
1	Minería	8.0
2	Manufacturas y/o construcción	6.0
3	Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles)	2.0
4	Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares en que se proporcionen servicios de alimentos y bebidas)	8.0
5	Negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y/o medicinas	0.0

Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores económicos mencionados en los numerales 1 a 4 aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante. Se entiende por sector preponderante aquél de donde provenga la mayor parte de los ingresos del contribuyente.

b) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios en el bimestre de que se trate, considerando el tipo de bienes enajenados por el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar

Descripción	Porcentaje IEPS (%)
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea comercializador)	1.0
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea fabricante)	3.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea comercializador)	10.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea fabricante)	21.0
Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante)	4.0
Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante)	10.0
Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador)	1.0
Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el contribuyente sea fabricante)	23.0
Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante)	120.0

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo, cuando hayan pagado el impuesto especial sobre producción y servicios en la importación de tabacos labrados y bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos C) y G) de la Ley del

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, considerarán dicho pago como definitivo, por lo que ya no pagarán el impuesto que trasladen en la enajenación de los bienes importados, siempre que dicha enajenación se efectúe con el público en general.

c) El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta fracción será el monto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios, en su caso, a pagar por las actividades realizadas con el público en general, sin que proceda acreditamiento alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente.

d) El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios deberá realizarse por los períodos y en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades realizadas con el público en general, aquéllas por las que se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado.

Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su deducción o acreditamiento, en donde se traslade en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, dichos impuestos deberán pagarse en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones aplicables, conjuntamente con el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios determinado conforme al inciso c) de esta fracción.

Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios será aplicable, cuando proceda, en la proporción que represente el valor de las actividades por las que se expidieron comprobantes fiscales en las que se haya efectuado el traslado expreso y por separado, en el valor total de las actividades del bimestre que corresponda.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta fracción podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso deberán calcular y pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según se trate, a partir del bimestre en que abandonen la opción. En este caso, los contribuyentes no podrán volver a ejercer la opción prevista en el presente artículo.

II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las actividades realizadas con el público en general en las que determinen el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios con el esquema de porcentajes a que se refiere la fracción I del presente artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente:

a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según corresponda al número de años que tenga el contribuyente tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal:

TABLA

Años	Porcentaje de reducción (%)
1	100
2	90
3	80
4	70
5	60

6	50
7	40
8	30
9	20
10	10

Para los efectos de la aplicación de la tabla el número de años de tributación del contribuyente se determinará de conformidad con lo que al respecto se considere para los efectos del impuesto sobre la renta.

Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, cuyos ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de trescientos mil pesos, durante cada uno de los años en que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será de 100 por ciento.

Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por tributar conforme al Régimen de Incorporación Fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán al monto establecido en dicho párrafo. Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto referido, en el ejercicio siguiente no se podrá tomar el beneficio del párrafo anterior.

b) La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de reducción a que se refiere el inciso anterior será acreditable únicamente contra el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, según se trate, determinado conforme a la aplicación de los porcentajes a que se refiere la fracción I de este artículo.

III. El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo no se considerará como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.

IV. Se releva a los contribuyentes a que se refiere este artículo de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 24. Para los efectos del impuesto sobre la renta, se estará a lo siguiente:

I. Las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, siempre que dichos apoyos económicos o monetarios se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran zonas afectadas los municipios de los Estados afectados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que se listen en las declaratorias de desastre natural correspondientes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

II. Para los efectos de los artículos 82, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 138 de su Reglamento, se considera que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de dicha Ley, cumplen con el objeto social autorizado para estos efectos, cuando otorguen donativos a organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y cuyo objeto exclusivo sea realizar labores de rescate y reconstrucción en casos de desastres naturales, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos, se deberá cumplir con lo siguiente:

1. Contar con autorización vigente para recibir donativos al menos durante los 5 años previos al momento en que se realice la donación, y que durante ese periodo la autorización correspondiente no haya sido revocada o no renovada.

2. Haber obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior cuando menos de 5 millones de pesos.

3. Auditar sus estados financieros.

4. Presentar un informe respecto de los donativos que se otorguen a organizaciones o fideicomisos que no tengan el carácter de donatarias autorizadas que se dediquen a realizar labores de rescate y reconstrucción ocasionados por desastres naturales.

5. No otorgar donativos a partidos políticos, sindicatos, instituciones religiosas o de gobierno.

6. Presentar un listado con el nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de las organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con la autorización para recibir donativos a las cuales se les otorgó el donativo.

b) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos, a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán cumplir con lo siguiente:

1. Estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

2. Comprobar que han efectuado operaciones de atención de desastres, emergencias o contingencias por lo menos durante 3 años anteriores a la fecha de recepción del donativo.

3. No haber sido donataria autorizada a la que se le haya revocado o no renovado la autorización.

4. Ubicarse en alguno de los municipios o en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de las zonas afectadas por el desastre natural de que se trate.

5. Presentar un informe ante el Servicio de Administración Tributaria, en el que se detalle el uso y destino de los bienes o recursos recibidos, incluyendo una relación de los folios de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y la documentación con la que compruebe la realización de las operaciones que amparan dichos comprobantes.

6. Devolver los remanentes de los recursos recibidos no utilizados para el fin que fueron otorgados a la donataria autorizada.

7. Hacer pública la información de los donativos recibidos en su página de Internet o, en caso de no contar con una, en la página de la donataria autorizada.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de esta fracción.

Capítulo III
De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento

Artículo 25. Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.

La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 de marzo de 2020.

Artículo 26. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresividad.

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Artículo 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores lo siguiente:

A. El Presupuesto de Gastos Fiscales, a más tardar el 30 de junio de 2020, que comprenderá los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2021 en los siguientes términos:

I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el Erario Federal.

II. La metodología utilizada para realizar la estimación.

III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida.

IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso.

V. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales.

B. Un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, a más tardar el 30 de septiembre de 2020, en el que se deberá señalar, para cada una la siguiente información:

I. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de nacionales.

II. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de extranjeros.

III. Ingresos por donativos recibidos en especie de nacionales.

IV. Ingresos por donativos recibidos en especie de extranjeros.

V. Ingresos obtenidos por arrendamiento de bienes.

VI. Ingresos obtenidos por dividendos.

VII. Ingresos obtenidos por regalías.

VIII. Ingresos obtenidos por intereses devengados a favor y ganancia cambiaria.

IX. Otros ingresos.

X. Erogaciones efectuadas por sueldos, salarios y gastos relacionados.

XI. Erogaciones efectuadas por aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y jubilaciones por vejez.

XII. Erogaciones efectuadas por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

XIII. Gastos administrativos.

XIV. Gastos operativos.

XV. Monto total de percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos.

El reporte deberá incluir las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los conceptos contenidos en los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en su Reglamento.

C. Para la generación del reporte a que se refiere el Apartado B de este artículo, la información se obtendrá de aquélla que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración de las personas morales con fines no lucrativos correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La información sobre los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos a que se refiere el Apartado B de este artículo, se obtendrá de los datos reportados a más tardar el 31 de julio de 2020, en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a que se refiere el artículo 82, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se entenderá por gastos administrativos y operativos lo siguiente:

I. Gastos administrativos: los relacionados con las remuneraciones al personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento y conservación, los impuestos y

derechos federales o locales, así como las demás contribuciones y aportaciones que en términos de las disposiciones legales respectivas deba cubrir la donataria siempre que se efectúen en relación directa con las oficinas o actividades administrativas, entre otros. No quedan comprendidos aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

II. Gastos operativos: aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

La información a que se refieren los Apartados B y C de este artículo, no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2o., fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Artículo 28. En el ejercicio fiscal de 2020, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente:

I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes.

II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.

III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización.

IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años. Se deberá entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de Diputados.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020.

Segundo. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se refiere el informe que, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha rendido el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2019.

Tercero. Para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se modifique la denominación de alguna dependencia o entidad o las existentes desaparezcan, se entenderá que los ingresos estimados para éstas en la presente Ley corresponderán a las dependencias o entidades cuyas denominaciones hayan cambiado o que absorban las facultades de aquéllas que desaparezcan, según corresponda.

Cuarto. Durante el ejercicio fiscal de 2020 el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013 continuará destinándose en los términos del citado precepto.

Quinto. Durante el ejercicio fiscal 2020 las referencias que en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, así como en los artículos 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos se entenderán hechas también al Servicio de Administración Tributaria.

Sexto. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales la información sobre los ingresos excedentes que, en su caso, se hayan generado con respecto al calendario de ingresos derivado de la Ley de Ingresos de la Federación a que se refiere el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En este reporte se presentará la comparación de los ingresos propios de las entidades paraestatales bajo control presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado, así como del Gobierno Federal. En el caso de éstos últimos se presentará lo correspondiente a los ingresos provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Séptimo. Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado. Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas.

Para efectos de lo anterior, los aprovechamientos provenientes de los enteros que realicen las entidades federativas y municipios en términos del presente transitorio, respecto de ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor de las obligaciones de reintegro a la Tesorería de la Federación establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras, siempre y cuando dichas disponibilidades hayan estado depositadas en cuentas bancarias de la entidad federativa y/o municipio.

Octavo. En el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria deberá publicar estudios sobre la evasión fiscal en México. En la elaboración de dichos estudios deberán participar instituciones académicas de prestigio en el país, instituciones académicas extranjeras, centros de investigación, organismos o instituciones nacionales o internacionales que se dediquen a la investigación o que sean especialistas en la materia. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio fiscal de 2020.

Noveno. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante el ejercicio fiscal 2020 y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requerirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan. La aplicación de los pagos a que se refiere este párrafo, no estará supeditada a que se hayan suscrito, se suscriban o se actualice convenio alguno con las entidades federativas y municipios con el referido Instituto.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de los pagos a que se refiere el párrafo anterior con cargo a las participaciones y transferencias federales, garantizando que las entidades federativas cuenten con solvencia para la atención de sus necesidades primordiales.

El Instituto, conforme a los modelos autorizados por su órgano de gobierno, podrá suscribir con las entidades federativas y, en su caso, los municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales que correspondan, los convenios para la regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos. El plazo máximo para cubrir los pagos derivados de dicha regularización será de 15 años. Asimismo, en adición a lo previsto en artículo 22 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el marco de la celebración de los referidos convenios, dicho Instituto deberá otorgar descuentos en los accesorios generados a las contribuciones adeudadas excepto los correspondientes a las cuotas y aportaciones que deban ser depositadas en las cuentas individuales de los trabajadores. Para tal efecto, deberán adecuar los convenios de incorporación voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para incluir en el mismo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 204 de dicha Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá aceptar como fuente de pago bienes inmuebles que se considerarán como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse a las cuentas individuales de los trabajadores. El Instituto determinará si los bienes a los que se refiere este párrafo, resultan funcionales para el cumplimiento de su objeto, asegurándose que se encuentren libres de cualquier gravamen o proceso judicial y que el monto del adeudo no sea mayor al valor del avalúo efectuado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. En estos casos, la entidad federativa, municipio, dependencia o entidad del gobierno local, según corresponda, deberá cubrir los gravámenes y demás costos de la operación respectiva, los cuales no computarán para el cálculo del importe del pago.

Décimo. Las dependencias y entidades que coordinen la operación de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos, salvo los que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concentrarán en la Tesorería de la Federación, en términos de las disposiciones específicas que emita, los recursos públicos disponibles no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 en dichos vehículos, salvaguardando en todo momento los derechos de terceros.

Los aprovechamientos que se generen se destinarán a gasto de inversión así como a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Los programas de inversión deberán registrarse en la cartera de inversión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior no será obligatorio a los instrumentos jurídicos que por disposición expresa de ley los recursos públicos deban permanecer en el patrimonio o afectos a los mismos, así como a aquéllos en materia de pensiones y seguridad social, desastres naturales, infraestructura, estabilización de ingresos incluyendo al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y aquéllos que sirvan como mecanismo de garantía o fuente de pago de obligaciones a cargo del Gobierno Federal o sus entidades paraestatales.

Dicha dependencia deberá señalar en los informes trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas, sobre el monto y el destino que dé a los recursos utilizados conforme a lo previsto en este párrafo.

Asimismo, las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, un informe de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos susceptibles de extinguirse en términos de las disposiciones aplicables, lo anterior a efecto de que durante el ejercicio fiscal 2020 se lleven a cabo los actos necesarios para la extinción de dichos vehículos.

Décimo Primero. Los contratos de fideicomiso y mandato públicos deberán prever que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá disponer en cualquier momento del patrimonio de éstos, asimismo, deberán establecer la obligación de las instituciones fiduciarias o mandatarias, de concentrar trimestralmente en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos, los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado para el cumplimiento de su objeto, salvo disposición de carácter general en contrario.

Las instituciones fiduciarias o mandatarias de fideicomisos, mandatos o análogos públicos, deberán concentrar de forma trimestral en la Tesorería de la Federación los intereses generados por dichos instrumentos financieros, salvo aquéllos que

impliquen el pago de gastos de operación de dichos vehículos, bajo la naturaleza de aprovechamientos, y se destinarán a gasto en salud o de inversión en infraestructura, lo anterior con excepción de aquellos vehículos financieros que por disposición expresa de ley, decreto o determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dichos recursos deban permanecer afectos a su patrimonio o destinados al objeto correspondiente. Para efectos de lo anterior, las dependencias coordinadoras de dichos vehículos deberán realizar los actos necesarios para modificar en el primer semestre del ejercicio fiscal los instrumentos jurídicos respectivos.

Décimo Segundo. Se instruye a la institución fiduciaria del fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria para que durante el mes de marzo del presente ejercicio, concentre en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos los recursos que integran el patrimonio fideicomitido a esa fecha a fin de destinarlos, mediante el mecanismo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a proyectos de inversión de infraestructura económica para la construcción, ampliación o rehabilitación de puertos, así como para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros que mejoren la conectividad entre los puertos.

Para efectos de lo anterior, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el citado fideicomiso no podrá asumir compromisos adicionales y únicamente podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción, la cual deberá formalizarse a más tardar en el mes de junio del presente ejercicio fiscal. Las obligaciones asumidas que se tengan con terceros, serán cubiertas con cargo al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Décimo Tercero. Durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2020, la institución fiduciaria del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados deberá concentrar en la Tesorería de la Federación los recursos remanentes previstos en su patrimonio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, o bien, para los destinos establecidos en el Séptimo transitorio de esta Ley.

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Ciudad de México, a

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

*JSI

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Declaratoria de Publicidad
Octubre 18 del 2019

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, remitida por el Ejecutivo Federal a esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento de los artículos 74, fracción IV de dicho ordenamiento, 7o. de la Ley de Planeación y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, se da cuenta que a esta Comisión Legislativa que suscribe, le han sido turnadas diversas iniciativas en igual materia, suscritas por legisladores de esta Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, mismas que se describen en el apartado de ANTECEDENTES del presente instrumento.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44, 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 67, 68, 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, 168, 171, 176, 177, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocaron al análisis, discusión y valoración de las iniciativas a que se hace referencia.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la deliberación que realizaron los integrantes de esta Comisión Legislativa, se somete a la consideración de esa Honorable Asamblea, el siguiente:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DICTAMEN

METODOLOGÍA.

I. En el capítulo denominado "ANTECEDENTES", se describe el proceso legislativo seguido desde la presentación de las iniciativas objeto del presente dictamen, hasta su turno a esta Comisión, así como los demás trabajos realizados en torno al análisis del tema que nos ocupa.

II. En el capítulo "CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS", se hace referencia a las razones, situación y circunstancias de los diversos proponentes para fundamentar su postura; así como la valoración de la técnica legislativa adoptada en las iniciativas en estudio.

III. En el Capítulo de "RELATORÍA DEL PARLAMENTO ABIERTO SOBRE EL ANÁLISIS DEL PAQUETE ECONÓMICO 2020", se citan las opiniones realizadas por los ponentes durante las mesas de trabajo, llevadas a cabo del 2 al 8 de octubre de 2019, en torno al tema que nos ocupa.

IV. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN", se explican los argumentos jurídicos, doctrinales y pragmáticos en las que se sustentan las consideraciones del presente dictamen.

ANTECEDENTES.

1. Con fecha 8 de septiembre de 2019, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento de los artículos 74, fracción IV de dicho ordenamiento, 7o. de la Ley de Planeación y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

2. En igual fecha, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la Iniciativa citada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen, mediante oficio número D.G.P.L.64-II-1-1044.

3. El 12 de septiembre de 2019, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público a fin de realizar el análisis del primer Informe de Gobierno del presidente de la República, en materia económica, y dar cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2020", a través del cual se estableció el procedimiento para la comparecencia de dicho funcionario.

4. El 24 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en la cual se aprobó, entre otros temas, la realización de un Parlamento Abierto, así como la comparecencia de funcionarios de la Administración Pública Federal, para el análisis del paquete económico para 2020.

5. El 26 de septiembre de 2019, compareció el C. Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, en la que tuvo una presentación de hasta por cuarenta y cinco minutos para referirse al paquete económico 2020, una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios, hasta por diez minutos en orden ascendente, dos rondas para preguntas y réplicas de los grupos parlamentarios, cada uno en orden ascendente.

6. En igual fecha, la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, aprobó el "Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a fin de regular la reunión de trabajo con funcionarios de la Administración Pública Federal para el análisis y discusión del paquete económico correspondiente al ejercicio fiscal de 2020".

7. EL 27 de septiembre de 2019, fue publicada en la página principal del portal

de internet de la Cámara de Diputados, la "C O N V O C A T O R I A PARLAMENTO ABIERTO SOBRE EL ANÁLISIS DEL PAQUETE ECONÓMICO PARA 2020", mediante la cual la Comisión de Hacienda y Crédito Público realizó una invitación a especialistas, académicos, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, consejos, Gobernadores, Alcaldes y demás público en general, interesados en participar en el parlamento abierto con motivo del análisis al paquete económico para 2020, a llevarse a cabo del 2 al 8 de octubre de 2019.

8. El 1 de octubre de 2019, compareció el C. Gabriel Yorio González, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Acuerdo Referido, en la que tuvo una presentación de 40 minutos para referirse al paquete económico 2020, dos rondas de preguntas de los grupos parlamentarios, hasta por cinco y tres minutos, respectivamente, cada una en orden ascendente y dos respuestas por parte del Subsecretario de 15 minutos cada una.

9. Del 2 al 8 de octubre de 2019, se llevó a cabo el parlamento abierto con motivo del análisis al paquete económico para 2020, con la participación plural de 74 ponentes, entre, funcionarios públicos, legisladores, especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y empresarios, así como más de 200 personas registradas que asistieron de manera presencial.

10. En Sesión de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de fecha 23 de abril de 2019, los Diputados Jorge Arturo Espadas Galván y Elías Lixa Abimerhi y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.

11. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio No. D.G.P.L.64-II-2-641 de fecha 23 de abril de 2019 turnó la citada Iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen

correspondiente.

12. Esta Comisión dictaminadora solicitó prórroga para la elaboración del dictamen el día 27 de mayo de 2019 mediante oficio CHCP/313/2019 a la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.

13. Mediante Oficio No. D.G.P.L. 64-II-2-787 de fecha 27 de mayo de 2019 la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, autorizó a esta Comisión Dictaminadora prórroga hasta el 31 de octubre de 2019 para dictaminar la iniciativa en comento.

14. En Sesión del Senado de la República de fecha 29 de abril de 2019, el Senador Gustavo Madero Muñoz con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. En fecha 03 de septiembre se dictó turno a la H. Cámara de Diputados, en términos de los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado de la República, remitida mediante el oficio de Mesa Directiva de la Cámara de Senadores No. DGPL-2P1A.-8093.

15. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio No. D.G.P.L. 64-II-2-0894 de fecha 03 de septiembre de 2019 turnó la citada Iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, recibida en esta comisión dictaminadora el día 04 de septiembre de 2019, para su análisis y dictamen correspondiente.

Se precisa que por tratarse de igual materia y tener el mismo tema en común, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el artículo 81, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, incorpora en el dictamen las iniciativas antes referidas. Sin embargo, se toma como base para la integración del presente instrumento, la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

De igual forma, se enfatiza que los integrantes de esta Comisión dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de contar con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de las citadas iniciativas, expresar sus consideraciones de orden general y específico sobre ellas e integrar el presente dictamen, entre otros, la celebración de un parlamento abierto sobre el análisis del paquete económico para 2020, celebrado del 2 al 8 de octubre de 2019, así como la realización de mesas técnicas de trabajo al seno de la Comisión.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

1. **Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, suscrita por el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.**

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, presentada por el Ejecutivo Federal no contempla nuevos impuestos, ni aumentos a los vigentes.

En los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) registre un crecimiento económico anual de entre 1.5 y 2.5 por ciento. Para efectos de las estimaciones de finanzas públicas, se propone utilizar un crecimiento puntual del PIB para 2020 de 2.0 por ciento; y un tipo de cambio del peso respecto al dólar de los Estados Unidos de América de 20.0 pesos por dólar, y la plataforma de producción de petróleo crudo, en 1,951 miles de barriles diarios (mbd) con la estimación del precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación de 49.0 dólares de los Estados Unidos de América por barril.

Con base en lo anterior, el Ejecutivo Federal estima, en la Iniciativa propuesta de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, obtener un total de 6 billones 96 mil 335.8 millones de pesos (mdp) por concepto de ingresos estimados, de los cuales 3 billones 499 mil 425.8 mdp corresponden a impuestos; 374 mil 3.2 mdp a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; 44.8 mdp a

Contribuciones de Mejoras; 51 mil 671.8 mdp a Derechos; 10 mil 95.3 mdp a Productos; 98 mil 674.4 mdp a Aprovechamientos; 1 billón 65 mil 166.0 mdp a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos; 412 mil 797.7 mdp a Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y 584 mil 456.8 a Ingresos Derivados de Financiamientos. Asimismo, en la Iniciativa propuesta se estima una recaudación federal participable por 3 billones 389 mil 84.3 mdp.

Por otra parte, la Iniciativa sujeta a dictamen propone mantener la disposición que faculta al Ejecutivo Federal para otorgar, durante 2020, los beneficios fiscales necesarios a efecto de dar debido cumplimiento a las resoluciones que se deriven de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

Asimismo, el Ejecutivo Federal señala que el 15 de julio de 2019, Petróleos Mexicanos (PEMEX) remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información a que se refiere la fracción I del artículo 97 de la Ley de Petróleos Mexicanos, y que con base en esa información y su análisis, la SHCP propuso al Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, establecer que PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias no paguen un dividendo estatal. Dicha propuesta, fue opinada favorablemente por el mencionado Comité en su sesión celebrada el 21 de agosto del presente año.

De igual manera, el Ejecutivo Federal señala que para realizar la propuesta referida en el párrafo anterior, la SHCP se basó principalmente en los siguientes puntos: (i) en lo que resta de 2019 y potencialmente durante 2020, continuará un entorno poco favorable en las cotizaciones en el mercado de los hidrocarburos; (ii) PEMEX enfrenta diversos retos en lo que respecta a la comercialización de productos en el mercado interno, y (iii) la empresa está realizando importantes inversiones con el fin de estabilizar y, posteriormente, elevar la plataforma de producción.

Por otra parte, en relación al Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Petróleos Mexicanos, que establece que el dividendo estatal que el Estado determine para el ejercicio fiscal 2016 será, como mínimo, equivalente al 30 por ciento de los ingresos después de impuestos que generen PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias durante el año 2015 por las actividades sujetas a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. El nivel mínimo señalado se reducirá para los siguientes

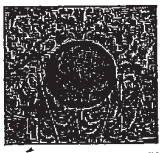
ejercicios hasta alcanzar un 15 por ciento en el año 2021 y 0 por ciento en el año 2026, el Ejecutivo Federal resalta que dichas actividades se realizan por la empresa productiva subsidiaria Pemex Exploración y Producción y que para 2019, no se prevé que tanto dicha empresa productiva subsidiaria en forma particular, como PEMEX en forma consolidada generen utilidades que fueran susceptibles de entregar al Gobierno Federal mediante un dividendo estatal.

En ese orden de ideas, el Ejecutivo Federal destaca que para determinar que PEMEX y sus empresas productivas del Estado no paguen un dividendo estatal, se utilizó el concepto de ingresos netos, calculados como ingresos menos costos, ya que una vez descontados los impuestos y derechos, esa es la medida de las utilidades que cualquier empresa tiene disponibles para repartir como dividendo. En ese sentido, el Ejecutivo Federal consideró que de aplicar un dividendo estatal sobre los ingresos sin considerar los costos, menos los impuestos y derechos, se le estarían retirando recursos a la empresa sin tomar en cuenta su situación financiera real.

En otro contexto, expone el Ejecutivo Federal, que respecto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la información a que refiere la fracción I del artículo 99 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad fue remitida por su Director de Finanzas a la SHCP, el 31 de julio de 2019. En la Iniciativa en estudio, el Ejecutivo Federal manifiesta que del análisis de dicha información se desprende que la CFE estima un resultado positivo al cierre del ejercicio fiscal 2019 debido principalmente a: (i) menores costos de generación, asociados a precios relativamente bajos de los combustibles; (ii) menores pagos en el mercado eléctrico mayorista, y (iii) las transferencias que el Gobierno Federal realiza a dicha Comisión.

No obstante lo anterior, el Ejecutivo Federal también resalta que si se excluyeran las transferencias del Gobierno Federal, el balance financiero de la CFE sería negativo, por lo que propone que la CFE y sus empresas productivas subsidiarias no paguen un dividendo estatal a favor del Gobierno Federal. Esto, a fin de que la CFE cuente con recursos necesarios para cubrir sus compromisos e inversiones en proyectos productivos, enfocados principalmente en Generación, Transmisión y Distribución de energía eléctrica.

Por otro lado, el Ejecutivo Federal propone excluir de la meta del balance presupuestario señalado en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto de inversión equivalente a 2.0 por ciento del PIB para evaluar la contribución del gasto al equilibrio presupuestario, tal inversión podrá ser además de la de PEMEX, la de la CFE y la del Gobierno Federal. En ese sentido, el titular del Ejecutivo Federal refiere que la regla fiscal señalada contribuye a una evolución ordenada de la deuda pública en el largo plazo.

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal indica que la inversión de las empresas productivas del Estado y la del Gobierno Federal tienen un tratamiento similar, sin que se pongan en riesgo los niveles de financiamiento del gasto público ante las decisiones de inversión de las empresas productivas del Estado, las cuales deberán operar con criterios de eficiencia y rentabilidad, lo que fortalece la posición de las mismas y garantiza un nivel de inversión en el sector que permitirá incrementar la calidad y oferta de su producción, así como reducir el costo de la energía para los mexicanos en los siguientes años.

En otro orden de ideas, el Ejecutivo Federal propone en la Iniciativa sujeta a análisis, que al igual que en años anteriores, se mantenga en el artículo 1o. de la Ley cuya emisión se plantea, la disposición que faculta al Gobierno Federal para continuar con la atención de la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo; a fin de extender la labor prevista en el artículo Segundo Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo de apoyo a sus ahorradores", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de enero de 2004.

En ese sentido, el Titular del Ejecutivo Federal en la Iniciativa de Ley sujeta a dictamen, plantea mantener que el producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados que se vinculen a los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del Decreto citado en el párrafo que antecede, se utilizará para restituir al Gobierno Federal los recursos públicos destinados al resarcimiento de los ahorradores afectados y, previo a su reintegro, a cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las acciones relativas a la transmisión, administración o enajenación de dichos bienes y derechos, a fin de atender la problemática social de los ahorradores indicados.

En otro tenor, en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal se expone la conveniencia de continuar con el apoyo a las operaciones que las entidades federativas están implementando para fortalecer su capacidad financiera, por lo que se propone conservar en el artículo 1o. de dicha Iniciativa, la posibilidad de emplear los recursos que ingresen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, durante el ejercicio fiscal de 2020, para cubrir las obligaciones pecuniarias derivadas de la implementación del esquema de potenciación de recursos de dicho Fondo.

De igual manera, tal como se ha venido planteando en ejercicios fiscales anteriores, el Ejecutivo Federal propone dar continuidad a la disposición que señala que hasta un 25 por ciento de las aportaciones que corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, puedan servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que dichas entidades contraigan con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la SHCP en el Registro Público Único previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Ello, con la finalidad de una mayor agilidad para la aplicación de los recursos.

En ese mismo sentido, en la Iniciativa que se dictamina, se propone dar continuidad a la obligación de la SHCP de reportar la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2020, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por otro lado, manifiesta el Ejecutivo Federal en la Iniciativa sujeta a dictamen que la meta de déficit financiero de PEMEX para el ejercicio fiscal 2020 que se estableció en el artículo 5 del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 asciende a 62 mil 623.5 mdp y considera un monto adicional de 30 mil 771.5 mdp asociado a la disminución de los ingresos propios de PEMEX

por la reducción del precio del petróleo de 55 dólares por barril (dpb) a 49 dpb.

En virtud de lo anterior, para reforzar el marco de responsabilidad fiscal y dado que el aumento en el déficit financiero de PEMEX está asociada a la posibilidad de una disminución súbita en el precio del petróleo con respecto a la prevista en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, el Ejecutivo propone incluir un ajuste a la meta del déficit financiero de la empresa productiva, para que en caso de que durante el ejercicio fiscal se obtengan ingresos excedentes derivados de un mayor precio del petróleo al previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 entre el rango de 49.01 dpb y 55.00 dpb, estos recursos no se destinen a cubrir ampliaciones de gasto sino que se reflejen en una mejora en la meta prevista, en su caso, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 del déficit financiero de PEMEX.

Por otra parte, en el artículo 2o. de la Iniciativa sujeta a dictamen, el Ejecutivo Federal plantea autorizar un monto de endeudamiento neto interno hasta por 532 mil mdp, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública, así como un monto de endeudamiento neto externo de 5 mil 300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal.

De igual forma, se propone en el artículo 2o. de la Iniciativa de mérito, mantener la autorización que ya existe de manera permanente en la Ley Federal de Deuda Pública para que el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, emita valores y contrate empréstitos con el objeto de canjear o refinanciar obligaciones del erario federal.

Ahora bien, la Iniciativa sujeta a análisis propone conservar la definición del déficit por intermediación financiera como el Resultado de Operación que considera la Constitución Neta de Reservas Crediticias Preventivas, fijándolo para ello en un monto conjunto de cero pesos para el ejercicio fiscal de 2020, para la banca de desarrollo, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los fondos de fomento y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

En otro tenor, en la Iniciativa que se dictamina, se propone mantener, para efectos del régimen especial en materia de deuda que se encuentra establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que las solicitudes de endeudamiento de ambas empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias continúen sometiéndose a la consideración del Congreso de la Unión de manera separada a la solicitud de endeudamiento para el Gobierno Federal y el resto de las entidades del sector público federal.

En ese orden de ideas, la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, contiene en el citado artículo 2o. la autorización de un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil mdp y por endeudamiento neto externo de hasta 1 mil 250 millones de dólares de los Estados Unidos de América a PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias, así como la posibilidad de contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno o externo, respectivamente, sea menor a los montos antes señalados, y cumpla con la meta de balance financiero aprobado.

Asimismo, se propone en la Iniciativa de Ley sujeta a dictamen, que se autorice un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 835 mdp y por endeudamiento neto externo de 508 millones de dólares de los Estados Unidos de América a la CFE y sus empresas productivas subsidiarias, así como la posibilidad de contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno o externo, respectivamente, sea menor a los montos antes señalados. Dicho endeudamiento deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

Adicional a lo anterior, el Ejecutivo Federal plantea en el artículo 2o. de la Iniciativa de mérito que el cómputo de los montos de endeudamiento autorizados a CFE y PEMEX se realice en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el DOF, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

Por otra parte, el Ejecutivo Federal propone continuar con la obligación a cargo de

la SHCP de informar al Congreso de la Unión de forma trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento.

En otro tenor, en el artículo 3o. de la Iniciativa del Ejecutivo Federal sujeta a dictamen, se propone autorizar para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil mdp para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020. De igual manera, se plantea autorizar la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar operaciones de canje, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública de la Ciudad de México, debiendo sujetarse el ejercicio del monto autorizado a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Así también, el Ejecutivo Federal plantea en la Iniciativa de la Ley cuya aprobación se somete al Congreso de la Unión, establecer en el artículo 4o., el monto de los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la CFE por un total de 257 mil 138.2 mdp, de los cuales 100 mil 344.1 mdp corresponden a inversión directa y 156 mil 794.1 mdp a inversión condicionada.

Ahora bien, en relación con el artículo 5o. de la Iniciativa que se dictamina, el Ejecutivo Federal propone la incorporación de un nuevo Proyecto de Infraestructura Productiva de Largo Plazo de inversión directa denominado Baja California Sur VI, que consiste en la construcción de una Central de Combustión Interna, cuyo propósito es contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica esperada en el Área Baja California Sur, mediante la generación de 42.3 MW de energía.

Derivado de lo anterior, en el citado artículo 5o. de la presente Iniciativa, se propone para el ejercicio fiscal 2020, autorizar al Ejecutivo Federal a contratar un nuevo proyecto de inversión financiada de la CFE en términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV de su Reglamento, por un total de 2 mil 760.7 mdp que corresponde al proyecto de inversión directa mencionado en el párrafo que antecede.

Por otra parte, en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal se plantea mantener en el artículo 7o. la facultad que tiene la SHCP para establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos mensuales provisionales del derecho por la utilidad compartida.

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal considera oportuno conservar la obligación por parte de la SHCP de informar y explicar las modificaciones a los ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, que impacten en los pagos establecidos, conforme al segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley que se plantea, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de esta Cámara de Diputados.

En el mismo sentido, el Ejecutivo Federal en la Iniciativa que se analiza, propone conservar la disposición que contempla que en el caso de que la SHCP en uso de las facultades otorgadas en la Ley, cuya aprobación se somete a esta Soberanía, establezca, modifique o suspenda pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales, éstos deberán ser transferidos y concentrados en la Tesorería de la Federación (TESOFE) por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), a más tardar el día siguiente de su recepción, de conformidad con la legislación aplicable. Lo anterior, con la finalidad de asegurar el debido cumplimiento a las reglas de concentración.

En otro orden de ideas, el Ejecutivo Federal plantea en la Iniciativa sujeta a dictamen que se continúe registrando como inversión, los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de PEMEX, mismos que anteriormente eran considerados como proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

Ahora bien, en el artículo 8o. de la Iniciativa sujeta a análisis, el Ejecutivo Federal plantea conservar en los términos del ejercicio fiscal anterior la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.

En ese sentido, la tasa de recargo se mantendría en 0.98 por ciento sobre los saldos insolutos, mientras que las tasas aplicables en el pago a plazos serían de 1.26 por ciento para plazos menores a un año; de 1.53 por ciento para los plazos entre uno y dos años, y de 1.82 por ciento para los plazos mayores a dos años.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

En otro contexto, en el artículo 9o. de la Iniciativa sujeta a dictamen, el Ejecutivo Federal plantea mantener la disposición por la que se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas y los municipios, incluyendo también a los organismos públicos descentralizados de las propias entidades federativas, por la otra, en los cuales se finiquiten adeudos entre ellos.

Además, el Ejecutivo Federal propone, como en ejercicios fiscales anteriores, ratificar los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación y las entidades federativas, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal.

En otro orden de ideas, en la Iniciativa que se dictamina se propone en los artículos 10 y 11, al igual que en años anteriores, conservar la facultad de la SHCP para autorizar los montos de los productos y aprovechamientos que cobre la Administración Pública Federal Centralizada, así como en su caso, autorizar el destino específico de los mismos.

Así también, el Ejecutivo Federal en la Iniciativa en estudio plantea la permanencia del uso de medios de identificación electrónica en las solicitudes que realicen las dependencias que sometan a aprobación de la SHCP los montos de los aprovechamientos y productos, así como la autorización que para tales efectos expida la SHCP, por medio de la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o por medio de certificados digitales, equipos o sistemas automatizados, para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

De igual forma, en la Iniciativa que se somete a esta Soberanía, el Ejecutivo Federal plantea dar continuidad a la disposición que establece que cuando la SHCP obtenga un aprovechamiento a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por

dicha Dependencia, ya sea de los ingresos que obtengan o con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal o tratándose de recuperaciones de capital o del patrimonio, los recursos correspondientes puedan destinarse por la propia Secretaría prioritariamente a la capitalización de dichas entidades, incluyendo la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o al fomento de acciones que permitan cumplir con su mandato, o bien, a programas y proyectos de inversión.

En ese sentido, en la Iniciativa que se dictamina, el Ejecutivo Federal propone establecer que cuando la SHCP obtenga un aprovechamiento a cargo de cualquier otra entidad paraestatal distinta de las señaladas en el párrafo anterior, dichos ingresos serán enterados a la TESOFE bajo dicha naturaleza, a efecto de que sean destinados a programas presupuestarios que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal, en materia de destino de ingresos, propone en la Iniciativa sujeta a dictamen, que los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintas de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos puedan destinarse a gasto de inversión en infraestructura.

Asimismo, el Ejecutivo Federal en la Iniciativa sujeta a dictamen, propone la permanencia de la disposición que establece que los aprovechamientos generados por multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital que se regulen en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en la Ley Federal de Competencia Económica y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de la autorización de la SHCP para su cobro.

En ese contexto, el Ejecutivo Federal plantea mantener la disposición que establece que el prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público de la Federación, deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos, en los casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos correspondientes en los plazos que para esos efectos se fijen,

así como informar a la SHCP los montos y conceptos que haya percibido por concepto de dichos aprovechamientos.

De igual manera, el Ejecutivo Federal somete a consideración de este Congreso de la Unión dar continuidad al esquema de actualización del monto de los productos y aprovechamientos que se cobren de manera regular, en el cual se utiliza un factor que se aplicará desde la última modificación que se hubiere efectuado hasta que se emita la autorización correspondiente.

Por otro lado, en el artículo 11 de la Iniciativa que se dictamina, el Ejecutivo Federal propone conservar el mecanismo que el Instituto de Administración de Bienes y Activos (IABA) aplica al producto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la TESOFE, por el que puede descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias de la misma entidad transferente. Además, el Ejecutivo Federal plantea conservar la disposición que contempla al Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Entidad Transferente directa al IABA, en términos de la Ley de Tesorería de la Federación.

Aunado a lo anterior, en la Iniciativa del Ejecutivo Federal sujeta a análisis se plantea que los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el IABA respecto de los bienes transferidos por el SAT que pasan a propiedad del Fisco Federal de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, se les deberá realizar el descuento de los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos provenientes del SAT, y del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno del IABA, se depositará en un fondo que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la TESOFE. También, se plantea dar continuidad a la aplicación de un mecanismo como el descrito para los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, para el pago de resarcimientos de bienes de dicha procedencia, que por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional, el IABA deba realizar, precisando que lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Adicionalmente, con el objeto de brindar mayor transparencia, el Ejecutivo Federal considera conservar en la Iniciativa de mérito, la obligación del IABA de remitir un informe semestral con el desglose de las transferencias de bienes del Gobierno

Federal de las Entidades Transferentes (TESOFE o SAT).

De igual forma, el Ejecutivo Federal somete a consideración del Congreso de la Unión conservar en el artículo 11, la disposición relativa a la posibilidad de destinar hasta en un 100 por ciento, los ingresos netos provenientes de enajenaciones realizadas por el IABA para financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente o para el pago de los créditos que hayan sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, precisando que lo anterior no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados y que se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

En ese mismo orden de ideas, el Ejecutivo Federal propone en la Iniciativa que se dictamina, establecer en el citado artículo 11 que el destino de los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes en proceso de extinción de dominio, y de aquéllos sobre los que sea declarada la extinción de dominio y de sus frutos, así como su monetización en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, serán destinados a una cuenta especial en los términos que establece el artículo 239 de la Ley antes referida, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 234 y 237 del mismo ordenamiento, con el fin de dar certeza jurídica y viabilidad a dicho destino.

En otro contexto, el Ejecutivo Federal plantea conservar en el artículo 12 de la Iniciativa de Ley sujeta a análisis, que los derechos y aprovechamientos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, así como los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y de la aplicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se concentren en la TESOFE a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción.

En ese sentido, el Ejecutivo Federal considera adecuado conservar en el artículo 12 de la Ley cuya emisión se plantea, la obligación de las entidades sujetas a control directo, los poderes Legislativo y Judicial, y los órganos a los que la Constitución Federal otorga el carácter de autónomos, de efectuar el registro de los ingresos que obtengan, de conservar la documentación comprobatoria de dichos registros a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal y, en su caso, de

concentrar en la TESOFE en tiempo y forma.

Aunado a lo anterior, en la Iniciativa sujeta a dictamen se propone conservar en el artículo 12 la disposición que establece que los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y formación para el trabajo del sector público, formarán parte de su patrimonio, y serán administrados por las propias instituciones educativas para ser destinadas a sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, debiendo concentrarse en la TESOFE, con la posibilidad de establecer un fondo revolvente que garantice la entrega y aplicación de los recursos en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de su concentración.

Por otra parte, en la Iniciativa sujeta a análisis, el Ejecutivo Federal propone conservar la medida que establece que los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, se destinarán a las entidades o empresas productivas del Estado que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza.

En ese orden de ideas, en la Iniciativa de Ley presentada por el Ejecutivo Federal se plantea establecer que los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato análogo, así como aquellos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, deberán ser concentrados en la TESOFE bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según su origen, y se podrán destinar a los fines que determine la SHCP, salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento correspondiente.

De igual manera, se propone que los ingresos excedentes correspondientes a aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 6.62.01.04 del artículo 1o. de la Ley cuya emisión se plantea, por concepto de recuperaciones de capital, se destinen a objetivos que determine la SHCP a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo.

Ahora bien, el Ejecutivo Federal propone continuar, en el artículo 13 de la Iniciativa

sujeta a dictamen, con la obligación de enterar a la TESOFE, los ingresos que se recauden, hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, así como enterar o concentrar, según corresponda, los ingresos netos derivados de la mecánica de descuento de gastos tratándose de la enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades.

Así también, en la Iniciativa sujeta a dictamen se propone conservar la disposición que precisa que, tratándose de operaciones que le sean encomendadas al IABA en los términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se podrá descontar hasta un 7 por ciento, el cual será autorizado por su Junta de Gobierno, por concepto de gastos indirectos de operación, que se destinarán a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones y procedimientos de éste, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Del mismo modo, en la Iniciativa sujeta a análisis propone el Ejecutivo Federal que, respecto a la terminación de los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales y, a efecto de agilizar los mismos, prevalezca la disposición que permite al liquidador o responsable del proceso utilizar los recursos remanentes de los procesos de desincorporación concluidos, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, para el pago de los gastos y pasivos de los procesos que, al momento de la referida conclusión, sean deficitarios, para lo cual los recursos correspondientes deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica, sin que sea necesario concentrar dichos recursos en la TESOFE.

En ese orden de ideas, el Ejecutivo Federal en lo relativo a la propuesta de mantener la disposición que establece que los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, permanezcan afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación deficitarios, así como que, en aquellos casos en que se transmitan bienes y derechos a dicho Fondo, no se considere enajenación.

En ese contexto, el Ejecutivo Federal plantea la continuidad de la disposición

relativa a que los remanentes de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Asimismo, el Ejecutivo Federal propone mantener en el artículo 13 de la Iniciativa sujeta a análisis, la disposición que precisa que para concluir los procesos de desincorporación, se autoriza al IABA a utilizar los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, para sufragar las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, relativo a la atención de encargos bajo su administración, cuando éstos sean deficitarios, siempre que se cumplan con las directrices que al efecto se emitan al interior del organismo y cuente con la autorización de la Junta de Gobierno del IABA, previa aprobación de los órganos colegiados competentes.

Por otro lado, en la Iniciativa sujeta a dictamen, el Ejecutivo Federal propone establecer en el párrafo décimo segundo del artículo 13, que el producto de la enajenación de los bienes asegurados a favor del Gobierno Federal, incluyendo numerario, cuya administración y destino hayan sido encomendados al IABA en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se destine a un fondo en los términos del artículo 89 de la citada Ley, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 90, 92 y 93 del mismo ordenamiento.

Asimismo, en la Iniciativa en estudio se propone establecer que los ingresos provenientes de numerario y de la enajenación de bienes que realice el IABA, que hayan sido declarados abandonados por parte de las instancias competentes, distintos de los vehículos declarados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y que se concentren a la TESOFE, se considerarán aprovechamientos, destinándose al financiamiento de las operaciones del Instituto, en términos de lo previsto en el artículo 90 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 89, 92 y 93 de la referida Ley.

En otro orden de ideas, el Ejecutivo Federal en la Iniciativa que se somete a consideración de esta Soberanía, propone establecer en el artículo 13 de la Ley cuya emisión se plantea, que el destino del numerario decomisado y de los ingresos

provenientes de la enajenación de bienes decomisados en procedimientos penales federales, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y previa deducción de los gastos indirectos de operación que correspondan, se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, así como al Fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo u otras políticas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, con el propósito de armonizar lo establecido en los ordenamientos penales y fiscales, e incluso en resoluciones judiciales.

Adicionalmente, la Iniciativa sujeta a análisis, propone que los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, se integren al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley antes mencionada.

De la misma manera, se propone mantener, como en ejercicios fiscales anteriores, que los ingresos provenientes de la venta de vehículos declarados abandonados por la SCT y transferidos al IABA, se destinen de conformidad con el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Asimismo, se plantea mantener la disposición que permite que a los permisionarios se les cubran los adeudos generados hasta por el 30 por ciento de los remanentes de los ingresos antes mencionados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Por otra parte, en la Iniciativa que se dictamina, el Ejecutivo Federal propone en el artículo 14 seguir aplicando lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

En otro contexto, y con la finalidad de fomentar que los contribuyentes apliquen la autocorrección fiscal, la Iniciativa sujeta a análisis, plantea mantener en el artículo 15 la disminución en un 50 por ciento de las multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, en función del momento en el que el contribuyente efectúe la autocorrección de las mismas, con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en

exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación.

Igualmente y con el fin de atender el principio de equidad, el titular del Ejecutivo Federal reitera disminuir en un 40 por ciento, las multas por infracciones derivadas de incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las obligaciones de pago a los contribuyentes que se encuentren sujetos a revisión electrónica en términos del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación.

En otro contexto, en la Iniciativa sujeta a dictamen, el Ejecutivo Federal propone como en años anteriores dar continuidad a los estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), previstos en el artículo 16, apartado A, fracciones I a VI, esto es, se mantiene en las fracciones I a IV el estímulo fiscal a la adquisición e importación, para consumo final, del diésel, biodiesel y sus mezclas, que: i) se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos; ii) se usen en actividades agropecuarias o silvícolas; o iii) se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico.

En ese orden de ideas, el Ejecutivo Federal manifiesta que los estímulos referidos, excepto el previsto en la fracción III del apartado A del artículo 16, tienen como característica en común que, una vez determinados, son acreditables contra el impuesto sobre la renta (ISR); por lo que se propone que su acreditamiento proceda únicamente contra el ISR causado por el contribuyente en el ejercicio fiscal, de forma tal que no se aplique contra el ISR retenido a terceros, ya que en ese caso no se trata de un impuesto propio del beneficiario del estímulo y, por otro lado, que no se permita el acreditamiento contra los pagos provisionales que vaya realizando el contribuyente, debido a que cuando dichos pagos son mayores al ISR del ejercicio causado por el contribuyente o se obtenga pérdida fiscal, la devolución de los pagos provisionales o la compensación del saldo a favor implica una monetización de los estímulos mencionados, siendo que éstos deben tener como límite el ISR causado por el contribuyente.

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal propone dar continuidad al estímulo fiscal aplicable a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de

los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto.

De igual modo, el Ejecutivo Federal plantea en el artículo 16, Apartado A, fracción VI de la Iniciativa de Ley sujeta a dictamen, conservar el estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen combustibles fósiles en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes, cuando en dichos procesos no se combustionen ese tipo de combustibles, además, se establece la atribución de que el SAT podrá emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización de combustibles fósiles no sujetos a un proceso de combustión por tipos de industria; no obstante, se estima conveniente aclarar que el porcentaje mencionado se aplicará respecto de las cantidades de litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible, adquiridos en el mes de que se trate.

Tal como en años anteriores, en la Iniciativa sujeta a dictamen, se propone continuar con la exención del derecho de trámite aduanero, a las personas que importen gas natural, en virtud de que este combustible genera grandes beneficios económicos a sus usuarios, es de fácil transportación y genera menos contaminación.

Por otro lado, la Iniciativa que presenta el titular del Ejecutivo Federal propone conservar en el artículo 17, la disposición en la que se precisa que se deroguen aquellas disposiciones que contengan exenciones totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos o contribuciones federales distintos de los establecidos en leyes fiscales, incluyendo la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales y tratados internacionales.

De igual manera, el Ejecutivo Federal considera apropiado conservar en el citado artículo 17, la derogación de las disposiciones que establezcan un destino específico para los ingresos por concepto de productos, aprovechamientos o derechos distintos al previsto en las disposiciones de carácter fiscal, así como respecto de aquéllas que clasifiquen a los ingresos de las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados como ingresos excedentes del ejercicio en que se generen.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

En otro tenor, se propone en los artículos 18 y 19 de la Iniciativa de Ley sujeta a análisis, se dé continuidad al tratamiento y a la clasificación de los ingresos excedentes que generan las dependencias, entidades, órganos autónomos y poderes de la Unión a efecto de posibilitar su destino a la unidad generadora de los mismos.

Además, en el artículo 20 de la Iniciativa de Ley que se dictamina, el Titular del Ejecutivo Federal propone reiterar la disposición que establece que quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

En otro orden de ideas, el Ejecutivo Federal manifiesta en el artículo 21 de la Iniciativa de Ley que se analiza, que el régimen fiscal a los ingresos por intereses pagados a personas físicas por instituciones del sistema financiero se basa en una tasa de retención sobre el capital que da lugar al pago de los intereses. En ese sentido, la retención obtenida con dicha tasa constituye un pago provisional, debido a que los contribuyentes posteriormente en su declaración anual acumulan los intereses reales obtenidos en el ejercicio y acreditan el ISR retenido por las instituciones financieras.

En ese sentido, el Titular del Ejecutivo precisa que para la determinación de la tasa de retención a intereses pagados por el sistema financiero que efectúen pagos por intereses durante el ejercicio fiscal 2020, se determinó conforme a una metodología de cálculo que establece la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Dicha metodología integra la información correspondiente a los rendimientos promedio de los instrumentos públicos y privados, ponderados por el monto en circulación de cada instrumento, así como el promedio de la inflación mensual interanual observada, correspondiente al periodo febrero a julio de 2019. La ponderación por monto en circulación permite otorgar mayor peso a los instrumentos en los cuales la población invierte más, dando como resultado una tasa de retención equitativa y acorde con la distribución de los ahorradores por tipo de instrumento.

Por consiguiente, de los cálculos realizados conforme a la aplicación de la

metodología establecida y la información que publica el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de retención anual que aplicarán las instituciones financieras que paguen intereses durante el ejercicio fiscal de 2020 será de 1.45 por ciento.

Del mismo modo, menciona el Titular del Ejecutivo Federal que la tasa de retención calculada para el ejercicio fiscal de 2020 refleja el comportamiento al alza de las tasas de interés de los instrumentos públicos y privados, observado durante el periodo febrero a julio de 2019, así como la disminución de la inflación mensual interanual promedio observada en el mismo periodo.

En otro tenor, se plantea en la Iniciativa de Ley sujeta a dictamen que con la finalidad de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pueda ejercer sus funciones de manera más eficaz, el Ejecutivo Federal estima conveniente mantener en el artículo 22 de la Ley cuya emisión se plantea, los criterios y los rangos para imponer sanciones por esa Comisión.

Por otro lado, en la Iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal se considera pertinente conservar el apoyo a los contribuyentes de mínima capacidad administrativa que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, siempre y cuando cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades que realicen con el público en general, para que puedan optar por pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el IEPS que, en su caso corresponda, mediante la aplicación del esquema de estímulos establecidos en el artículo 23 de la Iniciativa de Ley que se dictamina.

Ahora bien, por lo que hace al artículo 24 de la Iniciativa en estudio, el Ejecutivo Federal plantea dar continuidad a la disposición que establece que las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del ISR, siempre que dichos apoyos económicos o monetarios se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación. Lo anterior, en virtud de que actualmente se siguen canalizando recursos a las familias afectadas para atender los daños ocurridos por los citados

sismos.

Igualmente, el Ejecutivo Federal propone mantener la disposición que establece que las organizaciones civiles y fideicomisos que de forma inmediata realicen las labores de rescate en la emergencia y contribuyan en la reconstrucción y restablecimiento de las actividades económicas después de la ocurrencia de desastres naturales, puedan recibir recursos de donatarias autorizadas que cuenten con un buen historial de sus obligaciones fiscales ante el SAT, lo cual permitirá una acción más oportuna y efectiva ante desastres naturales. Además, estima que esta facilidad será un canal idóneo para asegurar que los recursos de la sociedad sean destinados efectivamente a atender la emergencia, garantizando la transparencia sobre el uso y destino de los recursos, así como la rendición de cuentas que demanda la sociedad en estos tiempos.

Del mismo modo, el Ejecutivo Federal plantea dar continuidad en la Iniciativa que se dictamina a aquellas disposiciones que obligan a la SHCP a realizar un estudio de ingreso-gasto, así como a publicar el Presupuesto de Gastos Fiscales y un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del ISR, y a incluir en la exposición de motivos de toda iniciativa en materia fiscal el impacto recaudatorio correspondiente.

Por lo que hace a la generación del Reporte de Donatarias Autorizadas (RDA) a que se refiere el artículo 27, Apartados B y C de la Iniciativa que se dictamina, el Ejecutivo Federal propone establecer que la información de los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de los directivos análogos, se debe obtener de los datos reportados, en la página de Internet del SAT en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas. En ese sentido, se considera que la fecha oportuna para la presentación de la información en dicha sección sea el 31 de julio de 2020. Lo anterior, debido a que la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas contiene información no estandarizada que requiere un proceso para su conformación en los términos establecidos en los Apartados B y C del citado artículo. La fecha establecida asegura que el proceso de explotación, elaboración y validación de los datos se realice en tiempo y forma para entregar el RDA a las instancias correspondientes del Congreso de la Unión y su publicación en la página de Internet de la SHCP.

Por otra parte, en la Iniciativa de Ley presentada por el Ejecutivo Federal se propone mantener en una disposición transitoria que el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el DOF el 20 de noviembre de 2013, continuará destinándose durante el ejercicio fiscal de 2020 en los términos del citado precepto.

En otro contexto, el Ejecutivo Federal propone mantener en la Iniciativa sujeta a dictamen, una disposición transitoria con la finalidad de establecer que las referencias en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones que se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, en la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2013, y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos, se entenderán hechas también al SAT.

Ahora bien, en la Iniciativa que se dictamina se estima conveniente mantener para el ejercicio fiscal de 2020, una disposición transitoria que permita a las entidades federativas y municipios enterar a la TESOFE las disponibilidades de recursos federales correspondientes a ejercicios fiscales anteriores a 2020 que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, en dicha disposición transitoria el Ejecutivo Federal propone que los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinen por la SHCP, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas.

A su vez, el Ejecutivo Federal estima conveniente establecer para el ejercicio fiscal de 2020 una disposición transitoria que permita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de conformidad con las facultades que le confiere la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, requerir a la SHCP los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de

las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan, sin que dichos pagos se encuentren condicionados a que se hayan suscrito, se suscriban o se actualice convenio alguno entre las entidades federativas y municipios con el ISSSTE.

Además, en la Iniciativa que se dictamina, el Titular del Ejecutivo Federal propone que el ISSSTE pueda suscribir con las entidades federativas, municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales, los convenios de regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos, conforme al modelo que sea autorizado por su órgano de gobierno. Al respecto, también se propone incorporar que el Instituto pueda aceptar bienes inmuebles como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse en las cuentas individuales de los trabajadores.

Por otro lado, el Ejecutivo Federal propone en la Iniciativa que se dictamina que los contratos de fideicomisos y mandatos que constituya o celebre el Gobierno Federal, deban prever que la SHCP pueda disponer del patrimonio de éstos, así como la obligación a cargo de las instituciones fiduciarias o mandatarias de concentrar trimestralmente en la TESOFE bajo la naturaleza de aprovechamientos, los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado, bajo la naturaleza de aprovechamientos, salvo disposición de carácter general en contrario.

De igual manera, se prevé que las instituciones fiduciarias, o mandatarias de fideicomisos, mandatos o análogos públicos, deben concentrar de forma trimestral en la TESOFE los intereses generados por dichos instrumentos financieros, salvo aquéllos que impliquen el pago de gastos de operación de dichos vehículos, bajo la naturaleza de aprovechamientos y se destinarán a gasto en salud o de inversión en infraestructura, lo anterior con excepción de aquellos vehículos financieros que por disposición expresa de ley, decreto o determinación de la SHCP, dichos recursos deban permanecer afectos a su patrimonio o destinados al objeto correspondiente.

Así también, el Titular del Ejecutivo Federal resalta que la presente Administración tiene el firme propósito de reducir el número de fideicomisos y mandatos públicos, a efecto de que ésta cuente exclusivamente con los que resulten indispensables

para el quehacer público. Por ello, considera conveniente establecer mediante disposición transitoria, que las dependencias y entidades deban remitir durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2020 a la SHCP, un informe de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos susceptibles de extinguirse en términos de las disposiciones aplicables.

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal propone en la Iniciativa que se analiza, se instruya a la institución fiduciaria del fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria para que durante el mes de marzo concentre en la TESOFE, bajo la naturaleza de aprovechamientos, los recursos que integran el patrimonio fideicomitido a fin de destinarlos, mediante el mecanismo que determine la SHCP, a proyectos de inversión de infraestructura económica para la construcción, ampliación o rehabilitación de puertos, así como para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros que mejoren la conectividad entre los puertos.

Finalmente, el Titular del Ejecutivo Federal establece mediante disposición transitoria, que durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2020, la institución fiduciaria del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados deberá concentrar en la TESOFE los recursos remanentes previstos en su patrimonio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

2. Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, suscrita por os Diputados Jorge Arturo Espadas Galván y Elías Lixa Abimerhi y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La iniciativa tiene por objeto actualizar criterios en materia de compensaciones a favor del contribuyente.

3. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, suscrita por el Senador Gustavo Madero Muñoz con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Iniciativa propone derogar la fracción IX del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, para permitir que el conocido Fondo Minero siga operando en los términos establecidos en la Ley Federal de Derechos.

Se precisa que los textos originales de las iniciativas descritas en el presente instrumento, se encuentran incorporados dentro de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, para su consulta.

RELATORÍA DEL PARLAMENTO ABIERTO SOBRE EL ANÁLISIS DEL PAQUETE ECONÓMICO 2020

De conformidad con los acuerdos aprobados por esta Comisión el día 24 del presente, llevamos a cabo el "Parlamento Abierto sobre el Análisis del Paquete Económico 2020", del 2 al 8 de octubre, en las que participaron 74 ponentes, entre, funcionarios públicos, legisladores, especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y empresarios.

En las mesas de análisis se abordaron: régimen fiscal de Petróleos Mexicanos; los impuestos al Valor Agregado, Sobre la Renta y Especial sobre Producción y Servicios. Además, las leyes federales de Derechos, de Coordinación Fiscal y de Ingresos, y el Código Fiscal de la Federación.

Es de resaltarse, que de dichas exposiciones se desprendieron una serie de opiniones en torno al tema que nos ocupa, las cuales nos permiten a los legisladores contar con mayores elementos para la valoración en el análisis que nos encontramos realizando del paquete económico para 2020.

Es por ello, que a continuación se desglosa de manera descriptiva las propuestas vertidas en el citado parlamento, haciéndose la precisión que los documentos originales de las mismas se encuentran incorporados dentro del micrositio de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su consulta.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Organización	Ley/Artículo/Supuesto observado	Propuesta
CCE; CONCANACO SERVYTUR MEXICO	• Tasa anual de retención por pago de intereses	• Debe revisarse la fórmula de cálculo para la determinación de la tasa de retención de intereses, pues con la que está prevista en ley se incrementaría en 30% la tasa de retención de que deberán aplicar los integrantes al sistema financiero con motivo del pago de intereses a los ahorradores, elevándose de 1.04% a 1.45%. • La aplicación de esta mecánica debe revisarse, pues parte de que todos los ahorradores pagan el ISR a la tasa del 35%, lo cual no es correcto. • Para efectos de lo anterior lo correcto sería considerar una tasa ponderada del 23.54%, que corresponde a la que deben aplicar las personas que reciben ingresos de hasta $400,000 y que, por ende, no están obligadas a presentar declaración anual del ISR. • La tasa de retención se incrementa un 39%, generará saldos a favor en un 71% mayores a 2019. Se propone reconsiderar en la iniciativa esta tasa, ya que los indicadores de intereses e inflación son similares a los de este año

Una vez efectuado el análisis del contenido de las iniciativas presentadas, de las exposiciones vertidas en el "Parlamento Abierto sobre el Análisis del Paquete Económico 2020", así como de las propuestas recibidas por los legisladores de los distintos grupos parlamentarios en las mesas técnicas de trabajo realizadas el seno de la Comisión, esta Dictaminadora considera lo siguiente:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Por tratarse de igual materia y tener el mismo tema en común, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el artículo 81, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, incorpora en el análisis del dictamen las iniciativas referidas en el apartado de ANTECEDENTES. Sin embargo, se toma como base para la integración del presente instrumento, la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.

PRIMERA. La Comisión de Hacienda estima procedente la Iniciativa emitida por el Ejecutivo Federal, tomando en consideración el marco macroeconómico presentado en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, así como el análisis de las estimaciones de ingresos previstos en el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020, presentado por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre del presente.

SEGUNDA. Derivado del análisis de los supuestos del marco macroeconómico, así como de las estimaciones de ingresos y gastos previstos en el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2020, esta Dictaminadora está de acuerdo en que la presente Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 no contemple nuevos impuestos ni aumentos a los vigentes.

Así también, se considera oportuna la estimación de la Iniciativa del Ejecutivo Federal en que el PIB registre un crecimiento puntual de 2.0 por ciento para 2020; y un tipo de cambio respecto al dólar de los Estados Unidos de América de 20.0 pesos por dólar, y la plataforma de producción de petróleo crudo, en 1,951 mbd con una estimación del precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación de 49.0 dólares de los Estados Unidos de América por barril.

En ese sentido, esta Comisión que dictamina coincide con el Ejecutivo Federal en conservar la disposición que lo faculta para otorgar, durante 2020, los beneficios fiscales necesarios a efecto de dar debido cumplimiento a las resoluciones que se deriven de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

No obstante, derivado de las modificaciones a diversas disposiciones fiscales, resulta necesario realizar ajustes a la carátula de ingresos y el párrafo quinto del artículo 1o., de la Ley cuya emisión se plantea para quedar en los siguientes términos:

CONCEPTO	Ingreso Estimado
TOTAL	~~6,096,335.8~~ **6,103,317.4**
1 Impuestos	~~3,499,425.8~~ **3,505,822.4**
11 Impuestos Sobre los Ingresos:	~~1,846,455.7~~ **1,852,852.3**
1 Impuesto sobre la renta.	~~1,846,455.7~~ **1,852,852.3**
4 Derechos	~~51,671.8~~ **52,256.8**
41 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público:	~~42,740.8~~ **43,325.8**
5 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	~~11,776.9~~ **12,361.9**

...

...

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

...

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2020, se proyecta una recaudación federal participable por 3 billones ~~389~~**394** mil ~~84.3~~**236.7** millones de pesos."

TERCERA. Esta Comisión de Hacienda concuerda con lo propuesto por el Ejecutivo Federal de no establecer para el ejercicio fiscal de 2020 un dividendo estatal a las empresas productivas del Estado o a sus empresas productivas subsidiarias, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 97 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 99 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ya que no se prevé que PEMEX y CFE o sus subsidiarias generen utilidades en 2019.

CUARTA. La Comisión Dictaminadora considera adecuado el planteamiento del Ejecutivo Federal en la Iniciativa sujeta a dictamen, de excluir de la meta de balance presupuestario un monto de inversión hasta por 2.0 por ciento del PIB para evaluar la contribución del gasto al equilibrio presupuestario; dicho monto se integrará con la inversión de PEMEX, de la CFE y del Gobierno Federal, ya que con ello, la inversión tanto de las empresas productivas del Estado como la del Gobierno Federal tienen un tratamiento similar, sin poner en riesgo los niveles de financiamiento del gasto público ante las decisiones de inversión de las empresas productivas del Estado, las cuales deberán operar con criterios de eficiencia y rentabilidad, lo que garantiza un nivel de inversión en el sector que permitirá incrementar la calidad y oferta de su producción, así como reducir el costo de la energía para los mexicanos en los próximos años.

QUINTA. Esta Comisión Legislativa está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal de conservar la disposición que establece que la SHCP, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continúe con la atención de la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de cajas populares de ahorro y préstamo, a fin de seguir con la labor reconocida en el artículo Segundo Transitorio del "*Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo de apoyo a sus ahorradores*", publicado en el DOF el 28 de enero de 2004.

De igual manera, la que Dictamina está de acuerdo con el Ejecutivo Federal en que

es pertinente que el producto de la enajenación de los bienes y derechos decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del Decreto mencionado en el párrafo anterior, se utilice en primer término para cubrir los gastos de administración realizados por los entes públicos federales que lleven a cabo la transmisión, administración o enajenación de los bienes y derechos del fideicomiso referido y, posteriormente se destinen a restituir al Gobierno Federal los recursos públicos aportados para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto.

SEXTA. Esta Dictaminadora considera oportuna la propuesta del Ejecutivo Federal de conservar en el artículo 1o. de la Ley que se propone emitir, la posibilidad de emplear los recursos que ingresen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, durante el ejercicio fiscal de 2020, para cubrir las obligaciones pecuniarias derivadas de la implementación del esquema de potenciación de recursos de dicho Fondo, así como dar continuidad a la disposición que prevé que hasta un 25 por ciento de las aportaciones que corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, puedan servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que dichas entidades contraigan con el Gobierno Federal, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local, ni la inscripción en el Registro Público Único a cargo de la SHCP, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Esto con la finalidad de que sean aplicados con mayor agilidad.

Adicionalmente, la Comisión de Hacienda considera adecuada la propuesta del Ejecutivo Federal de dar continuidad a la obligación de la SHCP de reportar la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2020, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En ese orden de ideas, esta Comisión Legislativa considera pertinente la propuesta de incluir un ajuste a la meta del déficit financiero de PEMEX, para que en caso de que durante el ejercicio fiscal se obtengan ingresos excedentes derivados de un mayor precio del petróleo al previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 entre el rango de 49.01 dpb y 55.00 dpb, éstos recursos no se destinen a cubrir ampliaciones de gasto sino que se reflejen en una mejora en la meta aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 del déficit financiero de PEMEX.

SÉPTIMA. Esta Comisión que dictamina estima procedente la propuesta del monto de endeudamiento neto interno que se autoriza al Ejecutivo Federal hasta por 532 mil mdp, así como un monto de endeudamiento neto externo de 5 mil 300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento que se ejercería para la contratación de financiamientos con organismos financieros internacionales.

OCTAVA. La Comisión Dictaminadora está de acuerdo con lo planteado por el Ejecutivo Federal en la Iniciativa sujeta a dictamen, respecto a mantener en el artículo 2o. las facultades otorgadas por la Ley Federal de Deuda Pública al Ejecutivo Federal para que por conducto de la SHCP emita valores y contrate empréstitos con el objeto de canjear o refinanciar obligaciones del erario federal.

Así también, esta Dictaminadora coincide con la propuesta del Ejecutivo Federal de dar continuidad en el artículo 2o. de la Iniciativa de Ley que se dictamina, a la autorización de un monto conjunto de cero pesos de déficit por intermediación financiera, definida como el Resultado de Operación que considera la constitución neta de reservas crediticias preventivas para la banca de desarrollo, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los fondos de fomento y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

NOVENA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público estima conveniente mantener, para efectos del régimen especial en materia de deuda que se encuentra establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que las solicitudes de endeudamiento de ambas empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sigan sometiendo a la consideración del Congreso de la Unión de manera separada a la solicitud de endeudamiento para el Gobierno Federal y el resto de las entidades del sector

público federal.

En este orden de ideas, la Comisión que dictamina concuerda con la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal en autorizar un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil mdp y un endeudamiento neto externo de hasta 1 mil 250 millones de dólares de los Estados Unidos de América a PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias. De igual manera, se está de acuerdo en que se autorice un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 835 mdp y un endeudamiento neto externo de 508 millones de dólares de los Estados Unidos de América a la CFE y sus empresas productivas subsidiarias.

De igual modo, se coincide con establecer la posibilidad de que ambas empresas productivas del Estado puedan contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre y cuando el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al antes señalado en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales.

Así también, esta Dictaminadora coincide con el Ejecutivo Federal en que el cómputo de los montos de endeudamiento autorizados a CFE y a PEMEX, se realice en una sola ocasión el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020, considerando el tipo de cambio y la equivalencia del peso mexicano que dé a conocer el Banco de México en la fecha en que se realice la operación correspondiente.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público también está de acuerdo con lo planteado en la Iniciativa que se dictamina en el sentido de mantener la disposición que prevé que la SHCP informe al Congreso de la Unión de forma trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, en el que se destaque el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento.

DÉCIMA. La Comisión Dictaminadora considera oportuna la propuesta del Ejecutivo Federal en relación con que la contratación de deuda pública de la Ciudad de México se sujete a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y que el monto de endeudamiento neto de dicha entidad federativa sea de 4 mil mdp para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DÉCIMA PRIMERA. Esta Comisión Legislativa concuerda con el Ejecutivo Federal en establecer en el artículo 4o. de la Iniciativa sujeta a análisis, que el monto de los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la CFE sea por un total de 257 mil 138.2 mdp, de los cuales 100 mil 344.1 mdp corresponden a inversión directa y 156 mil 794.1 mdp a inversión condicionada.

De igual forma, la Comisión Dictaminadora está de acuerdo en autorizar en el artículo 5o. de la Iniciativa de Ley sujeta a dictamen al Ejecutivo Federal a contratar durante el ejercicio fiscal de 2020, un nuevo proyecto de inversión financiada de la CFE en términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV de su Reglamento, por un total de 2 mil 760.7 mdp que corresponde al Proyecto de Infraestructura Productiva de Largo Plazo de inversión directa denominado Baja California Sur VI.

DÉCIMA SEGUNDA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público concuerda con la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en que, de nueva cuenta, la SHCP quede facultada en el artículo 7o. para establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos mensuales provisionales del derecho por la utilidad compartida.

Asimismo, la Dictaminadora considera oportuno mantener la obligación por parte de la SHCP de informar y explicar las modificaciones a los ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, que impacten en los pagos establecidos, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de esta Cámara de Diputados.

En ese contexto, la Comisión que dictamina considera adecuado el planteamiento del Ejecutivo Federal relativo a que, con el propósito de asegurar que se cumplan las reglas de concentración, se disponga que, en caso de que la SHCP en uso de las facultades otorgadas en la Iniciativa de Ley sujeta a análisis, establezca, modifique o suspenda pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales, dichos pagos deben ser transferidos y concentrados en la TESOFE por el FMPED, a más tardar el día siguiente de su recepción a cuenta de la transferencia prevista en el artículo 16, fracción II, inciso g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la

Estabilización y el Desarrollo.

Así también, esta Comisión Dictaminadora está de acuerdo con la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en conservar la disposición que establece que serán registrados como inversión los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de PEMEX, antes considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

DÉCIMA TERCERA. Esta Comisión Legislativa está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal de conservar en el artículo 8o. de la Ley cuya emisión se plantea la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, tal como en el ejercicio fiscal anterior.

En ese sentido, la tasa de recargos sería de 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos, mientras que las tasas aplicables en el pago a plazos serían de 1.26 por ciento para plazos menores a un año; de 1.53 por ciento para los plazos entre uno y dos años, y de 1.82 por ciento para los plazos mayores a dos años.

DÉCIMA CUARTA. La Comisión de Hacienda y Crédito Público considera conveniente la propuesta del Ejecutivo Federal de establecer, como en años anteriores, en el artículo 9o. de la Iniciativa de Ley sujeta a dictamen, que se ratifiquen los convenios celebrados entre la Federación por una parte y por la otra las entidades federativas, sus organismos autónomos y los municipios, incluyendo también a los organismos descentralizados de las propias entidades federativas, en los cuales se finiquiten adeudos entre ellos.

De igual forma, esta Comisión considera oportuno continuar con la ratificación de los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación y las entidades federativas, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio exterior, sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera, incluyendo los sujetos a un procedimiento fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal.

DÉCIMA QUINTA. Esta Comisión que dictamina considera adecuado, como lo plantea el Ejecutivo Federal, conservar en sus términos la facultad otorgada a la

SHCP para fijar o modificar los aprovechamientos y productos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2020 y, en su caso, para autorizar el destino específico de los mismos. En el mismo sentido, esta Comisión considera conveniente mantener el uso de medios de identificación electrónica en las solicitudes que realicen las dependencias que sometan a aprobación de la SHCP los montos de los aprovechamientos y productos, así como la autorización que para tales efectos expida la SHCP, por medio de la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados, los cuales tendrán el mismo valor vinculatorio que los emitidos con firma autógrafa.

En ese orden de ideas, la Comisión de Hacienda y Crédito Público coincide con el Ejecutivo Federal en mantener en el artículo 10 de la Iniciativa de Ley sujeta a dictamen, que los recursos obtenidos por el cobro de aprovechamientos a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos establecidos con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal o tratándose de recuperaciones de capital o del patrimonio, según sea el caso, se destinarán prioritariamente a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a fomentar acciones que les permitan cumplir con su mandato, o bien a programas y proyectos de inversión.

Adicionalmente, la Dictaminadora concuerda con el Ejecutivo Federal en establecer que cuando la SHCP obtenga un aprovechamiento a cargo de cualquier otra entidad paraestatal distinta de las señaladas en el párrafo anterior, dichos ingresos serán enterados a la TESOFE bajo dicha naturaleza, a efecto de que sean destinados a programas presupuestarios que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.

De igual forma, esta Comisión Legislativa considera oportuna la propuesta del Ejecutivo Federal de dar continuidad a la disposición que permite destinar a gasto de inversión en infraestructura, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintas de entidades paraestatales y de otros

aprovechamientos.

En ese mismo sentido, la Comisión que dictamina está de acuerdo con la propuesta incluida en la Iniciativa del Ejecutivo Federal en análisis, de dar continuidad a la disposición que establece que los aprovechamientos que se contemplen en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en la Ley Federal de Competencia Económica y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no requieren de la autorización de la SHCP para su cobro.

Así también, esta Dictaminadora considera adecuado conservar la especificación relativa a que el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos deberá ser aplicado por el prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público de la Federación, en los casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos correspondientes en los plazos que para esos efectos se fijen, así como que éstos informen a la SHCP los montos y conceptos que hayan percibido por concepto de dichos aprovechamientos.

En este contexto, esta Comisión de Hacienda está de acuerdo con lo propuesto por el Ejecutivo Federal en el sentido de mantener el esquema de actualización del monto de los productos y aprovechamientos que se cobren de manera regular, por medio del factor que se aplicará desde la última modificación que se hubiere efectuado hasta que se emita la autorización respectiva.

Ahora bien, la Comisión Legislativa concuerda con la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal en la Iniciativa materia de análisis consistente en continuar, en el artículo 11 de la Ley cuya emisión se plantea, con el mecanismo que el IABA aplica al producto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la TESOFE, por el que puede descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias de la misma entidad transferente y que el monto restante, hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno del organismo, se deposite en un fondo que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos, acotando que el remanente será enterado a la TESOFE.

De igual manera, esta Dictaminadora coincide con el Ejecutivo Federal en la propuesta de dar continuidad a la disposición que contempla al SAT como entidad

transferente directa al IABA, en términos de lo establecido por la Ley de Tesorería de la Federación. Por ello, la Comisión considera acertado que los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el IABA respecto de bienes transferidos por el SAT que pasan a propiedad del Fisco Federal de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, se les deberá realizar el descuento de los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos provenientes del SAT y del monto restante, hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno del organismo, se depositará en un fondo que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos, especificando que el remanente será enterado a la TESOFE. También coincide con la propuesta de continuar con la aplicación de un mecanismo como el descrito para los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, para el pago de resarcimientos de bienes de dicha procedencia, que por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional, el IABA deba realizar. Aclarando que lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

En el mismo sentido, esta Dictaminadora considera conveniente la propuesta del Ejecutivo Federal, para que el IABA informe semestralmente a la Cámara de Diputados y a la Coordinadora de Sector, sobre las operaciones efectuadas con motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las autoridades mencionadas.

Del mismo modo, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público considera oportuna la propuesta del Ejecutivo Federal para mantener la disposición por la cual se destinen hasta en un 100 por ciento los ingresos netos provenientes de enajenaciones realizadas por el IABA para financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como que dichos ingresos también se puedan utilizar para el pago de los créditos otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, siempre que en el acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el convenio que al efecto se celebre se especifique dicha circunstancia, precisando que lo señalado en este párrafo no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados, y que se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

En otro tenor, la Comisión Legislativa concuerda con el Ejecutivo Federal en la conveniencia de establecer que el destino de los ingresos por la enajenación de los bienes en proceso de extinción de dominio, y de aquéllos sobre los que sea declarada la extinción de dominio y de sus frutos, así como su monetización en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, serán destinados a una cuenta especial en los términos que establece el artículo 239 de la Ley antes referida, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 234 y 237 del mismo ordenamiento, a fin de dar certeza jurídica y viabilidad al mencionado destino.

DÉCIMA SEXTA. Esta Comisión que dictamina considera adecuada la propuesta del Ejecutivo Federal de concentrar en la TESOFE los derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, así como sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias y los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la forma y términos que se proponen en la Ley cuya emisión se plantea, al igual que a los demás ingresos contemplados en la misma.

Asimismo, la Comisión de Hacienda y Crédito Público está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal, de contemplar de nuevo en el artículo 12 de la Iniciativa de Ley que se dictamina la disposición que obliga a las entidades sujetas a control directo, los poderes Legislativo y Judicial, y los órganos a los que la Constitución Federal otorga el carácter de autónomos, de registrar los ingresos que obtengan y conservar la documentación comprobatoria de dichos registros a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal; al igual que la obligación de las entidades de control indirecto de informar a la SHCP sobre sus ingresos, a efecto de estar en posibilidad de elaborar los informes que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y reflejarlos en la Cuenta Pública Federal.

De igual forma, esta Comisión Dictaminadora coincide con el Ejecutivo Federal en continuar en el citado artículo 12 con la disposición que establece que los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y formación para el trabajo del sector público, formarán parte de su patrimonio, y serán administrados por las propias instituciones

educativas para ser destinadas a sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, debiendo concentrarse en la TESOFE, con la posibilidad de establecer un fondo revolvente que garantice la entrega y aplicación de los recursos en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de su concentración.

Por otro lado, la Comisión que dictamina está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal, de continuar con la disposición que establece que el destino de los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, se destinarán a las entidades o empresas productivas del Estado que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza.

En ese mismo orden de ideas, esta Comisión Legislativa estima adecuada la propuesta del Ejecutivo Federal de establecer que los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato análogo, así como aquellos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, deberán ser concentrados en la TESOFE bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según su origen, y que se podrán destinar a los fines que determine la SHCP, salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento correspondiente. De igual manera, se concuerda con la incorporación en el sexto párrafo del citado artículo 12 de la posibilidad de que los ingresos excedentes correspondientes a aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 6.62.01.04 del artículo 1o. de la Ley cuya emisión se plantea, por concepto de recuperaciones de capital se destinen a objetivos que determine la SHCP a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo.

DÉCIMA SÉPTIMA. La Comisión de Hacienda considera oportuno conservar en el artículo 13 de la Iniciativa sujeta a análisis, la obligación de enterar a la TESOFE los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes.

Esta Comisión que dictamina está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal, respecto a que los recursos derivados de la mecánica de descuento de

gastos tratándose de la enajenación de bienes, incluyendo acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales, se deberán enterar o concentrar en la TESOFE según corresponda.

De igual modo, la Comisión Dictaminadora concuerda en dar continuidad a la disposición que precisa que tratándose de operaciones que le sean encomendadas al IABA en los términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, pueda descontarse un porcentaje que no podrá ser mayor del 7 por ciento, el cual será autorizado por su Junta de Gobierno, por concepto de gastos indirectos de operación, que se destinarán a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

En ese sentido, también se comparte la propuesta del Ejecutivo Federal prevista en el artículo 13 de la Iniciativa sujeta a dictamen, de conservar la disposición referente a la terminación de los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales, a efecto de agilizar los mismos, y permitir al liquidador, fiduciario o responsable del proceso utilizar los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos, por sí o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, para el pago de los gastos y pasivos de los procesos que, al momento de la referida conclusión sean deficitarios, para lo cual los recursos correspondientes deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica, sin que sea necesario concentrar dichos recursos en la TESOFE.

Asimismo, esta Comisión concuerda con el Ejecutivo Federal en lo relativo a la propuesta de mantener la disposición que establece que los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, permanezcan afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación deficitarios, así como que, en aquellos casos en que se transmitan bienes y derechos a dicho Fondo, no se considere enajenación.

Adicionalmente, la Dictaminadora está de acuerdo en dar continuidad a la precisión relativa a que los remanentes de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras

entidades con recursos propios, ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

De igual manera, se coincide con la propuesta del Ejecutivo Federal en la Iniciativa sujeta a dictamen, respecto de continuar con la autorización de hacer uso de los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, como parte de la estrategia de conclusión de los procesos de desincorporación de entidades, por parte del IABA para cubrir los gastos inherentes al cumplimiento de su objeto, relativo a la atención de encargos bajo su administración, cuando estos sean deficitarios. En ese sentido, también se estima conveniente sujetar lo anterior al cumplimiento de las directrices que se emitan para tal efecto, así como a la autorización de la Junta de Gobierno del IABA, previa aprobación de los órganos colegiados competentes.

En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera conveniente establecer en el párrafo décimo segundo del artículo 13, que los ingresos que deriven de la enajenación de los bienes asegurados a favor del Gobierno Federal, incluyendo numerario, cuya administración y destino hayan sido encomendados al IABA en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se destinen a un fondo en los términos del artículo 89 de la citada Ley, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 90, 92 y 93 del mismo ordenamiento. También, se está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal referente a que los ingresos provenientes de numerario y de la enajenación de bienes que realice el IABA, que hayan sido declarados abandonados por parte de las instancias competentes, distintos de los vehículos declarados por la SCT y que se concentren a la TESOFE, se considerarán aprovechamientos, destinándose al financiamiento de las operaciones del Instituto, en términos de lo previsto en el artículo 90 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 89, 92 y 93 de dicha Ley.

Por otra parte, esta Comisión que dictamina está de acuerdo con la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en establecer en el artículo 13 de la Iniciativa de Ley sujeta a análisis, que el destino del numerario decomisado y de los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados en procedimientos penales federales, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y previa deducción de los gastos indirectos de operación que correspondan, se entregarán en partes iguales,

al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al Fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, u otras políticas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, con el propósito de armonizar lo establecido en los ordenamientos penales y fiscales, e incluso en resoluciones judiciales, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la Ley cuya emisión se plantea.

Así también, la Comisión Dictaminadora coincide con la Iniciativa sujeta a análisis, en el sentido de que los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, se integren al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley antes mencionada.

En otro orden de ideas, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público estima acertado mantener en el artículo 13 la disposición que permite que los ingresos provenientes de la enajenación efectuada por el IABA de vehículos declarados abandonados por la SCT, en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha dependencia, se destinen conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y hecho lo anterior, hasta un 30 por ciento de los remanentes se utilice para cubrir a los permisionarios los adeudos generados, enterando el resto a la TESOFE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA. Esta Dictaminadora estima conveniente lo propuesto por el Ejecutivo Federal, respecto de aplicar lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

A su vez, con la finalidad de fomentar que los contribuyentes apliquen la autocorrección fiscal, se coincide con la propuesta de la Iniciativa sujeta a dictamen, de continuar en el artículo 15 con la disminución en un 50 por ciento de multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales

distintas a las obligaciones de pago, en función del momento en el que el contribuyente efectúe la autocorrección de las mismas, a excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación.

Igualmente, esta Dictaminadora considera adecuado prever en el citado artículo 15 de la Ley cuya emisión se plantea, la reducción en un 40 por ciento de las multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las obligaciones de pago a los contribuyentes que se encuentren sujetos a revisión electrónica en términos del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación.

DÉCIMA NOVENA. La Comisión de Hacienda y Crédito Público coincide con el Ejecutivo Federal en que es necesario, dar continuidad a los estímulos fiscales, en materia del IEPS, contemplados en el artículo 16, apartado A, fracciones I a VI, de la Iniciativa que se dictamina.

En este contexto, se considera oportuno prever que los estímulos son acreditables contra el ISR con excepción del previsto en la fracción III del Apartado A del artículo 16; por lo que se estima conveniente precisar que su acreditamiento proceda únicamente contra el ISR causado por el contribuyente en el ejercicio fiscal, de forma tal que no se aplique contra el ISR retenido a terceros, ya que en ese caso no se trata de un impuesto propio del beneficiario del estímulo y, por otro lado, que no se permita el acreditamiento contra los pagos provisionales que vaya realizando el contribuyente, debido a que cuando dichos pagos son mayores al ISR del ejercicio causado por el contribuyente o se obtenga pérdida fiscal, la devolución de los pagos provisionales o la compensación del saldo a favor implica una monetización de los estímulos mencionados, siendo que éstos deben tener como límite el ISR causado por el contribuyente.

Ahora bien, considerando que en el proyecto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, presentado por el Ejecutivo Federal el pasado 8 septiembre, se contempla la adición del artículo 74-B en el Capítulo VIII del Título II de la Ley del ISR, el cual prevé una reducción del 30% en el ISR a las personas morales de derecho agrario constituidas únicamente por ejidatarios y comuneros o ejidos y comunidades, siempre que sus ingresos no

excedan de 5 mdp en el ejercicio inmediato anterior, y que al menos un 80% de sus ingresos se obtengan por la industrialización y comercialización de productos derivados del sector primario, otorgando a dichas personas morales de derecho agrario atribuciones para transformar sus productos, esta Dictaminadora considera que a fin de evitar que los contribuyentes del artículo 74-B antes citado, puedan aplicar los beneficios previstos en el artículo 16, apartado A, fracciones II y III de la Iniciativa que se dictamina y monetizar el estímulo al solicitar las devoluciones, esta Dictaminadora estima necesario precisar que dicho estímulo, únicamente lo podrán aplicar los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere el artículo 74 de la Ley del ISR.

Conforme a lo antes expuesto, el artículo 16, apartado A, fracciones II y III de la Iniciativa que se dictamina, queda en los términos siguientes:

"Artículo 16. ...

A. ...

I. ...

...

...

II. ...

1. ...

...

2. Las personas **dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,** que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en ~~las~~ **dichas** actividades ~~agropecuarias o silvícolas~~, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en aduana del pedimento de importación o el precio consignado en el comprobante

fiscal de adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas en las estaciones de servicio, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

...

III. Las personas **dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto sobre la Renta**, que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final en ~~las~~ **dichas** actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

...

...

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos **de los artículos 74 y 75** del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios

o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

...

...

...

...

..."

Igualmente, la que Dictamina está de acuerdo con el Ejecutivo Federal en dar continuidad al estímulo fiscal aplicable a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto.

No obstante, con el propósito de hacer más eficientes los estímulos fiscales, se hace necesario incidir en los apoyos que se proporcionan a través de los acreditamientos establecidos en el Artículo 16, apartado A de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2020 que se dictamina. En ese sentido, se ajusta el límite del ingreso de los beneficiarios de los estímulos previstos en las fracciones I y V, del artículo antes señalado, para que lo puedan recibir las empresas con ingresos totales anuales menores a 60 millones de pesos a fin de mejorar la focalización de los estímulos hacia las empresas que más los requieren e incentivar la formalidad empresarial.

Este ajuste preserva los objetivos que dieron lugar a estos apoyos y contribuye a la estabilidad macroeconómica, con un sistema fiscal más eficiente y equitativo con un mejor uso de los recursos.

En tal virtud, se modifica el Artículo 16, apartado A, fracciones I y V para quedar como sigue:

"Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2020, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, ~~y~~ que **obtengan en el ejercicio fiscal en el que adquieran el diésel o el biodiésel y sus mezclas, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos y que** para determinar su utilidad puedan deducir **dichos combustibles** ~~el diésel o el biodiésel y sus mezclas~~ **cuando los** ~~que~~ importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles, en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2, según corresponda al tipo de combustible, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación. **El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.**

...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, **que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos,** consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura **mencionada** ~~carretera de cuota~~ hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto. **El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.**

..."

Ahora bien, esta Comisión Dictaminadora considera conveniente continuar en la fracción VI del Apartado A del artículo 16 de la Iniciativa de Ley propuesta por el Ejecutivo Federal sujeta a dictamen, con el estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen combustibles fósiles en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes, cuando en dichos procesos no se combustionen ese tipo de combustibles, además se estima oportuno conferir al SAT la atribución para emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización de combustibles fósiles no sujetos a un proceso de combustión por tipos de industria; no obstante, se estima conveniente aclarar que el porcentaje mencionado se aplicará respecto de las cantidades de litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible, adquiridos en el mes de que se trate.

Por otro lado, la Comisión de Hacienda coincide con la propuesta del Ejecutivo de continuar con la exención del derecho de trámite aduanero a las personas que importen gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, ya que este combustible genera grandes beneficios económicos a sus usuarios, es de fácil transportación y además produce menos contaminación.

VIGÉSIMA. En otro orden de ideas, esta Comisión Legislativa concuerda con lo planteado por el Ejecutivo Federal de preservar en el artículo 17 de la Iniciativa sujeta a análisis, que se deroguen aquellas disposiciones que contengan exenciones totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos o contribuciones federales distintos de los establecidos en leyes fiscales, incluyendo la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales y tratados internacionales.

En ese mismo sentido, se estima adecuado continuar con la derogación de las disposiciones que establezcan un destino específico para los ingresos por concepto de productos, aprovechamientos o derechos distinto al previsto en las disposiciones de carácter fiscal, así como respecto de aquéllas que clasifiquen a los ingresos de las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados como ingresos excedentes del ejercicio en que se generen.

VIGÉSIMA PRIMERA. La Comisión Legislativa considera oportuna la propuesta del Ejecutivo Federal, de reiterar la clasificación y tratamiento de los ingresos excedentes que generan las dependencias, entidades, órganos autónomos y poderes de la Unión a efecto de posibilitar su destino a la unidad generadora de los mismos.

Adicionalmente, se concuerda con el Titular del Ejecutivo Federal en reiterar la disposición que establece que quedan sin efectos las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Esta Comisión que dictamina está de acuerdo con el

planteamiento del Ejecutivo Federal de fijar la tasa de retención anual de intereses financieros en 1.45 por ciento con base en la metodología vigente y considerando los valores de las variables observados durante el periodo previsto en la citada metodología.

VIGÉSIMA TERCERA. La Comisión Dictaminadora estima oportuno lo planteado en la Iniciativa que se dictamina en lo relativo a dar continuidad a los criterios y los rangos para imponer sanciones previstos en el artículo 22, con la finalidad de que la CNBV pueda ejercer sus funciones de manera más eficaz.

VIGÉSIMA CUARTA. Esta Comisión Legislativa coincide con el Ejecutivo Federal en la pertinencia de mantener en el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación que se propone, el apoyo otorgado a los contribuyentes de mínima capacidad administrativa que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, manteniéndose en sus términos el esquema de beneficios y estímulos fiscales a efecto de facilitar el cálculo y pago del IVA, así como del IEPS.

VIGÉSIMA QUINTA. La Comisión de Hacienda y Crédito Público coincide en dar continuidad en la fracción I del artículo 24 de la Iniciativa sujeta a dictamen, a la disposición que establece que las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del ISR, siempre que dichos apoyos se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación. Ello, considerando que actualmente se siguen canalizando recursos a las familias afectadas para atender los daños ocurridos por los citados sismos.

Esta Comisión concuerda con el planteamiento del Ejecutivo Federal de incluir en la fracción II del artículo 24 de la Iniciativa de Ley sujeta a dictamen, en la que se considere que las organizaciones civiles y fideicomisos que de forma inmediata realicen las labores de rescate en la emergencia y contribuyan en la reconstrucción y restablecimiento de las actividades económicas después de la ocurrencia de desastres naturales, puedan recibir recursos de donatarias autorizadas que cuenten con un buen historial de sus obligaciones fiscales ante el SAT. Lo anterior, en virtud

de que permitirá una acción más oportuna y efectiva ante desastres naturales. Aunado a esto, esta facilidad será un canal idóneo para asegurar que los recursos de la sociedad sean destinados efectivamente a atender la emergencia, garantizando la transparencia sobre el uso y destino de los recursos, así como la rendición de cuentas que demanda la sociedad en estos tiempos.

VIGÉSIMA SEXTA. La Comisión Legislativa concuerda con el Ejecutivo Federal en dar continuidad en la Iniciativa que se dictamina a aquellas disposiciones que obligan a la SHCP a realizar un estudio de ingreso-gasto, así como a publicar el Presupuesto de Gastos Fiscales y un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del ISR, y a incluir en la exposición de motivos de toda iniciativa en materia fiscal el impacto recaudatorio correspondiente.

Por lo que hace a la generación del RDA a que se refiere el artículo 27, Apartados B y C de la presente Iniciativa, esta Comisión Legislativa coincide en establecer que la información de los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de los directivos análogos, se debe obtener de los datos reportados, en la página de Internet del SAT en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas. Por lo que, se concuerda con el Titular del Ejecutivo Federal en que la fecha oportuna para la presentación de la información en dicha sección sea el 31 de julio de 2020. Lo anterior, debido a que la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas contiene información no estandarizada que requiere un proceso para su conformación en los términos establecidos en los Apartados B y C del citado artículo. En ese sentido, la fecha establecida asegura que el proceso de explotación, elaboración y validación de los datos se realice en tiempo y forma para entregar el RDA a las instancias correspondientes del Congreso de la Unión y su publicación en la página de Internet de la SHCP.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Esta Comisión de Hacienda considera oportuno lo planteado por el Ejecutivo Federal en la Iniciativa de Ley sujeta a análisis, en la cual se prevé nuevamente establecer en disposición transitoria que el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el DOF el 20 de noviembre de 2013, continuará destinándose durante el ejercicio fiscal de 2020 en los términos del citado

precepto.

VIGÉSIMA OCTAVA. La Comisión Dictaminadora está de acuerdo con el Ejecutivo Federal al plantear en la Iniciativa que se analiza, una disposición transitoria con la finalidad de establecer que las referencias en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones que se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, en la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2013, y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos, se entenderán hechas también al SAT.

VIGÉSIMA NOVENA. Esta Comisión que dictamina considera adecuada la propuesta del Ejecutivo Federal de mantener para el ejercicio fiscal de 2020, una disposición transitoria que permita a las entidades federativas y municipios enterar a la TESOFE las disponibilidades de recursos federales correspondientes a ejercicios fiscales anteriores a 2020 que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, coincide en que los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinen por la SHCP, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas.

No obstante, con el propósito de brindar transparencia y certeza jurídica en cuanto a la operación del destino establecido en este dispositivo legal, se estima conveniente facultar a dicha dependencia para que emita los lineamientos para su operación a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2020, para quedar como sigue:

> "**Séptimo**. Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables,

deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado. Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de ~~las~~ **los lineamientos que dicha dependencia emitirá para su operación a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2020 y demás** disposiciones jurídicas aplicables, para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas."

En adición a lo anterior, esta dictaminadora estima oportuno incorporar una medida que permita que esta disposición entre en vigor al día siguiente de su publicación respecto de los recursos que las entidades federativas y municipios concentraron a la TESOFE en el 2019, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, en tal virtud se modifica el transitorio Primero de la iniciativa sujeta a dictamen en los siguientes términos:

"Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020**, salvo lo dispuesto en el transitorio Séptimo, el cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto, mismo que será aplicable en el ejercicio fiscal de 2019 respecto de los recursos que las entidades federativas y municipios hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación en dicho ejercicio, correspondientes a ejercicios fiscales de 2017 y 2018**."

TRIGÉSIMA. La Comisión que dictamina, coincide con lo propuesto por el Ejecutivo Federal en la Iniciativa que se dictamina en el sentido de mantener la disposición transitoria que permite al ISSSTE, de conformidad con las facultades que le confiere la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, requerir a la SHCP los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan.

En ese sentido, se coincide con el Ejecutivo en que el ISSSTE pueda suscribir con

las entidades federativas, municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales, los convenios de regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos, conforme al modelo que sea autorizado por su órgano de gobierno. De igual forma, se estima conveniente incorporar que el Instituto pueda aceptar bienes inmuebles como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse en las cuentas individuales de los trabajadores.

Asimismo, esta Dictaminadora considera necesario modificar el primer párrafo del transitorio Noveno de la iniciativa que se dictamina, a efecto de eliminar la referencia mediante la cual se pretendía permitir la aplicación de los referidos pagos sin que se encuentren condicionados a que se hayan suscrito, se suscriban o se actualice convenio alguno entre las entidades federativas y municipios con el ISSSTE, lo anterior para quedar en los siguientes términos:

> **"Noveno.** El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante el ejercicio fiscal 2020 y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requerirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan. ~~La aplicación de los pagos a que se refiere este párrafo, no estará supeditada a que se hayan suscrito, se suscriban o se actualice convenio alguno con las entidades federativas y municipios con el referido Instituto.~~"

TRIGÉSIMA PRIMERA. Esta Comisión de Hacienda, tomando en consideración que la presente Administración tiene el firme propósito de reducir el número de fideicomisos y mandatos públicos, a efecto de que ésta cuente exclusivamente con los que resulten indispensables para el quehacer público, considera conveniente la propuesta del Ejecutivo Federal consistente en establecer mediante disposición transitoria, que las dependencias y entidades deban remitir durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2020 a la SHCP, un informe de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos susceptibles de extinguirse en términos de las disposiciones aplicables.



COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

TRIGÉSIMA SEGUNDA. La Comisión Legislativa, está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal relativa a que los contratos de fideicomisos y mandatos que constituya o celebre el Gobierno Federal, deban prever que la SHCP pueda disponer del patrimonio de éstos, así como la obligación a cargo de las instituciones fiduciarias o mandatarias de concentrar trimestralmente en la TESOFE, los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado, bajo la naturaleza de aprovechamientos, salvo disposición de carácter general en contrario.

Asimismo, se considera oportuna la propuesta del Ejecutivo Federal consistente en que las instituciones fiduciarias, o mandatarias de fideicomisos, mandatos o análogos públicos, deben concentrar de forma trimestral en la TESOFE los intereses generados por dichos instrumentos financieros, salvo aquéllos que impliquen el pago de gastos de operación de dichos vehículos, bajo la naturaleza de aprovechamientos y se destinarán a gasto en salud o de inversión en infraestructura, lo anterior con excepción de aquellos vehículos financieros que por disposición expresa de ley, decreto o determinación de la SHCP, dichos recursos deban permanecer afectos a su patrimonio o destinados al objeto correspondiente.

TRIGÉSIMA TERCERA. Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público concuerda con el Ejecutivo Federal en la propuesta consistente en que se instruya a la institución fiduciaria del fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria para que durante el mes de marzo concentre en la TESOFE, bajo la naturaleza de aprovechamientos, los recursos que integran el patrimonio fideicomitido a fin de destinarlos, mediante el mecanismo que determine la SHCP, a proyectos de inversión de infraestructura económica para la construcción, ampliación o rehabilitación de puertos, así como para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros que mejoren la conectividad entre los puertos.

TRIGÉSIMA CUARTA. La Comisión Legislativa está de acuerdo con el Titular del Ejecutivo Federal en establecer mediante disposición transitoria, que durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2020, la institución fiduciaria del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados deberá concentrar en la TESOFE los recursos remanentes previstos en su patrimonio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

TRIGÉSIMA QUINTA. Considerando que el saneamiento de las finanzas tanto de la CFE, como de las entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y organismos públicos prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos, les permitirá mejorar la prestación de los servicios a la población y su operación en general, esta Comisión Dictaminadora estima conveniente establecer un esquema de regularización de la cartera vencida por consumo de energía eléctrica bajo un diseño adecuado que resulte benéfico para el saneamiento de las finanzas tanto del proveedor del servicio, como de sus usuarios.

En ese sentido, se considera necesario permitir que la CFE tenga la posibilidad de implementar un esquema de regularización de la cartera vencida por consumo de energía eléctrica.

De esta manera, el esquema que se propone contempla eficiencias orientadas a generar e incentivar un consumo racional de la energía eléctrica, fomentar una cultura de pago por dicho servicio y reducir las cargas financieras de las partes.

En ese contexto, se propone incorporar una disposición transitoria en los siguientes términos:

"Décimo Cuarto.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Comisión Federal de Electricidad podrá implementar programas de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica de entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y organismos públicos prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos, a través de la celebración de convenios con cualquiera de las personas morales de la administración pública antes mencionadas.

Los programas que se implementarán a través de la celebración de convenios a los que se refiere el párrafo anterior, se sujetarán, sin perjuicio de las demás disposiciones jurídicas aplicables, a las reglas de operación que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en

vigor de la presente Ley, las cuales podrán considerar las características del solicitante."

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Capítulo I
De los Ingresos y el Endeudamiento Público

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran:

CONCEPTO	Ingreso Estimado
TOTAL	**6,103,317.4**
1. Impuestos	**3,505,822.4**
11. Impuestos Sobre los Ingresos:	1,852,852.3
01. Impuesto sobre la renta.	1,852,852.3
12. Impuestos Sobre el Patrimonio.	
13. Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones:	1,534,055.8
01. Impuesto al valor agregado.	1,007,546.0
02. Impuesto especial sobre producción y servicios:	515,733.5
01. Combustibles automotrices:	342,053.6
01. Artículo 2o., fracción I, inciso D).	313,321.0
02. Artículo 2o.-A.	28,732.6
02. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:	62,165.7
01. Bebidas alcohólicas.	18,888.4
02. Cervezas y bebidas refrescantes.	43,277.3

CÂMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

	03. Tabacos labrados.	43,679.4
	04. Juegos con apuestas y sorteos.	2,968.8
	05. Redes públicas de telecomunicaciones.	5,923.3
	06. Bebidas energetizantes.	11.6
	07. Bebidas saborizadas.	28,660.5
	08. Alimentos no básicos con alta densidad calórica.	23,783.2
	09. Plaguicidas.	758.1
	10. Combustibles fósiles.	5,729.3
	03. Impuesto sobre automóviles nuevos.	10,776.3
14.	Impuestos al Comercio Exterior:	70,984.6
	01. Impuestos al comercio exterior:	70,984.6
	01. A la importación.	70,984.6
	02. A la exportación.	0.0
15.	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables.	
16.	Impuestos Ecológicos.	
17.	Accesorios de impuestos:	41,210.2
	01. Accesorios de impuestos.	41,210.2
18.	Otros impuestos:	6,850.3
	01. Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.	6,850.3
	02. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación.	0.0
19.	Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	-130.8
2.	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**374,003.2**
21.	Aportaciones para Fondos de Vivienda.	0.0
	01. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.	0.0
22.	Cuotas para la Seguridad Social.	374,003.2

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

	01. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores.	374,003.2
	23. Cuotas de Ahorro para el Retiro.	0.0
	01. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones.	0.0
	24. Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social:	0.0
	01. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores.	0.0
	02. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares.	0.0
	25. Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.	0.0
3.	**Contribuciones de Mejoras**	**44.8**
	31. Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas:	44.8
	01. Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.	44.8
	39. Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
4.	**Derechos**	**52,256.8**
	41. Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público:	43,325.8
	01. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	346.2
	02. Secretaría de la Función Pública.	0.0
	03. Secretaría de Economía.	2,670.7
	04. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	8,748.2
	05. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	12,361.9
	06. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	72.3
	07. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	0.0
	08. Secretaría de Educación Pública.	0.2

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

09.	Instituto Federal de Telecomunicaciones.	19,126.3
10.	Secretaría de Cultura	0.0
43.	Derechos por Prestación de Servicios:	8,931.0
01.	Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público:	8,931.0
01.	Secretaría de Gobernación.	91.1
02.	Secretaría de Relaciones Exteriores.	4,915.0
03.	Secretaría de la Defensa Nacional.	145.5
04.	Secretaría de Marina.	445.0
05.	Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	588.6
06.	Secretaría de la Función Pública.	23.0
07.	Secretaría de Energía.	0.2
08.	Secretaría de Economía.	21.9
09.	Secretaría de Agricultura, y Desarrollo Rural.	42.9
10.	Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	1,081.6
11.	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	85.1
01.	Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
02.	Otros.	85.1
12.	Secretaría de Educación Pública.	1,255.9
13.	Secretaría de Salud.	0.0
14.	Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	9.4
15.	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.	61.1
16.	Secretaría de Turismo.	0.0
17.	Fiscalía General de la República.	0.0
18.	Instituto Federal de Telecomunicaciones.	30.1
19.	Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

20.	Comisión Reguladora de Energía.	0.0
21.	Comisión Federal de Competencia Económica.	0.0
22.	Secretaría de Cultura.	58.4
23.	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	76.2
44.	Otros Derechos.	0.0
45.	Accesorios de Derechos.	0.0
49.	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
5.	**Productos**	**10,095.3**
51.	Productos.	10,095.3
01.	Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público.	8.8
02.	Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público:	10,086.5
01.	Explotación de tierras y aguas.	0.0
02.	Arrendamiento de tierras, locales y construcciones.	0.3
03.	Enajenación de bienes:	1,859.6
01.	Muebles.	1,743.5
02.	Inmuebles.	116.1
04.	Intereses de valores, créditos y bonos.	7,687.4
05.	Utilidades:	539.1
01.	De organismos descentralizados y empresas de participación estatal.	0.0
02.	De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.	0.0
03.	De Pronósticos para la Asistencia Pública.	538.6
04.	Otras.	0.5
06.	Otros.	0.1
59.	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos	0.0

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.

6.	**Aprovechamientos**		**98,674.4**
	61.	Aprovechamientos:	98,639.0
		01. Multas.	2,190.5
		02. Indemnizaciones.	2,531.7
		03. Reintegros:	166.5
		01. Sostenimiento de las escuelas artículo 123.	0.0
		02. Servicio de vigilancia forestal.	0.1
		03. Otros.	166.4
		04. Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica.	94.8
		05. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación.	0.0
		06. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación.	0.0
		07. Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del Sistema Escolar Federalizado.	0.0
		08. Cooperación de la Ciudad de México por servicios públicos locales prestados por la Federación.	0.0
		09. Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de particulares para alcantarillado, electrificación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas.	0.0
		10. 5 por ciento de días de cama a cargo de establecimientos particulares para internamiento de enfermos y otros destinados	0.0

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

	a la Secretaría de Salud.	
11.	Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica.	947.8
12.	Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.	1,129.7
13.	Regalías provenientes de fondos y explotación minera.	0.0
14.	Aportaciones de contratistas de obras públicas.	7.6
15.	Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal:	0.5
	01. Aportaciones que efectúen los Gobiernos de la Ciudad de México, Estatales y Municipales, los organismos y entidades públicas, sociales y los particulares.	0.0
	02. De las reservas nacionales forestales.	0.0
	03. Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.	0.0
	04. Otros conceptos.	0.5
16.	Cuotas Compensatorias.	142.4
17.	Hospitales Militares.	0.0
18.	Participaciones por la explotación de obras del dominio público señaladas por la Ley Federal del Derecho de Autor.	0.0
19.	Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal.	0.0
20.	Provenientes del programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras.	0.0
21.	No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios.	0.0
22.	Otros:	91,427.5

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

01.	Remanente de operación del Banco de México.	0.0
02.	Utilidades por Recompra de Deuda.	0.0
03.	Rendimiento mínimo garantizado.	0.0
04.	Otros.	91,427.5
23.	Provenientes de servicios en materia energética:	0.0
01.	Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
02.	Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0
03.	Comisión Reguladora de Energía.	0.0
62.	Aprovechamientos Patrimoniales.	35.4
01.	Recuperaciones de capital:	35.4
01.	Fondos entregados en fideicomiso, a favor de Entidades Federativas y empresas públicas.	27.6
02.	Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas privadas y a particulares.	7.8
03.	Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.	0.0
04.	Desincorporaciones.	0.0
05.	Otros.	0.0
63.	Accesorios de Aprovechamientos.	0.0
69.	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
7.	**Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**	**1,065,166.0**
71.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social:	72,232.9
01.	Instituto Mexicano del Seguro Social.	26,920.2
02.	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.	45,312.7

72.	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado:	992,933.1
	01. Petróleos Mexicanos.	574,535.0
	02. Comisión Federal de Electricidad.	418,398.1
73.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.	
74.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.	
75.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	
76.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	
77.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.	
78.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos.	
79.	Otros Ingresos.	
8.	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**	
81.	Participaciones.	
82.	Aportaciones.	
83.	Convenios.	
84.	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.	
85.	Fondos Distintos de Aportaciones.	
9.	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y**	**412,797.7**

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
91.	Transferencias y Asignaciones.	0.0
93.	Subsidios y Subvenciones.	0.0
95.	Pensiones y Jubilaciones.	0.0
97.	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.	412,797.7
01.	Ordinarias.	412,797.7
02.	Extraordinarias.	0.0
0.	**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**584,456.8**
01.	Endeudamiento interno:	569,582.1
01.	Endeudamiento interno del Gobierno Federal.	532,266.1
02.	Otros financiamientos:	37,316.0
01.	Diferimiento de pagos.	37,316.0
02.	Otros.	0.0
02.	Endeudamiento externo:	0.0
01.	Endeudamiento externo del Gobierno Federal.	0.0
03.	Financiamiento Interno.	
04.	Déficit de organismos y empresas de control directo.	-47,748.8
05.	Déficit de empresas productivas del Estado.	62,623.5
Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal (0.01.01+0.02.01)		532,266.1

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este precepto.

Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal de 2020, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por

contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos.

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2020, se proyecta una recaudación federal participable por 3 billones 394 mil 236.7 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal de 2020, el gasto de inversión del Gobierno Federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto.

Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2020, en términos monetarios, el pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, previsto en la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 895.1 millones de pesos.

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el artículo Segundo Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho Transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados.

En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por parte del Ejecutivo Federal, de los bienes y derechos del fideicomiso referido en el primer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en cuentas de orden, con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo esas operaciones.

El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará en primer término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las operaciones referidas en el párrafo anterior y, posteriormente, se destinarán para restituir al Gobierno Federal los recursos públicos aportados para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto.

Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2020 se destinen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del ejercicio fiscal de 2020, se instrumenten para potenciar los recursos que, con cargo a dicho fondo, reciben las entidades federativas.

Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El gasto de inversión a que se refiere el párrafo sexto del presente artículo se reportará en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de los ingresos generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.61.22.04 del presente artículo por concepto de otros aprovechamientos. Asimismo, deberá informar los destinos específicos que, en términos del artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan dichos aprovechamientos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2020, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Durante el ejercicio fiscal 2020, los ingresos propios de Petróleos Mexicanos que se generen por un precio promedio anual del barril del petróleo crudo mexicano que exceda de 49.01 dólares de los Estados Unidos de América y hasta los 55.00 dólares de los Estados Unidos de América, deberá destinarlos a mejorar su meta de balance financiero aprobada en el artículo 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 532 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones constitutivas de deuda

pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo.

Las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior no deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para el ejercicio fiscal de 2020.

Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente

se podrán aplicar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario incluyendo sus artículos transitorios. Sobre estas operaciones de canje y refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión.

El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta propia con los valores referidos.

En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos en la cuenta que, para tal efecto, le lleve el Banco de México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el citado Banco procurará las mejores condiciones para el mencionado Instituto dentro de lo que el mercado permita.

El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco de México podrá ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Titular de dicha Tesorería, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo.

Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores un monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el Resultado de Operación que considera la Constitución Neta de Reservas Crediticias Preventivas, de cero pesos para el ejercicio fiscal de 2020.

El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización del órgano de gobierno de la entidad de que se trate y con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los montos establecidos en el artículo 1o., numeral 0 "Ingresos derivados de Financiamientos" de esta Ley, así como el monto de endeudamiento neto interno consignado en este artículo, se verán, en su caso, modificados en lo conducente como resultado de la distribución, entre el Gobierno Federal y los organismos y empresas de control directo, de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 1 mil 250 millones de dólares de los Estados Unidos de América; asimismo, se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

Se autoriza para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 835 millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de 508 millones de

dólares de los Estados Unidos de América, asimismo se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

El cómputo de lo establecido en los dos párrafos anteriores se realizará en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión de manera trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento.

Artículo 3o. Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020. Asimismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar operaciones de canje, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública de la Ciudad de México.

El ejercicio del monto de endeudamiento autorizado se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 4o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 257,138.2 millones de pesos, de los cuales 100,344.1 millones de pesos corresponden a inversión directa y 156,794.1 millones de pesos a inversión condicionada.

Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad en los términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV, del Reglamento de este último ordenamiento, por un total de 2,760.7 millones de pesos que corresponde a un proyecto de inversión directa.

Artículo 6o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y/o sus empresas productivas subsidiarias deberán presentar las declaraciones, hacer los pagos y cumplir con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, ante la Tesorería de la Federación, a través del esquema para la presentación de declaraciones que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida, previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las modificaciones a los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los pagos establecidos conforme al párrafo anterior, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente a aquél en que se generen dichas modificaciones, así como en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga uso de las

facultades otorgadas en el segundo párrafo de este artículo, los pagos correspondientes deberán ser transferidos y concentrados en la Tesorería de la Federación por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a más tardar el día siguiente de su recepción, a cuenta de la transferencia a que se refiere el artículo 16, fracción II, inciso g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos que, hasta antes de la entrada en vigor del "Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en términos del artículo 32 de dicha Ley, serán registrados como inversión.

Capítulo II
De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales

Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:

I. Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate:

1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26 por ciento mensual.

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53 por ciento mensual.

3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.82 por ciento mensual.

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización realizada conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos y disposiciones de carácter general expedidos en el Ramo de Hacienda, de las que hayan derivado beneficios otorgados en términos de la presente Ley, así como por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2020, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen.

Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se estará a lo siguiente:

I. La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, aprovechamiento

o explotación de bienes o por la prestación de servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, de similares características, en países con los que México mantiene vínculos comerciales.

II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica y de saneamiento financiero.

III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general.

Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública Federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los aprovechamientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los aprovechamientos que perciba la dependencia correspondiente.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por dicha Secretaría, ya sea de los ingresos que obtengan o con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, o tratándose de recuperaciones de capital o del patrimonio, según sea el caso, los recursos correspondientes se destinarán por la propia Secretaría prioritariamente a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a fomentar acciones que les permitan cumplir con sus respectivos mandatos, o a programas y proyectos de inversión, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente Ley.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de cualquier otra entidad paraestatal distinta de las señaladas en el párrafo anterior, dichos ingresos serán enterados a la Tesorería de la Federación bajo dicha naturaleza, a efecto de que sean destinados a programas presupuestarios que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él deriven.

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 1o., numerales 6.61.11, 6.62.01.04 y 6.61.22.04 de esta Ley por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, aquéllos a que se refieren la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley Federal de Competencia Económica, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo en los plazos que para tales efectos se fijen, el prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación de que se trate, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos.

El prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por aprovechamientos, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de carácter particular, las cuotas de los productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal de 2020, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los productos que se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los productos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332

Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019 hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones efectuadas tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como por el Instituto de Administración de Bienes y Activos y los accesorios de los productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en un fondo, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal conforme a las disposiciones fiscales, que hayan sido transferidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la citada entidad transferente, sobre bienes de la

misma naturaleza; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en el fondo señalado en el párrafo anterior, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. Un mecanismo como el previsto en el presente párrafo, se podrá aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que, por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deba realizar. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el Instituto de Administración de Bienes y Activos remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados y a su Coordinadora de Sector, un informe que contenga el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las autoridades mencionadas en los párrafos citados.

Los ingresos netos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos se podrán destinar hasta en un 100 por ciento a financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como para el pago de los créditos que hayan sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, siempre que en el acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el convenio que al efecto se celebre se señale dicha situación. Lo anterior no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados a que se refiere el décimo tercer párrafo del artículo 13 de esta Ley. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes en proceso de extinción de dominio y de aquellos sobre los que sea declarada la extinción de dominio y de sus frutos, así como su monetización en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, serán destinados a una cuenta especial en los términos que establece el artículo 239 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, previa deducción de los

conceptos previstos en los artículos 234 y 237 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por productos, así como de la concentración efectuada a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 12. Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2020 se concentrarán en términos del artículo 22 de la Ley de Tesorería de la Federación, salvo en los siguientes casos:

I. Se concentrarán en la Tesorería de la Federación, a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción, los derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, incluidos entre otros las sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, así como los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

II. Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional, sólo registrarán los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente de esta Ley, salvo por lo dispuesto en la fracción I de este artículo, y deberán

conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos.

Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere esta fracción, se deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, de los informes avalados por el órgano interno de control o de la comisión respectiva del órgano de gobierno, según sea el caso, especificando los importes del impuesto al valor agregado que hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de los ingresos;

III. Las entidades de control indirecto deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en posibilidad de elaborar los informes trimestrales que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reflejen dentro de la Cuenta Pública Federal;

IV. Los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, podrán ser recaudados por las oficinas de los propios institutos o por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la Cuenta Pública Federal, y

V. Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio de la concentración en términos de la Ley de Tesorería de la Federación.

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere esta fracción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de que dichos ingresos hayan sido concentrados en la Tesorería de la Federación.

Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos.

Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se destinarán a las entidades o a las empresas productivas del Estado que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza. Las entidades o las empresas productivas del Estado podrán celebrar convenios de colaboración con la iniciativa privada.

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.

Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en la fracción que les corresponda conforme al citado artículo.

Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de concentrar los recursos públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la Federación, en los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato

análogo, así como aquellos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según su origen, y se podrán destinar a los fines que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento correspondiente. Asimismo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 6.62.01.04 del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes.

Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son accesorios.

Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán los netos que resulten de restar al ingreso percibido las erogaciones efectuadas para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a que se refiere el párrafo siguiente.

Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales son los recursos efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra

índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas. Con excepción de lo dispuesto en el séptimo párrafo de este artículo para los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, los ingresos netos a que se refiere este párrafo se enterarán o concentrarán, según corresponda, en la Tesorería de la Federación y deberán manifestarse tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo acciones, por la enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión de derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la desincorporación de entidades, se les podrá descontar un porcentaje, por concepto de gastos indirectos de operación, que no podrá ser mayor del 7 por ciento, a favor del Instituto de Administración de Bienes y Activos, cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la citada entidad, y se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos podrán destinarse para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente con la opinión favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, sin que sea necesario concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Estos recursos deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica.

Los pasivos a cargo de organismos descentralizados en proceso de

desincorporación que tengan como acreedor al Gobierno Federal, con excepción de aquéllos que tengan el carácter de crédito fiscal, quedarán extinguidos de pleno derecho sin necesidad de autorización alguna, y los créditos quedarán cancelados de las cuentas públicas.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, podrán permanecer afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. No se considerará enajenación la transmisión de bienes y derechos al Fondo de Desincorporación de Entidades que, con la opinión favorable de dicha Comisión, efectúen las entidades en proceso de desincorporación, para concluir las actividades residuales del proceso respectivo.

Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos remanentes que les correspondan de dichos procesos ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, como parte de la estrategia de conclusión de los procesos de desincorporación de entidades, entre el Instituto de Administración de Bienes y Activos y las entidades cuyos procesos de desincorporación concluyeron, podrán ser utilizados por éste, para sufragar las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, relativo a la atención de encargos bajo su administración, cuando éstos sean deficitarios. Lo anterior, estará sujeto, al cumplimiento de las directrices que se emitan para tal efecto, así como a la autorización de la Junta de Gobierno del Instituto de Administración de Bienes y Activos, previa aprobación de los órganos colegiados competentes.

Los ingresos obtenidos por la venta de bienes asegurados a favor del Gobierno Federal, incluyendo numerario, cuya administración y destino hayan sido encomendados al Instituto de Administración de Bienes y Activos, en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, serán destinados a un fondo en los términos del artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, previa deducción de

los conceptos previstos en los artículos 90, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Los ingresos provenientes de numerario y de la enajenación de bienes que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos, que hayan sido declarados abandonados por parte de las instancias competentes, distintos a los señalados en el párrafo décimo quinto del presente artículo y que se concentren a la Tesorería de la Federación, se considerarán aprovechamientos y se destinarán al financiamiento de las operaciones del Instituto, en términos de lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 89, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

El numerario decomisado y los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y previa deducción de los gastos indirectos de operación que correspondan, se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al Fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, u otras políticas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la presente Ley.

Los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, serán integrados al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley citada.

Los ingresos provenientes de la enajenación que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos de vehículos declarados abandonados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha dependencia, se destinarán de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. De la cantidad restante a los permisionarios federales se les cubrirán los adeudos generados hasta con el treinta por ciento de los remanentes de los ingresos y el resto se enterará a la Tesorería de la Federación. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 14. Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, entre las que se comprende de manera enunciativa a las siguientes:

I. Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los términos de dichas disposiciones.

Artículo 15. Durante el ejercicio fiscal de 2020, los contribuyentes a los que se les impongan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del citado Código, independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente.

Cuando los contribuyentes a los que se les impongan multas por las infracciones señaladas en el párrafo anterior corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su caso, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación o se notifique la resolución provisional a que se refiere el artículo 53-B, primer párrafo, fracción I del citado Código, pero antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 53-B, los contribuyentes pagarán el 60 por ciento de la multa que les corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior.

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2020, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que adquieran el diésel o el biodiésel y sus mezclas, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos y que para determinar su utilidad puedan deducir dichos combustibles cuando los importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles, en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1; subinciso c) o numeral 2, según corresponda al tipo de combustible, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la

enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante fiscal de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

1. El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o el biodiésel y sus mezclas, por el número de litros de diésel o de biodiésel y sus mezclas importados o adquiridos.

   En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.

2. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en dichas actividades, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en aduana del pedimento de importación o el precio consignado en el comprobante fiscal de adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas en las estaciones de servicio, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

III. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final en dichas actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. En

ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de los artículos 74 y 75 del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2020 y enero de 2021.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diésel o de biodiésel y sus mezclas, en el que asienten mensualmente la totalidad del diésel o del biodiésel y sus mezclas que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diésel o el biodiésel y sus mezclas que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diésel o del biodiésel y sus mezclas utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de estos combustibles en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación.

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda según el tipo de combustible, conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que, en su

caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el número de litros importados o adquiridos.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago por la importación o adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas a distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: monedero electrónico autorizado por el Servicio de Administración Tributaria; tarjeta de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante, o bien, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México.

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de

importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, se entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal, relacionados con sus actividades económicas, sin que por ello se genere un cobro.

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura mencionada hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se realicen los gastos a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación del beneficio contenido en esta fracción.

VI. Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que en su proceso productivo no se destinen a la combustión.

El estímulo fiscal señalado en esta fracción será igual al monto que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda, por la cantidad del combustible consumido en un mes, que no se haya sometido a un proceso de combustión.

El monto que resulte conforme a lo señalado en el párrafo anterior únicamente podrá ser acreditado contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se adquieran los combustibles a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización del combustible no sujeto a un proceso de combustión por tipos de industria, respecto de los litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible de que se trate, adquiridos en un mes de calendario, así como las demás

disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal.

VII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de pesos, consistente en permitir el acreditamiento del derecho especial sobre minería a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos que hayan pagado en el ejercicio de que se trate.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción, únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tengan los concesionarios o asignatarios mineros a su cargo, correspondiente al mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación de esta fracción.

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV, V, VI y VII de este apartado quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto señalen.

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente apartado no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido en esta Ley.

Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos establecidos en la presente Ley.

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno de ellos se establece en la presente Ley.

B. En materia de exenciones:

Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo.

Artículo 17. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a empresas productivas del Estado, organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza.

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.

Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Artículo 18. Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los tribunales administrativos, los órganos autónomos por disposición constitucional, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades, se deberán aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados de la dependencia en la Ley de Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados efectuados por dicha dependencia a la Tesorería de la Federación, en el periodo que corresponda.

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades.

Artículo 19. Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican de la siguiente manera:

I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se generan en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades relacionadas directamente con las funciones recurrentes de la institución.

II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los

ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades que no guardan relación directa con las funciones recurrentes de la institución.

III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con las atribuciones de la dependencia o entidad, tales como la recuperación de seguros, los donativos en dinero y la enajenación de bienes muebles.

IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como de los tribunales administrativos y de los órganos constitucionales autónomos. No se incluyen en esta fracción los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ni aquéllos por concepto de derechos y aprovechamientos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, los cuales se sujetan a lo dispuesto en el artículo 12, fracción I, de esta Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades a más tardar el último día hábil de enero de 2020 y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se modifiquen.

Los ingresos a que se refiere la fracción III de este artículo se aplicarán en los términos de lo previsto en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 20. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal de 2020 la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 1.45

por ciento. La metodología para calcular dicha tasa es la siguiente:

I. Se determinó la tasa de rendimiento promedio ponderado de los valores públicos por el periodo comprendido de febrero a julio de 2019, conforme a lo siguiente:

a) Se tomaron las tasas promedio mensuales por instrumento, de los valores públicos publicados por el Banco de México.

b) Se determinó el factor de ponderación mensual por instrumento, dividiendo las subastas mensuales de cada instrumento entre el total de las subastas de todos los instrumentos públicos efectuadas al mes.

c) Para calcular la tasa ponderada mensual por instrumento, se multiplicó la tasa promedio mensual de cada instrumento por su respectivo factor de ponderación mensual, determinado conforme al inciso anterior.

d) Para determinar la tasa ponderada mensual de valores públicos se sumó la tasa ponderada mensual por cada instrumento.

e) La tasa de rendimiento promedio ponderado de valores públicos correspondiente al periodo febrero a julio de 2019 se determinó con el promedio simple de las tasas ponderadas mensuales determinadas conforme al inciso anterior del mencionado periodo.

II. Se tomaron las tasas promedio ponderadas mensuales de valores privados publicadas por el Banco de México y se determinó el promedio simple de dichos valores correspondiente al periodo de febrero a julio de 2019.

III. Se determinó un factor ponderado de los instrumentos públicos y privados en función al saldo promedio en circulación de los valores públicos y privados correspondientes al periodo de febrero a julio de 2019 publicados por el Banco de México.

IV. Para obtener la tasa ponderada de instrumentos públicos y privados, se multiplicaron las tasas promedio ponderadas de valores públicos y privados, determinados conforme a las fracciones I y II, por su respectivo factor de

ponderación, determinado conforme a la fracción anterior, y posteriormente se sumaron dichos valores ponderados.

V. Al valor obtenido conforme a la fracción IV se disminuyó el valor promedio de la inflación mensual interanual del índice general correspondiente a cada uno de los meses del periodo de febrero a julio de 2019 del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

VI. La tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el valor obtenido conforme a la fracción V de este artículo por la tasa correspondiente al último tramo de la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 22. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por el incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades competentes, con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de 1 hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con base en los criterios que se establezcan para tal efecto, los cuales podrán considerar, entre otros, los días de atraso en la atención de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los requerimientos que se hubieran incumplido, o la probable afectación de los intereses patrimoniales de los clientes o usuarios de los servicios financieros.

Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al terrorismo, cometidas por las entidades financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y asesores en inversiones, serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del reporte de la operación inusual que no se hubiera enviado, del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario de la que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas conforme a las disposiciones señaladas anteriormente, o bien con multa equivalente en moneda nacional de 10 hasta 100,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el caso de cualquier otro incumplimiento a las referidas

disposiciones.

Artículo 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios que, en su caso, corresponda a las actividades mencionadas, mediante la aplicación del esquema de estímulos siguiente:

I. Calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma siguiente:

a) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado en el bimestre de que se trate, considerando el giro o actividad a la que se dedique el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

	Sector económico	Porcentaje IVA (%)
1	Minería	8.0
2	Manufacturas y/o construcción	6.0
3	Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles)	2.0
4	Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares en que se proporcionen servicios de alimentos y bebidas)	8.0
5	Negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y/o medicinas	0.0

Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores económicos mencionados en los numerales 1 a 4 aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante. Se

entiende por sector preponderante aquél de donde provenga la mayor parte de los ingresos del contribuyente.

b) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios en el bimestre de que se trate, considerando el tipo de bienes enajenados por el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar

Descripción	Porcentaje IEPS (%)
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea comercializador)	1.0
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea fabricante)	3.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea comercializador)	10.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea fabricante)	21.0
Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante)	4.0
Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante)	10.0
Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador)	1.0
Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el contribuyente sea fabricante)	23.0
Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante)	120.0

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente

artículo, cuando hayan pagado el impuesto especial sobre producción y servicios en la importación de tabacos labrados y bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos C) y G) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, considerarán dicho pago como definitivo, por lo que ya no pagarán el impuesto que trasladen en la enajenación de los bienes importados, siempre que dicha enajenación se efectúe con el público en general.

c) El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta fracción será el monto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios, en su caso, a pagar por las actividades realizadas con el público en general, sin que proceda acreditamiento alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente.

d) El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios deberá realizarse por los períodos y en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades realizadas con el público en general, aquéllas por las que se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado.

Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su deducción o acreditamiento, en donde se traslade en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, dichos impuestos deberán pagarse en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones aplicables, conjuntamente con el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios

determinado conforme al inciso c) de esta fracción.

Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios será aplicable, cuando proceda, en la proporción que represente el valor de las actividades por las que se expidieron comprobantes fiscales en las que se haya efectuado el traslado expreso y por separado, en el valor total de las actividades del bimestre que corresponda.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta fracción podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso deberán calcular y pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según se trate, a partir del bimestre en que abandonen la opción. En este caso, los contribuyentes no podrán volver a ejercer la opción prevista en el presente artículo.

II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las actividades realizadas con el público en general en las que determinen el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios con el esquema de porcentajes a que se refiere la fracción I del presente artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente:

a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según corresponda al número de años que tenga el contribuyente tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal:

TABLA

Años	Porcentaje de reducción (%)
1	100
2	90

3	80
4	70
5	60
6	50
7	40
8	30
9	20
10	10

Para los efectos de la aplicación de la tabla el número de años de tributación del contribuyente se determinará de conformidad con lo que al respecto se considere para los efectos del impuesto sobre la renta.

Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, cuyos ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de trescientos mil pesos, durante cada uno de los años en que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será de 100 por ciento.

Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por tributar conforme al Régimen de Incorporación Fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán al monto establecido en dicho párrafo. Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto referido, en el ejercicio siguiente no se podrá tomar el beneficio del párrafo anterior.

b) La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de reducción a que se refiere el inciso anterior será acreditable únicamente contra el impuesto al valor agregado o el impuesto

especial sobre producción y servicios, según se trate, determinado conforme a la aplicación de los porcentajes a que se refiere la fracción I de este artículo.

III. El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo no se considerará como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.

IV. Se releva a los contribuyentes a que se refiere este artículo de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 24. Para los efectos del impuesto sobre la renta, se estará a lo siguiente:

I. Las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, siempre que dichos apoyos económicos o monetarios se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran zonas afectadas los municipios de los Estados afectados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que se listen en las declaratorias de desastre natural correspondientes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

II. Para los efectos de los artículos 82, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 138 de su Reglamento, se considera que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de dicha Ley, cumplen con el objeto social autorizado para estos efectos, cuando otorguen donativos a organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y cuyo objeto exclusivo sea realizar labores de rescate y

reconstrucción en casos de desastres naturales, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos, se deberá cumplir con lo siguiente:

1. Contar con autorización vigente para recibir donativos al menos durante los 5 años previos al momento en que se realice la donación, y que durante ese periodo la autorización correspondiente no haya sido revocada o no renovada.

2. Haber obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior cuando menos de 5 millones de pesos.

3. Auditar sus estados financieros.

4. Presentar un informe respecto de los donativos que se otorguen a organizaciones o fideicomisos que no tengan el carácter de donatarias autorizadas que se dediquen a realizar labores de rescate y reconstrucción ocasionados por desastres naturales.

5. No otorgar donativos a partidos políticos, sindicatos, instituciones religiosas o de gobierno.

6. Presentar un listado con el nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de las organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con la autorización para recibir donativos a las cuales se les otorgó el donativo.

b) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos, a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán cumplir con lo siguiente:

1. Estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

2. Comprobar que han efectuado operaciones de atención de desastres, emergencias o contingencias por lo menos durante 3

años anteriores a la fecha de recepción del donativo.

3. No haber sido donataria autorizada a la que se le haya revocado o no renovado la autorización.

4. Ubicarse en alguno de los municipios o en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de las zonas afectadas por el desastre natural de que se trate.

5. Presentar un informe ante el Servicio de Administración Tributaria, en el que se detalle el uso y destino de los bienes o recursos recibidos, incluyendo una relación de los folios de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y la documentación con la que compruebe la realización de las operaciones que amparan dichos comprobantes.

6. Devolver los remanentes de los recursos recibidos no utilizados para el fin que fueron otorgados a la donataria autorizada.

7. Hacer pública la información de los donativos recibidos en su página de Internet o, en caso de no contar con una, en la página de la donataria autorizada.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de esta fracción.

Capítulo III
De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento

Artículo 25. Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.

La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 de marzo de 2020.

Artículo 26. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresividad.

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Artículo 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores lo siguiente:

A. El Presupuesto de Gastos Fiscales, a más tardar el 30 de junio de 2020, que comprenderá los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2021 en los siguientes términos:

I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el Erario Federal.

II. La metodología utilizada para realizar la estimación.

III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida.

IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso.

V. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales.

B. Un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, a más tardar el 30 de septiembre de 2020, en el que se deberá señalar, para cada una la siguiente información:

I. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de nacionales.

II. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de extranjeros.

III. Ingresos por donativos recibidos en especie de nacionales.

IV. Ingresos por donativos recibidos en especie de extranjeros.

V. Ingresos obtenidos por arrendamiento de bienes.

VI. Ingresos obtenidos por dividendos.

VII. Ingresos obtenidos por regalías.

VIII. Ingresos obtenidos por intereses devengados a favor y ganancia cambiaria.

IX. Otros ingresos.

X. Erogaciones efectuadas por sueldos, salarios y gastos relacionados.

XI. Erogaciones efectuadas por aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,

y jubilaciones por vejez.

XII. Erogaciones efectuadas por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

XIII. Gastos administrativos.

XIV. Gastos operativos.

XV. Monto total de percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos.

El reporte deberá incluir las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los conceptos contenidos en los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en su Reglamento.

C. Para la generación del reporte a que se refiere el Apartado B de este artículo, la información se obtendrá de aquélla que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración de las personas morales con fines no lucrativos correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La información sobre los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos a que se refiere el Apartado B de este artículo, se obtendrá de los datos reportados a más tardar el 31 de julio de 2020, en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a que se refiere el artículo 82, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se entenderá por gastos administrativos y operativos lo siguiente:

I. Gastos administrativos: los relacionados con las remuneraciones al personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento y conservación, los impuestos y derechos federales o locales, así como las demás contribuciones y aportaciones que en términos de las disposiciones legales respectivas deba cubrir la donataria siempre que se efectúen en relación directa con las

oficinas o actividades administrativas, entre otros. No quedan comprendidos aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

II. Gastos operativos: aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

La información a que se refieren los Apartados B y C de este artículo, no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2o., fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Artículo 28. En el ejercicio fiscal de 2020, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente:

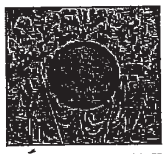
I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes.

II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.

III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización.

IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales.



COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años. Se deberá entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de Diputados.

CÂMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020, salvo lo dispuesto en el transitorio Séptimo, el cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto, mismo que será aplicable en el ejercicio fiscal de 2019 respecto de los recursos que las entidades federativas y municipios hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación en dicho ejercicio, correspondientes a ejercicios fiscales de 2017 y 2018.

Segundo. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se refiere el informe que, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha rendido el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2019.

Tercero. Para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se modifique la denominación de alguna dependencia o entidad o las existentes desaparezcan, se entenderá que los ingresos estimados para éstas en la presente Ley corresponderán a las dependencias o entidades cuyas denominaciones hayan cambiado o que absorban las facultades de aquéllas que desaparezcan, según corresponda.

Cuarto. Durante el ejercicio fiscal de 2020 el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013 continuará destinándose en los términos del citado precepto.

Quinto. Durante el ejercicio fiscal 2020 las referencias que en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, así como en los artículos 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 9 de diciembre de 2013 y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos se entenderán hechas también al Servicio de Administración Tributaria.

Sexto. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales la información sobre los ingresos excedentes que, en su caso, se hayan generado con respecto al calendario de ingresos derivado de la Ley de Ingresos de la Federación a que se refiere el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En este reporte se presentará la comparación de los ingresos propios de las entidades paraestatales bajo control presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado, así como del Gobierno Federal. En el caso de éstos últimos se presentará lo correspondiente a los ingresos provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Séptimo. Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido devengados y pagados en términos de los lineamientos que dicha dependencia emitirá para su operación a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2020 y demás disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado. Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas.

Para efectos de lo anterior, los aprovechamientos provenientes de los enteros que realicen las entidades federativas y municipios en términos del presente transitorio, respecto de ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor de las obligaciones de reintegro a la Tesorería de la Federación establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras, siempre y cuando dichas disponibilidades hayan estado

depositadas en cuentas bancarias de la entidad federativa y/o municipio.

Octavo. En el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria deberá publicar estudios sobre la evasión fiscal en México. En la elaboración de dichos estudios deberán participar instituciones académicas de prestigio en el país, instituciones académicas extranjeras, centros de investigación, organismos o instituciones nacionales o internacionales que se dediquen a la investigación o que sean especialistas en la materia. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio fiscal de 2020.

Noveno. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante el ejercicio fiscal 2020 y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requerirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de los pagos a que se refiere el párrafo anterior con cargo a las participaciones y transferencias federales, garantizando que las entidades federativas cuenten con solvencia para la atención de sus necesidades primordiales.

El Instituto, conforme a los modelos autorizados por su órgano de gobierno, podrá suscribir con las entidades federativas y, en su caso, los municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales que correspondan, los convenios para la regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos. El plazo máximo para cubrir los pagos derivados de dicha regularización será de 15 años. Asimismo, en adición a lo previsto en artículo 22 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el marco de la celebración de los referidos convenios, dicho Instituto deberá otorgar descuentos en los accesorios generados a las contribuciones adeudadas excepto los correspondientes a las cuotas y aportaciones que deban ser depositadas en las cuentas individuales de los trabajadores. Para tal

efecto, deberán adecuar los convenios de incorporación voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para incluir en el mismo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 204 de dicha Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá aceptar como fuente de pago bienes inmuebles que se considerarán como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse a las cuentas individuales de los trabajadores. El Instituto determinará si los bienes a los que se refiere este párrafo, resultan funcionales para el cumplimiento de su objeto, asegurándose que se encuentren libres de cualquier gravamen o proceso judicial y que el monto del adeudo no sea mayor al valor del avalúo efectuado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. En estos casos, la entidad federativa, municipio, dependencia o entidad del gobierno local, según corresponda, deberá cubrir los gravámenes y demás costos de la operación respectiva, los cuales no computarán para el cálculo del importe del pago.

Décimo. Las dependencias y entidades que coordinen la operación de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos, salvo los que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concentrarán en la Tesorería de la Federación, en términos de las disposiciones específicas que emita, los recursos públicos disponibles no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 en dichos vehículos, salvaguardando en todo momento los derechos de terceros.

Los aprovechamientos que se generen se destinarán a gasto de inversión así como a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Los programas de inversión deberán registrarse en la cartera de inversión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior no será obligatorio a los instrumentos jurídicos que por disposición expresa de ley los recursos públicos deban permanecer en el patrimonio o afectos a los mismos, así como a aquéllos en materia de pensiones y seguridad social, desastres naturales, infraestructura, estabilización de ingresos incluyendo al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y aquéllos que sirvan como mecanismo de garantía o fuente de pago de obligaciones a cargo del Gobierno Federal o sus entidades paraestatales.

Dicha dependencia deberá señalar en los informes trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas, sobre el monto y el destino que dé a los recursos utilizados conforme a lo previsto en este párrafo.

Asimismo, las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, un informe de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos susceptibles de extinguirse en términos de las disposiciones aplicables, lo anterior a efecto de que durante el ejercicio fiscal 2020 se lleven a cabo los actos necesarios para la extinción de dichos vehículos.

Décimo Primero. Los contratos de fideicomiso y mandato públicos deberán prever que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá disponer en cualquier momento del patrimonio de éstos, asimismo, deberán establecer la obligación de las instituciones fiduciarias o mandatarias, de concentrar trimestralmente en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos, los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado para el cumplimiento de su objeto, salvo disposición de carácter general en contrario.

Las instituciones fiduciarias o mandatarias de fideicomisos, mandatos o análogos públicos, deberán concentrar de forma trimestral en la Tesorería de la Federación los intereses generados por dichos instrumentos financieros, salvo aquéllos que impliquen el pago de gastos de operación de dichos vehículos, bajo la naturaleza de aprovechamientos, y se destinarán a gasto en salud o de inversión en infraestructura, lo anterior con excepción de aquellos vehículos financieros que por disposición expresa de ley, decreto o determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dichos recursos deban permanecer afectos a su patrimonio o destinados al objeto correspondiente. Para efectos de lo anterior, las dependencias coordinadoras de dichos vehículos deberán realizar los actos necesarios para modificar en el primer semestre del ejercicio fiscal los instrumentos jurídicos respectivos.

Décimo Segundo. Se instruye a la institución fiduciaria del fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria para que durante el mes de marzo del presente ejercicio, concentre en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos los recursos que integran el patrimonio fideicomitido a esa

fecha a fin de destinarlos, mediante el mecanismo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a proyectos de inversión de infraestructura económica para la construcción, ampliación o rehabilitación de puertos, así como para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros que mejoren la conectividad entre los puertos.

Para efectos de lo anterior, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el citado fideicomiso no podrá asumir compromisos adicionales y únicamente podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción, la cual deberá formalizarse a más tardar en el mes de junio del presente ejercicio fiscal. Las obligaciones asumidas que se tengan con terceros, serán cubiertas con cargo al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Décimo Tercero. Durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2020, la institución fiduciaria del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados deberá concentrar en la Tesorería de la Federación los recursos remanentes previstos en su patrimonio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, o bien, para los destinos establecidos en el Séptimo transitorio de esta Ley.

Décimo Cuarto. Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Comisión Federal de Electricidad podrá implementar programas de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica de entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y organismos públicos prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos, a través de la celebración de convenios con cualquiera de las personas morales de la administración pública antes mencionadas.

Los programas que se implementarán a través de la celebración de convenios a los que se refiere el párrafo anterior, se sujetarán, sin perjuicio de las demás disposiciones jurídicas aplicables, a las reglas de operación que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las cuales podrán

considerar las características del solicitante.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 18 de octubre de 2019

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

LEGISLADOR	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 **Dip. Patricia Terrazas Baca** Presidenta GPPAN			
 **Dip. Carol Antonio Altamirano** Secretario GPMORENA.			
 **Dip. Agustín García Rubio** Secretario GPMORENA.			
 **Dip. Benjamín Saúl Huerta Corona** Secretario GPMORENA			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

LEGISLADOR	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 **Dip. Carlos Javier Lamarque Cano** Secretario GPMORENA			
 **Dip. Marco Antonio Medina Pérez** Secretario GPMORENA			
 **Dip. Luis Fernando Salazar Fernández** Secretario GPMORENA			
 **Dip. Paola Tenorio Adame** Secretaria GPMORENA			
 **Dip. Ricardo Flores Suárez** Secretario GPPAN			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

LEGISLADOR	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 **Dip. José Isabel Trejo Reyes** Secretario GPPAN			
 **Dip. Carlos Alberto Valenzuela González** Secretario GPPAN			
 **Dip. Pedro Pablo Treviño Villarreal** Secretario GPPRI			
 **Dip. Óscar González Yáñez** Secretario GPPT			
 **Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla** Secretario GPMC			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

LEGISLADOR	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 **Dip. Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz** Secretario GPPES			
 **Dip. Carlos Alberto Puente Salas** Secretario GPPVEM			
 **Dip. Antonio Ortega Martínez** Secretario GPPRD			
 **Dip. Aleida Alavez Ruíz** Integrante MORENA			
 **Dip. Marco Antonio Andrade Zavala** Integrante MORENA			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

LEGISLADOR	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 **Dip. Ignacio Benjamín Campos Equihua** Integrante GPMORENA			
 **Dip. Higinio Del Toro Pérez** Integrante GPMC			
 **Dip. Rosalinda Domínguez Flores** Integrante GPMORENA			
 **Dip. Francisco Elizondo Garrido** Integrante GPMORENA			
 **Dip. Fernando Galindo Favela** Integrante GPPRI			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

LEGISLADOR	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 **Dip. Juanita Guerra Mena** Integrante GPMORENA			
 **Dip. Manuel Gómez Ventura** Integrante GPMORENA			
 **Dip. Pablo Gómez Álvarez** Integrante GPMORENA			
 **Dip. Adriana Lozano Rodríguez** Integrante GPPES			
 **Dip. José Rigoberto Mares Aguilar** Integrante GPPAN			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

LEGISLADOR	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 **Dip. Zaira Ochoa Valdivia** Integrante GPMORENA			
 **Dip. Alejandra Pani Barragán** Integrante GPMORENA			
 **Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada** Integrante GPPAN			
 **Dip. Javier Salinas Narváez** Integrante GPMORENA			
 **Dip. Reginaldo Sandoval Flores** Integrante GPPT			

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

LEGISLADOR	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 **Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez** Integrante GPPRI			
 **Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro** Integrante GPMORENA			

99 3

Morena

H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
SECRETARÍA TÉCNICA
18 OCT. 2019
RECIBIDO
SALÓN DE SESIONES
Nombre: Hora: 17:56

18 de Octubre de 2019.

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente reserva para modificar el artículo 16, apartado A, fracción V, primer párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Edgar N.

En el dictamen en estudio se establece en el artículo 16, apartado A, fracción V, primer párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, una limitante de ingresos menores a 60 millones de pesos para que los contribuyentes que se dediquen al trasporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como turístico que usen la Red Nacional de Autopistas de Cuota, puedan acogerse al estímulo fiscal consistente en permitir el acreditamiento contra el ISR del ejercicio, del 50% del gasto total erogado por ese concepto.

Se propone que no se aplique la limitante mencionada dada la importancia que tiene este sector en la economía del país.

La medida anterior hace necesario modificar la carátula de los ingresos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Conforme a lo anterior, el texto que se propone es el siguiente:

En votación económica, se acepta la modificación y se incorpora al dictamen. Octubre 17 del 2019

En votación nominal se emiten: trescientos treinta ocho en contra, dos en pro, cinco abstenciones Se desecha.

Propuesta de la Comisión dictaminadora	Debe decir
"Artículo 1.	**"Artículo 1.** .....

CONCEPTO				Ingreso Estimado
TOTAL				~~**6,103,317.4**~~
1.	**Impuestos**			~~**3,505,822.4**~~
	11.	Impuestos Sobre los Ingresos:		~~1,852,852.3~~
		01.	Impuesto sobre la renta.	~~1,852,852.3~~
6	**Aprovechamientos**			~~**98,674.4**~~
	61	Aprovechamientos:		~~98,639.0~~
		22	Otros:	~~91,427.5~~
			4 Otros.	~~91,427.5~~

CONCEPTO				Ingreso Estimado
TOTAL				**6,103,839.6**
1.	**Impuestos**			**3,501,344.6**
	11.	Impuestos Sobre los Ingresos:		1,848,374.5
		01.	Impuesto sobre la renta.	1,848,374.5
6	**Aprovechamientos**			**103,674.4**
	61	Aprovechamientos:		103,639.0
		22	Otros:	96,427.5
			4 Otros.	96,427.5

18 de Octubre de 2019.

...	...
...	...
...	...
Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2020, se proyecta una recaudación federal participable por 3 billones 394 mil 236.7 millones de pesos."	Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2020, se proyecta una recaudación federal participable por 3 billones 390 mil 269.9 millones de pesos."
...	

Retirado.
Octubre 17 del 2019

Dice dictamen	Debe decir
Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2020, se estará a lo siguiente:	**Artículo 16.** Durante el ejercicio fiscal de 2020, se estará a lo siguiente:
A. En materia de estímulos fiscales:	**A.** En materia de estímulos fiscales:
...	...
V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura mencionada hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de	**V.** Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, ~~que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos,~~ consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura **carretera de cuota** ~~mencionada~~ hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto. ~~El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que~~

18 de Octubre de 2019.

carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. ...	~~mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.~~ ...

Suscribe

Alfonso Ramírez

En votación económica, se acepta y se incorpora al dictamen. Octubre 17 de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México
18 de octubre de 2019

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno una reserva que consiste en adicionar una fracción VIII al apartado A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Con el propósito de preservar la cadena de libro es necesario fortalecer a las pequeñas y medianas librerías, las cuales constituyen un eslabón importante al acercar a todas las personas a los libros y fomentar la lectura. Mantener dichas librerías permite dar continuidad a espacio de fomento cultural, de convivencia, tolerancia y cohesión social.

En este contexto, existe un área de oportunidad para fomentar la permanencia de las librerías a lo largo del país, ya que uno de los puntos débiles de la lectura en México es la falta de acceso a los libros. En este contexto es de vital importancia otorgar un estímulo fiscal a las pequeñas y medianas librerías del país.

Por lo expuesto, la modificación propuesta queda como sigue:

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Dice dictamen	Debe decir
Artículo 16. . .	**Artículo 16. . .**
A. ...	**A. ...**
I. a VII. ...	**I. a VII. ...**
No existe texto	**VIII.** Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos, y que dichos ingresos obtenidos en el ejercicio por la enajenación de libros, periódicos y revistas represente al menos el 90% de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio de que se trate. El estímulo a que se refiere el párrafo anterior consiste en una deducción adicional para los efectos del impuesto

H. CÁMARA DE DIPUTADOS
SECRETARÍA DE LA MESA DIRECTIVA
SECRETARÍA TÉCNICA
18 OCT. 2019
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
Nombre: Hora: 13:45

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México
18 de octubre de 2019

...	sobre la renta, por un monto equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente. ...

Suscribe

Atentamente

Sergio Mayer Bretón
Diputado Federal

DIPUTADAS Y DIPUTADOS morena LXIV LEGISLATURA

H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
SECRETARÍA TÉCNICA
18 OCT. 2019 17:56
RECIBIDO
SALÓN DE SESIONES
Hora:

CÁMARA DE DIPUTADOS LXIV LEGISLATURA

Ciudad de México, 18 de octubre 2019

DIP. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE.

En votación económica, se acepta y se incorpora la adición. Octubre 17 del 2019.

Quien suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracción X; 109, 110 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía una **reserva al ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN V, PRIMER PÁRRAFO, del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020**, para quedar como sigue:

Dice	Debe Decir
Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2020, se estará a lo siguiente:	Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2020, se estará a lo siguiente:
A. En materia de estímulos fiscales:	A. En materia de estímulos fiscales:
I. a IV. ...	I. a IV. ...
V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores **a 60 millones de pesos**, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura mencionada hasta en un 50 por	V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a **300 millones de pesos**, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura mencionada hasta en un 50 por

DIPUTADAS Y DIPUTADOS morena LXIV LEGISLATURA

ciento del gasto total erogado por este concepto. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. ... ... VI. a VII. ... B. ...	ciento del gasto total erogado por este concepto. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad. ... ... VI. a VII. ... B. ...

SUSCRIBE

Mesa 6

32

Morena

H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
SECRETARÍA TÉCNICA
18 OCT. 2019 17:52
RECIBIDO
Nombre
Hora

Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de Octubre del 2019

DIP. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE.

Séptimo
Transitorio

En votación económica, se acepta y se incorpora al dictamen. Octubre 17 del 2019

Quien suscribe, Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 109 numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la siguiente reserva al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2020 el árticulo septimo, para quedar como sigue:

Edgar N.

TEXTO DEL DICTAMEN	PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Séptimo. Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado. Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para apoyar a las entidades federativas que	**Séptimo.** Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado. Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para apoyar a las entidades federativas que

presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas. (. . .)	presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas, **así como la atención de desastres naturales.** (. . .)

ATENTAMENTE



DIP. RAÚL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO

Actualización, Presentada en Tribuna.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2019.

En votación económica, se acepto y se integra al dictamen, Octubre 17 del 2019.

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández.
Señora Presidente de la Mesa Directiva.
Cámara de Diputados.
P r e s e n t e

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara el suscrito Diputado Federal integrante de Grupo Parlamentario de Morena, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, **la reforma del último párrafo del artículo décimo cuarto Transitorio de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, incluido en el *Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020***, emitido por la Comisión de Hacienda y Crédito Público para quedar como sigue:

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020

TEXTO DEL DICTAMEN	MODIFICACIÓN PROPUESTA
Décimo Cuarto.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Comisión Federal de Electricidad podrá implementar programas de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica de entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y organismos públicos prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos, a través de la celebración de convenios con cualquiera de las personas morales de la administración pública antes mencionadas.	...
Los programas que se implementarán a través de la celebración de convenios a los que se refiere el párrafo anterior, se sujetarán, sin perjuicio de las demás disposiciones jurídicas aplicables, a las reglas de operación que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las cuales	**Los programas serán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 y se implementarán a través de la celebración de convenios a los que se refiere el párrafo anterior, se sujetarán, sin perjuicio de las demás disposiciones jurídicas aplicables, a las reglas de operación que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar dentro**

podrán considerar las características del solicitante.	de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las cuales podrán considerar las características del solicitante, pudiéndose condonar el pago de hasta el 50 por ciento del adeudo, y que el resto de éste sea cubierto mediante parcialidades, y en caso de incumplimiento, los convenios permitirán que la Comisión Federal de Electricidad pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la compensación parcial a cargo de las partidas federales que le correspondan a las entidades federativas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo noveno de la Ley de Coordinación Fiscal y las disposiciones derivadas de éste, previendo que las entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México cuenten con solvencia para la atención de sus requerimientos de gasto público.

Suscribe,

Dip. Irineo Molina Espinoza

Dip. Aleida Alavez Ruiz

Dip. Ignacio Campos

H. CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA
SECRETARÍA TÉCNICA
18 OCT. 2019 17:56
RECIBIDO
SALÓN DE SESIONES
Hora:

18 de Octubre de 2019.

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito someter a la consideración del Pleno una reserva que consiste en adicionar una disposición transitoria a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Con el objeto generar incentivos a una cultura de legalidad y formalidad en la introducción de mercancías de procedencia extranjera, en particular de vehículos se estima necesario que el Congreso de la Unión emita disposiciones para facilitar a los ciudadanos que tienen un vehículo de procedencia extranjera, para que en cumplimiento de dichas disposiciones puedan acreditar la legal estancia de la referida mercancía.

El hecho de facilitar a los contribuyentes que cumplan con las disposiciones aduaneras vigentes, la introducción de un vehículo, permite fortalecer el cumplimiento, no solo de las normas tributarias, sino también el cumplimiento de las normas ambientales y de registro del parque vehicular ante las entidades federativas. También genera incentivos para eliminar que este tipo de vehículos se utilice en la comisión de delitos, y por lo tanto el programa también coadyuvará a generar incentivos en materia de seguridad pública.

Asimismo, al facilitarse los trámites a los contribuyentes se fomenta una cultura de la legalidad y un círculo virtuoso de competencia equitativa con el mercado nacional. En este sentido se propone adicionar una disposición transitoria Décimo Quinta de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020 que permita al congreso de la unión establecer una solución de manera adecuada el problema de los vehículos ilegales.

Por lo expuesto, la modificación propuesta queda como sigue:

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Debe decir:	Debe decir:
En votación nominal se emitieron trescientos dieciseis a favor, doce en abstención, y seis en contra, se **No existe correlativo** acepta y se incorpora al dictamen. En votación económica, se acepta y se incorpora al dictamen. Octubre 17 del 2019.	**Décimo Quinto.** Para efectos de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo de ocho meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión vehículos importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.

Suscribe

17-10-2019
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 258 votos en pro, 104 en contra y 2 abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates 17 de octubre de 2019.
Discusión y votación 17 de octubre 2019.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Diario de los Debates

Ciudad de México, jueves 17 de octubre de 2019

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Tiene la palabra por 10 minutos la diputada Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.

La diputada Patricia Terrazas Baca: Buenas tardes a todos y a todas. Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Patricia Terrazas Baca: Con el permiso de la Presidencia, estimados compañeros, diputadas y diputados. Me dirijo a esta soberanía, en nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para presentar el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, con el cual concluimos la parte de ingresos del paquete económico del próximo año.

En la elaboración del presente dictamen se tomó como base la iniciativa remitida por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre pasado, y pasó por un estudio, análisis y discusión al interior de la comisión y de los grupos parlamentarios para obtener el presente resultado.

La importancia del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación es porque contiene los conceptos bajo los cuales se recaudarán los recursos financieros necesarios para cubrir los gastos de la federación durante el próximo ejercicio fiscal.

En este sentido, el Ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión una iniciativa que contempla ingresos presupuestarios por 6 billones 96 mil 335.8 millones de pesos. Con una estimación de crecimiento económico en el rango de 1.5 a 2.5 por ciento del PIB, un tipo de cambio nominal de 20 pesos por dólar y un precio de barril de petróleo de 49 dólares.

De igual manera que en el resto de los dictámenes que comprenden la parte fiscal del paquete económico 2020 aprobados en la pasada sesión, en este dictamen se integran propuestas surgidas del ejercicio de parlamento abierto sobre el análisis del paquete económico 2020, celebrado en el seno de la comisión, en el que contamos con la participación de 74 ponentes, entre funcionarios públicos, especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y empresarios.

Derivado de la evaluación realizada por parte de los integrantes de esta comisión a los supuestos macroeconómicos que sirvieron de base para los pronósticos de ingresos, de esta comisión no se derivaron modificaciones, por lo que los ajustes que incluye la carátula son derivados de las modificaciones que se aprobaron en las Leyes de Miscelánea Fiscal a la Ley Federal de Derechos y a las precisiones realizadas a algunos estímulos contenidos en la Ley de Ingresos.

Al efecto, los ajustes son los siguientes. Se proponen las siguientes medidas que implican ingresos adicionales a los previstos en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 2020 por 6 mil 981.6 millones de pesos, por lo que los ingresos estimados en el ejercicio fiscal de 2020 serían de 6 billones 103 mil 317.4 millones de pesos.

1. Modificación de los estímulos fiscales establecidos en el artículo 16, apartado A, de la Ley de Ingresos de la Federación, fracciones I y III, relativos a diésel y biodiésel que utilizan las empresas en maquinarias, así como el estímulo de 50 por ciento del pago de cuotas de peaje pagadas en la red nacional de autopistas, aplicable al transporte de carga, turístico y de pasajeros, para que únicamente apliquen a empresas con ingresos brutos totales anuales menores a 60 millones de pesos.

Esto devuelve a los estímulos su sentido original de promover la formalidad entre las empresas de menor tamaño y vuelve más equitativa la estructura tributaria. Esta modificación estima ingresos adicionales netos de alrededor de 6 mil 396.6 millones de pesos.

2. Modificación de los derechos a que se refiere el artículo 232, apartado C, de la Ley Federal de Derechos. Y con eso se estiman ingresos adicionales de 585 millones de pesos, considerando un periodo transitorio de 180 días, durante los cuales los concesionarios instalarán medidores, requeridos por la nueva norma mexicana en la materia y que sirven para la aplicación de la modificación.

3. Por otro lado, esta dictaminadora coincide con la propuesta del Ejecutivo con relación a permitir que las entidades federativas y municipios puedan enterar a la Tesorería de la Federación las disponibilidades de recursos federales correspondientes a ejercicios fiscales anteriores a 2020.

Por ello, la comisión propone al pleno modificar dicha disposición, para que la Tesorería publique los lineamientos y esta disposición entre en vigor... de su publicación para ejercicios 2017 y 2018.

4. Esta comisión pone a consideración del pleno eliminar la referencia referida incluida en el artículo noveno transitorio, mediante la cual se pretendía permitir la aplicación de adeudos con el ISSSTE contra participaciones federales de las entidades federativas y municipios, sin que estuvieran condicionadas a la suscripción o actualización de convenio alguno entre entidades federativas y municipios con el ISSSTE.

5. Asimismo, se agrega un artículo decimocuarto a las disposiciones transitorias, mediante el cual se permite a la Comisión Federal de Electricidad la posibilidad de implementar un esquema de regularización de la cartera vencida por consumo de energía eléctrica.

Por su parte, el proyecto que se pone a su consideración autoriza al Ejecutivo federal para contraer un monto de endeudamiento neto interno por el orden de 532 millones de pesos y un endeudamiento externo neto de 5 mil 300 millones de dólares. Asimismo, el monto de endeudamiento de la Ciudad de México aprobado fue de cuatro mil millones de pesos para el financiamiento contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio de 2020.

Por otro lado, el proyecto contempla también la obligación del Ejecutivo federal para que entregue a más tardar el 30 de junio de 2020, el presupuesto de gastos fiscales a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

Se mantiene la obligación de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los informes trimestrales la información sobre los ingresos excedentes que en su caso se hayan generado con respecto al calendario de ingresos derivado de la Ley de Ingresos de la Federación presentando la comparación de los ingresos propios de las entidades.

Por lo anterior, es que los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público sometemos a este pleno el presente dictamen para su discusión. Es cuanto, señora presidente.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por cinco minutos cada uno.

Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, para fijar el posicionamiento de su grupo.

El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Antonio Ortega Martínez: Son tantos los desatinos y la incertidumbre que se concentra en la iniciativa de Ley de Ingresos enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión que es prácticamente imposible tener una opinión segura y positiva.

Son tantas y tan desafortunadas las ocurrencias presentadas en la miscelánea fiscal que no hay precedente en los últimos años y, por ello, no extrañan los múltiples y variados reclamos de organismos empresariales de emprendedores, de académicos, juristas, defensores de los derechos humanos, de contribuyentes, fiscalistas y penalistas.

Al igual que el año pasado, en apariencia se muestra un presupuesto responsable con un déficit público moderado, pero, en sus fundamentos, en los criterios de política económica se presentan supuestos ajenos a la realidad.

Me refiero en primer lugar a la incansable meta establecida de extracción petrolera de mil 951 barriles de petróleos diario, estimación defendida por Sener y el director de Pemex, contra una estimación a la baja de funcionarios de Hacienda en donde el presidente López Obrador decidió prestar oídos y razones a la primera propuesta.

Es irreal en los términos en que se ha planteado el plan de negocios de Pemex, por el número tan pequeño de campos a explorar, la pequeña inversión pública comprometida, la exclusión en la práctica de la inversión privada nacional y extranjera al cancelar las rondas de licitación, al negarse a emplear las mejores técnicas alternativas mundiales y al relajamiento del gobierno corporativo poblado, ahora, de directivos sin experiencias en los principales cargos de directivos de Pemex y en los órganos reguladores, y en pretender de manera fáctica, violentando la ley, derogar la última reforma energética para restaurar un monopolio que terminara por golpear gravemente las finanzas públicas y la economía de los mexicanos.

En segundo lugar, también yerran en establecer metas voluntaristas en la previsión del comportamiento de algunas variables fundamentales para el análisis de la actividad económica nacional. Se peca, o de gran ingenuidad o de una gran perversidad, porque de palabras se reconocen graves amenazas para nuestra estabilidad económica, tanto en el entorno internacional como en el plano nacional.

La posibilidad de una recesión el próximo año de nuestra economía es ya reconocida por el propio secretario de Hacienda, que hace unos cuantos días en Nueva York afirmó que le quitaba el sueño este riesgo, pero que México se estaba preparando para enfrentar una posible recesión.

Insisto, a pesar de identificar estos peligrosos riesgos, aunque todos los pronósticos de expertos de instituciones nacionales e internacionales coinciden en un crecimiento sensiblemente menor, la secretaría insiste en fijar un crecimiento del dos por ciento.

No deseamos un infausto futuro para las finanzas públicas del país, pero el gobierno no hace lo necesario para tener resultados positivos, si no rectifican el rumbo de la economía nacional y corrigen los errores cometidos en

el diseño y la implementación de las finanzas y las políticas públicas, no esperemos, compañeras y compañeros diputados, milagros.

Otro de los posibles impactos en los ingresos públicos es una baja en la calificación de la deuda de Pemex y como consecuencia de ello, en la deuda soberana. Los especialistas han señalado que se movería el alza del tipo de cambio y los intereses, una caída en un punto porcentual del PIB, impactando con ello los ingresos públicos.

Diputados, diputadas, hay estimaciones en esta Ley de Ingresos dudosas y erráticas, plataforma de producción y exportación de petróleo, el precio del petróleo. Cada dólar menos en un barril de petróleo significan 13 mil 600 millones de dólares menos.

La baja de la calificación de Pemex y la deuda soberana, las dudas en la firma del TMEC y la baja del crecimiento del PIB hacen que vamos a enfrentar el próximo año con grandes dificultades. Están...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado, su tiempo ha concluido.

El diputado Antonio Ortega Martínez: Termino, 10 segundos. Vamos a tomar ya de los fondos de estabilización 126 mil millones de pesos para arrancar con finanzas del próximo año y no alcanzarán los restos de los fondos de estabilización para completar el déficit que con toda seguridad vamos a tener en las estimaciones proyectadas. Gracias, presidenta, por su tolerancia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, llegamos a la aprobación de este dictamen de esta Ley de Ingresos para lo que será el próximo año. En este proceso, la Ley de Ingresos ha sido analizada por todas y todos nosotros. Y en este hemos tenido el privilegio de contar con la participación de los ciudadanos que aportaron propuestas e inquietudes en los foros de parlamento abierto, y juntos trabajamos en equipo para llegar a construir también esta ley.

Se tomaron en cuenta sus opiniones, sus inquietudes y se buscaron atender las más posibles que pudieran dar respuesta en este dictamen. Todas y todos queremos que le vaya bien a México. Todas y todos queremos brindarles un mejor futuro a las familias. Es nuestra responsabilidad como legisladores velar por los intereses de cada mexicana y cada mexicano.

Al aprobar el presente dictamen se define la política de ingresos del gobierno de la república que le permitirá enfrentar los grandes retos que tenemos para combatir la desigualdad y acelerar el crecimiento económico.

Entendemos y tenemos claro que se requiere de un manejo serio, de un manejo responsable en las finanzas públicas mediante un presupuesto que responda a esto con responsabilidad, que tenga como premisa la de mantener la estabilidad macroeconómica y contenido el crecimiento de la deuda.

Hay que tomar medidas en materia fiscal, sin duda, modernizar el marco tributario y adecuarlo a una realidad que cambia constantemente en el avance tecnológico. El trabajo hecho al interior de la Comisión de Hacienda tuvo como resultado que el ingreso estimado para el ejercicio fiscal 2020 sea de 6.1 billones de pesos, lo que representan 289 mil 25.70 millones de pesos más que lo aprobado en el año 2019.

Con los cambios realizados a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, se consiguieron casi 7 mil millones de pesos, 6 mil 981, de los cuales 6 mil 393 fueron gracias a los estímulos fiscales establecidos, referentes a las deducciones y acreditaciones por la adquisición de diésel y biodiesel para usarlos en maquinaria, transporte

terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, para que apliquen en empresas con ingresos brutos totales anuales menores a 60 millones de pesos.

Con esta simple acción estamos devolviendo a los estímulos su sentido original de promover la formalidad entre las empresas de menor tamaño y nos acercamos más a la meta de volver más equitativa la estructura tributaria.

Es de resaltar que los ingresos tributarios para 2020 serán mayores a los aprobados para 2019, por 217 millones de pesos, con medidas administrativas y combatiendo también frontalmente la evasión y elusión fiscal, es que estamos logrando el objetivo de fortalecer la recaudación de nuestro país.

En el Partido Verde vamos a acompañar la presente Ley de Ingresos, vamos a mantenernos unidos buscando la mejor oportunidad para México, de crecer en nuestra economía, de fortalecer.

Hoy México atraviesa por momentos complejos, no solamente en la parte económica, sino también en la parte social. Hoy México requiere de unidad, y es ahí donde desde el Partido Verde les decimos a todas y todos los mexicanos, que estamos dispuestos a trabajar en equipo por un mejor país, por fortalecerlo. Y cuenten con nosotros para ponerle altura de miras a estos momentos que enfrentamos, sin duda, complejos, pero que unidos, todas y todos los mexicanos, podremos salir adelante. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES, hasta por cinco minutos.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, este es un día muy importante para nuestro país, que lástima que ahora que estamos discutiendo la Ley de Ingresos tengamos tan poca asistencia de parte de los legisladores, que se nos olvide que quienes nos pagan son los ciudadanos, y tenemos que venir a legislar porque es nuestra responsabilidad. Muchas gracias.

Distinto a lo que muchos piensan, la realidad mexicana no puede ocultarse, es una realidad de carencias, de problemas, de violencia, que se resiste a disminuir la corrupción que vive a salto de mata para sobrevivir. Vivimos en un país donde históricamente nadie hizo los esfuerzos necesarios para respetar los derechos humanos, para garantizar que los derechos sociales realmente tuviesen el peso específico que requiere un país. Pero la realidad de México es también una que busca transformase, una que todos los días lucha por ser diferente. Transformar la realidad en algo mejor.

Y no es un tema de trámites ni de posiciones ni de colores ni de ideologías. Tenemos que distinguir con precisión quiénes han sido los culpables de lo que estamos viviendo hoy.

Como parte de la coalición que impulsa la cuarta transformación, en el PES tenemos muy claro que tenemos que ser honestos, que tenemos que decir la verdad, que debemos ser fuertes y no andarle mendigando ni regateando a la gente lo que por derecho le corresponde. No debemos hacer cosas buenas que parezcan malas, porque eso pervierte la relación entre la sociedad y el gobierno. No debemos incumplir promesas ni faltar a la palabra como sí lo hacían y lo han hecho muchos. Esas acciones nos dividen y nos alejan de las cosas importantes.

Para cambiar la historia de México, estamos conscientes de que hay que cambiar de fondo. Tenemos que ser lo suficientemente valientes para decirle al pueblo de México que, en algunos casos, nuestras decisiones no serán del agrado para muchos y para muchas.

Sin embargo, tenemos claro que este país solamente puede transitar si le hacemos el camino fácil, si la transformación realmente tiene objetivos claros. Para el PES por ello un ingreso confiable hará posible un presupuesto sólido, que es lo que todos buscamos. Si no, no estaríamos de manera convencida aquí. Un ingreso consciente es el inicio de un gasto público responsable.

Para solucionar los grandes problemas de México, desde nuestro punto, se requieren dos cosas: generar recursos donde todas y todos participen para eliminar la corrupción en el proceso de gasto. Por ello, votaremos a favor de esta Ley de Ingresos, porque es la mejor manera de enfrentar este mundo cambiante y una economía con una visión que, pareciera ser, nos acerca a la recesión.

Lo decimos de manera contundente: para 2020 se espera recaudar por el IEPS a bebidas saborizantes más de 28 mil 660 millones de pesos, pero en el Programa para la Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes solo se destinarán 519 millones. Ahí hay contradicciones. Votaremos a favor de la ley, pero dejando asentado públicamente lo siguiente.

Estabilidad sí, pero sin subejercicios. Estabilidad sí, pero con crecimiento económico. Estabilidad sí, pero no con más elefantes blancos, como los que nos heredaron. Estabilidad, disciplina fiscal y cero endeudamientos...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado, su tiempo ha concluido.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: –Sí, concluyo, presidenta–. Estabilidad, disciplina fiscal y cero endeudamientos, sí, pero siempre con el respeto pleno a las minorías y a la apertura al diálogo institucional. Por eso, mexicanas y mexicanos, es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Si bien los criterios generales de política económica en su conjunto hablan de una política fiscal responsable, algunos de sus indicadores estimados, como son, por ejemplo la estimación del crecimiento económico del dos por ciento, contrasta significativamente con la tasa que ha propuesto o calculado el Banco de México, que lo sitúa tan solo como expectativa de 1.3 por ciento.

De igual manera, el precio del petróleo, si bien repuntó por los acontecimientos ocurridos en Arabia Saudita, se prevé que va a la baja esencialmente en razón de la contracción de la demanda mundial, en virtud de la recesión económica mundial.

Si bien el superávit primario es acertado mantenerlo en 7.7 por ciento, el nivel de endeudamiento neto crece en seis por ciento, por arriba del crecimiento real de 0.9 por ciento de los ingresos.

Por ese motivo, si sumamos a lo anterior y el contraste lo contrastamos con la recaudación efectiva que se lleva durante los meses de 2019, podemos observar que la recaudación es menor a lo estimado en el Presupuesto Ingresos y Egresos el año pasado.

Por ese motivo, consideramos que las expectativas de ingresos no en todos los casos tienen las condiciones para cumplirse y esto va a generar un problema, porque como ustedes lo saben, el 70 u 80 por ciento de los ingresos de las entidades federativas representan las participaciones y el gasto federalizado.

Por ese motivo, tenemos un problema en el cálculo que ofrece esta Ley de Ingresos. Algunos de sus rubros están sobreestimados. Y será muy difícil que se cumpla a cabalidad con las expectativas que se están planteando.

Asimismo, queremos ser enfáticos en lo que representa la política de ingresos que se está refrendando el día de hoy. Con esta Ley de Ingresos tan solo llegaremos al 13.1 por ciento de ingresos tributarios con relación al PIB. Estamos hablando de tasas que nos asemejan o nos comparan con Nicaragua o con Guatemala, cuando el promedio de América Latina es superior al 18 por ciento.

Con estas tasas de captación de ingresos tributarios nuestro país continuará en una carencia crónica de recursos presupuestales, con una estructura de ingresos que reproduce añejas desigualdades. Un impuesto

sobre la renta, IVA, IEPS, que guardan dentro de su estructura profundos problemas de falta de proporcionalidad, por un parte, y de falta de gradualidad por otra.

Para combatir los grandes problemas nacionales que tiene nuestro país se requieren muchos más recursos presupuestales. Basta decir que las crecientes necesidades de pensiones, deuda pública y participaciones a las entidades federativas se llevan la parte más importante del presupuesto.

Quisiéramos señalar de manera muy clara que la estructura de la Ley de Ingresos que la mayoría de esa Cámara votó en contra en los años anteriores es exactamente la misma estructura de ingresos que el día de hoy se nos presenta.

Por si esto fuera poco, la disminución del impuesto sobre extracción de hidrocarburos...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado Bravo, permítame un segundo, por favor. Hago un llamado a la asamblea a guardar silencio y a ocupar sus lugares para poder escuchar con respeto y atención a los oradores.

Continúe, diputado Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: La estructura de la Ley de Ingresos que se nos presenta el día de hoy es la misma que hace tres, cuatro años, la que hoy es mayoría votó en contra en los anteriores presupuestos y, por si fuera poco, el impuesto por extracción de hidrocarburos baja de porcentaje, afectando la renta federal participable. Y se quita también el Fondo Minero.

Por esa razón, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que es una Ley de Ingresos insuficiente, con política estrictamente recaudatoria, con falta de estímulos y que abona a un mayor centralismo y a una falta de federalismo.

Invitamos a todos ustedes a preparar un verdadero cambio para el próximo año, ya que este año no se nos presenta sino la misma estructura de Ley de Ingresos que durante los años anteriores se estuvo votando en contra. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Amigas y amigos diputados. Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Si algo nos debe quedar claro de todo este proceso es que debemos modificar el marco normativo vigente para que la discusión de los ingresos estimados, para un nuevo ejercicio fiscal sea más amplio, oportuno, y que nos lleve a generar los consensos necesarios que incrementen el espacio fiscal del gobierno mexicano.

Pertenecemos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pero estamos lejos de los estándares promedios de dichas economías. Para el nivel de desarrollo en el que nos encontramos, deberíamos estar recaudando tributariamente al menos el 20.3 del PIB, es decir, en la actualidad estamos como país dejando de recaudar 7 puntos del PIB, más de 1.8 billones de pesos.

Esa es la realidad, esa es realmente la tarea que como legisladores tenemos que comprometernos a sacar adelante. Sin una política decidida, que dé marcha atrás a la reducción de la participación en la economía del Estado mexicano, no vamos a salir de la trampa de ingreso medio en la que nos encontramos desde hace varias décadas, que nos llevó el modelo que estamos combatiendo.

Debemos repensar cómo le hacemos para que quienes se encuentran en la economía informal, que de acuerdo con el Inegi representan el 22.7 del PIB, se regularicen y contribuyan al fortalecimiento de la actividad económica formal, que en la actualidad es la que permite que tengamos más de 75.7 millones de contribuyentes activos.

También debemos corregir los incentivos para que ya no sean solo 31.5 millones de personas físicas las que declaren sus ingresos y correspondientes pagos al SAT.

Un aspecto fundamental que tiene que ir aparejado con una política fiscal más activa es que la política monetaria que instrumenta el Banco de México tiene que privilegiar el crecimiento económico.

No podemos esperar mejores condiciones de rentabilidad interna, si la tasa de interés de referencia que fija el banco central es casi el triple de la de Chile, más alta que la de Brasil y con una diferencia además de 500 puntos respecto a la fijada por la federación de Estados Unidos.

Necesitamos tasas competitivas que impulsen la actividad económica, como las de Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, donde tal parece que sí entienden que ante un panorama de desaceleración global se requiere de mayor holgura en las condiciones de financiamiento.

Hoy no tenemos la propuesta de ingresos que necesita nuestro país, lo que sí tenemos es la mejor propuesta que se puede lograr, dadas las condiciones a largo plazo que venimos arrastrando, derivado de las políticas implementadas en el pasado reciente.

Solo por ejemplificar, déjenme recordarles que los ingresos presupuestarios, como proporción del PIB, en medio de la crisis global 2008–2009 representaban para México el 23.2 del PIB.

En aquellos años los ingresos derivados del petróleo que entraban a la hacienda pública significaban niveles de 10 puntos del PIB. Y esto es sumamente relevante, porque justo en el 2008 teníamos el mismo nivel de ingreso no petrolero que en el año 2000. En ambos años nuestros ingresos presupuestarios, diferentes a los recaudados por la actividad petrolera, significaban 12.9 del PIB.

En la actualidad, el gobierno de la presente administración solo cuenta con ingresos presupuestarios del orden del 21 por ciento del PIB, un nivel por debajo del que se tenía en el 2006 y, a diferencia de aquel momento, derivado de la mala gestión y deliberada política de quebrar a la empresa más productiva del Estado mexicano. Hoy, el 81 por ciento de los ingresos presupuestarios devienen de actividades que nada tienen que ver con la exportación de petróleo.

Y a diferencia de lo que se pretende en muchas ocasiones argumentar, esta situación no es resultado de una gestión responsable, al contrario, es producto de poner al mercado por encima del bien común. Por ello, no es la única limitante de largo plazo con la que nuestro gobierno tiene que trabajar.

La otra –y más significativa– que representa grandes erogaciones anuales y necesidades de financiamiento constante, que presiona año con año el espacio físico del Estado mexicano, es el crecimiento desproporcionado de la deuda pública neta que, de representar 21 puntos del PIB en el 2008, alcanzó niveles sin precedentes en la historia moderna de nuestro país de más de 48 por ciento en el 2016. Es decir, tenemos que cargar con una herencia...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado, su tiempo concluyó.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores:... perniciosa del modelo neoliberal más grande y con mayor volatilidad mundial que la que tuvieron que enfrentar todos los gobiernos anteriores. Tenemos niveles de deuda pública neta que duplican nuestros ingresos anuales. Por ello, es que respaldamos la prudencia del marco macroeconómico, bajo el cual se construyó la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación para el 2020, porque reconocemos que está alineada a la promesa presidencial de no endeudar más a este país y de mejorar en el margen posible las condiciones en las que enfrentaríamos un eventual choque externo, como los que hoy enfrentan en el contexto internacional.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado, por favor, concluya.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo se pronuncia a favor de este dictamen de Ley de Ingresos, que es en la ruta de la prudencia y la disciplina financiera. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Fernando Galindo Favela: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Galindo Favela: El día de hoy, con la aprobación de la Ley de Ingresos para el próximo año, aquí en la Cámara de Diputados estamos determinando la bolsa de recursos con la que va a contar el Estado mexicano para atender todas las demandas y necesidades de los mexicanos.

¿Pero por qué es importante la Ley de Ingresos? Porque la Ley de Ingresos debe generar certidumbre económica, certidumbre a la inversión, certidumbre a los mercados internacionales e internacionales.

Debe generar incentivos a la inversión para generar empleo, con un solo objetivo, mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.

En el papel, tanto el ingreso como el gasto, van de acuerdo con mantener finanzas públicas sanas. Y en eso, el Grupo Parlamentario del PRI está de acuerdo. ¿Pero qué nos preocupa? Que algunos de los criterios y de las variables macroeconómicas traen un sesgo, por decirlo, menos optimista.

Optimismo sobre la tasa de crecimiento económico para el próximo año, optimismo en cómo va a crecer la economía y, sobre todo, un súper optimismo en el crecimiento de la plataforma petrolera. Y, por supuesto que se vale ser optimista, el problema es que este optimismo nos lleva a tener una sobre estimación de los ingresos del gobierno federal para el próximo año.

¿Y cuál es la consecuencia de sobreestimar los ingresos? Que, si no los alcanzamos el próximo año, vamos a tener tres opciones:

1. Ajustar, otra vez, dramáticamente el gasto.

2. Incrementar la deuda pública.

3. El uso del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Es ahí, donde creemos que no es correcto, más o menos la estimación, lo estiman expertos que está alrededor en 350 mil y 160 mil millones de pesos. Casualmente es lo que va a quedar en los fondos de estabilización el próximo año.

Y nos debe quedar claro a toda la asamblea, que el uso de los fondos de estabilización para garantizar gasto corriente es endeudamiento público por la puerta trasera. Es ahí, donde tenemos que tener cuidado porque el ingreso y el gasto tienen que tener una ruta correcta en el corto y en el mediano plazo.

Podemos sortear esta sobre estimación el próximo año, pero en el 2021 no vamos a tener fondo de estabilización que permita mantener este ritmo de gasto público.

Es por eso, que en el Grupo Parlamentario del PRI hemos insistido en que esta Ley de Ingresos, que este paquete de ingresos que incluía la miscelánea, se discutan medidas que permitan detonar la inversión pública en el país, que le dé mayores ingresos al gobierno federal, que se detonen las asociaciones público–privadas, sobre todo, que se explote la reforma energética que le dé certeza y certidumbre a los ingresos del petróleo que obtiene tanto Pemex como el gobierno federal. Pero también hemos insistido que se incluyan incentivos para la empresa privada, para que tenga ingresos y le permitan tener mayor inversión, como la deducción inmediata de los activos fijos.

Hemos insistido también y seguiremos insistiendo, en incluir reformas que mejoren las condiciones económicas de las familias mexicanas, como lo es la deducción de las colegiaturas, la deducción del pago de los honorarios

médicos. Que se haga efectiva la reducción de la tasa del IVA y el ISR en la frontera. Y los invito a buscar un presupuesto y un paquete económico que beneficie a los estados...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado, su tiempo ha concluido.

El diputado Fernando Galindo Favela: Concluyo, presidenta. Los invito a que busquemos un paquete económico que busque beneficiar a los estados y a los municipios. No podemos seguir con un presupuesto centralista porque el municipio y el estado son los primeros que tienen que dar la atención al pueblo mexicano. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Cecilia Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.

La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada: Ciudadanos, compañeras y compañeros diputados, a todo el pueblo de México. Reconocemos los trabajos que se realizaron con el parlamento abierto, pero no se trata solo de oír, sino de escuchar y dialogar para actuar en consecuencia.

Creemos que este ejercicio ha resultado insuficiente porque no resuelve en su totalidad las demandas de las voces de los especialistas, ni atiende tampoco las opiniones justificadas y legítimas de los diferentes grupos parlamentarios que integramos esta Cámara.

Empezamos a creer que la frase, palabras necias a oídos sordos, palabras necias porque una y otra vez les hemos dicho que están pecando de optimistas, y no nos escuchan, La generación de nuevos puestos de trabajo se contrajo en 67.9 por ciento, mientras que los ingresos públicos al mes de julio cayeron en 428 mil millones de pesos.

En menos de un año lograron desacelerar la economía mexicana hasta un gran cero por ciento. La producción petrolera también ha tenido caídas importantes los últimos meses y el promedio internacional del precio del petróleo. ¿Por qué insistir en establecer el precio del barril del petróleo en un rango entre los 49 y 55 dólares? No hay dinero para medicinas y padecemos una crisis en el sector salud.

En síntesis, sufrimos una desaceleración económica con consumo a la baja y contracción en la inversión, tenemos por delante que prepararnos para una recesión en el país. Esto no lo dice Cecilia, esto lo dice el secretario de Hacienda, el maestro Arturo Herrera.

En este contexto tan adverso, ustedes vienen a plantearnos un aumento en los ingresos, es de lamentarse, diputadas y diputados, que esta Ley de Ingresos, que están a punto de aprobar en otros ejercicios favoritos de abuso de la mayoría, esté tan repleta de irresponsabilidad financiera, aprobar una expectativa de ingresos que no es realista los obligará a que el día de mañana, la realidad los alcance y tengan que recortar el gasto.

Así como la realidad en el tema de la seguridad los está alcanzando. Así también la economía, le están fallando en sus promesas al pueblo de México. Solo por poner un ejemplo, no están cumpliendo esa promesa que tanto repitieron en campaña una y otra vez, que es que bajaría el precio de la gasolina y no cumplen una vez más.

Ojalá me equivoque y esté siendo fatalista, pero si tenemos la razón, en las semanas pasadas les propusimos en Acción Nacional que se incorporaran medidas contracíclicas para generar el inmediato crecimiento económico e hicieron caso omiso.

Este gobierno se quejó de las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos anteriores, pero gracias a la creación de los fondos de estabilización presupuestaria, las finanzas públicas se han mantenido a flote, inclusive ante la incapacidad de este gobierno.

Pero el arrastre y la inercia de un buen manejo económico, así como la excusa que emplean para justificar su falta de resultados, tiene una vigencia y cada día está más cerca.

Votaremos en contra de la contracción de deuda en pesos, que sin duda acondicionará el comportamiento del déficit público, también porque Morena y el gobierno manejan los incrementos o reducciones de ingresos a partir de su política de recaudación de impuestos tales como el ISR, el IVA y el IEPS. Además, cree pertenecer la Hacienda Pública a través del terrorismo fiscal, condenando a los mismos contribuyentes de siempre a pagar más.

A nadie le conviene que nos vaya mal. En Acción Nacional estamos legislando a favor de México. Por eso urge que entiendan la importancia de tener finanzas públicas sanas y de invertir en proyectos que sí sean rentables. Por eso votaremos en contra, porque en el PAN vamos por una economía a favor de las familias mexicanas. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada Laviada. Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas y ciudadanos legisladores, en una situación económica fuertemente presionada por una reducción del ritmo de crecimiento del producto, y una consecuente presión sobre la recaudación, con una deuda que fue acrecentada para finalizar gasto corriente, que no dejó ninguna cauda de expansión, y que fue un crimen económico contra el país durante todo el sexenio pasado, el gobierno actual se ha planteado demorar las reformas fiscales. ¿Por qué lo ha hecho? No es que no busquemos las reformas fiscales, son inevitables, pero ante la irrupción de un gobierno de ruptura política e histórica, se consideró una imprudencia continuar con el conflicto, acrecentarlo, endurecerlo durante los primeros años de la administración.

La idea de no mover tasas fiscales ni crear nuevos impuestos es esencialmente una necesidad política del momento actual y de la instalación de la nueva fuerza gobernante.

El superávit primario, nosotros no somos partidarios de los superávit primarios, ustedes comprenderán, es recoger más de la sociedad que lo que el gobierno le regresa. Ese es el superávit primario. Es el único colchón que tenemos a la mano para evitar que la deuda se convierta en una presión de difícil manejo.

Hemos logrado hasta ahora una estabilidad cambiaria en el marco de una relativa reducción de las tasas de interés que nos permite hacer lo que queremos con las limitaciones de la situación. ¿Qué cosa es? Empezar a convertir la política social y la política económica en una sola cosa.

Los programas sociales del nuevo gobierno, todos ellos, están pensados para generar un impacto económico. Todos ellos nos hablan de una redistribución del ingreso, y además una política de incremento salarial.

En estas circunstancias, la cuarta transformación le plantea al país: hagamos un esfuerzo de eficiencia recaudatoria, hagamos un esfuerzo de austeridad republicana, que no es gastar menos, sino gastar más pero bien, mejor. Y hagamos un esfuerzo de combate a la corrupción.

¿Por qué la oposición vota en contra? Porque no encuentra los estímulos fiscales ratoneros que toda la vida ha instaurado a través de la Ley de Ingresos, porque no encuentra más prebendas para la clase que representan.

Traten de representar al pueblo, redistribuir el ingreso, prepararnos para una política fiscal. Les proponemos un pacto político, y si no lo logramos el próximo año, haremos la reforma fiscal de todas maneras sin ustedes. Ese es el planteamiento que les queremos hacer hoy. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.

Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN, para hablar en contra.

El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para fijar nuestra postura en contra del dictamen.

No podemos votar a favor el dictamen de Ley de Ingresos de 2020 porque este gobierno aprende tanto de sus errores, que parece que cada vez que le sale mejor el tema es que no entienden que no entienden. A nadie le gusta equivocarse, pero cuando se están haciendo mal las cosas desde el gobierno, lo prudente es enmendar este dictamen. Pero no vemos por ningún lado la intención de corregir.

El dictamen de Ley de Ingresos 2020, que mayoritearon los diputados de Morena y sus aliados en la comisión dictaminadora no incorpora cambios sustanciales. Este dictamen lo único que confirma es que vivimos una etapa de presidencialismo que creíamos haberla superado.

También nos confirma que para el presidente es muy importante su necedad, que solucionar los problemas fundamentales de los mexicanos, de la economía de las finanzas públicas.

Los mexicanos están entrampados en dos realidades distintas: la realidad del discurso oficial que engaña con el argumento de que la economía va muy bien. Y, por otro lado, la realidad que viven los ciudadanos de este país, que no tienen empleo por culpa de un gobierno malo y que nos está saliendo muy, pero muy caro.

Aun con lo evidente de la caída de indicadores, como la inversión, el empleo, la recaudación y la producción petrolera, por mencionar algunas, la propuesta de Ley de Ingresos mantiene que su preocupante visión optimista de las principales variables macroeconómicas que impactarán en el comportamiento de las finanzas públicas del próximo año.

En el dictamen, la propuesta es sostener la expectativa de crecimiento del dos por ciento, que, nos parece, sobreestima la preocupante, porque por eso depende de cumplir la meta de recaudar los impuestos estimados en la carátula de la ley.

Los principales organismos internacionales y las calificadoras mantienen una expectativa prudente de crecimiento. Se estima un cierre de 0.4 por ciento para este año y una tasa de 1.3 por ciento para 2020.

También se observa una subestimación en el tipo de cambio. Se planteó un valor de 20 pesos por dólar, mientras que las estimaciones de futuro lo ubican a finales de 2020 en un valor de 20.96 pesos por dólar.

Las metas de producción para exportación y refinación parecen difíciles de cumplir, y son incompatibles con el plan de negocios. Mientras en los criterios generales y en el dictamen se plantea la producción de 1 millón 951 mil barriles diarios, en el plan de negocios se habla de una cifra de 1 millón 866 mil barriles diarios.

Una vez más creemos que esta cifra sobreestima y pone en fragilidad las finanzas públicas y la economía de este país.

Por otro lado, no sabemos si el precio del barril de petróleo está sobreestimado o subestimado, ya que en el dictamen se maneja un rango de 49 a 55 dólares por barril y no un valor fijo que nos asegure estimar de manera precisa los ingresos por este concepto.

El año pasado el gobierno apostó por invertir a Pemex a costa de eliminar reforma energética, por lo que ha implicado una presión sobre las finanzas públicas que aún no se han resuelto.

El año pasado se cometió el error de aprobar irresponsablemente una Ley de Ingresos que nos ha costado a todos los mexicanos. No incentivó la inversión, el empleo y mucho menos el pago de impuestos. Hoy con la aprobación al vapor de una Ley de Ingresos, sin un análisis responsable y prudente, pretenden hacer lo mismo, pero con una economía en recesión y a punto de crisis.

Por esta razón no podemos apoyar con nuestro voto el dictamen de la Ley de Ingresos 2020 y al día de hoy presentaremos las reservas que sean necesarias para corregir los graves errores de estimación a esa ley y dejar constancia de que Morena no está a favor de los mexicanos. Es cuanto, diputada presidente.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Paola Tenorio Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro hasta por cinco minutos.

La diputada Paola Tenorio Adame: Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Paola Tenorio Adame: Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación que presentó el Ejecutivo federal a esta soberanía es responsable, coherente y tiene vocación social. Dejen de desmeritarlo, por favor. Respeten de una vez al pueblo de México, que ya no les cree.

Es responsable porque para su proyección se tomaron en cuenta los determinantes macroeconómicos que establecen los criterios generales de política económica. Determinantes calculados con procedimientos técnicos, robustos y que presenten resultados modestos de cara a las externalidades que presenta la economía nacional.

Es coherente porque respeta el compromiso que hizo el gobierno de la cuarta T y con esto dejo claro que no incrementa ni crea nuevos impuestos, y tiene vocación social porque amplía el espacio fiscal, a efecto de financiar los programas y proyectos que propicien el crecimiento incluyente y el incremento del bienestar social. Todo ello, sin causar desequilibrios en las finanzas públicas.

Y les aclararé esto porque ya basta que suban aquí y no respeten a esta soberanía y se dediquen únicamente a dramatizar y se conviertan en víctimas, cuando han sido toda la vida los victimarios de este país. Primera, porque se da la continuidad a una serie de políticas públicas ya aplicadas en este año 2019. Segunda, porque las medidas de ampliación del espacio fiscal previstas se caracterizan por ser justas. Y tercera, porque actualiza el marco jurídico a la dinámica económica del siglo XXI.

En cuanto a las medidas que amplían el espacio fiscal, estas incrementarán la base de contribuyentes, simplificarán el cumplimiento de las obligaciones fiscales y endurecerán el combate contra la evasión y la elusión fiscal.

Es decir, se propone un andamiaje jurídico que propicia que todas, absolutamente todas y todos cumplamos con las contribuciones que nos corresponden de forma equitativa y proporcional como nunca antes se ha hecho en la historia de este país, como lo establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, a fin de que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones a través del gasto público. Claro, si ustedes no comprenden esto del gasto público es porque ha sido para ustedes siempre un gasto particular el dinero del pueblo, pero esto se acabó.

Las y los ciudadanos mexicanos tenemos la obligación de contribuir al fortalecimiento y mejoramiento de nuestro país. Con estas medidas, el compromiso de la sociedad y sus diferentes sectores productivos, los ingresos de la nación incrementarán al menos un cero por ciento en términos reales, para rebasar los 6.1 billones de pesos en el 2020. Asimismo, los ingresos presupuestarios del sector público aumentarán un cero punto por ciento en términos reales para llegar a los 5 y medio billones de pesos y los ingresos tributarios de la federación incrementarán realmente en 2.2 por ciento, respecto a lo observado en 2019.

Sin lugar a dudas, la Ley de Ingresos que aprobaremos pavimenta –y les quiero decir– y con concreto hidráulico, el camino hacia un mejor futuro, asegurando de este modo la estabilidad y la aplicación efectiva de las leyes fiscales en este país.

Es una ley congruente con el contexto en el que nos encontramos, al proponer soluciones claras a los problemas actuales. Es una ley que representa la visión de la cuarta transformación de la república porque el crecimiento económico no puede disociarse de la justicia social. Para que haya equidad distributiva primero debe haber equidad contributiva.

Por lo anterior, mi Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este presente dictamen. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: El gobierno, al igual que las familias y las empresas, necesita recursos para gastar e invertir en el logro de sus objetivos. Es un tema que no solo les genera confianza y certidumbre, sino también les permite planear en el mediano y largo plazo.

Sin suficiencia de ingresos no hay posibilidad de gasto para disfrutar de una vida digna, para ampliar un negocio o –en el caso del gobierno– para atender las demandas más apremiantes de la sociedad. De ahí la relevancia del dictamen que hoy discutimos.

La Ley de Ingresos es el marco normativo donde se explica y justifica de dónde va a salir el dinero para que el Ejecutivo federal cumpla con sus obligaciones de proveer servicios como es la salud, la educación, el combate a la pobreza, la seguridad pública que tanto hoy nos hace falta y la inversión en infraestructura, entre otros muchos ramos.

Por ello, la Ley de Ingresos 2020 debe ser coherente con la realidad de la economía mexicana, consistente con el objetivo de mantener finanzas públicas sanas y contribuir a la estabilidad macroeconómica.

Desafortunadamente, después de haber revisado el presente dictamen tenemos dudas al respecto, porque la propuesta que nos presentan, desafortunadamente, amigas y amigos, no coincide con nuestra triste realidad. Nos están engañando. Están engañando a todo el pueblo de México. Los datos del gobierno federal contrastan con los resultados de esta administración en tan solo 10 meses.

La economía está estancada por falta de inversiones y los pronósticos de crecimiento, lamento decírselos, ya lo han escuchado, pero este crecimiento no va a suceder. La falta de inversiones ha provocado que todas, todas las empresas que se dedican a pronosticar el crecimiento económico, hoy para nuestro país no tengan datos nada halagüeños.

Por eso no entendemos de dónde vendrá ese mayor crecimiento económico y cuáles son las bases en las que lo sustentan cuando no hay motores internos para lograrlo.

Por otro lado, este gobierno se comprometió con una política fiscal sustentada en tres principios básicos: el equilibrio presupuestario, la responsabilidad hacendaria y el combate a la evasión y elusión fiscales.

Les doy un dato, entre enero y agosto del 2019, los ingresos presupuestarios del sector público disminuyeron 2.1 por ciento, y el gasto neto disminuyó cuatro por ciento, en términos reales. Es decir, fue muy inferior al programado en 232 mil millones de pesos.

Una de las principales preocupaciones que nos genera es la inconsistencia que existe entre la meta de recaudación de ingresos para el próximo año y las perspectivas económicas que nos plantean.

Hoy no vemos un rumbo claro. Nadie pronostica, nadie pronostica un crecimiento del dos por ciento al año, como lo prometió el titular del Ejecutivo.

Y se ve muy difícil que alcancemos la plataforma de producción petrolera prevista para este ejercicio fiscal, ¿y qué decir de 2020? El panorama, desafortunadamente es muy, muy poco halagüeño. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por ejemplo, revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana de 2 a 1.5 por ciento.

Compañeras y compañeros, yo sé que es difícil escuchar esto, yo sé que es muy difícil que la realidad te alcance. Aquí se subió un diputado a decir que la oposición éramos ratoneros; no, no somos ratoneros, no se confundan, somos responsables y queremos que a este país le vaya bien, queremos que, a pesar de sus errores, le vaya bien porque nosotros no somos una oposición mezquina como lo fueron ustedes cuando les toco ser oposición y querían que a toda costa le fuera mal al país, le fuera mal al gobierno. Y cada que el gobierno cometía un error, ustedes lo festinaban, ustedes lo festejaban.

Hoy, ¿saben qué? La realidad los está alcanzando, la realidad los está alcanzando y ya se dieron cuenta que hay una gran diferencia entre andar en campaña durante 18 años diciendo que todo estaba mal, diciendo que ustedes iban a ser mejores, hay una gran diferencia entre eso y ser gobierno.

Lo que hoy, ustedes han demostrado hasta este día, es que lamentablemente no saben gobernar y así, así no va haber crecimiento económico y no habrá esperanzas para nuestros hijos y para nuestras familias. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado Óscar González Yáñez: Con el permiso de la presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Óscar González Yáñez: Mi paisana mexiquense. Siempre hay que hablar con cariño, pues. Siempre, cuando se hace una proyección de un presupuesto puede haber duda en el cálculo y la proyección.

Yo escuche con atención a los compañeros que hablaban sobre la plataforma petrolera, si, puede haber asegunes, como puede haber hasta drones en Arabia Saudita y se baje la extracción de Arabia Saudita y se baje la extracción de Arabia Saudita. Puede haber muchos asegunes, y tenemos que hacer los cálculos lo más objetivo posible y cuidar todas las franjas de riesgo que pudiéramos tener.

Hay una cosa que es verdad, estamos frente a dos modelos: el modelo que dispersaba el gasto o el modelo que lo concentraba. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador está apostando a la concentración y no la dispersión, eso puede ser discutible o no discutible. Se le está apostando a no generar deuda, para generar estabilidad y confianza en la deuda mexicana y las tasas de interés.

También se está buscando que el gasto sea un gasto que permita la confianza en la inversión. Yo sé que le tema de la confianza también puede ser un tema hasta subjetivo, pero se está buscando.

Hay cosas que a mí me hubiera gustado que vinieran en este proyecto, como es el tema que planteó la diputada Laura Imelda Pérez Segura, en el sentido de haber, no puesto un nuevo impuesto porque aquí no estamos poniendo ningún nuevo impuesto, estamos aumentando las tasas de ese impuesto.

Sí me hubiera gustado que le hubiéramos puesto un impuesto el día de ayer al tema de los cigarros, de las aguas azucaradas. Hubiera sido creo que interesante haberlo puesto. Habrá quien diga que no le agrada porque el presidente de la república no quiere aumentar. Bueno, creo que lo podríamos haber hecho.

No me gusta que haya sido el tema de los cigarros, del alcohol y de las aguas azucaradas el tema, porque los grandes cabildeadores de este país invierten una gran cantidad de dinero en el cabildeo de estas áreas. Me desagrada, lo digo sinceramente.

Espero, lo digo como lo dijo la diputada Laura Imelda, espero lo hayan hecho por falta de conocimiento y no por mucho conocimiento. Ojo, y ahí hubiéramos tenido una cantidad más, menos que hemos calculado de 46 mil millones de pesos que hubieran sido muy buenos para el campo y para otras áreas. Hubieran sido muy buenos, hoy ya estamos en otro proyecto y en otro plan.

Sé que hay quien dice que si el IVA, que nos cuesta 3.5 cobrarlo, vamos a alcanzar la recaudación que estamos planteando, o que simplemente nos estamos yendo por la vía cómoda del ISR, que es el más barato de cobrar, que nos cuesta 0.5 y que de ahí vamos a sacar una cantidad importante.

Yo planteo al final de cuentas, que hay que hacer cada vez más horizontales los impuestos y verticales, como dice la Constitución. Horizontales por justicia y verticales por la Constitución.

Y planteo lo siguiente. Evidentemente, que pague más el que más tiene. Y hay quien dice: bueno, el que tiene más, gasta más. ¿Y, a qué vamos a gravar entonces? ¿Al que gasta? ¿Cuánto puede gastar un hombre que

tiene 70 millones, 70 mil millones de dólares, a un hombre que tiene 10 mil pesos al mes? Si me apuran, el otro hombre, fuera de las cosas superfluas, podría gastar prácticamente lo mismo que el de 10 mil. Entonces si gravamos el gasto, es mejor gravar el ingreso, el ingreso.

Por eso quien no le agrada que el ISR sea nuestra área fundamental, tenemos que poner cuidado, pero a mí me preocupan las grandes empresas. Hoy afortunadamente el presidente de la república, ni nadie tiene el instrumento de exentar, nadie, con eso yo me voy con esa tranquilidad.

Vamos a tener solamente, como entró el paquete económico, seis mil millones de pesos más, no va a alcanzar para las necesidades que estamos planteando, sí, pero es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno de la, república y nosotros lo que estamos haciendo es apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su política de austeridad y en su política de no poner más impuestos.

Para aquellos que dicen que no se ha cumplido todo lo que nos comprometimos, no más impuestos, sí aumentar la tasa en algunas áreas, sí, pero también austeridad y racionalidad en el gasto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado González Yáñez. Tiene la palabra, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Compañeros diputados, compañeras diputadas. Yo creo que lo que tenemos que exponer aquí es, cuando se construyen políticas públicas, como en todos lados, se deben construir con base en evidencias, yo creo que no tanto en suposiciones o en reclamos añejos.

Voy a partir de dos análisis. Uno, que es exógeno, es externo, que me parece que marca mucho la influencia de la política de austeridad que hoy vive el mundo entero, no solamente México. Y es que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han presionado fuertemente a las economías para que, en sus políticas económicas, implementen políticas de una fuerte austeridad. Esta parte no es un asunto ocurrente, es un asunto mundial y se debe a un proceso de desaceleración de la economía mundial y que nos está llevando, probablemente, a una recesión económica. Digo probablemente, en economía hay que hacer diferencias.

Esa parte me parece que es lo que tenemos enfrente, no está a nuestro alcance, no podemos manejar estas variables. Ahí hay variables de orden macroeconómico externas, no está a nuestro alcance. Es decir, podemos justificar, pero sí, lo que sí podemos hacer, es hacer un análisis de previsión de estas variables que van a impactar con efecto dominó en las economías del mundo, y principalmente en las economías de características como las nuestras.

Esa es una parte que hay que poner atención. Cuando nosotros decimos que está sobreestimado el Presupuesto o el análisis en la Ley de Ingresos, me parece que parte de lo que estamos diciendo es, ojo, es probable que no nos alcance. Estamos advirtiendo, no quiere decir que estamos en contra de lo que ahí está, es más, hay muchas cosas en las que coincidimos, pero me parece que hay que tomar mucha atención en esa parte.

Por lo tanto, tenemos una política mundial que está incidiendo en nuestro país de carácter austero, pero tenemos reformas que implican gasto. Hemos hecho una cantidad de reformas que van a implicar gasto. Ahí hay, como que no hay una correlación.

Segundo, no vemos reflejado en esta Ley de Ingresos políticas suficientemente fuertes para la evasión y la elusión. Es decir, en el caso de la elusión probablemente nos hace falta todavía fortalecer el tema de los paraísos fiscales o estas planificaciones fiscales agresivas que aprovechan los vacíos que todavía permanecen en nuestras leyes. Esa parte me parece que tiene una ausencia, y eso nos puede llevar a problemas de recaudación.

No vemos suficientemente una ampliación en la base del contribuyente. Técnicamente podríamos decir que esta Ley de Ingresos se asemeja en mucho, y voy a cerrar con eso más adelante, a la del 2018.

El problema que se ha señalado aquí de la recaudación que tiene que ver con estos ingresos federales para los fondos, me parece que es importante también decirlo. ¿Cómo se sustituye esta parte de estos fondos de estabilización? ¿De qué manera vamos a compensar estos vacíos? No nos queda claro cómo va a estar esta parte. Y esto hay que decirlo, ya los he mencionado aquí desde el día de ayer, y los que me antecedieron para hablar en temas de los fondos que tienen que ver con la minería, con los del petróleo.

Y bueno, podemos hablar que el petróleo pudimos tener o podemos tener una bonanza en términos de lo que significa la exportación, pero acordémonos también que importamos gasolinas, y esa parte también hay que confrontarla.

Entonces, lo que tenemos aquí es que tenemos que buscar una correspondencia entre esta ley para poder soportar nuestro Proyecto de Presupuesto, porque de otra manera va a estar desequilibrado este asunto.

En algunos casos ya lo había yo mencionado en temas específicamente de educación, los CAEP, por ejemplo, Juan Pablo Arroyo hace una declaración –el subsecretario– y dice: No está contemplado dinero para estos CAEP en el Proyecto de Presupuesto. Si no tenemos contemplado ingresos, bueno, ya el Presupuesto, entonces, ahí hay un desequilibrio. Nuevamente insisto en esa parte. Lo estoy diciendo con evidencias, no lo estoy diciendo con suposiciones ni tampoco con reclamos del pasado, sino con lo que tenemos enfrente.

Esta sobreestimación de la que se ha hablado, nos dicen que podemos llegar a un crecimiento del dos por ciento. Bueno, todas las políticas de austeridad, vamos a poner desde Inglaterra, Grecia, España incluso, que están aplicando políticas de austeridad, no han tenido un crecimiento mayor al uno por ciento y no han combatido el déficit. 10 años llevan con políticas de austeridad.

Necesitamos una política de incentivos que pueda dar incentivos económicos para que se genere inversión. Aquí se habla mucho de las variables macroeconómicas —y voy a terminar, ahorita ya concluyo.

El tema de las variables macroeconómicas, no vemos cómo se estimula la demanda agregada, no hay un efecto multiplicador y los indicadores que nos da el Fondo Monetario Internacional son muy bajos.

Que tomáramos en cuenta nada más esa parte, y decirles que en consecuencia, con los datos de 2018, Movimiento Ciudadano votó en contra de la Ley de Ingresos de 2018 y es exactamente la misma en términos porcentuales que de 2020.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado, su tiempo concluyó.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Es cuanto, presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Nos visitan diputados y diputadas locales de Chihuahua y la síndica municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, invitados igualmente por diputados federales de Chihuahua, particularmente de la diputada Teresita Vargas Meraz. Sean bienvenidos, compañeros diputados locales y la síndica.

Tiene la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.

El diputado Javier Salinas Narváez: Gracias, diputada presidenta. Diputadas y diputados, la Ley de Ingresos que se presenta hoy y se pone a consideración de esta soberanía, considera y concreta los postulados de la cuarta transformación, impulsada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le damos toda nuestra solidaridad por las decisiones que está tomando.

Estos postulados vertidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, aprobados por esta soberanía, ordenan detonar el crecimiento, mantener finanzas sanas, no más incrementos impositivos e impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo.

Para alcanzar tales objetivos, la Ley de Ingresos que hoy se presenta a su consideración, considera los ingresos netos previstos en el dictamen que son del orden de 6 billones 103 mil 317 millones de pesos, que significa un aumento de 265 mil 257.7 millones de pesos en términos nominales.

Al respecto, se prevén ingresos para el sector público presupuestario por 5.5 billones de pesos, lo que representa un incremento de 220 mil 672 millones respecto a lo aprobado en 2019. Y un incremento de 0.6 por ciento en términos reales.

Los ingresos del gobierno federal se han estimado para 2020 en cuatro billones de pesos, un aumento nominal de 127 mil 334 millones de pesos con respecto a 2019.

Los ingresos tributarios ascienden a 3.5 billones de pesos con un aumento nominal de 194 mil 499 millones de pesos con respecto al 2019.

Las contribuciones de mejoras, a 44 mil punto 8 millones de pesos; los derechos, en 522 mil 256 millones de pesos. Los productos se estiman en 10 mil 95 millones de pesos y los aprovechamientos en 98 mil 6 millones de pesos.

Es importante destacar la reducción de transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones. Se estima que ascenderán a 412 mil 797 millones de pesos. Un decremento nominal de 107 mil 867 millones de pesos respecto a 2019, representan una reducción de menos 23.5 por ciento en términos reales. El 100 por ciento de este rubro estará representado por las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Destacamos los ingresos derivados de financiamiento, que se estiman en el orden de 584 mil 456 millones de pesos, lo que representa un incremento real del 4.51 por ciento, en seguimiento a la política de no aumentar el endeudamiento público en la cuarta transformación.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Morena apoyará el dictamen de la iniciativa de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, porque reitera la política fiscal del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no incrementar las tasas de las contribuciones existentes. Preservar los ingresos públicos para el bienestar de todos los mexicanos, adoptar medidas para aumentar la recaudación de aquellos contribuyentes que, estando obligados a pagar impuestos, no lo pueden hacer por lagunas legales o imprecisiones que se presentan en la evasión y la elusión fiscal.

Asimismo, porque se adoptan medidas para otorgar mayor claridad y certidumbre jurídica a los contribuyentes. Por estas medidas estamos ciertos de que podemos avanzar con pasos firmes en la construcción de un nuevo México, más incluyente, que nos encamine a una mejor redistribución de la riqueza nacional entre todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado.

Se informa que la diputada Sara Rocha hizo llegar su intervención por escrito y se integrará al Diario de los Debates.

«Posicionamiento entregado a la Mesa Directiva por la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI.

Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:

El proyecto de Ley de Ingresos para el año 2020 no genera confianza, ni certidumbre porque no es realista con el contexto nacional e internacional, y puede poner en riesgo la inversión y la competitividad del país, así como la generación de empleos y la entrega de programas sociales.

El irresponsable manejo que han hecho hasta ahora de los recursos públicos; el derroche presupuestal en políticas asistencialistas y proyectos de alto riesgo; así como su urgencia por incrementar la recaudación fiscal, no son decisiones racionales.

Ayer lo advertimos y hoy con sus hechos nos dan la razón, las modificaciones previstas al ISR y a la Ley Federal de Derechos, sólo tuvieron una postura meramente recaudatoria y no integral.

Poco les importó reducir las áreas de desarrollo y prosperidad para el campo, la minería, la agricultura y la acuacultura comercial, dejando en total desamparo e indefensión a miles de familias que subsisten de estas actividades productivas.

Nos están engañando. La economía está estancada por la falta de inversiones y los pronósticos de crecimiento de la economía se han ajustado sistemáticamente a la baja. Las estimaciones oficiales son contrarias a las de los especialistas, las calificadoras y organismos internacionales.

No entendemos de donde vendrá ese mayor crecimiento económico y cuáles son las bases en las que se sustenta, cuando no hay motores internos para lograrlo.

Compañeras y compañeros diputados: La Ley de Ingresos es el instrumento de gran relevancia porque genera certidumbre y confianza en la economía. Aquí no se permiten ocurrencias, porque está en juego la economía de las familias mexicanas y el desarrollo de nuestro país.

Ustedes mienten, ya que las principales variables económicas están sobreestimadas: se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2 por ciento; un tipo de cambio de 20 pesos por dólar; un precio promedio de barril de petróleo de 49 dólares; y una plataforma de producción de crudo que se prevé ascienda a mil 951 miles de barriles diarios. Ningún experto pronostica esa realidad.

El dictamen de Ley de Ingresos de la Federación para el 2020 que se apruebe en esta Cámara, debe tener entre sus objetivos primordiales, impulsar finanzas públicas sanas y, sobre todo, prevenir el endeudamiento de nuestro país, a través del ingreso y el gasto responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos.

En el Grupo Parlamentario del PRI, esperamos que la situación del país mejore, que se atienda los índices de inseguridad, se genere crecimiento económico y las inversiones incrementen y se traduzcan en nuevos proyectos de inversión; pero como ustedes están haciendo las cosas no se ve un panorama positivo.

Por su atención, muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2019.— Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general. Se informa a la asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: 1, 2, 10, 16, 17, 21, 25, y los artículos transitorios séptimo, decimoprimero, decimotercero y decimocuarto.

Se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 258 votos en pro, 2 abstenciones y 104 en contra.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por 258 votos.

Está a discusión en lo particular. Tiene la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar una propuesta de reforma al artículo 16, Apartado B.

La diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias y con su permiso, presidenta. Se trata de una reserva para eliminar justamente la fracción, es el inciso B) de la fracción VII del artículo 16 de la Ley de Ingresos.

¿Qué dice esta fracción? Ni más ni menos, habla de una palabra maldita en esta Cámara, que es la palabra "exenciones". Y en ese sentido, establece que se exime de pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

Quiero decirles que ayer que discutimos la Ley Federal de Derechos, el artículo 49 quedó en sus términos y este artículo 49 era ni más ni menos o es donde se establecen las cuotas y las tasas para las importaciones que se realizan en el país.

¿Por qué existe esta disposición en la Ley de Ingresos? Tratando de rastrear, porque cuando hicimos y discutimos la reforma constitucional en materia de condonaciones empecé a buscar en la Ley de Ingresos distintas disposiciones que periódicamente ha aprobado esta Cámara de Diputados y después el Senado ha también ratificado en materia de condonaciones, exenciones y estímulos.

Y permítanme decirles que esta disposición viene desde 2013. Pregunté por qué se exentaban las importaciones de gas natural y quienes conocen este tema de mercado de gas natural me explicaban que Pemex en ese año ya registraba un serio déficit y requería importaciones. Y se promovió esa exención con la finalidad de que el gobierno no cambiara el dinero de un bolsillo al otro.

Pero resulta que el mercado de gas natural ha evolucionado y en automático ha seguido esta disposición vigente, sin que nos cuestionemos si es o no adecuado continuar exentando de derechos aduaneros la importación de gas natural.

Y justo aquí es donde quiero llamar su atención. Primero, para solicitar sea eliminada esta exención porque ningún motivo se justificó, en ningún momento de la discusión, que esta continuara vigente.

Y la segunda cuestión es –precisamente por lo que hablábamos en el debate sobre condonaciones– aquí justamente en la Ley de Ingresos donde una y otra vez se habían dispuesto las aprobaciones para que el Servicio de Administración Tributaria realizara las condonaciones.

Y en este caso, de exenciones de derechos aduaneros, es la Dirección General de Aduanas la que es responsable de la aplicación de estas disposiciones. No nos llamemos sorprendidos después. Ahí están, es nuestra atribución y obligación. Y, además, con otra, ya está prohibido de acuerdo a la reforma que se realizó del artículo 28 constitucional, en cualquier momento, las condonaciones.

El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación tendrá que ser adecuado, porque allá en el Código Fiscal de la Federación sí está vigente la posibilidad de que el Ejecutivo realice condonaciones, pero subsisten los otros dos elementos: las exenciones, mucho ojo. No vayamos a encontrar ahora que la transformación de las condonaciones por exenciones continúa esta trayectoria de seguir otorgando tratos privilegiados y, sobre todo, oscuros a los distintos agentes económicos.

Y lo más importante, continúa la facultad del Ejecutivo para disposiciones que establecen estímulos fiscales.

Esta es la base del decreto sobre el que se asienta toda la zona especial fronteriza del norte del país. Era el que el día de ayer les había solicitado encarecidamente que volviéramos reforma de ley, para evitar la

incertidumbre de que un decreto del Ejecutivo de un plumazo eliminara una disposición tan relevante para el desarrollo de una región.

En fin, en sus manos queda prohibir, ahora sí, la última de las exenciones que hay en la Ley de Ingresos de la Federación 2020. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Voy a repetir la votación, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, secretaria.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una reforma al artículo 1o., y una propuesta de reforma al artículo 16, apartado A, fracción V.

El diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata: Antes de iniciar mi exposición, quiero precisar que la reserva que presenté sufrió un ajuste, mismo que en este momento expongo.

A partir de las proyecciones de crecimiento económico, consideramos necesario establecer una estimación más real y objetiva de los ingresos por aprovechamientos y que son consecuencias de un manejo más eficiente de los activos, propiedad del Ejecutivo federal.

Este ingreso adicional de cerca de cinco mil millones de pesos permitirá financiar proyectos, mismos que pasarán por esta soberanía para previo análisis, ser aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía, la presente reserva. Gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor, procederemos a recoger la votación. En votación económica, se pregunta si se admite a discusión, las y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se admite.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera suficientemente discutido.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se pregunta si se considera suficientemente discutido, las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo por

favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría si se aceptan las modificaciones a los artículos 1o. y 16, apartado A, fracción V.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 1o. y 16, apartado A, fracción V. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias. Solicito a la Secretaría haga nuevamente la consulta, ya que en función de lo que explicó el orador solamente se reforma el artículo 1o., y no el 16. Entonces es una aclaración a la asamblea. Lo que se está sometiendo a votación es la propuesta de modificación solamente al artículo 1o.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 1o. únicamente.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández:¿Con qué objeto, diputado Galindo? Sonido en la curul del diputado Galindo.

El diputado Fernando Galindo Favela(desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más una moción de aclaración. Si nos pudieran leer exactamente qué es lo que se está modificando para poder entender la votación que vamos a llevar a cabo.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con gusto, diputado. Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de reforma al artículo 1o.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Artículo 1o... Concepto, ingreso estimado total, 6 mil millones 103 mil 839.60 pesos.

1. Impuestos, 3 mil millones 501 mil 344.60.

11. Impuesto sobre los ingresos, mil millones 848 mil 374.50.

1. Impuesto sobre la renta, mil millones 848 mil 374.50.

6. Aprovechamientos, 103 mil millones 674.40.

61. Aprovechamientos, 103 mil millones 639 mil pesos.

22. Otros, 96 mil millones 427.50.

4. Otros, 96 mil 427.50.

El último párrafo. Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2020, se proyecta una recaudación federal participable por 3 billones 390 mil 269.9 millones de pesos. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría si se acepta la modificación al artículo 1o.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 1o. Las diputadas y los diputados

que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se acepta y se incorpora al dictamen.

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar una propuesta de reforma al artículo 2o, párrafo primero.

El diputado Marco Antonio Adame Castillo: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Marco Antonio Adame Castillo: En nombre propio y de los legisladores del Partido Acción Nacional, presento propuesta de modificación al artículo 2o. de la Ley de Ingresos, relativa al endeudamiento.

Sin duda, el manejo legal, transparente, responsable de la deuda pública es una necesidad imperiosa para el país, especialmente en este momento tan complicado de la economía nacional e internacional, y lo es también una prioridad para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Porque tal y como lo dijo el secretario de Hacienda en su último viaje a los Estados Unidos, en el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, la economía mexicana, si bien no está en recesión aún, pero está en una desaceleración económica. Y esto es algo que debemos tomar en cuenta.

En Acción Nacional no desconocemos la importancia de la capacidad de endeudamiento para el financiamiento del gasto público. Pero esto exige un manejo responsable y legal del endeudamiento, tal como lo mandata la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en su artículo 1o.

Un manejo de la deuda bajo los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, subrayados que han tenido que hacerse por el manejo irresponsable, inadecuado que se ha tenido a la capacidad de endeudamiento en los últimos años.

Es importante prevenir el efecto tóxico del manejo discrecional o irresponsable de la deuda, porque esta, lo sabemos todos, debe tener siempre un manejo claro, con sentido de responsabilidad social y financiera para que la economía crezca y para que responda a los problemas de la población. Lo sabemos, esto no ha sido así.

Por ello es importante subrayar la intención que tiene la declaración de los representantes del gobierno federal y de la mayoría en este Congreso, en el sentido de que para un gobierno que está pretendiendo reencauzar las finanzas del país es importante dejar atrás el manejo inercial. Peor aún, contrario respecto a cómo se maneja la deuda pública, porque la experiencia, en los últimos años, ha sido preocupante, y en algunos casos desastrosa.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, durante el sexenio anterior la deuda creció 46 por ciento. Al inicio del sexenio pasado cada mexicano debía 37 mil 837 pesos, y seis años después el monto subió a 66 mil pesos por persona. De tal manera que la deuda ha pasado del 21 por ciento del PIB en el 2008 al 48 por ciento en el 2016, comprometiendo las participaciones de las entidades, los recursos del gasto público federal, pero sobre todo el futuro de las familias mexicanas.

Diputadas, diputados, no endeudar más al país, tal y como lo prometió el presidente en campaña, debería ser una preocupación de todos. Y en este Congreso deberíamos estar interesados en ayudarle al Ejecutivo a cumplir con esa promesa.

Por ello nos preocupa que en la comisión se haya aprobado un monto de 48 mil 206 millones de pesos adicionales a la propuesta original. En Acción Nacional pretendemos reducirla a 300 mil millones de pesos y establecer que en el próximo ejercicio fiscal no se contrate deuda adicional a la autorizada.

Nos preocupa también que el destino de la deuda sea para proyectos productivos, inversión productiva, de tal manera que no sea la petroadicción, por ejemplo, la que en materia de gasto energético nos lleve a invertir en proyectos que aún no tienen los estudios suficientes y la justificación viable desde el punto de vista financiero o tecnológico y que pueden comprometer la viabilidad financiera y tecnológica de proyectos como la refinería Dos Bocas en este momento.

Diputadas, diputados, actuemos con visión de país, no con visión de régimen. Ejerzamos decisiones para un manejo responsable de la deuda pública. Les pido su voto a favor. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, ha declinado su participación en tribuna. Su participación se integrará al Diario de los Debates.

Tiene la palabra la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una propuesta de reforma al artículo 16, Apartado A.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, desde 2006 nuestro país cuenta con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual, como su nombre lo dice, proponemos lineamientos y mecanismos institucionales para alcanzar dicho fin.

Es importante destacar que este ordenamiento establece claramente, en su artículo 34, la creación de estímulos fiscales para las empresas que apliquen prácticas, políticas y programas en materia de igualdad de género. Sin embargo, esta medida exigida desde hace 13 años no se ha implementado hasta el momento.

Por otra parte, en nuestro país permanece una enorme brecha económica entre hombres y mujeres. México registra la segunda tasa de participación laboral femenina más baja de los 36 miembros de la OCDE, tan solo superado por Turquía.

No solo eso, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo revela que el 57 por ciento de las mujeres ocupadas laboran en la informalidad. Asimismo, la tasa de desempleo femenino se incrementó en solo 0.1 por ciento en el último trimestre.

De acuerdo con Conapred, aunque se compartan posiciones ocupacionales y de escolaridad similares, el ingreso laboral por hora trabajada de las mujeres es 34.2 por ciento menor al de los hombres. Además, por el solo hecho de ser mujeres, 3.5 millones de trabajadoras han sufrido discriminación laboral.

Por esas razones, presenté hace unos meses una iniciativa que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta para establecer estímulos fiscales a empresas que han adoptado buenas prácticas en igualdad de género, no discriminación y respeto de los derechos humanos para el desarrollo de las y los trabajadores.

Lamentablemente, los dictámenes de la miscelánea fiscal no reflejaron la propuesta realizada por una servidora, por lo que pongo a su consideración una reserva en el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, para otorgar un estímulo a las empresas que cuenten con la certificación vigente en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación, consistente en el equivalente al 10 por ciento del salario efectivamente pagado al total de las trabajadoras contratadas.

En la actualidad el gobierno federal implementa desde hace varios años la certificación de centros laborales en la Norma Oficial Mexicana en Igualdad y no Discriminación.

Para que una empresa obtenga una certificación debe mostrar que cuenta con un mínimo de 40 por ciento de personal femenino en su plantilla, que las mujeres integren por lo menos cuatro de cada 10 puestos directivos, implementar una estrategia de flexibilización de horarios laborales, instalar lactarios, otorgar licencias de paternidad, contar con un código de ética con enfoque de igualdad y no discriminación, garantizar la igualdad salarial, entre otras acciones.

Compañeras y compañeros, no puede haber crecimiento sin la participación de las mujeres en la economía nacional. Si se quiere alcanzar la meta propuesta del cuatro por ciento del crecimiento del PIB anual, como lo ha dicho el Ejecutivo, es urgente que desde el Legislativo generemos los mecanismos para impulsar nuestra incorporación en el mercado laboral formal y garantizar nuestros derechos económicos.

Los invito a que reflexionemos y a que abonemos a la igualdad en nuestro México, que tanto lo necesita. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una propuesta de reforma al artículo 16, apartado A.

El diputado Sergio Mayer Bretón: Gracias. Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Sergio Mayer Bretón: Con el permiso de la presidenta y honorable asamblea. Someto a su consideración la reserva que reforma el artículo 16 de la Ley de Ingresos para la Federación para el ejercicio 2020, adicionando una fracción VIII, al tenor de las consideraciones.

Parto del supuesto contenido en el artículo 4o. en nuestra Carta Magna que dice que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia. Y el libro es precisamente uno de ellos.

Por ello, el fomento a la lectura es fundamental para lograr el desarrollo social y cultural de todas y todos los mexicanos.

Las librerías deben ser consideradas como un centro estratégico de desarrollo cultural y social, toda vez que cumplen un papel fundamental en el proceso formativo de las personas, generan círculos viciosos en el entorno comunitario, y se convierten, por supuesto, en espacios de cohesión, de convivencia y abonan también a la ampliación del conocimiento.

El día de hoy tenemos un gran compromiso y una deuda histórica con la sociedad para generar nuevos modelos de desarrollo personales y colectivos, lo que nos lleva a resarcir el tejido social. No existe mejor herramienta para combatir la violencia que la lectura y la cultura.

La aspiración de tener un país de lectores pasa también por otorgarles a quienes arriesgan su patrimonio en una empresa cultural, como son las librerías, un régimen fiscal que les permita invertir en más espacios y abrir así las puertas a más mexicanos, al fascinante mundo de las letras.

Actualmente, en México existen solamente mil 204 librerías, que representa el 31 por ciento de estas... están representadas solamente en la Ciudad de México y el otro 69 restante en los grandes centros urbanos.

Es por eso que tenemos que trabajar, para que les demos este estímulo a las librerías, compañeros, para que ellas puedan seguir invirtiendo. No podemos hablar del acceso a la cultura, si no tienen acceso a los libros. Y no tienen acceso a los libros, porque no existen librerías en las comunidades de nuestro país.

La presente modificación busca consolidar un modelo de incentivos para todos aquellos que vean en las letras la posibilidad de consolidar un ingreso económico, pero también trabajar a favor del fomento a la lectura.

Uno de los planteamientos más emblemáticos de la cuarta transformación ha sido sentar las bases hacia un país de lectores.

Se presentó a través del Consejo Honorífico de la Memoria Histórica y Cultural de México, la Estrategia Nacional de Lectura que, a decir de su presidenta, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que dice: Nosotros queremos que ahora el acto de leer se convierta en un placer, en un proceso de formación. Es un proceso de ensanchamiento de nuestra conciencia.

Así que es claro, y todo mundo sabemos, que durante más de 30 años la industria editorial mexicana fue llevada casi hacia su total extinción, al ponerla a competir en condiciones de profunda desigualdad con sus competidores de otras naciones.

La reserva para la que pido su respaldo marca la diferencia entre a supervivencia y la desaparición de muchas librerías medianas y pequeñas, que en ciertas comunidades marcan precisamente la diferencia entre la violencia y la paz.

Importante es este avance que representa; sin embargo, es un gran paso para el apoyo al fomento a la lectura y el libro, a través de un estímulo fiscal a las librerías. Sin embargo, el camino hacia la consolidación de una política tributaria a favor de la cultura y las artes seguirá dando rumbo a nuestro México.

En la Comisión de Cultura y Cinematografía, que me honro en presidir, todos los integrantes tenemos un gran compromiso y seguiremos comprometidos y trabajando por la cultura, por lo que debemos concretar el objetivo de que la cadena productiva del libro sea considerada toda, absolutamente toda, como estrategia en la vida económica y parte fundamental de la industria creativa de nuestro país.

Por lo anterior, vamos a trabajar para que en el ejercicio 20–21 y ese va a ser el compromiso con la industria y con la cadena editorial para que la tasa cero a librerías se convierta en el siguiente paso de la transformación cultural de México.

Gracias por su voto y seguiremos haciendo historia y las librerías del país contarán con un esquema de estímulos que les permitan acrecentar sus actividades a lo largo y ancho de México, en beneficio de la sociedad. Es cuanto, gracias por su atención.

El diputado Enrique Ochoa Reza(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Diputado Ochoa Reza, ¿con qué objeto?

El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Gracias, presidenta. Una moción de ilustración al pleno. Si por favor, escuchando la inteligente propuesta del diputado Sergio Mayer, si pudiera pedir usted a la secretaria que lea textualmente cómo queda la propuesta de reforma, de manera tal que la pudiéramos valorar favorablemente, por favor.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con gusto, diputado. Le solicito a la Secretaría, lea la propuesta de modificación textual que presentó el diputado Sergio Mayer.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Sí, diputada presidenta.

Artículo 16, apartado A, fracción VIII. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales, residentes en México, que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos y que dichos ingresos obtenidos en el ejercicio por la enajenación de libros, periódicos y revistas, represente al menos el 90 por ciento de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio de que se trate.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior consiste en una deducción adicional para los efectos del impuesto sobre la renta por un monto equivalente al ocho por ciento del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente.

Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se admite.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera suficientemente discutido.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se pregunta si se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría si se acepta la modificación al artículo 16, apartado A, de la Ley de Ingresos de la Federación, presentada por el diputado Mayer.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo mencionado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se acepta y se incorpora al dictamen.

Tiene la palabra el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar una propuesta de reforma al artículo 16, Apartado A.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Adelante, diputado.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Compañeras y compañeros diputados. Vamos a ver qué tan sensibles quedamos del terrorífico evento de ayer. Vamos a ver si apoyando y aportando esta... eh, tranquilos, tranquilos.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Continúe, diputado Riggs.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: Bien. Qué barbaridad, qué sensibles. Qué sensibilidad. Pero esa sensibilidad es la que pretendo que presten a esta reserva, porque miren, esta reserva trata de otorgar simple y sencillamente un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales sobre el ISR, que empleen a personas que cuenten con alguna discapacidad, que tengan discapacidad auditiva o de lenguaje en un 70 por ciento o más. O bien, alguna discapacidad mental, así como también emplear a personas que tengan más de 60 años.

Este estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, en un monto adicional equivalente al 50 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas.

Para estos efectos, debemos considerar la totalidad del salario, que sirva de base para calcular en el ejercicio que corresponda a las retenciones del ISR del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Entonces, compañeras y compañeros, esta es una reserva sensible. Esto es con la finalidad de motivar al empresariado a que emplee a estas personas de edad avanzada, o bien, que cuentan con alguna discapacidad.

La verdad es que viendo la situación por la que estamos atravesando, pues yo no veo el problema de que esta reserva a ustedes les genere alguna molestia, por el contrario, yo creo que podemos coincidir y esta es una de ellas.

Yo las y los invito a que, pues aprueben esta reserva y pues incluso motivemos a generar más empleos, porque ya también tenemos cifras descendentes muy marcadas, que pues va a estar muy complicado recuperar en un año.

Pero esta puede ser una herramienta para recuperar, en algún porcentaje muy mínimo, ese porcentaje descendiente de los índices de desempleo.

Entonces, las y los invito a votar, a sensibilizarnos y a apoyar a las personas que cuentan con alguna discapacidad para que su vida la empleen en algún trabajo. Es cuento.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite en discusión.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: En votación económica, se pregunta si se admite en discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se deshecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ha declinado su participación en tribuna y se... ¿con que objeto diputado? Si, sonido a la curul del diputado.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Gracias, presidenta, muy breve. Baje mi reserva porque es similar a la del diputado Riggs y ya se aprobó en la miscelánea del ISR el día de ayer. Incorporaron esa parte a la parte del ISR, entonces ya está incorporada. Gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar una propuesta de reforma al artículo 16, apartado A.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez: Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez: Compañeras y compañeros, presento a ustedes la reserva para adicionar la fracción VIII del artículo 16 del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, en materia de estímulos fiscales para la producción cinematográfica nacional y su distribución.

Si queremos tener una sociedad más culta, más creativa, necesitamos impulsar sus talentos y hacer coincidir estos talentos con el sector productivo. Dando así, a este sector los estímulos necesarios para que inviertan en este tipo de proyectos. Es por ello, la importancia de la deducción de este tipo de inversiones en el impuesto sobre la renta de las empresas.

Por lo que se propone agregar esta fracción VIII que dice: Durante el ejercicio fiscal 2020, en materia de estímulos fiscales las aportaciones efectuadas a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución de películas cinematográficas nacionales, podrán aplicar el monto de crédito fiscal contra los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, tal como lo señala ya la Ley de ISR en su artículo 189.

Es que la importancia del cine no solo radica en que es un espacio artístico, de creatividad y reflejo de nuestra cultura mexicana, sino que es además fuente de empleo para un sector muy importante, que contribuye al creciente de nuestra economía y desarrollo tecnológico. Y les comparto aquí algunos datos para que puedan tomar esta decisión de apoyar la reserva.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Cinematografía, en 2018 se realizaron en México 186 películas y se estrenaron 115 filmes en salas cinematográficas, lo que va de la mano con un aumento en la infraestructura de exhibición, 391 pantallas más en el país y una asistencia de 30.3 millones de personas a filmes nacionales. Casi 10 millones más que en 2017.

La industria cinematográfica generó 30 mil 357 puestos de trabajo ocupados, cifra similar a la registrada por la industria básica del hierro y el acero. Por ello, es nuestra responsabilidad como legisladores no inhibir, sino impulsar la industria cinematográfica, que es reflejo de México en el exterior y semilla de cultura en el interior.

En Acción Nacional queremos una industria cinematográfica fuerte y sólida. Hoy tenemos una deuda con quienes arriesgan inversiones y desarrollan producciones cinematográficas y las distribuyen. Por ello, compañeras y compañeros, les invito a sumarse a esta reserva para que la producción y distribución de las películas nacionales siga creciendo y sea muestra de la riqueza cultural tan grande que tenemos en nuestro México. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar una propuesta de modificación al artículo 16, apartado A, fracción I, y al apartado A, fracción V.

La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz: Muy buenas tardes, compañeros, un placer volverlos a ver en estos días tan intensos de trabajo. Esta reserva que el día de hoy subo a comentarla con ustedes, tiene que ver con dos vertientes. Una, en Acción Nacional estamos de acuerdo que primero los que menos tienen y cómo

beneficiarlos con incentivos para que tengan una mejor calidad de vida, tanto en su transporte, como en la adquisición de sus productos y servicios.

Esta reserva y la modificación al artículo que ustedes dictaminaron es correcta en el sentido que vamos a ayudar a los pequeños, a los menores, a los que tienen un ingreso menor a 60 millones de pesos en lo que generen al año. Pero también me gustaría hacer una pequeña reflexión con ustedes, por si hubiera la oportunidad de que regresemos a como se encuentra actualmente el artículo sin ninguna modificación adicional.

Los grandes transportistas y los grandes consumidores de diésel y biodiesel son los que mueven la mayor parte de los insumos que consumimos las y los mexicanos. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, en el sentido de que lo que generan es más, pero la inversión de ellos también es mayor.

El compromiso debería ser a través de estos grandes transportistas –estos grandes empresarios– de generar un extraordinario servicio, pero no creo que sea correcto todo el tiempo sacrificar a quien está generando, por un lado trabajo, a quien está promoviendo el turismo en México, porque si bien sabemos la mayor parte de las y los mexicanos se mueven vía terrestre, también los insumos en el consumo alimentario, agrícola, ganadero se mueven a través de vías terrestres, entonces eso implica un consumo de diésel y biodiesel.

Si nosotros quitamos ese incentivo también a las grandes empresas, desafortunadamente el efecto va a ser que se incrementen los productos y los servicios que consumen todas y todos los mexicanos, y que seguramente desincentivará el que transiten en México el turismo, el consumo; y esto, lo repito, como lo hemos venido manejando y que ustedes también son conscientes de esta parte, nuestra economía se va retrayendo constantemente.

Sí considero importante el estímulo a los menores, y que quede muy claro que también en Acción Nacional queremos que los Pymes, Mipymes, los pequeños empresarios empiecen a hacer un trabajo, empiecen a crecer de tal suerte que se conviertan en cadenas de transporte nacionales e internacionales de gran envergadura.

Sin embargo, les reitero y les pido de favor que reconsideren esta reserva para que no sigamos sacrificando a quienes se han empeñado día a día en dar un mejor servicio de carga para que lleguen los insumos en tiempo y forma, y para que nuestra gente pueda transitar turísticamente a sus trabajos vía terrestre. Es cuanto, muy amables, y les pido de favor reconsiderar esta reserva. Gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: En votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada Juana Carrillo Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una propuesta de reforma al artículo 16, apartado A, fracción V. La diputada Juana Carrillo Luna ha solicitado que se le dé lectura a su propuesta. Le pido a la Secretaría le dé lectura a la propuesta.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2020 se establecerá a lo siguiente.

En materia de estímulos fiscales, inciso 5o., fracción V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico que utilizan la red nacional de autopistas de cuota que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota ingresos totales anuales, para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 300 millones de pesos, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura mencionada hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto.

El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumpla con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo no se consideran dentro de los ingresos totales los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectados a su actividad... –puntos suspensivos, contenido igual, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, secretaria. Consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor, procederemos a recoger la votación. En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Está a discusión. Tiene la palabra el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en contra.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Con la venia de la Presidencia. Es increíble cómo en ocasiones los compañeros de Morena vienen a hacer aquí un planteamiento de la 4T en beneficio de los grandes empresarios. Están pretendiendo cambiar un estímulo fiscal del impuesto sobre la renta a empresarios menores de 60 millones de pesos y lo quieren pasar a 300 millones de pesos. Es decir, abrir a los empresarios grandes que puedan obtener este estímulo fiscal.

Una incongruencia más porque debería ser para los pequeños y medianos transportistas que utilizan la red de carreteras de nuestro país.

Estos pequeños y medianos transportistas son la mayoría de los transportistas de nuestro país y son los que transportan, valga la redundancia, la mayor cantidad de mercancía que se distribuye y se vende en todos los pueblos y localidades de México.

Estamos en contra de que se abra este esquema a empresarios que tienen mayor capacidad económica y no se apoyen en mayor grado a los pequeños y medianos transportistas de México. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría...

La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (desde la curul). Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputada Ángeles?

La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz(desde la curul): Gracias, presidenta. Si me pudiera inscribir como oradora a favor de la reserva que subí, que escuché que la compañera de Morena, de la reserva de Morena, también está a favor de lo que yo acabo de subir a plasmar en tribuna.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, diputada Ángeles Ayala, para hablar a favor de la propuesta.

La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz: Gracias, compañera. Nuevamente, agradeciendo el que la compañera de Morena retome esta reserva de la fracción V. Reitero, repito y como lo han dicho ustedes, tenemos que hablar a favor de quienes menos necesita, más bien de quién más lo necesita y de quien menos tiene recurso.

Únicamente quiero hacer un hincapié, y lo reitero, me parece extraordinaria la propuesta. Nada más sí reconsiderar si se pudiera quitar el candado. Estoy de acuerdo que todos debemos tributar, pero el problema

aquí que sigo viendo, y si me lo permiten, es que no busquemos... o tratemos de evitar que el último consumidor sea el que pague cuando se quita un incentivo.

Es maravilloso, repito y reitero, vengo de mi estado en que se mueve mucho turismo, la mayor parte por tierra, por carretera. El insumo, tenemos puerto seco. De ahí se transporta a diferentes partes de la república.

Verdaderamente lo que a mí me preocuparía, y lo sigo insistiendo, es que al desincentivar a las grandes empresas recaiga en el último consumidor.

Entonces, hay que apoyar a los pequeños para que ellos crezcan dándoles este incentivo, pero también les vuelvo a pedir reconsiderar la parte donde a los grandes y a las grandes empresas no se les deje ese candado, no se les coopte. Que se les permita también seguir con un incentivo, de tal suerte que el último consumidor, que somos la gran mayoría, y es la gran mayoría de las y los mexicanos, no tengan impacto en su bolsillo. Es cuanto y muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera suficientemente discutido.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor. Procederemos a recoger la votación. En votación económica se pregunta si se considera suficiente...

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Un segundo, por favor, diputada. ¿Con qué objeto, diputado Pedro Pablo?

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): A ver, presidenta, solamente para entender el orden de lo que se va a votar. Subí en contra del artículo 16, apartado A, fracción V, primer párrafo, y luego la compañera subió a hablar de su reserva. No se votó, no subió esa votación.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Subió a hablar a favor de la misma reserva que se está discutiendo, diputado.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Pero ella habló... ¿Sí es así?

La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (desde la curul): Sí.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): Okey. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con gusto. Continúe la Secretaría.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría si se acepta la modificación al artículo 16, apartado A, fracción V, presentada por la diputada Carrillo.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo 16, apartado A, fracción V. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se acepta y se incorpora al texto del dictamen.

Informo a la asamblea que el diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata ha retirado su propuesta presentada al artículo 16, apartado A, fracción V.

Tiene la palabra el diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de reforma al artículo 16. Declinó. El diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas ha declinado su participación en tribuna y su propuesta se integrará al Diario de los Debates.

Tiene la palabra la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar una propuesta de reforma al artículo 17, párrafo cuarto.

La diputada Nohemí Alemán Hernández: Buenas tardes. Con el permiso de la presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Nohemí Alemán Hernández: Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para presentar esta reserva que elimina un párrafo al artículo 17 del dictamen de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020.

Permítanme empezar la presentación de esta reserva recordando que una cosa es posicionarse en contra de la corrupción y otra acometer en contra de la ciudadanía. Desafortunadamente es lo que el gobierno federal pretende hacer, dejando sin recursos a varios sectores.

Por eso hoy presento esta reserva a consideración del pleno. En Acción Nacional exigimos que se destinen recursos suficientes a las dependencias entre los principales sectores para financiar todos los compromisos que el gobierno federal prometió en materia de educación, seguridad, salud, laboral y de cambio climático, entre otros. Y destinar recursos a fondos que atiendan las necesidades de inversión de obra pública de los estados y los municipios.

Urge ajustar el proyecto original de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2020. No será posible dar cumplimiento a estos objetivos sin recursos adicionales a las dependencias.

Es alarmante que el gobierno de la república no contempla un solo peso en el proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el rubro de migrantes y seguirán a la baja los recursos presupuestales destinados al cuidado infantil –lo que es preocupante– y al campo de donde dependen muchas familias e introduce al país en un problema muy serio de autosuficiencia alimentaria.

No puede haber políticas públicas sin presupuesto, algunos proyectos que deberían ser prioritarios no contemplan recursos, otros sufren importantes recortes que dificultan el cumplimiento de su desempeño y del cual dependen la vida de millones de personas.

En Acción Nacional estamos convencidos que se deben asegurar en la Ley de Ingresos los recursos suficientes para dar atención a los migrantes, al sector salud, al campo, a la seguridad, indispensables para la población. Y lamentamos que en los paquetes económicos que se han presentado a nivel federal, para el próximo año se mantenga una actitud desinteresada en estos temas.

Por ello, compañeras y compañeros diputados, les pido su voto a favor de esta reserva que permitirá a nuestras instituciones públicas mejorar y ser eficientes y así mejorar sus ingresos y rendir cuentas, en beneficio de los y las mexicanas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor. Procederemos a recoger la votación. En votación económica se pregunta si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la negativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha, se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Eudoxio Morales, quien, a nombre propio y del diputado Héctor René Cruz Aparicio, presentará una propuesta de reforma al artículo 21.

El diputado Eudoxio Morales Flores: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Eudoxio Morales Flores: Diputadas y diputados, presento una reserva al artículo 21 para mantener en 1.04 por ciento la tasa de retención anual al impuesto sobre la renta, el ISR, y no el 1.45 por ciento, como actualmente aparece en la ley. Esta es una medida que favorece a los trabajadores y a las familias que ven en el ahorro un mecanismo para cuidar su dinero, para lograr un respaldo ante cualquier incertidumbre en sus ingresos y para racionalizar los gastos en el hogar porque la finalidad de todas y cada una de las familias de México es vivir mejor.

Según la Comisión Nacional, la Condusef, en el país cerca del 40 por ciento protege su dinero a través de mecanismos informales como son las tandas, los préstamos familiares, los guardaditos en casa. Quiero aclarar que todo impulso a la economía familiar, al consumo regional y a la solidaridad y confianza entre las personas y sus relaciones monetarias, debe incentivarse y promoverse en este país.

No estamos en contra de ninguna de estas formas que permiten tener un poco más de dinero, sino creemos necesario proteger lo poco o mucho que hemos ahorrado.

Resulta necesario observar que la finalidad del ahorro es tener la libertad de usar dinero cuando sea necesario y desde cualquier lugar que uno se encuentre, pueda uno disponer de ellos.

Una manera positiva para incentivar la formalidad es observar que, a través de la banca, hay una reducción de pérdidas monetarias por delitos como el robo, el asalto o los fraudes.

Y esto, antes de proteger el dinero que con esmero ahorramos, nos hace dudar y desconfiar.

Debemos ofrecer alternativas, compañeros, si buscamos incorporar a más personas a la formalidad, para que vean en el crédito un método para generar bienestar y debemos buscar que los puntos de base sean estables y confiables para todos los ciudadanos en México.

Los integrantes del PES creemos que el ingreso de las familias debe robustecerse y el ahorro es un mecanismo que lo promueve.

Compañeras diputadas y diputados, exhorto a esta soberanía para aprobar esta reserva y no permitir que los ahorradores, especialmente los que tienen bajos ingresos, paguen un impuesto que representa un daño a la economía familiar. Es cuanto, señora presidenta. Y muchas gracias, compañeros.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor. Procederemos a recoger la votación. En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la propuesta del diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la negativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Sergio Fernando Ascencio Barba, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar una propuesta de reforma al artículo 21, párrafo primero.

El diputado Sergio Fernando Ascencio Barba: Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Sergio Fernando Ascencio Barba: La política monetaria debe incentivar al ahorro fuerte para no volvernos vulnerables.

El que suban esta retención fija realmente es una aberración y lo quiero decir por lo siguiente: este gran impuesto o esta generación de más impuesto que se pretende hacer, no se van a beneficiar, la realidad de las cosas, los grandes ahorradores de este país, para ellos es una diferencia muy mínima que en realidad no genera ningún beneficio.

A los que sí va a afectar, es a todos estos viejitos que tienen sus ahorros, a toda esta gente que ha trabajado para poderse retirar, a ellos son los que van a venir afectando.

Un país es sólido siempre y cuando tengas un buen ahorro interno. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Si tenemos más ahorro, los bancos van a tener más dinero y el que tenga más dinero va hacer que generen mayores créditos. A mayores créditos, vamos a tener un mayor crecimiento en nuestro país y es algo en lo que nos tenemos que enfocar.

La tendencia internacional que tenemos actualmente a una recesión global es algo que nos va a venir afectando los próximos tiempos. Y quiero ponerles un breve ejemplo, países como Japón o la Unión Europea actualmente tienen tasas del cero por ciento. Si nosotros llegamos a tener esa tendencia y que somos un espejo de las tasas que generan los Estados Unidos como lo es la FED, vamos a generar una tasa muy similar.

Y si llegamos a tener esas tasas como las que llegamos a tener al cuatro por ciento basadas a un Cete, como ocurrió hace algunos años, lo que va a ocurrir es que, si le quitamos el 1.45, vamos a tener prácticamente 2.55 por ciento de tasa real. Pero, esto si no contemplamos una inflación.

Si llegamos a tener una inflación mayor, lo que va a ocurrir es que los ahorradores terminen pagando por tener ahorros. Y eso no lo podemos permitir.

Ya no quisiera añadir, si algún intermediario de alguna financiera, pues genera o cobra un porcentaje grande, va a ser sumamente afectada. Los invito a que revisemos la retención de impuestos y mejor propongamos para que sea un porcentaje con base a la cantidad que se recibe por los ahorros.

¿Pero a donde vamos con todas estas retenciones, todo lo que se pretende generar para tener más dinero? Estamos promoviendo estos programas sociales que se vienen generando, que muchas veces lo que estamos haciendo es incentivar a la economía informal, eso es lo que estamos haciendo.

Incentivando una economía donde se le pretende dar, ahí un pago por algún beneficio, mediante una tarjeta y se retiene este dinero para ir a consumir a la economía informal y son programas sociales que realmente son opacos, son a discreción y no hay claridad al pueblo.

El pueblo es el que paga los impuestos, el pueblo es el que da los programas sociales. El gobierno es simplemente un intermediario, démosle la claridad a esta gente que está generando estos impuestos y a quién va el beneficio.

Termino con un ejemplo. Yo vengo de Irapuato, Guanajuato, una ciudad que es altamente dependiente de la industria automotriz y que ha venido creciendo en mi estado, a lo largo de los últimos años, pero quiero hacer un breve ejemplo. Alrededor de Irapuato, 330 kilómetros alrededor de Irapuato se encuentran grandes estados que son grandes generadores de maquila, como es Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, parte de Jalisco y el mismo Guanajuato.

Esta circunferencia genera el 60 por ciento del PIB de este país, se sigue poniendo en predicamento a los que están generando grandes impuestos por este país. Los invito a que no sigan matando a la gallina de los huevos de oro. Los invito a que impulsemos estos estados para que podamos seguir teniendo un país sólido y una economía sólida como se ha venido teniendo en los últimos meses y años.

Quiero terminar diciendo que este crecimiento negativo mucho tiene que ver por todo lo que viene sucediendo en el crecimiento actual. Ahorita estamos creciendo mínimamente, gracias a las exportaciones que generan este grupo de estados, los invito a que reconsideren a los grandes ahorradores y a los ahorradores de este país, para que no sigamos matando a la gallina de los huevos de oro. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor. Procederemos a recoger la votación. En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la negativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar propuesta de reforma al artículo 21, párrafo primero.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Bueno, compañeras y compañeros, primero que nada, quisiéramos dejar constancia de que sí nos dimos cuenta de lo que se hizo en la reforma anterior por parte de la mayoría, que sí se abrió a discusión y que se aprobó, y me explico.

Le quitan cuatro mil millones de pesos al impuesto sobre la renta, de los cuales el 30 por ciento, mil 200, aproximadamente, iba para los estados y se los suman, o se lo incluyen, a un concepto oscuro que se llama –entre comillas– "otros, otros", o sea dos otros, que no sabemos de dónde salen cinco mil millones de pesos, afectando directamente a los estados y municipios.

Compañeras y compañeros, yo no sé para qué hicieron trabajar tanto a la Comisión de Hacienda, si el único cambio que le hizo al dictamen de la ley que estamos discutiendo se lo vinieron a quitar aquí por la puerta de atrás, a enmendárselo de un plumazo, literalmente, en cinco minutos.

Voy a mí reserva al artículo 21. Sin ahorro, compañeras y compañeros, no hay inversión. Sin ahorro no hay formalidad en la economía. Sin ahorro las familias mexicanas no tienen capacidad para atender contingencias laborales, de salud, educativas o simplemente para ir a una vacación. Sin ahorro no vamos a tener recursos para la jubilación.

Y ustedes, compañeras y compañeros de la mayoría, aliados, quieren limitar todas estas acciones. ¿Cómo? Incrementando la tasa de retención de los ahorros. En todos los países del mundo lo que se quiere es fomentar el ahorro. Bueno, aquí no, aunque ustedes no lo crean, lo que se quiere es castigar a los ahorradores.

Esto, en palabras lisas y llanas, es castigar la economía familiar de las y los mexicanos, de las empresas, del pequeño y mediano emprendedor y también de las grandes empresas, o sea en esta sí se llevan al baile a todos, compañeras y compañeros.

Con esto no se genera, de ninguna manera, incentivos para la inversión, ni para el empleo, ni el crecimiento económico del que tanto nos han venido a hablar aquí, pero que hasta el momento ningún resultado han obtenido.

Por esto proponemos, a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, que la reducción de la tasa que ustedes están poniendo del 1.45 para quienes ahorren, se reduzca al 0.5 por ciento.

Por supuesto, como ya les había dicho, esta propuesta la hago con muy poca esperanza, de que corra la misma suerte de la que corrió la que les comenté, que presentaron aquí y aprobaron borrando el único cambio que le había logrado hacer la Comisión de Hacienda a este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada Mier y Terán. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

El diputado Fernando Galindo Favela, del PRI, ha declinado su participación en tribuna y se incluirá su propuesta en el Diario de los Debates.

De la misma manera, la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI, también ha declinado su participación en tribuna y su propuesta se integrará al Diario de los Debates.

«Intervención entregado a la Mesa Directiva por la diputada Anilú Ingram Vallines, en relación a la reserva por la que se adiciona un artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2020.

Con su permiso diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

La necesidad de impulsar la competitividad y facilitar la inserción de las empresas como proveedoras y generadoras de empleo, es de gran trascendencia para la economía nacional.

Las inversiones en activos que realizan generan una mayor eficiencia en los procesos productivos, creando derramas económicas en el lugar donde se efectúan. Sin embargo, a partir de 2019 las empresas y las personas físicas con actividad empresarial ya no pueden hacer la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, toda vez que el estímulo fiscal estaba fundamentalmente en un decreto que tenía una validez temporal de dos años.

Ello genera incertidumbre a los contribuyentes y estanca la economía. En este contexto, se propone reserva para que en el ejercicio 2020, las empresas y personas físicas con actividad empresarial, como lo establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pueden optar por efectuar la deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, deduciendo en el ejercicio en el que se efectúe la inversión.

Con esto permitiremos que financien su inversión, ya que no pagarán el ISR inmediatamente; usarán como fuente de financiamiento importante el apalancamiento de inversiones; cuenten con mayor liquidez en el corto plazo, que podrán usarla para reinversión, crecimiento y la generación de empleos; y sus activos fijos les posibilitará incrementar su capacidad productiva, con lo que no tendrán que recurrir a fuentes de financiamiento.

Es cuanto, muchas gracias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2019.— Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra la diputada Norma Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar una propuesta de adición de un artículo transitorio.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Compañeras y compañeros legisladores, el gobierno federal no debe olvidar que tiene la obligación constitucional de generar condiciones adecuadas para la protección y salvaguarda de la salud de las familias mexicanas, particularmente porque es un derecho imprescindible para el mejoramiento de la calidad de vida y para el desarrollo nacional.

Ante la ineficiencia que el gobierno ha mostrado en la adquisición y distribución de medicamentos, en la atención especializada y la dotación de insumos médicos, las familias han incrementado sustantivamente sus gastos para subsanar estas deficiencias e irregularidades. Asimismo, los tiempos de atención en los institutos de salud son muy largos.

Compañeras y compañeros, levanten la mano. ¿Quién está dispuesto a esperar más de dos horas para una atención médica? Les puedo asegurar que ninguno de ustedes, sin embargo, la ciudadanía no solo tiene que esperar horas, espera semanas e inclusive hasta meses. Lamentablemente, a causa de esto, de la falta de atención oportuna muchos mexicanos han perdido la vida.

Se presenta reserva al artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, a fin de que en el próximo ejercicio fiscal las personas puedan deducir sus gastos médicos.

Con la aprobación de esta reserva estaremos apoyando a la economía familiar de las y los mexicanos y particularmente mejorarán sus condiciones de salud. Es nuestra responsabilidad contribuir a garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio pleno de uno de los derechos humanos más importantes como lo es la salud.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos sumamos a las voces de organizaciones de la sociedad que exigen condiciones adecuadas en las modalidades de atención. Si el gobierno no puede asegurarlas, que nos permita deducir estos gastos con el objetivo primordial de proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos.

Estoy convencida, compañeros, de que resulta primordial fortalecer nuestro sistema nacional de salud. Recuperar las prácticas exitosas y ampliar las estrategias para el cuidado de la salud pública y la deducción de impuestos constituye una buena solución. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio.

El diputado Ismael Alfredo Hernández Deras: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, el agua representa para el campo la diferencia entre la prosperidad y la pobreza.

Hoy vive el país una lamentable sequía en más del 50 por ciento de su territorio. El campo, de parte del Estado mexicano, siempre demanda certeza. Los apoyos que reclaman los campesinos, todos los productores, no son para trabajar menos, sino son para producir más.

Cuando los productores rurales no encuentran incentivos, estímulos y apoyos del gobierno, suceden fenómenos que nos agravian mucho a la sociedad completa: la pobreza y la inseguridad.

Por eso nos parece inadmisible que aparte de que el Proyecto de Presupuesto viene en la secretaría que atiende al campo con un 30 por ciento más, con un 30 por ciento menos de lo que se está ejerciendo en este año, todavía hoy se le quiere castigar al campo con el cobro por concepto del uso en aprovechamiento de aguas nacionales destinadas al sector agropecuario.

Señoras y señores, sería un gran error histórico hoy que a través del agua generemos diferencias entre los productores rurales.

No apoyar al campo hoy sin duda es generar todavía más incertidumbre entre las familias que viven en el campo mexicano.

Los productores de todos los tamaños, amigas y amigos, de todos los tamaños requieren de los estímulos e incentivos y del apoyo de los tres niveles de gobierno. Castigar a algunos diciendo que a los pequeños productores no les van a afectar estas nuevas cuotas del agua, sin duda es desconocer la cadena de valor que tienen los productos que suceden en cada una de las cosechas, independientemente del nivel y de la cantidad de cada productor.

Los grandes productores encabezan, sin duda también los medianos y grandes, una fuerza que da respuesta a infraestructura en el campo, que genera valor agregado también a los productos que se generan en el sector primario del campo mexicano. Estos productores también generan empleo y recaudación fiscal, que tanto importa al gobierno.

Diputadas y diputados, esto tiene que ver sin duda con el tema de la seguridad alimentaria, y la seguridad alimentaria, junto con el tema del agua, estamos hablando en este país de la seguridad nacional de México. No busquemos en el campo incrementar los ingresos para el gobierno.

Amigas y amigos del grupo parlamentario mayoritario y sus aliados, no les encarezcamos a los consumidores. Les voy a poner el ejemplo de un productor de maíz, por ejemplo, de Sinaloa.

En Sinaloa lo que les produzcamos más costos a su producción, sin duda van a trasladar al consumidor final de la tortilla, o sea a la canasta básica, el incremento del precio de la tortilla para todos los mexicanos.

No les demos este golpe a los campesinos ni a los productores. La diferenciación de las cuotas resulta injusta e inequitativa, porque, además, la verdad, amigas y amigos, es aumentar el costo del agua e impactar en el costo de los productos que surgen del campo mexicano. Además, los criterios utilizados para el incremento, en estas diferentes zonas, nadie los conocemos ni tienen un sustento razonable.

Por tal virtud, vengo a proponer que en el artículo decimoquinto transitorio se establezca, amigas y amigos, una sola cuota de 0.1924 pesos por metro cúbico de agua, en ambos casos que sea también para aguas superficiales o extraídas del subsuelo.

Que no se nos olvide que el campo siempre necesita el apoyo cada vez más creciente. El campo mexicano le ha cumplido a México...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Ha concluido su tiempo.

El diputado Ismael Alfredo Hernández Deras: El agua, amigas y amigos, no debe ser una parte que confronte y genere diferencias entre los productores rurales de México. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar una propuesta de reforma al artículo 21, párrafo primero.

El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, compañeras. En esta asamblea no hay necesidad de hacer interlocución con los 499 diputados, basta hacerla con tres o cuatro diputados importantes, influyentes de la mayoría que toma las decisiones. Y aunque Pablo Gómez está ocupado, yo quisiera que Pablo Gómez escuchara una reflexión más, la quinta o sexta reflexión en el mismo tema que tiene que ver con el impuesto a los ahorradores.

Argumento en contra del incremento del impuesto al ahorro, ya que a partir del próximo 2020 la tasa pasará del 1.04 al 1.45 por ciento. Recordemos que ya este año aumentó con relación al 2018, de 0.46 al 1.04, es decir, Pablo Gómez, en dos años se habrá incrementado en un punto lo que equivale a 315 por ciento el aumento del impuesto al ahorro.

Sé que la Secretaría de Hacienda niega que sea un impuesto al ahorro y aclara que es un impuesto a las ganancias sobre el ahorro, pero eso es solo retórica. Sabemos que nuestro sistema financiero, con prácticas de colusión y oligopólicas, no premia al ahorro y las tasas de interés que se pagan al ahorrador son muy bajas.

De acuerdo al Banco de México, en su informe de agosto de 2019 denominado tasas de interés de instrumentos bancarios, la tasa de los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento a 28 días, es de 1.74 por ciento de interés anual. Ustedes saben que la mayoría de la población que accede al ahorro lo hace en pagarés bancarios mensuales.

La mejor tasa bancaria en pagarés es a la de 182 días, tres meses y es de 2.64 de interés anual y como se observa es una tasa negativa, porque ya antes del impuesto que se le quiere aplicar está por debajo de la inflación.

Para un modesto ahorrador, para un ahorrador con más recursos y que puede acceder a los denominados depósitos a plazo fijo, la situación tampoco mejora mucho, porque la tasa a dos meses es de 2.75, la de tres meses es de 3.40 y la de seis meses es de 3.42, es decir, un ahorrador debe tener su dinero más de seis meses ahorrados para ganar apenas un 0.42 por ciento anual por encima de la inflación, suponiendo que esta se mantuviera en el tres por ciento anual.

Sabemos que la inflación reportada no es necesariamente la inflación real, ya que esta última dependerá de las condiciones de la persona en particular. La inflación que sufre una persona dedicada al transporte es distinta a la inflación que sufre un oficinista o de la de una persona dedicada a actividades industriales en la Ciudad de México o en Hermosillo, por decir algo, o la de otra que se dedica a actividades comerciales, ya que ante la imposibilidad de cotizar la totalidad de los precios de los bienes y servicios que se consumen en México, la inflación se mide con base en procedimientos muestrales que se apoyan en la estadística inferencial, por ello, quien apenas obtiene de sus ahorros un miserable 0.40 de ganancia sobre inflación resentirá terriblemente la retención del 1.45 por ciento que le hará su banco sobre los rendimientos, pero que, además, estos son acumulables a otros ingresos para efectos del pago final y definitivo del impuesto.

Ahorrar significa posponer el gasto presente con la idea de poderlo realizar en muchas mayores condiciones en el futuro. Por eso, este impuesto es regresivo y ha sido cuestionado siempre. Si un ahorrador ya pagó el impuesto sobre la renta, ¿por qué se le impone una segunda tributación por su ahorro?

Vivir de los ahorros no será posible en México durante el gobierno de la cuarta transformación y recordemos que las pirámides de edades se están invirtiendo rápidamente y pronto seremos un país de viejos, que, al no poder vivir de sus ahorros, aunque los tengan, significará una grave problemática social y económica para el país.

Pablo, los ingresos para el Ejecutivo, para el gobierno que encabeza el presidente López Obrados, no serán significativos con el 0.4 que se está incluyendo en esta nueva tasa, pero sí dañará de manera significativa el ahorro de los mexicanos...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado, su tiempo ha concluido.

El diputado Antonio Ortega Martínez: ...inhibes la cultura del ahorro y perjudicas sus ingresos. Gracias, Pablo, por la atención.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputada presidente.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar una propuesta de reforma al artículo 25, párrafo primero.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Compañeras y compañeros diputados, como se sabe, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe presentar un análisis para dar a conocer la distribución de la carga tributaria y del gasto público por deciles de hogares y personas y sus efectos.

Ello lo ha hecho siempre con base en los resultados de la Encuesta de Ingreso y Gastos de los Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Se trata de un análisis general de incidencia fiscal, donde se analiza el efecto distributivo para los impuestos sobre la renta, al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, así como automóviles nuevos.

Asimismo, se estudia el efecto distributivo de gasto social en primer lugar, sobre el ingreso promedio de las personas. Y de forma particular, sobre el efecto distributivo de los gastos en protección social, educación, salud, pensiones y los subsidios a las tarifas eléctricas.

El estudio está orientado a identificar si los impuestos y la forma en que se distribuye la carga tributaria tienen un efecto progresivo. O si dados los valores obtenidos se puede afirmar que su efecto es moderado o eventualmente pudiesen ser negativos.

Muchas veces los resultados no son homogéneos, la diferenciación del IVA por tramos para los bienes exentos y del IEPS no petrolero, por ejemplo, en algunos casos resultan regresivos. Eso también puede suceder con la aplicación del gasto social que en términos generales resulta progresiva, pero sus efectos pueden ser limitados de acuerdo a los valores obtenidos.

Lo mismo sucede para el caso de los subsidios a las tarifas eléctricas y el pago de pensiones que en ocasiones exhiben un sesgo regresivo.

Entre los distintos tipos de gasto, generalmente las transferencias monetarias en materia de desarrollo social, tienen los mayores efectos progresivos, es decir, benefician en mayor medida a la población con menores recursos. Sobre todo, aquellos programas que cuentan con padrones de beneficiarios, ya que pueden focalizar mejor a su población objetivo.

Pero no siempre sucede así, dados los valores obtenidos en otros ejercicios, se ha podido comprobar que su distribución es limitada y marginal en su aporte al resultado de la disminución de la pobreza en el país.

La preocupación del PRD es que este estudio pudiese ser elaborado con información disponible, pero que no provenga de Inegi y, por ello, es importante precisar en el artículo que comentamos, que debe ser con información del Inegi que se siga haciendo este estudio de ingreso–gasto, dado que cuenta con la experiencia y la metodología adecuada. Y al ser un órgano autónomo está obligado a la objetividad y evitar cualquier sesgo político. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar una propuesta de adición de un párrafo al artículo 25 y la propuesta de adición de un artículo transitorio.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez: Buenas noches, compañeras y compañeros legisladores. Hoy me encuentro en esta tribuna para seguir dando la batalla, una vez más ante el partido mayoritario Morena en esta Cámara. Y lo hago a favor de las niñas, los niños y los adolescentes de México. Yo quisiera que ya no sean invisibles durante esta administración.

Hoy, durante la discusión de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020, no dejaré de luchar porque su voz no deje de sonar en este pleno. Anteriormente, gracias diputada que me ha escuchado, le suplico que me siga escuchando porque al parecer nuestras niñas y niños de México no perciben que su grupo los escuche, diputada, se lo agradezco de todo corazón.

Anteriormente, durante la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo se permitió cometer uno de los más dolorosos atropellos en contra de nuestra niñez, y fue aprobar políticas públicas clientelares que dejaron sin posibilidad de hacer valer sus derechos a nuestras niñas y a nuestros niños.

Diputadas, diputados, hoy que afortunadamente tengo su atención, quiero decirles que nuevamente tienen la gran oportunidad de remediar lo anterior. Con la presente reserva, me permito poner a su consideración que estemos logrando que aquellos impuestos recaudados por la Secretaria de Hacienda, contemplados en el séptimo párrafo del artículo 10, que también integra esta reserva, garanticemos que sean destinados a favorecer programas y apoyos para un desarrollo integral.

Hay datos del Inegi y del Unicef que revelan que en México habitan cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes. En términos relativos, esto representa el 35 por ciento de nuestra población. Merecen ser escuchados, merecen tener no solo una voz en este Congreso, sino muchas voces que velen por ellos.

Estos niños, en su mayoría, enfrentan problemáticas múltiples, como la violencia, bajo aprovechamiento escolar o inasistencia en la escuela. También problemas de salud como la obesidad y la desnutrición, entre otros.

Muchos de ellos son derivados justamente de la pobreza. De ese total, 21 millones de ellos viven en pobreza, cuatro millones no asisten a la escuela. Cada día mueren tres de ellos víctimas de la violencia.

Una de cada cinco personas desaparecidas en este país pertenece a este sector de la población, y cada 30 minutos uno de ellos llega a un hospital por lesiones que le fueron producidas de manera intencional.

Diputadas, diputados, hoy tienen la gran oportunidad de remediar lo anterior. Con la presente reserva me permito poner a consideración aquellos beneficios que como sociedad y país alcanzaríamos si logramos invertir en nuestras niñas, niños y adolescentes. Está por demás decir que si lográramos invertir bajaríamos incluso los niveles tan altos que tenemos de inseguridad.

Si pudiéramos invertir en programas preventivos que permitan que nuestras niñas y niños puedan desarrollar actividades lúdicas, deportivas, recreativas, educativas, ellos lograrían desarrollar valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto hacia los demás. Por lo tanto, compañeras y compañeros diputados, por tercera vez en esta participación les pido, por favor, su voto a favor de los niños, de las niñas y adolescentes de México. Juntos podemos cambiar el rumbo. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una propuesta de modificación al artículo séptimo transitorio.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Compañeras de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros legisladores, buenas noches para todos. La intención es presentar a su consideración una reserva al artículo Séptimo del decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 2020, en donde estamos proponiendo que se incorpore que deberá haber una atención preventiva en este artículo para desastres naturales.

Algunos compañeros legisladores de la fracción del Partido Revolucionario Institucional me han solicitado, presidenta, que se incorpore otra propuesta a este mismo artículo, que considero es muy importante, a efecto de que los excedentes o las disposiciones que haya en los municipios y los estados, esta disponibilidad regularmente se va a la Tesorería de la Federación y esta a su vez destina los recursos para infraestructura o para apoyar las finanzas de los estados.

Nosotros consideramos que tenemos que hacer un esfuerzo para crear una cultura de prevención en el tratamiento de desastres naturales y vale recordar que las manifestaciones de la naturaleza nos agreden y nos impactan en la convivencia social.

En resumen, la propuesta que estamos haciendo, y que yo invito al PRI también a que dé lectura, si así está de acuerdo, es que se adicione en el Séptimo que la disposición que haya de estos recursos también puedan ser utilizados para la atención de desastres naturales. Es cuanto, presidenta. No sé si el PRI quisiera hacer uso de la palabra.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado, permítame. El diputado Galindo ha solicitado el uso de la palabra para hablar en pro, y ahí entonces tendrá la oportunidad de explicar su posición.

Le pido a la Secretaría que dé lectura a los artículos y a la propuesta de redacción que está haciendo el diputado Bonifaz, a efecto de que la asamblea lo tenga claro.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Artículo Séptimo. Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado.

Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de sus compromisos de corto plazo o, en su caso, y sujeto a la disponibilidad presupuestaria para mejorar la infraestructura de las mismas, así como la atención de desastres naturales. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se admite a discusión. Gracias, secretaria.

Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Galindo Favela: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.

El diputado Fernando Galindo Favela: Por supuesto que estamos de acuerdo en que estos recursos que reintegran las entidades federativas se puedan destinar para proyectos de inversión y, sobre todo, también, como lo propone el diputado Bonifaz, para atender desastres naturales.

Sin embargo, platicando con el diputado, se está proponiendo una ligera modificación. No sé, presidenta, si me dejara leerla para que sea la que se proponga al pleno, que es conforme al acuerdo que llegamos.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado, por favor.

El diputado Fernando Galindo Favela: Diría: Artículo Séptimo. Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020 que no hayan sido devengados y pagados en términos de los lineamientos que dicha dependencia emitirá para su operación a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2020, y demás disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieren generado.

Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público directamente a las entidades que los reintegraron para mitigar un posible desequilibrio financiero de las mismas, apoyar proyectos de inversión y también apoyar desastres naturales de esos estados.

Esa sería la propuesta que se estaría sometiendo a consideración del pleno. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría en votación económica si se considera suficientemente discutida.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se considera suficientemente discutida. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutida.

El diputado Pablo Gómez Álvarez(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputado Pablo Gómez?

El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): De procedimiento, nada más. Lo que se admitió a discusión es la reserva presentada por el diputado Bonifaz, registrada debidamente, leída por él en la tribuna. Eso se aceptó a discusión, luego se abrió la discusión. Ahora se ha votado que está suficientemente discutido. Yo, por favor, le pido atentamente que instruya a la Secretaría para que ponga a votación de la asamblea si se aprueba la propuesta, la enmienda, la reserva presentada por el diputado Bonifaz. Ese es el procedimiento.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De acuerdo. Entonces vamos a someter a consideración la propuesta. Consulte la Secretaría si se acepta la modificación al artículo séptimo transitorio, presentado por el diputado Raúl Bonifaz.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación al artículo séptimo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se acepta y se incorpora al texto del dictamen.

Tiene la palabra el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar una propuesta de modificación al artículo decimoprimero transitorio.

El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, durante los últimos años el óptimo y eficiente uso de recursos públicos, a través de los fideicomisos y la redición de cuentas de los mismos, ha sido un tema que se ha puesto en cuestionamiento tanto por organizaciones de la sociedad civil como por distintos medios de comunicación, que han evidenciado la ausencia de información disponible actualizada, clara y ordenada, que demuestre que los recursos están siendo empleados de acuerdo con lo mandatado por la Constitución. Y que, por lo tanto, su ejecución no obedece al cumplimiento de intereses particulares.

A pesar de que los fideicomisos podrían ayudar a la inversión y el ahorro, su uso se ha mal empleado para disponer de recursos públicos sin vigilancia y sin supervisión alguna por parte de los órganos de control del Estado.

Así pues, a lo largo de varias administraciones y de varios años fiscales se han documentado, especialmente por la Auditoría Superior de la Federación, cuantiosos daños al erario.

El transitorio que se propone en la redacción del dictamen, en definitiva, no trata de eliminar la discrecionalidad, sino de centralizar en la Secretaría de Hacienda el manejo de los fideicomisos.

Como lo señalo de nuevo, los fideicomisos son una figura cuya naturaleza podría ayudar a impulsar la inversión que se ha borrado a lo largo de los años y es importante que no se confunda la eliminación de algunos o la disposición absoluta del Estado en su desempeño, con un avance en la transferencia y en la rendición de cuentas.

El tema de los fideicomisos en México no es un tema menor. De acuerdo con Fundar, el manejo de más de 835 mil millones de pesos del presupuesto público contenido en 374 fideicomisos existentes a nivel federal está en

la opacidad, pues no rinden cuentas bajo el amparo, en muchos de los casos, por estar protegidos por el secreto bancario.

Cabe destacar que ese monto de recursos representa el 15.8 por ciento del presupuesto aplicado en 2018, lo que significa 20 veces el presupuesto que se autorizó para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Por mandato constitucional y por lo establecido en las leyes de transparencia, todas las entidades que manejen recursos públicos a través de fideicomisos están obligados a transparentarlos.

La organización de la sociedad civil Fundar, a través de una investigación, titulada “Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público”, ha señalado que, a pesar de que en México ha habido un avance en materia de transparencia, el tema de los fideicomisos sigue teniendo una calificación muy baja, y los fideicomisos son un tema muy opacos y con poca información disponible.

En ese sentido, propongo que se transparenten de manera detallada todos los fideicomisos existentes para que con ello podamos tener criterios claros para su evaluación más que para su centralización.

Así pues, la modificación que propongo es la siguiente: Los contratos de fideicomisos y mandatos públicos deberán prever la supervisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo establecido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asimismo, conforme a lo establecido por la Ley General... y a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública estarán obligados a informar trimestralmente en el sitio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el concepto de gastos con cargo al patrimonio por año, los montos y las fuentes de otros recursos que integran el fideicomiso, el nombre de proveedores o contratistas con los que se ha hecho algún tipo de contratación, sean públicos o privados, el tipo de servicio o el bien adquirido y además el monto.

En caso de extinción, las razones y el fundamento del mismo, criterios de selección de la institución fiduciaria, índices de satisfacción y/o cumplimiento de los objetivos que persigue el fideicomiso.

Compañeras y compañeros, espero que consideren esta modificación, que es de suma importancia para la vigilancia y el seguimiento de las finanzas públicas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una propuesta de modificación al artículo decimocuarto transitorio, párrafo segundo.

El diputado Irineo Molina Espinoza: Buenas noches, diputadas y diputados. Con tu permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Irineo Molina Espinoza: Quiero informarle, diputada presidenta, que la reserva que presento sufrió unas correcciones de estilo, para su mejor integración al decreto y al final haré la entrega a la secretaria de la Mesa Directiva.

Me presento ante esta soberanía, para presentar la reforma al último párrafo, del artículo decimocuarto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Quienes tenemos presente el trabajo que enfrentan los presidentes municipales, y a lo largo de este año, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública recibimos a muchos presidentes municipales, quienes no solamente presentaban necesidades o requerimientos de infraestructura, sino también, pedían la ayuda de esta soberanía para poder enfrentar adeudos que han recibido de administraciones pasadas y que en este momento resultan muy difíciles de pagar por parte de las administraciones municipales, entidades federativas, en relación a los adeudos de la Comisión Federal de Electricidad.

Estos adeudos fueron parte de la entrega–recepción de cada autoridad municipal y fueron por malas prácticas dentro de la administración municipal, pero también, por una falta de obligación de la Comisión Federal de Electricidad.

Y lleva el sentido de mi propuesta de modificación, de que se pueda brindar la oportunidad de que la CFE convenga con los ayuntamientos municipales, entidades federativas, para poder convenir acerca de la deuda heredada. El decimocuarto transitorio determina que durante el ejercicio fiscal...

La diputada Patricia Terrazas Baca (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Permítame, diputado. Por favor, permítame. ¿Con qué objeto, diputada Patricia Terrazas?

La diputada Patricia Terrazas Baca (desde la curul): Hacerle una pregunta al diputado. A ver, si me aceptas una pregunta, diputado.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, sí, diputada, estamos en el momento de presentación de la propuesta, si se admite a discusión, entonces, y hay oradores a favor y en contra, en ese momento procede la pregunta. Gracias, diputada. Continúe, diputado.

El diputado Irineo Molina Espinoza: Sí, con todo gusto, diputada, también sí puedo responder a su exposición o pregunta. ¿Qué dice el decimocuarto transitorio? Que durante el ejercicio fiscal 2020, la Comisión Federal de Electricidad podrá implementar programas de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica de las entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y organismos públicos prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de estos, a través, de la celebración de convenios con cualquiera de las personas morales de la administración pública antes mencionada.

Este tipo de convenios ya tiene la facultad la Comisión Federal de Electricidad de celebrar, pero, como lo mencioné al principio, las cantidades o la deuda es imposible de pagar, ya sea por ingresos propios o por las participaciones federales que reciben las entidades federativas y municipios.

Y ¿qué propongo? Una modificación al último párrafo para que primero el programa sea vigente solamente por el ejercicio 2020 que se incluye dentro de la celebración del convenio, lo que solicite en este caso la entidad federativa o municipio, pero también, que lleve una condonación por parte de la Comisión Federal de Electricidad de la deuda total.

Que el convenio, en el convenio la entidad federativa o municipio acepte que la parcialidad aceptada en el convenio sea deducible o se deduzca de las participaciones federales para que haya un compromiso formal. Esa reforma que propongo es una oportunidad para ayudar a las entidades federativas y municipios, pero también, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para poder fortalecer una empresa del Estado y también evitar esa carga que hoy presentan muchos municipios y entidades federativas.

Hago entrega de la reserva a la secretaria y pido respetuosamente a todos los diputados federales que ayudemos a que tengan unas mejores finanzas estas entidades, pero también, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría, dé lectura a la propuesta del diputado. Sí, permítame, secretaria. ¿Con qué objeto, diputado Ochoa?

El diputado Enrique Ochoa Reza(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Una moción de ilustración al pleno por favor. Estoy inscrito a favor de esta reserva, sin embargo, ante las modificaciones que ha comentado el diputado Irineo, el orador, si pudiera por favor pedirle a la Secretaría que lea efectivamente cómo queda redactada la modificación para poder hacer la valoración correspondiente.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sí, diputado, es justo lo que instruí antes de que pidiera la palabra. Pero, adelante, secretaria.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Modificación propuesta, segundo párrafo.

Los programas serán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 y se implementarán a través de la celebración de convenios a los que se refiere el párrafo anterior. Se sujetarán, sin perjuicio de las demás disposiciones jurídicas aplicables a las reglas de operación que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, las cuales podrán considerar las características del solicitante, pudiéndose condonar el pago de hasta el 50 por ciento del adeudo y que el resto de este sea cubierto mediante parcialidades.

Y en caso de incumplimiento, los convenios permitirán que la Comisión Federal de Electricidad pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la compensación parcial a cargo de las partidas federales que les correspondan a las entidades federativas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y las disposiciones derivadas de este, previendo que las entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México cuenten con solvencia para la atención de sus requerimientos de gasto público. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, secretaria. Consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se admite.

Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.

El diputado Enrique Ochoa Reza: Compañeras y compañeros, he pedido hacer uso de la palabra para apoyar esta propuesta, porque es un tema que hemos discutido ampliamente en la Comisión de Energía que preside con talento nuestro compañero Manuel Rodríguez.

En la Comisión de Energía hemos discutido que la Comisión Federal de Electricidad debe tener las herramientas para poder establecer convenios con los municipios o los gobiernos de los estados que tienen adeudos históricos en el pago de energía eléctrica, con un propósito fundamental: recuperar la cultura del pago justo y oportuno del servicio de energía eléctrica.

Por lo tanto, contar con una media en este ordenamiento legislativo es necesario para que se puedan llevar a cabo los convenios peso a peso, o 50 por ciento, 50 por ciento, que han sido instrumentos utilizados históricamente por la Comisión Federal de Electricidad para recomponer la cultura del pago en aquellos municipios y estados que así lo requieran.

Es importante destacar que se requiere un fundamento jurídico para llevar a cabo dicha acción, a fin de que la empresa productiva del Estado pueda cumplir con ese propósito social y económico de mucho valor que tiene.

Ahora bien, de lo que escuché de los cambios de estilo de la propuesta que se ha leído, brinca un verbo que no estaba en la propuesta que se presentó anteriormente, y creo que es importante dejarlo en una conversación entre nosotros.

Se dice que debe poder, la Comisión Federal de Electricidad, condonar una parte del adeudo y firmar el convenio respaldado por este artículo a modificarse. La palabra condonación es una que llevó a cabo, que derivó en un debate en este ordenamiento parlamentario, precisamente porque se prohibió constitucionalmente condonar.

Uno de los argumentos que establecimos en aquella discusión es que no era conveniente eliminar las condonaciones en su totalidad, porque las entidades del Estado mexicano requieren, en distintos momentos, por razones justificadas, condonar adeudos.

Este es un ejemplo de ello. Entonces, advierto que, si por un lado hemos establecido que no hay condonaciones a nivel constitucional, establecer ese fraseo en la redacción en una ley puede ser problemático, justificado como debe ser el hecho de que la empresa productiva del Estado pueda establecer convenios, precisamente para recuperar la cultura del pago justo y oportuno con municipios y con estados 50–50.

En consecuencia, nosotros nos pronunciamos a favor de que exista la enmienda correspondiente que le dé fundamento jurídico a que la empresa productiva del Estado puntualmente pueda establecer estos convenios, favoreciendo la cultura del pago con municipios y con estados en todo el país.

Pero también dejamos la advertencia de que la utilización de ese concepto puede ir en contra de lo que precisamente en algún momento se ha modificado constitucionalmente. Y no queremos generar ninguna confusión jurídica, que afecte el buen funcionamiento de una herramienta que le sirve a la Comisión Federal de Electricidad y a todos los municipios y estados.

En consecuencia, estamos a favor, pero sí necesitamos revisar la nomenclatura para que efectivamente no sea un problema de constitucionalidad. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. ¿Con que objeto, diputado Porras? Sonido en la curul del diputado Porras.

El diputado Alfredo Porras Domínguez(desde la curul): Presidenta, gracias. Quiero sumarme a lo propuesto por mi compañero de Morena y a lo que el compañero diputado Ochoa está estableciendo. Creo que es una oportunidad histórica para todos los diputados federales que apoyemos a nuestros municipios en México...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Perdón, diputado, discúlpeme ¿Se quiere anotar como orador a favor?

El diputado Alfredo Porras Domínguez (desde la curul): Si gusta, con mucho gusto. Okey.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado, por favor.

El diputado Alfredo Porras Domínguez: Muy buenas tardes, gracias, presidenta, Mesa Directiva, compañeras, compañeros. Yo creo que estamos en la oportunidad histórica de sumar esfuerzos como diputados federales en el beneficio de todos los municipios de México.

Todos representamos municipios, todos en nuestros distritos así está integrado y el principal socio que tienen nuestros municipios, un servidor y muchos de ustedes fuimos presidentes municipales, es la Comisión Federal de Electricidad.

Luego entonces, esta propuesta que hace el diputado Higinio, Irineo, perdón, que respalda el compañero Ochoa, en el Grupo Parlamentario del PT, le pido su solidaridad plena para que respaldemos a los municipios de México y le demos este beneficio que están exigiendo todos. Y nos permita unirnos, diputadas y diputados, por el bien de ellos, sin pleitos. Vamos uniéndonos. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano para hablar en pro, hasta por cinco minutos.

Un segundo, un segundo diputado, la diputada Patricia Terrazas Baca se anotó para hablar en contra y de acuerdo al Reglamento, hay que dar la palabra un orador a favor, otro en contra. Entonces, primero tiene la palabra la diputada Patricia Terrazas Baca.

La diputada Patricia Terrazas Baca: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Patricia Terrazas Baca: Bueno, yo aquí estoy ya muy confundida porque primero se aprueba el artículo 28, donde dice que se prohíben las condonaciones de adeudos. Entonces qué bueno que acomodamos la ley a nuestro antojo, pero aquí el tema es que realmente no nos hacemos responsables de las...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Permítame, diputada Terrazas. Diputada Terrazas, permítame un segundito, por favor. ¿Con qué objeto, diputada Alavez?

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Para hechos, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Para hechos la anotamos con mucho gusto, al término de la lista de oradores. Continúe, diputada Terrazas.

La diputada Patricia Terrazas Baca: Gracias. Nada más yo quisiera que nos hiciéramos responsables de lo que estamos aprobando en esta Cámara, y que todo lo que tiene aprobación tiene una responsabilidad.

Nosotros estamos aprobando en el 28 que no existan condonaciones. Yo estoy de acuerdo en el apoyo y en el entregar mayores recursos a las entidades federativas y a los municipios, que ahorita en este momento con la reserva que presenta el diputado Exsome se lleva el recurso Aprovechamientos, que no es participable ni para entidades ni para municipios, y ahora sí le queremos dar la condonación.

Por mí encantada que se le den condonaciones a los municipios y a las entidades federativas, nada más que cuidemos que no vayamos a estar cayendo en errores de inconstitucionalidad. Yo por eso les pido que seamos responsables y que despertemos, que no estemos metiendo bolas rápidas que mañana nos estén corrigiendo la plana en el Senado o que mañana estén diciéndonos que son inconstitucionales.

Cuidado, diputados. No estemos levantando la mano como monitos chinos, sin haber siquiera leído las reservas o sin tener conocimiento de lo que están votando. Infórmense, diputados, y lean las reservas que se están presentando para que no estén con sorpresitas. Estos son temas muy técnicos y muy delicados, no caigan en sus propios errores y no se vayan a dar el tiro en el pie creyendo que están haciendo el bien haciendo el mal.

Primero los municipios y las entidades federativas. Primero el federalismo. Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por su atención.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada Terrazas. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.

El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, diputada presidenta Laura Rojas.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Rubén Cayetano García: Yo vengo de un distrito de la Costa Chica de Guerrero, que cuya región contempla 16 municipios, todos afectados por altas tarifas de energía eléctrica, todos afectados por apagones y también con municipios que tienen altos adeudos ante la Comisión Federal de Electricidad, hablo de la Costa Chica del estado de Guerrero.

Los adeudos que tienen los ayuntamientos –todo Guerrero, todo Guerrero, compañero– hablo específicamente del distrito 8, pero desde luego que esto afecta a todo el estado y muchas partes del país. Nos acercamos recientemente a la Comisión Federal de Electricidad para plantear esta problemática, por el tema de lo que había pasado en el estado de Tabasco, donde mucha gente desinforma y creen que es un asunto de exclusividad en Tabasco, cuando lo que se trata es precisamente de tener y recuperar la cultura del pago por el consumo de energía eléctrica.

De 16 municipios que tiene la región, se han revisado nueve, y en todos los municipios –estoy hablando de que en la Comisión Federal de Electricidad– por disposición plena del director general Manuel Bartlett, hay un acuerdo de ir revisando, de acuerdo a la política de un gobierno itinerante, se van revisando cada uno de los municipios del distrito, llevamos nueve de 16, y se están atendiendo todos los temas, tarifas, adeudos de ayuntamientos que hacen que en cada momento ocurran cortes por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto se puede remediar con convenios, porque se paraliza el suministro de alumbrado público, se paraliza el suministro de agua potable y otros que dependen de la energía eléctrica.

Esto que vamos a aprobar, y por lo cual me pronuncio a favor, viene a resolver precisamente esta problemática, una cuestión operativa, tiene que haber plena disposición.

Nosotros, los legisladores, si en cada una de sus regiones y sus distritos tuvieran esta disponibilidad, lo ofreció el director general de la Comisión ahora que vino, porque tienen toda una gran estructura territorial, la Comisión Federal de Electricidad, se podrían llevar a cabo todos estos actos, estas revisiones y mejorar el asunto del suministro de energía eléctrica.

Es cosa de que asuman una actitud territorial todos y cada uno de los representantes populares de esta Cámara, sean en el ámbito distrital o sean en el ámbito de una circunscripción para ayudar a los usuarios, a los municipios a resolver no solamente el tema de condonaciones, de derechos, porque esto no es un asunto de condonación, es de impuestos, no vayan a confundir, no desinformen, no hay contradicción constitucional ni vulnera el marco constitucional, se habla de hacer convenios y acuerdos dentro de lo que son derechos, no impuestos.

Siendo esta explicación clara –creo yo–, considero que, si hay voluntad de parte de los representantes populares y de la Comisión Federal, se puede arribar a acuerdos, a convenios como lo dispone el décimo cuarto transitorio que se discute en beneficio no solamente de los ayuntamientos, de los municipios, sino también de los usuarios y consumidores de energía eléctrica. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:A ver, compañeros, muy buenas noches. No, creo que estamos cansados, yo por lo menos. Ahorita le preguntaba a Cayetano para ubicar el tema, porque nadie aquí puede estar en desacuerdo, yo incluido, en ayudar a nuestros ayuntamientos y a los consumidores del país a resolver este problema que hay un planteamiento legítimo.

Cuando compareció Manuel Bartlett, director de Comisión Federal de Electricidad, ofreció este esquema que Cayetano aquí planteó en tribuna. Que se vayan viendo los lugares porque inclusive se reconoció con mucha franqueza que hay no solo municipios y deudas impagables de escuelas, de municipios, sino por el nivel de empobrecimiento a que ha llegado nuestro pueblo durante estas décadas de neoliberalismo, hay gente que no puede pagar aunque tenga la tarifa más baja posible, no dan los ingresos para poder pagar la energía eléctrica, y no se puede entender la vida del ser humano sin energía eléctrica en pleno siglo XXI.

Pero también tenemos por otro lado la obligación de cuidar Comisión Federal de Electricidad, que con toda la reforma energética, lo que hicieron con Pemex y CFE fue tomar decisiones para descuartizarlas, ahogarlas y desaparecerlas y decir que no podían competir con las empresas extranjeras del área correspondiente.

A mí francamente me hace ruido, no estoy convencido de que la manera en que queremos ayudar, como lo dijo aquí la diputada Terrazas, yo comparto su preocupación, que queriendo ayudar en vez de ayudar nos metamos en un enredo, compliquemos a Comisión Federal de Electricidad, tomemos acuerdos que no tengan la solidez suficiente y no encontremos el camino, cuando además no solamente el director de CFE, sino el propio compañero presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, en la última sesión que hubo de la

comisión les habrán informado sus compañeros, compañeras de cada fracción parlamentaria que participamos en esa comisión, se quedó de armar todo un plan de trabajo para ir revisando este tema. Entonces yo...

El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Permítame, diputado Gerardo Fernández Noroña un segundo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Sí, cómo no, con mucho gusto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputado Varela?

El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul): Para anotarme en contra.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Lo anotamos, diputado. Adelante, diputado Gerardo Fernández Noroña.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Continúo. Entonces me parece que no estamos abordando que, teniendo una intención y una preocupación compartida, no lo estamos abordando de manera correcta.

Yo pediría a los compañeros que presentaron esta reserva, que la retiraran y que mejor construyéramos desde la Comisión de Energía, en interlocución con el director de Comisión Federal de Electricidad, un acuerdo que en esencia está planteando la preocupación aquí expresada. Pero que hiciéramos este proceso que está la invitación a realizarlo. Está la apertura de la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, pero que no pusiéramos en apuros las finanzas de Comisión Federal de Electricidad, para decirlo de manera clara.

Yo termino planteando que estamos preocupados por los estrechos márgenes de maniobra que tenemos en nuestros compromisos políticos, nuestros recorridos, nuestra representación, pero me parece que hoy más que nunca tenemos que alzar la mira y cerrar filas con el gobierno de nuestro compañero presidente López Obrador, me refiero a los que estamos en la coalición Juntos Haremos Historia.

Y me parece que las preocupaciones expresadas por compañeros de la oposición coinciden con nuestra sensibilidad de que hay que encontrar una respuesta a este tema que es una preocupación generalizada. Muchas gracias por su atención.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Dado que han hablado el número de oradores que está establecido para el primer bloque, vamos a consultar si está suficientemente discutido.

Si está suficientemente discutido daré la palabra a la diputada Alavez, para hechos, y continuaremos con el trámite. Si no está suficientemente discutido, continuaremos con los oradores a favor y en contra.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Si, señora presidenta. En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Está suficientemente discutido.

Tiene la palabra desde su curul la diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, para rectificación de hechos hasta por un minuto.

La diputada Aleida Alavez Ruiz(desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Es precisamente para aclarar que no es una propuesta que contravenga a la modificación al artículo 28, en donde...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sonido en la curul de la diputada Alavez.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias. No contraviene la modificación que hicimos al artículo 28 constitucional, porque ahí se establece la prohibición a la condonación de impuestos.

En el caso de la luz estamos hablando de un derecho. Y creo que es necesario que se ilustre al pleno con respecto de la diferencia entre un impuesto y un derecho, y que en este caso la luz es un adeudo que lamentablemente arrastran muchos municipios de este país y que en la propuesta que plantea el diputado Irineo no se habla de que definitivamente no pagarán, sino que se harán esquemas de convenios en los que se asuma una parte de la deuda y la otra parte la asuma el municipio con sus recursos.

Entonces, no estamos hablando, insisto, de condonar impuestos, es un derecho. Y sí, se está también visualizando que no se transgredan las finanzas de CFE. Estarán involucrados en las reglas de operación para estos convenios, al igual que la Secretaría de Hacienda.

Por eso, entonces llamar a mis compañeros a no confundir por estas participaciones, que esto contraviene en una disposición constitucional que nosotros mismos acabamos de aprobar. Gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. La diputada Patricia Terrazas, para hechos. Y después ya someteremos a votación. Adelante, diputada, hasta por un minuto.

La diputada Patricia Terrazas Baca(desde la curul): Sí, nada más también para precisar que, efectivamente, el pago de luz es un derecho, pero recordemos que lleva IVA y el IVA es un impuesto. Entonces, sí contraviene si se condona el IVA de la luz. Es una precisión. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada Terrazas. Consulte la Secretaría si se acepta la modificación al artículo decimocuarto transitorio, párrafo segundo, presentada por el diputado Irineo Molina.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación del artículo decimocuarto transitorio, párrafo segundo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se acepta y se incorpora al texto del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Manuel López Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para proponer la adición de un artículo transitorio.

El diputado Manuel López Castillo: Buenas noches. Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Manuel López Castillo: Traigo a consideración de esta soberanía esta noche un tema que creo que gozará del apoyo de todas las fracciones, bueno, esa es mi consideración personal, que gozará del apoyo de todas las fracciones. Inclusive de nuestros adversarios, que no enemigos, políticos.

Se trata de que hay en el país rodando alrededor de 18 millones de autos chocolates. Quizá la cifra no esté muy precisa, porque precisamente por ser chocolates y explicando el término, pues son carros de procedencia extranjera que no tienen un estatus legal en nuestro país. Entonces, podemos dejar la cifra desde 10 a 18 millones de autos que están rodando en nuestro país.

Entonces, pensamos que sería bueno que esta soberanía pensara en legalizar esos autos, por muchos argumentos que se pueden plantear. Primeramente, sería una entrada de dinero fabulosa para los gobiernos federales, estatales y municipales, se habla de alrededor de 50 mil millones de pesos que se podría lograr con esa regularización.

Ahora, otra cosa, los autos ya están aquí, díganme si el Ejército de la ONU o qué poder los va a poder sacar y mandarlos, ¿adónde los vas a mandar? ¿Al deshuesadero o al lugar de dónde venían? Los autos ya están aquí. Creo que sería una solución muy favorable que se legalizaran.

Yo soy de una ciudad fronteriza, San Luis Río Colorado, Sonora –viva, viva–, doble frontera. Doble frontera, es frontera con Estados Unidos y frontera con Baja California, estamos en una esquinita del país. Tengo 40 años viviendo ahí, aunque soy del Valle del Yaqui, pero tengo 40 años viviendo ahí y me tocó vivir el problema de los carros chocolate.

Me tocó tener carros, pero nada más que no eran chocolate, los enderezábamos en ese entonces, había muchas facilidades para enderezar los carros, no era caro enderezar un carro. No era caro, cualquier persona podría pagar la enderezada de un carro.

Actualmente pues, todo eso se acabó, pero la gente, por su necesidad, la gente, por su necesidad, sigue trayendo carros. La gente humilde, la gente humilde también necesita carro, no nada más la gente que tiene más dinero, la gente humilde. A veces, gracias a esos carros, la gente pues trabaja en esos carros y lleva el alimento y cubre las necesidades de sus familias.

Son una gran cantidad de carros y luego tenemos el problema de la seguridad, choca un carro de esos y no hallamos cómo resolver el problema. Se hacen muchos delitos también en esos carros; no porque sea gente indecente, no, son mínimos, pero de todas maneras causan problema. Una parte importante de nuestra gente los usa decentemente.

Es un clamor nacional, no creo que haya un solo diputado aquí en esta soberanía que no haya recibido en sus territorios la petición: Oye, diputado, hay que tratar de enderezar los carros. No creo, al menos yo hace tres días tuve en mi oficina gente de San Luis Río Colorado, Sonora, que venían con esa petición.

Entonces, yo quisiera pues que se hiciera una adecuación al Decimoquinto para efecto de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley.

El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables a la problemática de la posesión de vehículos importados usados, localizados en el territorio nacional, que hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.

Nuestra obligación, como diputados, como gente de gobierno, es proporcionar felicidad a nuestros representados. Y sería una felicidad inmensa, una satisfacción inmensa que esa gente que anda ahí escondida con sus carros saliera a la luz pública y tuviera sus placas y tuviera su legalidad. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se admite la propuesta.

Tiene la palabra, para argumentar a favor, la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, de Morena.

La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz: Con la venia de la presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz: Para conducir a un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que se sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás; jamás para él: Juan Domingo Perón.

Compañeros y compañeras, diputados y diputadas. Desde el inicio de la Legislatura hemos venido trabajando arduamente en este tema. Históricamente, México ha enfrentado una problemática asociada al ingreso de vehículos automotores usados, principalmente procedentes de Estados Unidos.

Conocemos de primera mano la necesidad que tiene la gente del norte de nuestro país de trasladarse a sus trabajos, hogares, escuelas. Y muchas veces, al no contar con sistemas de transporte público realmente eficientes ni con las condiciones para adquirir un automóvil nacional –sin mencionar las condiciones climatológicas extremas que se viven en el norte del país–, se ven orillados a buscar una opción más económica, siendo esta la adquisición de uno de los llamados coches chocolates.

Adquieren estos automóviles siempre teniendo la intención de poseer la manera económica y el apoyo por parte de las autoridades correspondientes para regularizarlo en algún momento. Y así, no vivir con la angustia de que alguien pueda, por la vía legal, arrebatarle a su familia lo que con tanto esfuerzo se adquirió.

Compañeros y compañeras, para muchas personas en el norte del país su coche chocolate es lo único que tienen. No porque les guste vivir en la ilegalidad sino porque es para lo que alcanza.

Somos conscientes de que, como representantes populares, velar por los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas es nuestro deber.

Por ello, nunca hemos quitado el dedo del renglón en este tema. Sumamos esfuerzos, voluntades y, como Grupo Parlamentario de Morena, hoy proponemos estrategias efectivas.

Aprobar esta reserva facilitará que nuestros representados y nuestras representadas que tienen un vehículo con estas características puedan acreditar la estancia legal de dicho bien.

Ayudaremos a las mamás a llevar a sus hijos a la escuela con tranquilidad, a los empleados que se trasladan diariamente de un extremo a otro. A los estudiantes que van desde la provincia a las ciudades del norte buscando un mejor futuro. A aquellos que con esfuerzo pudieron ahorrar para adquirir su medio de transporte.

Esta es una muestra más de que en este gobierno sí somos sensibles a las necesidades de las mexicanas y de los mexicanos de que en este gobierno sí nos ponemos a trabajar en lo que nos toca. De que en este gobierno sí tenemos como prioridad a nuestros representados. Y de que en este gobierno sí implementamos acciones que impactan de manera positiva y directamente en la calidad de vida del pueblo.

Esta, compañeros y compañeras, es una muestra más de que el sentido humanitario que tiene Morena prevalece por sobre todas las cosas. Morena, a favor de eso.

La propuesta es adicionar una disposición transitoria décimo quinta, a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 que permita al Congreso de la Unión establecer una solución de manera adecuada al problema de los vehículos ilegales. Viva el norte. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: La diputada Sara Rocha Medina. La diputada Sara Rocha Medina, para fundamentar a favor la propuesta.

La diputada María Sara Rocha Medina: Gracias, diputada presidenta. Queridos compañeros y compañeras, felicito la iniciativa y la propuesta de los compañeros de Morena y nos adherimos a ellos en un tema tan sensible que tiene que ver con la vida de quienes somos del campo.

Verdaderamente es una realidad, yo creo que lo dijo con toda puntualidad Heriberto, el diputado Heriberto, es una realidad que quienes vivimos, y no nada más en el norte del país. Yo quiero hablar por todos los estados sí, obviamente, la mayor parte son del norte pero del centro, Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, que de ahí

soy, Guerrero, Michoacán, la mayor parte de los estados tienen vehículos chocolates. Todo mundo los conocemos como vehículos chocolates.

Con esta propuesta y con esta iniciativa vamos a dar, primero, certidumbre y certeza de la propiedad de sus vehículos a quienes los tienen, porque son ilegales, todo mundo lo sabemos. ¿Por qué? Porque no ha habido regularización en varios años. Pero esta sería la quinta regularización que se hiciera.

La verdad, estoy muy contenta por esta iniciativa, por esta propuesta. Yo espero que todos los compañeros y compañeras voten a favor de ella.

Quisiera nada más ser puntual con dos temas. Estos vehículos son en muchos casos o en la mayor parte de los casos, el único instrumento de trabajo que tiene la gente del campo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los mexicanos, por lo menos de esas zonas, tenemos parientes en Estados Unidos.

Quizás, lo voy a decir con toda puntualidad, algunos legales y algunos ilegales en Estados Unidos, porque eso es real. Pero la mayor parte de ellos o les mandan sus vehículos o les mandan sus camionetas para que puedan trabajar en el campo y, bueno, efectivamente, son ilegales.

Hoy, me parece que daríamos un gran paso para poder ayudar a la gente el campo y que tengan sus vehículos legalizados, en la claridad de que como lo hicieron con toda puntualidad, que sean ocho meses para la legalización.

También, es importante que no sea muy alto el costo, que sea un costo adecuado para que ellos puedan legalizar sus vehículos.

Y el otro tema, ayudaríamos mucho a las familias del campo, que también en esos vehículos los llevan quienes tienen la oportunidad, a la escuela, a la secundaria o a la prepa que queda a kilómetros de donde se vive.

Entonces, muchas gracias por esta propuesta. Muchas felicidades a quienes nos vayan a apoyar y que me sumo a ello, por eso hablo a favor de...

Únicamente decirles que en el campo se los vamos a agradecer y las familias que usan todos los días su vehículo, ya sean camionetas, carros, tractores incluso, que les mandan desde allá. Pero en este caso, los vehículos, una vez que ya sean legalizados, la gente va a tener la seguridad de que ya no van a andar, como lo dijo el diputado: quienes puedan creerse o hacer que andan haciendo o delinquiendo con vehículos con placas sobrepuestas. Es muy importante que les ayudemos a que cada quien tenga su vehículo en orden.

Muchas gracias, diputada presidenta, y pues nada más sumarme a esta iniciativa, y el Grupo Parlamentario del PRI y mis compañeros se suman a esto, vamos a favor y decirles que sería una gran iniciativa que aprobemos a favor para que podamos ayudar y resolver que hace muchos años no se había vuelto a legalizar. Muchísimas gracias a todos.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: La diputada Claudia Domínguez, desde su curul. ¿Con que motivo?

La diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez(desde su curul): Si, es rectificación de hechos, nada más para comentar a la diputada que tenía la voz, que no hay ninguna persona en el mundo que sea ilegal, simplemente son gente que no tiene documentos legales para estar dentro de un país. No son ilegales.

Y, a favor totalmente de esta propuesta porque también tenemos muchos connacionales que tienen que regularizar sus menajes cuando los deportan. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera suficientemente discutido.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica, pregunto a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por

la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Suficientemente discutido.

Consulte a la Secretaría si acepta la modificación al artículo transitorio presentado por el diputado Emmanuel López.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se considera la modificación al artículo transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se acepta la adición y se incorpora el texto al dictamen.

Tiene la palabra el diputado Higinio del Toro Pérez, de Movimiento Ciudadano. Él declino su participación en la tribuna y se incorpora en el Diario de los Debates su participación.

En el uso de la palabra el diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del PAN, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio.

El diputado José Rigoberto Mares Aguilar: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado José Rigoberto Mares Aguilar: Un trato discriminatorio es el que vive Baja California Sur en términos fiscales y la insensibilidad no ha permitido corregir los males causados a la economía de sus familias.

El decreto de Estímulos Fiscales de la Región Fronteriza Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018, pretende corregir uno de los muchos daños que impuso la tóxica reforma fiscal aprobada en 2013, cuando se eliminó el trato especial que recibía dicha región y que causó severas afectaciones en la economía de la zona, como incremento en la inflación y disminución de la competitividad, situación que no es necesario ni decirlo, afectó principalmente a los que menos tienen.

Sin embargo, está claro que este decreto no resuelve la problemática del todo. Es por eso que esta reserva tiene por objeto regresar a la ley los estímulos fiscales de la región fronteriza para garantizar que su aplicación no quede sujeta, como hasta ahora, a la decisión del presidente, que como se ha visto en otros temas, puede cambiar radicalmente de un momento a otro.

Que quede claro, el objetivo es resarcir un daño que ya está hecho. No hay razón para no integrar los estímulos de la región fronteriza norte en la ley, pues el propio decreto dice que estos se encuentran justificados y respaldados por la política del gobierno federal, de establecer mecanismos que fortalezcan el crecimiento de los contribuyentes de dicha región.

En ese sentido, solicitamos la congruencia del gobierno federal para atender con equidad las condiciones particulares en que vivimos en la región. Exigimos una vez más que se corrija el trato discriminatorio que el gobierno federal ha dado a Baja California Sur, al no incluirlo en el régimen de la frontera aun cuando es una necesidad que los sudcalifornianos le hemos expresado en múltiples ocasiones.

Baja California Sur tiene condiciones geográficas como las de una isla, esto provoca que todo, todo sea más caro. Por ello y por sentido común, no por privilegio, desde siempre se nos había considerado como parte de la región fronteriza. Desde ahí nuestra inconformidad al ver que el presidente retomó el régimen de la frontera norte y, sin tocarse el corazón, dejó fuera a Baja California Sur, y a su estilo lo hizo porque sí, sin dar una explicación que sustente el hecho de que antes se nos considerara región fronteriza y ahora, repentinamente, no.

No hay razón para que nos traten de esa forma. Los sudcalifornianos también somos mexicanos, iguales a los demás, no pretendemos ser mexicanos de primera, pero tampoco queremos que se nos trate como de segunda, simple y sencillamente somos mexicanos.

Nos tocó vivir en una tierra con muchos retos, pero también con mucho potencial que nos esforzamos por desarrollar al máximo. La prueba está en los altos niveles de crecimiento económico muy por encima de la media nacional. Somos líderes en generación de empleos y si el gobierno federal atendiera nuestro sentir, lograríamos aún más, pero lejos de apoyarnos el gobierno federal nos golpea.

Parece ser que al presidente se le olvidó o está volteando la cara, traicionando una y otra vez el voto de confianza que miles de subcalifornianos le brindaron, ahora nos queda muy claro erróneamente.

Una vez más lo digo desde aquí, no es un privilegio nacido de caprichos el que solicitamos, solo exigimos un trato justo, exigimos que se tomen en cuenta nuestras condiciones geográficas complejas y que se nos devuelva un derecho que ya se nos había reconocido y que nos fue arrebatado a la mala y que ahora el gobierno federal nos sigue negando sin justificación alguna.

Compañeras y compañeros, hoy tenemos la oportunidad de brindar solidez al régimen de la frontera norte y de corregir el trato discriminatorio que se ha dado a Baja California Sur, solicito su sensibilidad y apoyo a esta reserva, los subcalifornianos exigimos solo un trato justo, fuerza y coraje para trabajar nos sobran, pero ante la afrenta luchamos por defendernos. Hagamos justicia por Baja California Sur. Es cuanto.

Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se pregunta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

La diputada Ana Ruth García Grande(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en la curul de la diputada.

La diputada Ana Ruth García Grande (desde la curul): Gracias, presidenta. Estuve pidiendo el uso de la voz antes que se sometiera a votación, me parece que está dado el resultado de la votación, pero de cualquier forma quiero dejar la expresión de su servidora, de apoyo a la moción que formalizó el diputado Rigoberto Mares.

Creo que Baja California Sur no puede ser motivo del distingo de que hemos pedido de diferentes formas que se nos reconsidere en el tema del IVA, del ISR...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, queda registrado su apoyo moral, porque no quedó a discusión...

La diputada Ana Ruth García Grande (desde la curul): Se lo aprecio, se lo aprecio y le pido que en lo sucesivo voltee para acá cuando esté la discusión...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Es que no está a discusión...

La diputada Ana Ruth García Grande (desde la curul): ...porque a tiempo no se me dio el uso de la palabra.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Es que no se aceptó a discusión, diputada. Por eso entonces ya no hay oradores a favor y en contra. Pero queda registrado en el Diario de los Debates sus expresiones de apoyo. Muchas gracias, diputada.

Tiene la palabra el diputado Armando Tejeda... Perdón, el diputado Armando Tejeda ha retirado su propuesta. La diputada Cynthia Iliana López Castro tiene el uso de la palabra para proponer la adición de un artículo transitorio.

La diputada Cynthia Iliana López Castro: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Cynthia Iliana López Castro: El 26 de septiembre, más de dos mil mujeres hicimos una manifestación pacífica en la Cámara de Diputados para pedir que se quitara un impuesto que afectaba a las mujeres que venden por catálogo.

Son tres millones de vendedoras, de vendedores, y el 90 por ciento son mujeres, que tienen entre tres y cuatro dependientes económicos, que la mayoría son madres jefas de familia, que buscan un ingreso para poder pagar los útiles a sus hijos o el transporte escolar.

Las mujeres, como tal no es un trabajo formal, lo hacen en sus tiempos libres, lo hacen cuando están esperando recoger en la escuela a sus hijos, lo hacen tocándole a la vecina y sacan el catálogo y lo pueden vender.

Queridas compañeras, ¿quiénes de ustedes no han comprado o vendido por catálogo? ¿Quién de ustedes no tiene familiares o amigos con historias exitosas donde gracias a esta venta por catálogo pudieron sacar adelante a sus hijos?

Estas mujeres no fueron afectadas con este impuesto que se logró eliminar. Quiero destacar un logro histórico, se logró eliminar este impuesto que afectaba a tres millones de mujeres que vendían por catálogo. Hoy todas nosotras y todos nosotros podemos regresar a nuestros distritos a impulsar y apoyar el comercio a través de estas mujeres que es una actividad totalmente honrada, totalmente legítima y que es la única manera de que puedan tener un ingreso extra.

Ya se logró eliminar el impuesto, y quiero reconocer, públicamente, al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien nos recibió aquí en la Cámara de Diputados y ante esta manifestación pacífica fue sensible, y quiero reconocer porque se eliminó este impuesto y eso es un logro que agradezco todo el apoyo y solidaridad de mi grupo parlamentario, de la presidenta de la Comisión de Hacienda y de todos los grupos parlamentarios, porque es un logro que juntos lo hemos podido hacer realidad.

Esta reserva que presento es porque hay quienes tienen duda o creen que hubo una rendija para que haya una puerta trasera y esto no se cumpla. Por eso esta reserva es adicionar un transitorio y que quede sumamente claro en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, anclado al Código Fiscal donde establece que las personas que ganan menos de tres mil pesos no tienen que pagar ese impuesto.

Lo único que busco es el apoyo de cada uno de ustedes para que lo dejemos claro en la ley, para que no haya duda que dejó una rendija abierta o que no se aprobó o que no se quitó.

Es un logro que hicimos todos y creo que tenemos que dar la cara a las mujeres y poderles decir a estos tres millones de familias que pueden quitarse la preocupación, que este impuesto quedó eliminado.

Es por ello que solicito a ustedes el apoyo para esta reserva únicamente para que quede anclado en la ley y que quede muy claro para todos. Que no haya malinterpretaciones, que podamos todos salir a defender esto que logramos en conjunto.

Con esto quiero agradecer a todos, porque vender en este tiempo es difícil, y quitar este impuesto es justo y es una buena decisión. Los partidos políticos comprendimos a las mujeres que salen a buscar con honradez

regresar por la tarde con algo legítimo para proteger a sus hijos y a su patrimonio y poder sacar a sus familias adelante. Muchas gracias y felicito este gran logro de haber echado este impuesto atrás. Gracias, compañeros.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

El diputado Irineo Molina Espinoza(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El diputado Irineo Molina ¿con qué objeto?

El diputado Irineo Molina Espinoza (desde la curul): Diputada presidenta, solicitarle con mucho respeto y con fundamento en el artículo 108 de nuestro Reglamento, si podría usted separar de la votación general la correspondiente al artículo 1o., el cual fue aprobado y reformado por esta soberanía.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Lo tramitaremos, diputado. En votación económica, consulte la Secretaría, en términos del artículo 108, numeral 2, del Reglamento, si aprueba votar por separado la propuesta de modificación aceptada al artículo 1o.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se consulta en votación económica si se autoriza, en términos del artículo 108, numeral 2, del Reglamento, que se someta a votación por separado la propuesta de modificación aceptada al artículo 1o. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se autoriza.

En consecuencia...

El diputado Irineo Molina Espinoza(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputado Irineo?

El diputado Irineo Molina Espinoza (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. De igual forma pedirle, de manera respetuosa, si podría separar la votación del artículo 16, apartado A, fracción V, por favor.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Vamos a votar primero, una vez que ya está, que se aprobó separar el artículo 1o., vamos a proceder a la votación. Luego procederíamos a solicitar la aprobación del pleno para el artículo que después, es el artículo 16, Apartado A, que el diputado Irineo acaba de solicitar.

Entonces, en consecuencia, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de la modificación aceptada al artículo 1o.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de la modificación aceptada al artículo 1o.

(Votación)

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sí, a ver, primero el diputado Higinio y después el diputado Gerardo Fernández Noroña. Diputado Higinio, ¿con qué objeto? El diputado Villarreal, okey. Diputado Higinio, ¿con qué objeto? Ah, perdón, es el diputado Villarreal. ¿Con qué objeto?

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar(desde la curul): Presidenta, nada más si nos podría ilustrar la Secretaría en los términos del artículo que vamos a votar, por favor.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De acuerdo.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (desde la curul): Gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Lo mismo el diputado Gerardo. Se solicita a la Secretaría que dé lectura a la propuesta que se está votando de modificación aceptada al artículo 1o.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, presidenta. Le voy a dar lectura conforme al texto que se propone. Debe decir:

Artículo 1o. Está un cuadro con concepto total, ingreso y estimado, que total son 6 millones 103 mil 839 millones. Luego dice: número 1, impuestos, 3 millones 501 mil 344 mil millones. 1.1, impuestos sobre los ingresos: 1 millón 848 mil 374.5 mil millones y 0.1, impuesto sobre la renta: 1 millón 848 mil 374.5 millones.

El 6, el rubro 6, aprovechamientos: 103 mil 674. El 61, aprovechamientos: 103 mil 639. El 22, que está como otros: 96, 427.5. Y el cuatro, que está también como otros: 96 mil 427.5.

Luego propone un derivado del monto, un último párrafo dice: derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2020, se proyecta una recaudación federal participable por 3 billones 390 mil 269.9 millones de pesos. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, secretaria.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico.

No, todavía puede votar diputada. ¿Ya no? ¿Y allá? Si nos dice su voto de viva voz, por favor. Sí, diputada Abelina, ¿a favor o en contra?

La diputada Abelina López Rodríguez (desde la curul): En contra.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Abelina, en contra. Adelante, diputado. Diputado López Castillo.

El diputado Manuel López Castillo (desde la curul): En contra.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado que falte de emitir su voto? Adelante, diputado Bernabe.

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe (desde la curul): En contra.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Diputado Moreno Gil.

El diputado Mario Ismael Moreno Gil (desde la curul): En contra.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: ¿Algún diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se... ¿Algún diputado que falte? Ya. Señora presidenta, tenemos 2 votos a favor, 5 abstenciones y 338 votos en contra.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: No se aprueba, queda en términos del dictamen.

En consecuencia, se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo 1o. en términos del dictamen.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del artículo 1o. en términos del dictamen.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta se emitieron 286 votos a favor, 22 abstenciones y 33 votos en contra.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado. Queda en términos del dictamen.

La diputada Sara Rocha. ¿Con qué objeto diputada?

La diputada María Sara Rocha Medina(desde la curul): Gracias presidenta. Para pedir si fueran tan amables, la adición del artículo transitorio, que presentó el diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo. Sí fueran tan amables que lo votáramos por separado, es un transitorio y no quisiera que nos equivocáramos.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Lo tramitamos diputada. En votación económica, consulte la Secretaría en términos del artículo 108, numeral 2, del Reglamento, si aprueba votar por separado la propuesta de adición aceptada al artículo decimoquinto transitorio.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se consulta, en votación económica, si se autoriza que, en términos de lo artículo 108, numeral 2, del Reglamento, se someta a votación por separado la propuesta de adición al artículo Decimoquinto. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Era decimoquinto transitorio.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Perdón, al artículo decimoquinto transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se autoriza.

En consecuencia, se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación de la adición aceptada al artículo decimoquinto transitorio.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Hágase los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Abrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación nominal de la adición de un artículo decimoquinto transitorio.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 316 a favor, 12 abstenciones y 6 en contra.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobada la adición de un decimoquinto transitorio. Incorpórese al cuerpo del proyecto de decreto.

Diputado Villarreal, ¿con qué objeto?

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar(desde la curul): Presidenta, en los mismos términos. Solicitarle se pueda votar por separado el artículo decimocuarto transitorio, párrafo segundo, del diputado Irineo Molina Espinoza.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Lo tramitaremos. En votación económica, consulte la Secretaría, en términos del artículo 108, numeral 2, del Reglamento, si aprueba votar por separado la propuesta de modificación aceptada al artículo decimocuarto transitorio.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Se consulta, en votación económica, si se autoriza en términos del artículo 108, numeral 2, del Reglamento, se someta a votación por separado la propuesta aceptada por la asamblea, a la modificación al artículo decimocuarto transitorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. ¿Podría repetir la votación, señora presidenta?

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: No se autoriza.

Se pide a la Secretaría...

La diputada Norma Adela Guel Saldívar (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Perdón, diputada. ¿Con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada Norma Guel.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar (desde la curul): Para manifestar el sentido de mi voto anterior, sentido positivo.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 264 votos a favor, 0 abstenciones y 82 votos en contra.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular, por 264 votos, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. **Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.**

4. Con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"
"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO"

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA
OF. No. D.G.P.L.64-II-1-1295
EXP. 3660

CC. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s e n t e s .

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, con número CD-LXIV-II-1P-096, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019.

Dip. Ma. Sara Rocha Medina
Secretaria

RECIBIDO
2019 OCT 21 PM 2:00
CAMARA DE SENADORES
SECRETARIA GENERAL DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS
2 3 0 1 0

Anexo: Expedientes originales 3662 y 3666

*lmv**

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTA
PROYECTO
DE
DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Capítulo I
De los Ingresos y el Endeudamiento Público

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran:

CONCEPTO	Ingreso Estimado
TOTAL	**6,103,317.4**
1. Impuestos	**3,505,822.4**
11. Impuestos Sobre los Ingresos:	1,852,852.3
01. Impuesto sobre la renta.	1,852,852.3
12. Impuestos Sobre el Patrimonio.	
13. Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones:	1,534,055.8
01. Impuesto al valor agregado.	1,007,546.0
02. Impuesto especial sobre producción y servicios:	515,733.5
01. Combustibles automotrices:	342,053.6
01. Artículo 2o., fracción I, inciso D).	313,321.0
02. Artículo 2o.-A.	28,732.6
02. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:	62,165.7
01. Bebidas alcohólicas.	18,888.4
02. Cervezas y bebidas refrescantes.	43,277.3
03. Tabacos labrados.	43,679.4
04. Juegos con apuestas y sorteos.	2,968.8
05. Redes públicas de telecomunicaciones.	5,923.3
06. Bebidas energetizantes.	11.6

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

		07. Bebidas saborizadas.	28,660.5
		08. Alimentos no básicos con alta densidad calórica.	23,783.2
		09. Plaguicidas.	758.1
		10. Combustibles fósiles.	5,729.3
	03.	Impuesto sobre automóviles nuevos.	10,776.3
14.		Impuestos al Comercio Exterior:	70,984.6
	01.	Impuestos al comercio exterior:	70,984.6
		01. A la importación.	70,984.6
		02. A la exportación.	0.0
15.		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables.	
16.		Impuestos Ecológicos.	
17.		Accesorios de impuestos:	41,210.2
	01.	Accesorios de impuestos.	41,210.2
18.		Otros impuestos:	6,850.3
	01.	Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.	6,850.3
	02.	Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación.	0.0
19.		Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	-130.8
2.		**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**374,003.2**
21.		Aportaciones para Fondos de Vivienda.	0.0
	01.	Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.	0.0
22.		Cuotas para la Seguridad Social.	374,003.2
	01.	Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores.	374,003.2
23.		Cuotas de Ahorro para el Retiro.	0.0
	01.	Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones.	0.0
24.		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social:	0.0
	01.	Cuotas para el Instituto de Seguridad y	0.0

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

	Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores.	
	02. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares.	0.0
	25. Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.	0.0
3.	**Contribuciones de Mejoras**	**44.8**
	31. Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas:	44.8
	01. Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.	44.8
	39. Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
4.	**Derechos**	**52,256.8**
	41. Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público:	43,325.8
	01. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	346.2
	02. Secretaría de la Función Pública.	0.0
	03. Secretaría de Economía.	2,670.7
	04. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	8,748.2
	05. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	12,361.9
	06. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	72.3
	07. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	0.0
	08. Secretaría de Educación Pública.	0.2
	09. Instituto Federal de Telecomunicaciones.	19,126.3
	10. Secretaría de Cultura	0.0
	43. Derechos por Prestación de Servicios:	8,931.0
	01. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público:	8,931.0
	01. Secretaría de Gobernación.	91.1
	02. Secretaría de Relaciones Exteriores.	4,915.0
	03. Secretaría de la Defensa Nacional.	145.5
	04. Secretaría de Marina.	445.0
	05. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	588.6

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

		06. Secretaría de la Función Pública.	23.0
		07. Secretaría de Energía.	0.2
		08. Secretaría de Economía.	21.9
		09. Secretaría de Agricultura, y Desarrollo Rural.	42.9
		10. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	1,081.6
		11. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	85.1
		01. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
		02. Otros.	85.1
		12. Secretaría de Educación Pública.	1,255.9
		13. Secretaría de Salud.	0.0
		14. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	9.4
		15. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.	61.1
		16. Secretaría de Turismo.	0.0
		17. Fiscalía General de la República.	0.0
		18. Instituto Federal de Telecomunicaciones.	30.1
		19. Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0
		20. Comisión Reguladora de Energía.	0.0
		21. Comisión Federal de Competencia Económica.	0.0
		22. Secretaría de Cultura.	58.4
		23. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	76.2
	44.	Otros Derechos.	0.0
	45.	Accesorios de Derechos.	0.0
	49.	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
5.	**Productos**		**10,095.3**
	51.	Productos.	10,095.3
		01. Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público.	8.8

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

	02.	Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público:	10,086.5
		01. Explotación de tierras y aguas.	0.0
		02. Arrendamiento de tierras, locales y construcciones.	0.3
		03. Enajenación de bienes:	1,859.6
		01. Muebles.	1,743.5
		02. Inmuebles.	116.1
		04. Intereses de valores, créditos y bonos.	7,687.4
		05. Utilidades:	539.1
		01. De organismos descentralizados y empresas de participación estatal.	0.0
		02. De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.	0.0
		03. De Pronósticos para la Asistencia Pública.	538.6
		04. Otras.	0.5
		06. Otros.	0.1
	59.	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
6.	**Aprovechamientos**		**98,674.4**
	61.	Aprovechamientos:	98,639.0
		01. Multas.	2,190.5
		02. Indemnizaciones.	2,531.7
		03. Reintegros:	166.5
		01. Sostenimiento de las escuelas artículo 123.	0.0
		02. Servicio de vigilancia forestal.	0.1
		03. Otros.	166.4
		04. Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica.	94.8
		05. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación.	0.0
		06. Participaciones en los ingresos derivados de	0.0

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

	la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación.	
07.	Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del Sistema Escolar Federalizado.	0.0
08.	Cooperación de la Ciudad de México por servicios públicos locales prestados por la Federación.	0.0
09.	Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de particulares para alcantarillado, electrificación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas.	0.0
10.	5 por ciento de días de cama a cargo de establecimientos particulares para internamiento de enfermos y otros destinados a la Secretaría de Salud.	0.0
11.	Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica.	947.8
12.	Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.	1,129.7
13.	Regalías provenientes de fondos y explotación minera.	0.0
14.	Aportaciones de contratistas de obras públicas.	7.6
15.	Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal:	0.5
	01. Aportaciones que efectúen los Gobiernos de la Ciudad de México, Estatales y Municipales, los organismos y entidades públicas, sociales y los particulares.	0.0
	02. De las reservas nacionales forestales.	0.0
	03. Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.	0.0
	04. Otros conceptos.	0.5
16.	Cuotas Compensatorias.	142.4

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

17.	Hospitales Militares.	0.0
18.	Participaciones por la explotación de obras del dominio público señaladas por la Ley Federal del Derecho de Autor.	0.0
19.	Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal.	0.0
20.	Provenientes del programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras.	0.0
21.	No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios.	0.0
22.	Otros:	91,427.5
	01. Remanente de operación del Banco de México.	0.0
	02. Utilidades por Recompra de Deuda.	0.0
	03. Rendimiento mínimo garantizado.	0.0
	04. Otros.	91,427.5
23.	Provenientes de servicios en materia energética:	0.0
	01. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
	02. Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0
	03. Comisión Reguladora de Energía.	0.0
62.	Aprovechamientos Patrimoniales.	35.4
01.	Recuperaciones de capital:	35.4
	01. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de Entidades Federativas y empresas públicas.	27.6
	02. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas privadas y a particulares.	7.8
	03. Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.	0.0
	04. Desincorporaciones.	0.0
	05. Otros.	0.0
63.	Accesorios de Aprovechamientos.	0.0
69.	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

7.	**Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**	**1,065,166.0**
71.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social:	72,232.9
01.	Instituto Mexicano del Seguro Social.	26,920.2
02.	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.	45,312.7
72.	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado:	992,933.1
01.	Petróleos Mexicanos.	574,535.0
02.	Comisión Federal de Electricidad.	418,398.1
73.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.	
74.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.	
75.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	
76.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	
77.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.	
78.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos.	
79.	Otros Ingresos.	
8.	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**	
81.	Participaciones.	
82.	Aportaciones.	

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

	83. Convenios.	
	84. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.	
	85. Fondos Distintos de Aportaciones.	
9.	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**412,797.7**
	91. Transferencias y Asignaciones.	0.0
	93. Subsidios y Subvenciones.	0.0
	95. Pensiones y Jubilaciones.	0.0
	97. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.	412,797.7
	01. Ordinarias.	412,797.7
	02. Extraordinarias.	0.0
0.	**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**584,456.8**
	01. Endeudamiento interno:	569,582.1
	01. Endeudamiento interno del Gobierno Federal.	532,266.1
	02. Otros financiamientos:	37,316.0
	01. Diferimiento de pagos.	37,316.0
	02. Otros.	0.0
	02. Endeudamiento externo:	0.0
	01. Endeudamiento externo del Gobierno Federal.	0.0
	03. Financiamiento Interno.	
	04. Déficit de organismos y empresas de control directo.	-47,748.8
	05. Déficit de empresas productivas del Estado.	62,623.5
	Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal (0.01.01+0.02.01)	532,266.1

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este precepto.

Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal de 2020, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos.

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2020, se proyecta una recaudación federal participable por 3 billones 394 mil 236.7 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal de 2020, el gasto de inversión del Gobierno Federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto.

Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2020, en términos monetarios, el pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, previsto en la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 895.1 millones de pesos.

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el artículo Segundo Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho Transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por parte del Ejecutivo Federal, de los bienes y derechos del fideicomiso referido en el primer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en cuentas de orden, con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo esas operaciones.

El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará en primer término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las operaciones referidas en el párrafo anterior y, posteriormente, se destinarán para restituir al Gobierno Federal los recursos públicos aportados para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto.

Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2020 se destinen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del ejercicio fiscal de 2020, se instrumenten para potenciar los recursos que, con cargo a dicho fondo, reciben las entidades federativas.

Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El gasto de inversión a que se refiere el párrafo sexto del presente artículo se reportará en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de los ingresos generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.61.22.04 del presente artículo por concepto de otros aprovechamientos. Asimismo, deberá informar los destinos específicos que, en términos del artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan dichos aprovechamientos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2020, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Durante el ejercicio fiscal 2020, los ingresos propios de Petróleos Mexicanos que se generen por un precio promedio anual del barril del petróleo crudo mexicano que exceda de 49.01 dólares de los Estados Unidos de América y hasta los 55.00 dólares de los Estados Unidos de América, deberá destinarlos a mejorar su meta de balance financiero aprobada en el artículo 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 532 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo.

Las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior no deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para el ejercicio fiscal de 2020.

Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente se podrán aplicar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario incluyendo sus artículos transitorios. Sobre estas operaciones de canje y refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión.

El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta propia con los valores referidos.

En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes para cubrir

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

dichos pagos en la cuenta que, para tal efecto, le lleve el Banco de México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el citado Banco procurará las mejores condiciones para el mencionado Instituto dentro de lo que el mercado permita.

El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco de México podrá ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Titular de dicha Tesorería, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo.

Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores un monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el Resultado de Operación que considera la Constitución Neta de Reservas Crediticias Preventivas, de cero pesos para el ejercicio fiscal de 2020.

El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización del órgano de gobierno de la entidad de que se trate y con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los montos establecidos en el artículo 1o., numeral 0 "Ingresos derivados de Financiamientos" de esta Ley, así como el monto de endeudamiento neto interno consignado en este artículo, se verán, en su caso, modificados en lo conducente como resultado de la distribución, entre el Gobierno Federal y los organismos y empresas de control directo, de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 1 mil 250 millones de dólares de los Estados Unidos de América; asimismo, se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

Se autoriza para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 835 millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de 508 millones de dólares de los Estados Unidos de América, asimismo se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

El cómputo de lo establecido en los dos párrafos anteriores se realizará en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión de manera trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 3o. Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020. Asimismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar operaciones de canje, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública de la Ciudad de México.

El ejercicio del monto de endeudamiento autorizado se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 4o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 257,138.2 millones de pesos, de los cuales 100,344.1 millones de pesos corresponden a inversión directa y 156,794.1 millones de pesos a inversión condicionada.

Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad en los términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV, del Reglamento de este último ordenamiento, por un total de 2,760.7 millones de pesos que corresponde a un proyecto de inversión directa.

Artículo 6o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y/o sus empresas productivas subsidiarias deberán presentar las declaraciones, hacer los pagos y cumplir con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, ante la Tesorería de la Federación, a través del esquema para la presentación de declaraciones que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida, previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las modificaciones a los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los pagos establecidos conforme al párrafo anterior, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente a aquél en que se generen dichas modificaciones, así como en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga uso de las facultades otorgadas en el segundo párrafo de este artículo, los pagos correspondientes deberán ser transferidos y concentrados en la Tesorería de la Federación por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a más tardar el día siguiente de su recepción, a cuenta de la transferencia a que se refiere el artículo 16, fracción II, inciso g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos que, hasta antes de la entrada en vigor del "Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en términos del artículo 32 de dicha Ley, serán registrados como inversión.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Capítulo II
De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales

Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:

I. Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate:

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26 por ciento mensual.

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53 por ciento mensual.

3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.82 por ciento mensual.

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización realizada conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos y disposiciones de carácter general expedidos en el Ramo de Hacienda, de las que hayan derivado beneficios otorgados en términos de la presente Ley, así como por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2020, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se estará a lo siguiente:

I. La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, de similares características, en países con los que México mantiene vínculos comerciales.

II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica y de saneamiento financiero.

III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general.

Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública Federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los aprovechamientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los aprovechamientos que perciba la dependencia correspondiente.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por dicha Secretaría, ya sea de los ingresos que obtengan o con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, o tratándose de recuperaciones de capital o del patrimonio, según sea el caso, los recursos correspondientes se destinarán por la propia Secretaría prioritariamente a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a fomentar acciones que les permitan cumplir con sus respectivos mandatos, o a programas y proyectos de inversión, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente Ley.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de cualquier otra entidad paraestatal distinta de las señaladas en el párrafo anterior, dichos ingresos serán enterados a la Tesorería de la Federación bajo dicha naturaleza, a efecto de que sean destinados a programas presupuestarios que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él deriven.

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 1o., numerales 6.61.11, 6.62.01.04 y 6.61.22.04 de esta Ley por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, aquéllos a que se refieren la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley Federal de Competencia Económica, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo en los plazos que para tales efectos se fijen, el prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación de que se trate, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos.

El prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por aprovechamientos, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de carácter particular, las cuotas de los productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal de 2020, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los productos que se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los productos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019 hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

efectuadas tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como por el Instituto de Administración de Bienes y Activos y los accesorios de los productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en un fondo, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal conforme a las disposiciones fiscales, que hayan sido transferidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la citada entidad transferente, sobre bienes de la misma naturaleza; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en el fondo señalado en el párrafo anterior, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. Un mecanismo como el previsto en el presente párrafo, se podrá aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que, por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deba realizar. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el Instituto de Administración de Bienes y Activos remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados y a su Coordinadora de Sector, un informe que contenga el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las autoridades mencionadas en los párrafos citados.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Los ingresos netos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos se podrán destinar hasta en un 100 por ciento a financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como para el pago de los créditos que hayan sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, siempre que en el acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el convenio que al efecto se celebre se señale dicha situación. Lo anterior no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados a que se refiere el décimo tercer párrafo del artículo 13 de esta Ley. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes en proceso de extinción de dominio y de aquellos sobre los que sea declarada la extinción de dominio y de sus frutos, así como su monetización en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, serán destinados a una cuenta especial en los términos que establece el artículo 239 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 234 y 237 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por productos, así como de la concentración efectuada a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 12. Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2020 se concentrarán en términos del artículo 22 de la Ley de Tesorería de la Federación, salvo en los siguientes casos:

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

I. Se concentrarán en la Tesorería de la Federación, a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción, los derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, incluidos entre otros las sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, así como los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

II. Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional, sólo registrarán los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente de esta Ley, salvo por lo dispuesto en la fracción I de este artículo, y deberán conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos.

Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere esta fracción, se deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, de los informes avalados por el órgano interno de control o de la comisión respectiva del órgano de gobierno, según sea el caso, especificando los importes del impuesto al valor agregado que hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de los ingresos;

III. Las entidades de control indirecto deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en posibilidad de elaborar los informes trimestrales que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reflejen dentro de la Cuenta Pública Federal;

IV. Los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, podrán ser recaudados por las oficinas de los propios institutos o por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la Cuenta Pública Federal, y

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

V. Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio de la concentración en términos de la Ley de Tesorería de la Federación.

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere esta fracción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de que dichos ingresos hayan sido concentrados en la Tesorería de la Federación.

Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos.

Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se destinarán a las entidades o a las empresas productivas del Estado que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza. Las entidades o las empresas productivas del Estado podrán celebrar convenios de colaboración con la iniciativa privada.

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.

Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en la fracción que les corresponda conforme al citado artículo.

Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de concentrar los recursos públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la Federación, en los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato análogo, así como aquellos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según su origen, y se podrán destinar a los fines que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento correspondiente. Asimismo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 6.62.01.04 del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes.

Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son accesorios.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán los netos que resulten de restar al ingreso percibido las erogaciones efectuadas para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a que se refiere el párrafo siguiente.

Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales son los recursos efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones procedentes

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas. Con excepción de lo dispuesto en el séptimo párrafo de este artículo para los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, los ingresos netos a que se refiere este párrafo se enterarán o concentrarán, según corresponda, en la Tesorería de la Federación y deberán manifestarse tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo acciones, por la enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión de derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la desincorporación de entidades, se les podrá descontar un porcentaje, por concepto de gastos indirectos de operación, que no podrá ser mayor del 7 por ciento, a favor del Instituto de Administración de Bienes y Activos, cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la citada entidad, y se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos podrán destinarse para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente con la opinión favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, sin que sea necesario concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Estos recursos deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica.

Los pasivos a cargo de organismos descentralizados en proceso de desincorporación que tengan como acreedor al Gobierno Federal, con excepción de aquéllos que tengan el carácter de crédito fiscal, quedarán extinguidos de pleno derecho sin necesidad de autorización alguna, y los créditos quedarán cancelados de las cuentas públicas.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, podrán permanecer afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. No se considerará enajenación la transmisión de bienes y derechos al Fondo de Desincorporación de Entidades que, con la opinión favorable de dicha Comisión, efectúen las entidades en proceso de desincorporación, para concluir las actividades residuales del proceso respectivo.

Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos remanentes que les correspondan de dichos procesos ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, como parte de la estrategia de conclusión de los procesos de desincorporación de entidades, entre el Instituto de Administración de Bienes y Activos y las entidades cuyos procesos de desincorporación concluyeron, podrán ser utilizados por éste, para sufragar las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, relativo a la atención de encargos bajo su administración, cuando éstos sean deficitarios. Lo anterior, estará sujeto, al cumplimiento de las directrices que se emitan para tal efecto, así como a la autorización de la Junta de Gobierno del Instituto de Administración de Bienes y Activos, previa aprobación de los órganos colegiados competentes.

Los ingresos obtenidos por la venta de bienes asegurados a favor del Gobierno Federal, incluyendo numerario, cuya administración y destino hayan sido encomendados al Instituto de Administración de Bienes y Activos, en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, serán destinados a un fondo en los términos del artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 90, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Los ingresos provenientes de numerario y de la enajenación de bienes que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos, que hayan sido declarados abandonados por parte de las instancias competentes, distintos a los señalados en el párrafo décimo quinto del presente artículo y que se concentren a la Tesorería de la Federación, se considerarán aprovechamientos y se destinarán al financiamiento de las operaciones del Instituto, en términos de lo establecido en el artículo 90 de la Ley

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 89, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

El numerario decomisado y los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y previa deducción de los gastos indirectos de operación que correspondan, se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al Fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, u otras políticas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la presente Ley.

Los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, serán integrados al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley citada.

Los ingresos provenientes de la enajenación que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos de vehículos declarados abandonados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha dependencia, se destinarán de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. De la cantidad restante a los permisionarios federales se les cubrirán los adeudos generados hasta con el 30 por ciento de los remanentes de los ingresos y el resto se enterará a la Tesorería de la Federación. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 14. Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, entre las que se comprende de manera enunciativa a las siguientes:

I. Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los términos de dichas disposiciones.

Artículo 15. Durante el ejercicio fiscal de 2020, los contribuyentes a los que se les impongan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del citado Código, independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente.

Cuando los contribuyentes a los que se les impongan multas por las infracciones señaladas en el párrafo anterior corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su caso, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación o se notifique la resolución provisional a que se refiere el artículo 53-B, primer párrafo, fracción I del citado Código, pero antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 53-B, los contribuyentes pagarán el 60 por ciento de la multa que les corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior.

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2020, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que adquieran el diésel o el biodiésel y sus mezclas, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos y que para determinar su utilidad puedan deducir dichos combustibles cuando los importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles, en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2, según corresponda al tipo de combustible, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante fiscal de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

1. El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o el biodiésel y sus mezclas, por el número de litros de diésel o de biodiésel y sus mezclas importados o adquiridos.

   En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.

2. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en dichas actividades, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en aduana del pedimento de importación o el precio consignado en el comprobante fiscal de adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas en las estaciones de servicio, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

III. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final en dichas actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de los artículos 74 y 75 del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2020 y enero de 2021.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diésel o de biodiésel y sus mezclas, en el que asienten mensualmente la totalidad del diésel o del biodiésel y sus mezclas que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diésel o el biodiésel y sus mezclas que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diésel o del biodiésel y sus mezclas utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de estos combustibles en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda según el tipo de combustible, conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el número de litros importados o adquiridos.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago por la importación o adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas a distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: monedero electrónico autorizado por el Servicio de Administración Tributaria; tarjeta de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante, o bien, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México.

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, se entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal, relacionados con sus actividades económicas, sin que por ello se genere un cobro.

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 300 millones de pesos, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura mencionada hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se realicen los gastos a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación del beneficio contenido en esta fracción.

VI. Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que en su proceso productivo no se destinen a la combustión.

El estímulo fiscal señalado en esta fracción será igual al monto que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda, por la cantidad del combustible consumido en un mes, que no se haya sometido a un proceso de combustión.

El monto que resulte conforme a lo señalado en el párrafo anterior únicamente podrá ser acreditado contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se adquieran los combustibles a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización del combustible no sujeto a un proceso de combustión por tipos de industria, respecto de los litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible de que se trate, adquiridos en un mes de calendario, así como las demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

VII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de pesos, consistente en permitir el acreditamiento del derecho especial sobre minería a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos que hayan pagado en el ejercicio de que se trate.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción, únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tengan los concesionarios o asignatarios mineros a su cargo, correspondiente al mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación de esta fracción.

VIII. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos, y que dichos ingresos obtenidos en el ejercicio por la enajenación de libros, periódicos y revistas represente al menos el 90% de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio de que se trate.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior consiste en una deducción adicional para los efectos del impuesto sobre la renta, por un monto equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente.

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV, V, VI y VII de este apartado quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto señalen.

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente apartado no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido en esta Ley.

Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos establecidos en la presente Ley.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno de ellos se establece en la presente Ley.

B. En materia de exenciones:

Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo.

Artículo 17. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a empresas productivas del Estado, organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza.

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.

Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 18. Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los tribunales administrativos, los órganos autónomos por disposición constitucional, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades, se deberán aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados de la dependencia en la Ley de Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados efectuados por dicha dependencia a la Tesorería de la Federación, en el periodo que corresponda.

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 19. Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican de la siguiente manera:

I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se generan en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades relacionadas directamente con las funciones recurrentes de la institución.

II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades que no guardan relación directa con las funciones recurrentes de la institución.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con las atribuciones de la dependencia o entidad, tales como la recuperación de seguros, los donativos en dinero y la enajenación de bienes muebles.

IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como de los tribunales administrativos y de los órganos constitucionales autónomos. No se incluyen en esta fracción los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ni aquéllos por concepto de derechos y aprovechamientos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, los cuales se sujetan a lo dispuesto en el artículo 12, fracción I, de esta Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades a más tardar el último día hábil de enero de 2020 y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se modifiquen.

Los ingresos a que se refiere la fracción III de este artículo se aplicarán en los términos de lo previsto en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 20. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal de 2020 la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 1.45 por ciento. La metodología para calcular dicha tasa es la siguiente:

I. Se determinó la tasa de rendimiento promedio ponderado de los valores públicos por el periodo comprendido de febrero a julio de 2019, conforme a lo siguiente:

a) Se tomaron las tasas promedio mensuales por instrumento, de los valores públicos publicados por el Banco de México.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

b) Se determinó el factor de ponderación mensual por instrumento, dividiendo las subastas mensuales de cada instrumento entre el total de las subastas de todos los instrumentos públicos efectuadas al mes.

c) Para calcular la tasa ponderada mensual por instrumento, se multiplicó la tasa promedio mensual de cada instrumento por su respectivo factor de ponderación mensual, determinado conforme al inciso anterior.

d) Para determinar la tasa ponderada mensual de valores públicos se sumó la tasa ponderada mensual por cada instrumento.

e) La tasa de rendimiento promedio ponderado de valores públicos correspondiente al periodo de febrero a julio de 2019 se determinó con el promedio simple de las tasas ponderadas mensuales determinadas conforme al inciso anterior del mencionado periodo.

II. Se tomaron las tasas promedio ponderadas mensuales de valores privados publicadas por el Banco de México y se determinó el promedio simple de dichos valores correspondiente al periodo de febrero a julio de 2019.

III. Se determinó un factor ponderado de los instrumentos públicos y privados en función al saldo promedio en circulación de los valores públicos y privados correspondientes al periodo de febrero a julio de 2019 publicados por el Banco de México.

IV. Para obtener la tasa ponderada de instrumentos públicos y privados, se multiplicaron las tasas promedio ponderadas de valores públicos y privados, determinados conforme a las fracciones I y II, por su respectivo factor de ponderación, determinado conforme a la fracción anterior, y posteriormente se sumaron dichos valores ponderados.

V. Al valor obtenido conforme a la fracción IV se disminuyó el valor promedio de la inflación mensual interanual del índice general correspondiente a cada uno de los meses del periodo de febrero a julio de 2019 del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

VI. La tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el valor obtenido conforme a la fracción V de este artículo por la tasa correspondiente al último tramo de la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 22. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por el incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades competentes, con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de 1 hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con base en los criterios que se establezcan para tal efecto, los cuales podrán considerar, entre otros, los días de atraso en la atención de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los requerimientos que se hubieran incumplido, o la probable afectación de los intereses patrimoniales de los clientes o usuarios de los servicios financieros.

Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al terrorismo, cometidas por las entidades financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y asesores en inversiones, serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del reporte de la operación inusual que no se hubiera enviado, del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario de la que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas conforme a las disposiciones señaladas anteriormente, o bien con multa equivalente en moneda nacional de 10 hasta 100,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el caso de cualquier otro incumplimiento a las referidas disposiciones.

Artículo 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios que, en su caso, corresponda a las actividades mencionadas, mediante la aplicación del esquema de estímulos siguiente:

I. Calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma siguiente:

   a) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado en el bimestre de que se trate, considerando el giro o actividad a la que se dedique el contribuyente, conforme a la siguiente:

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

	Sector económico	Porcentaje IVA (%)
1	Minería	8.0
2	Manufacturas y/o construcción	6.0
3	Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles)	2.0
4	Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares en que se proporcionen servicios de alimentos y bebidas)	8.0
5	Negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y/o medicinas	0.0

Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores económicos mencionados en los numerales 1 a 4 aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante. Se entiende por sector preponderante aquél de donde provenga la mayor parte de los ingresos del contribuyente.

b) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios en el bimestre de que se trate, considerando el tipo de bienes enajenados por el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar

Descripción	Porcentaje IEPS (%)
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea comercializador)	1.0
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea fabricante)	3.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea comercializador)	10.0

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea fabricante)	21.0
Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante)	4.0
Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante)	10.0
Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador)	1.0
Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el contribuyente sea fabricante)	23.0
Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante)	120.0

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo, cuando hayan pagado el impuesto especial sobre producción y servicios en la importación de tabacos labrados y bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos C) y G) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, considerarán dicho pago como definitivo, por lo que ya no pagarán el impuesto que trasladen en la enajenación de los bienes importados, siempre que dicha enajenación se efectúe con el público en general.

c) El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta fracción será el monto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios, en su caso, a pagar por las actividades realizadas con el público en general, sin que proceda acreditamiento alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente.

d) El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios deberá realizarse por los períodos y en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades realizadas con el público en general, aquéllas por las que se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su deducción o acreditamiento, en donde se traslade en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, dichos impuestos deberán pagarse en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones aplicables, conjuntamente con el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios determinado conforme al inciso c) de esta fracción.

Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios será aplicable, cuando proceda, en la proporción que represente el valor de las actividades por las que se expidieron comprobantes fiscales en las que se haya efectuado el traslado expreso y por separado, en el valor total de las actividades del bimestre que corresponda.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta fracción podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso deberán calcular y pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según se trate, a partir del bimestre en que abandonen la opción. En este caso, los contribuyentes no podrán volver a ejercer la opción prevista en el presente artículo.

II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las actividades realizadas con el público en general en las que determinen el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios con el esquema de porcentajes a que se refiere la fracción I del presente artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente:

a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según corresponda al número de años que tenga el contribuyente tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal:

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

TABLA

Años	Porcentaje de reducción (%)
1	100
2	90
3	80
4	70
5	60
6	50
7	40
8	30
9	20
10	10

Para los efectos de la aplicación de la tabla el número de años de tributación del contribuyente se determinará de conformidad con lo que al respecto se considere para los efectos del impuesto sobre la renta.

Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, cuyos ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de trescientos mil pesos, durante cada uno de los años en que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será de 100 por ciento.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por tributar conforme al Régimen de Incorporación Fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán al monto establecido en dicho párrafo. Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto referido, en el ejercicio siguiente no se podrá tomar el beneficio del párrafo anterior.

b) La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de reducción a que se refiere el inciso anterior será acreditable únicamente contra el impuesto al valor agregado o el impuesto

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

especial sobre producción y servicios, según se trate, determinado conforme a la aplicación de los porcentajes a que se refiere la fracción I de este artículo.

III. El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo no se considerará como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.

IV. Se releva a los contribuyentes a que se refiere este artículo de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 24. Para los efectos del impuesto sobre la renta, se estará a lo siguiente:

I. Las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, siempre que dichos apoyos económicos o monetarios se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran zonas afectadas los municipios de los Estados afectados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que se listen en las declaratorias de desastre natural correspondientes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

II. Para los efectos de los artículos 82, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 138 de su Reglamento, se considera que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de dicha Ley, cumplen con el objeto social autorizado para estos efectos, cuando otorguen donativos a organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y cuyo objeto exclusivo sea realizar labores de rescate y reconstrucción en casos de desastres naturales, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos, se deberá cumplir con lo siguiente:

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

1. Contar con autorización vigente para recibir donativos al menos durante los 5 años previos al momento en que se realice la donación, y que durante ese periodo la autorización correspondiente no haya sido revocada o no renovada.

2. Haber obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior cuando menos de 5 millones de pesos.

3. Auditar sus estados financieros.

4. Presentar un informe respecto de los donativos que se otorguen a organizaciones o fideicomisos que no tengan el carácter de donatarias autorizadas que se dediquen a realizar labores de rescate y reconstrucción ocasionados por desastres naturales.

5. No otorgar donativos a partidos políticos, sindicatos, instituciones religiosas o de gobierno.

6. Presentar un listado con el nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de las organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con la autorización para recibir donativos a las cuales se les otorgó el donativo.

b) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos, a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán cumplir con lo siguiente:

1. Estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

2. Comprobar que han efectuado operaciones de atención de desastres, emergencias o contingencias por lo menos durante 3 años anteriores a la fecha de recepción del donativo.

3. No haber sido donataria autorizada a la que se le haya revocado o no renovado la autorización.

4. Ubicarse en alguno de los municipios o en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de las zonas afectadas por el desastre natural de que se trate.

5. Presentar un informe ante el Servicio de Administración Tributaria, en el que se detalle el uso y destino de los bienes o recursos recibidos, incluyendo una relación de los folios de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y la documentación con la que compruebe la realización de las operaciones que amparan dichos comprobantes.

6. Devolver los remanentes de los recursos recibidos no utilizados para el fin que fueron otorgados a la donataria autorizada.

7. Hacer pública la información de los donativos recibidos en su página de Internet o, en caso de no contar con una, en la página de la donataria autorizada.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de esta fracción.

Capítulo III
De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento

Artículo 25. Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.

La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 de marzo de 2020.

Artículo 26. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresividad.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Artículo 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores lo siguiente:

A. El Presupuesto de Gastos Fiscales, a más tardar el 30 de junio de 2020, que comprenderá los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2021 en los siguientes términos:

I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el Erario Federal.

II. La metodología utilizada para realizar la estimación.

III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida.

IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso.

V. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales.

B. Un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, a más tardar el 30 de septiembre de 2020, en el que se deberá señalar, para cada una la siguiente información:

I. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de nacionales.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

II. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de extranjeros.

III. Ingresos por donativos recibidos en especie de nacionales.

IV. Ingresos por donativos recibidos en especie de extranjeros.

V. Ingresos obtenidos por arrendamiento de bienes.

VI. Ingresos obtenidos por dividendos.

VII. Ingresos obtenidos por regalías.

VIII. Ingresos obtenidos por intereses devengados a favor y ganancia cambiaria.

IX. Otros ingresos.

X. Erogaciones efectuadas por sueldos, salarios y gastos relacionados.

XI. Erogaciones efectuadas por aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y jubilaciones por vejez.

XII. Erogaciones efectuadas por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

XIII. Gastos administrativos.

XIV. Gastos operativos.

XV. Monto total de percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos.

El reporte deberá incluir las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los conceptos contenidos en los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en su Reglamento.

C. Para la generación del reporte a que se refiere el Apartado B de este artículo, la información se obtendrá de aquélla que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración de las personas morales con fines no lucrativos correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

La información sobre los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos a que se refiere el Apartado B de este artículo, se obtendrá de los datos reportados a más tardar el 31 de julio de 2020, en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a que se refiere el artículo 82, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se entenderá por gastos administrativos y operativos lo siguiente:

I. Gastos administrativos: los relacionados con las remuneraciones al personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento y conservación, los impuestos y derechos federales o locales, así como las demás contribuciones y aportaciones que en términos de las disposiciones legales respectivas deba cubrir la donataria siempre que se efectúen en relación directa con las oficinas o actividades administrativas, entre otros. No quedan comprendidos aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

II. Gastos operativos: aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

La información a que se refieren los Apartados B y C de este artículo, no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2o., fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Artículo 28. En el ejercicio fiscal de 2020, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente:

I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes.

II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización.

IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años. Se deberá entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de Diputados.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020, salvo lo dispuesto en el transitorio Séptimo, el cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto, mismo que será aplicable en el ejercicio fiscal de 2019 respecto de los recursos que las entidades federativas y municipios hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación en dicho ejercicio, correspondientes a ejercicios fiscales de 2017 y 2018.

Segundo. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se refiere el informe que, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha rendido el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2019.

Tercero. Para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se modifique la denominación de alguna dependencia o entidad o las existentes desaparezcan, se entenderá que los ingresos estimados para éstas en la presente Ley corresponderán a las dependencias o entidades cuyas denominaciones hayan cambiado o que absorban las facultades de aquéllas que desaparezcan, según corresponda.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Cuarto. Durante el ejercicio fiscal de 2020 el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013 continuará destinándose en los términos del citado precepto.

Quinto. Durante el ejercicio fiscal 2020 las referencias que en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, así como en los artículos 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos se entenderán hechas también al Servicio de Administración Tributaria.

Sexto. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales la información sobre los ingresos excedentes que, en su caso, se hayan generado con respecto al calendario de ingresos derivado de la Ley de Ingresos de la Federación a que se refiere el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En este reporte se presentará la comparación de los ingresos propios de las entidades paraestatales bajo control presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado, así como del Gobierno Federal. En el caso de éstos últimos se presentará lo correspondiente a los ingresos provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Séptimo. Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido devengados y pagados en términos de los lineamientos que dicha dependencia emitirá para su operación a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2020 y demás disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado. Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas, así como la atención de desastres naturales.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Para efectos de lo anterior, los aprovechamientos provenientes de los enteros que realicen las entidades federativas y municipios en términos del presente transitorio, respecto de ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor de las obligaciones de reintegro a la Tesorería de la Federación establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras, siempre y cuando dichas disponibilidades hayan estado depositadas en cuentas bancarias de la entidad federativa y/o municipio.

Octavo. En el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria deberá publicar estudios sobre la evasión fiscal en México. En la elaboración de dichos estudios deberán participar instituciones académicas de prestigio en el país, instituciones académicas extranjeras, centros de investigación, organismos o instituciones nacionales o internacionales que se dediquen a la investigación o que sean especialistas en la materia. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio fiscal de 2020.

Noveno. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante el ejercicio fiscal 2020 y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requerirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de los pagos a que se refiere el párrafo anterior con cargo a las participaciones y transferencias federales, garantizando que las entidades federativas cuenten con solvencia para la atención de sus necesidades primordiales.

El Instituto, conforme a los modelos autorizados por su órgano de gobierno, podrá suscribir con las entidades federativas y, en su caso, los municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales que correspondan, los convenios para la regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos. El plazo máximo para cubrir los pagos derivados de dicha regularización será de 15 años. Asimismo, en adición a lo previsto en el artículo 22 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Trabajadores del Estado, en el marco de la celebración de los referidos convenios, dicho Instituto deberá otorgar descuentos en los accesorios generados a las contribuciones adeudadas excepto los correspondientes a las cuotas y aportaciones que deban ser depositadas en las cuentas individuales de los trabajadores. Para tal efecto, deberán adecuar los convenios de incorporación voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para incluir en el mismo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 204 de dicha Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá aceptar como fuente de pago bienes inmuebles que se considerarán como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse a las cuentas individuales de los trabajadores. El Instituto determinará si los bienes a los que se refiere este párrafo, resultan funcionales para el cumplimiento de su objeto, asegurándose que se encuentren libres de cualquier gravamen o proceso judicial y que el monto del adeudo no sea mayor al valor del avalúo efectuado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. En estos casos, la entidad federativa, municipio, dependencia o entidad del gobierno local, según corresponda, deberá cubrir los gravámenes y demás costos de la operación respectiva, los cuales no computarán para el cálculo del importe del pago.

Décimo. Las dependencias y entidades que coordinen la operación de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos, salvo los que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concentrarán en la Tesorería de la Federación, en términos de las disposiciones específicas que emita, los recursos públicos disponibles no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 en dichos vehículos, salvaguardando en todo momento los derechos de terceros.

Los aprovechamientos que se generen se destinarán a gasto de inversión así como a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Los programas de inversión deberán registrarse en la cartera de inversión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior no será obligatorio a los instrumentos jurídicos que por disposición expresa de ley los recursos públicos deban permanecer en el patrimonio o afectos a los mismos, así como a aquéllos en materia de pensiones y seguridad social, desastres naturales, infraestructura, estabilización de ingresos incluyendo al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y aquéllos que sirvan como mecanismo de garantía o fuente de pago de obligaciones a cargo del Gobierno Federal o sus entidades paraestatales.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Dicha dependencia deberá señalar en los informes trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas, sobre el monto y el destino que dé a los recursos utilizados conforme a lo previsto en este párrafo.

Asimismo, las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, un informe de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos susceptibles de extinguirse en términos de las disposiciones aplicables, lo anterior a efecto de que durante el ejercicio fiscal 2020 se lleven a cabo los actos necesarios para la extinción de dichos vehículos.

Décimo Primero. Los contratos de fideicomiso y mandato públicos deberán prever que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá disponer en cualquier momento del patrimonio de éstos, asimismo, deberán establecer la obligación de las instituciones fiduciarias o mandatarias, de concentrar trimestralmente en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos, los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado para el cumplimiento de su objeto, salvo disposición de carácter general en contrario.

Las instituciones fiduciarias o mandatarias de fideicomisos, mandatos o análogos públicos, deberán concentrar de forma trimestral en la Tesorería de la Federación los intereses generados por dichos instrumentos financieros, salvo aquéllos que impliquen el pago de gastos de operación de dichos vehículos, bajo la naturaleza de aprovechamientos, y se destinarán a gasto en salud o de inversión en infraestructura, lo anterior con excepción de aquellos vehículos financieros que por disposición expresa de ley, decreto o determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dichos recursos deban permanecer afectos a su patrimonio o destinados al objeto correspondiente. Para efectos de lo anterior, las dependencias coordinadoras de dichos vehículos deberán realizar los actos necesarios para modificar en el primer semestre del ejercicio fiscal los instrumentos jurídicos respectivos.

Décimo Segundo. Se instruye a la institución fiduciaria del fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria para que durante el mes de marzo del presente ejercicio, concentre en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos los recursos que integran el patrimonio fideicomitido a esa fecha a fin de destinarlos, mediante el mecanismo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a proyectos de inversión de infraestructura económica para la construcción, ampliación o rehabilitación de puertos, así como para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros que mejoren la conectividad entre los puertos.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Para efectos de lo anterior, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el citado fideicomiso no podrá asumir compromisos adicionales y únicamente podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción, la cual deberá formalizarse a más tardar en el mes de junio del presente ejercicio fiscal. Las obligaciones asumidas que se tengan con terceros, serán cubiertas con cargo al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Décimo Tercero. Durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2020, la institución fiduciaria del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados deberá concentrar en la Tesorería de la Federación los recursos remanentes previstos en su patrimonio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, o bien, para los destinos establecidos en el Séptimo transitorio de esta Ley.

Décimo Cuarto.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Comisión Federal de Electricidad podrá implementar programas de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica de entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y organismos públicos prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos, a través de la celebración de convenios con cualquiera de las personas morales de la administración pública antes mencionadas.

Los programas serán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 y se implementarán a través de la celebración de convenios a los que se refiere el párrafo anterior, se sujetarán, sin perjuicio de las demás disposiciones jurídicas aplicables, a las reglas de operación que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las cuales podrán considerar las características del solicitante, pudiéndose condonar el pago de hasta el 50 por ciento del adeudo, y que el resto de éste sea cubierto mediante parcialidades, y en caso de incumplimiento, los convenios permitirán que la Comisión Federal de Electricidad pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la compensación parcial a cargo de las partidas federales que le correspondan a las entidades federativas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y las disposiciones derivadas de este, previendo que las entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México cuenten con solvencia para la atención de sus requerimientos de gasto público.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Décimo Quinto.- Para efectos de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo de ocho meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández
Presidenta

Dip. Ma. Sara Rocha Medina
Secretaria

Se remite a la Cámara de Senadores
para sus efectos Constitucionales la
Minuta CD-LXIV-II-1P-096
Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019

Lic. Hugo Christian Rosas de León
Secretario de Servicios Parlamentarios

62

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se informa a la Asamblea que, con fundamento en el artículo 176, numeral 2 del Reglamento del Senado, a las cuatro minutas se les dio turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Pasamos al siguiente asunto.

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

Octubre 24, de 2019

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fecha 21 de octubre de 2019, nos fue turnada de manera directa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, remitida por la H. Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

Estas Comisiones Unidas que suscribimos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, párrafo 1; 176; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, párrafo 1, fracción VI del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración de la Minuta que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la Minuta de referencia realizamos los integrantes de estas Comisiones Unidas, derivado de lo establecido en los artículos 187; 188; 189 y 190, párrafo 1, fracción VII del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

En el apartado denominado "**I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA**", se relata el trámite brindado desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo.

En el apartado "**II. OBJETO DE LA MINUTA**" y "**III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA**", se expone la motivación y fundamentación de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la componen.

En el apartado de "**IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA**", los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.

I. ANTECEDENTES DE LA MINUTA

1. En sesión ordinaria del 17 de octubre de 2019, la H. Cámara de Diputados aprobó la Minuta materia de este dictamen con 258 votos en pro y 104 votos en contra y 2 abstenciones, turnándola a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

2. En reunión de trabajo del 17 de octubre de 2019, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, respectivamente, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento del Senado de la República, nos declaramos en reunión

permanente para el análisis de la Minuta remitida por la Colegisladora.

3. El día 21 de octubre de 2019, la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-1P2A.-4957 turnó de manera directa, la mencionada Minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

4. El 22 de octubre de 2019 los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras nos reunimos con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de conocer las propuestas y las implicaciones de los cambios realizados por la Colegisladora contenidas en la Minuta materia de este Dictamen.

5. El 24 de octubre de 2019 los CC. Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas revisamos el contenido de la citada Minuta, a efecto de emitir nuestras observaciones y comentarios a la misma, e integrar el presente dictamen.

II. OBJETO DE LA MINUTA

La Minuta que se dictamina tiene por objeto establecer:

(i) La estimación de los ingresos que para el año que se presupuesta obtendrán el Gobierno Federal y los organismos y empresas

federales, así como los derivados de financiamientos, requeridos para financiar el gasto público del ejercicio fiscal de 2020.

(ii) Los montos de endeudamiento neto del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, el margen de intermediación financiera, los ingresos derivados de los proyectos de inversión productiva de largo plazo, así como el monto de los nuevos proyectos a contratar por entidad y tipo de inversión.

(iii) Las disposiciones generales, los regímenes específicos y los estímulos en materia fiscal aplicables en el ejercicio fiscal de 2020, así como las disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se deberán cumplir para la entrega oportuna de diversos informes al Congreso de la Unión.

III. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La Minuta en análisis corresponde a la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, presentada por el Ejecutivo Federal el día 8 de septiembre de 2019.

Por otra parte, como consecuencia del análisis de los supuestos del marco macroeconómico, así como de las estimaciones de ingresos y gastos previstos en el Paquete Económico para 2020, la Colegisladora coincidió con el Titular del Ejecutivo Federal en que la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, no contemple nuevos

impuestos, ni aumentos a los vigentes, con la finalidad de beneficiar a los mexicanos.

Ahora bien, la Colegisladora concordó con el Ejecutivo Federal respecto a lo propuesto en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020, en los que se estima que el Producto Interno Bruto (PIB) registre un crecimiento económico anual de entre 1.5 y 2.5 por ciento. De igual manera, para efectos de las estimaciones de finanzas públicas, consideró oportuno utilizar un crecimiento puntual del PIB para 2020 de 2.0 por ciento; y un tipo de cambio del peso respecto al dólar de los Estados Unidos de América de 20.0 pesos por dólar, y la plataforma de producción de petróleo crudo, en 1,951 miles de barriles diarios (mbd) con la estimación del precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación de 49.0 dólares de los Estados Unidos de América por barril.

Por otro lado, la Colegisladora consideró conveniente realizar ajustes a la carátula de ingresos, así como al quinto párrafo del artículo 1o. de la Ley cuya emisión se propone, con la finalidad de adecuar las estimaciones de ingresos presentadas por el Ejecutivo Federal. Es así que, se proyecta obtener un total de 6 billones 103 mil 317.4 millones de pesos (mdp) por concepto de ingresos estimados, de los cuales 3 billones 505 mil 822.4 mdp corresponden a impuestos; 374 mil 3.2 mdp a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; 44.8 mdp a Contribuciones de Mejoras; 52 mil 256.8 mdp a Derechos; 10 mil 95.3 mdp a Productos; 98 mil 674.4 mdp a

Aprovechamientos; 1 billón 65 mil 166.0 mdp a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos; 412 mil 797.7 mdp a Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y 584 mil 456.8 a Ingresos Derivados de Financiamientos. Así también, en la Minuta sujeta a análisis se estima una recaudación federal participable por 3 billones 394 mil 236.7 mdp.

En otro tenor, en la Minuta que se dictamina, la Colegisladora consideró oportuno mantener la disposición que faculta al Ejecutivo Federal para otorgar durante 2020, los beneficios fiscales necesarios a efecto de dar debido cumplimiento a las resoluciones que se deriven de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

Así también, en la Minuta sujeta a análisis se consideró adecuado que para el ejercicio fiscal de 2020, las empresas productivas del Estado así como sus empresas productivas subsidiaras no establecer un dividendo estatal, conforme a lo previsto en los artículos 97 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 99 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

Por otra parte, la Colegisladora estimó adecuado excluir de la meta del balance presupuestario un monto de inversión hasta por 2.0 por ciento del PIB. Aclarando que este monto se integrará con la inversión de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Gobierno Federal, ya que con ello, la inversión tanto de las empresas productivas del Estado como la del Gobierno Federal tienen un tratamiento

similar, sin que se pongan en riesgo los niveles de financiamiento del gasto público ante las decisiones de inversión de las empresas productivas del Estado, las cuales deberán operar con criterios de eficiencia y rentabilidad, lo que fortalece la posición de las mismas y garantiza un nivel de inversión en el sector que permitirá incrementar la calidad y oferta de su producción, así como reducir el costo de la energía para los mexicanos en los siguientes años.

Por otro lado, la Colegisladora estimó necesario conservar en el artículo 1o. de la Ley cuya emisión se propone, la disposición que faculta al Gobierno Federal para continuar con la atención de la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo; a fin de extender la labor prevista en el artículo Segundo Transitorio del "*Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo de apoyo a sus ahorradores*", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de enero de 2004.

Así también, en la Minuta sujeta a dictamen, se consideró oportuno conservar la disposición que establece que el producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados que se vinculen a los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del Decreto citado en el párrafo que antecede, se utilice en principio, a cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las acciones relativas a la transmisión,

administración o enajenación de dichos bienes y derechos del fideicomiso referido en el párrafo anterior, y en segundo término a restituir al Gobierno Federal los recursos públicos destinados al resarcimiento de los ahorradores afectados.

En otro orden de ideas, la Colegisladora consideró acertado mantener en el artículo 1o. de la Ley que se propone emitir, la posibilidad de emplear los recursos que ingresen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, durante el ejercicio fiscal de 2020, para cubrir las obligaciones pecuniarias derivadas de la implementación del esquema de potenciación de recursos de dicho Fondo.

Igualmente, en la Minuta que se analiza se considera pertinente conservar con la finalidad de una mayor agilidad para la aplicación de los recursos, la medida consistente en hasta un 25 por ciento de las aportaciones que corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, puedan servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que dichas entidades contraigan con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Registro Público Único previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Del mismo modo, en la Minuta sujeta a análisis, la Colegisladora consideró necesario dar continuidad a la obligación de la SHCP de reportar la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2020, así también de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ahora bien, en la Minuta que se dictamina se consideró adecuado incluir un ajuste a la meta del déficit financiero de PEMEX, para que en caso de que durante el ejercicio fiscal se obtengan ingresos excedentes derivados de un mayor precio del petróleo al previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 entre el rango de 49.01 dólares por barril (dpb) y 55.00 dpb, estos recursos no se destinen a cubrir ampliaciones de gasto sino que se reflejen en una mejora en la meta prevista, en su caso, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 del déficit financiero de la empresa productiva.

En otro orden de ideas, la Colegisladora consideró pertinente conservar en el artículo 2o. de la Ley que se plantea emitir, la autorización al Ejecutivo Federal de un monto de endeudamiento neto interno hasta por 532 mil mdp, así como un monto de endeudamiento neto externo de 5 mil 300 millones de dólares de los Estados Unidos de América.

Asimismo, en la Minuta que se dictamina se consideró oportuno mantener en el artículo 2o. de la Ley que se propone expedir, la autorización que ya existe de manera permanente en la Ley Federal de Deuda Pública para que el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, emita valores y contrate empréstitos con el objeto de canjear o refinanciar obligaciones del erario federal.

Así también, la Colegisladora coincidió con el Ejecutivo Federal en dar continuidad a la definición del déficit por intermediación financiera como el Resultado de Operación que considera la Constitución Neta de Reservas Crediticias Preventivas, fijándolo para ello en un monto conjunto de cero pesos para el ejercicio fiscal de 2020, para la banca de desarrollo, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los fondos de fomento y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Por otra parte, en la Minuta que se dictamina, se estimó acertado conservar, para efectos del régimen especial en materia de deuda que se encuentra establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que las solicitudes de endeudamiento de ambas empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias continúen sometiéndose a la consideración del Congreso de la Unión de manera separada a la solicitud de endeudamiento para el Gobierno Federal y el resto de las entidades del sector público federal.

En ese contexto, en el citado artículo 2o., la Colegisladora consideró adecuado autorizar a PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil mdp y por endeudamiento neto externo de hasta 1 mil 250 millones de dólares de los Estados Unidos de América, así como la posibilidad de contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno o externo, respectivamente, sea menor a los montos antes señalados, y cumpla con la meta de balance financiero aprobado.

Igualmente, la Colegisladora consideró conveniente autorizar a la CFE y sus empresas productivas subsidiarias un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 835 mdp y por endeudamiento neto externo de 508 millones de dólares de los Estados Unidos de América, así como la posibilidad de contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno o externo, respectivamente, sea menor a los montos antes señalados.

Aunado a lo anterior, en la Minuta sujeta a dictamen, se conserva la disposición que establece que el cómputo de los montos de endeudamiento autorizados a CFE y PEMEX se realice en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio y la equivalencia del peso mexicano que dé a conocer el Banco de México, en la fecha en que se realicen las operaciones correspondientes.

Por otro lado, en la Minuta que se analiza se da continuidad a la obligación a cargo de la SHCP de informar al Congreso de la Unión de forma trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento.

Ahora bien, la Colegisladora consideró necesario autorizar para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil mdp para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, debiendo sujetarse el ejercicio del monto autorizado a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En otro contexto, la Colegisladora estimó pertinente establecer en el artículo 4o. de la Ley cuya emisión se propone, que el monto de los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la CFE por un total de 257 mil 138.2 mdp, de los cuales 100 mil 344.1 mdp corresponden a inversión directa y 156 mil 794.1 mdp a inversión condicionada.

Por otra parte, en el artículo 5o. de la Minuta sujeta a dictamen, la Colegisladora consideró necesario, para el ejercicio fiscal 2020, autorizar al Ejecutivo Federal a contratar un nuevo proyecto de inversión financiada de la CFE en términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV de su Reglamento, por un total de 2 mil 760.7 mdp que corresponde al proyecto de inversión directa.

En otro orden de ideas, la Colegisladora coincidió con el Ejecutivo Federal en conservar en el artículo 7o. de la Ley que se propone expedir, la facultad que tiene la SHCP para establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos mensuales provisionales del derecho por la utilidad compartida, así como dar continuidad a la obligación por parte de la SHCP de informar y explicar las modificaciones a los ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, que impacten en los pagos establecidos, acorde al segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley que se plantea emitir, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados.

De igual forma, en la Minuta que se dictamina se mantiene la disposición que contempla que, con la finalidad de asegurar el debido cumplimiento a las reglas de concentración, en el caso de que la SHCP en uso de las facultades otorgadas en la Ley que se propone expedir, establezca, modifique o suspenda pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales, éstos deberán ser transferidos y concentrados en la Tesorería de la Federación (TESOFE) por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), a más tardar el día siguiente de su recepción, de conformidad con la legislación aplicable.

Además, en la Minuta sujeta a análisis se consideró pertinente mantener el registro como inversión de los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de PEMEX, mismos que inicialmente eran considerados como proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

Por otro lado, en la Minuta sujeta a dictamen, se consideró adecuado en el artículo 8o. de la Ley cuya emisión se plantea, mantener en los términos del ejercicio fiscal anterior la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Por esta razón, la tasa de recargo se mantendría en 0.98 por ciento sobre los saldos insolutos, mientras que las tasas aplicables en el pago a plazos serían de 1.26 por ciento para plazos menores a un año; de 1.53 por ciento para los plazos entre uno y dos años, y de 1.82 por ciento para los plazos mayores a dos años.

En otro tenor, en el artículo 9o. de la Ley que se propone expedir, la Colegisladora consideró acertado continuar con la disposición por la que se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas y los municipios, incluyendo también a los organismos públicos descentralizados de las propias entidades federativas, por la otra, en los cuales se finiquiten adeudos entre ellos.

Así también, en la Minuta sujeta a dictamen, se consideró pertinente mantener la disposición que establece que se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación y las entidades federativas, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal.

Ahora bien, la Colegisladora consideró necesario continuar en los artículos 10 y 11 de la Ley que se propone expedir, con la facultad de la SHCP para autorizar los montos de los productos y aprovechamientos que cobre la Administración Pública Federal Centralizada, y en su caso, autorizar el destino específico de los mismos. Del mismo modo, en la Minuta que se analiza se coincidió con el Ejecutivo Federal en la permanencia del uso de medios de identificación electrónica en las solicitudes que realicen las dependencias, así como en la autorización de los aprovechamiento y productos por parte de la SHCP, por medio de la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o por medio de certificados digitales, equipos o sistemas automatizados, los cuales tendrán el mismo valor vinculatorio que los emitidos con firma autógrafa.

En ese contexto, en la Minuta sujeta a dictamen, se consideró oportuno conservar la medida que establece que cuando la SHCP obtenga un aprovechamiento a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los

fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por dicha Dependencia, ya sea de los ingresos que obtengan o con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal o tratándose de recuperaciones de capital o del patrimonio, los recursos correspondientes puedan destinarse por la propia Secretaría prioritariamente a la capitalización de dichas entidades, incluyendo la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o al fomento de acciones que permitan cumplir con su mandato, o bien, a programas y proyectos de inversión.

De igual manera, la Colegisladora consideró pertinente establecer que cuando la SHCP obtenga un aprovechamiento a cargo de cualquier otra entidad paraestatal distinta de las señaladas en el párrafo anterior, dichos ingresos serán enterados a la TESOFE bajo dicha naturaleza, a efecto de que sean destinados a programas presupuestarios que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, en la Minuta que se dictamina, en materia de destino de ingresos, se consideró acertado mantener el destino a gasto de inversión en infraestructura de los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintas de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos.

Del mismo modo, la Colegisladora consideró adecuada la permanencia de la disposición que establece que los aprovechamientos generados por multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital que se regulen en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en la Ley Federal de Competencia Económica y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de la autorización de la SHCP para su cobro.

En otro tenor, en la Minuta objeto de dictamen se consideró necesario conservar la especificación que establece que el prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público de la Federación, deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos, en los casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos correspondientes en los plazos que para esos efectos se fijen, así como informar a la SHCP los montos y conceptos que haya percibido por concepto de dichos aprovechamientos.

Igualmente, se plantea en la Minuta que se analiza mantener el esquema de actualización del monto de los productos y aprovechamientos que se cobren de manera regular, en el cual se utiliza un factor que se aplicará desde la última modificación que se hubiere efectuado hasta que se emita la autorización correspondiente.

En otro orden de ideas, en el artículo 11 de la Ley cuya emisión se plantea, la Colegisladora consideró oportuno continuar con el mecanismo que el Instituto de Administración de Bienes y Activos (IABA) aplica al producto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la TESOFE, por el que puede descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias de la misma entidad transferente. Así también, se consideró adecuado mantener la disposición que contempla al Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Entidad Transferente directa al IABA, en términos de la Ley de Tesorería de la Federación.

Además, la Colegisladora coincidió con el Ejecutivo Federal en establecer que a los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el IABA respecto de los bienes transferidos por el SAT que pasan a propiedad del Fisco Federal de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, se les deberá realizar el descuento de los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos provenientes del SAT, y del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno del IABA, se depositará en un fondo que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la TESOFE. Asimismo, se consideró pertinente conservar la aplicación de un mecanismo como el descrito para los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, para el pago de resarcimientos de bienes de dicha procedencia, que por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional, el IABA deba realizar, precisando que lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de

la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Aunado a lo anterior, la Colegisladora consideró necesario dar continuidad a la obligación del IABA de remitir un informe semestral con el desglose de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las Entidades Transferentes (TESOFE o SAT).

Así también, la Colegisladora estimó acertado mantener en el artículo 11 de la Ley que se propone emitir, la disposición relativa a la posibilidad de destinar hasta en un 100 por ciento, los ingresos netos provenientes de enajenaciones realizadas por el IABA para financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente o para el pago de los créditos que hayan sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, aclarando que se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las enajenaciones de bienes decomisados, y que se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

De igual forma, en la Minuta sujeta a dictamen se consideró adecuado establecer en el citado artículo 11 que el destino de los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes en proceso de extinción de dominio, y de aquéllos sobre los que sea declarada la extinción de dominio y de sus frutos, así como su monetización en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, serán destinados a una cuenta especial en los términos que

establece el artículo 239 de la Ley antes referida, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 234 y 237 del mismo ordenamiento.

Por otro lado, la Colegisladora estimó pertinente mantener en el artículo 12 de la Ley que se plantea expedir, que los derechos y aprovechamientos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, así como los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y de la aplicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se concentren en la TESOFE a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción.

De igual manera, en la Minuta sujeta a análisis se consideró conveniente continuar en el referido artículo 12, con la obligación de las entidades sujetas a control directo, los poderes Legislativo y Judicial, y los órganos a los que la Constitución Federal otorga el carácter de autónomos, de efectuar el registro de los ingresos que obtengan y de conservar la documentación comprobatoria de dichos registros a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal y, en su caso, de concentrarlos en la TESOFE en tiempo y forma.

Asimismo, la Colegisladora consideró oportuno dar continuidad en el artículo 12 a la disposición que establece que los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y formación para el trabajo del sector público, formarán parte de su patrimonio, y serán administrados por las

propias instituciones educativas para ser destinadas a sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, debiendo concentrarse en la TESOFE, con la posibilidad de establecer un fondo revolvente que garantice la entrega y aplicación de los recursos en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de su concentración.

Ahora bien, en la Minuta sujeta a análisis se consideró adecuado mantener la disposición que establece que los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, se destinarán a las entidades o empresas productivas del Estado que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza.

Por otra parte, la Colegisladora coincidió con el Ejecutivo Federal en establecer que los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato análogo, así como aquellos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, deberán ser concentrados en la TESOFE bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según su origen, y se podrán destinar a los fines que determine la SHCP, salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento correspondiente.

Igualmente, se estimó necesario establecer la medida que señala que los ingresos excedentes correspondientes a aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 6.62.01.04 del artículo 1o. de

la Ley cuya emisión se plantea, por concepto de recuperaciones de capital, se destinen a objetivos que determine la SHCP a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo.

En otro orden de ideas, la Colegisladora consideró acertado dar continuidad, en el artículo 13 de la Ley que se propone emitir, a la obligación de enterar a la TESOFE, los ingresos que se recauden, hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, así como enterar o concentrar, según corresponda, los ingresos netos derivados de la mecánica de descuento de gastos tratándose de la enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades.

En ese sentido, en la Minuta objeto de dictamen se estimó adecuado mantener la disposición que precisa que, tratándose de operaciones que le sean encomendadas al IABA en los términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se podrá descontar hasta un 7 por ciento, el cual será autorizado por su Junta de Gobierno, por concepto de gastos indirectos de operación, que se destinarán a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones y procedimientos de éste, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Así también, la Colegisladora coincidió con el Ejecutivo Federal en establecer que, respecto a la terminación de los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales y, a efecto de agilizar los mismos, prevalezca la disposición que permite al liquidador o responsable del proceso utilizar los recursos remanentes de los procesos de desincorporación concluidos, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, para el pago de los gastos y pasivos de los procesos que, al momento de la referida conclusión, sean deficitarios, para lo cual los recursos correspondientes deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica, sin que sea necesario concentrar dichos recursos en la TESOFE.

De igual manera, se consideró necesario conservar la disposición que establece que los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, permanezcan afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación deficitarios, así como que, en aquellos casos en que se transmitan bienes y derechos a dicho Fondo, no se considere enajenación.

Además, la Colegisladora consideró pertinente continuar con la disposición que prevé que los remanentes de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Del mismo modo, se consideró oportuno conservar en el artículo 13 de la Ley cuya emisión se propone, la disposición que precisa que para concluir los procesos de desincorporación, se autoriza al IABA a utilizar los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, para sufragar las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, relativo a la atención de encargos bajo su administración, cuando éstos sean deficitarios, siempre que se cumplan con las directrices que al efecto se emitan al interior del organismo y cuente con la autorización de la Junta de Gobierno del IABA, previa aprobación de los órganos colegiados competentes.

En otro contexto, en la Minuta que se analiza se estimó adecuado establecer en el párrafo décimo segundo del artículo 13, que el producto de la enajenación de los bienes asegurados a favor del Gobierno Federal, incluyendo numerario, cuya administración y destino hayan sido encomendados al IABA en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se destine a un fondo en los términos del artículo 89 de la citada Ley, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 90, 92 y 93 del mismo ordenamiento.

De igual forma, la Colegisladora coincidió con el Ejecutivo Federal en establecer que los ingresos provenientes de numerario y de la enajenación de bienes que realice el IABA, que hayan sido declarados abandonados por parte de las instancias competentes, distintos de los vehículos declarados por la SCT y que se concentren a la TESOFE, se considerarán aprovechamientos, destinándose al financiamiento de las operaciones del

Instituto, en términos de lo previsto en el artículo 90 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 89, 92 y 93 de la referida Ley.

Por otra parte, la Colegisladora consideró necesario establecer en el artículo 13 de la Ley cuya emisión se plantea, que el destino del numerario decomisado y de los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados en procedimientos penales federales, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y previa deducción de los gastos indirectos de operación que correspondan, se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al Fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo u otras políticas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, con el propósito de armonizar lo establecido en los ordenamientos penales y fiscales, e incluso en resoluciones judiciales, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la Ley cuya emisión se propone.

Aunado a lo anterior, se estimó acertado continuar con la disposición que establece que los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, se integren al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la mencionada Ley.

Igualmente, la Colegisladora consideró oportuno establecer que los ingresos provenientes de la venta de vehículos declarados abandonados por la SCT

y transferidos al IABA, se destinen de conformidad con el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. De manera similar, se coincidió en conservar la disposición que permite que a los permisionarios se les cubran los adeudos generados hasta por el 30 por ciento de los remanentes de los ingresos antes mencionados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Ahora bien, en el artículo 14 de la Ley que se plantea emitir, la Colegisladora consideró adecuado seguir aplicando lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Por otro lado, y con la finalidad de fomentar que los contribuyentes apliquen la autocorrección fiscal, en la Minuta de mérito, la Colegisladora previó conservar en el artículo 15 la disminución en un 50 por ciento de las multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, en función del momento en el que el contribuyente efectúe la autocorrección de las mismas, exceptuando las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación.

De igual manera, se consideró acertado disminuir en un 40 por ciento, las multas por infracciones derivadas de incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las obligaciones de pago a los contribuyentes que se encuentren sujetos a revisión electrónica en términos del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación.

En otro orden de ideas, en la Minuta objeto de dictamen, la Colegisladora coincidió con el Ejecutivo Federal en dar continuidad a los estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), previstos en el artículo 16, apartado A, fracciones I a VI, esto es, se mantiene en las fracciones I a IV el estímulo fiscal a la adquisición e importación, para consumo final, del diésel, biodiesel y sus mezclas, que: i) se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos; ii) se usen en actividades agropecuarias o silvícolas; o iii) se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico.

De igual forma, se estimó necesario precisar que los estímulos referidos, excepto el previsto en la fracción III del apartado A del artículo 16, tienen como característica en común que, una vez determinados, son acreditables contra el impuesto sobre la renta (ISR); por lo que se propone que su acreditamiento proceda únicamente contra el ISR causado por el contribuyente en el ejercicio fiscal, de forma tal que no se aplique contra el ISR retenido a terceros, ya que en ese caso no se trata de un impuesto propio del beneficiario del estímulo y, por otro lado, que no se permita el acreditamiento contra los pagos provisionales que vaya realizando el

contribuyente, debido a que cuando dichos pagos son mayores al ISR del ejercicio causado por el contribuyente o se obtenga pérdida fiscal, la devolución de los pagos provisionales o la compensación del saldo a favor implica una monetización de los estímulos mencionados, siendo que éstos deben tener como límite el ISR causado por el contribuyente.

Ahora bien, la Colegisladora tomando en cuenta la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, presentada por el Titular del Ejecutivo Federal el 8 septiembre del presente año, en la que se contempla la adición del artículo 74-B en el Capítulo VIII del Título II de la Ley del ISR, el cual consiste en prever una reducción del 30% en el ISR a las personas morales de derecho agrario constituidas sólo por ejidatarios y comuneros o ejidos y comunidades, siempre que sus ingresos no excedan de 5 mdp en el ejercicio inmediato anterior, y que al menos un 80% de sus ingresos se obtengan por la industrialización y comercialización de productos derivados del sector primario, otorgando a dichas personas morales de derecho agrario atribuciones para transformar sus productos, consideró necesario precisar que dicho estímulo, únicamente lo podrán aplicar los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere el artículo 74 de la Ley del ISR, esto con la finalidad de evitar que los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto del citado artículo 74-B, puedan aplicar los beneficios previstos en el artículo 16, apartado A,

fracciones II y III de la Ley cuya emisión se propone y monetizar el estímulo al solicitar las devoluciones.

Además, proponen la Minuta sujeta a análisis se consideró adecuado conservar el estímulo fiscal aplicable a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto.

Ahora bien, con el propósito de hacer más eficientes los estímulos fiscales antes referidos, la Colegisladora estimó necesario incidir en los apoyos que se proporcionan a través de los acreditamientos establecidos en el artículo 16, apartado A de la Minuta que se dictamina. Por este motivo, la Colegisladora consideró oportuno ajustar el límite del ingreso de los beneficiarios de los estímulos previstos en las fracciones I y V, de dicho artículo, para que lo puedan recibir las empresas con ingresos totales anuales menores a 60 y 300 millones de pesos respectivamente, a fin de mejorar la focalización de los estímulos hacia las empresas que más los requieren e incentivar la formalidad empresarial. Aunado a lo anterior, este ajuste preserva los objetivos que dieron lugar a estos apoyos y contribuye a la estabilidad macroeconómica, con un sistema fiscal más eficiente y equitativo con un mejor uso de los recursos.

Asimismo, la Colegisladora coincidió con el Ejecutivo Federal mantener en el artículo 16, Apartado A, fracción VI de la Ley cuya emisión se propone, el estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen combustibles fósiles en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes, cuando en dichos procesos no se combustionen ese tipo de combustibles, además, se establece la atribución de que el SAT podrá emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización de combustibles fósiles no sujetos a un proceso de combustión por tipos de industria; no obstante, se estima conveniente aclarar que el porcentaje mencionado se aplicará respecto de las cantidades de litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible, adquiridos en el mes de que se trate.

Por otra parte, con el propósito de preservar la cadena de libro, fortalecer a las pequeñas y medianas librerías, las cuales constituyen un eslabón importante al acercar a todas las personas a los libros y fomentar la lectura, la Colegisladora estimó acertado otorgar un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos, y que dichos ingresos obtenidos en el ejercicio por la enajenación de libros, periódicos y revistas represente al menos el 90% de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio de que se trate. Dicho estímulo consiste en una deducción adicional para los efectos de ISR, por un monto equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente.

De igual modo, en el citado artículo 16, se consideró adecuado dar continuidad a la exención del derecho de trámite aduanero, a las personas que importen gas natural, en virtud de que este combustible genera grandes beneficios económicos a sus usuarios, es de fácil transportación y genera menos contaminación.

Ahora bien, en la Minuta sujeta a dictamen, la Colegisladora consideró pertinente conservar en el artículo 17 de la Ley que se plantea expedir, la medida en la que se dispone que se deroguen aquellas disposiciones que contengan exenciones totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos o contribuciones federales distintos de los establecidos en leyes fiscales, incluyendo la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales y tratados internacionales.

En ese contexto, se consideró necesario continuar en el citado artículo 17, con la derogación de las disposiciones que establezcan un destino específico para los ingresos por concepto de productos, aprovechamientos o derechos distintos al previsto en las disposiciones de carácter fiscal, así como respecto de aquéllas que clasifiquen a los ingresos de las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados como ingresos excedentes del ejercicio en que se generen.

En otro orden de ideas, la Colegisladora estimó pertinente dar continuidad en los artículos 18 y 19 de la Ley que se propone emitir, al tratamiento y a la clasificación de los ingresos excedentes que generan las dependencias, entidades, órganos autónomos y poderes de la Unión a efecto de posibilitar su destino a la unidad generadora de los mismos.

De igual forma, en el artículo 20 de la Ley cuya emisión se plantea, la Colegisladora consideró oportuno reiterar la disposición que establece que quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Por otro lado, la Colegisladora coincidió con el Ejecutivo Federal en precisar en el artículo 21 de la Ley que se propone emitir, que para la determinación de la tasa de retención a intereses pagados por el sistema financiero que efectúen pagos por intereses durante el ejercicio fiscal 2020, se determinó conforme a una metodología de cálculo que establece la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Dicha metodología integra la información correspondiente a los rendimientos promedio de los instrumentos públicos y privados, ponderados por el monto en circulación de cada instrumento, así como el promedio de la inflación mensual interanual observada, correspondiente al periodo febrero a julio de 2019. Además, la ponderación por monto en circulación permite otorgar mayor peso a los instrumentos en los cuales la población invierte más, dando como

resultado una tasa de retención equitativa y acorde con la distribución de los ahorradores por tipo de instrumento.

Luego entonces, de los cálculos realizados conforme a la aplicación de la metodología establecida y la información que publica el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Colegisladora consideró adecuado que la tasa de retención anual que aplicarán las instituciones financieras que paguen intereses durante el ejercicio fiscal de 2020 sea de 1.45 por ciento.

En otro contexto, en la Minuta sujeta a dictamen se consideró necesario de que con la finalidad de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pueda ejercer sus funciones de manera más eficaz, se conserven en el artículo 22 de la Ley cuya emisión se plantea, los criterios y los rangos para imponer sanciones por dicha Comisión.

Por otra parte, la Colegisladora estimó acertado mantener el apoyo a los contribuyentes de mínima capacidad administrativa que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, siempre y cuando cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades que realicen con el público en general, para que puedan optar por pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el IEPS que, en su caso corresponda, mediante la aplicación del esquema de estímulos establecidos en el artículo 23 de la Iniciativa de Ley que se propone emitir.

En otro tenor, en el artículo 24 de la Ley que se plantea emitir, la Colegisladora coincidió con el Ejecutivo Federal en la necesidad de continuar con la disposición que establece que las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del ISR, siempre que dichos apoyos económicos o monetarios se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación. Esto, toda vez que en la actualidad se siguen canalizando recursos a las familias afectadas para atender los daños ocurridos por los citados sismos.

De igual manera, proponen la Minuta de mérito, la Colegisladora consideró conveniente conservar la disposición que establece que las organizaciones civiles y fideicomisos que de forma inmediata realicen las labores de rescate en la emergencia y contribuyan en la reconstrucción y restablecimiento de las actividades económicas después de la ocurrencia de desastres naturales, puedan recibir recursos de donatarias autorizadas que cuenten con un buen historial de sus obligaciones fiscales ante el SAT, lo cual permitirá una acción más oportuna y efectiva ante desastres naturales. Igualmente, se consideró que esta facilidad será un canal idóneo para asegurar que los recursos de la sociedad sean destinados efectivamente a atender la emergencia, garantizando la transparencia sobre el uso y destino de los

recursos, así como la rendición de cuentas que demanda la sociedad en estos tiempos.

En ese sentido, se estimó necesario mantener las disposiciones que obligan a la SHCP a realizar un estudio de ingreso-gasto, así como a publicar el Presupuesto de Gastos Fiscales y un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del ISR, y a incluir en la exposición de motivos de toda iniciativa en materia fiscal el impacto recaudatorio correspondiente.

Ahora bien, en relación a la generación del Reporte de Donatarias Autorizadas (RDA) a que se refiere el artículo 27, Apartados B y C de la Ley cuya emisión se propone, se coincidió con la precisión del Ejecutivo Federal referente a establecer que la información de los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de los directivos análogos, se debe obtener de los datos reportados, en la página de Internet del SAT en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas. Por esta razón, la Colegisladora consideró adecuado que la fecha oportuna para la presentación de la información en dicha sección sea el 31 de julio de 2020. Esto, debido a que la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas contiene información no estandarizada que requiere un proceso para su conformación en los términos establecidos en los Apartados B y C del citado artículo. Así también, estimó que la fecha establecida asegura que el proceso de explotación, elaboración y validación de los datos se realice en

tiempo y forma para entregar el RDA a las instancias correspondientes del Congreso de la Unión y su publicación en la página de Internet de la SHCP.

Por otro lado, en la Minuta objeto de estudio, la Colegisladora consideró acertado mantener en una disposición transitoria que el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el DOF el 20 de noviembre de 2013, seguirá destinándose durante el ejercicio fiscal de 2020 en los términos del citado precepto.

En otro orden de ideas, la Colegisladora estimó conveniente continuar en una disposición transitoria con la disposición que establece que las referencias en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones que se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, en la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2013, y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos, se entenderán hechas también al SAT.

En ese mismo sentido, la Colegisladora consideró necesario en la Minuta sujeta a análisis conservar para el ejercicio fiscal de 2020, en el transitorio Séptimo la disposición que permita a las entidades federativas y municipios

enterar a la TESOFE las disponibilidades de recursos federales correspondientes a ejercicios fiscales anteriores a 2020 que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, de igual manera, estimó oportuno que los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinen por la SHCP, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas.

Ahora bien, con el propósito de brindar transparencia y certeza jurídica en cuanto a la operación del destino establecido en el párrafo anterior, la Colegisladora estimó conveniente facultar a la SHCP para que emita los lineamientos para su operación a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2020. En ese contexto, la Colegisladora también consideró necesario modificar el transitorio Primero de la Ley cuya emisión se plantea, a fin de incorporar una medida que permita que esta disposición entre en vigor al día siguiente de su publicación respecto de los recursos que las entidades federativas y municipios concentraron a la TESOFE en el 2019, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2017 y 2018.

De igual forma, la Colegisladora en relación al destino de los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, tuvo a bien establecer que también se podrán destinar a la atención de desastres naturales.

Asimismo, la Colegisladora coincidió con el Ejecutivo en establecer para el ejercicio fiscal de 2020 en el transitorio Noveno de la Ley cuya emisión se propone, la disposición que permita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de conformidad con las facultades que le confiere la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, requerir a la SHCP los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan.

Aunado a lo anterior, la Colegisladora consideró conveniente establecer en la Ley cuya emisión se propone, que el ISSSTE pueda suscribir con las entidades federativas, municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales, los convenios de regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos, conforme al modelo que sea autorizado por su órgano de gobierno. Del mismo modo, se estimó pertinente incorporar que el Instituto pueda aceptar bienes inmuebles como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse en las cuentas individuales de los trabajadores.

En otro contexto, en la Minuta de mérito, la Colegisladora consideró adecuado establecer que los contratos de fideicomisos y mandatos que constituya o celebre el Gobierno Federal, deban prever que la SHCP pueda disponer del patrimonio de éstos, así como la obligación a cargo de las

instituciones fiduciarias o mandatarias de concentrar trimestralmente en la TESOFE bajo la naturaleza de aprovechamientos, los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado, bajo la naturaleza de aprovechamientos, salvo disposición de carácter general en contrario.

Igualmente, la Colegisladora estimó necesario prever en la Minuta que se dictamina que las instituciones fiduciarias, o mandatarias de fideicomisos, mandatos o análogos públicos, deben concentrar de forma trimestral en la TESOFE los intereses generados por dichos instrumentos financieros, salvo aquéllos que impliquen el pago de gastos de operación de dichos vehículos, bajo la naturaleza de aprovechamientos y se destinarán a gasto en salud o de inversión en infraestructura, exceptuando aquellos vehículos financieros que por disposición expresa de ley, decreto o determinación de la SHCP, dichos recursos deban permanecer afectos a su patrimonio o destinados al objeto correspondiente.

De igual manera, la Colegisladora coincidió con el Titular del Ejecutivo Federal en establecer mediante disposición transitoria, que las dependencias y entidades deban remitir durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2020 a la SHCP, un informe de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos susceptibles de extinguirse en términos de las disposiciones aplicables.

En ese orden de ideas, la Colegisladora consideró oportuno en la Minuta objeto de dictamen, que se instruya a la institución fiduciaria del fideicomiso

Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria para que durante el mes de marzo concentre en la TESOFE, bajo la naturaleza de aprovechamientos, los recursos que integran el patrimonio fideicomitido a fin de destinarlos, mediante el mecanismo que determine la SHCP, a proyectos de inversión de infraestructura económica para la construcción, ampliación o rehabilitación de puertos, así como para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros que mejoren la conectividad entre los puertos.

Así también, la Colegisladora consideró acertado establecer mediante disposición transitoria, que durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2020, la institución fiduciaria del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados deberá concentrar en la TESOFE los recursos remanentes previstos en su patrimonio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Por último, la Colegisladora tomando en cuenta que el saneamiento de las finanzas tanto de la CFE, como de las entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y organismos públicos prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos, les permitirá mejorar la prestación de los servicios a la población y su operación en general, estimó conveniente permitir que la CFE tenga la posibilidad de implementar un esquema de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica bajo un diseño adecuado que resulte benéfico para el saneamiento de las finanzas tanto del proveedor del servicio así como de sus usuarios, se pretende que

este esquema contemple eficiencias orientadas a generar e incentivar un consumo racional de la energía eléctrica, fomentar una cultura de pago por dicho servicio y reducir las cargas financieras de las partes.

En ese sentido, la Colegisladora establece que los programas serán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 y que se implementarán a través de la celebración de convenios, los cuales deberán sujetarse a las reglas de operación que al efecto emita la SHCP a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, pudiéndose condonar el pago de hasta el 50 por ciento del adeudo, y que el resto de éste sea cubierto mediante parcialidades.

Asimismo, la Colegisladora estimó conveniente establecer mediante una disposición transitoria, un plazo máximo de 8 meses para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.

IV. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA

PRIMERA. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 93; 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 113; 117; 135, fracción I; 163, fracción II; 166, párrafo 1; 174; 175, numeral 1; 176; 177, numeral 1; 178; 182; 183; 184; 186;

187; 188; 189 y 190 del Reglamento del Senado de la República, resultamos competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA. En ese contexto, las que dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en estimar un tipo de cambio respecto al dólar de los Estados Unidos de América en 20.0 pesos por dólar, y la plataforma de producción de petróleo crudo, en 1,951 mbd con una estimación del precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación de 49.0 dólares de los Estados Unidos de América por barril.

De igual forma, concordamos con la Colegisladora en mantener la disposición que faculta al Ejecutivo Federal para otorgar, durante 2020, los beneficios fiscales necesarios a efecto de dar debido cumplimiento a las resoluciones que se deriven de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

TERCERA. Estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo con la Colegisladora en no establecer para el ejercicio fiscal de 2020 un dividendo estatal a las empresas productivas del Estado o a sus empresas productivas subsidiarias, de conformidad con los artículos 97 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 99 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

CUARTA. Las Comisiones Legislativas coinciden con la Colegisladora en excluir de la meta de balance presupuestario un monto de inversión hasta

por 2.0 por ciento del PIB para evaluar la contribución del gasto al equilibrio presupuestario; además, que dicho monto se integrará con la inversión de PEMEX, de la CFE y del Gobierno Federal, ya que con ello, la inversión tanto de las empresas productivas del Estado como la del Gobierno Federal tienen un tratamiento similar, sin poner en riesgo los niveles de financiamiento del gasto público ante las decisiones de inversión de las empresas productivas del Estado, las cuales deberán operar con criterios de eficiencia y rentabilidad, lo que garantiza un nivel de inversión en el sector que permitirá incrementar la calidad y oferta de su producción, así como reducir el costo de la energía para los mexicanos en los próximos años.

QUINTA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en mantener la disposición que faculta al Gobierno Federal para continuar con la atención de la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo; a fin de extender la labor prevista en el artículo Segundo Transitorio del "*Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo de apoyo a sus ahorradores*", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de enero de 2004.

Asimismo, consideramos acertado que el producto de la enajenación de los bienes y derechos decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del Decreto mencionado en el párrafo anterior, se utilice en

primer término para cubrir los gastos de administración realizados por los entes públicos federales que lleven a cabo la transmisión, administración o enajenación de los bienes y derechos del fideicomiso referido y, posteriormente se destinen a restituir al Gobierno Federal los recursos públicos aportados para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto.

SEXTA. Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, estamos de acuerdo con la Colegisladora en dar continuidad en el artículo 1o. de la Ley cuya emisión se plantea, a la posibilidad de emplear los recursos que ingresen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, durante el ejercicio fiscal de 2020, para cubrir las obligaciones pecuniarias derivadas de la implementación del esquema de potenciación de recursos de dicho Fondo, así también, coincidimos en mantener la medida consistente en que hasta un 25 por ciento de las aportaciones que corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, puedan servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que dichas entidades contraigan con el Gobierno Federal, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local, ni la inscripción en el Registro Público Único a cargo de la SHCP, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los Municipios. Lo anterior con el objetivo de que sean aplicados con mayor agilidad.

Igualmente, las que dictaminamos, coincidimos con la Colegisladora en mantener la obligación de la SHCP de reportar la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2020, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Del mismo modo, estas Comisiones que dictaminamos estamos de acuerdo con la propuesta de incluir un ajuste a la meta del déficit financiero de PEMEX, para que en caso de que durante el ejercicio fiscal se obtengan ingresos excedentes derivados de un mayor precio del petróleo al previsto en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 entre el rango de 49.01 dólares por barril y 55.00 dólares por barril, éstos recursos no se destinen a cubrir ampliaciones de gasto sino que se reflejen en una mejora en la meta aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 del déficit financiero de PEMEX.

SÉPTIMA. Estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en autorizar al Ejecutivo Federal un monto de endeudamiento neto interno hasta por 532 mil mdp, así como un monto de endeudamiento neto externo de 5 mil 300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual

incluye el monto de endeudamiento que se ejercería para la contratación de financiamientos con organismos financieros internacionales.

OCTAVA. Las Dictaminadoras, al igual que la Colegisladora, consideramos adecuado mantener en el artículo 2o. de la Ley cuya emisión se propone, las facultades otorgadas por la Ley Federal de Deuda Pública al Ejecutivo Federal para que por conducto de la SHCP emita valores y contrate empréstitos con el objeto de canjear o refinanciar obligaciones del erario federal.

En ese sentido, se coincide en mantener en el mencionado artículo 2o., la autorización de un monto conjunto de cero pesos de déficit por intermediación financiera, definida como el Resultado de Operación que considera la constitución neta de reservas crediticias preventivas para la banca de desarrollo, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los fondos de fomento y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

NOVENA. Estas Comisiones Legislativas estamos de acuerdo con la Colegisladora en conservar, para efectos del régimen especial en materia de deuda que se encuentra establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que las solicitudes de endeudamiento de ambas empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se continúen sometiendo a la consideración del Congreso de la Unión de manera separada a la solicitud de endeudamiento

para el Gobierno Federal y el resto de las entidades del sector público federal.

En este tenor, las que dictaminamos consideramos necesario, al igual que la Colegisladora, autorizar a PEMEX y sus empresas productivas subsidiarias un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil mdp y un endeudamiento neto externo de hasta 1 mil 250 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Así también, estimamos adecuado autorizar a la CFE y sus empresas productivas subsidiarias un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 835 mdp y un endeudamiento neto externo de 508 millones de dólares de los Estados Unidos de América.

Igualmente, estas Comisiones que dictaminan están de acuerdo en establecer la posibilidad de que ambas empresas productivas del Estado puedan contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre y cuando el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al antes señalado en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales.

En ese sentido, estimamos oportuno que el cómputo de los montos de endeudamiento autorizados a CFE y a PEMEX, se realice en una sola ocasión el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020, tomando en cuenta el tipo de cambio y la equivalencia del peso mexicano que dé a conocer el Banco de México en la fecha en que se realice la operación correspondiente.

Adicionalmente, las Dictaminadoras, al igual que la Colegisladora, estimamos oportuno continuar con la disposición que prevé que la SHCP informe al Congreso de la Unión de forma trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, en el que se destaque el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento.

DÉCIMA. Estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en que la contratación de deuda pública de la Ciudad de México se sujete a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y que el monto de endeudamiento neto de dicha entidad federativa sea de 4 mil mdp para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020.

DÉCIMA PRIMERA. Estas Comisiones Legislativas, al igual que la Colegisladora, consideramos conveniente establecer en el artículo 4o. de la que se plantea expedir, que el monto de los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la CFE sea por un total de 257 mil 138.2 mdp, de los cuales 100 mil 344.1 mdp corresponden a inversión directa y 156 mil 794.1 mdp a inversión condicionada.

En ese contexto, se coincide en la necesidad de autorizar en el artículo 5o. de la Ley que se propone emitir, al Ejecutivo Federal a contratar durante el ejercicio fiscal de 2020, un nuevo proyecto de inversión financiada de la CFE

en términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV de su Reglamento, por un total de 2 mil 760.7 mdp que corresponde al Proyecto de Infraestructura Productiva de Largo Plazo de inversión directa.

DÉCIMA SEGUNDA. Las Dictaminadoras estamos de acuerdo con la Colegisladora en que, la SHCP quede facultada en el artículo 7o. de la Ley cuya emisión se plantea, para establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos mensuales provisionales del derecho por la utilidad compartida.

De igual forma, los integrantes de estas Comisiones que dictaminan concordamos en conservar la obligación por parte de la SHCP de informar y explicar las modificaciones a los ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, que impacten en los pagos establecidos, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de esta Cámara de Diputados.

De manera similar, al igual que la Colegisladora, estimamos acertado que, con la finalidad de que se cumplan las reglas de concentración, se disponga que, en caso de que la SHCP en uso de las facultades otorgadas en la Ley cuya emisión se propone, establezca, modifique o suspenda pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales, dichos pagos deben ser transferidos y concentrados en la TESOFE por el FMPED, a más tardar el día siguiente de su recepción a cuenta de la transferencia prevista en el artículo

16, fracción II, inciso g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Además, estas Comisiones Unidas concuerdan en continuar con la disposición que establece que serán registrados como inversión los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de PEMEX, antes considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

DÉCIMA TERCERA. Estas Comisiones Legislativas coincidimos con la Colegisladora en mantener tal como en el ejercicio fiscal anterior, en el artículo 8o. de la Ley cuya emisión se propone la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Por esta razón, se está de acuerdo en que la tasa de recargos sería de 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos, mientras que las tasas aplicables en el pago a plazos serían de 1.26 por ciento para plazos menores a un año; de 1..53 por ciento para los plazos entre uno y dos años, y de 1.82 por ciento para los plazos mayores a dos años.

DÉCIMA CUARTA. Estas Comisiones que dictaminamos al igual que la Colegisladora, estimamos pertinente que en el artículo 9o. de la Ley que se propone expedir, se ratifiquen los convenios celebrados entre la Federación por una parte y por la otra las entidades federativas, sus organismos autónomos y los municipios, incluyendo también a los organismos

descentralizados de las propias entidades federativas, en los cuales se finiquiten adeudos entre ellos.

Así también, se coincide en dar continuidad a la ratificación de los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación y las entidades federativas, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio exterior, sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera, incluyendo los sujetos a un procedimiento fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal.

DÉCIMA QUINTA. Las Dictaminadoras concordamos con la Colegisladora en mantener la disposición que faculta a la SHCP para fijar o modificar los aprovechamientos y productos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2020 y, en su caso, para autorizar el destino específico de los mismos. Adicionalmente, se considera pertinente conservar el uso de medios de identificación electrónica en las solicitudes que realicen las dependencias que sometan a aprobación de la SHCP los montos de los aprovechamientos y productos, así como la autorización que para tales efectos expida la SHCP, por medio de la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados, los cuales tendrán el mismo valor vinculatorio que los emitidos con firma autógrafa.

De igual forma, estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo en dar continuidad en el artículo 10 de la Ley que se propone expedir, a la medida consistente en que los recursos obtenidos por el cobro de aprovechamientos a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos establecidos con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal o tratándose de recuperaciones de capital o del patrimonio, según sea el caso, se destinarán prioritariamente a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a fomentar acciones que les permitan cumplir con su mandato, o bien a programas y proyectos de inversión.

Aunado a lo anterior, se coincide con la Colegisladora en establecer que cuando la SHCP obtenga un aprovechamiento a cargo de cualquier otra entidad paraestatal distinta de las señaladas en el párrafo anterior, dichos ingresos serán enterados a la TESOFE bajo dicha naturaleza, a efecto de que sean destinados a programas presupuestarios que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.

Asimismo, se estima conveniente continuar con la medida que permite destinar a gasto de inversión en infraestructura, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de

empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintas de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos.

En ese orden de ideas, las que dictaminamos, al igual que la Colegisladora, estimamos necesario conservar la disposición que establece que los aprovechamientos que se contemplen en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, en la Ley Federal de Competencia Económica y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no requieren de la autorización de la SHCP para su cobro, así como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de la autorización de la SHCP para su cobro.

Además, se coincide en continuar con la aclaración referente a que el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos deberá ser aplicado por el prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público de la Federación, en los casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos correspondientes en los plazos que para esos efectos se fijen, así como que éstos informen a la SHCP los montos y conceptos que hayan percibido por concepto de dichos aprovechamientos.

En este sentido, estas Comisiones de Hacienda concuerdan en conservar el esquema de actualización del monto de los productos y aprovechamientos que se cobren de manera regular, por medio del factor que se aplicará

desde la última modificación que se hubiere efectuado hasta que se emita la autorización respectiva.

Por otro lado, estas Comisiones Unidas coincidimos con la Colegisladora en dar continuidad, en el artículo 11 de la Ley cuya emisión se propone, al mecanismo que el IABA aplica al producto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la TESOFE, por el que puede descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias de la misma entidad transferente y que el monto restante, hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno del organismo, se deposite en un fondo que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos, precisando que el remanente será enterado a la TESOFE.

Igualmente, las que dictaminan están de acuerdo en la pertinencia de mantener la disposición que contempla al SAT como entidad transferente directa al IABA, en términos de lo establecido por la Ley de Tesorería de la Federación. Por esta razón, estas Comisiones consideran conveniente que los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el IABA respecto de bienes transferidos por el SAT que pasan a propiedad del Fisco Federal de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, se les deberá realizar el descuento de los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos provenientes del SAT y del monto restante, hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno del organismo, se depositará en un fondo que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos, especificando que el remanente será enterado a la TESOFE. De la misma manera, se estima oportuno conservar la disposición que

contempla la aplicación de un mecanismo como el descrito para los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, para el pago de resarcimientos de bienes de dicha procedencia, que por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional, el IABA deba realizar, con la aclaración que lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

En ese orden de ideas, las Dictaminadoras están de acuerdo en mantener la medida que obliga al IABA a informar de forma semestral a la Cámara de Diputados y a la Coordinadora de Sector, sobre las operaciones efectuadas con motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las autoridades mencionadas.

De igual modo, se concuerda en continuar la disposición por la cual se destinen hasta en un 100 por ciento los ingresos netos provenientes de enajenaciones realizadas por el IABA para financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como que dichos ingresos también se puedan utilizar para el pago de los créditos otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, siempre que en el acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el convenio que al efecto se celebre se especifique dicha circunstancia, precisando que lo señalado en este párrafo no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados, y que se aplicará sin

perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Adicionalmente, estas Comisiones Dictaminadoras, al igual que la Colegisladora, estimamos oportuno establecer que el destino de los ingresos por la enajenación de los bienes en proceso de extinción de dominio, y de aquéllos sobre los que sea declarada la extinción de dominio y de sus frutos, así como su monetización en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, serán destinados a una cuenta especial en los términos que establece el artículo 239 de la Ley antes referida, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 234 y 237 del mismo ordenamiento, a fin de dar certeza jurídica y viabilidad al mencionado destino.

DÉCIMA SEXTA. Estas Comisiones Legislativas coinciden con la Colegisladora en la obligación de concentrar en la TESOFE los derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, así como sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias y los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la forma y términos que se proponen en la Ley que se propone emitir, al igual que a los demás ingresos contemplados en la misma.

En ese contexto, estas Comisiones que dictaminamos estamos de acuerdo con que, en el artículo 12 de la Ley cuya emisión se plantea, se mantenga la obligación de las entidades sujetas a control directo, los poderes

Legislativo y Judicial, y los órganos a los que la Constitución Federal otorga el carácter de autónomos, de registrar los ingresos que obtengan y conservar la documentación comprobatoria de dichos registros a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal; así como la disposición que obliga a las entidades de control indirecto a informar a la SHCP sobre sus ingresos, a efecto de estar en posibilidad de elaborar los informes que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y reflejarlos en la Cuenta Pública Federal.

Además, estas Comisiones de Hacienda concordamos en dar continuidad en el aludido artículo 12 con la medida que dispone que los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y formación para el trabajo del sector público, formarán parte de su patrimonio, y serán administrados por las propias instituciones educativas para ser destinadas a sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, debiendo concentrarse en la TESOFE, con la posibilidad de establecer un fondo revolvente que garantice la entrega y aplicación de los recursos en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de su concentración.

A su vez, las Dictaminadoras estimamos necesario continuar con la disposición que establece que el destino de los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, se destinarán a las entidades o empresas productivas

del Estado que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza.

Del mismo modo, estas Comisiones Unidas concordamos en establecer que los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato análogo, así como aquellos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, según su origen, deberán ser concentrados en la TESOFE bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, y que se podrán destinar a los fines que determine la SHCP, excepto aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento correspondiente. Asimismo, se coincide en la incorporación en el sexto párrafo del citado artículo 12 de la posibilidad de que los ingresos excedentes correspondientes a aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, exceptuando el numeral 6.62.01.04 del artículo 1o. de la Ley cuya emisión se propone, por concepto de recuperaciones de capital se destinen a objetivos que determine la SHCP a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo.

DÉCIMA SÉPTIMA. Estas Comisiones que dictaminan coincidimos con la Colegisladora en continuar en el artículo 13 de la Ley que se pretende emitir, con la obligación de enterar a la TESOFE los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes.

De igual forma, estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo con la medida que dispone que los recursos derivados de la mecánica de descuento de gastos tratándose de la enajenación de bienes, incluyendo acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales, se deberán enterar o concentrar en la TESOFE según corresponda.

En ese tenor, estas Comisiones Dictaminadoras concordamos en mantener la medida consistente en que, tratándose de operaciones que le sean encomendadas al IABA en los términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, pueda descontarse un porcentaje que no podrá ser mayor del 7 por ciento, el cual será autorizado por su Junta de Gobierno, por concepto de gastos indirectos de operación, que se destinarán a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Así también, se concuerda en continuar en el artículo 13 de la Ley que se plantea emitir, con la disposición relativa a la terminación de los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales, a efecto de agilizar los mismos, y permitir al liquidador, fiduciario o responsable del proceso utilizar los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos, por sí o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, para el pago de los gastos y pasivos de los procesos que, al momento de la referida conclusión sean deficitarios, para lo cual los recursos

correspondientes deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica, sin que sea necesario concentrar dichos recursos en la TESOFE.

En ese contexto, estas Comisiones Dictaminadoras, al igual que la Colegisladora, consideramos oportuno conservar la disposición que establece que los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, permanezcan afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación deficitarios, así como que, en aquellos casos en que se transmitan bienes y derechos a dicho Fondo, no se considere enajenación.

Del mismo modo, las que dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en mantener la precisión relativa a que los remanentes de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Igualmente, las que dictaminamos concordamos en continuar con la autorización de hacer uso de los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, como parte de la estrategia de conclusión de los procesos de desincorporación de entidades, por parte del IABA para cubrir los gastos inherentes al cumplimiento de su objeto, relativo a la atención de encargos bajo su administración, cuando estos sean

deficitarios. En ese sentido, también se estima conveniente sujetar lo anterior al cumplimiento de las directrices que se emitan para tal efecto, así como a la autorización de la Junta de Gobierno del IABA, previa aprobación de los órganos colegiados competentes.

De manera similar, estas Comisiones coincidimos con la Colegisladora en la conveniencia de establecer en el párrafo décimo segundo del mencionado artículo 13, que los ingresos que deriven de la enajenación de los bienes asegurados a favor del Gobierno Federal, incluyendo numerario, cuya administración y destino hayan sido encomendados al IABA en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se destinen a un fondo en los términos del artículo 89 de la citada Ley, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 90, 92 y 93 del mismo ordenamiento. En ese orden de ideas, también se concuerda con que los ingresos provenientes de numerario y de la enajenación de bienes que realice el IABA, que hayan sido declarados abandonados por parte de las instancias competentes, distintos de los vehículos declarados por la SCT y que se concentren a la TESOFE, se considerarán aprovechamientos, destinándose al financiamiento de las operaciones del Instituto, en términos de lo previsto en el artículo 90 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 89, 92 y 93 de dicha Ley.

Ahora bien, estas Comisiones Unidas, al igual que la Colegisladora estimamos necesario establecer en el artículo 13 de la Ley cuy emisión se plantea, que el destino del numerario decomisado y de los ingresos

provenientes de la enajenación de bienes decomisados en procedimientos penales federales, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y previa deducción de los gastos indirectos de operación que correspondan, se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al Fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, u otras políticas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, con el propósito de armonizar lo establecido en los ordenamientos penales y fiscales, e incluso en resoluciones judiciales, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la Ley cuya emisión se propone.

De igual manera, concordamos en que los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, se integren al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley antes mencionada.

Por otra parte, las que dictaminamos estamos de acuerdo en conservar en el artículo 13 la disposición que permite que los ingresos provenientes de la enajenación efectuada por el IABA de vehículos declarados abandonados por la SCT, en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha dependencia, se destinen conforme a lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y hecho lo anterior, hasta un 30 por ciento de los remanentes se utilice para cubrir a los permisionarios los adeudos generados, enterando el

resto a la TESOFE, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA. Estas Comisiones Legislativas coincidimos con la Colegisladora en aplicar lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

De igual modo, con el objetivo de fomentar que los contribuyentes apliquen la autocorrección fiscal, las Dictaminadoras estamos de acuerdo en continuar en el artículo 15 de la Ley cuya emisión se propone, con la disminución en un 50 por ciento de multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, en función del momento en el que el contribuyente efectúe la autocorrección de las mismas, a excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del Código Fiscal de la Federación.

En ese contexto, se concuerda con la reducción en un 40 por ciento de las multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las obligaciones de pago a los contribuyentes que se encuentren sujetos a revisión electrónica en términos del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación.

DÉCIMA NOVENA. Estas Comisiones Legislativas, al igual que la Colegisladora, consideramos necesario continuar con los estímulos fiscales, en materia del IEPS, contemplados en el artículo 16, apartado A, fracciones I a VI, de la Ley cuya emisión se plantea.

En ese orden de ideas, las que dictaminamos coincidimos en la conveniencia de mantener la precisión consistente en que los estímulos son acreditables contra el ISR con excepción del previsto en la fracción III del Apartado A del artículo 16; por lo que en consecuencia, su acreditamiento proceda únicamente contra el ISR causado por el contribuyente en el ejercicio fiscal, de forma tal que no se aplique contra el ISR retenido a terceros, ya que en ese caso no se trata de un impuesto propio del beneficiario del estímulo y, por otra parte, se está de acuerdo en que no se permita el acreditamiento contra los pagos provisionales que vaya realizando el contribuyente, debido a que cuando dichos pagos son mayores al ISR del ejercicio causado por el contribuyente o se obtenga pérdida fiscal, la devolución de los pagos provisionales o la compensación del saldo a favor implica una monetización de los estímulos mencionados, siendo que éstos deben tener como límite el ISR causado por el contribuyente.

Asimismo, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, estimamos oportuno, al igual que la Colegisladora, precisar que el estímulo que se pretende establecer mediante la adición del artículo 74-B en el Capítulo VIII del Título II de la Ley

del ISR, consistente en prever una reducción del 30% en el ISR a las personas morales de derecho agrario constituidas sólo por ejidatarios y comuneros o ejidos y comunidades, siempre que sus ingresos no excedan de 5 mdp en el ejercicio inmediato anterior, y que al menos un 80% de sus ingresos se obtengan por la industrialización y comercialización de productos derivados del sector primario, otorgando a dichas personas morales de derecho agrario atribuciones para transformar sus productos, únicamente lo podrán aplicar los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a las actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere el artículo 74 de la Ley del ISR, con el objetivo de evitar que los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto del citado artículo 74-B, puedan aplicar los beneficios previstos en el artículo 16, apartado A, fracciones II y III de la Ley cuya emisión se propone y monetizar el estímulo al solicitar las devoluciones.

De igual forma, se considera adecuado mantener el estímulo fiscal aplicable a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, el cual consiste en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto.

Ahora bien, las que dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en la necesidad de ajustar el límite del ingreso de los beneficiarios de los estímulos previstos en las fracciones I y V del artículo 16 de la Ley cuya emisión se propone, para que lo puedan recibir las empresas con ingresos totales

anuales menores a 60 y 300 millones de pesos respectivamente, a fin de mejorar la focalización de los estímulos hacia las empresas que más los requieren e incentivar la formalidad empresarial, así como que este ajuste preserva los objetivos que dieron lugar a estos apoyos y contribuye a la estabilidad macroeconómica, con un sistema fiscal más eficiente y equitativo con un mejor uso de los recursos.

En otro contexto, estas Comisiones Legislativas concordamos con la Colegisladora dar continuidad en la fracción VI del Apartado A del artículo 16 de la Ley que se propone emitir, al estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen combustibles fósiles en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes, cuando en estos procesos no se combustionen ese tipo de combustibles, así también, se considera acertado el conferir al SAT la atribución para emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización de combustibles fósiles no sujetos a un proceso de combustión por tipos de industria; no obstante lo anterior, las Dictaminadoras consideramos oportuno mantener la aclaración en relación a que el porcentaje mencionado se aplicará respecto de las cantidades de litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible, adquiridos en el mes de que se trate.

Asimismo, las que Dictaminamos coincidimos con la Colegisladora en lo acertado de otorgar un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos, y que dichos ingresos obtenidos en el

ejercicio por la enajenación de libros, periódicos y revistas represente al menos el 90% de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio de que se trate. Dicho estímulo consiste en una deducción adicional para los efectos de ISR, por un monto equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente. El citado estímulo fiscal tiene como propósito de preservar la cadena de libro, fortalecer a las pequeñas y medianas librerías, las cuales constituyen un eslabón importante al acercar a todas las personas a los libros y fomentar la lectura.

Ahora bien, estamos de acuerdo en conservar la exención del derecho de trámite aduanero a las personas que importen gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, tomando en cuenta que este combustible genera grandes beneficios económicos a sus usuarios, es de fácil transportación y además, produce menos contaminación.

VIGÉSIMA. Estas Comisiones Unidas, al igual que la Colegisladora, consideramos necesario mantener en el artículo 17 de la Ley que se plantea emitir, la medida consistente en que se deroguen aquellas disposiciones que contengan exenciones totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos o contribuciones federales distintos de los establecidos en leyes fiscales, incluyendo la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales y tratados internacionales.

TRIGÉSIMA CUARTA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en establecer en una disposición transitoria, que de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2020, la institución fiduciaria del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados deberá concentrar en la TESOFE los recursos remanentes previstos en su patrimonio.

TRIGÉSIMA QUINTA. Estas Comisiones Unidas coincidimos en permitir que la CFE tenga la posibilidad de implementar un esquema de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica bajo un diseño adecuado que resulte benéfico para el saneamiento de las finanzas tanto del proveedor del servicio así como de sus usuarios, se pretende que este esquema contemple eficiencias orientadas a generar e incentivar un consumo racional de la energía eléctrica, fomentar una cultura de pago por dicho servicio y reducir las cargas financieras de las partes.

De igual forma, se coincide con la Colegisladora en establecer que los programas serán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 y que se implementen a través de la celebración de convenios, los cuales deberán sujetarse a las reglas de operación que al efecto emita la SHCP a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, pudiéndose condonar el pago de hasta el 50 por ciento del adeudo, y que el resto de éste sea cubierto mediante parcialidades.

TRIGÉSIMA SEXTA. Las que dictaminamos estimamos conveniente establecer mediante una disposición transitoria, un plazo máximo de 8 meses para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.

Por lo anteriormente fundado y motivado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

De igual manera, concordamos en continuar con la disposición referente a la derogación de las disposiciones que establezcan un destino específico para los ingresos por concepto de productos, aprovechamientos o derechos distinto al previsto en las disposiciones de carácter fiscal, así también respecto de aquéllas que clasifiquen a los ingresos de las dependencias y sus órganos administrativos desconcentrados como ingresos excedentes del ejercicio en que se generen.

VIGÉSIMA PRIMERA. Estas Comisiones Dictaminadoras coincidimos con la Colegisladora en que es conveniente continuar con la clasificación y tratamiento de los ingresos excedentes que generan las dependencias, entidades, órganos autónomos y poderes de la Unión con la finalidad de posibilitar su destino a la unidad generadora de los mismos.

En ese contexto, se estima adecuado dar continuidad a la medida relativa que quedan sin efectos las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, excepto en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

VIGÉSIMA SEGUNDA. Las que dictaminamos, al igual que la Colegisladora, estimamos oportuno fijar la tasa de retención anual de intereses financieros en 1.45 por ciento con base en la metodología vigente y tomando en cuenta los valores de las variables observados durante el periodo previsto en la citada metodología.

VIGÉSIMA TERCERA. Estas Comisiones Legislativas concordamos con la Colegisladora en mantener los criterios y los rangos para imponer sanciones previstos en el artículo 22, con el objetivo de que la CNBV pueda ejercer sus funciones de manera más eficaz.

VIGÉSIMA CUARTA. Estas Comisiones Unidas, al igual que la Colegisladora, consideramos conveniente dar continuidad en el artículo 23 de la Ley cuya emisión se plantea, al apoyo otorgado a los contribuyentes de mínima capacidad administrativa que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, conservándose en sus términos el esquema de beneficios y estímulos fiscales a efecto de facilitar el cálculo y pago del IVA, así como del IEPS.

VIGÉSIMA QUINTA. Estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con la Colegisladora en conservar la fracción I del artículo 24 de la Ley que se pretende expedir, la medida consistente en que las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos en nuestro país los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del ISR, siempre que dichos apoyos se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación. Lo anterior, tomando en cuenta que en la actualidad se siguen canalizando recursos a las familias afectadas para atender los daños ocurridos por los mencionados sismos.

En ese orden de ideas, estas Comisiones que dictaminan coincidimos con la Colegisladora en que en la fracción II del artículo 24 de la Ley cuya emisión se propone se establezca que las organizaciones civiles y fideicomisos que de forma inmediata realicen las labores de rescate en la emergencia y contribuyan en la reconstrucción y restablecimiento de las actividades económicas después de la ocurrencia de desastres naturales, puedan recibir recursos de donatarias autorizadas que cuenten con un buen historial de sus obligaciones fiscales ante el SAT. Esto, a fin de que se permita una acción más oportuna y efectiva ante desastres naturales. Además, esta disposición será un canal idóneo para asegurar que los recursos de la sociedad sean destinados efectivamente a atender la emergencia, garantizando la transparencia sobre el uso y destino de los recursos, así como la rendición de cuentas que demanda la sociedad en estos tiempos.

VIGÉSIMA SEXTA. Estas Comisiones de Hacienda y Crédito Público, al igual que la Colegisladora, estimamos oportuno en conservarlas disposiciones que obligan a la SHCP a realizar un estudio de ingreso-gasto, así como a publicar el Presupuesto de Gastos Fiscales y un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del ISR, así como incluir el impacto recaudatorio correspondiente en la exposición de motivos de toda iniciativa que se presente en materia fiscal.

Del mismo modo, hacen relación a la generación del RDA a que se refiere el artículo 27, Apartados B y C de la Ley cuya emisión se plantea, las Dictaminadoras concordamos en que la información de los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de los directivos análogos, se debe obtener de los datos reportados, en la página de Internet del SAT en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas. En ese sentido, se coincide en que la fecha oportuna para la presentación de la información en dicha sección sea el 31 de julio de 2020. Esto, derivado de que la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas contiene información no estandarizada que requiere un proceso para su conformación en los términos establecidos en los Apartados B y C del citado artículo. Además, de que la fecha establecida asegura que el proceso de explotación, elaboración y validación de los datos se realice en tiempo y forma para entregar el RDA a las instancias correspondientes del Congreso de la Unión y su publicación en la página de Internet de la SHCP.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Estas Comisiones Unidas estamos de acuerdo en la Ley cuya emisión se propone, en conservar la disposición transitoria relativa a que el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el DOF el 20 de noviembre de 2013, continuará destinándose durante el ejercicio fiscal de 2020 en los términos del citado precepto.

VIGÉSIMA OCTAVA. Estas Comisiones Legislativas coincidimos con la Colegisladora en dar continuidad a la disposición transitoria que establece que se entenderán hechas también al SAT las referencias en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones que se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, en la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el DOF el 9 de diciembre de 2013, y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos.

VIGÉSIMA NOVENA. Las Dictaminadoras concordamos con la Colegisladora en continuar en el ejercicio fiscal de 2020, con la disposición transitoria que permita a las entidades federativas y municipios enterar a la TESOFE las disponibilidades de recursos federales correspondientes a ejercicios fiscales anteriores a 2020 que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Igualmente, consideramos conveniente que los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinen por la SHCP para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

En ese sentido, estas Comisiones Unidas estimamos acertada la adición de la disposición que faculta a la SHCP para que emita los lineamientos para la operación del destino establecido en el párrafo anterior a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2020. Así como modificar el transitorio Primero de la Ley cuya emisión se propone, con el fin de establecer que esta disposición entre en vigor al día siguiente de su publicación respecto de los recursos que las entidades federativas y municipios concentraron a la TESOFE en el 2019, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores.

Asimismo, se coincide con la Colegisladora en relación al destino de los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, tuvo a bien establecer que también se podrán destinar a la atención de desastres naturales.

TRIGÉSIMA. Estas Comisiones de Hacienda y Crédito Público, al igual que la Colegisladora, estimamos oportuno continuar en el transitorio Noveno de la Ley cuya emisión se plantea, con la disposición transitoria que permite al ISSSTE, de conformidad con las facultades que le confiere la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, requerir a la SHCP los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan.

De igual manera, estamos de acuerdo en conservar la medida consistente en que el ISSSTE pueda suscribir con las entidades federativas, municipios,

dependencias y entidades de los gobiernos locales, los convenios de regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos, conforme al modelo que sea autorizado por su órgano de gobierno. Asimismo, estimamos necesario que el Instituto pueda aceptar bienes inmuebles como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse en las cuentas individuales de los trabajadores.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Las que dictaminamos, coincidimos con la Colegisladora en la necesidad de establecer mediante disposición transitoria, que las dependencias y entidades deban remitir durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2020 a la SHCP, un informe de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos susceptibles de extinguirse en términos de las disposiciones aplicables. Lo anterior, tomando en cuenta que la presente Administración tiene el firme propósito de reducir el número de fideicomisos y mandatos públicos, a efecto de que ésta cuente exclusivamente con los que resulten indispensables para el quehacer público.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas concordamos con la Colegisladora en establecer la medida consistente en que los contratos de fideicomisos y mandatos que constituya o celebre el Gobierno Federal, deban prever que la SHCP pueda disponer del patrimonio de éstos, así como la obligación a cargo de las instituciones fiduciarias o mandatarias de concentrar trimestralmente en la TESOFE, los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado, bajo la

naturaleza de aprovechamientos, salvo disposición de carácter general en contrario.

Además, estimamos acertado que las instituciones fiduciarias, o mandatarias de fideicomisos, mandatos o análogos públicos, deben concentrar de forma trimestral en la TESOFE los intereses generados por dichos instrumentos financieros, salvo aquéllos que impliquen el pago de gastos de operación de dichos vehículos, bajo la naturaleza de aprovechamientos y se destinarán a gasto en salud o de inversión en infraestructura, exceptuando de lo anterior aquellos vehículos financieros que por disposición expresa de ley, decreto o determinación de la SHCP, dichos recursos deban permanecer afectos a su patrimonio o destinados al objeto correspondiente.

TRIGÉSIMA TERCERA. Estas Comisiones Legislativas, al igual que la Colegisladora, consideramos pertinente establecer la medida consistente en que se instruya a la institución fiduciaria del fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria para que durante el mes de marzo concentre en la TESOFE, bajo la naturaleza de aprovechamientos, los recursos que integran el patrimonio fideicomitido a fin de destinarlos, mediante el mecanismo que determine la SHCP, a proyectos de inversión de infraestructura económica para la construcción, ampliación o rehabilitación de puertos, así como para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros que mejoren la conectividad entre los puertos.

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Capítulo I
De los Ingresos y el Endeudamiento Público

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran:

CONCEPTO	Ingreso Estimado
TOTAL	**6,103,317.4**
1. Impuestos	**3,505,822.4**
11. Impuestos Sobre los Ingresos:	1,852,852.3
01. Impuesto sobre la renta.	1,852,852.3
12. Impuestos Sobre el Patrimonio.	
13. Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones:	1,534,055.8
01. Impuesto al valor agregado.	1,007,546.0

02.	Impuesto especial sobre producción y servicios:			515,733.5
	01.	Combustibles automotrices:		342,053.6
		01.	Artículo 2o., fracción I, inciso D).	313,321.0
		02.	Artículo 2o.-A.	28,732.6
	02.	Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:		62,165.7
		01.	Bebidas alcohólicas.	18,888.4
		02.	Cervezas y bebidas refrescantes.	43,277.3
	03.	Tabacos labrados.		43,679.4
	04.	Juegos con apuestas y sorteos.		2,968.8
	05.	Redes públicas de telecomunicaciones.		5,923.3
	06.	Bebidas energetizantes.		11.6
	07.	Bebidas saborizadas.		28,660.5
	08.	Alimentos no básicos con alta densidad calórica.		23,783.2
	09.	Plaguicidas.		758.1
	10.	Combustibles fósiles.		5,729.3
03.	Impuesto sobre automóviles nuevos.			10,776.3
14.	Impuestos al Comercio Exterior:			70,984.6
	01.	Impuestos al comercio exterior:		70,984.6
		01.	A la importación.	70,984.6
		02.	A la exportación.	0.0

15.	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables.	
16.	Impuestos Ecológicos.	
17.	Accesorios de impuestos:	41,210.2
	01. Accesorios de impuestos.	41,210.2
18.	Otros impuestos:	6,850.3
	01. Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.	6,850.3
	02. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación.	0.0
19.	Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	-130.8
2.	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**374,003.2**
21.	Aportaciones para Fondos de Vivienda.	0.0
	01. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.	0.0
22.	Cuotas para la Seguridad Social.	374,003.2
	01. Cuotas para el Seguro Social a cargo de	374,003.2

	patrones y trabajadores.	
23.	Cuotas de Ahorro para el Retiro.	0.0
	01. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones.	0.0
24.	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social:	0.0
	01. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores.	0.0
	02. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares.	0.0
25.	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.	0.0
3.	**Contribuciones de Mejoras**	**44.8**
31.	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas:	44.8
	01. Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.	44.8
39.	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
4.	**Derechos**	**52,256.8**

41.	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público:	43,325.8
	01. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	346.2
	02. Secretaría de la Función Pública.	0.0
	03. Secretaría de Economía.	2,670.7
	04. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	8,748.2
	05. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	12,361.9
	06. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	72.3
	07. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	0.0
	08. Secretaría de Educación Pública.	0.2
	09. Instituto Federal de Telecomunicaciones.	19,126.3
	10. Secretaría de Cultura	0.0
43.	Derechos por Prestación de Servicios:	8,931.0
	01. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público:	8,931.0
	01. Secretaría de Gobernación.	91.1
	02. Secretaría de Relaciones Exteriores.	4,915.0
	03. Secretaría de la Defensa Nacional.	145.5
	04. Secretaría de Marina.	445.0
	05. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	588.6

06.	Secretaría de la Función Pública.	23.0
07.	Secretaría de Energía.	0.2
08.	Secretaría de Economía.	21.9
09.	Secretaría de Agricultura, y Desarrollo Rural.	42.9
10.	Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	1,081.6
11.	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	85.1
	01. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
	02. Otros.	85.1
12.	Secretaría de Educación Pública.	1,255.9
13.	Secretaría de Salud.	0.0
14.	Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	9.4
15.	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.	61.1
16.	Secretaría de Turismo.	0.0
17.	Fiscalía General de la República.	0.0
18.	Instituto Federal de Telecomunicaciones.	30.1
19.	Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0

		20. Comisión Reguladora de Energía.	0.0
		21. Comisión Federal de Competencia Económica.	0.0
		22. Secretaría de Cultura.	58.4
		23. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	76.2
	44.	Otros Derechos.	0.0
	45.	Accesorios de Derechos.	0.0
	49.	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
5.	**Productos**		**10,095.3**
	51.	Productos.	10,095.3
		01. Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público.	8.8
		02. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público:	10,086.5
		01. Explotación de tierras y aguas.	0.0
		02. Arrendamiento de tierras, locales y construcciones.	0.3
		03. Enajenación de bienes:	1,859.6
		01. Muebles.	1,743.5
		02. Inmuebles.	116.1

		04. Intereses de valores, créditos y bonos.	7,687.4
		05. Utilidades:	539.1
		01. De organismos descentralizados y empresas de participación estatal.	0.0
		02. De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.	0.0
		03. De Pronósticos para la Asistencia Pública.	538.6
		04. Otras.	0.5
		06. Otros.	0.1
	59.	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
6.	**Aprovechamientos**		**98,674.4**
	61.	Aprovechamientos:	98,639.0
		01. Multas.	2,190.5
		02. Indemnizaciones.	2,531.7
		03. Reintegros:	166.5
		01. Sostenimiento de las escuelas artículo 123.	0.0
		02. Servicio de vigilancia forestal.	0.1

	03. Otros.	166.4
04.	Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica.	94.8
05.	Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación.	0.0
06.	Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación.	0.0
07.	Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del Sistema Escolar Federalizado.	0.0
08.	Cooperación de la Ciudad de México por servicios públicos locales prestados por la Federación.	0.0
09.	Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de particulares para alcantarillado, electrificación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas.	0.0
10.	5 por ciento de días de cama a cargo de establecimientos particulares para internamiento de enfermos y otros destinados a la Secretaría de Salud.	0.0

11.	Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica.	947.8
12.	Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.	1,129.7
13.	Regalías provenientes de fondos y explotación minera.	0.0
14.	Aportaciones de contratistas de obras públicas.	7.6
15.	Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal:	0.5
	01. Aportaciones que efectúen los Gobiernos de la Ciudad de México, Estatales y Municipales, los organismos y entidades públicas, sociales y los particulares.	0.0
	02. De las reservas nacionales forestales.	0.0
	03. Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.	0.0
	04. Otros conceptos.	0.5
16.	Cuotas Compensatorias.	142.4
17.	Hospitales Militares.	0.0
18.	Participaciones por la explotación de	0.0

	obras del dominio público señaladas por la Ley Federal del Derecho de Autor.	
19.	Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal.	0.0
20.	Provenientes del programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras.	0.0
21.	No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios.	0.0
22.	Otros:	91,427.5
	01. Remanente de operación del Banco de México.	0.0
	02. Utilidades por Recompra de Deuda.	0.0
	03. Rendimiento mínimo garantizado.	0.0
	04. Otros.	91,427.5
23.	Provenientes de servicios en materia energética:	0.0
	01. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
	02. Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0
	03. Comisión Reguladora de Energía.	0.0
62.	Aprovechamientos Patrimoniales.	35.4

	01.	Recuperaciones de capital:	35.4
		01. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de Entidades Federativas y empresas públicas.	27.6
		02. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas privadas y a particulares.	7.8
		03. Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.	0.0
		04. Desincorporaciones.	0.0
		05. Otros.	0.0
	63.	Accesorios de Aprovechamientos.	0.0
	69.	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
7.	**Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**		**1,065,166.0**
	71.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social:	72,232.9
		01. Instituto Mexicano del Seguro Social.	26,920.2
		02. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.	45,312.7
	72.	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de	992,933.1

Servicios de Empresas Productivas del Estado:

01.	Petróleos Mexicanos.	574,535.0
02.	Comisión Federal de Electricidad.	418,398.1

73. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.
74. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.
75. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
76. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.
77. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.
78. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos.
79. Otros Ingresos.

8.	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**	
	81. Participaciones.	
	82. Aportaciones.	
	83. Convenios.	
	84. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.	
	85. Fondos Distintos de Aportaciones.	
9.	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**412,797.7**
	91. Transferencias y Asignaciones.	0.0
	93. Subsidios y Subvenciones.	0.0
	95. Pensiones y Jubilaciones.	0.0
	97. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.	412,797.7
	01. Ordinarias.	412,797.7
	02. Extraordinarias.	0.0
0.	**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**584,456.8**
	01. Endeudamiento interno:	569,582.1
	01. Endeudamiento interno del Gobierno Federal.	532,266.1
	02. Otros financiamientos:	37,316.0
	01. Diferimiento de pagos.	37,316.0

	02. Otros.	0.0
02.	Endeudamiento externo:	0.0
	01. Endeudamiento externo del Gobierno Federal.	0.0
03.	Financiamiento Interno.	
04.	Déficit de organismos y empresas de control directo.	-47,748.8
05.	Déficit de empresas productivas del Estado.	62,623.5
Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal (0.01.01+0.02.01)		532,266.1

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este precepto.

Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal de 2020, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos.

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2020, se proyecta una recaudación federal participable por 3 billones 394 mil 236.7 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal de 2020, el gasto de inversión del Gobierno Federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto.

Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2020, en términos monetarios, el pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, previsto en la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 895.1 millones de pesos.

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el artículo Segundo Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas

de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho Transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados.

En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por parte del Ejecutivo Federal, de los bienes y derechos del fideicomiso referido en el primer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en cuentas de orden, con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo esas operaciones.

El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará en primer término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las operaciones referidas en el párrafo anterior y, posteriormente, se destinarán para restituir al Gobierno Federal los recursos públicos aportados

para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto.

Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2020 se destinen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del ejercicio fiscal de 2020, se instrumenten para potenciar los recursos que, con cargo a dicho fondo, reciben las entidades federativas.

Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El gasto de inversión a que se refiere el párrafo sexto del presente artículo se reportará en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de los ingresos generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.61.22.04 del presente artículo por concepto de otros aprovechamientos. Asimismo, deberá informar los destinos específicos que, en términos del artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan dichos aprovechamientos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2020, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Durante el ejercicio fiscal 2020, los ingresos propios de Petróleos Mexicanos que se generen por un precio promedio anual del barril del petróleo crudo mexicano que exceda de 49.01 dólares de los Estados Unidos de América y hasta los 55.00 dólares de los Estados Unidos de América, deberá destinarlos a mejorar su meta de balance financiero aprobada en el artículo 5 del

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 532 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El

cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo.

Las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior no deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para el ejercicio fiscal de 2020.

Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente se podrán aplicar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario incluyendo

sus artículos transitorios. Sobre estas operaciones de canje y refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión.

El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta propia con los valores referidos.

En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos en la cuenta que, para tal efecto, le lleve el Banco de México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el citado Banco procurará las mejores condiciones para el mencionado Instituto dentro de lo que el mercado permita.

El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco de México podrá

ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Titular de dicha Tesorería, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo.

Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores un monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el Resultado de Operación que considera la Constitución Neta de Reservas Crediticias Preventivas, de cero pesos para el ejercicio fiscal de 2020.

El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización del órgano de gobierno de la entidad de que se trate y con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los montos establecidos en el artículo 1o., numeral 0 "Ingresos derivados de Financiamientos" de esta Ley, así como el monto de endeudamiento neto

interno consignado en este artículo, se verán, en su caso, modificados en lo conducente como resultado de la distribución, entre el Gobierno Federal y los organismos y empresas de control directo, de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 1 mil 250 millones de dólares de los Estados Unidos de América; asimismo, se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

Se autoriza para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 835 millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de 508 millones de dólares de los

Estados Unidos de América, asimismo se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

El cómputo de lo establecido en los dos párrafos anteriores se realizará en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión de manera trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento.

Artículo 3o. Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México

para el Ejercicio Fiscal 2020. Asimismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar operaciones de canje, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública de la Ciudad de México.

El ejercicio del monto de endeudamiento autorizado se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 4o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 257,138.2 millones de pesos, de los cuales 100,344.1 millones de pesos corresponden a inversión directa y 156,794.1 millones de pesos a inversión condicionada.

Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad en los términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV, del Reglamento de este último ordenamiento, por un total de 2,760.7 millones de pesos que corresponde a un proyecto de inversión directa.

Artículo 6o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las

compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y/o sus empresas productivas subsidiarias deberán presentar las declaraciones, hacer los pagos y cumplir con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, ante la Tesorería de la Federación, a través del esquema para la presentación de declaraciones que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida, previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las modificaciones a los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los pagos establecidos conforme al párrafo anterior, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente a aquél en que se generen dichas modificaciones, así como en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga uso de las facultades otorgadas en el segundo párrafo de este artículo, los pagos correspondientes deberán ser transferidos y concentrados en la Tesorería de la Federación por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a más tardar el día siguiente de su recepción, a cuenta de la transferencia a que se refiere el artículo 16, fracción II, inciso g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos que, hasta antes de la entrada en vigor del "Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en términos del artículo 32 de dicha Ley, serán registrados como inversión.

Capítulo II

De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales

Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:

I. Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a

continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate:

1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26 por ciento mensual.

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53 por ciento mensual.

3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.82 por ciento mensual.

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización realizada conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos y disposiciones de carácter general expedidos en el Ramo de Hacienda, de las que hayan derivado beneficios otorgados en términos de la presente Ley, así como por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por

una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2020, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen.

Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se estará a lo siguiente:

I. La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, de similares características, en países con los que México mantiene vínculos comerciales.

II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica y de saneamiento financiero.

III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general.

Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública Federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias

interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los aprovechamientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los aprovechamientos que

perciba la dependencia correspondiente.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por dicha Secretaría, ya sea de los ingresos que obtengan o con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, o tratándose de recuperaciones de capital o del patrimonio, según sea el caso, los recursos correspondientes se destinarán por la propia Secretaría prioritariamente a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a fomentar acciones que les permitan cumplir con sus respectivos mandatos, o a programas y proyectos de inversión, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente Ley.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de cualquier otra entidad paraestatal distinta de las señaladas en el párrafo anterior, dichos ingresos serán enterados a la Tesorería de la Federación bajo dicha naturaleza, a efecto de que sean destinados a programas presupuestarios que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él deriven.

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 1o., numerales 6.61.11, 6.62.01.04 y 6.61.22.04 de esta Ley por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías

generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, aquéllos a que se refieren la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley Federal de Competencia Económica, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo en los plazos que para tales efectos se fijen, el prestador del servicio

o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación de que se trate, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos.

El prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por aprovechamientos, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de carácter particular, las cuotas de los productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal de 2020, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los productos que se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los productos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el

mismo valor vinculatorio.

En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019 hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones efectuadas tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como por el Instituto de Administración de Bienes y Activos y los accesorios de los productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en un fondo, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes que pasan a

propiedad del Fisco Federal conforme a las disposiciones fiscales, que hayan sido transferidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la citada entidad transferente, sobre bienes de la misma naturaleza; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en el fondo señalado en el párrafo anterior, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. Un mecanismo como el previsto en el presente párrafo, se podrá aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que, por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deba realizar. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el Instituto de Administración de Bienes y Activos remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados y a su Coordinadora de Sector, un informe que contenga el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las autoridades mencionadas en los párrafos citados.

Los ingresos netos provenientes de las enajenaciones realizadas por el

Instituto de Administración de Bienes y Activos se podrán destinar hasta en un 100 por ciento a financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como para el pago de los créditos que hayan sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, siempre que en el acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el convenio que al efecto se celebre se señale dicha situación. Lo anterior no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados a que se refiere el décimo tercer párrafo del artículo 13 de esta Ley. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes en proceso de extinción de dominio y de aquellos sobre los que sea declarada la extinción de dominio y de sus frutos, así como su monetización en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, serán destinados a una cuenta especial en los términos que establece el artículo 239 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 234 y 237 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por productos, así como de la concentración efectuada a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 12. Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2020 se concentrarán en términos del artículo 22 de la Ley de Tesorería de la Federación, salvo en los siguientes casos:

I. Se concentrarán en la Tesorería de la Federación, a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción, los derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, incluidos entre otros las sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, así como los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de Telecomunicaciones

y Radiodifusión;

II. Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional, sólo registrarán los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente de esta Ley, salvo por lo dispuesto en la fracción I de este artículo, y deberán conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos.

Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere esta fracción, se deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, de los informes avalados por el órgano interno de control o de la comisión respectiva del órgano de gobierno, según sea el caso, especificando los importes del impuesto al valor agregado que hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de los ingresos;

III. Las entidades de control indirecto deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en posibilidad de elaborar los informes trimestrales que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reflejen dentro de la Cuenta Pública Federal;

IV. Los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social

destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, podrán ser recaudados por las oficinas de los propios institutos o por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la Cuenta Pública Federal, y

V. Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio de la concentración en términos de la Ley de Tesorería de la Federación.

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere esta fracción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de que dichos ingresos hayan sido concentrados en la Tesorería de la Federación.

Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos.

Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se destinarán a las entidades o a las empresas productivas del Estado que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza. Las entidades o las empresas productivas del Estado podrán celebrar convenios de colaboración con la iniciativa privada.

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.

Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en la fracción que les

corresponda conforme al citado artículo.

Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de concentrar los recursos públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la Federación, en los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato análogo, así como aquellos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según su origen, y se podrán destinar a los fines que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento correspondiente. Asimismo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 6.62.01.04 del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes.

Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son accesorios.

Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán los netos que resulten de restar al ingreso percibido las erogaciones efectuadas para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a que se refiere el párrafo siguiente.

Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales son los recursos efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas. Con excepción de lo dispuesto en el séptimo párrafo de este artículo para los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, los ingresos netos a que se refiere este párrafo se enterarán o concentrarán, según

corresponda, en la Tesorería de la Federación y deberán manifestarse tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo acciones, por la enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión de derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la desincorporación de entidades, se les podrá descontar un porcentaje, por concepto de gastos indirectos de operación, que no podrá ser mayor del 7 por ciento, a favor del Instituto de Administración de Bienes y Activos, cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la citada entidad, y se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos podrán destinarse para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente con la opinión favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, sin que sea necesario concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Estos recursos deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica.

Los pasivos a cargo de organismos descentralizados en proceso de desincorporación que tengan como acreedor al Gobierno Federal, con excepción de aquéllos que tengan el carácter de crédito fiscal, quedarán extinguidos de pleno derecho sin necesidad de autorización alguna, y los créditos quedarán cancelados de las cuentas públicas.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, podrán permanecer afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. No se considerará enajenación la transmisión de bienes y derechos al Fondo de Desincorporación de Entidades que, con la opinión favorable de dicha Comisión, efectúen las entidades en proceso de desincorporación, para concluir las actividades residuales del proceso respectivo.

Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos remanentes que les correspondan de dichos procesos ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, como parte de la estrategia de conclusión de los procesos de desincorporación de entidades, entre el Instituto de Administración de Bienes y Activos y las entidades cuyos procesos de desincorporación concluyeron, podrán ser utilizados por éste, para sufragar las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, relativo a la atención de encargos bajo su administración, cuando éstos sean deficitarios. Lo anterior, estará sujeto, al cumplimiento de las directrices que se emitan para tal efecto, así como a la autorización de la Junta de Gobierno del Instituto de Administración de Bienes y Activos, previa aprobación de los órganos colegiados competentes.

Los ingresos obtenidos por la venta de bienes asegurados a favor del Gobierno Federal, incluyendo numerario, cuya administración y destino hayan sido encomendados al Instituto de Administración de Bienes y Activos, en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, serán destinados a un fondo en los términos del artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, previa deducción de los conceptos previstos en los

artículos 90, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Los ingresos provenientes de numerario y de la enajenación de bienes que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos, que hayan sido declarados abandonados por parte de las instancias competentes, distintos a los señalados en el párrafo décimo quinto del presente artículo y que se concentren a la Tesorería de la Federación, se considerarán aprovechamientos y se destinarán al financiamiento de las operaciones del Instituto, en términos de lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 89, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

El numerario decomisado y los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y previa deducción de los gastos indirectos de operación que correspondan, se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al Fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, u otras políticas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la presente Ley.

Los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, serán integrados al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley citada.

Los ingresos provenientes de la enajenación que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos de vehículos declarados abandonados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha dependencia, se destinarán de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. De la cantidad restante a los permisionarios federales se les cubrirán los adeudos generados hasta con el treinta por ciento de los remanentes de los ingresos y el resto se enterará a la Tesorería de la Federación. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 14. Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, entre las que se comprende de manera enunciativa a las siguientes:

I. Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado.

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los términos de dichas disposiciones.

Artículo 15. Durante el ejercicio fiscal de 2020, los contribuyentes a los que se les impongan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del citado Código, independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente.

Cuando los contribuyentes a los que se les impongan multas por las infracciones señaladas en el párrafo anterior corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su caso, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación o se notifique la resolución provisional a que se refiere el artículo 53-B, primer párrafo, fracción I del citado Código, pero antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 53-B, los contribuyentes pagarán el 60 por ciento de la multa que les corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior.

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2020, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que adquieran el diésel o el biodiésel y sus mezclas, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos y que para determinar su utilidad puedan deducir dichos combustibles cuando los importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento

de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles, en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2, según corresponda al tipo de combustible, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal

correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante fiscal de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

1. El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o el biodiésel y sus mezclas, por el número de litros de diésel o de biodiésel y sus mezclas importados o adquiridos.

En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.

2. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en dichas actividades, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en aduana del pedimento de importación o el precio consignado en el comprobante fiscal de adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas en las estaciones de servicio, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

III. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final en dichas actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el

párrafo anterior.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de los artículos 74 y 75 del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2020 y enero de 2021.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diésel o de biodiésel y sus mezclas, en el que asienten mensualmente la totalidad del diésel o del biodiésel y sus mezclas que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I

de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diésel o el biodiésel y sus mezclas que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diésel o del biodiésel y sus mezclas utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de estos combustibles en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación.

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda según el tipo de combustible, conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el número de litros importados o adquiridos.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá

efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago por la importación o adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas a distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: monedero electrónico autorizado por el Servicio de Administración Tributaria; tarjeta de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante, o bien, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México.

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al

biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, se entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal, relacionados con sus actividades económicas, sin que por ello se genere un cobro.

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 300 millones de pesos, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura mencionada hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en

que se realicen los gastos a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación del beneficio contenido en esta fracción.

VI. Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que en su proceso productivo no se destinen a la combustión.

El estímulo fiscal señalado en esta fracción será igual al monto que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda, por la cantidad del combustible consumido en un mes, que no se haya sometido a un proceso de combustión.

El monto que resulte conforme a lo señalado en el párrafo anterior únicamente podrá ser acreditado contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente

al mismo ejercicio en que se adquieran los combustibles a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización del combustible no sujeto a un proceso de combustión por tipos de industria, respecto de los litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible de que se trate, adquiridos en un mes de calendario, así como las demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal.

VII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de pesos, consistente en permitir el acreditamiento del derecho especial sobre minería a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos que hayan pagado en el ejercicio de que se trate.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción, únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tengan los concesionarios o asignatarios mineros a su cargo, correspondiente al mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación de esta fracción.

VIII. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos, y que dichos ingresos obtenidos en el ejercicio por la enajenación de libros, periódicos y revistas represente al menos el 90% de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio de que se trate.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior consiste en una deducción adicional para los efectos del impuesto sobre la renta, por un monto equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente.

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV, V, VI y VII de este apartado quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto señalen.

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente apartado no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido en esta Ley.

Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos establecidos en la presente Ley.

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno de ellos se establece en la presente Ley.

B. En materia de exenciones:

Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo.

Artículo 17. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a empresas productivas del Estado, organismos descentralizados federales que prestan

los servicios de seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza.

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.

Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.

Artículo 18. Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los tribunales administrativos, los órganos autónomos por disposición constitucional, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades, se deberán aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados de la dependencia en la Ley de Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados efectuados por dicha dependencia a la Tesorería de la Federación, en el periodo que corresponda.

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos

excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades.

Artículo 19. Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican de la siguiente manera:

I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se generan en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades relacionadas directamente con las funciones recurrentes de la institución.

II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades que no guardan relación directa con las funciones recurrentes de la institución.

III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con las atribuciones de la dependencia o entidad, tales como la recuperación de seguros, los donativos en dinero y la enajenación de bienes muebles.

IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como de los tribunales administrativos y de los órganos constitucionales autónomos. No se incluyen en esta fracción los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ni aquéllos por concepto de derechos y aprovechamientos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, los cuales se sujetan a lo dispuesto en el artículo 12, fracción I, de esta Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades a más tardar el último día hábil de enero de 2020 y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se modifiquen.

Los ingresos a que se refiere la fracción III de este artículo se aplicarán en los términos de lo previsto en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 20. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal de 2020 la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 1.45 por ciento. La metodología para calcular dicha tasa es la siguiente:

I. Se determinó la tasa de rendimiento promedio ponderado de los valores públicos por el periodo comprendido de febrero a julio de 2019, conforme a lo siguiente:

a) Se tomaron las tasas promedio mensuales por instrumento, de los valores públicos publicados por el Banco de México.

b) Se determinó el factor de ponderación mensual por instrumento, dividiendo las subastas mensuales de cada instrumento entre el total de las subastas de todos los instrumentos públicos efectuadas al mes.

c) Para calcular la tasa ponderada mensual por instrumento, se multiplicó la tasa promedio mensual de cada instrumento por su respectivo factor de ponderación mensual, determinado conforme al inciso anterior.

d) Para determinar la tasa ponderada mensual de valores públicos se sumó la tasa ponderada mensual por cada instrumento.

e) La tasa de rendimiento promedio ponderado de valores públicos

correspondiente al periodo febrero a julio de 2019 se determinó con el promedio simple de las tasas ponderadas mensuales determinadas conforme al inciso anterior del mencionado periodo.

II. Se tomaron las tasas promedio ponderadas mensuales de valores privados publicadas por el Banco de México y se determinó el promedio simple de dichos valores correspondiente al periodo de febrero a julio de 2019.

III. Se determinó un factor ponderado de los instrumentos públicos y privados en función al saldo promedio en circulación de los valores públicos y privados correspondientes al periodo de febrero a julio de 2019 publicados por el Banco de México.

IV. Para obtener la tasa ponderada de instrumentos públicos y privados, se multiplicaron las tasas promedio ponderadas de valores públicos y privados, determinados conforme a las fracciones I y II, por su respectivo factor de ponderación, determinado conforme a la fracción anterior, y posteriormente se sumaron dichos valores ponderados.

V. Al valor obtenido conforme a la fracción IV se disminuyó el valor promedio de la inflación mensual interanual del índice general correspondiente a cada uno de los meses del periodo de febrero a julio de 2019 del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

VI. La tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el valor obtenido conforme a la fracción V de este artículo por la tasa correspondiente al último tramo de la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 22. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por el incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades competentes, con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de 1 hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con base en los criterios que se establezcan para tal efecto, los cuales podrán considerar, entre otros, los días de atraso en la atención de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los requerimientos que se hubieran incumplido, o la probable afectación de los intereses patrimoniales de los clientes o usuarios de los servicios financieros.

Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al terrorismo, cometidas por las entidades financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y asesores en inversiones, serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del reporte de la operación inusual que no se

hubiera enviado, del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario de la que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas conforme a las disposiciones señaladas anteriormente, o bien con multa equivalente en moneda nacional de 10 hasta 100,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el caso de cualquier otro incumplimiento a las referidas disposiciones.

Artículo 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios que, en su caso, corresponda a las actividades mencionadas, mediante la aplicación del esquema de estímulos siguiente:

I. Calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma siguiente:

   a) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado en el bimestre de que se trate, considerando el giro o actividad a la que se dedique el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

	Sector económico	Porcentaje IVA (%)
1	Minería	8.0
2	Manufacturas y/o construcción	6.0
3	Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles)	2.0
4	Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares en que se proporcionen servicios de alimentos y bebidas)	8.0
5	Negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y/o medicinas	0.0

Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores económicos mencionados en los numerales 1 a 4 aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante. Se entiende por sector preponderante aquél de donde provenga la mayor parte de los ingresos del contribuyente.

b) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios en el bimestre de que se trate, considerando el tipo de bienes enajenados por el contribuyente,

conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar

Descripción	Porcentaje IEPS (%)
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea comercializador)	1.0
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea fabricante)	3.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea comercializador)	10.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea fabricante)	21.0
Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante)	4.0
Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante)	10.0
Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador)	1.0
Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el contribuyente sea fabricante)	23.0

Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante)	120.0

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo, cuando hayan pagado el impuesto especial sobre producción y servicios en la importación de tabacos labrados y bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos C) y G) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, considerarán dicho pago como definitivo, por lo que ya no pagarán el impuesto que trasladen en la enajenación de los bienes importados, siempre que dicha enajenación se efectúe con el público en general.

c) El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta fracción será el monto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios, en su caso, a pagar por las actividades realizadas con el público en general, sin que proceda acreditamiento alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente.

d) El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios deberá realizarse por los períodos y en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades realizadas con el público en general, aquéllas por las que se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado.

Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su deducción o acreditamiento, en donde se traslade en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, dichos impuestos deberán pagarse en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones aplicables, conjuntamente con el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios determinado conforme al inciso c) de esta fracción.

Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios será aplicable, cuando proceda, en la proporción que represente el valor de las actividades por las que se expidieron comprobantes fiscales en las que se haya efectuado el traslado expreso y por separado, en el valor total de las actividades del bimestre que corresponda.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta fracción podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso deberán calcular y pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según se trate, a partir del bimestre en que abandonen la opción. En este caso, los contribuyentes no podrán volver a ejercer la opción prevista en el presente artículo.

II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las actividades realizadas con el público en general en las que determinen el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios con el esquema de porcentajes a que se refiere la fracción I del presente artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente:

a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según corresponda al número de años que tenga el contribuyente tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal:

TABLA

Años	Porcentaje de reducción (%)
1	100
2	90
3	80
4	70
5	60
6	50
7	40
8	30
9	20
10	10

Para los efectos de la aplicación de la tabla el número de años de tributación del contribuyente se determinará de conformidad con lo que al respecto se considere para los efectos del impuesto sobre la renta.

Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, cuyos ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de trescientos mil pesos, durante cada uno de los años en que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será de 100

por ciento.

Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por tributar conforme al Régimen de Incorporación Fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán al monto establecido en dicho párrafo. Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto referido, en el ejercicio siguiente no se podrá tomar el beneficio del párrafo anterior.

b) La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de reducción a que se refiere el inciso anterior será acreditable únicamente contra el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, según se trate, determinado conforme a la aplicación de los porcentajes a que se refiere la fracción I de este artículo.

III. El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo no se considerará como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.

IV. Se releva a los contribuyentes a que se refiere este artículo de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 24. Para los efectos del impuesto sobre la renta, se estará a lo siguiente:

I. Las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, siempre que dichos apoyos económicos o monetarios se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran zonas afectadas los municipios de los Estados afectados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que se listen en las declaratorias de desastre natural correspondientes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

II. Para los efectos de los artículos 82, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 138 de su Reglamento, se considera que

las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de dicha Ley, cumplen con el objeto social autorizado para estos efectos, cuando otorguen donativos a organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y cuyo objeto exclusivo sea realizar labores de rescate y reconstrucción en casos de desastres naturales, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos, se deberá cumplir con lo siguiente:

1. Contar con autorización vigente para recibir donativos al menos durante los 5 años previos al momento en que se realice la donación, y que durante ese periodo la autorización correspondiente no haya sido revocada o no renovada.

2. Haber obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior cuando menos de 5 millones de pesos.

3. Auditar sus estados financieros.

4. Presentar un informe respecto de los donativos que se otorguen a organizaciones o fideicomisos que no tengan el

carácter de donatarias autorizadas que se dediquen a realizar labores de rescate y reconstrucción ocasionados por desastres naturales.

5. No otorgar donativos a partidos políticos, sindicatos, instituciones religiosas o de gobierno.

6. Presentar un listado con el nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de las organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con la autorización para recibir donativos a las cuales se les otorgó el donativo.

b) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos, a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán cumplir con lo siguiente:

1. Estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

2. Comprobar que han efectuado operaciones de atención de desastres, emergencias o contingencias por lo menos durante 3 años anteriores a la fecha de recepción del donativo.

3. No haber sido donataria autorizada a la que se le haya

revocado o no renovado la autorización.

4. Ubicarse en alguno de los municipios o en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de las zonas afectadas por el desastre natural de que se trate.

5. Presentar un informe ante el Servicio de Administración Tributaria, en el que se detalle el uso y destino de los bienes o recursos recibidos, incluyendo una relación de los folios de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y la documentación con la que compruebe la realización de las operaciones que amparan dichos comprobantes.

6. Devolver los remanentes de los recursos recibidos no utilizados para el fin que fueron otorgados a la donataria autorizada.

7. Hacer pública la información de los donativos recibidos en su página de Internet o, en caso de no contar con una, en la página de la donataria autorizada.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de esta fracción.

Capítulo III

De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento

Artículo 25. Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.

La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 de marzo de 2020.

Artículo 26. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresividad.

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Los costos para las finanzas públicas de las facilidades

administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Artículo 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores lo siguiente:

A. El Presupuesto de Gastos Fiscales, a más tardar el 30 de junio de 2020, que comprenderá los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2021 en los siguientes términos:

I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el Erario Federal.

II. La metodología utilizada para realizar la estimación.

III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida.

IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso.

V. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales.

B. Un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, a más tardar el 30 de septiembre de 2020, en el que se deberá señalar, para cada una la siguiente información:

I. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de nacionales.

II. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de extranjeros.

III. Ingresos por donativos recibidos en especie de nacionales.

IV. Ingresos por donativos recibidos en especie de extranjeros.

V. Ingresos obtenidos por arrendamiento de bienes.

VI. Ingresos obtenidos por dividendos.

VII. Ingresos obtenidos por regalías.

VIII. Ingresos obtenidos por intereses devengados a favor y ganancia cambiaria.

IX. Otros ingresos.

X. Erogaciones efectuadas por sueldos, salarios y gastos relacionados.

XI. Erogaciones efectuadas por aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y jubilaciones por vejez.

XII. Erogaciones efectuadas por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

XIII. Gastos administrativos.

XIV. Gastos operativos.

XV. Monto total de percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos.

El reporte deberá incluir las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los

conceptos contenidos en los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en su Reglamento.

C. Para la generación del reporte a que se refiere el Apartado B de este artículo, la información se obtendrá de aquélla que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración de las personas morales con fines no lucrativos correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La información sobre los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos a que se refiere el Apartado B de este artículo, se obtendrá de los datos reportados a más tardar el 31 de julio de 2020, en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a que se refiere el artículo 82, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se entenderá por gastos administrativos y operativos lo siguiente:

I. Gastos administrativos: los relacionados con las remuneraciones al personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento y conservación, los impuestos y derechos federales o locales, así como las demás contribuciones y aportaciones que en términos de las disposiciones legales respectivas deba cubrir la donataria siempre que se efectúen

en relación directa con las oficinas o actividades administrativas, entre otros. No quedan comprendidos aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

II. Gastos operativos: aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

La información a que se refieren los Apartados B y C de este artículo, no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2o., fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Artículo 28. En el eje cicio fiscal de 2020, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente:

I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes.

II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.

III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización.

IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años. Se deberá entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de Diputados.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020, salvo lo dispuesto en el transitorio Séptimo, el cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto, mismo que será aplicable en el ejercicio fiscal de 2019 respecto de los recursos que las entidades federativas y municipios hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación en dicho ejercicio, correspondientes a ejercicios fiscales de 2017 y 2018.

Segundo. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se refiere el informe que, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha rendido el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2019.

Tercero. Para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se modifique la denominación de alguna dependencia o entidad o las existentes desaparezcan, se entenderá que los ingresos estimados para éstas en la presente Ley corresponderán a las dependencias o entidades cuyas denominaciones hayan cambiado o que absorban las facultades de aquéllas que desaparezcan, según corresponda.

Cuarto. Durante el ejercicio fiscal de 2020 el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013 continuará destinándose en los términos del citado precepto.

Quinto. Durante el ejercicio fiscal 2020 las referencias que en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, así como en los artículos 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos se entenderán hechas también al Servicio de Administración Tributaria.

Sexto. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales la información sobre los ingresos excedentes que, en su caso, se hayan generado con respecto al calendario de ingresos derivado de la Ley de Ingresos de la Federación a que se refiere el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En este reporte se presentará la

comparación de los ingresos propios de las entidades paraestatales bajo control presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado, así como del Gobierno Federal. En el caso de éstos últimos se presentará lo correspondiente a los ingresos provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Séptimo. Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido devengados y pagados en términos de los lineamientos que dicha dependencia emitirá para su operación a más tardar el último día hábil del mes de enero de 2020 y demás disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado. Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas, así como la atención de desastres naturales.

Para efectos de lo anterior, los aprovechamientos provenientes de los enteros que realicen las entidades federativas y municipios en términos del presente transitorio, respecto de ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor de las obligaciones de reintegro a la Tesorería de la Federación

establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras, siempre y cuando dichas disponibilidades hayan estado depositadas en cuentas bancarias de la entidad federativa y/o municipio.

Octavo. En el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria deberá publicar estudios sobre la evasión fiscal en México. En la elaboración de dichos estudios deberán participar instituciones académicas de prestigio en el país, instituciones académicas extranjeras, centros de investigación, organismos o instituciones nacionales o internacionales que se dediquen a la investigación o que sean especialistas en la materia. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio fiscal de 2020.

Noveno. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante el ejercicio fiscal 2020 y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requerirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de los pagos a que se refiere el párrafo anterior con cargo a las participaciones y transferencias federales, garantizando que las entidades federativas cuenten con solvencia para la atención de sus necesidades primordiales.

El Instituto, conforme a los modelos autorizados por su órgano de gobierno, podrá suscribir con las entidades federativas y, en su caso, los municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales que correspondan, los convenios para la regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos. El plazo máximo para cubrir los pagos derivados de dicha regularización será de 15 años. Asimismo, en adición a lo previsto en artículo 22 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el marco de la celebración de los referidos convenios, dicho Instituto deberá otorgar descuentos en los accesorios generados a las contribuciones adeudadas excepto los correspondientes a las cuotas y aportaciones que deban ser depositadas en las cuentas individuales de los trabajadores. Para tal efecto, deberán adecuar los convenios de incorporación voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para incluir en el mismo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 204 de dicha Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá aceptar como fuente de pago bienes inmuebles que se considerarán como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse a las cuentas individuales de los trabajadores. El

Instituto determinará si los bienes a los que se refiere este párrafo, resultan funcionales para el cumplimiento de su objeto, asegurándose que se encuentren libres de cualquier gravamen o proceso judicial y que el monto del adeudo no sea mayor al valor del avalúo efectuado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. En estos casos, la entidad federativa, municipio, dependencia o entidad del gobierno local, según corresponda, deberá cubrir los gravámenes y demás costos de la operación respectiva, los cuales no computarán para el cálculo del importe del pago.

Décimo. Las dependencias y entidades que coordinen la operación de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos, salvo los que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concentrarán en la Tesorería de la Federación, en términos de las disposiciones específicas que emita, los recursos públicos disponibles no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 en dichos vehículos, salvaguardando en todo momento los derechos de terceros.

Los aprovechamientos que se generen se destinarán a gasto de inversión así como a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Los programas de inversión deberán registrarse en la cartera de inversión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior no será obligatorio a los instrumentos jurídicos que por disposición expresa de ley los recursos públicos deban permanecer en el patrimonio o afectos a los mismos, así como a aquéllos en materia de pensiones y seguridad social, desastres naturales, infraestructura, estabilización de

ingresos incluyendo al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y aquéllos que sirvan como mecanismo de garantía o fuente de pago de obligaciones a cargo del Gobierno Federal o sus entidades paraestatales.

Dicha dependencia deberá señalar en los informes trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas, sobre el monto y el destino que dé a los recursos utilizados conforme a lo previsto en este párrafo.

Asimismo, las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, un informe de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos susceptibles de extinguirse en términos de las disposiciones aplicables, lo anterior a efecto de que durante el ejercicio fiscal 2020 se lleven a cabo los actos necesarios para la extinción de dichos vehículos.

Décimo Primero. Los contratos de fideicomiso y mandato públicos deberán prever que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá disponer en cualquier momento del patrimonio de éstos, asimismo, deberán establecer la obligación de las instituciones fiduciarias o mandatarias, de concentrar trimestralmente en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos, los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado para el cumplimiento de su objeto, salvo disposición de carácter general en contrario.

Las instituciones fiduciarias o mandatarias de fideicomisos, mandatos o

análogos públicos, deberán concentrar de forma trimestral en la Tesorería de la Federación los intereses generados por dichos instrumentos financieros, salvo aquéllos que impliquen el pago de gastos de operación de dichos vehículos, bajo la naturaleza de aprovechamientos, y se destinarán a gasto en salud o de inversión en infraestructura, lo anterior con excepción de aquellos vehículos financieros que por disposición expresa de ley, decreto o determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dichos recursos deban permanecer afectos a su patrimonio o destinados al objeto correspondiente. Para efectos de lo anterior, las dependencias coordinadoras de dichos vehículos deberán realizar los actos necesarios para modificar en el primer semestre del ejercicio fiscal los instrumentos jurídicos respectivos.

Décimo Segundo. Se instruye a la institución fiduciaria del fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria para que durante el mes de marzo del presente ejercicio, concentre en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos los recursos que integran el patrimonio fideicomitido a esa fecha a fin de destinarlos, mediante el mecanismo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a proyectos de inversión de infraestructura económica para la construcción, ampliación o rehabilitación de puertos, así como para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros que mejoren la conectividad entre los puertos.

Para efectos de lo anterior, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el citado fideicomiso no podrá asumir compromisos adicionales y

únicamente podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción, la cual deberá formalizarse a más tardar en el mes de junio del presente ejercicio fiscal. Las obligaciones asumidas que se tengan con terceros, serán cubiertas con cargo al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Décimo Tercero. Durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2020, la institución fiduciaria del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados deberá concentrar en la Tesorería de la Federación los recursos remanentes previstos en su patrirnonio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Los recursos correspo ıdientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Sec etaría de Hacienda y Crédito Público a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, o bien, para los destinos establecidos en el Séptimo transitorio de esta Ley.

Décimo Cuarto.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Comisión Federal de Electricidad podrá imp'ementar programas de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica de entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y organismos públicos prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos, a través de la celebración de convenios con cualquiera de las personas morales de la administración

pública antes mencionadas.

Los programas serán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 y se implementarán a través de la celebración de convenios a los que se refiere el párrafo anterior, se sujetarán, sin perjuicio de las demás disposiciones jurídicas aplicables, a las reglas de operación que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las cuales podrán considerar las características del solicitante, pudiéndose condonar el pago de hasta el 50 por ciento del adeudo, y que el resto de éste sea cubierto mediante parcialidades, y en caso de incumplimiento, los convenios permitirán que la Comisión Federal de Electricidad pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la compensación parcial a cargo de las partidas federales que le correspondan a las entidades federativas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y las disposiciones derivadas de éste, previendo que las entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México cuenten con solvencia para la atención de sus requerimientos de gasto público.

Décimo Quinto. Para efectos de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo de ocho meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos

importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil diecinueve.

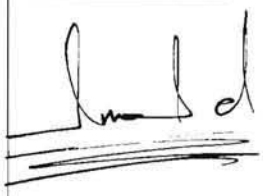
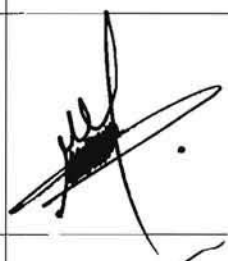
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

	SENADOR(A)	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
1.	Sen. Alejandro Armenta Mier **Presidente**			
2.	Sen. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado **Secretaria**			
3.	Sen. Minerva Hernández Ramos **Secretaria**			
4.	Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano Integrante			
5.	Sen. Ifigenia Martínez Hernández Integrante			
6.	Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán Integrante			
7.	Sen. José Narro Céspedes Integrante			
8.	Sen. José Luis Pech Várguez Integrante			
9.	Sen. Ernesto Pérez Astorga Integrante			

	SENADOR(A)	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
10.	Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez Integrante			
11.	Sen. Freyda Marybel Villegas Canché Integrante			
12.	Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz Integrante			
13.	Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado Integrante			
14.	Sen. Roberto Juan Moya Clemente Integrante			
15.	Sen. Claudia Edith Anaya Mota Integrante			
16.	Sen. Vanessa Rubio Márquez Integrante			
17.	Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda Integrante			
18.	Sen. Juan Manuel Fócil Pérez Integrante			
19.	Sen. Sasil De León Villard Integrante			

DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

	SENADOR(A)	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
1.	Sen. Ana Lilia Rivera Rivera **Presidenta**			
2.	Sen. José Erandi Bermúdez Méndez **Secretario**			
3.	Sen. Imelda Castro Castro **Secretaria**			
4.	Sen. María Merced González González Integrante			
5.	Sen. . . Félix Salgado Macedonio Integrante			
6.	Sen. Jesusa Rodríguez Ramírez Integrante			

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA

	SENADOR(A)	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
7.	Sen. Joel Molina Ramírez Integrante			
8.	Sen. Damián Zepeda Vidales Integrante			
9.	Sen. Dante Delgado Integrante			
10.	Sen. Nancy de la Sierra Arámburo Integrante			
11.	Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa Integrante			
12.	Sen. Mario Zamora Gastélum Integrante			

24-10-2019
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 59 votos en pro, 32 en contra y 5 abstenciones.
Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Diario de los Debates 24 de octubre de 2019.
Discusión y votación 24 de octubre de 2019.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 24 de Octubre de 2019

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

(Dictamen de primera lectura)

Los cuatro dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y disponibles en el monitor de sus escaños.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento del Senado, quedan de primera lectura.

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura de los cuatro dictámenes en referencia.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Con gusto, señora Presidenta. Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se dispense la segunda lectura de los cuatro dictámenes ya señalados. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la dispensa de la segunda lectura de los cuatro dictámenes, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se concede entonces el uso de la palabra al Senador Alejandro Armenta Mier, para presentar los cuatro dictámenes a nombre de la comisión de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por diez minutos.

El Senador Alejandro Armenta Mier: Con su permiso, señora Presidenta. Senadoras, Senadores. Amigos del Canal del Congreso, invitados especiales:

México tiene un gran potencial económico, somos la onceava economía a nivel global y la segunda de América Latina, ocupamos el sexto lugar en recibir turistas internacionales, somos el octavo productor de crudo en el mundo y somos el principal socio comercial de la economía más grande del mundo.

Por eso es que este año ha sido fundamental para romper el círculo vicioso de la corrupción, el saqueo y el abuso del poder.

El Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020 enfatiza el compromiso del gobierno de México de mantener la disciplina y la prudencia de la política fiscal con apego a los lineamientos de austeridad republicana que nos han demandado los mexicanos.

Es necesario contar con fundamentos macroeconómicos sólidos, ante un entorno económico internacional en el que prevalece la incertidumbre indudablemente.

En el paquete económico que recibimos, se consolida un presupuesto que termina con las inercias de las últimas décadas y el mal uso de los recursos públicos, estamos construyendo, sin lugar a duda, estamos construyendo un nuevo contexto tributario, el que gana más, paga más, el que gana menos paga menos, pero todos debemos pagar y no debe de haber privilegios para nadie, independientemente de su condición política o partidaria.

Recibimos el paquete económico, las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, Segunda; y de Hacienda y Crédito Público.

Estas cuatro disposiciones que integran la miscelánea fiscal se hicieron una serie de observaciones, debo decir puntualmente que seguramente se comentará que se quisieron hacer las cosas aceleradamente, no es cierto, del 8 de septiembre al 24 de octubre, al día de hoy han pasado 1.5 meses, 6.5 semanas, 46 días, un mil 104 horas y 66 mil 240 minutos, tiempo suficiente para analizar un tema que implica darle certeza al país y un claro mensaje a los mercados de que estamos haciendo las cosas en tiempo.

No se hacen las cosas al vapor, pero es necesario corregir el rumbo del país y lo estamos haciendo.

Entre las modificaciones a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, que la Colegisladora estimó pertinente aprobar, está la de otorgar el mismo tratamiento fiscal, a figuras que son tratadas como contribuyentes extranjeros y se regulan los ingresos de las entidades residentes en el extranjero y que sean controlados por residentes en México.

Se evita cualquier posible inconsistencia con la política fiscal internacional.

Otro de los cambios que se presentan es la implementación de un esquema que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales para las personas físicas que realicen actividades empresariales, que tiene que ver con vendedores independientes de productos al menudeo, por catálogos o similares.

También en materia de plataformas digitales se busca simplificar el cumplimiento de obligaciones fiscales y recaudar de manera eficiente el Impuesto Sobre la Renta y el IVA, por causa de prestación de servicios y en materia de estímulos fiscales se realizan simplificaciones administrativas a los destinados a la investigación y el desarrollo tecnológico y al deporte de alto rendimiento, también se aplica uno al cine y al deporte y se amplían los montos máximos por proyectos de inversión al arte, estimulando desde luego obras literarias nacionales originales.

Finalmente, en aras de incentivar la recaudación en los estados, se establece la posibilidad de que reciban incentivos del 100 por ciento de la recaudación neta del Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes.

Con respecto a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la segunda, hay modificaciones encaminadas al tratamiento aplicable al IVA en algunos servicios digitales proporcionados por residentes en el extranjero.

En la minuta se reconoce la importancia de las instituciones asistenciales o de beneficencia que tienen como objetivo beneficios a personas, sectores y regiones de escasos recursos.

Por lo que se propone la extensión del IVA, protegiendo los intereses altruistas y a la asistencia social de dichas instituciones.

De la misma forma con el propósito de mejorar la sistematización jurídica se considera conveniente incluir la Ley del IVA para facilitar que las personas morales que reciban servicios profesionales o de uso temporal de bienes de personas físicas, puedan adoptar por no emitir la constancia de retención respectiva.

Con respecto a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las modificaciones que se hicieron tienen que ver con la actualización de las cuotas en tabacos labrados y de la cuota en bebidas saborizadas en términos de la inflación en materia de combustibles automotrices se homologa el octanaje de gasolinas para armonizarlo con la norma emitida por la Comisión Reguladora de Energía, no hay gasolinazos, que quede claro, eso era en el pasado.

Se establece una mejor sistematización jurídica de las definiciones de combustibles automotrices, combustibles fósiles, tratamiento de mezclas, se homologan las cuotas en combustibles en términos de combustibles fósiles, enajenación de gasolinas y diésel en territorio nacional.

Se elimina la aplicación de la cuota a la enajenación e importación de cerveza, toda vez que resultaba obsoleto este esquema y con el fin de otorgar seguridad jurídica en el mecanismo de compensación de los saldos a favor del IEPS, considerando impuestos distintos en cada uno de los gravámenes aplicables a las categorías de los servicios y en el Código Fiscal de la Federación, la Colegisladora incorporó medidas de control, como las siguientes:

Primero, como medida preventiva se propone que el SAT tenga atribuciones para impedir que haya contribuyentes con una firma vigente sin que hayan acreditado plenamente sus datos de identidad, domicilio y situación fiscal, para evitar poner en riesgo la existencia de las empresas al dejar sin efecto los certificados de sellos digitales, esto es muy importante, la Colegisladora establece un tratamiento específico para la restricción temporal de los certificados de sello digital, para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, cuando el contribuyente incurra en determinadas conductas.

Para evitar que los contribuyentes continúen señalando datos de contacto incorrectos o inexistentes, se establece la obligación de los contribuyentes de habilitar su buzón tributario y de registrar medios de contacto válidos.

También se establecen obligaciones de las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo.

De la misma forma, se establece una norma general anti-abuso para México, que contenga dos elementos: uno, que la operación del contribuyente no tenga una razón de negocios; y dos, cuanto esto genere un beneficio fiscal.

Finalmente, en esta disposición se establece un régimen de revelación de esquemas reportables en México, con el fin que las autoridades fiscales puedan obtener información respecto al esquema de temas que han identificado como áreas de riesgo.

Con respecto a la minuta de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se establecen los siguientes aspectos: esta busca romper el círculo vicioso en el que se encuentra atrapado Petróleos de México, consistente con la caída de la producción, la reducción de los ingresos, la limitada generación del flujo de efectivo y la disminución de la inversión.

Con este propósito se busca la mejora en el sistema jurídico y brindar mayor certeza con respecto a los pagos provisionales que se hacen mensualmente, y los que corresponden a los derechos de extracción de hidrocarburos.

En la minuta con respecto a la Ley Federal de Derechos, en esta, con el fin de llevar a cabo una constante actualización del marco normativo fiscal en el cobro de derechos por la prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio de la Federación, la minuta, sujeta a dictamen, plantea homologar diversos cobros y conceptos de la Ley Federal de Derechos de las Disposiciones Sectoriales, que regula los servicios que prestan las dependencias de la Administración Pública Federal.

Con respecto a la Ley de Ingresos de la Federación, del Ejercicio Fiscal 2020, esta minuta contiene una serie de medidas administrativas orientadas a mejorar la eficiencia tributaria y reducir todos los espacios que permiten la elusión y la evasión fiscal.

La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 no contempla nuevos impuestos ni aumento a los vigentes, con la finalidad de cumplir el compromiso presidencial y de beneficiar a los mexicanos.

Para efecto de las estimaciones de finanzas públicas, se consideró oportuno utilizar un crecimiento puntual del Producto Interno Bruto para el 2020 del 2 por ciento, y un tipo de cambio con respecto al dólar estadounidense de 20 pesos por dólar, y la plataforma de producción del petróleo crudo en mil 951 barriles diarios, con la estimación del precio ponderado, esto en millones, desde luego, acumulados del barril de petróleo crudo de exportación a 49 dólares por barril.

La Colegisladora consideró conveniente realizar ajustes a la carátula de ingresos, mismos que fueron sometidos a consideración de las comisiones correspondientes.

También la Colegisladora consideró adecuado autorizar a Pemex y a sus Empresas Productivas Subsidiarias un monto de endeudamiento neto de hasta 10 mil millones de pesos y por endeudamiento neto externo hasta mil 250 millones de dólares, como garantía.

En materia de estímulos fiscales se da continuidad a los estímulos fiscales, a la adquisición e importación para consumo final del diésel, del biodiesel y sus mezclas, a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público, privado, de carga o pasaje, así como el turístico, a las personas morales de derecho

agrario constituidas solo por ejidatarios y comuneros, ejidos y comunidades, a través de un estímulo fiscal para preservar la cadena del libro y fortalecer a las pequeñas y medianas librerías.

La minuta prevé apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que posibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas, además de establecer que el ISSSTE pueda suscribir con las entidades federativas, los municipios, las dependencias y las entidades de los gobiernos locales, los convenios de regularización de los adeudos que se tengan.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, los últimos días, del 8 de septiembre al 24 de octubre, ha habido una discusión amplia tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores.

Durante la última semana el coordinador, Senador Ricardo Monreal, del grupo parlamentario de Morena, la Comisión, los Senadores y Senadoras integrantes de las dos comisiones, hemos venido escuchando voces que plantean una serie de observaciones, de necesidades y de sentimientos respecto a la importancia del presupuesto.

Escuchamos a los sectores productivos del país, por lo que hemos construido una serie de reservas para atender la problemática:

1. La regularización de los autos “chocolate”.

2. La responsabilidad solidaria.

3. Los derechos sobre aguas nacionales en el sector agrícola.

4. La retención a plataformas digitales.

5. La disponibilidad de recursos a entidades federativas y municipios.

6. Ajustes en la carátula de ingresos.

7. Convenios con las entidades federativas por adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

8. Cobro de derechos a no residentes y servicios migratorios. y

9. Flexibilizar el esquema para apoyos y ejidos en comunidades agrícolas.

En Morena decimos, sí al diálogo; sí a apoyar a los sectores productivos; sí a mejorar la recaudación; y sí a una mayor justicia tributaria.

Tenemos la mayoría para lograrlo y los que le vamos a dar respuesta a México aquí estamos, con los votos que vamos a emitir aprobando esta ley que le va a dar certeza financiera a nuestro país, a los estados y a los municipios.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Armenta.

Tiene la palabra la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, para la presentación de los cuatro dictámenes también.

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Con permiso de la Mesa Directiva. Honorable Asamblea. Pueblo de México.

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, le fueron turnadas para estudio y elaboración de dictamen las cuatro minutas que integran el paquete económico para el año 2020, remitidas por la Cámara de Diputados, para efectos constitucionales.

Este compendio legislativo se integra por los siguientes proyectos: uno, proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2020, la cual tiene como objetos esenciales los siguientes:

a) Establecer la estimación de los ingresos para el año que se presupuesta. Obtendrán, el gobierno federal y los organismos federales, así como los derivados de financiamiento requeridos para el gasto público del ejercicio fiscal 2020.

b) Establecer los montos de endeudamiento neto del gobierno federal y de la Ciudad de México, el margen de intermediación financiera, los ingresos derivados de los proyectos de inversión productiva de largo plazo, así como el monto de los nuevos proyectos a contratar por entidad y tipo de inversión.

c) Fijar las disposiciones generales, los regímenes específicos y estímulos en materia fiscal, aplicables al Ejercicio Fiscal 2020, así como las disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se deberán cumplir para la entrega oportuna de diversos informes al Congreso de la Unión.

Segundo. El proyecto que integra el paquete económico es el que corresponde al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.

Esta minuta tiene por objeto modificar las leyes de los impuestos sobre la Renta, el Valor Agregado, en especial sobre producción y servicios, así como el Código Fiscal de la Federación.

Tercero. En tercer lugar, se encuentra el proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

El objeto de este instrumento consiste, entre otros aspectos, en realizar adecuaciones a los cobros por la prestación de los servicios que proporcionan las distintas dependencias de la Administración Pública Federal.

Asimismo, plantea homologar diversos cobros y conceptos de la Ley Federal de Derechos, con las disposiciones sectoriales que regulan los servicios que prestan las dependencias de la Administración Pública Federal.

Cuarto. Finalmente, se somete a consideración el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, cuyo objeto es realizar diversos ajustes, que por una parte contribuyan a romper el círculo vicioso en el que se encuentra atrapado Petróleos Mexicanos, como resultado de diversos problemas estructurales y otra.

Mejorar la sistemática jurídica de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como brindar la certeza jurídica a los asignatarios.

Los proyectos descritos fueron sometidos a la consideración de esta Soberanía en su carácter de Cámara Revisora, por lo que tras el análisis de fondo de las minutas y valorando que en ellas se integran propuestas surgidas en un ejercicio de Parlamento Abierto celebrado en el seno de la Cámara de Diputados, en el que la participación de funcionarios públicos especialistas, académicos, representantes de la sociedad y empresarios fue considerada.

Las comisiones dictaminadoras hemos estimado procedente dictaminar en sentido positivo. En este tenor dichos proyectos se someten a análisis y valoración de este Pleno.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Ana Lilia Rivera.

Vamos a iniciar con los posicionamientos por grupo parlamentario, solo les quiero rogar un poco de silencio a los visitantes, a los que están presentes aquí en el Pleno, ya que no se está permitiendo que las Senadoras y los Senadores puedan oír a los oradores.

Tiene la palabra el Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del PRD.

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez: Buenas tardes. Buenas tardes, compañeras Senadoras y Senadores, mucho gusto. Con su permiso, señora Presidenta.

Vamos adelante.

El posicionamiento del PRD ante esta Miscelánea Fiscal del 2020, parte de una base responsable, los ciudadanos mexicanos estamos obligados a pagar impuestos, porque con ello, con esos impuestos es que el gobierno puede sostener el gasto corriente y sostener las inversiones que se requieren hacer. Estos impuestos son, por cierto, no todo ese dinero de los impuestos se los roban los gobiernos, quiero dejarlo muy claro, porque se hace muy fácil descalificar a otros gobiernos y creo que debemos ser más responsables también todos.

Porque, por ejemplo, de todos los impuestos que capta nuestro país, de ahí se pagan a todos los maestros, de ahí se pagan las escuelas, se pagan los salones de clases, de ahí se pagan los hospitales, las medicinas, los doctores, enfermeras, carreteras, hospitales, palacios de gobierno, salarios, bonos, etcétera, de ese dinero.

Así que hay una parte que puede haber de corrupción, pero la mayoría se está aplicando en el beneficio del pueblo de México.

Pagar impuestos es una obligación y también tenemos el derecho como ciudadanos de exigir buenos resultados y buenos servicios. Así que no se molesten los que hoy están en el gobierno cuando el pueblo les exija mejores resultados, porque esta es parte de la obligación y derechos que tenemos como ciudadanos.

Quiero comentarles que las disposiciones impulsadas por el titular del Ejecutivo, más extrañamente una serie de reservas que han pasado en la Cámara de Diputados de última hora, que pareciera que los Diputados ayudan mucho a Hacienda que les cobre más impuestos a los ciudadanos, algo que no se había visto en mucho tiempo.

Esta Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal son una clara muestra de un doble discurso que maneja este gobierno. Menciono lo anterior, porque aunque el gobierno promete beneficios y cambios significativos para los más pobres, no es congruente con sus actos, ya que las propuestas que se plantean no sostienen esa postura, pues ahora se quieren cobrar mayores impuestos a las personas que trabajan por Internet, aquellas que utilizan sus propios medios para obtener un ingreso y subsistir, como son los choferes de Uber, los de Cabify y muchos más, o aquellos que rentan un cuarto en su casa o que rentan su casa, a algunas viudas o a algunas personas que rentan su departamento, su casa de mayor valor para irse a vivir a una de menor valor y poder pagar sus gastos.

A todas estas personas, ahora, se está planteando cobrarles impuestos, a todos los que utilicen plataformas digitales para rentar o para dar un servicio a la gente.

También, y esto es algo indebido, ilegal, se están planteando mayores retenciones de los ingresos a los que tenemos ahorros en los bancos y que somos formales.

¿A qué me refiero? Que se está aumentando el impuesto al capital, a los saldos que tengamos en el banco, cuando se supone que el capital que tenemos ya pagó Impuesto Sobre la Renta, ya cumplimos con nuestras obligaciones y se tendría que cobrar, en todo caso, el impuesto sobre el interés que esté ganando ese dinero.

Se siente, y con todo el debido respeto y corrección les digo, se siente un “terrorismo fiscal” para los empresarios de este país, que son los que generan la mayor parte de la riqueza y son los que más contribuyen en términos fiscales para que este país pueda operar.

Atrás quedó, recuerdo cuando se aprobó aquí la Ley de la Buena Fe, donde íbamos a confiar en el ciudadano plenamente, que ahora sí el gobierno estaba cambiando. Y ahora resulta que todos los que tienen una actividad empresarial chica, mediana o grande todos son ya prácticamente tratados como delincuentes. Esto obviamente va a generar problemas para la inversión y para el pago de impuestos.

Se estaba planteando y al parecer ya lo van a retirar, mayores cobros por el uso del agua a la agroindustria.

Miren, con todo respeto, ya no se está apoyando a la agroindustria con dinero público, y ahora todavía le queríamos subir el costo al agua, pues esto es un contrasentido.

¿Cómo va a crecer la producción si le estamos dejando de apoyar y además cobrando más impuestos?

Hemos propuesto también que se deje de dar dinero público al deporte privado y además homologar, estas son propuestas del PRD, y homologar el impuesto fronterizo al sur del país para reactivar su economía ante el incremento migratorio que estamos recibiendo de Centroamérica.

Dicho lo anterior y, bueno, estas propuestas no han sido tomadas en cuenta, dicho lo anterior les pregunto: ¿Dónde está el cambio que prometen?

O mejor aún, ¿cómo piensan revertir la dura situación económica mundial y la particular de nuestro país que está empezando a manifestar una falta de fuerza para crecer en su economía? Y obviamente esto genere problemas para la generación de empleos y de prestaciones sociales.

En particular el día de hoy quiero señalar tres puntos concretos con los que estamos en contra y que, tanto la miscelánea como la Ley de Ingresos, actualmente, contienen.

El primer punto es que consideramos que la reforma del Código Fiscal es excesiva, porque en su afán de querer luchar contra las empresas factureras, daña a los contribuyentes también.

El nuevo artículo 5 A le dará facultad a la autoridad para reclasificar o declarar inexistentes actos jurídicos con una arbitrariedad total a criterios de los funcionarios públicos. Eso no es correcto y generará problemas más adelante.

Estamos a favor de castigar a los que emiten facturas falsas; sin embargo, estamos rotundamente en contra de que las empresas ahora sean supervisores y tengan que verificar por cuenta propia si las facturas que adquieren son falsas o no, puesto que eso no es su responsabilidad, máxime que ya hoy Hacienda es quien da el permiso para la facturación y, si no te da el permiso, no puedes facturar. Así que la responsabilidad tiene que ser del gobierno y no del contribuyente.

Por eso, esta medida es injusta y poco clara, pues no brinda seguridad ni certeza jurídica para todos los que pagamos impuestos.

Asimismo, hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a respetar la tesis que diversos tribunales colegiados han realizado en materia del derecho al mínimo vital. Este mínimo vital es el ingreso mínimo que debe tener una familia para poder sacar sus gastos y tener un nivel de bienestar también mínimo.

Las medidas que están creando un nuevo capítulo a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para las plataformas digitales Uber, Didi, SinDelantal, Airbnb, Netflix, etcétera, ahora increíblemente les van a cobrar a las personas que ganen desde mil 500 pesos en adelante.

¿Mil 500 pesos qué es de ingreso al mes? Nada, pero ya les vamos a gravar con impuestos.

Se generará un efecto nocivo para las personas físicas, que son las que menos tienen.

Esto quiere decir que el impuesto recaerá directamente, de manera discrecional, sobre los ciudadanos que trabajan en estas plataformas como choferes de Uber, de Cabify, Didi, etcétera; personas que rentan su casa a través de plataformas como Airbnb y que es su único ingreso de subsistencia; o los repartidores de comida que vemos en bicicletas, en motos, ahora también van a pagar impuestos.

Y, en contrapartida, no gozan de ninguna prestación laboral ni seguridad social, ahora también tendrán que pagar impuestos.

Sube la gasolina, la paga el ciudadano; suben los impuestos, los paga el ciudadano; bajan la deducción de impuestos a pequeñas y medianas empresas y eso aumenta el costo para las empresas, así que lo va a pagar el ciudadano.

Lo que están haciendo es que vaya a haber menos consumo, menos venta más adelante.

En consecuencia, lo que proponemos es que se respete el derecho a una vida digna y Hacienda exente de impuestos a las personas físicas que están incluidas en este capítulo, que reciben un ingreso menor a la Línea de Bienestar.

La propuesta del Coneval, según un estudio profundo que han hecho, esta Línea del Bienestar equivale a 12 mil 500 pesos.

Por último, la postura del PRD será velar por el bien del país, pero aún con mayor ahínco, por el bien de los más desaventajados.

Por ende, proponemos la introducción de tasas diferenciadas en la frontera sur de México, para aliviar las fuertes presiones que están habiendo; así como lo han hecho en el norte, que también lo hagan en el sur.

Particularmente los municipios que tienen frontera con Guatemala y Belice, debido al drástico incremento del flujo migratorio en los últimos meses, y que está tendiendo a considerar a México como un país de destino y no de tránsito, como históricamente ha sucedido.

En esta medida, buscamos homologar el Decreto de las exenciones fiscales, publicado por el Ejecutivo Federal en 2018, para que los impuestos queden de la siguiente forma:

Que ahora se reduzca el 8 por ciento al Impuesto al Valor Agregado en la frontera sur y se genere un crédito fiscal por el equivalente a la tercera parte del Impuesto Sobre la Renta.

Consideramos que estas observaciones y modificaciones propuestas cumplen con criterios que promoverán una mayor confianza en la inversión privada, que se traducirá en un mayor crecimiento económico y que van en la línea de una justicia social que México tanto anhela.

Esto es cuanto, compañeras y compañeros.

Y esperamos que podamos hacer las modificaciones, que no hagamos oídos sordos a las propuestas buenas que tienen muchos compañeros Senadoras y Senadores, porque es así como podemos realmente ayudar a que este país salga adelante.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Juan Manuel Fócil Pérez.

Tiene la palabra la Senadora Sasil De León Villar, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.

La Senadora Sasil De León Villard: Buenas tardes. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Nuestro país enfrenta una serie de retos a nivel mundial, algunos de éstos ya han empezado a presentarse y podrían tener efectos adversos sobre el desempeño económico de nuestro país en el corto, mediano y largo plazo.

En este sentido, es necesario reconocer el paquete económico para el ejercicio fiscal 2020 que hoy se somete a esta Asamblea, que está diseñado sobre una base prudente de la evolución de nuestro marco macroeconómico.

En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha previsto una serie de factores que permiten blindar la economía mexicana a partir de la consideración de una serie de principios, para que las cuatro minutas que hoy se presentan, reflejen el balance de riesgos y oportunidades que tiene nuestra economía en la actualidad.

Algunos aspectos relevantes de este paquete que quiero mencionar son los siguientes:

Este paquete económico plantea la disciplina de las finanzas públicas con balances que respeten el equilibrio presupuestario; una estructura de una deuda pública que minimice los riesgos de alcances a largo plazo; una regulación prudente y supervisión del sistema financiero para mantener su estabilidad; acuerdos comerciales que permitan aprovechar ventajas competitivas de la economía mexicana; esquemas reportables, lo que permitirá al fisco generar una mayor recaudación sin incrementar el número de impuestos actuales, compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador que se mantiene firme; fortalecer la recaudación fiscal, para lograr un crecimiento incluyente que se refleje en la calidad de vida y bienestar de todas y todos los mexicanos; se va a privilegiar el gasto social, la seguridad y el fortalecimiento del sector energético.

En ese sentido, en el grupo parlamentario de Encuentro Social estamos convencidas de que el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, permite realizar los ajustes estructurales necesarios para que Pemex avance y camine bien.

Es necesario, como bien lo señala la minuta, mejorar la sistemática jurídica de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como brindar certeza jurídica a los asignatarios.

Por ello, es indispensable reformar varias disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos con la finalidad de liberar recursos a las empresas para la inversión, exploración y extracción, lo cual le permitirá reponer sus reservas e impulsar su producción de petróleo.

Asimismo, la aplicación gradual de la medida citada permitirá generar los espacios fiscales para mantener finanzas públicas sanas.

Otras dos modificaciones importantes que queremos mencionar, que fueron analizadas y aprobadas en las Comisiones Unidas para este dictamen, son el texto vigente de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. No prevé de manera expresa la época de pago mensual de derecho de exploración de hidrocarburos, por lo que se busca que quede muy claro, específicamente claro en esta ley, lo cual brindará seguridad jurídica a los asignatarios al aclarar el momento en el que deberán cumplir con sus obligaciones fiscales.

En cuanto a la Ley Federal de Derechos, se presentó una propuesta de reforma al artículo 223, de la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de establecer el pago de derechos por uso de agua al sector agrícola y pecuario; sin embargo, esta disposición afecta directamente a diversas organizaciones campesinas y pecuarias, por lo que no aprobamos nada que lastime y perjudique a los productores, que representan un importante producción de alimentos para nuestro país, además de que el agua es un derecho fundamental de vida con el que no se debe lucrar.

Otro de los objetivos es encauzar el destino de los recursos obtenidos de la recaudación por los derechos sobre minería previsto en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos, por lo que es plausible aplicarlos en acciones de mejora de centros educativos y servicios de salud.

En cuanto a la Miscelánea Fiscal, sí se busca aumentar los ingresos presupuestarios para el siguiente año, pero sin olvidar la justicia social y la redistribución de la riqueza con fines de política fiscal.

Es indispensable fortalecer los ingresos públicos, simplificar el marco tributario y garantizar el cumplimiento de pago de impuestos.

De las medidas incluidas para fortalecer la recaudación, son distintas modificaciones a la Ley del ISR, de IVA y del IEPS, como el pago de ISR por ingresos de arrendamiento, retención del IVA a la subcontratación laboral, economía digital que incluirá a la Ley de ISR y del IVA un capítulo que establece el tratamiento aplicable a los ingresos por enajenación de bienes o las prestaciones de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas que obtengan personas físicas, de la cual el grupo parlamentario de Encuentro Social vamos a presentar una reserva.

La facilidad administrativa para vendedores independientes en cuanto a las ventas por catálogos eliminó la propuesta el Ejecutivo y se faculta al SAT para que emita reglas que faciliten el pago de impuestos.

Cláusula anti-abuso para evitar actos jurídicos que configuraran a operaciones con el principal objetivo de encontrarse en una posición fiscal más favorable que otros que realizan la misma operación económica y caer en la evasión fiscal.

Respecto a la compensación universal en la Ley del IVA, que causó abuso y evasión fiscal, se limitará la recuperación de los saldos a favor únicamente mediante su acreditamiento contra el impuesto a cargo de los meses posteriores o mediante la solicitud de devolución, la actualización por inflación del IEPS, tabaco, bebidas saborizadas, etcétera.

Finalmente, la ley del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2020, a este respecto son tres objetivos esenciales en esta ley:

Primero, la estimación de los ingresos para el ejercicio 2020 se presupuesta para obtener por parte del Gobierno de México.

Segundo, los montos de endeudamiento neto y el margen de intermediación financiera del gobierno federal.

Y terceros, las disposiciones generales, los regímenes específicos y el estímulo en materia fiscal, por lo que hace a la Ley de Ingresos de la Federación 2020 fortalecer los ingresos públicos, se mantiene el compromiso de este gobierno de no crear impuestos o aumentarlos en términos reales.

También con esta iniciativa de Ley de Ingresos se prevé fortalecer la recaudación de impuestos a través de medidas administrativas orientadas al combate a la evasión y elusión de impuestos; es decir, se trata de dotar una mayor equidad del sistema impositivo asegurando que cada contribuyente participe con la carga fiscal que le corresponde.

Se busca la estabilidad macroeconómica, manejo responsable a las finanzas públicas, fortalecer la recaudación fiscal para lograr un crecimiento influyente que se refleje en la calidad de vida de bienestar de todas las mexicanas y los mexicanos.

Finalmente, quisiera destacar que el paquete económico 2020 tiene un sello distintivo: estabilidad macroeconómica y certidumbre económica; disciplina fiscal y estabilidad de la deuda; austeridad republicana y eficiencia del gasto y fortalecimiento de esquemas recaudatorios.

Para decirlo más claramente, el paquete económico tiene los pilares de austeridad, honestidad y combate a la corrupción, por un lado, y, por otro, los tres objetivos muy sólidos: bienestar social, empleo y desarrollo, privilegiar los recursos asignados para la seguridad y la reactivación de Pemex.

Hago extensa una felicitación y mi reconocimiento a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de la cual formo parte, y de Estudios Legislativos, Segunda, por el arduo trabajo de la discusión, aportación e ideas que fortalecen nuestro trabajo en México.

La Senadoras del grupo parlamentario de Encuentro Social votaremos a favor del presente dictamen y presentaremos también una reserva.

El compromiso es que cada peso que ingrese al presupuesto público, y que se ha gastado, se destine a quienes más lo necesitan, sin corrupción y con justicia.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora de León Villard.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Nancy De la Sierra Arámburo, del grupo parlamentario del PT.

La Senadora Nancy De la Sierra Arámburo: Gracias, señora Presidenta. Mesa Directiva. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Senadores.

La decisión que hoy tomaremos debe reflejar el compromiso que tenemos con las y los ciudadanos que nos dan la oportunidad de estar aquí en este recinto.

El paquete económico que está en nuestras manos representa la confianza de las y los mexicanos que han depositado en los gobernantes para transformar nuestro país en un lugar digno para ellos.

Cuando la ciudadanía paga impuestos espera que nosotros destinemos este recurso a las necesidades más importantes y trascendentales de nuestro país, esperan que ante cualquier interés político o económico pensemos en ellos y en sus familias.

Es por eso que hoy a nombre del grupo de trabajo y el grupo parlamentario del Partido del Trabajo reconocemos que este paquete económico refleja el apoyo a los sectores más vulnerables y desprotegidos.

Destinar más recursos a la salud, a la educación, a la migración, a la justicia es estar bien con los mexicanos.

Sin embargo, también debo señalar, que si bien el grupo parlamentario del Partido del Trabajo cree y confía en el proyecto social del Presidente Andrés Manuel López Obrador, también se solidariza con los municipios, las entidades federativas, el sector agropecuario y los mexicanos que necesitan atención en materia de salud y educación.

En este sentido, y desde el 8 de septiembre que recibimos este paquete lo analizamos a conciencia, recibimos los dictámenes desde ayer, y vemos que hay algunas medidas que vulneran profundamente a estos sectores.

Por lo tanto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentará varias reservas en relación a la regularización de autos chocolates, llamados así, coloquialmente.

Por supuesto, los impuestos que se generan con la llegada de visitantes y el uso de los aeropuertos.

Pero particularmente vamos a reservar tres, que quiero destacar en esta tribuna:

No podemos eliminar lo relativo al Fondo Minero, estamos desprotegiendo a los municipios más pobres de nuestro país.

Tampoco podemos permitir que el Paquete Económico 2020 considere el cobro del pago de derechos por el uso del agua de riego para el sector agropecuario, contenida en esta Ley Federal de Derechos.

Si queremos ser un país sustentable, si queremos avanzar en la agenda y en los objetivos de desarrollo, si queremos mejorar y ser autosuficientes en materia alimentaria es prioridad apoyar al campo.

Y la última versa sobre los adeudos del IMSS a cargo de las entidades federativas.

Estas reservas propondrán no para contravenir a la cuarta transformación, sino para abonar a ella, para que nadie se quede atrás, ni los municipios, ni los estados, ni los sectores tan importantes como el sector campesino.

En nombre de nuestro grupo estamos a favor de este Paquete 2020 por el bien de nuestro país, y estoy segura de que el Senado de la República, consciente de la responsabilidad que tiene para aprobarlo, hará las adecuaciones que requiere.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Nancy De la Sierra.

Tiene la palabra el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del grupo parlamentario del PVEM.

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su permiso.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Un momento, perdón.

Nada más antes de continuar, creo que ya se movieron, le damos de todas maneras la bienvenida a estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad La Salle Noroeste de ciudad Obregón, Sonora.

Gracias.

¡Bienvenidas y bienvenidos!

Adelante, Senador.

El Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores.

Para mí es un honor a nombre de mi partido, del Partido Verde Ecologista de México, venir a presentar a esta máxima tribuna las valoraciones y ponderaciones que hemos hecho acerca del proyecto de dictamen de las minutas que contienen las leyes que conforman el Paquete Económico 2020.

Se ha abierto evidentemente un gran debate en la opinión pública acerca de las decisiones que ha tomado el gobierno federal en materia hacendaria, fiscal y económica, algo que desde nuestro punto de vista es absolutamente normal debido a los cambios que se están realizando, a los paradigmas que se están rompiendo, a las nuevas visiones y formas de gobernanza.

En consecuencia, consideramos que el Paquete Económico 2020 es congruente y acorde también con los ejes y principios del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 que se basa precisamente en tener un gobierno que sea austero, pero que también busca la eficiencia del gasto y una redistribución del ingreso más justa y equitativa.

En este sentido, en el Partido Verde, creemos que la política de ingresos que se plantea en este paquete que contiene la llamada Miscelánea Fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la Ley de Ingresos de la Federación, es consecuente con nuestras expectativas de crecimiento, pero sobre todo prudente respecto al entorno internacional que vaticina escenarios complejos de desaceleración y recesión en países de gran influencia económica.

Y como ejemplo tenemos lo que acaba de ocurrir en este par de semanas con Alemania, una de las principales economías de Europa central que también ya está entrando en una recesión.

Afortunadamente en este año se ha iniciado la implementación de acciones que eliminan atisbos de subestimación y, por el contrario, aprovechan la normativa existente que impide el uso discrecional de recursos mediante el principio que ya he mencionado de austeridad y se apoya en una amplia política de combate a la corrupción, lo que permitirá un uso eficiente del gasto público que a la postre también creemos y estamos seguros se va a traducir en crecimiento y en bienestar.

Reconocemos el trabajo de la Colegisladora al realizar un ejercicio parlamentario abierto que permitió realizar importantes modificaciones a la propuesta que había enviado el Presidente de la República, que representó ingresos adicionales a los previstos en la iniciativa por poco más de 6 mil 981 millones de pesos, por lo que los ingresos estimados en el Ejercicio Fiscal del año 2020 serán de 6 billones 103 mil 317.4 millones de pesos que se traducirán en mayores programas sociales, salud, inversión pública y educación.

Con esto, compañeros, se mantiene la meta del superávit primario de 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto para no generar más deuda y mantener una mejor disciplina fiscal.

También coincidimos con las reservas que también han sido aprobadas por los legisladores que otorgan un estímulo fiscal a las pequeñas y medianas librerías del país y la reserva que destina recursos de los aprovechamientos a la atención de desastres naturales.

Respecto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta quisiéramos nosotros reconocer y traer a relieve la actualización que se plantea al concepto de establecimiento permanente por virtud del cual se va a inhibir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a lugares en donde no corresponde.

En nuestra bancada reconocemos también la medida de otorgar una reducción del 30 por ciento del Impuesto Sobre la Renta para los contribuyentes conformados como ejidos o comunidades que realizan actividades del sector primario, pues sabemos que se apoyará a las empresas sociales y campesinas que juegan un papel fundamental en las economías locales y el cuidado al medio ambiente.

Con esto se está dando un paso más para eliminar, para acabar con una sentencia que tienen las zonas más marginadas de nuestro país de vivir y nacer y morir en pobreza y que también ven condenados sus hijos y los hijos de sus hijos a vivir esa situación.

En mi partido, sin embargo, consideramos que es menester realizar un análisis muy serio acerca de lo que ya se ha comentado aquí de los autos que se consideraban chocolates, porque consideramos que si no realizamos un análisis serio y responsable vamos a afectar a una industria que es sumamente importante para la economía del país, una industria que por cuestiones externas ya se ha visto afectada, pero también recordemos que con

el Tratado México-Estados Unidos y Canadá también sufrió algunas complicaciones, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos en este tema.

Otra situación es la que comentaba la Senadora Nancy, y que también nosotros coincidimos que debe de ser analizada con sumo cuidado, y es la relativa a los derechos que tendrían que pagar o al cobro que se realizaría a los extranjeros que ingresen a nuestro país y también a los connacionales que pretendan salir de él, algo que podría afectar también de manera negativa a la industria turística de nuestro país que lo que requiere en este momento es de mayor apoyo.

Por ello, vamos a presentar en unos momentos más con mis compañeras que se encuentran aquí, algunas reservas relativas a estos temas.

También con relación a la Ley del Impuesto al Valor Agregado consideramos de suma importancia las acciones que se están tomando en este Paquete Económico, pues era necesario ya gravar a todos aquellos que realizan a través de Internet y de plataformas digitales acciones que también son con fines de lucro y que no estaban pagándose los impuestos correspondientes, todas las personas morales, todas las personas físicas, tenemos la obligación conforme al artículo 31 constitucional de contribuir al gasto público y por eso esta era una medida que era necesario ya implementar.

De manera general, en el Partido Verde respaldamos la política de ingresos del gobierno que encabeza el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y reconocemos el trabajo que realizaron tanto la Colegisladora como las comisiones que presentan el dictamen que estamos discutiendo en este momento.

Sin duda, esta obligación constitucional nos compromete y nos involucra en la enorme responsabilidad de la Hacienda Pública y el Ejercicio del Gasto. Por lo que estamos ciertos que este Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal del año 2020 cumple con las expectativas de crecimiento porque contará con los ingresos suficientes para los proyectos y objetivos de gasto para el beneficio y desarrollo de los seres que más queremos nosotros, nuestros amigos, hermanos mexicanos.

Agradezco mucho su atención.

Y esperemos que este paquete económico sea lo más benéfico para nuestro país y para ello tenemos que realizar los Acuerdos que sean necesarios.

Muchas gracias.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador Zamora Guzmán.

Tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos, para hacer el posicionamiento del grupo de Movimiento Ciudadano, el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

El Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda: Muchas gracias, señora Presidenta.

Como lo manifestamos en la comisión, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del Paquete, y a continuación explicaremos las reservas que vamos a plantear.

Desgraciadamente en Cámara de Diputados algunos Diputados de Morena salieron muy creativos, unos más improvisados que la detención de Chapito junior, y sin estudios, sin mesas de trabajo plantearon más cargas de las que de por sí ya había en el paquete.

Por lo pronto uno propuso aumento a los derechos del campo, 3 mil 400 pesos por hectárea, por trimestre, lo que iba a ser el tiro de gracia al campo, afortunadamente desde el martes aquí en el Senado, Movimiento Ciudadano se posesionó fuerte y claro para decir que no íbamos a permitir por ningún motivo que se afectara a nuestros campesinos, a los agricultores, a los ganaderos, platiqué con algunos de Nuevo León, me decían que a duras penas una hectárea de sorgo de maíz les da 3 mil, 4 mil pesos y aquí Morena quería cobrarles 3 mil 400 por hectárea, por supuesto que no lo íbamos a permitir.

Pero luego hubo otro creativo que de manera incongruente planteó legalizar 18 millones de autos chocolates, hace un mes con la Ley Anti-facturas, el contrabando quedó plasmado como delincuencia organizada y a un mes de esa iniciativa, hoy estamos planteando premiar el contrabando, premiar la ilegalidad, que no paguen impuestos y que sus carritos que allá en Estados Unidos ya no quieren, échenlos acá para su patio, aquí sí nos encanta contaminar y llenar nuestras calles de carros viejos.

Otro tema que nos duele, nos preocupa, y desde ahorita advertimos que iríamos a una acción de inconstitucionalidad, es permitir la actualización y el aumento del IEPS fracción I, el IEPS fracción II y el IEPS inciso h) que son los mentados gasolinazos.

Si este Congreso no elimina ese párrafo del inciso h) el segundo artículo del IEPS, la gasolina en 2020 va a actualizarse y aumentar entre 40 y 50 centavos por litro y el diésel hasta unos 70 centavos por litro.

Prometimos darle reversa al gasolinazo y 400 día después, lejos de darle reversa, se va a crear un aumento a la gasolina.

Otro tema que nos preocupa sobremanera, son los estímulos que está quitando este paquete al sector primario, a los transportistas, a los agricultores y a los exportadores, tenemos tan malas carreteras, que les dábamos un regalo, un premio a quien usara autopista y les permitíamos acreditar el cobro de la autopista contra ISR, pero ahora por anchas o mangas están poniendo un tope y plantean que aquellos transportistas que durante el año tengan un monto de ingresos no serán sujetos a este estímulo, bueno, pues queremos decirles que eso es completamente ilegal, inequitativo y no puede un estímulo fiscal por un tema de ingresos, topar las facilidades administrativas.

Dejan de nuevo las ventas por catálogo, que también son inconstitucionales, no puede el proveedor retener por adelantado un producto que no sea vendido, dejan también la limitante a la compensación universal que en teoría era para que los factureros ya no pudieran quedarse con el IVA, pero les recordamos que hace un mes ya le dimos al SAT, a la Procuraduría Fiscal y a la UIF, las herramientas y las armas para ir por los factureros y hoy justos pagan por pecadores, exportadores sector primario van a pagar graves consecuencias de no poder compensar los impuestos de manera universal.

Vamos a seguir insistiendo y nos iremos a una acción de inconstitucionalidad si no quitan el impuesto al ahorro.

Yo no entiendo a quién se le ocurre, a ese mexicano que ya trabajó 20 o 30 años, que su patrón ya le quitó y le descontó el ISPT, el ISR, las cuotas de aportación social, y lo que le queda, que ya es un remanente sin impuestos y el pobre mexicano mete una cuenta bancaria, esta 4T le va a quitar el 1.5 por ciento de algo que ni siquiera es ingreso, porque no es más que un ahorro, es el capital que esa familia pudo sostener. Y metiéndonos al tema de la miscelánea fiscal, aquí sí, de veras que se abusó, hacer responsables, solidarios a los gerentes y directores de los adeudos fiscales no es más que desincentivar a las carreras de trabajo en las empresas y meter en un esquema y un temor a gerentes que no tienen nada qué ver con las acciones de las empresas.

El esquema anti-abuso, esta figura anglosajona que no entra en este sistema mexicano que ya fue declarado inconstitucional en tribunales colegiados, también la quieren meter, topes de deducciones por intereses, podrían quebrar a todas las arrendadoras puras que hoy en día son la alternativa para el mexicano que no puede pedir un crédito, crean derecho a los vuelos de extranjeros e inhibiendo el turismo de extranjeros a México, y por si fuera poco, desvirtúan el impuesto de los derechos a los municipios por el Fondo Minero.

Este derecho que se creó para resarcir a los municipios que tienen minas y que los tractores, los camiones y el mobiliario afectan sus banquetas, sus calles, su infraestructura, que les cayó una lanita para poder reparar los daños, lo eliminan y ahora lo quieren dispersar en 2 mil 550 municipios pobres, pobres municipios mineros, pobres municipios de Zacatecas, San Luis y Durango. Por todo lo anterior, pedimos al grupo mayoritario reflexionar y corregir, corregir con reservas todas estas ilegalidades, la mayoría ya tiene jurisprudencia en contra de lo que proponen, el pretender que se actualice la cuota de IEPS de la gasolina, del alimento, de la cerveza, del cigarro, de la bebida es inconstitucional, tenemos dos jurisprudencias que manifiestan que no puede el Banco de México con su INPC afectar la base gravable del impuesto, para eso estamos aquí los Senadores y los Diputados, para cambiar las leyes y no delegar al Ejecutivo lo que es tarea de este Senado.

Por todo lo anterior y porque entendemos que hay 20 puntos delicados en este presupuesto 2020, es que el grupo de Movimiento Ciudadano iremos en contra de este paquete que es una incongruencia con lo que se planteó a los mexicanos en el 2018.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senador García Sepúlveda.

Tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos, la Senadora Vanessa Rubio Márquez, para presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI.

La Senadora Vanessa Rubio Márquez: Gracias, señora Presidenta. Con su permiso. Saludo a mis compañeras y compañeros, amigos Senadores.

Realmente la parte de fondo de la discusión de esta Ley de Ingresos y del paquete económico en general tiene un punto central a partir del cual se da todo lo demás, y es el tema del crecimiento económico.

Cuando uno habla de la famosa carátula, la carátula que nos presenta el crecimiento, el déficit, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, los ingresos tributarios, los ingresos presupuestarios, los ingresos petroleros, eso que se habla de la carátula, realmente tiene como elemento base el crecimiento económico en un país y si el crecimiento económico que se espera no se materializa, entonces tampoco se van a cumplir los otros elementos de la carátula.

Ese es el problema en el que nos encontramos.

Hace un año exactamente estábamos aquí y le decíamos al gobierno: "no tenemos elementos, no vemos elementos que nos permitan creer, quisiéramos, pero no los tenemos, que vamos a crecer 2.5 por ciento" es decir, ahorita tendríamos que estar creciendo 2.5 por ciento y estamos creciendo, desafortunadamente menos que cero, o sea, no estamos creciendo, estamos decreciendo.

De acuerdo al Inegi, el primer trimestre la economía creció menos 0.2 por ciento, el segundo trimestre creció cero por ciento y acaban de dar la cifra de agosto, decrecimos 0.4 por ciento. Entonces, no estamos creciendo.

Entonces, la pregunta es, si el año pasado les dijimos: "no vamos a crecer el 2.5 por ciento y estamos creciendo menos que cero, ¿ahora qué elementos tenemos para poder decir que sí vamos a crecer el año que entra 2 por ciento? Si no nos dan ningún elemento que nos esté llevando a ese crecimiento.

Entiendo que aquí todos están preocupados por el tema del presupuesto, si se va a agua, si se va a agro, si se va, a dónde se va, pero la madre de que tengamos presupuesto es que se cumpla el crecimiento, que se cumplan los ingresos y eso no va a suceder.

Entonces, esa es la preocupación fundamental de nuestro grupo parlamentario, que es que no se cumpla la variable central de crecimiento económico.

Además, muy importante, no hay que echarle la culpa al entorno internacional; el entorno internacional se está poniendo complicado ahorita, es cierto, pero todo el año pasado tuvimos un entorno internacional inmejorable, el sector industrial de Estados Unidos creciendo al cuatro, luego pasó al dos; las principales economías del mundo creciendo de manera sincronizada y al final del día aquí en México no tomamos las decisiones correctas para estar creciendo, y por eso no estamos creciendo.

Y el tema es, ¿qué va a ser de nosotros, qué va a ser de los mexicanos el año que entra, que además se materialicen muchos riesgos a nivel internacional?

Tenemos el riesgo de Brexit, tenemos el riesgo que ya Alemania declaró que están en recesión, el sector industrial de Estados Unidos, que es el que demanda nuestras exportaciones, está decreciendo. Ahí sí se puede venir una tormenta perfecta, desafortunadamente, en donde no solo no se materialice este crecimiento que están planteando en la carátula, que es de 2 por ciento fijo o el rango entre 1.5 y 2.5 por ciento, y en ese sentido vamos a estar en problemas otra vez, como el año pasado.

Ahora, ¿cómo lo estamos resolviendo o cómo lo pretende resolver Hacienda? Utilizando parte del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, del FEIP, que es un guardado que hicimos durante una década o más de una década justamente para momentos de crisis, estamos hablando de alrededor de 280 mil millones de pesos en ese Fondo de Estabilización y van a tener que usar, nada más para el cierre de este año, nos lo comentaba antier el subsecretario de Hacienda, 130 mil millones de pesos, calculan hoy, pero puede ser más.

Entonces, aquí el tema es que se puede estar generando una tormenta perfecta para la cual no estamos preparados, con una propuesta de crecimiento económico hacia adelante viable, que pueda materializarse y se están poniendo las aguas muy negras a nivel internacional.

Entonces, sí es importante celebrar que exista una carátula fiscalmente responsable, pero el problema es, ¿qué tan fiscalmente responsable es si no se va a cumplir? Porque al final del día creemos que no se va a materializar el crecimiento este año y no se va a materializar el del año que entra.

Qué bueno que estén reconociendo ya los primeros resultados de la reforma energética, a mí eso me da gusto, la verdad, porque, como hemos dicho en esta tribuna, no se ha descubierto otro financiamiento que no sea público o privado y la decisión que se tomó en este gobierno es meterle financiamiento público a Pemex, cuando lo que se necesitaba era financiamiento privado.

¿Por qué? Porque al final del día si le seguimos metiendo puro financiamiento público a Pemex lo que se pone en riesgo son nuestras propias finanzas públicas, las del país.

En ese sentido, nos reconoció el subsecretario que ya traen resultados de las rondas petroleras para el año que entra, que ya están contando, en lo que traen en la carátula, de la plataforma petrolera. Qué bueno que así sea y ojalá que ahí se abra una avenida en donde se reconsidere y se reconsidere favorablemente para la inversión, tanto nacional como extranjera, pero inversión privada.

Solamente así cualquier compañía del tamaño de Pemex va a poder salir adelante y esperamos que así sea.

Ya yéndome un poco más al tema de los específicos. A ver, el Partido Revolucionario Institucional no está de acuerdo con el incremento a los derechos por agua en los distritos agrícolas, esto básicamente quebraría el campo.

Sabemos que ya están habiendo negociaciones para que un cambio significativo pueda haber en la materia, lo dijimos desde antier que estuvimos en una conferencia de prensa señalándolo. Esto realmente sería terrible para el campo.

También el incremento en el derecho por descarga de aguas residuales. También, y se los digo otra vez, como se los dije el año pasado, nos dicen que no van a aumentar impuestos, sí van a aumentar impuestos, se va a aumentar el Impuesto al Ahorro. Cualquiera que esté ahorrando chiquito, grande, mediano, va a tener un impuesto mayor que pagar.

El año pasado, hacia este año nos lo aumentaron de 0.46 a 1.01 y para el 2020 lo están aumentando de 1.04 a 1.45, en un país en donde lo que queremos es estimular el ahorro y no inhibirlo.

También bajan el estímulo a la contratación de personas con discapacidad, del 100 por ciento al 25 por ciento, como si no quisiéramos que las empresas tuvieran este estímulo para contratar a las personas con discapacidad.

Dos derechos muy importantes que se aumentan, como si aquí nos estuviera sobrando turismo y no estuviéramos, al contrario, bajando niveles turísticos a nivel internacional: el derecho al no residente sube, de 558 a 855, o sea, más del 53 por ciento y el derecho de prestación de servicios de migración, que es básicamente lo que llega vía aérea, que sube de 77 pesos a 380 pesos, casi 400 por ciento.

También está el tema de responsabilidad solidaria. Ahora cualquier persona que trabaje en una empresa a nivel directivo va a ser responsable solidario por el incumplimiento fiscal de la empresa y va a tener que hacerle frente con sus propios recursos patrimoniales.

Yo les pregunto a todos los directivos que nos están escuchando de cualquier empresa si van a estar de acuerdo con que ellos sean responsables a nivel patrimonial por cualquier incumplimiento de la empresa en la cual trabajan.

También el tema de ventas por catálogo. Sí hay que decirlo muy claro, no quedó en la ley, es cierto, pero quedó en el transitorio. Entonces, no es que hayan eliminado los cobros que se piensa hacer, sobre todo para las mujeres que venden por catálogo a nivel nacional y que básicamente es un ingreso pequeño como complemento a sus ingresos mensuales.

También muy importante, que a las plataformas digitales no se les pase la obligación de la autoridad de retener impuestos, de tener que cobrar impuestos, que no se vaya a promover la informalidad a través de estas acciones y el tema de la obligación que les están imponiendo de compartir información y datos. Nada más ahí ojo con el tema de la protección de datos personales.

El tema que los asesores fiscales tengan que revelar sus estrategias, pues también creo que es un tema riesgoso para esa industria, pues como si a cualquiera de nosotros nos piden que de antemano revelemos nuestra estrategia en una negociación, pues eso es algo que no es adecuado. Y el tema de las empresas con ingresos anuales de 60 millones de pesos, y si se dedican al transporte o si transportan, incluso, por ejemplo, alimentos, ya no van a recibir el estímulo al diésel.

Entonces, estos son temas que nos preocupan, son temas que ya planteamos en la Comisión de Hacienda, de Comisiones Unidas, de hoy en la mañana, por eso es que no estamos, al menos en la minuta como está hoy, en posibilidades de votarla favorablemente.

Si hubiera espacio a cambio, si hubiera espacio a mejora, si hubiera espacio a modificaciones, como siempre estamos dispuestos a sentarnos, a platicar y a tratar de que el Paquete Económico 2020 sea un paquete realista, que el crecimiento sea el esperado y el viable para una economía como la mexicana, que hoy se encuentra creciendo debajo de cero y que va a enfrentar un entorno internacional extremadamente complejo y, sobre todo, en donde se apoyen a los distintos sectores de la población mexicana para lo que quieren, que es simplemente trabajar, hacer su vida, sacar a las familias mexicanas adelante.

Para eso cuentan con nosotros y por eso estamos dispuestos a platicar a lo largo del día las distintas reformas que les estaremos proponiendo en lo concreto.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Vanessa Rubio.

Tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos, la Senadora Minerva Hernández Ramos, del grupo parlamentario del PAN.

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Con su venia, señora Presidenta.

En este Senado caeríamos en un profundo error si creyéramos que solamente nos corresponde aprobar los ingresos públicos, sin considerar los conceptos de gasto que van asociados a estos; siendo un sistema ingreso-gasto es nuestra responsabilidad saber en qué se destinarán los 6.1 billones de pesos señalados en la carátula de Ley de Ingresos de la Federación.

El Presupuesto de Egresos será el más cuantioso de la historia del país, pero nos valdrá más caro el "ganso que las albóndigas", porque es presupuesto injusto e inequitativo, porque castiga a las entidades federativas y a los municipios, hasta el grado de la asfixia presupuestal, porque reitera para el austericidio de 2019 a los programas sociales que apoyan a los más vulnerables y desprotegidos y porque insiste en transferir recursos a programas clientelares, sin padrón de beneficiarios, sin reglas de operación y en la mayor opacidad posible.

Los Senadores de Acción Nacional advertimos que el empeño gubernamental está en seguir despilfarrando el dinero público con fines clientelares y que no le preocupa, en lo más mínimo, otorgar fuentes de financiamiento a las MiPymes que representan el 80 por ciento de la economía de este país.

La Ley de Ingresos que estamos por votar no representa responsabilidad hacendaria y afectará la sostenibilidad de las finanzas públicas, simplemente porque parte de asumir como cierto un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2 por ciento para el próximo año, cuando desde febrero cada mes observamos una contradicción en la economía que dejará al Producto Interno Bruto de este año en medio punto porcentual.

Pero este gobierno insiste en navegar sin brújula, en creer en la "palabra mañanera" de un presidente que toma decisiones sin planeación y sin información, en materia económica y también de seguridad nacional.

En este paquete económico no se están atendiendo las advertencias internas e internacionales sobre la recesión económica.

Compañeras y compañeros Senadores, se las enumero para que las consideren.

El Banco Mundial reporta que México cayó seis lugares en cuanto a los procedimientos, tiempos y costo de regulación que impactan en el ambiente de negocios:

¿Y qué está haciendo el gobierno al respecto? Nada.

El sector de la construcción, principal componente de la inversión productiva tiene hoy el peor resultado de los últimos 13 años, pero no importa porque se insiste en que crecemos al 2 por ciento.

De enero a agosto hay una dura caída de los ingresos públicos de menos 2 por ciento real, el ISR y el IVA que sostienen poco más de la mitad de todos los ingresos públicos, ambos registran caídas, pero la Jefa del SAT en sus declaraciones públicas contradice los informes trimestrales oficiales, mensuales de Hacienda e insiste que otros datos muestran que la recaudación va conforme a su calendario. Esta situación, amigas y amigos, es inaudita.

En lo que va de 2019, se han recortado programas sociales, se incrementó el gasto del aparato gubernamental; es necesario que este gobierno rinda cuentas de los subejercicios presupuestales no subsanados, por más de 30 mil 500 millones de pesos y por los donativos de muchos millones de pesos para porristas y grupos de animación. Ojalá que esas porras y ánimo los tuviéramos en las estancias infantiles, en medicamentos o en recursos para los municipios de México.

Estos ejemplos demuestran que como Senadores encargados de discutir y aprobar la Ley de Ingresos, deberíamos de estar preocupados por el marco macroeconómico y sus principales variables, porque la visión alegre y optimista que presentó la Presidencia de la República, seguramente chocará, el siguiente año, contra la dura realidad de una paridad cambiaria perjudicial para el peso, con un precio por barril de petróleo más barato de lo esperado o con que la plataforma de producción fue sobreestimada.

Además, la desaceleración económica mundial y la menor captación de ingresos tributarios redundarán en la fragilidad financiera del Estado mexicano, pues de aprobar los dictámenes en los términos planteados, este Senado pondrá en riesgo la sostenibilidad fiscal de largo plazo y permitirá que continúe la merma en el ahorro que se tiene a través de los fondos de estabilización.

Ni en la Ley de Ingresos ni en la Miscelánea Fiscal se están incorporando medidas contracíclicas, ante la desaceleración económica. México no necesita de este gobierno medidas de austeridad, ni políticas fiscales abusivas y arbitrarias, lo que necesitamos que apliquen es la política económica que tanto reclamaron cuando buscaban ser gobierno: Un desarrollo económico justo y para todos.

Los ciudadanos que votaron por nosotros, la población que está confiada en que el Congreso de la Unión responsablemente haga su trabajo de discutir y analizar el paquete económico, está preocupada porque el dinero no le alcanza, porque más de dos terceras partes de la población apenas ganan entre tres mil y 15 mil pesos mensuales, mientras que los impuestos y la gasolina suben para ajustarlos a términos reales, dice el gobierno; esa es la forma en que ahora le quieren llamar a los aumentos y mientras que la inseguridad cada vez es mayor.

Este gobierno ha logrado que la economía esté por los suelos y la inseguridad esté por los cielos; las cifras oficiales muestran que 2019, absoluta responsabilidad del gobierno de López Obrador será el año más violento de la historia de México.

¿Y así creen que vamos a crecer al 2 por ciento el próximo año? Es un verdadero engaño. En la Miscelánea Fiscal queremos reconocer el doble discurso del gobierno de López Obrador y del grupo parlamentario mayoritario, pues mientras en la reforma educativa se ufanaron de romper con los lineamientos de la OCDE y estas políticas malvadas impuestas por los organismos internacionales, en materia fiscal resultaron más neoliberales que el consenso de Washington y adoptaron las medidas del plan BEPS para evitar la erosión de la base tributaria y el traslado de los beneficios fiscales.

Pero al parecer, algo les falló en la traducción o en la incorporación al derecho fiscal mexicano, pues todavía quedan algunos detalles pendientes, que a través de las reservas que presentaremos hoy las y los Senadores del PAN pretendemos corregir con un ánimo estrictamente constructivo. El grupo parlamentario del PAN estará presentando una reserva para que se deslice el superávit del balance primario en un 0.1 por ciento como una medida contracíclica para que por la vía del gasto, a fin de que los municipios puedan invertir en infraestructura y combatir la inseguridad.

Esta medida permitirá apoyar la lucha de los presidentes municipales que recientemente se manifestaron en Palacio Nacional liberando recursos por más de 26 mil millones de pesos, porque están moralmente derrotados, quienes con gas lacrimógeno ahogan las protestas legítimas que hacen los alcaldes de México sin distinción partidista. Asimismo, los Senadores de Acción Nacional proponemos revisar el Fortamun, para que el porcentaje que hoy contempla para tareas de seguridad se incremente respecto de la recaudación federal participable, para que al menos un 50 por ciento de esos recursos se destinen al fortalecimiento de las policías municipales.

Planteamos también restituir a los municipios el Fondo Minero, los recursos de pueblos mágicos; bajar los impuestos a las gasolinas; bajar el IVA en la frontera sur; eliminar el incremento de derechos a los turistas que ingresan a nuestro país; permitir que los beneficios en la adquisición del diésel sean para todos; que el sector transportista pueda viajar por carreteras de cuota con seguridad, y que, quienes ocupen puestos de alta dirección en las empresas, no arriesguen su patrimonio.

Si el grupo parlamentario de Morena y sus aliados aceptan estas propuestas, podríamos apoyar en lo general esta miscelánea y Ley de Ingresos de la República, dejando a salvo las reservas específicas que someteríamos a la aprobación del Pleno.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Senadora Minerva Hernández.

Tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos, la Senadora Imelda Castro Castro, del grupo parlamentario del Partido Morena.

La Senadora Imelda Castro Castro: Gracias, señora Presidenta.

A diferencia de lo que aquí se ha dicho, de que la economía mundial va viento en popa y que la única economía que no está bien es la mexicana, quienes nos están escuchando en esta tribuna saben, sobre todo los economistas y obviamente los que estudian, tanto la macroeconomía como la microeconomía, saben que México no es una isla y que, al contrario, somos parte de la economía mundial, y las economías más altas, más competitivas en el mundo, como la japonesa, la alemana, etcétera, a través de los organismos internacionales,

han venido bajando sus expectativas de crecimiento económico, las proyecciones que hicieron para 2019 y lo que viene para 2020.

Ya lo dijimos en esta tribuna, ahí está el caso de la OCDE, que bajó esas expectativas.

A pesar de esos nubarrones que hay en la economía mundial, México ha mantenido la estabilidad macroeconómica.

En el análisis en materia de política económica de la glosa del informe aquí lo planteamos, compañeras Senadores y compañeros Senadores.

Si hablamos de inflación, si hablamos de la expectativa de crecimiento, si hablamos del tipo de cambio, hay estabilidad macroeconómica.

Y es muy claro el compromiso del gobierno de la cuarta transformación; por más que digan algunos de nuestros adversarios, no va a haber nuevos impuestos y no se van a incrementar los que ya existen.

Si acaso, compañeras y compañeros, va a haber una expansión de la base de contribuyentes, particularmente en el tema de la economía digital; está muy claro, no se les van a cobrar nuevos impuestos, simple y sencillamente se les está pidiendo a las plataformas digitales que se incorporen al piso parejo y que deje de haber una competencia desleal con los sectores con los que están involucrados, que es el turismo, para el caso de las plataformas de hospedaje; que es también las plataformas de transporte, para que puedan pagar el IVA y puedan retener el ISR. Pero no implica nuevos impuestos.

También es un paquete económico que busca combatir la elusión y la evasión fiscal.

Acuérdense todo lo que aquí hemos aprobado, las empresas factureras, las empresas fantasmas, la condonación de impuestos, todo ello implica…

Tienen razón aquí algunos de los Senadores y Senadoras que han dicho que va a ser el presupuesto más alto de la historia. Por supuesto que va a ser el presupuesto más alto de la historia, porque se va a recaudar, porque se va a buscar combatir esa evasión fiscal que los gobiernos del PAN y del PRI promovieron para buscar sus asociaciones políticas.

Ese es el tema, compañeras y compañeros, por supuesto que este paquete económico significa una política congruente con la austeridad republicana y el combate a la corrupción; por supuesto, va a haber eficiencia tanto en la recaudación como en el gasto, porque no va a haber corrupción, porque el dinero público no se lo va a robar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por eso, vamos a tener el presupuesto más alto, pero también vamos a tener el gasto con mayor compromiso social de todo el que se haya tenido en la historia de este país, porque ese dinero que antes se robaban, ese dinero que antes se evadía fiscalmente, hoy se va a dedicar a los más pobres de este país.

Por eso también este paquete económico significa la protección y apoyo a la microeconomía, a la economía de las familias mexicanas.

Como nunca en la historia de México, son las familias mexicanas las que se van a beneficiar.

En segundo término, compañeras Senadoras y compañeros Senadores, Morena escucha, la coalición Juntos Haremos Historia escucha, escucha a los sectores de la población.

Por eso, desde el Senado de la República, encabezados por el Presidente de la Junta de Coordinación Política, se ha establecido un diálogo con las asociaciones de la industria automotriz de nuestro país, porque somos conscientes que es una de las industrias más importantes de México, que genera más de dos millones de empleos y que representa el 4 por ciento del Producto Interno Bruto.

Y los hemos escuchado para presentar una reserva y dar marcha atrás con la decisión que tuvo la Cámara de Diputados en este tema de los carros, de los vehículos de internación al país.

Y también hemos escuchado a los módulos de riego, a las juntas de agua; hemos escuchado a las diferentes asociaciones de productores agrícolas de todo el país, y por eso vamos a presentar una reserva para echar atrás el incremento al derecho por el uso de agua de riego.

Y estamos promoviendo una nueva política en el sector turístico, por eso también vamos a revisar lo que tiene que ver con los derechos del no residente y del servicio migratorio.

Y así como estos tres grandes temas, también, compañeras Senadoras y compañeros Senadores, vamos a presentar nueve reservas para atender las inquietudes, planteamientos e intereses de los diferentes sectores de la población mexicana.

Finalmente, hay que irse acostumbrando, las cosas ya no son como antes.

La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no somo oficialía de partes como eran con el PAN y con el PRI.

En la Cámara de Diputados se discute, aquí se discute, se le cambian a las diferentes iniciativas muchas cosas, simple y sencillamente no se les olvide que 32 artículos de la iniciativa de la Secretaría de Hacienda se modificaron en la Cámara de Diputados porque hay debate, porque hay discusión, y en el marco de sus facultades ellos no sólo quitaron muchos de los planteamientos que venían de la Secretaría de Hacienda, sino que incluyeron otros temas y están en su derecho de hacerlo.

Pero nosotros como Cámara de origen también estamos en nuestro derecho de revertir las decisiones de la Cámara de Diputados, como lo vamos a hacer aquí en muchos de los temas, ese es el proceso legislativo que se lleva a cabo en un régimen democrático, como es el nuestro.

Hay debate, hay discusión, escuchamos a la población, por supuesto que lo hacemos, y sí hay discusión también aquí en el Senado

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores, no se nos olvide que desde el 8 de septiembre llegó a este Senado el paquete económico, y desde ese momento hasta acá hemos llevado todo un proceso público, un debate público donde la sociedad está incorporada.

Termino, pues, invitándolos a que reflexionen, a que nos apoyen, a que respalden este paquete económico que va en beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas de México.

Y a propósito del gasto, a propósito de la Ley de Ingresos, no olvidemos cuáles son las prioridades de este gobierno para 2020:

En primer lugar, el bienestar social de los mexicanos, por eso hay incrementos en todas las políticas y programas de bienestar social, por eso hay incremento en el gasto para salud, para educación y para seguridad y protección ciudadana principalmente, es una orientación social que, como nunca en la historia de México, tendrán, los ingresos que pagan todos los contribuyentes de nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Imelda Castro.

Concluidos los posicionamientos de los grupos parlamentarios de los cuatro dictámenes, desahogaremos la discusión del cuarto dictamen con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Hace unos momentos la Asamblea autorizó la dispensa de la segunda lectura de este dictamen, toda vez que el dictamen ya fue presentado y los posicionamientos de los grupos parlamentarios ya han sido desahogados, procederemos a su discusión en lo general.

Para iniciar su discusión, tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD, para hablar en contra del dictamen.

Les pido, por favor silencio, porque no escucha el Senador Mancera.

Sonido al escaño del Senador Mancera, por favor.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Vamos a esperar la presentación de las reservas.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Al no haber más oradoras ni oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En ese sentido, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

Informo a la Asamblea que han quedado reservados los siguientes artículos, y les pido estar atentos por si hay alguna omisión o algún error en el registro de sus reservas.

La Senadora Rocío Abreu, el artículo 1o.

El Senador Ovidio Peralta, el Artículo Séptimo Transitorio.

El Senador Daniel Gutiérrez Castorena, el Artículo Décimo Quinto Transitorio.

El Senador Miguel Ángel Lucero Olivas, la adición de un Artículo Transitorio.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, adición de un Artículo Transitorio.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota, artículo 1o. y la adición de un Artículo Transitorio.

El Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo propone modificaciones al artículo 1o.

El Senador Damián Zepeda, artículo 1o., 2o. y 16 y el Artículo Décimo Sexto Transitorio.

La Senadora Verónica Delgadillo, los artículos 2o. y 16.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, los artículos 16, 21 y Artículo Segundo Transitorio.

La Senadora Verónica Martínez García, el artículo 16.

El Senador Samuel Alejandro García, el artículo 16 y el 21, así como los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto Transitorios.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, el artículo 21.

La Senadora María Guadalupe Murguía, el artículo 21.

La Senadora Gabriela Benavides, el artículo 21 y el Artículo Décimo Quinto Transitorio.

El Senador José Erandi Bermúdez, el artículo 21 y el 223, así como el Artículo Décimo Quinto Transitorio.

El Senador Juan Zepeda, el Artículo Décimo Quinto Transitorio.

La Senadora Minerva Hernández, el Décimo Quinto Transitorio y la adición de dos Artículos Transitorios.

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez, la adición de un Artículo Transitorio.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, la adición de un Artículo Transitorio.

La Senadora Xóchitl Gálvez, la adición de un Artículo Transitorio.

La Senadora Gloria Núñez Sánchez, adición de un Artículo Transitorio.

La Senadora Gina Cruz, adición de dos Artículos Transitorios.

Pregunto a la Asamblea, ¿si alguien más desea reservar algún artículo?

El Senador Pérez Astorga, que lo veo aquí inquieto, está en el segundo lugar con el Senador Ovidio Peralta.

Y el Senador Daniel Gutiérrez Castorena, presenta en lugar del Senador Alejandro Armenta.

Sonido al escaño de la Senadora Verónica Camino.

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

Tenemos en el PVEM, además de la Senadora Gabriela Benavides y su servidora, una reserva al Artículo Décimo Quinto Transitorio, no sé si se encuentra registrada, pero sí la…

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí lo nombre, creo es la de la Senadora Gabriela Benavides Cobos, el artículo 21 y el Artículo Décimo Quinto Transitorio.

Incluimos a la Senadora Verónica Camino para la presentación de las reservas. ¿Alguien más?

Con fundamento en el artículo 200 del Reglamento del Senado, se procederá a recoger la votación del dictamen en un solo acto en lo general y de los artículos no reservados.

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.

(VOTACIÓN)

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Pregunto si falta alguna Senadora o algún Senador por emitir su voto. Sigue abierto el tablero.

Falta alguna Senadora o algún Senador por emitir su voto. Sigue abierto el tablero.

Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 59 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2020.

Vamos a proceder al desahogo de las reservas y tenemos una solicitud. Si me permiten, iniciaremos y el segundo lugar se lo daremos a la Senadora Claudia Edith Anaya Mota ¿o ya viene bajando?

Iniciamos con la Senadora Claudia Edith Anaya, que presentará una reserva al artículo 1o. y la adición de un Artículo Transitorio.

Entonces, vamos a empezar con la Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, para presentar la reserva al artículo 1o., en lo que baja la Senadora Anaya.

Vamos a darle la palabra a la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del grupo parlamentario del PRI, para presentar reserva al artículo 1o. y la adición de un Artículo Transitorio.

La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su permiso.

En atención a que la Senadora Rocío Abreu va a reservar el mismo artículo que yo, el 1o., pues lo retiro y me quedo con el Artículo Transitorio. Este artículo transitorio ya está aprobado, compañeras y compañeros, es un artículo que hemos venido construyendo juntamente con los Senadores y Senadoras, con la gente de la Secretaría de Hacienda, que ha rebotado anteriormente y ya finalmente queda con la siguiente redacción:

Se autoriza al Instituto Mexicano del Seguro Social a celebrar convenios de pago en parcialidades a un plazo máximo de hasta 6 años con entidades federativas, municipios y organismos descentralizados con el objeto de propiciar el saneamiento de los créditos adeudados por concepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos y sus accesorios, exceptuando las que se refieren a las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez por parte de que estén excluidos o no comprendian en las leyes o decretos como sujetos de aseguramiento, durante el Ejercicio Fiscal 2020.

Las participaciones que con cargo al Fondo General de Participaciones que correspondan recibir a las entidades federativas y a los municipios, así como sus respectivos entes públicos, serán la fuente de pago de los importes convenidos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público rendirá el monto correspondiente a las parcialidades convenidas y efectuará entraro inmediato al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizando con ello el financiamiento de los servicios de salud y seguridad social.

Con este Artículo Transitorio estamos ayudando a los municipios a regularizar sus adeudos con el IMSS, en un plazo de seis años les vamos a dar certeza a los derechohabientes que son trabajadores de los municipios de los estados o de algún otro organismo descentralizado, pero también vamos a ayudar a las finanzas del IMSS,

porque vamos a regularizar sus pasivos y vamos a lograr que lleguen a acuerdos con sus deudores y de esa manera se regularicen. De esta manera esperemos que todos salgan ganando y, gracias a todos por su aprobación.

Buenas noches, compañeros.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan a discusión las dos propuestas presentadas por la Senadora Claudia Anaya, es en el artículo 1o. y la adición de un Artículo Transitorio.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: ¿Nada más la adición?

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Perdón, la adición.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, el dictamen permanece en sus términos.

Tiene la palabra la Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del grupo parlamentario del Partido Morena.

Me están informando que va a presentar las reservas que habían registrado también el Senador Ovidio Peralta y el Senador Gutiérrez Castorena, por lo que presentará, de ser así, las reservas al artículo 1o., al Artículo Séptimo Transitorio, la adición de un Artículo Transitorio y modificaciones al Artículo Décimo Quinto Transitorio. ¿Es correcto, Senadora?

La Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano: Así es, señora Presidenta. Muchas gracias.

Primero que nada, muy buenos días, ya estamos a las 4:22 y precisamente estamos presentando, en un solo bloque, todas las reservas que tenemos en el grupo Morena. Primero que nada, hablamos sobre el ajuste de carátula, precisamente porque estamos solicitando que se decline en relación al Artículo Décimo Quinto Transitorio, que tiene que ver sobre la introducción de autos ilegales a México, estamos pidiendo que este desaparezca y que no sea contemplado dentro del mismo.

En el mismo sentido, el Artículo Séptimo Transitorio que señala sobre el tema de los recursos no ejercidos por los municipios, en el caso estamos pidiendo que se haga una adecuación sobre los lineamientos que dictan las dependencias de emitir su operación a más tardar el último día hábil del mes de enero del 2020, que desaparecería y quedaría en sus términos como se encuentra. Y lo relativo a la carátula, haciendo los ajustes pertinentes, precisamente en relación a que desaparezca la introducción ilegal de autos, así como lo que señalamos en el grupo parlamentario de ningún incremento en relación al uso de agua para fines agrícolas, ningún impuesto sobre el mismo.

Los ajustes en derechos migratorios cuidando el tema de remesas, relativo a todo lo que es turismo y la reducción a las tasas impositivas que bajaron el cobro de las plataformas digitales. Eso nos da precisamente un fortalecimiento, pero lo más importante es que se eo solicite la Federación, el fortalecimiento en los ahorros, lo cual significa un ingreso, para lo cual se hace el ajuste en la carátula como fue presentada.

Quisiera comentar que esto fortalece, precisamente, en relación a los aumentos en educación con más de 16 mil millones, en salud con más de cuatro mil millones, en energía con más de 21 millones, mil millones en bienestar, por más de 22 mil millones en relación a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en 198 millones en Petróleos Mexicanos que es un tema fundamental para generar riqueza en este país, con un excedente en relación al ejercicio anterior por más de 58 mil millones, y la Comisión Federal de Electricidad por más de 21 mil millones.

Todo esto significa que estamos hablando en relación al Ejercicio 2019 al 2020 vienen todos estos ajustes y vienen todos estos incrementos para poder fortalecer lo más importante, que es generar riqueza en México, empleo, pero sobre todo infraestructura.

Y hablo en el tema de los estados petroleros en los cuales está Veracruz, Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Chiapas donde, precisamente, echar a andar todo el tema de perforación y exploración nos va a generar la oportunidad de poder generar todo ese crudo que requerimos para poder echar a andar las refinerías, generar empleos, echar a andar otra vez una de las columnas vertebrales más importantes del país, que es la generación de ingresos en materia petrolera.

Estamos trabajando en favor de México, para lo cual agradecemos, como siempre, la disposición de todos para trabajar en beneficio de los mexicanos.

Muchas gracias.

Propuestas de modificación.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de reserva al artículo 1o., al Artículo Séptimo Transitorio, la adición de un Artículo Transitorio y al Artículo Décimo Quinto Transitorio.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la Senadora Rocío Abreu. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, están a discusión.

En virtud de que no hay oradoras ni oradores registrados.

¿Sí hay oradores? El Senador Juan Zepeda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El Senador Juan Zepeda: Gracias, señora Presidenta.

Por lo que escuché de la Senadora Rocío Abreu, del grupo de Morena, se está refiriendo al Artículo Décimo Quinto Transitorio que es un asunto por demás sensible. Hay una redacción que viene en este dictamen que nos llega de la Cámara de Diputados y, dice así el Artículo Décimo Quinto Transitorio: “Para efectos de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados, localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera”.

Esto es, los llamados autos chocolates, que hoy día por supuesto que en el territorio nacional tenemos seguramente cientos de miles, si no que millones de estos vehículos. Pero, miren, hay que reflexionar realmente sobre esta problemática que tenemos hoy en el país: ¿Quiénes son los poseedores de estos vehículos? No es gente que pueda pagar un vehículo sacado de una agencia aquí en el país, por supuesto que no son vehículos lujosos, en su gran mayoría son ciudadanos que esos vehículos es un patrimonio que les han traído sus familiares que son migrantes en Estados Unidos.

Escuchaba en la exposición del Senador José Narro hace unas horas refiriéndose al campo, y mencionaba los 19 mil millones de dólares que han enviado los mexicanos residentes en Estados Unidos, colaborando así con la economía de nuestro país. Por supuesto que muchos de estos mexicanos también han enviado vehículos. Estos vehículos, sobre todo en la frontera norte, en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, en Tamaulipas, pero también al interior de la República, juegan un papel importante para estos ciudadanos y estos sectores productivos que no pueden hoy sacar de la agencia un vehículo o comprar aquí en el país un vehículo.

He escuchado argumentos que, por supuesto que son válidos, que ha esgrimido la industria automotriz; que se van a caer las ventas; que van a venir a saturar el mercado con vehículos que no cumplen con las normas ambientales, etcétera. Sin embargo, hoy, así como hace unos días se aplicó el criterio del mal menor en Culiacán, cuando se liberó a un criminal para salvar vidas. Hoy, bajo esa misma lógica, debiéramos de entender que si nosotros cancelamos la posibilidad de regularizar estos vehículos, le estamos asestando un golpe a estos sectores productivos: campesinos, tianguistas, transportistas o ciudadanos que no pueden comprar un vehículo.

Por eso propongo esta redacción, para quede en los siguientes términos el Artículo Décimo Quinto Transitorio: Para efectos de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo, no de ocho, de tres meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de regularizar; ojo, regularizar, porque en el texto original no se está refiriendo a esto y lo está dejando muy amplio y muy ambiguo; regularizar la propiedad y posesión de vehículos importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.

Y, ojo, en este lapso en que entra en vigor, suspender todos los operativos efectuados para detener, incautar y/o decomisar estos vehículos. A la par, se cancelan todos los créditos fiscales y procedimientos administrativos iniciados por el Servicio de Administración Tributaria por la posesión de dichos vehículos. Aquí argumento, cuando se detiene uno de estos vehículos, se incauta, se inicia un procedimiento administrativo y se le finca un crédito fiscal al poseedor de ese vehículo. Esto es totalmente lesivo a la economía del ciudadano, por eso planteo cancelar esos créditos fiscales, pero también los famosos operativos para detenerlos.

A la par, se intensificarán las acciones en materia aduanal y hacendaria, para evitar que la problemática continúe y crezca. Para ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creará un incentivo fiscal para que los dueños de vehículos importados usados puedan cambiarlos por un vehículo que cumpla con las normativas medioambientales vigentes.

Eso es cuanto, señora Presidenta, que quería abrir la discusión por la propuesta que está haciendo la Senadora Rocío Abreu.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador Zepeda, usted está haciendo una propuesta de redacción que es diferente a la propuesta que se está discutiendo, entonces tengo que someter a consideración si se acepta a discusión también su propuesta.

Entonces le pido a la Secretaría que, en votación económica, consulte a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de modificación al Artículo Décimo Quinto Transitorio, presentada por el Senador Juan Zepeda, para que se incorpore, en todo caso, a la discusión de las reservas que se están tratando.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Juan Zepeda, en relación a la modificación al Artículo Décimo Quinto Transitorio. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senador Zepeda, no entra a la discusión en este momento, ¿quiere usted mantenerla hasta el Orden del Día? Supongo que es la misma que tiene usted registrada como reserva.

La mantiene. Muy bien, Senador.

Sonido al escaño de la Senadora Verónica Camino.

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: (Desde su escaño) Muchas gracias, señora Presidenta.

En virtud de que la Senadora Rocío Abreu ha presentado ya en bloque las diferentes reservas, le pediría si nos permite adherirnos a la reserva del Artículo Décimo Quinto Transitorio y, de este modo, si nos lo permite, retiraríamos ya la del Partido Verde.

Y sólo le pediría que el argumento sea inscrito en el Diario de los Debates.

Intervención

Propuesta de modificación.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Así queda inscrito su argumento en el Diario de los Debates. La Senadora Rocío Abreu, si están de acuerdo. Gracias, entonces se retira nada más la del Artículo Décimo Quinto Transitorio. Muy bien, Senadora.

En virtud de que no hay más oradoras ni oradores registrados, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones al artículo 1o., al Artículo Séptimo Transitorio, la adición de un Artículo Transitorio y la eliminación del Artículo Décimo Quinto Transitorio, presentadas por la Senadora Rocío Abreu, a nombre del grupo parlamentario del Partido Morena.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse las propuestas presentadas por la Senadora Rocío Abreu. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admiten y se aprueban, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, quedan aprobadas las modificaciones al artículo 1o., al Artículo Séptimo Transitorio, se adiciona un Artículo Transitorio y se elimina el Artículo Décimo Quinto Transitorio.

Tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del grupo parlamentario del PT, para presentar una reserva de adición de un Artículo Transitorio al dictamen.

El Senador Miguel Ángel Lucero Olivas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras Senadoras y Senadores:

Les pido atención un momento, que nos pongamos serios, ya mero nos vamos, ya mero amanece. La Ley del Seguro Social prevé que las entidades de las Administración Pública Federal, estatal y municipal, no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social, pueden incorporar a sus trabajadores de manera voluntaria al régimen del Seguro Social.

Conforme a lo anterior, las entidades son las responsables de registrarse ante el instituto, afiliar a sus trabajadores con el salario real que perciben y cubrir el pago oportuno de las cuotas obrero-patronales a su cargo. Derivado de la situación financiera por la que actualmente atraviesan diversas entidades y municipios, y más que ahora les pegamos con la Ley Minera, existen múltiples casos en los que han omitido el pago oportuno de dichas cuotas al Seguro Social, al IMSS.

Incluso se ha incurrido en temas de carácter penal habiendo decomisos, señalamientos, embargos a muchos de los municipios de este país. Para lograr la recuperación de los adeudos del IMSS se ha llevado a cabo múltiples acciones de cobro y han puesto a consideración de las entidades deudoras distintos esquemas de pago, no obstante, no se ha logrado su plena regularización. Por lo anterior, se considera necesario que dicha situación sea atendida previendo, a través de una disposición transitoria en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2020, que en los adeudos a cargo de las entidades sean regularizadas mediante el siguiente convenio de pago, máximo a seis años, que prevé el pago de dichas obligaciones, sea cubierto con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades, con lo que se mitigarán las contingencias fiscales y penales a que se enfrentan dichas entidades y dichos municipios.

En este sentido, lo que se propone en lo siguiente: agregar un Artículo Décimo Sexto Transitorio en la Ley de Ingresos, cuyo texto no haya correlativo que quede de la siguiente manera:

"Con el fin de promover el saneamiento de los créditos adeudados por concepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos y sus accesorios, con excepción de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, por parte de entidades federativas, municipios y organismos descentralizados que están excluidas o no comprendidas en leyes o decretos como sujetos de aseguramiento, se autoriza al Instituto Mexicano del Seguro Social durante el Ejercicio Fiscal del 2020 a suscribir convenios de pago en parcialidades a un plazo máximo de hasta seis años.

Para tal efecto, las participaciones que con cargo al Fondo General de Participaciones correspondan recibir a las entidades federativas y los municipios, así como a sus respectivos entes públicos, servirán como fuente de pago de los importes convenidos, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retendrá el monto correspondiente a las parcialidades determinadas en los convenios y realizará el entero directo de dichos importes al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizando con ello la adecuada financiación de los servicios de salud y seguridad social.

Es cuanto, compañeros.

Les ruego, les suplico que apoyemos esta adición como Artículo Transitorio para apoyar a dichos municipios que están adeudando, algunos de ellos, cantidades que no nos imaginamos.

Muchas gracias.

Propuesta de adición.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de adición de un Artículo Transitorio, presentada por el Senador Lucero Olivas.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Miguel Ángel Lucero. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se admite a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. En consecuencia, está a discusión.

Al no haber ningún orador ni oradora registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de adicionar un Artículo Transitorio.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada por el Senador Lucero. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba la propuesta, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Aprobada la adición de un Artículo Transitorio presentada por el Senador Lucero Olivas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del grupo parlamentario del Partido Morena, para presentar una reserva de adición de un Artículo Transitorio.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: Con su permiso, señora Presidenta. Buenos días.

Es una insistencia lo que aquí proponemos diferentes grupos parlamentarios, diferentes Senadoras y Senadores, es acerca de la situación que priva en estados, municipios, órganos autónomos, universidades, hoy en día, de los adeudos que tienen hacia el Seguro Social y hacia el ISSSTE de manera particular.

Los gobiernos de los estados, en el caso particular de los rectores de las universidades, no han cumplido con sus obligaciones hacia el ISSSTE, ni hacia el Seguro Social, y estas situaciones ponen en grave aprieto a los trabajadores, ya sea de los estados o de las universidades.

Inclusive han incurrido en situaciones de carácter penal y han incurrido porque retienen de parte de los trabajadores las aportaciones, los gobiernos estatales y las universidades, más no la están enterando a las instituciones.

No están enterando de manera general al Seguro Social, no están enterando al ISSSTE, no están enterando al SAT, no están enterando al Infonavit, no están enterando al Fovissste y, por consecuencia, también, a parte de los derechos nugatorios, a parte están los trabajadores en el Buró de Crédito de manera injusta o, bien, no se hacen las aportaciones a los fondos pensionarios y no están generando, también, la antigüedad dentro de otro tipo de situaciones, que deberían de tener.

Es por eso, que el día de hoy estamos proponiendo que sea la Secretaría de Hacienda, la que en un momento dado esté reteniendo de las participaciones a los estados, o bien a las universidades, lo que no están pagando por parte de las retenciones que hacen a los trabajadores.

Esta situación se pone a consideración de este Pleno con el fin de salvaguardar los intereses de los trabajadores, ya que en la actualidad hay universidades que se encuentran amparadas ante el hecho de que el Seguro Social, de manera particular, no les da el servicio por tener adeudos, y esta situación no puede seguir continuando porque va en menoscabo del patrimonio del Seguro Social o del ISSSTE, y va también en detrimento de los derechos de los trabajadores.

Lo pongo a ustedes a su consideración y ojalá podamos salvar este problema que ahorita todavía pudiera ser manejable, pero que el día de mañana va a quebrantar la estabilidad no solamente laboral, sino la estabilidad de los derechos que son esenciales para los trabajadores del país.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: La propuesta de modificación del Senador Navarro es prácticamente para modificar los considerandos del dictamen, siendo congruentes con el artículo que recién se acaba de aprobar, que es la adición de un Artículo Transitorio.

Por lo tanto, le pido a la Secretaría, si ya no hay ningún orador ni oradora registrados, le voy a pedir directamente a la Secretaría que consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se modifiquen los considerandos ya que no afecta en el fondo los términos del dictamen, si no es en congruencia al dictamen.

La Secretaria Senadora Katy Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza la incorporación de los considerandos presentados por el doctor Navarro. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza la adición, señora Presidenta, de los considerandos.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Queda aprobado.

En el orden estaba inscrita la reserva que presentó el Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo al artículo 1o., nos ha pedido que integremos su presentación al Diario de los Debates y así quedará.



Tiene la palabra el Senador Damián Zepeda Vidales, que presentará reformas al artículo 1o., 2o. y 16, así como una adición del Artículo Décimo Sexto Transitorio.

Sonido al escaño del Senador Damián Zepeda.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Gracias, señora Presidenta.

En virtud de que son los mismos temas que ya abordé en las leyes, digamos, específicas de cada uno de sus impuestos, modificaciones de IVA, modificaciones de ISR que propusimos, además el planteamiento de cero deuda, no quisiera ya repetir la exposición y simplemente informarle a la Asamblea y pedirle que se someta a votación que son esas modificaciones de IVA y ISR, de cero deuda, de deducibilidad de educación privada, aplicadas ahora a la Ley de Ingresos; sin embargo, hay una que sí no había explicado, que lo hago desde aquí, que tiene que ver con el artículo 16.

El artículo 16 establece un estímulo fiscal para el transporte terrestre, ya sea público, privado de carga, pasajero o turístico en donde se permite el acreditamiento del pago por el uso de carreteras de cuota, pero por alguna razón la Ley de Ingresos le establece un tope, a nosotros nos parece que no debería de tener ningún tope pues es el poder acreditar estos gastos que están ligados al uso de carreteras de cuota.

Esta reserva la presenta un servidor y en los mismos términos también la Senadora Verónica Martínez.

Entonces, eso más todos los temas que ya había expuesto antes de cero deuda, IVA frontera, ISR tasa cero, menores de 10 mil en ingresos y ISR en tasa 28, en fin, todo lo que ya había expuesto con anterioridad.

Por lo que pido que se someta a votación.

Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sometemos a consideración en un solo acto.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si acepta a discusión las modificaciones a los artículos 1o., 2o. y 16, así como una adición de un Artículo Décimo Sexto Transitorio que propone el Senador Damián Zepeda.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las modificaciones a los artículos 1o., 2o. y 16, y el Artículo Décimo Sexto Transitorio que propone el Senador Damián Zepeda. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión las propuestas, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, el dictamen permanece en sus términos.

En el orden estaba inscrita la reserva a los artículos 2o. y 16 de la Senadora Verónica Delgadillo, quien nos ha pedido que se incorporen al Diario de los Debates.

Tiene la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del PRD, para presentar reservas a los artículos 16, 21 y Artículo Segundo Transitorio del dictamen.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, señora Presidenta. Buenos días a mis compañeras Senadoras y compañeros Senadores.

La primera de las reservas es el artículo 16 del dictamen que nos ocupa de la Ley de Ingresos y es en cuanto a la fracción I por la afectación que provocaría esta limitación que se hace para poder hacer la acreditación del estímulo fiscal hacia una tabulación máxima de 60 millones de pesos, lo cual sin duda va a afectar a todas las actividades empresariales que utilizan el diésel y el biodiésel, y que obviamente las adquieren para el combustible de la maquinaria, la afectación principal va a ser en la industria minera y en la ferroviaria, hay una repercusión económica muy importante que se va a presentar de no modificar esta limitación que se hizo al estímulo.

Y el otro, el de la fracción V, es el estímulo que se refiere, precisamente, a la compensación que se puede hacer por la utilización de la red nacional de autopistas de cuota, se está haciendo también una limitación hasta 300 millones de pesos, pero van a ser muchas las empresas mexicanas que se van a ver afectadas por esto. Además con una repercusión indirecta porque se van a preferir las carreteras federales en lugar de las carreteras de cuota, lo cual dejará de percibir obviamente los ingresos que por uso de estas autopistas se generan para la Federación, es decir, va a haber una repercusión indirecta en los propios ingresos que se tendrán, además de la afectación a la seguridad vial.

Y la última es a la que se refiere a las ventas por catálogo, porque si bien es cierto se retiró del cuerpo de la ley, se mantiene la posibilidad de regular las ventas por catálogo en el Artículo Segundo en el Transitorio donde dice: “En relación con las modificaciones a las que se refiere el artículo 1o. de este Decreto, fracción II, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá mediante reglas de carácter general, implementar el esquema que permita facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, de las personas físicas que realicen actividades empresariales con el público en general como vendedores independientes de productos al menudo, por catálogo o similares”.

Es decir, sí se tiene la posibilidad jurídica de esta regulación, de las ventas por catálogo cuando el compromiso había sido de excluirlo totalmente. Si no se estuviera pensarlo regulando, no existiría ese transitorio, es lo que estamos pidiendo, que se elimine el transitorio correspondiente.

Y es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aceptan a discusión las propuestas de reserva del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el Senador Miguel Ángel Mancera. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, el dictamen con los artículos 16, 21 y Artículo Segundo Transitorios permanecen en sus términos.

La Senadora Verónica Martínez García, también deja la presentación de sus reservas, lo mismo que el Senador Alejandro García Sepúlveda, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, la Senadora Verónica, su reserva era al artículo 16, el Senador Samuel García al artículo 16 y 21, así como proponer la eliminación de los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto Transitorios.

Tiene la palabra el Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, para presentar reservas del artículo 21.

El Senador Jorge Carlos Ramírez Marín: Con su permiso, señora Presidenta. Senadoras y Senadores:

La primera lección de la economía es la escasez, nunca hay suficiente para atender las necesidades de todos, la primera lección de la política es hacer caso omiso de la primera lección de la economía.

Ese es el trabajo de hacer un presupuesto, y ese es el trabajo de hacer una Ley de Ingresos.

A nosotros nos toca hacer política y, por cierto, éste será el primer presupuesto que le corresponda por completo y primera Ley de Ingresos al partido que hoy tiene la mayoría en este Senado, en la Cámara de Diputados y que ganó en las elecciones el derecho de presidir el Ejecutivo.

El año pasado el Presupuesto tenía todavía la inercia del gobierno que salía.

De hecho, votamos el presupuesto y la Ley de Ingresos habiendo todavía un presidente de otro partido.

A partir del 1º de enero de 2020 la responsabilidad es íntegra de quienes hoy encabezan el gobierno.

De ahí lo delicado de esta Ley de Ingresos, porque, estimados amigos manda señales contradictorias que no podemos hacer a un lado, parece el ejercicio de un triple salto mortal de un trapecio a otro, una muy aventurada faena, primer salto, dependemos del comportamiento de la producción petrolera, que hoy decimos, va aumentar y sus precios no van a bajar, es un sí muy importante, dependemos de una recaudación cuyos signos estamos estableciendo nosotros sí la recaudación funciona como estamos estableciendo llegaremos a estas metas que no estamos proponiendo y dependemos de que el entorno económico mundial, pese a las señales que envía no termina más deteriorado de lo que está hoy.

Tres muy importantes intentos, saltos para llegar a la siguiente etapa.

Las contradicciones en nuestra Ley de Ingresos son evidentes, por ejemplo, en las gasolinas, en 2018 destinamos 113 mil millones, en el 19, 123 mil millones.

¿Por qué en el 20 decimos que van a ser 40 mil millones?

¿Qué va a suplir esa enorme diferencia de más de un 60 por ciento entre una cifra y otra?

Segunda contradicción.

La situación de los estados y municipios pasa a ser angustiosa, pasa a ser grave, los municipios no quieren recursos, quieren obras, que las haga cualquiera, pero que las haga, no es posible pensar que la distribución de las participaciones que tampoco es regular va a ser suficiente para que ellos puedan seguir manteniendo el ritmo de servicios.

Tuvimos un debate de 35 oradores alrededor de los hechos de Culiacán, nadie mencionó algo muy importante, el presupuesto, de qué seguridad hablamos cuando no hablamos del dinero para la seguridad, porque no estamos aumentando los fondos para la seguridad, lo hacemos para la Guardia Nacional y para el Ejercito, no para que haya más campos de béisbol, no para que haya más centros para la mujer, no para que los estados tengan oportunidad de crear nuevos espacios públicos.

Esas contradicciones son las que alarman, no lo olvidemos y no dejemos de reconocer el gran esfuerzo que la mayoría ha hecho para evitar los que hubieran sido gravísimos errores en la Ley de Ingresos, que sí es responsabilidad de este Senado. Se tiene que reconocer ese esfuerzo, pero saben, aún nos falta mucho, porque aún aquí el coordinador de la bancada de Morena decía: "Lo que hemos podido hacer reflexionar Hacienda, cuando la discusión centre en nosotros, estaremos ganando, cuando no sea a Hacienda la que hay que convencer, sino Hacienda la que tiene que obedecer", pero tienen razón, eso no ha sucedido nunca.

Siempre la política económica se ha impuesto a la política-política, y hoy esos mensajes contradictorios nos vuelven a remitir a ese momento. Una de las más graves contradicciones es este artículo 21, queremos que la gente deje de ahorrar, no, le estamos mandando un mensaje desesperado, queremos tu dinero, si no te lo podemos sacar por las ventas por catálogo, aquí en el ahorro sí te las vamos a tener cautivas, pero las cifras son muy serias, los datos en un país, donde para empezar hasta el género es desigual en los servicios financieros, un 72 por ciento de hombres usa los bancos, solo un 65 por ciento de mujeres, sin embargo, si le damos la oportunidad de ahorrar, esas mujeres de ventas por catálogo sí ahorran, ellas sí cuidan su dinero, sí van a las casas y a ellas son a las que les vamos a agravar con esta disposición, 1.45 por ciento, lo que en 2018 era .46.

El año pasado se los subimos, este año las rematamos, 1.45, del 18 al 20, 300 por ciento de aumento al ahorro, no es a la diferencia, es al ahorro, lo dice perfectamente esta disposición. Qué sígnica con 500 mil pesos a una tasa promedio de 7.1 por ciento pasaría de pagar 433 pesos por este concepto a pagar 604 pesos. Son números importantes.

Por eso, amigos, es lo que sobre todo quería decirles, que este gran esfuerzo que estamos haciendo para tener una ley equilibrada, que ha hecho la mayoría para evitar errores, será insuficiente. Pero no rehuyamos nuestra responsabilidad, porque lo importante no es ver qué parece que hicimos, no podremos cambiar la realidad si las decisiones que tomamos están marcadas por un camino equivocado.

A partir del 2020 esta es responsabilidad del gobierno. La política económica está en sus manos. Esta apuesta que firmamos hoy depende solamente del gobierno. Y no quiero irme sin recordarles lo que decía el mercadólogo Peter Drucker: *"La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes".*

2020 está a la vista, todos deseamos que nos vaya bien, que nos salga bien, sobre todo al gobierno. Es el destino del país el que está en juego.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva al artículo 21, presentada por el Senador Jorge Carlos Ramírez.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Jorge Carlos Ramírez. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se acepta a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, el dictamen permanece en sus términos.

Tiene la palabra la Senadora María Guadalupe Saldaña, en lugar de la Senadora María Guadalupe Murguía.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Muy buenos días. Muchas gracias.

Honorable Asamblea, en Baja California Sur, mi estado, vamos a cumplir un año de recibir un trato discriminatorio. El decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte solo abarcó una parte de la región, dejando a mi entidad fuera de los beneficios que por derecho y por historia nos corresponden. Para establecer este programa de beneficios se eligió, por cierto, un decreto gubernamental y no la modificación de la Ley del IVA y la del ISR, lo cual se había prometido en campaña.

Hay muchas iniciativas de reformas que no se han dictaminado y que están ahí en un cajón, en donde pedimos y explicamos por qué Baja California Sur tiene que entrar en esa franja fronteriza. Hay una evidente discriminación al expedir un régimen de contribuciones en la frontera y negarlo para una entidad que recibió ese trato durante varias décadas, no por una concesión graciosa, sino por causas más que justificadas.

Sufrimos las tarifas más altas de energía eléctrica, no se elevaron los salarios mínimos en mi estado como en la frontera, ni gozamos de los precios preferenciales de combustibles, pero para efectos aduaneros, ahí, ahí sí nos la aplican, ahí sí somos región fronteriza. Qué contradictorio. Por eso la reserva que hoy presento tiene como objeto proponer, en esta Ley de Ingresos, los estímulos fiscales de la región fronteriza para reducir la tasa porcentual del IVA al 8 por ciento en Baja California Sur.

Y, por otra parte, algo que es fundamental, que este régimen quede en la ley y no sujeto a la voluntad presidencial, como está ahorita, establecido solo en un decreto. Debemos, además, ser claros. El estímulo del IVA para la zona norte del país, decretado por el gobierno federal, no apoya a la totalidad de la población, solo a los intermediarios en la cadena productiva.

Por tanto, esa reducción debe estar respaldada en una ley y que los beneficios sean para todos, como se prometió en campaña. Sabemos que no hay voluntad para aceptarlo, pero vamos a seguir insistiendo. Ya lo logramos temprano en el tema del agua, vamos a seguir con este tema porque se lo merece Baja California Sur. No se vale guardar silencio ante esta situación.

Este Senado debe ser sensible con estados como el nuestro. Por ello, propongo adicionar un Artículo Décimo Sexto Transitorio, en donde se propone reducir el IVA al 8 por ciento y por supuesto se propone incluir a mi estado, Baja California Sur.

Es cuanto, muchas gracias.

¿Si puedo pedir por tablero que se vote, señora Presidenta?

Me acompañan cinco, por favor. Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Vamos a hacer la votación económica y le solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se acepta a discusión la adición de un Artículo Transitorio que propone la Senadora Lupita Saldaña.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la Senadora Lupita Saldaña. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión la reserva presentada, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. En consecuencia, el dictamen queda en sus términos.

La Senadora María Guadalupe Murguía pidió que su registro de reserva sea integrado al Diario de los Debates.

La Senadora Gabriela Benavides Cobos también tiene una reforma al artículo 21, que nos ha pedido incorporar al Diario de los Debates.

El Senador José Erandi Bermúdez también presentó una reserva al artículo 21, que nos ha pedido que se incorpore al Diario de los Debates.

El Senador Juan Zepeda había presentado la reserva al Artículo Décimo Quinto Transitorio, ya queda superada.

La Senadora Minerva Hernández Ramos tiene la palabra para presentar una reserva de modificación al Artículo Décimo Quinto Transitorio y la adición de dos Artículos Transitorios.

La Senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros:

Quiero insistir y sensibilizarlos a que enfrentemos juntos y fortalezcamos a los municipios financieramente hablando. Hay que darles viabilidad para que puedan atender la multiplicidad de necesidades sociales y hacer frente a la seguridad fortaleciendo a sus policías municipales. Estamos proponiendo adicionar un Artículo Transitorio en el que se establezca que el Congreso de la Unión ajustará las leyes correspondientes para que se modifique la estructura del Fortamun, de tal forma que el porcentaje que hoy se prevé para seguridad pueda tener un incremente respecto de la recaudación federal participable, como mínimo un 50 por ciento, para pasar del 2.35 al 3.05.

A través de otra reserva y fieles en el PAN a la tradición municipalista, estamos proponiendo deslizar el superávit del balance primario en 0.1 por ciento como una medida contracíclica por vía del gasto, para que los municipios puedan invertir en infraestructura y combatir la inseguridad, esto permitirá que haya 26 mil millones de pesos destinados a todos los municipios del país que mucho lo requieren. Además, abonando a esta vocación federalista y convencidos de que es urgente plantear una reingeniería en nuestras finanzas públicas, creemos indispensable que se haga una revisión de los mecanismos de coordinación fiscal vigentes, las fórmulas de distribución de aportaciones y participaciones hay que actualizarlas en beneficio de un verdadero federalismo fiscal.

Por lo cual proponemos que las Juntas de Coordinación Política de Diputados y de Senadores convoque cuanto antes a la celebración de una Convención Nacional Hacendaria, en la que puedan participar tanto el gobierno federal, como los congresos locales, los órganos autónomos, las cámaras empresariales, los colegios de profesionales, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto. Hay que hacerlo por México, compañeras y compañeros.

Debo decir que las iniciativas que pretenden a través de transitorios, dar fortaleza financiera a los municipios también ha sido suscrita, solidariamente por la Senadora Nuvia Mayorga a quien agradezco su respaldo.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Minerva.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la Senadora Minerva Hernández Ramos.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la Senadora Minerva Hernández. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, el dictamen permanece en sus términos.

Tiene la palabra el Senador Juan Manuel Fócil Pérez. Me reportan que declina.

La Senadora Xóchitl Gálvez nos dejó, para el Diario de los Debates, la presentación de su reserva para adicionar un Artículo Transitorio.

La Senadora Gloria Núñez Sánchez en el mismo sentido, también para agregar un Artículo Transitorio dejó su participación para integrarse en el Diario de los Debates.

Finalmente, tiene la palabra la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, para presentar una modificación que adiciona dos Artículos Transitorios.

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge: Con la venía de la Presidencia. Compañeras Senadoras y compañeros Senadores.

Es hora de pasar de los dichos a los hechos, de la retórica al compromiso, de las promesas de campaña a los verdaderos retos de gobierno y uno de los más apremiantes es que estamos perdiendo competitividad de

manera acelerada. Como Senadora de Baja California conozco, de primera mano, las repercusiones que tiene este retroceso económico para la región, el tema de los impuestos fronterizos se ha estudiado ampliamente, pero a pesar de ello el gobierno no aplica soluciones integrales ni las medidas especiales que la región requiere.

Por poner un ejemplo, Baja California que colinda con el estado de California, cuya economía es 125 veces mayor y ni hablar del diferencial de competitividad, por lo que urgen consideraciones económicas especiales. Es por ello que propongo como reserva que se adicione un Artículo Décimo Sexto Transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2020, para efecto de que en un plazo máximo de tres meses el Congreso de la Unión realice las adecuaciones necesarias, a efecto de solucionar la problemática de la tasa aplicable a la región fronteriza de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; es decir, vamos a seguir insistiendo, compañeras y compañeros, que se ponga la Ley del IVA, la reducción del 16 al 8 por ciento, no a través de un decreto presidencial, sino a través de la ley; un decreto presidencial no está generando certidumbre económica en la zona fronteriza.

Hay muchas empresas, muchos contribuyentes que no han podido lograr cumplir con los requisitos que establece el multicitado decreto, es por lo que se considera y creemos que es importante que se establezca, de una vez por todas, en la Ley del Impuesto al Valor Agregado la reducción del 16 al 8 por ciento.

Por otro lado, propongo un Artículo Décimo Séptimo Transitorio para que la exención del ISR en horas extras laboradas por los trabajadores sea analizada por el Ejecutivo Federal y por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados toda vez que la eliminación del ISR apoyará a los trabajadores de nuestro país, a sus familias y a la economía nacional.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Cruz, en el sentido de adicionar dos Artículos Transitorios al dictamen.

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la Senadora Gina Andrea Cruz. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, el dictamen permanece en sus términos.

En virtud de que hemos agotado la presentación de reservas y adiciones, vamos abrir el sistema electrónico y vamos a hacer las dos votaciones, dos bloques de votación.

En el primero van a venir las modificaciones aceptadas por este Pleno.

Y en el segundo bloque los artículos que permanecen en los términos del dictamen.

En consecuencia, ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 1o. y el Artículo Séptimo Transitorio, con las modificaciones aceptadas, con la eliminación del Artículo Décimo Quinto Transitorio y la adición de un Artículo Transitorio al proyecto de Decreto con el número y el orden que le corresponda.

Sonido, por favor, al escaño del Senador Zepeda.

El Senador Damián Zepeda Vidales: (Desde su escaño) Señora Presidenta, sé que esta es la modalidad que se ha tomado de poner en un bloque lo que sí se modificó y en otro lo que respetando esto, simplemente explicar, este bloque modificado incluye el artículo primero, a mí en lo personal me imposibilita votarlo a favor, porque el artículo 1o. es la carátula e incluye el monto global de la Ley de Ingresos que trae la suma de todos los impuestos incluyendo IEPS a gasolina, en fin. Y va junto con otros artículos que sí quisiéramos o sí quisieran acompañar, como por ejemplo la eliminación del artículo de los autos conocidos como “chocolates”.

Entonces, simplemente, y además el tema de las cuotas y demás, que creo que son positivos, simplemente para registro en el Diario de los Debates, de que hubiera sido o es nuestra intención.

Acompañamos de manera económica cuando se votaron los cambios de esos artículos, pero si está en un bloque con el artículo 1o., no podemos votarlo a favor. Y ese es el motivo del voto.

Gracias, señora Presidenta.

Para registro simplemente en Diario de los Debates.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Vamos a proceder a los dos bloques de votación y queda su intervención registrada en el Diario de los Debates.

Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 1o. y el Artículo Séptimo Transitorio, con las modificaciones aceptadas, la eliminación del Artículo Décimo Quinto Transitorio al proyecto de Decreto y la adición de un Artículo Transitorio al proyecto de Decreto, con el número y orden que le corresponda.

(VOTACIÓN)

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Pregunto, si falta alguna Senadora o algún Senador por emitir su voto.

¿Falta alguna Senadora o algún Senador por emitir su voto?

Señora Presidenta, conforme al registro del sistema electrónico, se emitieron 58 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 1o. y Séptimo Transitorio, se elimina el Artículo Décimo Quinto Transitorio del proyecto y se adiciona un Artículo Transitorio al proyecto con el número y el orden que corresponda.

Vamos a proceder a la siguiente votación del bloque de los artículos que permanecen en los términos del dictamen. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 2o., 16 y 21, y los Artículos Segundo y Décimo Cuarto Transitorio en los términos del dictamen.

Todavía no termina la sesión, Senadoras y Senadores, les ruego unos minutos, por favor, faltan un par de dictámenes.

Dé cuenta de la votación. ¿Quién está?

La Secretaria Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez: Pregunto, si falta alguna Senadora o algún Senador por emitir su voto. Sigue abierto el tablero.

Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 51 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Quedan aprobados los artículos 2o., 16 y 21, y los Artículos Segundo y Décimo Cuarto Transitorio en los términos del dictamen.

En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. **Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.**

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P2A.-5694

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Octubre 25 del 2019.

CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
P R E S E N T E

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene **PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020**, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

A t e n t a m e n t e

SEN. PRIMO DOTHÉ MATA
Secretario

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Capítulo I
De los Ingresos y el Endeudamiento Público

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran:

CONCEPTO			Ingreso Estimado
TOTAL			**6,107,732.4**
1.	**Impuestos**		**3,505,822.4**
	11.	Impuestos Sobre los Ingresos:	1,852,852.3
		01. Impuesto sobre la renta.	1,852,852.3
	12.	Impuestos Sobre el Patrimonio.	
	13.	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones:	1,534,055.8
		01. Impuesto al valor agregado.	1,007,546.0

02.	Impuesto especial sobre producción y servicios:		515,733.5
	01.	Combustibles automotrices:	342,053.6
		01. Artículo 2o., fracción I, inciso D).	313,321.0
		02. Artículo 2o.-A.	28,732.6
	02.	Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:	62,165.7
		01. Bebidas alcohólicas.	18,888.4
		02. Cervezas y bebidas refrescantes.	43,277.3
	03.	Tabacos labrados.	43,679.4
	04.	Juegos con apuestas y sorteos.	2,968.8
	05.	Redes públicas de telecomunicaciones.	5,923.3
	06.	Bebidas energetizantes.	11.6
	07.	Bebidas saborizadas.	28,660.5
	08.	Alimentos no básicos con alta densidad calórica.	23,783.2
	09.	Plaguicidas.	758.1
	10.	Combustibles fósiles.	5,729.3
03.	Impuesto sobre automóviles nuevos.		10,776.3
14.	Impuestos al Comercio Exterior:		70,984.6
	01.	Impuestos al comercio exterior:	70,984.6
		01. A la importación.	70,984.6
		02. A la exportación.	0.0

15.	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables.	
16.	Impuestos Ecológicos.	
17.	Accesorios de impuestos:	41,210.2
	01. Accesorios de impuestos.	41,210.2
18.	Otros impuestos:	6,850.3
	01. Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.	6,850.3
	02. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación.	0.0
19.	Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	-130.8
2.	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**374,003.2**
21.	Aportaciones para Fondos de Vivienda.	0.0
	01. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.	0.0
22.	Cuotas para la Seguridad Social.	374,003.2
	01. Cuotas para el Seguro Social a cargo de	374,003.2

patrones y trabajadores.

23.	Cuotas de Ahorro para el Retiro.	0.0
01.	Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones.	0.0
24.	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social:	0.0
01.	Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores.	0.0
02.	Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares.	0.0
25.	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.	0.0
3.	**Contribuciones de Mejoras**	**44.8**
31.	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas:	44.8
01.	Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.	44.8
39.	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
4.	**Derechos**	**51,671.8**

41.	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público:	42,740.8
01.	Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	346.2
02.	Secretaría de la Función Pública.	0.0
03.	Secretaría de Economía.	2,670.7
04.	Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	8,748.2
05.	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	11,776.9
06.	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	72.3
07.	Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	0.0
08.	Secretaría de Educación Pública.	0.2
09.	Instituto Federal de Telecomunicaciones.	19,126.3
10.	Secretaría de Cultura	0.0
43.	Derechos por Prestación de Servicios:	8,931.0
01.	Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público:	8,931.0
01.	Secretaría de Gobernación.	91.1
02.	Secretaría de Relaciones Exteriores.	4,915.0
03.	Secretaría de la Defensa Nacional.	145.5
04.	Secretaría de Marina.	445.0
05.	Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	588.6

06.	Secretaría de la Función Pública.	23.0
07.	Secretaría de Energía.	0.2
08.	Secretaría de Economía.	21.9
09.	Secretaría de Agricultura, y Desarrollo Rural.	42.9
10.	Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	1,081.6
11.	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	85.1
	01. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
	02. Otros.	85.1
12.	Secretaría de Educación Pública.	1,255.9
13.	Secretaría de Salud.	0.0
14.	Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	9.4
15.	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.	61.1
16.	Secretaría de Turismo.	0.0
17.	Fiscalía General de la República.	0.0
18.	Instituto Federal de Telecomunicaciones.	30.1
19.	Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0

20.	Comisión Reguladora de Energía.	0.0
21.	Comisión Federal de Competencia Económica.	0.0
22.	Secretaría de Cultura.	58.4
23.	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	76.2
44.	Otros Derechos.	0.0
45.	Accesorios de Derechos.	0.0
49.	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
5.	**Productos**	**10,095.3**
51.	Productos.	10,095.3
01.	Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público.	8.8
02.	Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público:	10,086.5
01.	Explotación de tierras y aguas.	0.0
02.	Arrendamiento de tierras, locales y construcciones.	0.3
03.	Enajenación de bienes:	1,859.6
01.	Muebles.	1,743.5
02.	Inmuebles.	116.1

04.	Intereses de valores, créditos y bonos.	7,687.4
05.	Utilidades:	539.1
01.	De organismos descentralizados y empresas de participación estatal.	0.0
02.	De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.	0.0
03.	De Pronósticos para la Asistencia Pública.	538.6
04.	Otras.	0.5
06.	Otros.	0.1
59.	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
6.	**Aprovechamientos**	**103,674.4**
61.	Aprovechamientos:	103,639.0
01.	Multas.	2,190.5
02.	Indemnizaciones.	2,531.7
03.	Reintegros:	166.5
01.	Sostenimiento de las escuelas artículo 123.	0.0
02.	Servicio de vigilancia forestal.	0.1

	03. Otros.	166.4
04.	Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica.	94.8
05.	Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación.	0.0
06.	Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación.	0.0
07.	Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del Sistema Escolar Federalizado.	0.0
08.	Cooperación de la Ciudad de México por servicios públicos locales prestados por la Federación.	0.0
09.	Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de particulares para alcantarillado, electrificación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas.	0.0
10.	5 por ciento de días de cama a cargo de establecimientos particulares para internamiento de enfermos y otros destinados a la Secretaría de Salud.	0.0

11.	Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica.	947.8
12.	Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.	1,129.7
13.	Regalías provenientes de fondos y explotación minera.	0.0
14.	Aportaciones de contratistas de obras públicas.	7.6
15.	Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal:	0.5
	01. Aportaciones que efectúen los Gobiernos de la Ciudad de México, Estatales y Municipales, los organismos y entidades públicas, sociales y los particulares.	0.0
	02. De las reservas nacionales forestales.	0.0
	03. Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.	0.0
	04. Otros conceptos.	0.5
16.	Cuotas Compensatorias.	142.4
17.	Hospitales Militares.	0.0
18.	Participaciones por la explotación de	0.0

	obras del dominio público señaladas por la Ley Federal del Derecho de Autor.	
19.	Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal.	0.0
20.	Provenientes del programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras.	0.0
21.	No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios.	0.0
22.	Otros:	96,427.5
	01. Remanente de operación del Banco de México.	0.0
	02. Utilidades por Recompra de Deuda.	0.0
	03. Rendimiento mínimo garantizado.	0.0
	04. Otros.	96,427.5
23.	Provenientes de servicios en materia energética:	0.0
	01. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
	02. Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0
	03. Comisión Reguladora de Energía.	0.0
62.	Aprovechamientos Patrimoniales.	35.4

01.	Recuperaciones de capital:	35.4
01.	Fondos entregados en fideicomiso, a favor de Entidades Federativas y empresas públicas.	27.6
02.	Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas privadas y a particulares.	7.8
03.	Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.	0.0
04.	Desincorporaciones.	0.0
05.	Otros.	0.0
63.	Accesorios de Aprovechamientos.	0.0
69.	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
7.	**Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**	**1,065,166.0**
71.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social:	72,232.9
01.	Instituto Mexicano del Seguro Social.	26,920.2
02.	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.	45,312.7
72.	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de	992,933.1

	Servicios de Empresas Productivas del Estado:	
	01. Petróleos Mexicanos.	574,535.0
	02. Comisión Federal de Electricidad.	418,398.1
73.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.	
74.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.	
75.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	
76.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	
77.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.	
78.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos.	
79.	Otros Ingresos.	

8.	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**	
81.	Participaciones.	
82.	Aportaciones.	
83.	Convenios.	
84.	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.	
85.	Fondos Distintos de Aportaciones.	
9.	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**412,797.7**
91.	Transferencias y Asignaciones.	0.0
93.	Subsidios y Subvenciones.	0.0
95.	Pensiones y Jubilaciones.	0.0
97.	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.	412,797.7
01.	Ordinarias.	412,797.7
02.	Extraordinarias.	0.0
0.	**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**584,456.8**
01.	Endeudamiento interno:	569,582.1
01.	Endeudamiento interno del Gobierno Federal.	532,266.1
02.	Otros financiamientos:	37,316.0
01.	Diferimiento de pagos.	37,316.0

	02. Otros.	0.0
02.	Endeudamiento externo:	0.0
	01. Endeudamiento externo del Gobierno Federal.	0.0
03.	Financiamiento Interno.	
04.	Déficit de organismos y empresas de control directo.	-47,748.8
05.	Déficit de empresas productivas del Estado.	62,623.5
Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal (0.01.01+0.02.01)		532,266.1

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este precepto.

Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal de 2020, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos.

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2020, se proyecta una recaudación federal participable por 3 billones 394 mil 236.7 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal de 2020, el gasto de inversión del Gobierno Federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto.

Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2020, en términos monetarios, el pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, previsto en la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 895.1 millones de pesos.

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el artículo Segundo Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas

de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho Transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados.

En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por parte del Ejecutivo Federal, de los bienes y derechos del fideicomiso referido en el primer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en cuentas de orden, con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo esas operaciones.

El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará en primer término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las operaciones referidas en el párrafo anterior y, posteriormente, se destinarán para restituir al Gobierno Federal los recursos públicos aportados

para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto.

Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2020 se destinen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del ejercicio fiscal de 2020, se instrumenten para potenciar los recursos que, con cargo a dicho fondo, reciben las entidades federativas.

Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El gasto de inversión a que se refiere el párrafo sexto del presente artículo se reportará en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de los ingresos generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.61.22.04 del presente artículo por concepto de otros aprovechamientos. Asimismo, deberá informar los destinos específicos que, en términos del artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan dichos aprovechamientos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2020, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Durante el ejercicio fiscal 2020, los ingresos propios de Petróleos Mexicanos que se generen por un precio promedio anual del barril del petróleo crudo mexicano que exceda de 49.01 dólares de los Estados Unidos de América y hasta los 55.00 dólares de los Estados Unidos de América, deberá destinarlos a mejorar su meta de balance financiero aprobada en el artículo 5 del

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 532 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El

cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo.

Las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior no deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para el ejercicio fiscal de 2020.

Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente se podrán aplicar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario incluyendo

sus artículos transitorios. Sobre estas operaciones de canje y refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión.

El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta propia con los valores referidos.

En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos en la cuenta que, para tal efecto, le lleve el Banco de México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el citado Banco procurará las mejores condiciones para el mencionado Instituto dentro de lo que el mercado permita.

El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco de México podrá

ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Titular de dicha Tesorería, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo.

Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores un monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el Resultado de Operación que considera la Constitución Neta de Reservas Crediticias Preventivas, de cero pesos para el ejercicio fiscal de 2020.

El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización del órgano de gobierno de la entidad de que se trate y con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los montos establecidos en el artículo 1o., numeral 0 "Ingresos derivados de Financiamientos" de esta Ley, así como el monto de endeudamiento neto

interno consignado en este artículo, se verán, en su caso, modificados en lo conducente como resultado de la distribución, entre el Gobierno Federal y los organismos y empresas de control directo, de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 1 mil 250 millones de dólares de los Estados Unidos de América; asimismo, se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

Se autoriza para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 835 millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de 508 millones de dólares de los

Estados Unidos de América, asimismo se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

El cómputo de lo establecido en los dos párrafos anteriores se realizará en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión de manera trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento.

Artículo 3o. Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México

para el Ejercicio Fiscal 2020. Asimismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar operaciones de canje, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública de la Ciudad de México.

El ejercicio del monto de endeudamiento autorizado se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 4o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 257,138.2 millones de pesos, de los cuales 100,344.1 millones de pesos corresponden a inversión directa y 156,794.1 millones de pesos a inversión condicionada.

Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad en los términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV, del Reglamento de este último ordenamiento, por un total de 2,760.7 millones de pesos que corresponde a un proyecto de inversión directa.

Artículo 6o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las

compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y/o sus empresas productivas subsidiarias deberán presentar las declaraciones, hacer los pagos y cumplir con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, ante la Tesorería de la Federación, a través del esquema para la presentación de declaraciones que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida, previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las modificaciones a los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los pagos establecidos conforme al párrafo anterior, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente a aquél en que se generen dichas modificaciones, así como en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga uso de las facultades otorgadas en el segundo párrafo de este artículo, los pagos correspondientes deberán ser transferidos y concentrados en la Tesorería de la Federación por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a más tardar el día siguiente de su recepción, a cuenta de la transferencia a que se refiere el artículo 16, fracción II, inciso g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos que, hasta antes de la entrada en vigor del "Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en términos del artículo 32 de dicha Ley, serán registrados como inversión.

Capítulo II

De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales

Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:

I. Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a

continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate:

1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26 por ciento mensual.

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53 por ciento mensual.

3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.82 por ciento mensual.

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización realizada conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos y disposiciones de carácter general expedidos en el Ramo de Hacienda, de las que hayan derivado beneficios otorgados en términos de la presente Ley, así como por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por

una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2020, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen.

Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se estará a lo siguiente:

I. La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, de similares características, en países con los que México mantiene vínculos comerciales.

II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica y de saneamiento financiero.

III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general.

Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública Federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias

interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los aprovechamientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los aprovechamientos que

perciba la dependencia correspondiente.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por dicha Secretaría, ya sea de los ingresos que obtengan o con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, o tratándose de recuperaciones de capital o del patrimonio, según sea el caso, los recursos correspondientes se destinarán por la propia Secretaría prioritariamente a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a fomentar acciones que les permitan cumplir con sus respectivos mandatos, o a programas y proyectos de inversión, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente Ley.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de cualquier otra entidad paraestatal distinta de las señaladas en el párrafo anterior, dichos ingresos serán enterados a la Tesorería de la Federación bajo dicha naturaleza, a efecto de que sean destinados a programas presupuestarios que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él deriven.

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 1o., numerales 6.61.11, 6.62.01.04 y 6.61.22.04 de esta Ley por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías

generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, aquéllos a que se refieren la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley Federal de Competencia Económica, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo en los plazos que para tales efectos se fijen, el prestador del servicio

o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación de que se trate, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos.

El prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por aprovechamientos, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de carácter particular, las cuotas de los productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal de 2020, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los productos que se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los productos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el

mismo valor vinculatorio.

En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019 hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones efectuadas tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como por el Instituto de Administración de Bienes y Activos y los accesorios de los productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en un fondo, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes que pasan a

propiedad del Fisco Federal conforme a las disposiciones fiscales, que hayan sido transferidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la citada entidad transferente, sobre bienes de la misma naturaleza; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en el fondo señalado en el párrafo anterior, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. Un mecanismo como el previsto en el presente párrafo, se podrá aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que, por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deba realizar. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el Instituto de Administración de Bienes y Activos remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados y a su Coordinadora de Sector, un informe que contenga el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las autoridades mencionadas en los párrafos citados.

Los ingresos netos provenientes de las enajenaciones realizadas por el

Instituto de Administración de Bienes y Activos se podrán destinar hasta en un 100 por ciento a financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como para el pago de los créditos que hayan sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, siempre que en el acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el convenio que al efecto se celebre se señale dicha situación. Lo anterior no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados a que se refiere el décimo tercer párrafo del artículo 13 de esta Ley. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes en proceso de extinción de dominio y de aquellos sobre los que sea declarada la extinción de dominio y de sus frutos, así como su monetización en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, serán destinados a una cuenta especial en los términos que establece el artículo 239 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 234 y 237 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por productos, así como de la concentración efectuada a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 12. Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2020 se concentrarán en términos del artículo 22 de la Ley de Tesorería de la Federación, salvo en los siguientes casos:

I. Se concentrarán en la Tesorería de la Federación, a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción, los derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, incluidos entre otros las sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, así como los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de Telecomunicaciones

y Radiodifusión;

II. Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional, sólo registrarán los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente de esta Ley, salvo por lo dispuesto en la fracción I de este artículo, y deberán conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos.

Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere esta fracción, se deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, de los informes avalados por el órgano interno de control o de la comisión respectiva del órgano de gobierno, según sea el caso, especificando los importes del impuesto al valor agregado que hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de los ingresos;

III. Las entidades de control indirecto deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en posibilidad de elaborar los informes trimestrales que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reflejen dentro de la Cuenta Pública Federal;

IV. Los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social

destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, podrán ser recaudados por las oficinas de los propios institutos o por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la Cuenta Pública Federal, y

V. Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio de la concentración en términos de la Ley de Tesorería de la Federación.

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere esta fracción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de que dichos ingresos hayan sido concentrados en la Tesorería de la Federación.

Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos.

Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se destinarán a las entidades o a las empresas productivas del Estado que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza. Las entidades o las empresas productivas del Estado podrán celebrar convenios de colaboración con la iniciativa privada.

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.

Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en la fracción que les

corresponda conforme al citado artículo.

Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de concentrar los recursos públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la Federación, en los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato análogo, así como aquellos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según su origen, y se podrán destinar a los fines que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento correspondiente. Asimismo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 6.62.01.04 del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes.

Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son accesorios.

Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán los netos que resulten de restar al ingreso percibido las erogaciones efectuadas para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a que se refiere el párrafo siguiente.

Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales son los recursos efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas. Con excepción de lo dispuesto en el séptimo párrafo de este artículo para los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, los ingresos netos a que se refiere este párrafo se enterarán o concentrarán, según

corresponda, en la Tesorería de la Federación y deberán manifestarse tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo acciones, por la enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión de derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la desincorporación de entidades, se les podrá descontar un porcentaje, por concepto de gastos indirectos de operación, que no podrá ser mayor del 7 por ciento, a favor del Instituto de Administración de Bienes y Activos, cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la citada entidad, y se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos podrán destinarse para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente con la opinión favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, sin que sea necesario concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Estos recursos deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica.

Los pasivos a cargo de organismos descentralizados en proceso de desincorporación que tengan como acreedor al Gobierno Federal, con excepción de aquéllos que tengan el carácter de crédito fiscal, quedarán extinguidos de pleno derecho sin necesidad de autorización alguna, y los créditos quedarán cancelados de las cuentas públicas.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, podrán permanecer afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. No se considerará enajenación la transmisión de bienes y derechos al Fondo de Desincorporación de Entidades que, con la opinión favorable de dicha Comisión, efectúen las entidades en proceso de desincorporación, para concluir las actividades residuales del proceso respectivo.

Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos remanentes que les correspondan de dichos procesos ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, como parte de la estrategia de conclusión de los procesos de desincorporación de entidades, entre el Instituto de Administración de Bienes y Activos y las entidades cuyos procesos de desincorporación concluyeron, podrán ser utilizados por éste, para sufragar las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, relativo a la atención de encargos bajo su administración, cuando éstos sean deficitarios. Lo anterior, estará sujeto, al cumplimiento de las directrices que se emitan para tal efecto, así como a la autorización de la Junta de Gobierno del Instituto de Administración de Bienes y Activos, previa aprobación de los órganos colegiados competentes.

Los ingresos obtenidos por la venta de bienes asegurados a favor del Gobierno Federal, incluyendo numerario, cuya administración y destino hayan sido encomendados al Instituto de Administración de Bienes y Activos, en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, serán destinados a un fondo en los términos del artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, previa deducción de los conceptos previstos en los

artículos 90, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Los ingresos provenientes de numerario y de la enajenación de bienes que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos, que hayan sido declarados abandonados por parte de las instancias competentes, distintos a los señalados en el párrafo décimo quinto del presente artículo y que se concentren a la Tesorería de la Federación, se considerarán aprovechamientos y se destinarán al financiamiento de las operaciones del Instituto, en términos de lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 89, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

El numerario decomisado y los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y previa deducción de los gastos indirectos de operación que correspondan, se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al Fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, u otras políticas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la presente Ley.

Los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, serán integrados al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley citada.

Los ingresos provenientes de la enajenación que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos de vehículos declarados abandonados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha dependencia, se destinarán de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. De la cantidad restante a los permisionarios federales se les cubrirán los adeudos generados hasta con el 30 por ciento de los remanentes de los ingresos y el resto se enterará a la Tesorería de la Federación. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 14. Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, entre las que se comprende de manera enunciativa a las siguientes:

I. Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado.

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los términos de dichas disposiciones.

Artículo 15. Durante el ejercicio fiscal de 2020, los contribuyentes a los que se les impongan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del citado Código, independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente.

Cuando los contribuyentes a los que se les impongan multas por las infracciones señaladas en el párrafo anterior corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su caso, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación o se notifique la resolución provisional a que se refiere el artículo 53-B, primer párrafo, fracción I del citado Código, pero antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 53-B, los contribuyentes pagarán el 60 por ciento de la multa que les corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior.

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2020, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que adquieran el diésel o el biodiésel y sus mezclas, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos y que para determinar su utilidad puedan deducir dichos combustibles cuando los importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento

de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles, en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2, según corresponda al tipo de combustible, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal

correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante fiscal de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

1. El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o el biodiésel y sus mezclas, por el número de litros de diésel o de biodiésel y sus mezclas importados o adquiridos.

En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.

2. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en dichas actividades, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en aduana del pedimento de importación o el precio consignado en el comprobante fiscal de adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas en las estaciones de servicio, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

III. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final en dichas actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el

CÁMARA DE SENADORES ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CIUDAD DE MÉXICO

párrafo anterior.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de los artículos 74 y 75 del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2020 y enero de 2021.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diésel o de biodiésel y sus mezclas, en el que asienten mensualmente la totalidad del diésel o del biodiésel y sus mezclas que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I

de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diésel o el biodiésel y sus mezclas que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diésel o del biodiésel y sus mezclas utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de estos combustibles en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación.

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda según el tipo de combustible, conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el número de litros importados o adquiridos.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá

efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago por la importación o adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas a distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: monedero electrónico autorizado por el Servicio de Administración Tributaria; tarjeta de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante, o bien, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México.

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al

biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, se entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal, relacionados con sus actividades económicas, sin que por ello se genere un cobro.

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 300 millones de pesos, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura mencionada hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en

que se realicen los gastos a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación del beneficio contenido en esta fracción.

VI. Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que en su proceso productivo no se destinen a la combustión.

El estímulo fiscal señalado en esta fracción será igual al monto que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda, por la cantidad del combustible consumido en un mes, que no se haya sometido a un proceso de combustión.

El monto que resulte conforme a lo señalado en el párrafo anterior únicamente podrá ser acreditado contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente

al mismo ejercicio en que se adquieran los combustibles a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización del combustible no sujeto a un proceso de combustión por tipos de industria, respecto de los litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible de que se trate, adquiridos en un mes de calendario, así como las demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal.

VII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de pesos, consistente en permitir el acreditamiento del derecho especial sobre minería a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos que hayan pagado en el ejercicio de que se trate.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción, únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tengan los concesionarios o asignatarios mineros a su cargo, correspondiente al mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación de esta fracción.

VIII. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos, y que dichos ingresos obtenidos en el ejercicio por la enajenación de libros, periódicos y revistas represente al menos el 90% de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio de que se trate.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior consiste en una deducción adicional para los efectos del impuesto sobre la renta, por un monto equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente.

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV, V, VI y VII de este apartado quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto señalen.

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente apartado no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido en esta Ley.

Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos establecidos en la presente Ley.

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno de ellos se establece en la presente Ley.

B. En materia de exenciones:

Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo.

Artículo 17. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a empresas productivas del Estado, organismos descentralizados federales que prestan

los servicios de seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza.

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.

Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.

Artículo 18. Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los tribunales administrativos, los órganos autónomos por disposición constitucional, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades, se deberán aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados de la dependencia en la Ley de Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados efectuados por dicha dependencia a la Tesorería de la Federación, en el periodo que corresponda.

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos

excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades.

Artículo 19. Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican de la siguiente manera:

I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se generan en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades relacionadas directamente con las funciones recurrentes de la institución.

II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades que no guardan relación directa con las funciones recurrentes de la institución.

III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con las atribuciones de la dependencia o entidad, tales como la recuperación de seguros, los donativos en dinero y la enajenación de bienes muebles.

IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como de los tribunales administrativos y de los órganos constitucionales autónomos. No se incluyen en esta fracción los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ni aquéllos por concepto de derechos y aprovechamientos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, los cuales se sujetan a lo dispuesto en el artículo 12, fracción I, de esta Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades a más tardar el último día hábil de enero de 2020 y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se modifiquen.

Los ingresos a que se refiere la fracción III de este artículo se aplicarán en los términos de lo previsto en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 20. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal de 2020 la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 1.45 por ciento. La metodología para calcular dicha tasa es la siguiente:

I. Se determinó la tasa de rendimiento promedio ponderado de los valores públicos por el periodo comprendido de febrero a julio de 2019, conforme a lo siguiente:

a) Se tomaron las tasas promedio mensuales por instrumento, de los valores públicos publicados por el Banco de México.

b) Se determinó el factor de ponderación mensual por instrumento, dividiendo las subastas mensuales de cada instrumento entre el total de las subastas de todos los instrumentos públicos efectuadas al mes.

c) Para calcular la tasa ponderada mensual por instrumento, se multiplicó la tasa promedio mensual de cada instrumento por su respectivo factor de ponderación mensual, determinado conforme al inciso anterior.

d) Para determinar la tasa ponderada mensual de valores públicos se sumó la tasa ponderada mensual por cada instrumento.

e) La tasa de rendimiento promedio ponderado de valores públicos

correspondiente al periodo febrero a julio de 2019 se determinó con el promedio simple de las tasas ponderadas mensuales determinadas conforme al inciso anterior del mencionado periodo.

II. Se tomaron las tasas promedio ponderadas mensuales de valores privados publicadas por el Banco de México y se determinó el promedio simple de dichos valores correspondiente al periodo de febrero a julio de 2019.

III. Se determinó un factor ponderado de los instrumentos públicos y privados en función al saldo promedio en circulación de los valores públicos y privados correspondientes al periodo de febrero a julio de 2019 publicados por el Banco de México.

IV. Para obtener la tasa ponderada de instrumentos públicos y privados, se multiplicaron las tasas promedio ponderadas de valores públicos y privados, determinados conforme a las fracciones I y II, por su respectivo factor de ponderación, determinado conforme a la fracción anterior, y posteriormente se sumaron dichos valores ponderados.

V. Al valor obtenido conforme a la fracción IV se disminuyó el valor promedio de la inflación mensual interanual del índice general correspondiente a cada uno de los meses del periodo de febrero a julio de 2019 del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

VI. La tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el valor obtenido conforme a la fracción V de este artículo por la tasa correspondiente al último tramo de la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 22. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por el incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades competentes, con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de 1 hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con base en los criterios que se establezcan para tal efecto, los cuales podrán considerar, entre otros, los días de atraso en la atención de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los requerimientos que se hubieran incumplido, o la probable afectación de los intereses patrimoniales de los clientes o usuarios de los servicios financieros.

Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al terrorismo, cometidas por las entidades financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y asesores en inversiones, serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del reporte de la operación inusual que no se

hubiera enviado, del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario de la que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas conforme a las disposiciones señaladas anteriormente, o bien con multa equivalente en moneda nacional de 10 hasta 100,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el caso de cualquier otro incumplimiento a las referidas disposiciones.

Artículo 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios que, en su caso, corresponda a las actividades mencionadas, mediante la aplicación del esquema de estímulos siguiente:

I. Calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma siguiente:

a) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado en el bimestre de que se trate, considerando el giro o actividad a la que se dedique el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

	Sector económico	Porcentaje IVA (%)
1	Minería	8.0
2	Manufacturas y/o construcción	6.0
3	Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles)	2.0
4	Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares en que se proporcionen servicios de alimentos y bebidas)	8.0
5	Negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y/o medicinas	0.0

Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores económicos mencionados en los numerales 1 a 4 aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante. Se entiende por sector preponderante aquél de donde provenga la mayor parte de los ingresos del contribuyente.

b) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios en el bimestre de que se trate, considerando el tipo de bienes enajenados por el contribuyente,

conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar

Descripción	Porcentaje IEPS (%)
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea comercializador)	1.0
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea fabricante)	3.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea comercializador)	10.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea fabricante)	21.0
Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante)	4.0
Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante)	10.0
Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador)	1.0
Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el contribuyente sea fabricante)	23.0

Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante)	120.0

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo, cuando hayan pagado el impuesto especial sobre producción y servicios en la importación de tabacos labrados y bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos C) y G) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, considerarán dicho pago como definitivo, por lo que ya no pagarán el impuesto que trasladen en la enajenación de los bienes importados, siempre que dicha enajenación se efectúe con el público en general.

c) El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta fracción será el monto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios, en su caso, a pagar por las actividades realizadas con el público en general, sin que proceda acreditamiento alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente.

d) El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios deberá realizarse por los períodos y en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades realizadas con el público en general, aquéllas por las que se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado.

Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su deducción o acreditamiento, en donde se traslade en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, dichos impuestos deberán pagarse en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones aplicables, conjuntamente con el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios determinado conforme al inciso c) de esta fracción.

Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios será aplicable, cuando proceda, en la proporción que represente el valor de las actividades por las que se expidieron comprobantes fiscales en las que se haya efectuado el traslado expreso y por separado, en el valor total de las actividades del bimestre que corresponda.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta fracción podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso deberán calcular y pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según se trate, a partir del bimestre en que abandonen la opción. En este caso, los contribuyentes no podrán volver a ejercer la opción prevista en el presente artículo.

II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las actividades realizadas con el público en general en las que determinen el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios con el esquema de porcentajes a que se refiere la fracción I del presente artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente:

a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según corresponda al número de años que tenga el contribuyente tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal:

TABLA

Años	Porcentaje de reducción (%)
1	100
2	90
3	80
4	70
5	60
6	50
7	40
8	30
9	20
10	10

Para los efectos de la aplicación de la tabla el número de años de tributación del contribuyente se determinará de conformidad con lo que al respecto se considere para los efectos del impuesto sobre la renta.

Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, cuyos ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de trescientos mil pesos, durante cada uno de los años en que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será de 100

por ciento.

Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por tributar conforme al Régimen de Incorporación Fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán al monto establecido en dicho párrafo. Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto referido, en el ejercicio siguiente no se podrá tomar el beneficio del párrafo anterior.

b) La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de reducción a que se refiere el inciso anterior será acreditable únicamente contra el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, según se trate, determinado conforme a la aplicación de los porcentajes a que se refiere la fracción I de este artículo.

III. El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo no se considerará como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.

IV. Se releva a los contribuyentes a que se refiere este artículo de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 24. Para los efectos del impuesto sobre la renta, se estará a lo siguiente:

I. Las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, siempre que dichos apoyos económicos o monetarios se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran zonas afectadas los municipios de los Estados afectados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que se listen en las declaratorias de desastre natural correspondientes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

II. Para los efectos de los artículos 82, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 138 de su Reglamento, se considera que

las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de dicha Ley, cumplen con el objeto social autorizado para estos efectos, cuando otorguen donativos a organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y cuyo objeto exclusivo sea realizar labores de rescate y reconstrucción en casos de desastres naturales, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos, se deberá cumplir con lo siguiente:

1. Contar con autorización vigente para recibir donativos al menos durante los 5 años previos al momento en que se realice la donación, y que durante ese periodo la autorización correspondiente no haya sido revocada o no renovada.

2. Haber obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior cuando menos de 5 millones de pesos.

3. Auditar sus estados financieros.

4. Presentar un informe respecto de los donativos que se otorguen a organizaciones o fideicomisos que no tengan el

carácter de donatarias autorizadas que se dediquen a realizar labores de rescate y reconstrucción ocasionados por desastres naturales.

5. No otorgar donativos a partidos políticos, sindicatos, instituciones religiosas o de gobierno.

6. Presentar un listado con el nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de las organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con la autorización para recibir donativos a las cuales se les otorgó el donativo.

b) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos, a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán cumplir con lo siguiente:

1. Estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

2. Comprobar que han efectuado operaciones de atención de desastres, emergencias o contingencias por lo menos durante 3 años anteriores a la fecha de recepción del donativo.

3. No haber sido donataria autorizada a la que se le haya

CÁMARA DE SENADORES ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CIUDAD DE MÉXICO

revocado o no renovado la autorización.

4. Ubicarse en alguno de los municipios o en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de las zonas afectadas por el desastre natural de que se trate.

5. Presentar un informe ante el Servicio de Administración Tributaria, en el que se detalle el uso y destino de los bienes o recursos recibidos, incluyendo una relación de los folios de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y la documentación con la que compruebe la realización de las operaciones que amparan dichos comprobantes.

6. Devolver los remanentes de los recursos recibidos no utilizados para el fin que fueron otorgados a la donataria autorizada.

7. Hacer pública la información de los donativos recibidos en su página de Internet o, en caso de no contar con una, en la página de la donataria autorizada.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de esta fracción.

Capítulo III
De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento

Artículo 25. Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.

La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 de marzo de 2020.

Artículo 26. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresividad.

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Los costos para las finanzas públicas de las facilidades

administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Artículo 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores lo siguiente:

A. El Presupuesto de Gastos Fiscales, a más tardar el 30 de junio de 2020, que comprenderá los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2021 en los siguientes términos:

I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el Erario Federal.

II. La metodología utilizada para realizar la estimación.

III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida.

IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso.

V. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales.

B. Un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, a más tardar el 30 de septiembre de 2020, en el que se deberá señalar, para cada una la siguiente información:

I. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de nacionales.

II. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de extranjeros.

III. Ingresos por donativos recibidos en especie de nacionales.

IV. Ingresos por donativos recibidos en especie de extranjeros.

V. Ingresos obtenidos por arrendamiento de bienes.

VI. Ingresos obtenidos por dividendos.

VII. Ingresos obtenidos por regalías.

VIII. Ingresos obtenidos por intereses devengados a favor y ganancia cambiaria.

IX. Otros ingresos.

X. Erogaciones efectuadas por sueldos, salarios y gastos relacionados.

XI. Erogaciones efectuadas por aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y jubilaciones por vejez.

XII. Erogaciones efectuadas por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

XIII. Gastos administrativos.

XIV. Gastos operativos.

XV. Monto total de percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos.

El reporte deberá incluir las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los

conceptos contenidos en los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en su Reglamento.

C. Para la generación del reporte a que se refiere el Apartado B de este artículo, la información se obtendrá de aquélla que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración de las personas morales con fines no lucrativos correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La información sobre los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos a que se refiere el Apartado B de este artículo, se obtendrá de los datos reportados a más tardar el 31 de julio de 2020, en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a que se refiere el artículo 82, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se entenderá por gastos administrativos y operativos lo siguiente:

I. Gastos administrativos: los relacionados con las remuneraciones al personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento y conservación, los impuestos y derechos federales o locales, así como las demás contribuciones y aportaciones que en términos de las disposiciones legales respectivas deba cubrir la donataria siempre que se efectúen

en relación directa con las oficinas o actividades administrativas, entre otros. No quedan comprendidos aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

II. Gastos operativos: aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

La información a que se refieren los Apartados B y C de este artículo, no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2o., fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Artículo 28. En el ejercicio fiscal de 2020, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente:

I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes.

II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.

III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización.

IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años. Se deberá entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de Diputados.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020, salvo lo dispuesto en el transitorio Séptimo, el cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto, mismo que será aplicable en el ejercicio fiscal de 2019 respecto de los recursos que las entidades federativas y municipios hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación en dicho ejercicio, correspondientes a ejercicios fiscales de 2017 y 2018.

Segundo. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se refiere el informe que, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha rendido el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2019.

Tercero. Para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se modifique la denominación de alguna dependencia o entidad o las existentes desaparezcan, se entenderá que los ingresos estimados para éstas en la presente Ley corresponderán a las dependencias o entidades cuyas denominaciones hayan cambiado o que absorban las facultades de aquéllas que desaparezcan, según corresponda..

Cuarto. Durante el ejercicio fiscal de 2020 el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013 continuará destinándose en los términos del citado precepto.

Quinto. Durante el ejercicio fiscal 2020 las referencias que en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, así como en los artículos 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos se entenderán hechas también al Servicio de Administración Tributaria.

Sexto. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales la información sobre los ingresos excedentes que, en su caso, se hayan generado con respecto al calendario de ingresos derivado de la Ley de Ingresos de la Federación a que se refiere el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En este reporte se presentará la

comparación de los ingresos propios de las entidades paraestatales bajo control presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado, así como del Gobierno Federal. En el caso de éstos últimos se presentará lo correspondiente a los ingresos provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Séptimo. Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado. Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas, así como la atención de desastres naturales.

Para efectos de lo anterior, los aprovechamientos provenientes de los enteros que realicen las entidades federativas y municipios en términos del presente transitorio, respecto de ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor de las obligaciones de reintegro a la Tesorería de la Federación

establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras, siempre y cuando dichas disponibilidades hayan estado depositadas en cuentas bancarias de la entidad federativa y/o municipio.

Octavo. En el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria deberá publicar estudios sobre la evasión fiscal en México. En la elaboración de dichos estudios deberán participar instituciones académicas de prestigio en el país, instituciones académicas extranjeras, centros de investigación, organismos o instituciones nacionales o internacionales que se dediquen a la investigación o que sean especialistas en la materia. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio fiscal de 2020.

Noveno. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante el ejercicio fiscal 2020 y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requerirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de los pagos a que se refiere el párrafo anterior con cargo a las participaciones y transferencias federales, garantizando que las entidades federativas cuenten con solvencia para la atención de sus necesidades primordiales.

El Instituto, conforme a los modelos autorizados por su órgano de gobierno, podrá suscribir con las entidades federativas y, en su caso, los municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales que correspondan, los convenios para la regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos. El plazo máximo para cubrir los pagos derivados de dicha regularización será de 15 años. Asimismo, en adición a lo previsto en artículo 22 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el marco de la celebración de los referidos convenios, dicho Instituto deberá otorgar descuentos en los accesorios generados a las contribuciones adeudadas excepto los correspondientes a las cuotas y aportaciones que deban ser depositadas en las cuentas individuales de los trabajadores. Para tal efecto, deberán adecuar los convenios de incorporación voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para incluir en el mismo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 204 de dicha Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá aceptar como fuente de pago bienes inmuebles que se considerarán como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse a las cuentas individuales de los trabajadores. El

Instituto determinará si los bienes a los que se refiere este párrafo, resultan funcionales para el cumplimiento de su objeto, asegurándose que se encuentren libres de cualquier gravamen o proceso judicial y que el monto del adeudo no sea mayor al valor del avalúo efectuado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. En estos casos, la entidad federativa, municipio, dependencia o entidad del gobierno local, según corresponda, deberá cubrir los gravámenes y demás costos de la operación respectiva, los cuales no computarán para el cálculo del importe del pago.

Décimo. Las dependencias y entidades que coordinen la operación de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos, salvo los que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concentrarán en la Tesorería de la Federación, en términos de las disposiciones específicas que emita, los recursos públicos disponibles no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 en dichos vehículos, salvaguardando en todo momento los derechos de terceros.

Los aprovechamientos que se generen se destinarán a gasto de inversión así como a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Los programas de inversión deberán registrarse en la cartera de inversión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior no será obligatorio a los instrumentos jurídicos que por disposición expresa de ley los recursos públicos deban permanecer en el patrimonio o afectos a los mismos, así como a aquéllos en materia de pensiones y seguridad social, desastres naturales, infraestructura, estabilización de

ingresos incluyendo al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y aquéllos que sirvan como mecanismo de garantía o fuente de pago de obligaciones a cargo del Gobierno Federal o sus entidades paraestatales.

Dicha dependencia deberá señalar en los informes trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas, sobre el monto y el destino que dé a los recursos utilizados conforme a lo previsto en este párrafo.

Asimismo, las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, un informe de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos susceptibles de extinguirse en términos de las disposiciones aplicables, lo anterior a efecto de que durante el ejercicio fiscal 2020 se lleven a cabo los actos necesarios para la extinción de dichos vehículos.

Décimo Primero. Los contratos de fideicomiso y mandato públicos deberán prever que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá disponer en cualquier momento del patrimonio de éstos, asimismo, deberán establecer la obligación de las instituciones fiduciarias o mandatarias, de concentrar trimestralmente en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos, los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado para el cumplimiento de su objeto, salvo disposición de carácter general en contrario.

Las instituciones fiduciarias o mandatarias de fideicomisos, mandatos o

análogos públicos, deberán concentrar de forma trimestral en la Tesorería de la Federación los intereses generados por dichos instrumentos financieros, salvo aquéllos que impliquen el pago de gastos de operación de dichos vehículos, bajo la naturaleza de aprovechamientos, y se destinarán a gasto en salud o de inversión en infraestructura, lo anterior con excepción de aquellos vehículos financieros que por disposición expresa de ley, decreto o determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dichos recursos deban permanecer afectos a su patrimonio o destinados al objeto correspondiente. Para efectos de lo anterior, las dependencias coordinadoras de dichos vehículos deberán realizar los actos necesarios para modificar en el primer semestre del ejercicio fiscal los instrumentos jurídicos respectivos.

Décimo Segundo. Se instruye a la institución fiduciaria del fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria para que durante el mes de marzo del presente ejercicio, concentre en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos los recursos que integran el patrimonio fideicomitido a esa fecha a fin de destinarlos, mediante el mecanismo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a proyectos de inversión de infraestructura económica para la construcción, ampliación o rehabilitación de puertos, así como para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros que mejoren la conectividad entre los puertos.

Para efectos de lo anterior, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el citado fideicomiso no podrá asumir compromisos adicionales y

únicamente podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción, la cual deberá formalizarse a más tardar en el mes de junio del presente ejercicio fiscal. Las obligaciones asumidas que se tengan con terceros, serán cubiertas con cargo al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Décimo Tercero. Durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2020, la institución fiduciaria del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados deberá concentrar en la Tesorería de la Federación los recursos remanentes previstos en su patrimonio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, o bien, para los destinos establecidos en el Séptimo transitorio de esta Ley.

Décimo Cuarto.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Comisión Federal de Electricidad podrá implementar programas de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica de entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y organismos públicos prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos, a través de la celebración de convenios con cualquiera de las personas morales de la administración

pública antes mencionadas.

Los programas serán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 y se implementarán a través de la celebración de convenios a los que se refiere el párrafo anterior, se sujetarán, sin perjuicio de las demás disposiciones jurídicas aplicables, a las reglas de operación que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las cuales podrán considerar las características del solicitante, pudiéndose condonar el pago de hasta el 50 por ciento del adeudo, y que el resto de éste sea cubierto mediante parcialidades, y en caso de incumplimiento, los convenios permitirán que la Comisión Federal de Electricidad pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la compensación parcial a cargo de las partidas federales que le correspondan a las entidades federativas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y las disposiciones derivadas de éste, previendo que las entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México cuenten con solvencia para la atención de sus requerimientos de gasto público.

Décimo Quinto. Con el fin de promover el saneamiento de los créditos adeudados por concepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos y sus accesorios, con excepción de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, por parte de Entidades Federativas, Municipios y Organismos Descentralizados que estén excluidas o no comprendidas en leyes o decretos como sujetos de aseguramiento, se autoriza al Instituto Mexicano del Seguro Social durante el Ejercicio Fiscal de 2020 a suscribir convenios de pago en parcialidades a un plazo máximo de hasta 6 años.

Para tal efecto, las participaciones que con cargo al Fondo General de Participaciones corresponda recibir a las Entidades Federativas y los Municipios, así como sus respectivos Entes Públicos, servirán como fuente de pago de los importes convenidos, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retendrá el monto correspondiente a las parcialidades determinadas en los convenios y realizará el entero directo de dichos importes al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizado con ello la adecuada financiación de los servicios de salud y seguridad social.

SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.-
Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
Presidenta

SEN. PRIMO DOTHÉ MATA
Secretario

Se devuelve la Minuta CD-LXIV-II-1P-096 a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes, Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.

DR. ARTURO GARITA
Secretario General de Servicios Parlamentarios

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Declaratoria de Publicidad.
Octubre 30 del 2019.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DICTAMEN A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, inciso E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Comisión Legislativa dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de las Cámara de Diputados, se abocó al análisis, discusión y valoración de la minuta con proyecto de Decreto que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la deliberación que realizaron los integrantes de esta Comisión Legislativa, se somete a la consideración de esa Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

METODOLOGÍA.

I. En el capítulo denominado "ANTECEDENTES", se describe el proceso legislativo seguido desde la presentación de las iniciativas objeto de la presente minuta, hasta su turno a esta Comisión como minuta.

II. En el capítulo "CONTENIDO DE LA MINUTA", se hace referencia a las razones, situación y circunstancias que se analizaron por la Colegisladora para fundamentar su postura.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

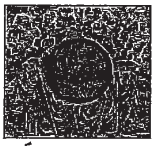
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN", se explican los argumentos jurídicos, doctrinales y pragmáticos en las que se sustentan las consideraciones del presente dictamen.

ANTECEDENTES.

1. Con fecha 8 de septiembre de 2019, el titular del Poder Ejecutivo Federal presentó al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento de los artículos 74, fracción IV de dicho ordenamiento, 7o. de la Ley de Planeación y 40 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

2. En igual fecha, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la Iniciativa citada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen, mediante oficio número D.G.P.L.64-II-1-1044.

3. De igual forma, se enfatiza que los integrantes de esta Comisión dictaminadora realizaron diversos trabajos a efecto de contar con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de las citadas iniciativas, expresar sus consideraciones de orden general y específico sobre ellas e integrar el presente dictamen, entre otros, la solicitud de los Impactos Presupuestarios, mismos que fueron elaborados por el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, la celebración de un parlamento abierto sobre el análisis del paquete económico para 2020, celebrado del 2 al 8 de octubre de 2019, la realización de mesas técnicas de trabajo al seno de la Comisión, así como participaciones de los proponentes de las iniciativas en los términos que señala el Reglamento de la Cámara de Diputados.



CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

4. En reunión ordinaria del 18 de octubre de 2019, los integrantes de las Comisión de Hacienda y Crédito Público, revisaron el contenido de las citadas Iniciativas y aprobaron el dictamen correspondiente.

5. En sesión de igual fecha, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Minuta materia de este dictamen con 258 votos en pro, 104 en contra y 2 abstenciones, el dictamen correspondiente y ordenó el envío de la minuta a la H. Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

6. El 24 de octubre del año en curso, el Pleno del Senado de la República aprobó con modificaciones la Minuta remitida por esta Soberanía y ordenó el envío de la minuta a la H. Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

7. El 25 de octubre de 2019, se recibió en la H. Cámara de Diputados la minuta enviada por la Colegisladora y mediante oficio número DGPL 64-II-1-1318, la Presidencia la turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para la elaboración del dictamen de ley.

8. Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público realizaron el análisis y valoración del contenido de la citada minuta, expresaron sus consideraciones de orden general y específico sobre ella e integraron el presente dictamen.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La minuta que se dictamina contiene una serie de cambios en relación con la remitida por la Cámara de Origen, mismos que se describen a continuación:

Ajustes a la carátula de ingresos (artículo 1o.)

La Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, presentada por el Ejecutivo Federal no contempla nuevos impuestos, ni aumentos a los vigentes, no obstante derivado de las modificaciones efectuadas a diversas disposiciones fiscales, así como de un mejor y más eficiente manejo de los activos del Gobierno Federal, resultó necesario realizar ajustes de la carátula de ingresos estimando obtener un total de 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos (mdp) por concepto de ingreso estimado, de los cuales 51 mil 671.8 mdp corresponden a Derechos, así como 103 mil 674.4 mdp por Aprovechamientos.

Disponibilidad de recursos federales que no hayan sido devengados por las entidades federativas y municipios. (transitorio Séptimo, primer párrafo)

La Cámara Revisora consideró conveniente, en atención a una debida técnica normativa, modificar el párrafo primero del transitorio Séptimo del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, a fin de eliminar en dicha disposición la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de emitir lineamientos para la asignación de destino a los recursos federales que no hayan sido devengados por las entidades federativas y municipios.

Lo anterior, en virtud de que Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya prevén el tratamiento de los recursos que no se devengan, ni son pagados al concluir el ejercicio fiscal, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no podría establecer a través de los lineamientos un tratamiento

distinto para dichos recursos, ni modificar o alterar el contenido de las Leyes antes referidas.

En ese sentido, se consideró que la disposición en comento limitaría el ejercicio de los recursos a los fines específicos que la misma señala, lo que podría afectar el tratamiento y destino de los propios recursos, haciendo poco ágil el procedimiento de entrega de los mismos.

Por lo antes expuesto, lo adecuado es que la referida Dependencia en la asignación que haga al destinar los recursos, se apegue a las disposiciones jurídicas aplicables.

Regularización de vehículos de procedencia extranjera e ilegal estancia en el territorio nacional. (transitorio Décimo Quinto)

La Cámara de Senadores consideró improcedente establecer un plazo en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 que se pretende expedir, para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.

Lo anterior, en virtud de que al anunciar la implementación de nuevos programas de regularización para este tipo de vehículos, se fomentaría una mayor introducción ilegal de los mismos. Adicional a que se generaría un grave problema de seguridad provocado por los vehículos ilegales, ya que debido a la dificultad para identificarlos los mismos son utilizados para la comisión de actos ilícitos.

Autorización al Instituto Mexicano del Seguro Social para suscribir convenios de pago en parcialidades a un plazo máximo de hasta 6 años. (nuevo transitorio Décimo Quinto)

Con el propósito de promover el saneamiento de los créditos adeudados por concepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos y sus accesorios, con excepción de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, por parte de Entidades Federativas, Municipios y Organismos Descentralizados que

estén excluidas o no comprendidas en leyes o decretos como sujetos de aseguramiento, la Cámara Revisora tuvo a bien autorizar al Instituto Mexicano del Seguro Social durante el Ejercicio Fiscal de 2020 para suscribir convenios de pago en parcialidades a un plazo máximo de hasta 6 años, sirviendo las participaciones que con cargo al Fondo General de Participaciones corresponda recibir a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, como fuente de pago de los importes convenidos.

Una vez efectuado el análisis del contenido de la Minuta de referencia, esta Dictaminadora considera lo siguiente:

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA. Esta Comisión Dictaminadora coincide con la propuesta de la Colegisladora en el sentido de modificar la carátula de ingresos contenida en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 que se pretende expedir acorde a las modificaciones efectuadas a diversas disposiciones fiscales.

SEGUNDA. La que dictamina estima acertado eliminar la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de emitir lineamientos para la asignación de destino a los recursos federales que no hayan sido devengados por las entidades federativas y municipios, en atención a una debida técnica normativa y con el propósito de que la referida Dependencia, en la asignación que haga al destinar los recursos, se apegue a las disposiciones jurídicas aplicables.

TERCERA. Esta Comisión Legislativa coincide con la Colegisladora en la conveniencia de eliminar del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, la disposición transitoria que establece un plazo para que el que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados

localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.

CUARTA. Esta Dictaminadora estima acertado que, con el propósito de promover el saneamiento de los créditos adeudados por concepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos y sus accesorios, con excepción de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, por parte de Entidades Federativas, Municipios y Organismos Descentralizados que estén excluidas o no comprendidas en leyes o decretos como sujetos de aseguramiento, se autorice al Instituto Mexicano del Seguro Social durante el Ejercicio Fiscal de 2020 para suscribir convenios de pago en parcialidades a un plazo máximo de hasta 6 años, sirviendo las participaciones que con cargo al Fondo General de Participaciones corresponda recibir a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos entes públicos, como fuente de pago de los importes convenidos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, que suscriben, se permiten someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Capítulo I
De los Ingresos y el Endeudamiento Público

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran:

CONCEPTO	Ingreso Estimado
TOTAL	**6,107,732.4**
1. Impuestos	**3,505,822.4**
11. Impuestos Sobre los Ingresos:	1,852,852.3
01. Impuesto sobre la renta.	1,852,852.3
12. Impuestos Sobre el Patrimonio.	
13. Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones:	1,534,055.8
01. Impuesto al valor agregado.	1,007,546.0
02. Impuesto especial sobre producción y servicios:	515,733.5
01. Combustibles automotrices:	342,053.6
01. Artículo 2o., fracción I, inciso D).	313,321.0
02. Artículo 2o.-A.	28,732.6
02. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:	62,165.7
01. Bebidas alcohólicas.	18,888.4
02. Cervezas y bebidas refrescantes.	43,277.3

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

		03. Tabacos labrados.	43,679.4
		04. Juegos con apuestas y sorteos.	2,968.8
		05. Redes públicas de telecomunicaciones.	5,923.3
		06. Bebidas energetizantes.	11.6
		07. Bebidas saborizadas.	28,660.5
		08. Alimentos no básicos con alta densidad calórica.	23,783.2
		09. Plaguicidas.	758.1
		10. Combustibles fósiles.	5,729.3
	03.	Impuesto sobre automóviles nuevos.	10,776.3
14.		Impuestos al Comercio Exterior:	70,984.6
	01.	Impuestos al comercio exterior:	70,984.6
		01. A la importación.	70,984.6
		02. A la exportación.	0.0
15.		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables.	
16.		Impuestos Ecológicos.	
17.		Accesorios de impuestos:	41,210.2
	01.	Accesorios de impuestos.	41,210.2
18.		Otros impuestos:	6,850.3
	01.	Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.	6,850.3
	02.	Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación.	0.0
19.		Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	-130.8
2.		**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**374,003.2**
21.		Aportaciones para Fondos de Vivienda.	0.0
	01.	Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.	0.0
22.		Cuotas para la Seguridad Social.	374,003.2



COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

	01. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores.	374,003.2
	23. Cuotas de Ahorro para el Retiro.	0.0
	01. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones.	0.0
	24. Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social:	0.0
	01. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores.	0.0
	02. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares.	0.0
	25. Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.	0.0
3.	**Contribuciones de Mejoras**	**44.8**
	31. Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas:	44.8
	01. Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.	44.8
	39. Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
4.	**Derechos**	**51,671.8**
	41. Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público:	42,740.8
	01. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	346.2
	02. Secretaría de la Función Pública.	0.0
	03. Secretaría de Economía.	2,670.7
	04. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	8,748.2
	05. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	11,776.9
	06. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	72.3
	07. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	0.0
	08. Secretaría de Educación Pública.	0.2



Dictamen a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

	09.	Instituto Federal de Telecomunicaciones.	19,126.3
	10.	Secretaría de Cultura	0.0
43.		Derechos por Prestación de Servicios:	8,931.0
	01.	Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público:	8,931.0
		01. Secretaría de Gobernación.	91.1
		02. Secretaría de Relaciones Exteriores.	4,915.0
		03. Secretaría de la Defensa Nacional.	145.5
		04. Secretaría de Marina.	445.0
		05. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	588.6
		06. Secretaría de la Función Pública.	23.0
		07. Secretaría de Energía.	0.2
		08. Secretaría de Economía.	21.9
		09. Secretaría de Agricultura, y Desarrollo Rural.	42.9
		10. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	1,081.6
		11. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	85.1
		01. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
		02. Otros.	85.1
		12. Secretaría de Educación Pública.	1,255.9
		13. Secretaría de Salud.	0.0
		14. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	9.4
		15. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.	61.1
		16. Secretaría de Turismo.	0.0
		17. Fiscalía General de la República.	0.0
		18. Instituto Federal de Telecomunicaciones.	30.1
		19. Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0



COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

20.	Comisión Reguladora de Energía.	0.0
21.	Comisión Federal de Competencia Económica.	0.0
22.	Secretaría de Cultura.	58.4
23.	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	76.2
44.	Otros Derechos.	0.0
45.	Accesorios de Derechos.	0.0
49.	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
5.	**Productos**	**10,095.3**
51.	Productos.	10,095.3
01.	Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público.	8.8
02.	Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público:	10,086.5
01.	Explotación de tierras y aguas.	0.0
02.	Arrendamiento de tierras, locales y construcciones.	0.3
03.	Enajenación de bienes:	1,859.6
01.	Muebles.	1,743.5
02.	Inmuebles.	116.1
04.	Intereses de valores, créditos y bonos.	7,687.4
05.	Utilidades:	539.1
01.	De organismos descentralizados y empresas de participación estatal.	0.0
02.	De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.	0.0
03.	De Pronósticos para la Asistencia Pública.	538.6
04.	Otras.	0.5
06.	Otros.	0.1
59.	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos	0.0

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.

6.	**Aprovechamientos**		**103,674.4**
61.	Aprovechamientos:		103,639.0
01.	Multas.		2,190.5
02.	Indemnizaciones.		2,531.7
03.	Reintegros:		166.5
	01.	Sostenimiento de las escuelas artículo 123.	0.0
	02.	Servicio de vigilancia forestal.	0.1
	03.	Otros.	166.4
04.	Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica.		94.8
05.	Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación.		0.0
06.	Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación.		0.0
07.	Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del Sistema Escolar Federalizado.		0.0
08.	Cooperación de la Ciudad de México por servicios públicos locales prestados por la Federación.		0.0
09.	Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de particulares para alcantarillado, electrificación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas.		0.0
10.	5 por ciento de días de cama a cargo de establecimientos particulares para internamiento de enfermos y otros destinados		0.0

	a la Secretaría de Salud.	
11.	Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica.	947.8
12.	Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.	1,129.7
13.	Regalías provenientes de fondos y explotación minera.	0.0
14.	Aportaciones de contratistas de obras públicas.	7.6
15.	Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal:	0.5
	01. Aportaciones que efectúen los Gobiernos de la Ciudad de México, Estatales y Municipales, los organismos y entidades públicas, sociales y los particulares.	0.0
	02. De las reservas nacionales forestales.	0.0
	03. Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.	0.0
	04. Otros conceptos.	0.5
16.	Cuotas Compensatorias.	142.4
17.	Hospitales Militares.	0.0
18.	Participaciones por la explotación de obras del dominio público señaladas por la Ley Federal del Derecho de Autor.	0.0
19.	Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal.	0.0
20.	Provenientes del programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras.	0.0
21.	No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios.	0.0
22.	Otros:	96,427.5

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

01.	Remanente de operación del Banco de México.	0.0
02.	Utilidades por Recompra de Deuda.	0.0
03.	Rendimiento mínimo garantizado.	0.0
04.	Otros.	96,427.5
23.	Provenientes de servicios en materia energética:	0.0
01.	Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
02.	Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0
03.	Comisión Reguladora de Energía.	0.0
62.	Aprovechamientos Patrimoniales.	35.4
01.	Recuperaciones de capital:	35.4
01.	Fondos entregados en fideicomiso, a favor de Entidades Federativas y empresas públicas.	27.6
02.	Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas privadas y a particulares.	7.8
03.	Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.	0.0
04.	Desincorporaciones.	0.0
05.	Otros.	0.0
63.	Accesorios de Aprovechamientos.	0.0
69.	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
7.	**Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**	**1,065,166.0**
71.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social:	72,232.9
01.	Instituto Mexicano del Seguro Social.	26,920.2
02.	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.	45,312.7



COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

72.	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado:	992,933.1
	01. Petróleos Mexicanos.	574,535.0
	02. Comisión Federal de Electricidad.	418,398.1
73.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.	
74.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.	
75.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	
76.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	
77.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.	
78.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos.	
79.	Otros Ingresos.	
8.	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**	
81.	Participaciones.	
82.	Aportaciones.	
83.	Convenios.	
84.	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.	
85.	Fondos Distintos de Aportaciones.	
9.	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y**	**412,797.7**

	Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	
91.	Transferencias y Asignaciones.	0.0
93.	Subsidios y Subvenciones.	0.0
95.	Pensiones y Jubilaciones.	0.0
97.	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.	412,797.7
01.	Ordinarias.	412,797.7
02.	Extraordinarias.	0.0
0.	**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**584,456.8**
01.	Endeudamiento interno:	569,582.1
01.	Endeudamiento interno del Gobierno Federal.	532,266.1
02.	Otros financiamientos:	37,316.0
01.	Diferimiento de pagos.	37,316.0
02.	Otros.	0.0
02.	Endeudamiento externo:	0.0
01.	Endeudamiento externo del Gobierno Federal.	0.0
03.	Financiamiento Interno.	
04.	Déficit de organismos y empresas de control directo.	-47,748.8
05.	Déficit de empresas productivas del Estado.	62,623.5
Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal (0.01.01+0.02.01)		532,266.1

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este precepto.

Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal de 2020, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por

contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos.

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2020, se proyecta una recaudación federal participable por 3 billones 394 mil 236.7 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal de 2020, el gasto de inversión del Gobierno Federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto.

Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2020, en términos monetarios, el pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, previsto en la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 895.1 millones de pesos.

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el artículo Segundo Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho Transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados.

En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por parte del Ejecutivo Federal, de los bienes y derechos del fideicomiso referido en el primer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en cuentas de orden, con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo esas operaciones.

El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará en primer término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las operaciones referidas en el párrafo anterior y, posteriormente, se destinarán para restituir al Gobierno Federal los recursos públicos aportados para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto.

Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2020 se destinen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del ejercicio fiscal de 2020, se instrumenten para potenciar los recursos que, con cargo a dicho fondo, reciben las entidades federativas.

Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El gasto de inversión a que se refiere el párrafo sexto del presente artículo se reportará en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de los ingresos generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.61.22.04 del presente artículo por concepto de otros aprovechamientos. Asimismo, deberá informar los destinos específicos que, en términos del artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan dichos aprovechamientos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2020, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Durante el ejercicio fiscal 2020, los ingresos propios de Petróleos Mexicanos que se generen por un precio promedio anual del barril del petróleo crudo mexicano que exceda de 49.01 dólares de los Estados Unidos de América y hasta los 55.00 dólares de los Estados Unidos de América, deberá destinarlos a mejorar su meta de balance financiero aprobada en el artículo 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 532 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones constitutivas de deuda

pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo.

Las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior no deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para el ejercicio fiscal de 2020.

Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente

se podrán aplicar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario incluyendo sus artículos transitorios. Sobre estas operaciones de canje y refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión.

El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta propia con los valores referidos.

En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos en la cuenta que, para tal efecto, le lleve el Banco de México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el citado Banco procurará las mejores condiciones para el mencionado Instituto dentro de lo que el mercado permita.

El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco de México podrá ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Titular de dicha Tesorería, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo.



COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores un monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el Resultado de Operación que considera la Constitución Neta de Reservas Crediticias Preventivas, de cero pesos para el ejercicio fiscal de 2020.

El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización del órgano de gobierno de la entidad de que se trate y con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los montos establecidos en el artículo 1o., numeral 0 "Ingresos derivados de Financiamientos" de esta Ley, así como el monto de endeudamiento neto interno consignado en este artículo, se verán, en su caso, modificados en lo conducente como resultado de la distribución, entre el Gobierno Federal y los organismos y empresas de control directo, de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 1 mil 250 millones de dólares de los Estados Unidos de América; asimismo, se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

Se autoriza para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 835 millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de 508 millones de

dólares de los Estados Unidos de América, asimismo se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

El cómputo de lo establecido en los dos párrafos anteriores se realizará en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión de manera trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento.

Artículo 3o. Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020. Asimismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar operaciones de canje, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública de la Ciudad de México.

El ejercicio del monto de endeudamiento autorizado se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 4o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 257,138.2 millones de pesos, de los cuales 100,344.1 millones de pesos corresponden a inversión directa y 156,794.1 millones de pesos a inversión condicionada.

Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad en los términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV, del Reglamento de este último ordenamiento, por un total de 2,760.7 millones de pesos que corresponde a un proyecto de inversión directa.

Artículo 6o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y/o sus empresas productivas subsidiarias deberán presentar las declaraciones, hacer los pagos y cumplir con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, ante la Tesorería de la Federación, a través del esquema para la presentación de declaraciones que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida, previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las modificaciones a los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los pagos establecidos conforme al párrafo anterior, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente a aquél en que se generen dichas modificaciones, así como en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga uso de las

facultades otorgadas en el segundo párrafo de este artículo, los pagos correspondientes deberán ser transferidos y concentrados en la Tesorería de la Federación por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a más tardar el día siguiente de su recepción, a cuenta de la transferencia a que se refiere el artículo 16, fracción II, inciso g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos que, hasta antes de la entrada en vigor del "Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en términos del artículo 32 de dicha Ley, serán registrados como inversión.

Capítulo II
De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales

Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:

I. Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate:

1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26 por ciento mensual.

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53 por ciento mensual.

3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.82 por ciento mensual.

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización realizada conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos y disposiciones de carácter general expedidos en el Ramo de Hacienda, de las que hayan derivado beneficios otorgados en términos de la presente Ley, así como por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2020, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen.

Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se estará a lo siguiente:

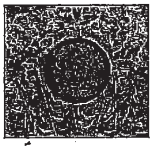
I. La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, aprovechamiento

o explotación de bienes o por la prestación de servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, de similares características, en países con los que México mantiene vínculos comerciales.

II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica y de saneamiento financiero.

III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general.

Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública Federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los aprovechamientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.



COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los aprovechamientos que perciba la dependencia correspondiente.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por dicha Secretaría, ya sea de los ingresos que obtengan o con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, o tratándose de recuperaciones de capital o del patrimonio, según sea el caso, los recursos correspondientes se destinarán por la propia Secretaría prioritariamente a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a fomentar acciones que les permitan cumplir con sus respectivos mandatos, o a programas y proyectos de inversión, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente Ley.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de cualquier otra entidad paraestatal distinta de las señaladas en el párrafo anterior, dichos ingresos serán enterados a la Tesorería de la Federación bajo dicha naturaleza, a efecto de que sean destinados a programas presupuestarios que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él deriven.

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 1o., numerales 6.61.11, 6.62.01.04 y 6.61.22.04 de esta Ley por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, aquéllos a que se refieren la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley Federal de Competencia Económica, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo en los plazos que para tales efectos se fijen, el prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación de que se trate, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos.

El prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por aprovechamientos, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de carácter particular, las cuotas de los productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal de 2020, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente.



COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los productos que se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los productos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332

Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019 hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones efectuadas tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como por el Instituto de Administración de Bienes y Activos y los accesorios de los productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en un fondo, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal conforme a las disposiciones fiscales, que hayan sido transferidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la citada entidad transferente, sobre bienes de la

misma naturaleza; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en el fondo señalado en el párrafo anterior, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. Un mecanismo como el previsto en el presente párrafo, se podrá aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que, por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deba realizar. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el Instituto de Administración de Bienes y Activos remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados y a su Coordinadora de Sector, un informe que contenga el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las autoridades mencionadas en los párrafos citados.

Los ingresos netos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos se podrán destinar hasta en un 100 por ciento a financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como para el pago de los créditos que hayan sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, siempre que en el acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el convenio que al efecto se celebre se señale dicha situación. Lo anterior no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados a que se refiere el décimo tercer párrafo del artículo 13 de esta Ley. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes en proceso de extinción de dominio y de aquellos sobre los que sea declarada la extinción de dominio y de sus frutos, así como su monetización en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, serán destinados a una cuenta especial en los términos que establece el artículo 239 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, previa deducción de los

conceptos previstos en los artículos 234 y 237 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por productos, así como de la concentración efectuada a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 12. Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2020 se concentrarán en términos del artículo 22 de la Ley de Tesorería de la Federación, salvo en los siguientes casos:

I. Se concentrarán en la Tesorería de la Federación, a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción, los derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, incluidos entre otros las sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, así como los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

II. Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional, sólo registrarán los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente de esta Ley, salvo por lo dispuesto en la fracción I de este artículo, y deberán

conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos.

Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere esta fracción, se deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, de los informes avalados por el órgano interno de control o de la comisión respectiva del órgano de gobierno, según sea el caso, especificando los importes del impuesto al valor agregado que hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de los ingresos;

III. Las entidades de control indirecto deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en posibilidad de elaborar los informes trimestrales que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reflejen dentro de la Cuenta Pública Federal;

IV. Los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, podrán ser recaudados por las oficinas de los propios institutos o por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la Cuenta Pública Federal, y

V. Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio de la concentración en términos de la Ley de Tesorería de la Federación.

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere esta fracción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de que dichos ingresos hayan sido concentrados en la Tesorería de la Federación.

Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos.

Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se destinarán a las entidades o a las empresas productivas del Estado que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza. Las entidades o las empresas productivas del Estado podrán celebrar convenios de colaboración con la iniciativa privada.

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.

Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en la fracción que les corresponda conforme al citado artículo.

Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de concentrar los recursos públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la Federación, en los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato

análogo, así como aquellos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según su origen, y se podrán destinar a los fines que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento correspondiente. Asimismo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 6.62.01.04 del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes.

Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son accesorios.

Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán los netos que resulten de restar al ingreso percibido las erogaciones efectuadas para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a que se refiere el párrafo siguiente.

Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales son los recursos efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra

índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas. Con excepción de lo dispuesto en el séptimo párrafo de este artículo para los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, los ingresos netos a que se refiere este párrafo se enterarán o concentrarán, según corresponda, en la Tesorería de la Federación y deberán manifestarse tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo acciones, por la enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión de derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la desincorporación de entidades, se les podrá descontar un porcentaje, por concepto de gastos indirectos de operación, que no podrá ser mayor del 7 por ciento, a favor del Instituto de Administración de Bienes y Activos, cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la citada entidad, y se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos podrán destinarse para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente con la opinión favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, sin que sea necesario concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Estos recursos deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica.

Los pasivos a cargo de organismos descentralizados en proceso de

desincorporación que tengan como acreedor al Gobierno Federal, con excepción de aquéllos que tengan el carácter de crédito fiscal, quedarán extinguidos de pleno derecho sin necesidad de autorización alguna, y los créditos quedarán cancelados de las cuentas públicas.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, podrán permanecer afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. No se considerará enajenación la transmisión de bienes y derechos al Fondo de Desincorporación de Entidades que, con la opinión favorable de dicha Comisión, efectúen las entidades en proceso de desincorporación, para concluir las actividades residuales del proceso respectivo.

Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos remanentes que les correspondan de dichos procesos ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, como parte de la estrategia de conclusión de los procesos de desincorporación de entidades, entre el Instituto de Administración de Bienes y Activos y las entidades cuyos procesos de desincorporación concluyeron, podrán ser utilizados por éste, para sufragar las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, relativo a la atención de encargos bajo su administración, cuando éstos sean deficitarios. Lo anterior, estará sujeto, al cumplimiento de las directrices que se emitan para tal efecto, así como a la autorización de la Junta de Gobierno del Instituto de Administración de Bienes y Activos, previa aprobación de los órganos colegiados competentes.

Los ingresos obtenidos por la venta de bienes asegurados a favor del Gobierno Federal, incluyendo numerario, cuya administración y destino hayan sido encomendados al Instituto de Administración de Bienes y Activos, en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, serán destinados a un fondo en los términos del artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, previa deducción de

los conceptos previstos en los artículos 90, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Los ingresos provenientes de numerario y de la enajenación de bienes que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos, que hayan sido declarados abandonados por parte de las instancias competentes, distintos a los señalados en el párrafo décimo quinto del presente artículo y que se concentren a la Tesorería de la Federación, se considerarán aprovechamientos y se destinarán al financiamiento de las operaciones del Instituto, en términos de lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 89, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

El numerario decomisado y los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y previa deducción de los gastos indirectos de operación que correspondan, se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al Fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, u otras políticas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la presente Ley.

Los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, serán integrados al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley citada.

Los ingresos provenientes de la enajenación que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos de vehículos declarados abandonados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha dependencia, se destinarán de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. De la cantidad restante a los permisionarios federales se les cubrirán los adeudos generados hasta con el treinta por ciento de los remanentes de los ingresos y el resto se enterará a la Tesorería de la Federación. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 14. Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, entre las que se comprende de manera enunciativa a las siguientes:

I. Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los términos de dichas disposiciones.

Artículo 15. Durante el ejercicio fiscal de 2020, los contribuyentes a los que se les impongan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del citado Código, independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente.

Cuando los contribuyentes a los que se les impongan multas por las infracciones señaladas en el párrafo anterior corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su caso, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación o se notifique la resolución provisional a que se refiere el artículo 53-B, primer párrafo, fracción I del citado Código, pero antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 53-B, los contribuyentes pagarán el 60 por ciento de la multa que les corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior.

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2020, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que adquieran el diésel o el biodiésel y sus mezclas, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos y que para determinar su utilidad puedan deducir dichos combustibles cuando los importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles, en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2, según corresponda al tipo de combustible, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la

enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante fiscal de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

1. El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o el biodiésel y sus mezclas, por el número de litros de diésel o de biodiésel y sus mezclas importados o adquiridos.

   En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.

2. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en dichas actividades, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en aduana del pedimento de importación o el precio consignado en el comprobante fiscal de adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas en las estaciones de servicio, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

III. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final en dichas actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. En

ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de los artículos 74 y 75 del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2020 y enero de 2021.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diésel o de biodiésel y sus mezclas, en el que asienten mensualmente la totalidad del diésel o del biodiésel y sus mezclas que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diésel o el biodiésel y sus mezclas que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diésel o del biodiésel y sus mezclas utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de estos combustibles en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación.

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda según el tipo de combustible, conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que, en su



COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el número de litros importados o adquiridos.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago por la importación o adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas a distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: monedero electrónico autorizado por el Servicio de Administración Tributaria; tarjeta de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante, o bien, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México.

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de

importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, se entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal, relacionados con sus actividades económicas, sin que por ello se genere un cobro.

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 300 millones de pesos, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura mencionada hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se realicen los gastos a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación del beneficio contenido en esta fracción.

VI. Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que en su proceso productivo no se destinen a la combustión.

El estímulo fiscal señalado en esta fracción será igual al monto que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda, por la cantidad del combustible consumido en un mes, que no se haya sometido a un proceso de combustión.

El monto que resulte conforme a lo señalado en el párrafo anterior únicamente podrá ser acreditado contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se adquieran los combustibles a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización del combustible no sujeto a un proceso de combustión por tipos de industria, respecto de los litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible de que se trate, adquiridos en un mes de calendario, así como las demás

disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal.

VII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de pesos, consistente en permitir el acreditamiento del derecho especial sobre minería a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos que hayan pagado en el ejercicio de que se trate.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción, únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tengan los concesionarios o asignatarios mineros a su cargo, correspondiente al mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación de esta fracción.

VIII. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos, y que dichos ingresos obtenidos en el ejercicio por la enajenación de libros, periódicos y revistas represente al menos el 90% de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio de que se trate.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior consiste en una deducción adicional para los efectos del impuesto sobre la renta, por un monto equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente.

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV, V, VI y VII de este apartado quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto señalen.

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente apartado no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido en esta

Ley.

Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos establecidos en la presente Ley.

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno de ellos se establece en la presente Ley.

B. En materia de exenciones:

Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo.

Artículo 17. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a empresas productivas del Estado, organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza.

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.

Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.

Artículo 18. Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los tribunales administrativos, los órganos autónomos por disposición constitucional, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades, se deberán aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados de la dependencia en la Ley de Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados efectuados por dicha dependencia a la Tesorería de la Federación, en el periodo que corresponda.

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades.

Artículo 19. Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican de la siguiente manera:

I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se generan en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades relacionadas directamente con las funciones recurrentes de la institución.

II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades que no guardan relación directa con las funciones recurrentes de la institución.

III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con las atribuciones de la dependencia o entidad, tales como la recuperación de seguros, los donativos en dinero y la enajenación de bienes muebles.

IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como de los tribunales administrativos y de los órganos constitucionales autónomos. No se incluyen en esta fracción los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ni aquéllos por concepto de derechos y aprovechamientos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, los cuales se sujetan a lo dispuesto en el artículo 12, fracción I, de esta Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades a más tardar el último día hábil de enero de 2020 y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se modifiquen.

Los ingresos a que se refiere la fracción III de este artículo se aplicarán en los términos de lo previsto en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 20. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal de 2020 la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 1.45 por ciento. La metodología para calcular dicha tasa es la siguiente:

I. Se determinó la tasa de rendimiento promedio ponderado de los valores públicos por el periodo comprendido de febrero a julio de 2019, conforme a lo siguiente:

   a) Se tomaron las tasas promedio mensuales por instrumento, de los valores públicos publicados por el Banco de México.

   b) Se determinó el factor de ponderación mensual por instrumento, dividiendo las subastas mensuales de cada instrumento entre el total de las subastas de todos los instrumentos públicos efectuadas al mes.

   c) Para calcular la tasa ponderada mensual por instrumento, se multiplicó la tasa promedio mensual de cada instrumento por su respectivo factor de ponderación mensual, determinado conforme al inciso anterior.

   d) Para determinar la tasa ponderada mensual de valores públicos se sumó la tasa ponderada mensual por cada instrumento.

   e) La tasa de rendimiento promedio ponderado de valores públicos correspondiente al periodo febrero a julio de 2019 se determinó con el promedio simple de las tasas ponderadas mensuales determinadas conforme al inciso anterior del mencionado periodo.

II. Se tomaron las tasas promedio ponderadas mensuales de valores privados publicadas por el Banco de México y se determinó el promedio simple de dichos valores correspondiente al periodo de febrero a julio de 2019.

III. Se determinó un factor ponderado de los instrumentos públicos y privados en función al saldo promedio en circulación de los valores públicos y privados correspondientes al periodo de febrero a julio de 2019 publicados por el Banco de México.

IV. Para obtener la tasa ponderada de instrumentos públicos y privados, se multiplicaron las tasas promedio ponderadas de valores públicos y privados, determinados conforme a las fracciones I y II, por su respectivo factor de ponderación, determinado conforme a la fracción anterior, y posteriormente se sumaron dichos valores ponderados.

V. Al valor obtenido conforme a la fracción IV se disminuyó el valor promedio de la inflación mensual interanual del índice general correspondiente a cada uno de los meses del periodo de febrero a julio de 2019 del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

VI. La tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el valor obtenido conforme a la fracción V de este artículo por la tasa correspondiente al último tramo de la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 22. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por el incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades competentes, con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de 1 hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con base en los criterios que se establezcan para tal efecto, los cuales podrán considerar, entre otros, los días de atraso en la atención de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los requerimientos que se hubieran incumplido, o la probable afectación de los intereses patrimoniales de los clientes o usuarios de los servicios financieros.

Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al terrorismo, cometidas por las entidades financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y asesores en inversiones, serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del reporte de la operación inusual que no se hubiera enviado, del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario de la que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas conforme a las disposiciones señaladas anteriormente, o bien con multa equivalente en moneda nacional de 10 hasta 100,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el caso de cualquier otro incumplimiento a las referidas disposiciones.

Artículo 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios que, en su caso, corresponda a las actividades mencionadas, mediante la aplicación del esquema de estímulos siguiente:

I. Calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma siguiente:

a) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado en el bimestre de que se trate, considerando el giro o actividad a la que se dedique el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

	Sector económico	Porcentaje IVA (%)
1	Minería	8.0

2	Manufacturas y/o construcción	6.0
3	Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles)	2.0
4	Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares en que se proporcionen servicios de alimentos y bebidas)	8.0
5	Negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y/o medicinas	0.0

Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores económicos mencionados en los numerales 1 a 4 aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante. Se entiende por sector preponderante aquél de donde provenga la mayor parte de los ingresos del contribuyente.

b) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios en el bimestre de que se trate, considerando el tipo de bienes enajenados por el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar

Descripción	Porcentaje IEPS (%)
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea comercializador)	1.0
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea fabricante)	3.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea comercializador)	10.0

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea fabricante)	21.0
Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante)	4.0
Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante)	10.0
Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador)	1.0
Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el contribuyente sea fabricante)	23.0
Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante)	120.0

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo, cuando hayan pagado el impuesto especial sobre producción y servicios en la importación de tabacos labrados y bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos C) y G) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, considerarán dicho pago como definitivo, por lo que ya no pagarán el impuesto que trasladen en la enajenación de los bienes importados, siempre que dicha enajenación se efectúe con el público en general.

c) El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta fracción será el monto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios, en su caso, a pagar por las actividades realizadas con el público en general, sin que proceda acreditamiento alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente.

d) El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios deberá realizarse por los períodos y en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades realizadas con el público en general, aquéllas por las que se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos que se establezcan

mediante reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado.

Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su deducción o acreditamiento, en donde se traslade en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, dichos impuestos deberán pagarse en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones aplicables, conjuntamente con el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios determinado conforme al inciso c) de esta fracción.

Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios será aplicable, cuando proceda, en la proporción que represente el valor de las actividades por las que se expidieron comprobantes fiscales en las que se haya efectuado el traslado expreso y por separado, en el valor total de las actividades del bimestre que corresponda.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta fracción podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso deberán calcular y pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según se trate, a partir del bimestre en que abandonen la opción. En este caso, los contribuyentes no podrán volver a ejercer la opción prevista en el presente artículo.

II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las actividades realizadas con el público en general en las que determinen el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios con el esquema de porcentajes a que se refiere la fracción I del presente artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente:

a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según corresponda al número de años que tenga el contribuyente tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal:

TABLA

Años	Porcentaje de reducción (%)
1	100
2	90
3	80
4	70
5	60
6	50
7	40
8	30
9	20
10	10

Para los efectos de la aplicación de la tabla el número de años de tributación del contribuyente se determinará de conformidad con lo que al respecto se considere para los efectos del impuesto sobre la renta.

Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, cuyos ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de trescientos mil pesos, durante cada uno de los años en que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será de 100 por ciento.

Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por tributar conforme al Régimen de Incorporación Fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo

anterior cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán al monto establecido en dicho párrafo. Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto referido, en el ejercicio siguiente no se podrá tomar el beneficio del párrafo anterior.

b) La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de reducción a que se refiere el inciso anterior será acreditable únicamente contra el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, según se trate, determinado conforme a la aplicación de los porcentajes a que se refiere la fracción I de este artículo.

III. El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo no se considerará como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.

IV. Se releva a los contribuyentes a que se refiere este artículo de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 24. Para los efectos del impuesto sobre la renta, se estará a lo siguiente:

I. Las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, siempre que dichos apoyos económicos o monetarios se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran zonas afectadas los municipios de los Estados afectados por los sismos ocurridos los días 7

y 19 de septiembre de 2017, que se listen en las declaratorias de desastre natural correspondientes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

II. Para los efectos de los artículos 82, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 138 de su Reglamento, se considera que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de dicha Ley, cumplen con el objeto social autorizado para estos efectos, cuando otorguen donativos a organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y cuyo objeto exclusivo sea realizar labores de rescate y reconstrucción en casos de desastres naturales, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos, se deberá cumplir con lo siguiente:

1. Contar con autorización vigente para recibir donativos al menos durante los 5 años previos al momento en que se realice la donación, y que durante ese periodo la autorización correspondiente no haya sido revocada o no renovada.

2. Haber obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior cuando menos de 5 millones de pesos.

3. Auditar sus estados financieros.

4. Presentar un informe respecto de los donativos que se otorguen a organizaciones o fideicomisos que no tengan el carácter de donatarias autorizadas que se dediquen a realizar labores de rescate y reconstrucción ocasionados por desastres naturales.

5. No otorgar donativos a partidos políticos, sindicatos, instituciones religiosas o de gobierno.

6. Presentar un listado con el nombre, denominación o razón social

y registro federal de contribuyentes de las organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con la autorización para recibir donativos a las cuales se les otorgó el donativo.

b) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos, a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán cumplir con lo siguiente:

1. Estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

2. Comprobar que han efectuado operaciones de atención de desastres, emergencias o contingencias por lo menos durante 3 años anteriores a la fecha de recepción del donativo.

3. No haber sido donataria autorizada a la que se le haya revocado o no renovado la autorización.

4. Ubicarse en alguno de los municipios o en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de las zonas afectadas por el desastre natural de que se trate.

5. Presentar un informe ante el Servicio de Administración Tributaria, en el que se detalle el uso y destino de los bienes o recursos recibidos, incluyendo una relación de los folios de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y la documentación con la que compruebe la realización de las operaciones que amparan dichos comprobantes.

6. Devolver los remanentes de los recursos recibidos no utilizados para el fin que fueron otorgados a la donataria autorizada.

7. Hacer pública la información de los donativos recibidos en su página de Internet o, en caso de no contar con una, en la página de la donataria autorizada.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de esta fracción.

Capítulo III
De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento

Artículo 25. Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.

La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 de marzo de 2020.

Artículo 26. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresividad.

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Artículo 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores lo siguiente:

A. El Presupuesto de Gastos Fiscales, a más tardar el 30 de junio de 2020, que comprenderá los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos

de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2021 en los siguientes términos:

I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el Erario Federal.

II. La metodología utilizada para realizar la estimación.

III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida.

IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso.

V. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales.

B. Un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, a más tardar el 30 de septiembre de 2020, en el que se deberá señalar, para cada una la siguiente información:

I. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de nacionales.

II. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de extranjeros.

III. Ingresos por donativos recibidos en especie de nacionales.

IV. Ingresos por donativos recibidos en especie de extranjeros.

V. Ingresos obtenidos por arrendamiento de bienes.

VI. Ingresos obtenidos por dividendos.

VII. Ingresos obtenidos por regalías.

VIII. Ingresos obtenidos por intereses devengados a favor y ganancia cambiaria.

IX. Otros ingresos.

X. Erogaciones efectuadas por sueldos, salarios y gastos relacionados.

XI. Erogaciones efectuadas por aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y jubilaciones por vejez.

XII. Erogaciones efectuadas por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

XIII. Gastos administrativos.

XIV. Gastos operativos.

XV. Monto total de percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos.

El reporte deberá incluir las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los conceptos contenidos en los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en su Reglamento.

C. Para la generación del reporte a que se refiere el Apartado B de este artículo, la información se obtendrá de aquélla que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración de las personas morales con fines no lucrativos correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La información sobre los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos a que se refiere el Apartado B de este artículo, se obtendrá

de los datos reportados a más tardar el 31 de julio de 2020, en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a que se refiere el artículo 82, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se entenderá por gastos administrativos y operativos lo siguiente:

I. Gastos administrativos: los relacionados con las remuneraciones al personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento y conservación, los impuestos y derechos federales o locales, así como las demás contribuciones y aportaciones que en términos de las disposiciones legales respectivas deba cubrir la donataria siempre que se efectúen en relación directa con las oficinas o actividades administrativas, entre otros. No quedan comprendidos aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

II. Gastos operativos: aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

La información a que se refieren los Apartados B y C de este artículo, no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2o., fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Artículo 28. En el ejercicio fiscal de 2020, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente:

I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes.

II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.

III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización.

IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años. Se deberá entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de Diputados.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA

Dictamen a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020, salvo lo dispuesto en el transitorio Séptimo, el cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto, mismo que será aplicable en el ejercicio fiscal de 2019 respecto de los recursos que las entidades federativas y municipios hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación en dicho ejercicio, correspondientes a ejercicios fiscales de 2017 y 2018.

Segundo. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se refiere el informe que, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha rendido el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2019.

Tercero. Para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se modifique la denominación de alguna dependencia o entidad o las existentes desaparezcan, se entenderá que los ingresos estimados para éstas en la presente Ley corresponderán a las dependencias o entidades cuyas denominaciones hayan cambiado o que absorban las facultades de aquéllas que desaparezcan, según corresponda.

Cuarto. Durante el ejercicio fiscal de 2020 el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013 continuará destinándose en los términos del citado precepto.

Quinto. Durante el ejercicio fiscal 2020 las referencias que en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, así como en los artículos 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 9 de diciembre de 2013 y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos se entenderán hechas también al Servicio de Administración Tributaria.

Sexto. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales la información sobre los ingresos excedentes que, en su caso, se hayan generado con respecto al calendario de ingresos derivado de la Ley de Ingresos de la Federación a que se refiere el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En este reporte se presentará la comparación de los ingresos propios de las entidades paraestatales bajo control presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado, así como del Gobierno Federal. En el caso de éstos últimos se presentará lo correspondiente a los ingresos provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Séptimo. Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado. Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas, así como la atención de desastres naturales.

Para efectos de lo anterior, los aprovechamientos provenientes de los enteros que realicen las entidades federativas y municipios en términos del presente transitorio, respecto de ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor de las obligaciones de reintegro a la Tesorería de la Federación establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras, siempre y cuando dichas disponibilidades hayan estado depositadas en cuentas bancarias de la entidad federativa y/o municipio.

Octavo. En el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria deberá publicar estudios sobre la evasión fiscal en México. En la elaboración de dichos estudios deberán participar instituciones académicas de prestigio en el país, instituciones académicas extranjeras, centros de investigación, organismos o instituciones nacionales o internacionales que se dediquen a la investigación o que sean especialistas en la materia. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio fiscal de 2020.

Noveno. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante el ejercicio fiscal 2020 y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requerirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de los pagos a que se refiere el párrafo anterior con cargo a las participaciones y transferencias federales, garantizando que las entidades federativas cuenten con solvencia para la atención de sus necesidades primordiales.

El Instituto, conforme a los modelos autorizados por su órgano de gobierno, podrá suscribir con las entidades federativas y, en su caso, los municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales que correspondan, los convenios para la regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos. El plazo máximo para cubrir los pagos derivados de dicha regularización será de 15 años. Asimismo, en adición a lo previsto en artículo 22 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el marco de la celebración de los referidos convenios, dicho Instituto deberá otorgar descuentos en los accesorios generados a las contribuciones adeudadas excepto los correspondientes a las cuotas y aportaciones que deban ser depositadas en las cuentas individuales de los trabajadores. Para tal efecto, deberán adecuar los convenios de incorporación voluntaria al régimen

obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para incluir en el mismo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 204 de dicha Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá aceptar como fuente de pago bienes inmuebles que se considerarán como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse a las cuentas individuales de los trabajadores. El Instituto determinará si los bienes a los que se refiere este párrafo, resultan funcionales para el cumplimiento de su objeto, asegurándose que se encuentren libres de cualquier gravamen o proceso judicial y que el monto del adeudo no sea mayor al valor del avalúo efectuado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. En estos casos, la entidad federativa, municipio, dependencia o entidad del gobierno local, según corresponda, deberá cubrir los gravámenes y demás costos de la operación respectiva, los cuales no computarán para el cálculo del importe del pago.

Décimo. Las dependencias y entidades que coordinen la operación de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos, salvo los que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concentrarán en la Tesorería de la Federación, en términos de las disposiciones específicas que emita, los recursos públicos disponibles no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 en dichos vehículos, salvaguardando en todo momento los derechos de terceros.

Los aprovechamientos que se generen se destinarán a gasto de inversión así como a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Los programas de inversión deberán registrarse en la cartera de inversión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior no será obligatorio a los instrumentos jurídicos que por disposición expresa de ley los recursos públicos deban permanecer en el patrimonio o afectos a los mismos, así como a aquéllos en materia de pensiones y seguridad social, desastres naturales, infraestructura, estabilización de ingresos incluyendo al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y aquéllos que sirvan como mecanismo de garantía o fuente de pago de obligaciones a cargo del Gobierno Federal o sus entidades paraestatales.

Dicha dependencia deberá señalar en los informes trimestrales sobre la situación

económica y las finanzas públicas, sobre el monto y el destino que dé a los recursos utilizados conforme a lo previsto en este párrafo.

Asimismo, las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, un informe de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos susceptibles de extinguirse en términos de las disposiciones aplicables, lo anterior a efecto de que durante el ejercicio fiscal 2020 se lleven a cabo los actos necesarios para la extinción de dichos vehículos.

Décimo Primero. Los contratos de fideicomiso y mandato públicos deberán prever que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá disponer en cualquier momento del patrimonio de éstos, asimismo, deberán establecer la obligación de las instituciones fiduciarias o mandatarias, de concentrar trimestralmente en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos, los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado para el cumplimiento de su objeto, salvo disposición de carácter general en contrario.

Las instituciones fiduciarias o mandatarias de fideicomisos, mandatos o análogos públicos, deberán concentrar de forma trimestral en la Tesorería de la Federación los intereses generados por dichos instrumentos financieros, salvo aquéllos que impliquen el pago de gastos de operación de dichos vehículos, bajo la naturaleza de aprovechamientos, y se destinarán a gasto en salud o de inversión en infraestructura, lo anterior con excepción de aquellos vehículos financieros que por disposición expresa de ley, decreto o determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dichos recursos deban permanecer afectos a su patrimonio o destinados al objeto correspondiente. Para efectos de lo anterior, las dependencias coordinadoras de dichos vehículos deberán realizar los actos necesarios para modificar en el primer semestre del ejercicio fiscal los instrumentos jurídicos respectivos.

Décimo Segundo. Se instruye a la institución fiduciaria del fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria para que durante el mes de marzo del presente ejercicio, concentre en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos los recursos que integran el patrimonio fideicomitido a esa fecha a fin de destinarlos, mediante el mecanismo que determine la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, a proyectos de inversión de infraestructura económica para la construcción, ampliación o rehabilitación de puertos, así como para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros que mejoren la conectividad entre los puertos.

Para efectos de lo anterior, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el citado fideicomiso no podrá asumir compromisos adicionales y únicamente podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción, la cual deberá formalizarse a más tardar en el mes de junio del presente ejercicio fiscal. Las obligaciones asumidas que se tengan con terceros, serán cubiertas con cargo al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Décimo Tercero. Durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2020, la institución fiduciaria del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados deberá concentrar en la Tesorería de la Federación los recursos remanentes previstos en su patrimonio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, o bien, para los destinos establecidos en el Séptimo transitorio de esta Ley.

Décimo Cuarto.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Comisión Federal de Electricidad podrá implementar programas de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica de entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y organismos públicos prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos, a través de la celebración de convenios con cualquiera de las personas morales de la administración pública antes mencionadas.

Los programas serán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 y se implementarán a través de la celebración de convenios a los que se refiere el párrafo anterior, se sujetarán, sin perjuicio de las demás disposiciones jurídicas aplicables, a las reglas de operación que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las cuales podrán considerar las características del solicitante, pudiéndose

- condonar el pago de hasta el 50 por ciento del adeudo, y que el resto de éste sea cubierto mediante parcialidades, y en caso de incumplimiento, los convenios permitirán que la Comisión Federal de Electricidad pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la compensación parcial a cargo de las partidas federales que le correspondan a las entidades federativas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y las disposiciones derivadas de éste, previendo que las entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México cuenten con solvencia para la atención de sus requerimientos de gasto público.

Décimo Quinto. Con el fin de promover el saneamiento de los créditos adeudados por concepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos y sus accesorios, con excepción de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, por parte de Entidades Federativas, Municipios y Organismos Descentralizados que estén excluidas o no comprendidas en leyes o decretos como sujetos de aseguramiento, se autoriza al Instituto Mexicano del Seguro Social durante el Ejercicio Fiscal de 2020 a suscribir convenios de pago en parcialidades a un plazo máximo de hasta 6 años.

Para tal efecto, las participaciones que con cargo al Fondo General de Participaciones corresponda recibir a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, servirán como fuente de pago de los importes convenidos, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retendrá el monto correspondiente a las parcialidades determinadas en los convenios y realizará el entero directo de dichos importes al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizando con ello la adecuada financiación de los servicios de salud y seguridad social.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 29 de octubre de 2019

30-10-2019
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados, por 273 votos en pro, 168 en contra y 5 abstenciones.
Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Diario de los Debates 30 de octubre de 2019.
Discusión y votación 30 de octubre de 2019.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON PROYECTO DE DECRETO DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Diario de los Debates

Ciudad de México, miércoles 30 de octubre de 2019

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: En consecuencia, pasaremos a la discusión y votación de los tres dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Se informa a la asamblea que, por acuerdo de esta Mesa Directiva, tanto la presentación como el posicionamiento de los tres dictámenes a discusión se llevará a cabo en una sola intervención. La discusión en lo general y la votación se llevará a cabo de forma separada para cada uno de los dictámenes.

En consecuencia, tiene la palabra, hasta por diez minutos, la diputada Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para fundamentar los tres dictámenes, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.

La diputada Patricia Terrazas Baca: Gracias, presidenta. Como se van a fundamentar tres dictámenes, pido tolerancia en el tiempo. Con su venia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Patricia Terrazas Baca: Estimadas compañeras y compañeros diputados, me dirijo a esta soberanía en nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para presentar en un solo acto los tres dictámenes a las minutas que nos remitió nuestra colegisladora, correspondientes a:

1. La llamada Miscelánea Fiscal, que comprende las Leyes de Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el Código Fiscal de la Federación.

2. La Ley Federal de Derechos.

3. La Ley de Ingresos de la Federación por el Ejercicio Fiscal 2020.

Debo destacar que esta comisión legislativa se abocó en la sesión extraordinaria al análisis, discusión y valoración de las minutas de referencia.

Conforme a las consideraciones del orden general y específico, como a la liberación que realizaron los integrantes de esta comisión, se aprobaron en sus términos los cambios propuestos por la Cámara revisora, mismos que, estimados compañeros y compañeras, expongo a continuación:

En lo referente a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, hubo tres modificaciones por parte de la Cámara de Senadores: una, en plataformas digitales, lo referente a la fracción III, artículo 113 A, y fracción III, artículo

Segundo transitorio, las cuales consta en la disminución a la tasa de retención a la enajenación de bienes y prestación de servicios por medio de plataformas digitales.

La emisión de reglas de carácter general, aplicables a plataformas digitales, deberán ser publicadas por el SAT a más tardar el 31 de enero de 2020, en lugar de marzo de 2020.

Segunda. Personas morales de derecho agrario. Ejidos, comunidades agrícolas, entre otros. Contenido en el artículo 74 B. Se elimina la prohibición de que los integrantes de las personas morales de derecho agrario puedan formar parte de dos o más sociedades.

En lo que respecta a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la cámara revisora realizó una modificación: en plataformas digitales, la fracción III del artículo Cuarto transitorio.

La emisión de reglas de carácter general, aplicable a plataformas digitales, deberá ser publicada por el SAT, a más tardar el 31 de enero de 2020, en lugar de marzo de 2020, en congruencia con la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Para el Código Fiscal de la Federación también se realizó una modificación respecto a la responsabilidad solidaria. Se especifican los casos en los que los gerentes y administradores serán responsables solidarios de las contribuciones omitidas, otorgando seguridad jurídica a los gobernados.

En la Ley Federal de Derechos la Cámara de Senadores realizó tres modificaciones; en el tema de migración, los derechos por expedición del documento migratorio que acredite la estancia, queda en los términos de la ley vigente, correspondiente al artículo 8, fracción I.

Seguirá exenta del pago de derechos la internación por vía terrestre, con estancia menor a siete días, estipulando el artículo 11, fracción II, inciso a).

La cuota para la prestación de servicios migratorios en aeropuertos, a pasajeros en vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, se queda con el aumento propuesto por el Ejecutivo, de 149.02, en lugar de 380 pesos, aprobado por los diputados en el artículo 2.

Con respecto al tema de uso de aguas nacionales, fueron rechazadas las modificaciones a los artículos 223, 224 y 225, relativo a los derechos por el uso, goce y aprovechamiento de aguas nacionales en el sector agrícola, porque el texto de la ley vigente no sufrirá modificaciones.

Para la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2020 se realizaron las modificaciones siguientes.

En la carátula de ingresos se modifica el artículo 1o de la Ley de Ingresos de la Federación 2020, debido a que el Senado de la República aumentó en 4 mil 415 millones de pesos el total de los ingresos, por lo que los ingresos totales estimados para 2020 pasaron de 6 billones 103 mil 314.4 millones de pesos, a 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos.

Regularización de autos chocolates. Se elimina el artículo decimoquinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2020, debido a que fomenta una mayor introducción ilegal de los vehículos extranjeros.

Transitorio séptimo. Eliminar la facultad discrecional a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir lineamientos en el retorno de los recursos no ejercidos de los ejercicios anteriores por parte de los estados y los municipios.

El Senado propone la incorporación de un artículo decimoquinto transitorio para otorgar la posibilidad de celebrar convenios de pago en parcialidades por adeudos con el IMSS de las entidades federativas, municipios y organismos descentralizados cuyos pagos serán con cargo al Fondo General de Participaciones de las entidades federativas y de los municipios. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada Terrazas. Tiene la palabra el diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD para fijar postura de su grupo parlamentario, hasta por diez minutos.

El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Antonio Ortega Martínez: Creo que sería un error no regresarle al senador Monreal el improperio, la falta de trato político, el exceso con la frase: lástima Margarito, pero la Cámara de Senadores le tiene que volver a enmendar las cosas a la Cámara de Diputados. Me parece que le faltó prudencia al senador, le faltó cuidado. Y habría que reclamarle, en los términos que fuera necesario, el daño a la colaboración que entre las Cámaras del Congreso nos debemos.

Pero, a lo sustancial, la Cámara revisora nos ha remitido la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación 2020 y la Comisión de Hacienda aceptó dichas modificaciones. En lo esencial se incrementaron los ingresos a 4 mil 415 millones de pesos. Sin embargo, hay que destacar que la minuta enviada por la colegisladora no explica cómo se llegó a esa estimación en la recaudación en el rubro de Aprovechamientos.

En síntesis, los ingresos registraron un incremento en 11 mil 397 millones de pesos con respecto a la iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, lo que importa es destacar que, en lo esencial, los ingresos del próximo año están sustentados sobre la base de dos premisas falsas, ya lo hemos dicho, el iluso posible crecimiento del 2 por ciento para el año que entra y los fantasiosos aumentos para las plataformas de exploración y exportación petrolera.

Para todos debían ser claras las graves implicaciones de una caída de los ingresos por cualquiera de estos dos o ambos eventos, y esto sin contar con los riesgos del entorno internacional, el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y los chinos, la desaceleración de la economía mundial y naturalmente la incertidumbre de cuándo se firmará el T-MEC.

Hemos insistido en que esta administración debe urgentemente adoptar medidas para impulsar el crecimiento, rectificar el rumbo y atacar las reales causas que están generando este estancamiento, recuperar la confianza a partir del respeto al Estado de derecho, el respeto a los contratos, las licitaciones públicas, las obras con sustento en el respeto de las normas ambientales, la existencia de proyectos ejecutivos viables, estudios de factibilidad económico-financiero, respeto a la normatividad vigente, etcétera, etcétera.

Recuperar la confianza a partir de una reorientación del gasto para aumentar la inversión pública, superar el clima de linchamiento contra los críticos, los opositores y los inversionistas, y buscar los consensos para la construcción de proyectos de todos.

Si queremos crecer no puede seguir la política del austericidio. Hemos dicho que se terminó el tiempo de las promesas y de echarle la culpa al pasado y concluir con renovadas y anímicas esperanzas de que la realidad va a cambiar. Es momento de realizaciones, es momento, por lo tanto, de rectificaciones.

¿Que no nos dicen nada las cifras que presentó el Inegi el día de hoy? La estimación oportuna del PIB al tercer trimestre de este año, nos dicen que de julio a septiembre, el producto interno bruto del país creció 0.06, pero se contrajo 0.44 por ciento con respecto al mismo lapso del 2018.

Prácticamente un crecimiento de cero, compañeras diputadas y compañeros diputados, en estos primeros nueves meses. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Esta caída ha sido potenciada por factores internos. Es cierto, han intervenido choques externos, pero no son determinantes, son producto de errores de Gobernación interna que también todo mundo los ha señalado.

¿Qué nos impide pensar que las cosas serán diferentes si se siguen aplicando las mismas recetas? El crecimiento de este año seguirá estancado en cero por ciento, y si no cambiamos el próximo año, las cosas no van a ser diferentes.

Hemos señalado, coincidiendo con los expertos, que las metas de ingresos petroleros serán inalcanzables. También hemos dicho que se requiere rectificar el plan de negocios de Pemex que es incorrecto, que habiendo posibilidades de recurrir al financiamiento del capital nacional y extranjero se usen recursos para capitalizar a Pemex y poner en grave estrés a las finanzas públicas nacionales.

Pero habría que precisar el espíritu que animó a los senadores a aumentar el ingreso en los 5 mil famosos millones de pesos que ayer ni Hacienda ni los de Morena ni nadie en la comisión pudieron explicar el origen de ese aumento de 5 mil millones de pesos.

Según la investigación que nosotros alcanzamos a hacer, los aprovechamientos se quieren alcanzar a partir de recuperar de la cartera vencida del IMSS que municipios y estados tienen, recuperarlos por la vía de los convenios para pagar en seis años sus adeudos.

Ustedes saben que la Ley de Coordinación Fiscal prohíbe de manera expresa, determinante, que haya sujeción alguna que limite el ejercicio de participaciones y transferencias federales a estados y municipios. No hay manera de que se cobren a lo chino las deudas que se tienen con el IMSS o con el ISSSTE por la vía de limitar el ejercicio de participaciones y transferencias. Se establecen los convenios y eso abre la posibilidad.

Pero me parece, compañeros, que los ayuntamientos no tienen un comportamiento cínico con su deuda con el IMSS y los estados tampoco. Revisamos la deuda que tienen estas entidades con el IMSS y con el ISSSTE y no pasa de los 5 mil millones de pesos. Hay deuda sin duda, pero está explicada por el ahorcamiento financiero a que el centro está condenando a estados y municipios y al estancar sus participaciones y transferencias.

Hoy se pretende obligarlos a firmar convenios para que queden como garantía las participaciones y las transferencias a municipios y a estados y, en dado caso, estoy plenamente seguro que no quieran firmar los famosos convenios que autorizan a hacer uso de las participaciones.

Vendrán las decisiones del IMSS y del ISSSTE de separar de la prestación de los servicios a los trabajadores de estas entidades, bajo el pretexto de que no pagan su deuda.

Se limitarán derechos que afectarán garantías humanas de los trabajadores de las entidades públicas a partir de querer resarcir los escasos recursos que en el Presupuesto se les dan al IMSS y al ISSSTE, por la vía de recuperar deuda, por la vía de recuperar cartera vencida, pero recargando el daño en los ayuntamientos y en los estados.

Me parece que esta decisión del Senado es una decisión tramposa, esta sí es una decisión mezquina, porque pretenden apretar las ya exiguas finanzas de los ayuntamientos y de los estados por la vía de que firmas convenios. Y te cobro a lo chino tus participaciones y transferencias federales, el gasto federalizado, o me voy a ver obligado a suspender la inscripción de tus trabajadores en el Seguro Social.

Me parece que esto es un acto arbitrario del Senado, tramposo del Senado, que va en perjuicio de las entidades más desprotegidas en el uso de los recursos federales. Gracias por su atención, gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Muy buenos días. Con la venia de esta Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Compañeras y compañeros diputados, en este ejercicio queda demostrado que el diálogo es algo fundamental para la democracia y para los procesos parlamentarios. Hoy queda manifiesto que dialogar implica exponer argumentos, mostrar apertura para escuchar las voces de otras personas, algunas que coinciden y algunas con las que podemos diferir, pero sobre todo la apertura para buscar puntos de encuentro y de entendimiento.

Precisamente, creo que es lo que hizo el Senado de la República y que hoy debemos valorar en nuestros procesos parlamentarios, porqué existe la función de la Cámara revisora.

La colegisladora dialogó, escuchó las reflexiones que había en torno de una decisión que se había tomado por una mayoría aquí en la Cámara de los Diputados en un tema que es de vital importancia para nuestro país, para un sector tan importante como lo es el campo mexicano.

Hubo una propuesta de reserva presentada en la Comisión de Hacienda en la que, lamentablemente, no se podía explicar qué era lo que buscaba y cómo la podían argumentar y sostener. Simplemente, en un pragmatismo de tenemos los votos y vamos a sacarla adelante.

Desde ese momento el Partido Verde se manifestó en contra de esta medida, dimensionábamos que era de poca sensibilidad política y que no era el momento para avanzar en el gravar un derecho al agua aún más a este sector tan importante para nuestro país.

Queremos reconocer al campo mexicano y queremos reconocer al Senado de la República que haya tomado esta decisión, pero también queremos reconocer que esa mayoría que votó en un momento por esta modificación al proyecto que nos envió el gobierno de la República, porque hay que ser claros, esto no venía propuesto por el gobierno federal.

Hoy son sensibles, se recapacita y en unidad es que le vamos a dar una respuesta positiva al campo mexicano. Mi reconocimiento y mi respeto a todas las diputadas y todos los diputados que con su voto el día de ayer hicimos posible dar reversa a esta medida que lastimaba y laceraba a los productores y a nuestros amigos y compañeros campesinos.

Coincidimos en que debemos cuidar el agua, coincidimos en que debemos buscar ser más eficientes. Coincidimos en que tenemos que hacerles llegar y apoyar al sector productivo campesino con tecnología, pero no es gravándolos, no es cargándoles más la mano en positiva como vamos a poder lograrlo.

Hoy tenemos la oportunidad y así lo vamos a hacer, de enmendar la plana en este diálogo, haciendo un reconocimiento, como ya lo hacía al Senado, pero también a los diputados y con esa sensibilidad para no lastimar más a nuestro campo mexicano.

Reconocemos que se hayan eliminado la reforma a los artículos 223, apartado C; 224, fracción IV, y 225, fracciones I y III. Así como los transitorios primero, fracción III, y quinto de la Ley Federal de Derechos.

Compañeras y compañeros, el día de hoy, más allá de los derechos también y los dictámenes que estamos discutiendo, contienen otros ajustes, como el dictamen relativo a la miscelánea fiscal, que contiene cinco modificaciones, el relativo a la Ley Federal de Derechos, que contiene seis modificaciones, y a la Ley de Ingresos, que se le modificó la carátula y los ingresos.

Con la aprobación de estos dictámenes que tendremos el día de hoy, terminamos la definición de los ingresos para nuestro país para el próximo año, con los cuales estamos definiendo habrá de trabajar el gobierno de la República para enfrentar los grandes retos que tenemos para combatir la desigualdad y acelerar el crecimiento económico.

Con estos ingresos tendremos que trabajar juntos en unidad, construir un presupuesto apegado a la realidad que vive nuestro país, que busque ser equitativo y que permita al gobierno de la República trabajar para dar respuestas y alternativas de solución a las diversas problemáticas que enfrentamos como país.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde habrá de votar a favor, de votar a favor para avanzar en este paquete económico e iniciar de lleno los trabajos de lo que será el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, un presupuesto que tiene que buscar dar respuestas a las demandas y exigencias de los ciudadanos, pero que también debe buscar una realidad. No podemos gastar más de lo que generamos, debe ser un presupuesto realista, un presupuesto austero, pero un presupuesto sensible, que busque dar respuesta a las demandas de todas y todos los mexicanos.

Hoy votaremos a favor para contar ya con una Ley de Ingresos y dar paso a la discusión y a la formulación de lo que será el próximo Presupuesto de Egresos de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por diez minutos.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala: Derivado del análisis de la minuta del Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social nos pronunciamos por hacer señalamientos constructivos y necesarios que favorezcan el crecimiento que como nación buscamos y el desarrollo que todas y todos esperamos.

Como representantes populares que somos, debemos privilegiar los intereses de la gente por sobre cualquier otro. El país atraviesa una situación complicada, la precariedad en la que viven millones de mexicanos. Aunado a los malos manejos de las finanzas públicas y a la lacerante corrupción de los gobiernos anteriores han derivado en un país de desigualdad, con escaso bienestar social para algunos y abundancia y privilegio para otros.

Como legisladores debemos procurar tomar decisiones que apoyen a todos los grupos poblacionales, a todos los sectores y a todas las personas. Es fundamental transformar la política para orientarla a la gente que históricamente más nos ha demandado y que por décadas ignoramos.

Los dictámenes que se presentan a esta soberanía a discusión versan sobre temas que no estado exentos de polémicas y, sin embargo, su discusión es vital para la estabilidad del país.

La conformación de la miscelánea fiscal 2020 nos presenta desafíos que debemos clarificar a los ojos de todos los ciudadanos. En el PES asumimos el compromiso de definir una política fiscal y tributaria, sólida y justa para México.

El objetivo que tiene esta propuesta es el de mejorar las capacidades de recaudación por concepto de impuestos, al tiempo de impactar de forma coherente y equitativa a los ingresos de las empresas y en el de todas las familias.

El Senado de la República ha puesto a consideración de esta Cámara aspectos de suma importancia que alimentan el debate en la conformación de la miscelánea fiscal 2020, la cual dará soporte firme a las pretensiones del gobierno de México en la consecución de las metas y objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los instrumentos de planeación y estrategias planteadas por parte de los tres Poderes que conforman el aparato del Estado mexicano.

En la Ley Federal de Derechos, las y los diputados del PES estamos impulsando la construcción de leyes fiscales sólidas y con vistas a tener un presupuesto responsable.

En ocasiones hemos tenido que tomar medidas que han tenido afectaciones. Sabemos que han sido sacrificios que los bolsillos de las y los mexicanos han hecho, pero que han sido necesarios para la estabilidad de las finanzas públicas.

En esta ocasión, la Ley Federal de Derechos que estamos revisando nuevamente, aun con las modificaciones del Senado se traducirán en mayores ingresos para las arcas públicas, sin afectaciones al grueso de la población y, mucho menos, a las personas menos favorecidas.

Estamos seguros de que con esta Ley de Derechos estamos construyendo el camino para que el campo mexicano no siga siendo una fábrica de pobreza. Por eso, para subsanar la caída del presupuesto del campo, estamos proponiendo una reducción aún mayor a la considerada en la propuesta por el Senado.

En el PES queremos hacer patente que la colegisladora no nos está corrigiendo la plana, como se ha dicho por los medios de comunicación, incluso, por algunos senadores.

Desde nuestra óptica, creemos en la construcción de mejores proyectos a partir del estudio de ambas cámaras y cuando existen buenas razones para revisar nuevamente los proyectos, lo haremos con el gusto y la responsabilidad que exige cada ley.

Por eso, en la Comisión de Hacienda se evalúan, analizan y aceptan las modificaciones hechas por el Senado de la República.

Ya no se trata de echar culpas sobre quién propuso tal o cual derecho, sobre quién propuso aumentar los derechos por el cobro del agua o la regularización de los autos ingresados al país de forma irregular.

Hoy se trata de ver qué es, en definitiva, lo que más le conviene al país, a las finanzas públicas, a los programas productivos, a los programas existenciales, a los recursos para la infraestructura y, por supuesto, para beneficiar a los más de 50 millones de mexicanos que siguen viviendo en pobreza.

En cuanto a la Ley de Ingresos, para el ejercicio 2020, no ha sido una ley que haya transitado de manera sencilla. Hay puntos que desde el interior del grupo parlamentario nos gustaría pronunciar.

Estamos a favor de mantener estables las cuotas al agua, de mejorar las condiciones de vida de las y los campesinos. Derivado de sequías e inundaciones en el país es lo mínimo que podemos hacer para garantizar un ingreso mínimo familiar.

El campesino no conoce de barreras a la hora de trabajar y nosotros no debemos ser una barrera para su bienestar, para su bien vivir. Sin coberturas al campo que protegen los productos mexicanos, sin garantías a su ingreso y con una elevación a las cuotas, las cuales no impactarán al sector industrial, sino a la base de la producción campesina.

En el PES apoyamos mantener estables las cuotas y creemos que las acciones de la Cámara revisora no han tenido la seriedad que el tema merecía.

Queremos señalar que bajo la unión del Estado y la sociedad debemos comprometernos en garantizar los derechos fundamentales de los habitantes y a proporcionar los servicios necesarios para el mínimo bienestar.

En el PES sabemos que los tiempos que se avecinan no son fáciles, los cambios requieren de un mayor esfuerzo, compromiso y sacrificio, porque lo que está en juego es el futuro de México. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por diez minutos.

El diputado Higinio del Toro Pérez: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.

El diputado Higinio del Toro Pérez: Aprovechando que lo que discutimos en esta sesión es una minuta que viene del Senado, sería ocioso regresar otra vez a lo que ya discutimos aquí cuando planteábamos y aprobamos en su momento esta Ley de Ingresos, la propia Ley de Derechos y la misma miscelánea fiscal.

Me gustaría empezar esta intervención a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, haciendo una reflexión sobre el trabajo legislativo que implica estas idas y regresos de algunas cosas que tendríamos que tener unas discusiones más amplias. Y lo hago, lo digo con mucho respeto, con el ánimo de construir.

He oído los últimos días aquí actitudes conciliadoras de muchos grupos parlamentarios, y me quiero sumar a esa propuesta en el sentido de que empecemos a encontrar consensos y que de alguna manera nuestro trabajo legislativo sea recordado de mejor manera.

Lo he dicho yo aquí, una legislatura es evaluada de alguna manera en forma general, pero cada uno de nosotros tenemos una reputación en particular que defender con nuestro trabajo legislativo.

¿Y por qué señalo todo esto? Porque es una minuta que regresa del Senado, la propia Constitución señala cuál es el procedimiento cuando suceden este tipo de situaciones, las Cámaras de origen, las Cámaras revisoras y los mecanismos para que una y otra vez vayan y encuentren las mejores modificaciones que se pueden hacer. No nos asustamos, porque luego nos dicen que nos corrigieron la plana, intervenciones en el sentido de poder maximizar el trabajo legislativo que se hace en esta Cámara.

Miren, diputados, hace unos días acabamos de aprobar ampliar el periodo legislativo. ¿Y para qué queremos ampliar un periodo legislativo, si con el trabajo diario que hacemos aquí podemos maximizar? Hoy tendríamos que estar, si hubiéramos hecho el trabajo desde el principio, discutiendo seguramente otro dictamen de los varios que están rezagados ahí y que están en espera de siempre sacar lo que urge más. Hoy urge sacar esto, nos lo regresan, y lo digo –insisto– en unos ánimos de construir.

Ojalá que todo esto que hoy vamos a plantear en estas minutas que llegan del Senado, hubiéramos tenido la capacidad de escuchar. Revisen lo que estamos discutiendo hoy, no hay un solo punto de los de aquí, que primero en comisiones y después en el pleno, a través de varias reservas, no se haya dicho antes, y sin embargo una y otra vez en ese ánimo de decir: somos la mayoría y no queremos escuchar, la sacaron adelante. Hoy la regresan y el trabajo legislativo que tendríamos que estar haciendo hoy aquí tendría que ser otro.

En Movimiento Ciudadano vamos a votar estas minutas, la miscelánea fiscal, la Ley de Derechos a favor en lo general y en lo particular. Pero en la Ley de Ingresos sí tenemos algunas dudas que ya otro compañero de mi bancada en su momento aclarará y esa la votaremos en contra en lo general, pero sí en lo particular con las modificaciones que aquí se hicieron.

¿Y por qué vamos a votar nuevamente a favor en lo general la miscelánea fiscal? Porque en la propia Comisión de Hacienda, donde participamos algunos de mis compañeros, ya lo habíamos dicho en lo que se estaba haciendo con los empresarios de este país, era poco menos que un terrorismo fiscal y hoy se da marcha atrás.

Y quién podrá decir que no votemos a favor, el establecer medios de defensa siempre que la inclusión no obedezca al cumplimiento de obligaciones internacionales. Quién podrá decir no a que se respete la seguridad jurídica y de audiencia con la emisión de la medida cautelar. Quién podrá decir que no a que se adicionen también en la propia Ley de Instituciones de Crédito, que se garantice el derecho de audiencia para las personas que aparecen en esta famosa lista de bloqueados.

Y cómo podríamos ir en contra de esta minuta de la miscelánea fiscal, si también se da marcha atrás en cosas importantes que las propias empresas de las plataformas digitales estuvieron diciendo una y otra vez aquí, en el sentido de que era oneroso para ellas hacer las consideraciones que se le estaban haciendo en esta propia Ley de Ingresos.

Quiero ahondar particularmente aquí, la modificación que se hizo en el Código Fiscal de la Federación. En aras de recaudar más, lo hemos dicho aquí con el tema de facturas falsas y otros que han tenido que ver con hacer llegar mayores recursos a la federación, se ha caído en el despropósito, no se han hecho tiros de precisión, y lo que se había planteado en esta miscelánea de hacer responsables en un consejo directivo a todos los que tuvieran algún problema fiscal como empresa, a todos los que integran ese consejo directivo, era un despropósito que solo iba a desfavorecer la inversión privada.

Por eso celebramos, desde Movimiento Ciudadano, que se haya atendido este asunto de la responsabilidad solidaria y se especifique solo en qué casos los gerentes, los administradores, serán responsables solidarios de las contribuciones omitidas, otorgando lo que decíamos aquí, la seguridad jurídica a quienes participan en esos consejos.

Con respecto a la propia Ley de Derechos, quisiera ahondar con algo y no quiero polemizar ni hacer leña del árbol caído, como se dice por ahí, pero celebro que al menos en el Senado se haya tenido esa capacidad de escuchar, y que finalmente las voces de miles de agricultores de todo el país, hayan sido escuchadas y se haya dado marcha atrás en este despropósito de empezar a cobrar los excedentes en el aprovechamiento de las aguas nacionales. Es una medida que desincentivaba la producción.

Se decía allá, en las comisiones, que estaba orientada a los grandes empresarios, a los que consumen mucha agua, cuando se omitían detalles esenciales, los propios distritos de riesgo al tener consumos globales, desde las primeras cuotas lo iban a exceder, y en ese sentido íbamos a ir contra el agricultor de a pie, el que tiene la subsistencia, contra ellos era esta Ley de Ingresos. Y yo celebro, y celebramos desde Movimiento Ciudadano, que se haya escuchado y se haya dado marcha atrás.

En particular, quisiera referirme también, aunque ya hemos dicho que en lo general lo vamos a votar en contra, no podemos ser indiferentes en las modificaciones que plantea esta minuta en la propia Ley de Ingresos.

Nos llama la atención, ya lo hará mi compañero aquí en tribuna cuando discutamos la propia Ley de Ingresos que, de golpe y porrazo, ayer para encomendar la plana, bueno, sí le quito los derechos, ya no voy a recaudar esas cantidades por el tema del agua, pero de repente, entre la sumas y restas, hay por ahí 4 mil 415 millones de pesos que al menos en el papel, como dicen por ahí que el papel aguanta todo, pero que no se nos dice de dónde van a ser recaudados.

Por eso, en lo general no podríamos ir a favor de esta propia Ley de Ingresos, esta minuta quiero decir, pero sí es loable en tres cosas que se corrigieron ahí. Habrá que discutir en su momento, pero por lo pronto se le pone una pausa al tema de los autos chocolates. Hay voces a favor y en contra. Yo creo que haber tomado una decisión como se tomó el otro día con una votación por separado requiere de una discusión más amplia. Celebramos que por lo pronto se quede ahí.

También quiero referirme particularmente, para que vean que también sabemos reconocer, por aquí decía, y miren que respeto mucho a mi compañero Antonio Ortega, hemos dado la batalla en varias comisiones, que esto que se plantea en esta Ley de Ingresos como modificación a la minuta que nos envía el Senado en el sentido de que se faculta a la propia Secretaría de Hacienda para que retenga vía las participaciones federales los incumplimientos del pago del IMSS, yo tendría que diferir.

He planteado aquí una y otra vez la situación en que se encuentran los municipios derivado de la falta de recursos y de la falta de sensibilidad de la mayoría aquí que les han ido quitando una y otra vez la facultad y la posibilidad de llevar ingresos a los gobernados.

Sin embargo, yo también plantearía. Se ha dicho aquí es que ya no damos el Ramo 23 porque había moches. Combatan los moches, pero sigan dándoles recursos a los municipios, y aquí está un claro ejemplo de que también traemos propuestas.

Yo también estoy de acuerdo que aquellos municipios que no incumplan se les sancione de esta manera. Lamentablemente hay unos que no pueden, pero hay otros que se echan a la hamaca y saben que si no pagan no va a pasar nada.

Aquí la contraparte y el complemento de esto sería que, aquellos que sí cumplen, cómo los premiamos, aquellos que sí cumplen que tengan derecho a participar otra vez en algunas de las bolsas concursables y que hagamos desde el servicio público municipal una forma de seguir creciendo a este país.

También por ahí está la facultad, y celebro que ya se elimine la facultad que tenía también la Secretaría de Hacienda para emitir lineamientos en el retorno de los recursos no ejercidos de ejercicios anteriores por parte de los estados y municipios.

Quienes hemos estado en la administración municipal sabemos lo que significa un cierre de año. Los recursos llegan apenas en septiembre y a veces es diciembre y quieren que la obra esté concluida y que aparte esté comprobada.

Esta facultad que se deroga hoy para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les permite a los municipios tener más tiempo para poder cumplir y no estar presionados de que si no se ejerce el recurso en tiempo y forma, discrecionalmente la Secretaría de Hacienda podía retirarles estos recursos.

Yo celebro que finalmente se haya oído en el Senado nuestra voz y que hoy estas minutas vengan a complementar lo que ya habíamos planteado en tribuna. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Con la venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, permítanme referirme en un primer momento a las modificaciones realizadas por nuestra colegisladora en términos de la Miscelánea Fiscal que hoy discutimos.

Recordemos que la existencia del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es una propuesta del Ejecutivo federal y que fue aprobada en sus términos por esta Cámara, por lo que no podemos acompañar las modificaciones propuestas por nuestra colegisladora, porque tal artículo tiene el propósito de otorgar una reducción del ISR a las personas morales constituidas totalmente por ejidatarios y comeros o ejidos y comunidades, de conformidad con la Ley Agraria que comercializa e industrializa sus productos.

Sin embargo, cuando la colegisladora eliminó el cuarto párrafo del mencionado artículo, lo que hizo fue abrir la puerta para que se distorsione el objetivo original.

Al eliminar la restricción para no permitir que una sola persona moral pueda ser acreedora de la reducción del 30 por ciento del ISR, en más de una ocasión generó en automático un esquema perverso para que unos cuantos puedan concentrar los beneficios fiscales.

La otra modificación que debe ser rechazada son las bajas tasas de retención que ponderó nuestra colegisladora para los servicios que se prestan a través del internet mediante plataformas tecnológicas, las cuales fueron drásticamente reducidas respecto de las que nosotros aprobamos, haciendo en los hechos que las nuevas medidas sean solo letra muerta porque no hay proporcionalidad ni progresividad.

También cuando la colegisladora estableció pertinente adelantar las fechas en las que la Secretaría de Hacienda debe emitir las reglas de carácter general que derivan de las nuevas disposiciones a más tardar el 31 de enero de 2020, no al primero de marzo como se aprobó en esta Cámara, generó un contexto para la emisión de una reglamentación deficiente, dado que existe una brecha de tiempo entre el término del año fiscal y el momento en el que se va a contar con la nueva información estadística que será la base de estas disposiciones.

Por último, nos debe quedar claro que terminar con las empresas factureras de operaciones inexistentes es un compromiso firme desde esta administración y al cual no podemos debilitar desde la propia norma.

Cuando reformamos el artículo 26 del Código Fiscal lo que evitamos es que los directores generales, gerentes generales o los administradores únicos de las empresas morales, así como sus socios, accionistas y asociantes no quedaran excluidos del supuesto de responsabilidad solidaria por las contribuciones causadas o no retenidas por las personas morales durante su gestión.

Si aceptamos las modificaciones que el Senado nos ha remitido, vamos a dar marcha atrás desde la ley a la lucha contra las empresas que simulan actividades y, por lo tanto, en los hechos estaremos renunciando a hacer efectiva la reforma que considera el uso de facturas falsas como delito grave.

Por todos estos elementos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no puede acompañar las modificaciones que realizó nuestra colegisladora en materia de miscelánea fiscal.

Ahora, permítanme referirme a los cambios que nuestra colegisladora realizó sobre la Ley de Ingresos, advirtiendo de antemano que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo apoya las diversas disposiciones que el Ejecutivo sometió a consideración de esta soberanía.

Derivado de ello, no podemos acompañar las modificaciones de la colegisladora sobre el monto total de ingresos esperados, porque no hay elementos objetivos y cuantificables que justifiquen dichos cambios.

Primero, porque al modificar a la baja diversas cuotas en la Ley de Derechos, como en la Ley del ISR, la colegisladora debió realizar las adecuaciones correspondientes en los rubros mencionados. Pero no lo hizo así, únicamente disminuyó los 586 millones de pesos que esta Cámara estimó que se recaudarían por concepto de cobro de derechos por uso de agua a los grandes terratenientes.

Omitió irresponsablemente realizar las mismas adecuaciones al eliminar el incremento aprobado por esta Cámara sobre servicios migratorios en aeropuertos. Además, si la colegisladora aprobó eliminar el artículo 74–B del ISR, la restricción de los socios o asociados de las personas morales a los que se regula este artículo no pueden ser doblemente acreedores al beneficio de la reducción del ISR. Debió calcular también a la baja recaudación estimada en ISR, pero no lo hizo.

Además, también modificaron a la baja todas las tasas de retención aplicables a los ingresos obtenidos por la enajenación de bienes y servicios a través de internet, dispuestos en la fracción III del artículo 103–A de ISR. Y nuevamente, de forma irresponsable, no estimaron prudente disminuir las estimaciones de la recaudación del ISR, siendo que Hacienda reiteró en múltiples ocasiones que los cálculos de recaudación del IVA e ISR están elaborados sobre la base que el Ejecutivo federal hizo llegar a esta soberanía. Pero más irresponsable fue la colegisladora, al incrementar los recursos estimados por aprovechamientos en 5 mil millones de pesos en un renglón que se denomina Otros, de la categoría de los aprovechamientos.

Es decir, más opaco no pudo ser el incremento de recursos ficticios, que sin fundamentos claros se aprobaron y cuyo único propósito fue darle vuelta a la posibilidad a que estos recursos fueran a las entidades federativas y municipios, como sí lo hicimos en esta Cámara al modificar hacia arriba la recaudación esperada de ISR.

Además, la colegisladora eliminó del artículo séptimo transitorio la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de eliminar lineamientos para la asignación de destino a los recursos federales que no hayan sido devengados por las entidades federativas y municipios, argumentando que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya se prevé el tratamiento de los recursos que no se devengan ni son pagados al concluir el ejercicio fiscal.

Sin embargo, tales afirmaciones son equivocadas, primero, porque la redacción del transitorio viene estableciéndose desde la Ley de Ingresos de 2015, por lo que si en las leyes referidas efectivamente existiera la reglamentación a la que hace referencia la colegisladora, no tendría sentido la existencia misma de la redacción que año con año se ha venido manejando.

Además, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 54, párrafo tres y cuatro, solo se establece la obligación de reintegrar a la Tesorería de la Federación las economías que conservan las entidades al 31 de diciembre, pero en ninguna parte de la ley se señala a dónde deben ir estos recursos, por ello en el transitorio siempre ha establecido que estos deben ir a mejorar la infraestructura de las entidades federativas, así como la atención de los desastres naturales que se enfrentan.

Y contrario a lo que argumenta la colegisladora, la Ley de Disciplina Financiera solo refiere a las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la deuda menor al presupuesto.

Por lo anterior, son inválidos los argumentos esgrimidos por la colegisladora, por tanto, esta Cámara debe mantener la recaudación en la que se mandata a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir los lineamientos para su operación a más tardar el último día de abril, porque no estamos modificando el destino del gasto al que ya hice referencia, solo estamos dando transferencia al uso de estos, terminando así con la discrecionalidad en la que puede incurrir la Secretaría de Hacienda.

Por último, me quiero referir a las modificaciones que se refiere a la Ley de Derechos, que nuestra colegisladora decidió permitirse realizar. Primero tenemos que hacer mucho énfasis en decir que los conceptos, materia de esta ley, no son impuestos. La naturaleza del cobro de un derecho deviene de la prestación de un bien o servicio directo, el cual sin lugar a dudas tiene asociado un costo de producción, y si bien la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo está a favor de las modificaciones realizadas en materia de cobro por el uso de agua y de

prestación de servicios migratorios, tenemos que decir con claridad que sobre el primer punto su propósito nunca fue el de afectar a los pequeños productores del campo.

El espíritu de la reforma que se propuso fue el de regular el uso del vital líquido, principalmente en las entidades federativas que enfrentan umbrales de crisis hídricas, que en un amplio porcentaje se encuentran asociados al uso indiscriminado del agua.

Es falso que se proponía afectar al sector agrícola de nuestro país, como es falso que los grandes productores agroindustriales exportadores están preocupados por los pequeños y medianos productores y por todos aquellos que se dedican a la agricultura de autoconsumo.

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, hay 106 municipios con una alta vulnerabilidad de sequía, que se localizan en la región noreste, centro y vertiente del Pacífico del país, comprendiendo los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México y Guerrero.

Hoy estamos perdiendo la oportunidad de atender los diversos planteamientos para solucionar asuntos específicos de administración de las aguas, desarrollo de infraestructura hidráulica, servicios respectivos, así como la oportunidad de impulsar medidas para hacer un uso racional del agua, preservar su calidad y con ello contribuir a la protección de ecosistemas vitales.

Así, estimadas y estimados compañeros legisladores, los invitamos a reflexionar sobre el por qué votar en contra de la Ley de Ingresos y de la miscelánea fiscal que nos remitió nuestra colegisladora.

Trabajamos por una mayor transparencia. Terminemos con la discrecionalidad. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.

La diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez: Diputadas y diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI tuvimos en todo momento claro que incrementar los derechos por el uso, el goce y el aprovechamiento de aguas nacionales en el sector agrícola, significaría un efecto importante de disminución en la producción de los bienes agrícolas, ya que aumentaría los costos de producción en este sector. Una medida propuesta por la mayoría, insensible, lacerante e innecesaria.

Es increíble que esta administración, además de proponer reducir el presupuesto del campo, haya querido, adicionalmente, cobrar un mayor derecho por agua.

En el proyecto de Presupuesto para el 2020, la Secretaría de Agricultura trae una reducción del 44 por ciento en términos reales, respecto al 2018.

Y en la Secretaría del Medio ambiente, en particular Conagua, trae una reducción del 27 por ciento, comparado con el 2018.

Y cabe destacar, quienes administran el agua a través de concesiones, desde 1989, son los módulos y las unidades de riego, que nada más del 2007 a la fecha han invertido 40 mil millones de pesos en la conservación y en la modernización de la infraestructura hidroagrícola de este país. Han sido fuertes aliados y promotores para el bueno uso y el aprovechamiento del agua, para el mantenimiento de drenes y canales. En esa medida contribuyen al pago de derechos.

Otra claridad que manifestó el Grupo Parlamentario del PRI fue en el tema del cobro de derechos no residentes y servicios migratorios.

Establecimos que el aumento del cobro a visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, y el incremento en la cuota por la prestación de servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros internacionales que abandonaran el territorio nacional, podrían ocasionar una disminución considerable en el número de visitas turísticas a nuestro país, así como un potencial efecto en el flujo de visitas de nuestros paisanos a sus familiares residentes en México.

Siguen pretendiendo afectar la industria turística, primero desaparecen el Consejo de Promoción Turística, ahora le quitan recursos a la Secretaría y quieren rematar alejando a los turistas afectando a las familias mexicanas que viven de este sector.

El Grupo Parlamentario del PRI no está de acuerdo en la eliminación del 2 por ciento de los ingresos que le corresponderían a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y que provienen de los ingresos que se obtendrían del pago de los derechos de los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, que ingresen al país con fines turísticos.

Diputadas y diputados, también expreso que tenemos coincidencias con los senadores en temas como la reducción de las tasas de retención a las plataformas digitales, lo cual de no haberse reducido podría haber afectado el pago del impuesto sobre la renta de los contribuyentes, en particular de las personas físicas que realizan este tipo de actividades. Con esto, el PRI protege a los usuarios.

Estamos de acuerdo en que la responsabilidad solidaria no puede ser amplia o ilimitada y que debe ser acotada a aquellos casos cuando se incurre en conductas graves en específico. Estamos a favor de que no se aplique la responsabilidad solidaria a gerentes, directores y asimilados.

Coincidimos en que hay que legislar respecto a los autos chocolates, pero se debe hacer sin afectar a la industria automotriz de nuestro país, porque eso significa proteger el empleo. Sin embargo, no nos podemos cegar ante la realidad que vivimos de que hoy hay cientos de miles de autos chocolates circulando en toda la República Mexicana. Por eso insistiremos en incluir el artículo transitorio que busque normar a este respecto.

En el Grupo Parlamentario del PRI nos preocupa que la estimación de ingresos para el próximo año se haya incrementado artificialmente, como por arte de magia. Seguimos considerando que la estimación del crecimiento del producto interno bruto no es realista y que el incremento de la producción de nuestra plataforma petrolera es un buen deseo y solo eso.

No queda claro cuál es el origen por 5 mil millones de pesos en el rubro de Aprovechamiento, Otros, Otros. Aquí cabe preguntar al grupo mayoritario, ¿cuál es la fuente de esos recursos? Merecemos conocer en esta soberanía de manera transparente cuál es la procedencia de la generación de estos recursos.

En el PRI lo decimos claro, sobreestimar los ingresos llevará a la actual administración a la utilización del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, como ya lo hicieron este 2019 que dispusieron de más de 120 mil millones de pesos, esto se traducirá en un incremento en la deuda del país. Esto, diputadas y diputados, se los volvemos a decir, es un aumento de la deuda por la puerta de atrás.

Asimismo, la sobrestimación podría llevar a la actual administración a realizar un corte dramático en el gasto del próximo año. Cuántos recortes más va a soportar esta administración pública sin perjudicar la prestación de bienes públicos a los mexicanos, si ya observamos que se carece de medicamentos y de equipamiento para la atención médica, solo por mencionar un ejemplo.

Diputadas y diputados, no hay que confundirnos, está muy claro qué grupo parlamentario de esta Cámara presentó la propuesta del cobro del derecho del agua, el cobro de derecho no residentes y servicios migratorios, la propuesta de las tasas de retención a las plataformas digitales, la propuesta de responsabilidad solidaria, amplia o ilimitada.

En el Grupo Parlamentario del PRI, desde el principio se realizó una defensa para que no se aprobaran todos estos temas, como los proponía el grupo mayoritario. No fuimos escuchados.

Las diputadas y diputados priistas presentamos un sinnúmero de reservas que no fueron aceptadas en este pleno y hoy, compañeras y compañeros, nos alcanza la realidad y se están modificando.

En el Grupo Parlamentario del PRI estaremos a favor de las modificaciones realizadas en el Senado, en la Ley Federal de Derechos, porque eso significa estar a favor del sector agropecuario, porque conocemos de los aportes que deberían de considerarse como derechos, de las unidades y de los módulos de riego de nuestro país.

Porque estamos a favor y conocemos también de toda la problemática que arrastran los sistemas operadores de agua de México. Pero, sobre todo, porque estamos a favor de proteger a las familias mexicanas, pero nunca estaremos a favor de aprobar y detener una Ley de Ingresos que no está acorde con la realidad económica que vivimos todas las y los mexicanos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.

El diputado José Rigoberto Mares Aguilar: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado José Rigoberto Mares Aguilar: Compañeras y compañeros diputados, nuevamente estamos ante una miscelánea fiscal y una Ley de Ingresos con un alto grado de irresponsabilidad financiera.

Por ello, en este posicionamiento que hago a nombre de las y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional reiteramos nuestro voto en contra. Y, no es por nada, pero se los advertimos el pasado 18 de octubre y el día de hoy en esta tribuna.

La propuesta del Ejecutivo federal y de Morena genera expectativas de ingresos completamente fuera de la realidad que afectarán a sectores importantes de nuestra economía.

Sus propuestas no abonan a las necesidades del país. Por ello, si revisan la minuta que regresó el Senado, existe una alta coincidencia con nuestras múltiples reservas presentadas en pasado 18 de octubre, lo que demuestra una vez más que Morena solo sigue línea, no leen ni revisan lo que aprueban.

Los senadores tuvieron que corregirles la plana del tremendo error que cometieron, dando muestras de trabajo plural y de que sí se pueden modificar los puntos y comas cuando es necesario y se legisla con responsabilidad frente a la nación.

Las modificaciones que ahora discutimos son relevantes. Por ejemplo, dar revés a los autos chocolate. También el Senado no aceptó el cobro de derechos por uso de agua en el campo, propuesta que ni siquiera venía incluida en el planteamiento original del Ejecutivo federal, pero que por desconocimiento del diputado que la promovió y de aquellos quienes lo avalaron, ponía en riesgo las actividades de muchos productores del campo mexicano.

A pesar de que diputados, de que nosotros en la Comisión de Hacienda y aquí en tribuna les pedimos reflexionar el tema y dar marcha atrás a la propuesta de no imponer más impuestos al sector agrario, que históricamente ha sido olvidado, ustedes votaron a favor.

Afortunadamente, el error quedó corregido, pero además se les otorgará un estímulo para reducir al 30 por ciento el pago del impuesto sobre la renta cuando se trate de ejidatarios y comuneros dedicados a actividades agroindustriales con ingresos anuales de hasta 5 millones de pesos.

Desde aquí les decimos a los productores del campo que estén tranquilos. Que el aumento al cobro de impuestos que pretendían imponer los diputados de Morena afortunadamente está quedando en el olvido.

Esperemos también que la mayoría en esta Cámara recapacite sobre los recortes a programas a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que el presidente López Obrador propuso a esta soberanía.

Otro aspecto que se modificó en la Ley de Ingresos fue promover el saneamiento de los créditos adeudados por conceptos de cuotas obrero–patronales por parte de los estados, municipios y organismos descentralizados

que ayudará sin duda a frenar las presiones presupuestales por las que atraviesan los gobiernos locales en los últimos años.

La propuesta se pudo haber complementado de manera exitosa si en la Ley Federal de Derechos se hubiera respetado la autonomía de los municipios mineros del país, ya que la derogación de los cuatro últimos párrafos del artículo 275, vinculados al fondo minero, otorgan al gobierno federal la responsabilidad total de asignar los recursos y determinar los proyectos a ejecutar.

Asimismo, en la Ley Federal de Derechos se elimina el aumento a 855 pesos la cuota que se cobra por derechos de no residente y servicios migratorios, por lo tanto permanecerá vigente el texto a fin de mantener en 558 pesos el cobro a extranjeros por la obtención del documento migratorio que acredita la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, y se mantiene la propuesta de 149 pesos para el caso de prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional.

No obstante que reconocemos lo anterior, creemos que en términos generales la propuesta de la Ley Federal de Derechos queda incompleta porque en lo referente a los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho de los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos, a pesar de que se acordó que el 80 por ciento de los ingresos provenientes de esta derecho se invertirá en estudios, proyectos e inversión en infraestructura, será el gobierno federal quien los determine, demostrando una vez más la práctica de centralización de los recursos y la falta de transparencia y de rendición de cuentas.

Es posible que este monto se sume a los 402 mil millones de pesos que representan hoy en día los programas sin reglas de operación, estimación realizada por la organización México Evalúa, lo cual es lamentable porque ratifica que la administración de López Obrador será reconocida por la opacidad y la discrecionalidad de los recursos públicos.

Otra modificación del Senado en materia de impuesto sobre la renta es la modificación al esquema de retención de las personas físicas que perciban ingresos a través de internet mediante plataformas tecnológicas. La retención será provisional y definitiva cuando los contribuyentes tengan ingresos de hasta 300 mil pesos anuales.

Además en el artículo 113 de la ley se propuso aplicar una tasa de retención máxima del 5.4 por ciento por los ingresos que reciben los contribuyentes que enajenan bienes o prestan servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas o aplicaciones, y no del 15 por ciento como se aprobó en esta Cámara, lo que perjudicará menos a estas actividades económicas y a la población que las utiliza.

Es importante que los mexicanos sepan que los que pagan impuestos aportarán 57 por ciento de los ingresos totales del gobierno para el 2020. De los más de 6.1 billones de pesos aprobados por el Senado, más de 3 billones se obtendrán a través del pago de impuestos de los contribuyentes. Esta cifra es 2.7 por ciento mayor en términos reales a lo aprobado para este año.

Reconocemos los trabajos de la colegisladora, pero los ajustes en la carátula de la Ley de Ingresos demuestran, como ya he dicho, el alto grado de opacidad que caracteriza a este gobierno.

Con la mano en la cintura los ajustes a la baja en las estimaciones de recaudación que implica la modificación a la Ley Federal de Derechos, las cubrieron con el rubro Otros, en el concepto de Aprovechamientos.

En esta tribuna presentamos una reserva para aclarar el destino de los recursos por un monto de 98 mil 674 millones de pesos. La minuta del Senado plantea un incremento de 5 mil millones de pesos que no sabemos ni su origen ni su destino.

Lo correcto sería que el próximo año, en vez de cobrar más impuestos para cubrir los boquetes fiscales, el gobierno federal incentivara la economía para evitar la recesión en la que estamos y que garantizara mecanismos de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

Por ello hemos insistido cada año, desde 2013, en hacer una reforma fiscal de mayor envergadura para atender los rezagos y retos que tiene nuestro país.

Que lejos está el presidente López Obrador de cumplir su promesa de crecer por arriba del 4 por ciento y de no cobrar más impuestos a los mismos de siempre.

Este gobierno es irresponsable, porque no estima con precisión las variables económicas y sí condiciona los incrementos o reducciones de ingresos al cobro de más impuestos que afectan a la misma base de contribuyentes.

Compañeras y compañeros diputados de Morena y aliados, si el día de hoy una vez más votan a favor de la minuta del Senado, la cual trae correcciones claramente insuficientes, avalarán la incapacidad de este gobierno no solo para establecer pronósticos reales, sino la incapacidad para cumplir las promesas de un mejor país.

La solución, como ya lo hemos advertido, está en corregir los errores que se cometieron al aprobar las reformas a las diferentes leyes fiscales y la Ley de Ingresos la semana pasada.

Por eso, los diputados y diputadas de Acción Nacional votaremos en contra del dictamen de la Ley de Ingresos 2020, asumiendo la responsabilidad histórica que tenemos con las familias mexicanas y, en general, con el bienestar de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por diez minutos.

El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: Responsabilidad la que no tuvieron ustedes, compañeros, en su época cuando gobernaron y cuando aplicaron las políticas de ingresos y de recaudación, modelo que estamos cambiando. Y creo que también desconocen cuál es la característica principal de nuestro modelo legislativo, que tiene que ver con el tema de la Cámara de Diputados y del Senado.

No me sorprende la actitud de los compañeros de Acción Nacional y del PRI, al contrario. Celebro también la aportación del compañero diputado Higinio, de Movimiento Ciudadano, en que debemos dar un verdadero debate, debemos intercambiar ideas. Y el Poder Legislativo mexicano, con esa característica principal debemos asumir la responsabilidad y ayudarnos mutuamente por el bien de todas y todos los mexicanos.

Ahora dicen apoyar al campo, y como lo señalé el día de ayer, porque insisten en que somos responsables, cuando ellos aplicaron políticas que no favorecieron en nada al campo mexicano.

Es importante precisar que, desde esta soberanía, cuando recibió las sendas iniciativas del Ejecutivo federal, las y los diputados de Grupo Parlamentario de Morena llevamos a cabo un meticuloso análisis de las mismas. De ahí que realizamos adecuaciones en cuanto menos 74 artículos de las iniciativas en comento, con el propósito de enriquecerlas.

El trabajo nos demandó alturas de miras, siempre teniendo como centro de atención el interés para garantizar el bienestar de las y los mexicanos.

Estamos ciertos que una adecuada política de ingresos es la base para garantizar el cabal ejercicio del gasto público y hacer llegar más recursos a los programas y proyectos prioritarios, a quienes más lo necesitan y donde más hacen falta.

Por su parte, el Senado de la República hizo lo propio como Cámara revisora. De ahí que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales realizó el análisis conducente resultando del mismo algunas modificaciones, de las cuales dan cuenta los dictámenes que hoy nos convocan y que discutimos.

Con los cambios efectuados a los 16 artículos de las minutas señaladas, las y los senadores estiman que para este 2020 lograremos obtener recursos por 6.1 billones de pesos.

Lo anterior confirma el valor de nuestro sistema bicameral y del proceso legislativo ordenado en la ley fundamental. Ambas Cámaras del Congreso conocen de los asuntos en su competencia para garantizar la más amplia representación popular y de las entidades federativas.

Lo cual confirma la pertinencia de esta dualidad, que da vida y fortalece al Poder Legislativo en el marco de la división de Poderes.

En otras palabras, las cámaras del Congreso estamos unidas por el bien de México y el bienestar del pueblo. La coordinación y el diálogo es la ruta que hemos elegido para cumplir con los objetivos de la cuarta transformación y prueba de ello, ayer en la sesión de la Comisión de Hacienda, donde los compañeros de las unidades de riego estuvieron presentes, porque actualmente en este Poder Legislativo se les da acceso a los compañeros, no se les reprime como antes, no se les cerca el Congreso con los granaderos y estuvieron presentes y aquellos que en su momento tuvimos como oportunidad defender otra propuesta, ahí estuvimos, dando la cara y no que ahora resulta que otros partidos son los que toman la bandera que mucho tiempo no la tomaron en cuenta.

Las y los legisladores de Morena no legislamos al vapor, apreciamos el valor de la pluralidad. Asumimos el proceso de deliberación y discusión como una herramienta democrática, privilegiamos las convergencias y abrimos paso al consenso.

De ahí que consideramos que los cambios enviados por el Senado reflejan la convicción democrática que nos une e identifica. Estos perfeccionan la propuesta de ingresos para el ejercicio fiscal del próximo año y posibilitan una política del gasto responsable, atendiendo a la austeridad republicana a la que estamos obligados.

No podía ser de otra manera, porque todas y todos estamos convocados, sin discriminación, a consolidar la cuarta transformación de la República. Este proceso de escucha, construcción y perfeccionamiento, que es de ida y vuelta, permitirá que para el 2020 se recaude más sin necesidad de crear nuevos impuestos, un compromiso de nuestro presidente, que fue no generar nuevos impuestos ni aumentarlos.

Con la aprobación de los dictámenes que discutimos el día de hoy, las y los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena refrendamos que vamos por la ruta correcta, porque esto permitirá regular las actividades económicas que a la fecha no estaban complementadas en las legislaciones vigentes.

Dará certeza jurídica a los inversionistas. Propiciará una competencia más justa entre las empresas. Fortalecerá el campo. Mejorará los ingresos por los servicios migratorios que otorga el Estado. Y, apoyará a las entidades federativas que no podrán celebrar convenios de adeudos con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por eso, votaremos a favor de los dictámenes a discusión, porque estamos abiertos a nuevas posibilidades y paradigmas que permitan alcanzar el crecimiento y desarrollo de México.

Efectivamente, no ha habido un crecimiento económico, pero cuando lo hubo no había desarrollo económico. Ahí está el Índice de Desarrollo Humano dónde nos pone. Sin embargo, ahora sin crecimiento económico estamos manteniendo una economía estable ante los avances de las economías internacionales y de este proceso de globalización.

El bienestar del pueblo mexicano nos lleva a acompañar las modificaciones propuestas porque nos permite tener más ingresos para el Estado y que pueda hacer frente a sus responsabilidades y garantizar así el ejercicio de los derechos fundamentales de cada mexicano y mexicana.

No sé en qué momento estuvieron a la altura en la época que gobernó el Partido Revolucionario Institucional.

Compañeras y compañeros legisladores, el conjunto de dictámenes que hoy discutimos constituye una propuesta integral que coloca a México de frente a un mejor futuro. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado.

Esta Presidencia saluda a alumnos del Tecnológico de Monterrey, invitados por la diputada Josefina Salazar Báez, que se encuentra en este salón de sesiones.

Igualmente, saludamos a jóvenes de Atizapán de Zaragoza, pertenecientes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, invitados de la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos. Sean muy bienvenidos, jóvenes, a esta Cámara de Diputados.

El siguiente punto del orden del día es la discusión en lo general del dictamen con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Esta Presidencia informa que la Cámara de Senadores realizó las modificaciones a los siguientes artículos:

Del artículo 1o., la parte correspondiente al ingreso estimado total, la parte correspondiente a derechos y la parte correspondiente a aprovechamientos, el séptimo transitorio, el décimo quinto transitorio y la adición de un artículo transitorio.

En términos de la fracción E del artículo 72 constitucional, la discusión de este asunto versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones realizadas por el Senado de la República.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra a las y los diputados para hablar en contra y a favor, hasta por cinco minutos.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del PAN, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.

El diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, los integrantes de la colegisladora hicieron un esfuerzo para corregirles la plana a los diputados de la mayoría en esta Cámara.

Las modificaciones del Senado generaron un ajuste al alza en la Ley de Ingresos, de 4 mil 415 millones de pesos que se suman al incremento propuesto en esta Cámara, por 6 mil 981 millones de pesos.

Es decir, el gobierno tendrá más de 11 mil millones de pesos adicionales con respecto a su propuesta.

Y aunque se mantiene la estimación de ingresos para el próximo año, en términos generales, en 6.1 billones de pesos, proponemos que esos recursos adicionales puedan destinarse a los municipios y atender, de una vez por todas, las demandas legítimas de los alcaldes que se manifestaron la semana pasada en esta Cámara.

Nos preguntamos también, ¿por qué insisten en mantener la estimación de un crecimiento del 2 por ciento, poniendo en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas?

Las proyecciones de organismos especializados ubican el crecimiento de nuestra economía por debajo de, incluso, de menos del 1 por ciento.

También nos preocupa que mantengan la necia posición de estimar un precio del barril de petróleo a la baja, cuando en los últimos meses el promedio internacional de su precio se ubica por encima de los 57 dólares.

Parece que el gobierno federal insiste en subestimar los ingresos del próximo año, con el objetivo de que muchos de los recursos que ingresen en el 2020 no tengan que pasar por la aprobación del Poder Legislativo.

Nos condenan a pagar más impuestos y a gastarse el presupuesto más grande que pudo haber existido, cuando han empeorado la economía de los mexicanos, la salud, la educación, la seguridad y el apoyo al campo.

Sacrifican el dinero de las familias mexicanas con aeropuerto de quinta, una refinería que en unos años será inservible y por ser el tiro al blanco del narcotráfico y por programas a modo, sin reglas de operación, que ni siquiera han sido entregados al total de los beneficiarios.

Lo que hoy se pretende aprobar no busca impulsar la inversión, porque los incentivos fiscales establecidos en el cuerpo del dictamen son aún limitados y reducidos a ciertos sectores de la población.

Sin elementos, intentarán maquillar una vez más los problemas que genera, a corto plazo, una miscelánea fiscal recaudatoria, con incentivos fiscales que no aportan en nada al desarrollo de este país.

La Ley de Ingresos no establece mecanismos en el corto y mediano plazo para generar más empleos o un mayor crecimiento económico. Por el contrario, se condena al gobierno federal al ejercicio de un mayor gasto, a costa de más endeudamiento.

En suma, la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos no atienden las preocupaciones de los emprendedores de este país ni de los trabajadores mexicanos. Obstruyen la urgente agilización de la inversión y no promueven cambios fiscales que permitan la disminución de la carga contributiva. Continúan sin preocuparse por establecer medidas contracíclicas que hagan frente a la desaceleración económica por la que atraviesa nuestro país.

Como ya lo señalaron nuestros compañeros en la Cámara de Senadores, no necesitamos una política de austeridad si esta se respalda en políticas fiscales abusivas y arbitrarias, lo que necesitamos es que apliquen la política económica que tanto reclamaron antes de ser gobierno.

Parafraseando a Castillo Peraza, a los mexicanos no les importa si la política económica se le llama neoliberal o se le llama cuarta transformación. En teorías macroeconómicas casi perfectas el resultado sigue siendo el mismo, más de 55 millones de mexicanos en la pobreza.

Su política da como resultado que cayeron los empleos, que no hay medicinas, que no hay seguridad, que no hay oportunidades, que no bajó la gasolina y que los mexicanos no tienen más dinero en sus bolsillos.

Señores, a la pobreza y a la desigualdad no se les ve con tristeza sino se les ve de frente. Por eso votaremos en contra del dictamen que hoy se somete a nuestra consideración. Es cuanto, señora presidenta.

Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, para hablar en pro, el diputado Marco Antonio Medina Pérez, de Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado Marco Antonio Medina Pérez: Con su venia, diputada presidente.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Marco Antonio Medina Pérez: Estamos discutiendo la minuta que viene de Senado, no estamos discutiendo nuevamente la Ley de Ingresos, pero parece que a los diputados de oposición este debería ser un nuevo foro para denostar acerca de la política económica y la política fiscal que estamos proponiendo.

Aquí retomo algo que dijo el compañero Fernández Noroña en alguna ocasión y que me gustó. Es en el sentido de qué simpáticos resultan algunos legisladores cuando fueron responsables del desastre económico que ahora se vive, y proponen ahondar en ese desastre económico y critican todo lo que se ha venido mencionando.

Va a ser muy incongruente para la oposición votar en contra de la minuta del Senado, porque en esa minuta se recogen algunas de las expectativas que se habían planteado por parte de ustedes.

Estamos en un marco republicano y en este marco republicano lo que corresponde al órgano legislativo se divide en dos partes, en dos Cámaras. Tenemos un Poder Legislativo bicameral, algo corresponde a la Cámara de Diputados y a la Cámara revisora también le corresponde, en su momento, revisar algunas cosas.

Y esta fue la tarea que concluyó el Senado en su momento y ahora está en nuestras manos resolver. Lo que hizo el Senado no fue corregirle la plana a la Cámara de Diputados ni corregirle la plana a la mayoría de esta legislatura, simplemente fue un ejercicio republicano y que nosotros vamos a continuar también en este sentido.

El total de rubros y artículos que contiene la Ley de Ingresos, el Senado solo modificó cuatro disposiciones, y disposiciones que resultaron ser, la mayor parte, de la Ley de Ingresos fueron ratificadas por el Senado y el monto global que contiene el artículo 1o. se modificó en menos del 0.1 por ciento.

Aquellos que critican y destacan que el Senado corrigió la plana, se equivocan, solo se está realizando un ejercicio y que va a ir tal vez de vuelta en función de los cambios que aquí esta soberanía determine.

En primer lugar estos cambios tienen que ver con un añadido de 5 mil millones de pesos al rubro de aprovechamientos y se restan 585 millones de pesos al rubro de Derechos, en términos de lo que se aprobó ya ahora en esta legislatura.

El primer cambio obedece a una mejor proyección debido a mayor y mejor información derivada simplemente del transcurso de la serie histórica que tiene el rubro de Aprovechamientos.

El decreto añade más de 4 mil millones de pesos, una diferencia de un aumento y una disminución, 4 mil 15 millones de pesos, 415 millones de pesos, y por lo tanto es procedente modificar el artículo 1o de esta Ley.

También este rubro de Aprovechamientos tiene que ver con una mejor estimación a la recaudación esperada en este aspecto. Una reevaluación del valor en pesos en activos del gobierno federal, la normalización de los ingresos observados en años anteriores, y el mejoramiento en la eficiencia en el cobro de los mencionados aprovechamientos.

Asimismo, tenemos que hay otras modificaciones que se hizo por parte del Senado, y entramos al tema de los autos llamados chocolate. El Senado elimina el requerimiento para la educación de las leyes y ordenamientos aplicables. Están en su función y en su ejercicio establecer eso.

Sin embargo, es cuestionable el planteamiento del Senado para eliminar el mencionado requerimiento, toda vez que se debe reconocer que se estima necesario que el Congreso de la Unión emita también disposiciones para facilitar a los ciudadanos que tienen un vehículo de procedencia extranjera que puedan acreditar la estancia legal de dicho vehículo y no era otra la razón de este planteamiento.

Nosotros votamos en plena conciencia tanto el asunto de los derechos por agua, como también el asunto de los autos chocolate, y estamos en plena discusión porque queremos que este ejercicio sea un ejercicio que redunde en beneficio de las finanzas públicas del país y para que estas finanzas respalden el proyecto de transformaciones que está siguiendo el gobierno de la República y nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado Medina Pérez. En el uso de la palabra el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Muchas gracias, presidenta, con su venia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: La posición de Movimiento Ciudadano en este sentido, con la Ley de Ingresos, no se modifica porque de alguna manera nosotros ya habíamos pronunciado que para nosotros la Ley de Ingresos estaba sobreestimada.

Este ejercicio de ajuste que hace el Senado, en términos de aumentar esta cantidad de millones de pesos, para nosotros no tiene un significado lógico, por el contrario, sobreestima más, en términos de lo que habíamos ya manifestado con anterioridad.

Y lo digo en el sentido de que, para nosotros estos recursos no garantizan, de alguna manera, que puedan ser aprovechados. Y lo voy a decir de esta forma. Si el Senado hubiera –ahora que hizo la enmienda– clarificado la redistribución de estos recursos y los hubiera clasificado a impuestos, tendríamos la garantía de que al menos este dinero que se está incrementando en aprovechamientos, pudiera ser repartido a los estados y municipios que hoy demandan estos recursos. No se hizo así, se dejó solamente en aprovechamientos y como tal, eso no

garantiza que regresen al término que nosotros estamos proponiendo que sea en el nivel de clasificación de impuestos.

Por lo tanto, para nosotros no hay una modificación clara en este sentido. Ya habíamos manifestado que de alguna manera la sobreestimación que se hizo en esta Ley de Ingresos no nos iba a alcanzar, y si ahora estamos quitando las enmiendas que nos hace el Senado, como ya lo hizo, entendemos que se pueda o que se deba reajustar, pero no de esta naturaleza.

Es decir, ¿qué esperaríamos nosotros en términos prácticos? Pues que la determinación con la que los ingresos deben hacerse, deben ser con resultados de un análisis más profundo de orden macroeconómico que pueda darnos luz de que no haya un impacto en la sociedad, porque nada nos garantiza de alguna manera en el corto plazo que estos aprovechamientos puedan llegar.

Los aprovechamientos están clasificados en el orden que no son impuestos, son multas, son donativos, son reintegros, y en ese sentido nada nos garantiza que ese dinero pueda regresar. Estamos nuevamente, lo que estamos haciendo es volver a sobreestimar esta Ley de Ingresos y entonces estamos colocando en una incertidumbre todavía mayor lo que ya teníamos con anterioridad.

Nosotros creemos que en el mismo sentido que votamos este dictamen con anterioridad, iremos en contra porque no hubo una mejoría o no hay una mejoría ni siquiera al haber enmendado –y repito– lo que pudo haber hecho el Senado en términos muy prácticos, si quiso haber enmendado este incremento, es al menos haber señalado cómo se clasifican estos aprovechamientos. Eso sí lo pudieron haber hecho.

Es decir, haberlo dicho que se clasificaban en el nivel de impuestos, y eso nos daría cierta certeza de que sí hay esa recaudación, bueno, que al menos van a ir direccionados para las áreas prioritarias que nosotros esperaríamos y que además están reclamando mayores recursos como son los municipios y los estados. Por lo tanto, nosotros como Movimiento Ciudadano iremos en contra. Es cuanto.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Partido Encuentro Social.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Diputadas y diputados. En el Grupo Parlamentario del PES, estamos a favor de este dictamen y con las modificaciones a la Ley de Ingresos de la Federación. Siempre, y que se escuche bien, privilegiaremos la comunicación entre ambas Cámaras. Aquí no se trata de quiénes son mejores, de quiénes son peores, de quiénes corrigen planas o no. Eso sucedía en la escuela. Aquí el gran reto es darle a este país viabilidad económica y estabilidad política.

Debemos decir las cosas como son. El trabajo legislativo no es particular ni es de grupos ni es de colores, el trabajo legislativo se hace en estas Cámaras por convicción, por decisión y por mandato de la ciudadanía.

El trabajo legislativo, que se entienda bien, no tiene derecho de autor. El trabajo legislativo no es de unos cuantos. El trabajo lo hacemos todos atendiendo a las necesidades de las familias, a las necesidades de los campesinos, de los productores y de todos aquellos que integran esta gran nación mexicana.

En el PES no estamos de acuerdo con aquellas expresiones que ante los medios o en esta tribuna se hacen respecto a la división del Poder Legislativo. Hoy México se merece un Poder Legislativo fuerte, dinámico y que genere consensos y acuerdos.

La Ley de Ingresos de la Federación para el 2020 tiene grandes retos, tiene grandes metas para asumir los compromisos que requiere este país para lograr su transformación. Solo si alcanzamos los ingresos que proyectamos vamos a estar en condiciones de cambiar a este país.

La Ley de Ingresos es realista, establece las bases para crecer con estabilidad, para brindar y también para protegernos de los efectos que pudiesen generarse derivado de lo que está pasando a nivel mundial.

Eso sí, y lo tenemos que decir con toda puntualidad, tanto en el PES como en los partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia, no vamos a estar de acuerdo si no se cumplen las metas de recaudación que se están estableciendo en esta ley.

Por eso, desde esta tribuna y de manera respetuosa, exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las instancias de recaudación, a que se redoble el esfuerzo y que se haga lo que mandata la ley para alcanzar estos números. Porque si no lo hacemos, el Presupuesto de Egresos no estará cumpliendo con los requerimientos para garantizar mejores condiciones de vida y de bienestar para las familias mexicanas.

En el PES debemos ser muy claros, comprometidos y disciplinados, y esa es una posición irreductible. No vemos un México mejor si la Ley de Ingresos no se cumple. En este año, si algo pasa, perdemos todos.

Aquí no se trata de venir a generar posicionamientos ortodoxos que no abonan a la solidaridad y a la garantía de que a este país le vaya bien.

En el PES no vamos a permitir, y que se escuche bien y fuerte, el huachicol de los subejercicios. No queremos que se pierda un solo centavo. Si estamos proyectando ingresos por un monto, recaudémoslos y ejerzámoslos con disciplina y responsabilidad.

Si rehacemos, y cómo no hacerlo aquí, para poder blindar esta ley y lo que viene, estaríamos faltando a la palabra que comprometimos todas y todos, independientemente del número de votos que obtuvimos.

Hoy lo que necesitamos es voluntad, que colaboremos todas y todos. Ya basta de la denostación, ya basta de echar culpas y de asumir banderas que en el pasado no fueron capaces de comprometer.

Con respeto les digo a los partidos de oposición: veamos el interés superior de este país. Ya se demostró que cuando caminamos juntos le va bien a México y le va bien a la gente.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado...

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Por eso vamos por este paquete económico responsable. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Pérez Negrón, un momentito. Está solicitando la palabra el diputado Éctor. ¿Con qué...? Micrófono.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Presidenta, para ver si por su amable conducto le pudiera preguntar usted al señor orador si me autoriza una pregunta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Pérez Negrón, ¿acepta una pregunta?

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Sí, adelante, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sí le acepta la pregunta. Adelante, diputado.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Diputado, me da mucho gusto escuchar ese ánimo con el cual exhorta a Hacienda para que ojalá pueda lograr lo que se plantea en la Ley de Ingresos. Y usted acepta además que, si ese ingreso no es el adecuado, entonces no se va a poder cumplir el egreso.

Entonces, mi pregunta sería, ¿realmente será solo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y no la suya y la de su partido, el calcular que, si ya inclusive en este trimestre hubo una cantidad de barriles muy inferiores en el petróleo, se tenga aparte la posibilidad el próximo año, no solamente de remontar al estándar de hoy, sino a parte esa gran cantidad de millones de barriles por día para poder cumplir el cometido? Usted también con ese deseo, o con su voto va a decir: esto es irracional.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para dar respuesta, el diputado Pérez Negrón.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: A diferencia de lo que ocurría en el pasado, este gobierno hoy tiene algo que antes no era tan legítimo: la confianza de la gente, de los contribuyentes y que creen y tienen esperanza en su gobierno.

Pero además, señor diputado, y eso que se escucha bien, en el 2018 que llegó el gobierno del cambio tuvimos que ir haciendo ajustes sobre la marcha para tratar de enderezar aquello que verdaderamente habían dejado hecho pedazos. Se tuvo que configurar una Ley de Ingresos y un presupuesto que obviamente venía inerciado y que todavía traía las secuelas de las malas decisiones que en materia económica y presupuestal se habían tomado.

Hoy se están sentando las bases para que el presupuesto 2020, que sí ya es responsabilidad total de este gobierno y de quienes lo acompañamos, va a ser un presupuesto que tenga la posibilidad de alcanzar las metas.

Hoy, y que se escuche claro, nadie vamos a eludir nuestra responsabilidad. Sabemos a qué nos enfrentamos y le vamos a entrar como le ha entrado el presidente a combatir todos los problemas que nos heredaron. Por supuesto que vamos a alcanzar la meta de recaudación, vamos a lograr con la reforma a Pemex, vamos a lograr con lo que se está haciendo en materia responsable de políticas públicas, llegar a esa meta. No se preocupen, ustedes tuvieron muchos años para plantear en el discurso lo que iban a hacer y nunca lo lograron. Dennos el beneficio de la duda. El 2020 será un gran año para México. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ha concluido su tiempo. En el uso de la palabra, el diputado Fernando Galindo Favela, del PRI, para hablar en contra.

El diputado Fernando Galindo Favela: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.

El diputado Fernando Galindo Favela: No hay duda, compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI siempre hemos luchado por mantener la estabilidad económica de nuestro país: tener finanzas públicas sanas.

Y para ello vemos bien las metas macroeconómicas que se están incluyendo en este paquete económico. Alcanzar los requerimientos financieros del sector público al 2.6 por ciento del producto interno bruto, un déficit del 2.1 por ciento del PIB y un superávit primario del punto 7 por ciento del producto interno bruto.

Están en la línea correcta, es lo que esperan los mercados, las calificadoras, pero ahí no está problema. El problema está en que vemos una sobreestimación de algunas variables del marco macroeconómico.

¿Y eso a qué nos puede llevar? A que la meta de ingresos no se cumpla el próximo año y esto no es una cuestión de fe, sino ahí están los datos duros. La recaudación del IVA y del impuesto sobre la renta depende de la actividad económica de nuestro país.

Si se estima que vamos a crecer al dos por ciento el próximo año y hoy vemos, hoy salió un resultado del Inegi de los primeros nueve meses, pues crecimos al 0 por ciento, va a ser muy difícil llegar a la meta de la recaudación del impuesto sobre la renta y del IVA con esa estimación.

Otro dato duro, acaba de salir un reporte de la empresa productiva del Estado en materia de producción petrolera, está muy alejada de la meta para el próximo año. Y esto ya lo han dicho los analistas, esto nos puede llevar a tener un riesgo, en materia de ingresos, entre 140 y 170 mil millones de pesos.

¿Eso qué implica? Ya lo hemos dicho varias veces aquí. Implica tener un ajuste al gasto el próximo año, de manera considerable. Implica que nos gastemos los fondos de estabilización o que pidamos un mayor endeudamiento. Ese es el riesgo que tenemos que revisar aquí.

No se trata de tener fe en que vamos a cumplir las cosas. Porque los datos económicos son duros. La recaudación por derechos petroleros, sin impuestos, es un dato duro que depende de la actividad económica.

Es ahí donde nosotros no estamos de acuerdo en que en el Senado de la República, adicional a estos riesgos que les comento, se hayan incrementado de manera artificial los ingresos que se van a tener el próximo año.

Porque si no se cumplen las metas de recaudación, tampoco vamos a cumplir las metas de requerimientos financieros del gobierno, de déficit y de superávit primario. Y es ahí donde los mercados, los inversionistas y las calificadoras nos pueden castigar. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. En el uso de la palabra, el diputado Heberto Marcelo Aguilar Castillo, de Morena, para hablar a favor del dictamen.

El diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado Heriberto.

El diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo: Compañeras y compañeros diputados, la regularización de los automóviles de procedencia extranjera, mejor conocida como autos chocolates, es un asunto que nos ocupa, con el fin de permitir su estancia legal en este país.

Este tipo de unidades usualmente es adquirido por un sector poblacional que tiene pocas posibilidades de adquirir un auto nuevo.

Tal como lo expresaba nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de agosto, en México hay miles de familias, sobre todo en los estados fronterizos, que no tienen acceso a créditos de vehículos nuevos, pues sus ingresos les impiden participar en el sistema financiero mexicano y ven los carros de procedencia extranjera una opción para mejorar las condiciones de vida de sus familias.

La propuesta de esta Cámara obedece a las necesidades de mayor seguridad, bienestar económico, mejor movilidad propia de las zonas del norte de México donde circulan la mayor parte de estos vehículos. Además, es un asunto íntimamente ligado a la seguridad pública implementada por el Ejecutivo, la cual considera a esta región de país.

No es suficiente que la Ley Aduanera contemple regularización de la mercancía de procedencia extranjera en sus artículos 101, para poder dar solución a este problema.

Por ello el Grupo Parlamentario de Morena vamos a rechazar las modificaciones enviadas por el Senado de la República, ya que sabemos que la propuesta aprobada por esta Cámara de Diputados es responsable y cuenta con un análisis suficiente para que se pueda sostener y materializar.

Respecto a las aseveraciones que aseguran que afectaría considerablemente la venta de autos nuevos, es una falacia. Debemos recordar que en los tres años que se mantuvo vigente el último derecho de legalización, se vendieron más vehículos nuevos que los tres años posteriores a su cancelación.

En suma, nuestro voto será a favor de regularizar los carros chocolates y categóricamente en contra de la eliminación del artículo decimoquinto transitorio de la Ley de Ingresos que fue aprobado en esta Cámara.

El objeto de esta ley es proyectar los recursos necesarios para el ejercicio de 2020, protegiendo el patrimonio de muchas familias de nuestro país, y además nuestro fin es generar ingresos que permitan implementar los programas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables. Adelante.

Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, permítame aclarar el sentido de su intervención. Usted se registró para hablar en pro del dictamen, ¿es así?

El diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo: Así es, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Y ahora mismo, ¿su intervención en qué sentido es?

El diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo: Es en sentido de la regularización de los carros chocolate, del décimo quinto transitorio, que es parte de esta discusión.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Bien. Continúe con su intervención.

El diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo: Gracias, presidente. Retomo el tiempo. Además, nuestro fin es generar ingresos que permitan implementar los programas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables de nuestro país castigados por las políticas neoliberales de más de tres décadas, ingresos que harán posible otorgar mayores y mejores oportunidades a los sectores más vulnerables de la población. Solidaridad y legalidad es la cuarta transformación. Es cuanto, ciudadano presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado.

El diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo: Senado, no abandones a tu pueblo.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo, para hablar en contra.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya:Y adelanto, diputado presidente, con su venia, que la intención de las legisladoras, los legisladores del Partido del Trabajo es votar en contra este dictamen que nos regresa el Senado, precisamente por este tema. Nosotros no nos andamos con medias tintas.

Amigas, todos sabemos, amigas y amigos, que la semana pasada el Senado de la República eliminó esa disposición que nosotros introdujimos aquí en la Ley de Ingresos para legislar los autos chocolate, y de este hecho, algo que realmente me preocupa mucho es esa insensibilidad, ese desconocimiento de las comunidades y de los municipios que manifiesta la colegisladora.

Y miren, en México, compañeras y compañeros diputados, si alguien gana menos de 16 mil 700 pesos al mes, pues entonces forma parte del 90 por ciento más pobre de la sociedad. Y luego entonces tendrá difícilmente acceso a un crédito automotriz. Y adicionalmente a esto, en las comunidades y municipios más retirados, no existen agencias automotrices que vendan autos nuevos o seminuevos, precisamente porque no es rentable para ellas.

Y es a raíz de lo anterior que docenas de miles y miles de familias han adquirido automóviles usados que vienen de los Estados Unidos sin que medie importación o registro. Sí, así ha sido.

Pero esto responde a la demanda y a la incapacidad del Estado mexicano para generar la competitividad y las condiciones para que se puedan instalar más empresas, y consecuentemente más empleos.

Para millones de mexicanos, compañeras y compañeros, el auto chocolate no es un asunto de comodidad, sino es un asunto de supervivencia. Es el medio más eficiente para poder trasladarse de sus residencias a sus centros de trabajo, para poder llevar también sus productos al mercado, para estar comunicados, para acceder a los servicios de salud y de educación.

Tan solo –miren este dato, compañeras y compañeros– tan solo en el estado de Oaxaca, que me honro en representar, mis paisanos gastan el 35 por ciento de su ingreso salarial en traslado entres sus comunidades y centros de trabajo.

Esto se explica por las ausencias de décadas donde no se ha privilegiado el transporte público sino el uso del automóvil. Pero, además, por todo esto que estoy comentando, es que consideré en su momento muy

importante, de vital importancia el transitorio que aprobamos en esta Cámara en la Ley de Ingresos para que en el 2020 se permitiera darles certeza a millones de familias mexicanas respecto a sus medios de transporte, a darles las garantías y esto, sin duda que admitiría que de forma legal también se habrían de beneficiar de los acuerdos comerciales y de la integración económica con los Estados Unidos.

El transitorio en cuestión, que es la razón de nuestro voto en contra, señalaba, compañeras y compañeros –antes que la colegisladora lo modificara– que el Congreso de la Unión realizaría las adecuaciones correspondientes para atender la problemática de los vehículos usados que no cumplan con la Ley Aduanera, y al parecer de un servidor, aunque hay voces que insinúan lo contrario, es una oportunidad muy importante para fortalecer un imperio de la ley en este país.

Para mayores datos, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del primero de enero de 2019, México no puede restringir, no puede prohibir la importación de autos usados de los países miembros.

Y esto, si lo entendemos, adicionando que los años de uso de un automóvil en los Estados Unidos es de 9.4 años comparados con los 13.5 años en México, es decir, en Estados Unidos los autos usados ya no tendrían limitaciones a la entrada, y el impuesto por lo tanto de importación sería cero, pues entonces se abre una enorme posibilidad para tener autos baratos.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, diputado. Diputado. Sonido a la curul del diputado Armando. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Armando Reyes Ledesma (desde la curul): Hacerle una pregunta al diputado Benjamín con relación a este tema de regularización de vehículos irregulares.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado Robles, ¿acepta la pregunta?

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Claro, si siempre se la acepto a la oposición, con más... compañero de mi grupo.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Armando Reyes Ledesma (desde la curul): Diputado, es evidente que el Senado no se tomó ni siquiera el tiempo para debatir con la sensibilidad que se necesitaba retomar este tema y que la Cámara de Diputados en la discusión pasada retomó este tema porque es muy claro el beneficio que se iba a dar a todos los mexicanos, a una gran parte de ciudadanos mexicanos.

La pregunta, diputado, ¿está usted de acuerdo, nosotros no podemos dejar pasar la oportunidad de regularizar alrededor de 18 millones de vehículos y que puedan llegar alrededor de 50 mil millones de pesos que hoy bastante falta hacen a los estados y municipios, aparte de darles seguridad en el tema de esos vehículos, que la mayor parte de delitos se cometen en vehículos chocolate?

Tenemos la oportunidad de dar certidumbre, dar seguridad y dar apoyo financiero a los municipios. La pregunta es muy clara. ¿Podemos dejar pasar esta gran oportunidad que los diputados ya coronamos con mucho agrado esta propuesta?

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: En sí yo he venido sosteniendo en esta tribuna a lo largo de esta jornada que el Senado de la República se equivocó en muchas cosas. Erró. Y, por supuesto, que erró en esta, y pareciera que se pusieron a servicio de las empresas automotrices, y nosotros no podemos aceptar eso.

Así como hemos señalado, que se pusieron a favor de los grandes terratenientes para que no pagaran el agua que les corresponde, porque la reforma que ya discutimos no buscaba afectar a los pequeños productores. En este caso erraron otra vez y se equivocaron, y así hay que decírselos. Así como Monreal nos mandó decir: "Lástima, Margarito", así le decimos a Monreal: se equivocaron y están del lado incorrecto en este momento.

Hemos presentado por eso una reserva. Seguramente habrá otros diputados y diputadas que también pensaron lo mismo que un servidor, y yo espero que en esta reserva la mayoría vote a favor de que se legalicen estos autos, que es muy importante para la economía de muchas familias. Esa es mi respuesta, diputado.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Continúe, diputado.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Concluyo, compañeras y compañeros diputados. Para un servidor los beneficios de resolver este estatus legal son varios. Respecto del comprador, por ejemplo, la integración del mercado de autos promueve una mayor oferta de vehículos de segunda mano. El incremento de la competencia, para un servidor, se traducirá en una reducción de precio de venta a favor del consumidor.

Los automóviles regularizados, por otra parte, se habrían de sujetar a las legislaciones estatales para el registro de automóviles...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya su intervención, diputado.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: –Con gusto, diputado presidente–. ...a los emplacamientos, también a las infracciones, lo que sin duda se traducirá también en ingresos extraordinarios para estados y municipios.

A la luz de todo lo expresado, diputado presidente, hago público, lo reitero, mi extrañamiento a la decisión de la colegisladora de eliminar el transitorio que estamos discutiendo, porque a juicio de un servidor, los beneficios son cuantiosos para la ciudadanía. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, con la aprobación del dictamen sobre la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 llegamos a una histórica cifra que ronda los 6.1 billones de pesos. Con esta la cuarta transformación está en marcha.

El pueblo de México votó para que se cuiden los ingresos que se generan para el bienestar social, para hacer un uso responsable y austero de los recursos públicos, para combatir la corrupción y el derroche. También por un viraje en la forma de hacer gobierno y para lograr la generación de proyectos y programas que propicien el tan anhelado desarrollo con bienestar social.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy claro desde el principio, la gente sabía de nuestro proyecto alternativo de nación que hoy se traduce en el Plan Nacional de Desarrollo, que en esta misma Cámara aprobamos en junio pasado.

El trabajo que realizamos en esta Cámara, y que ha sido revisado por la colegisladora, da como resultado una Ley de Ingresos analizada a conciencia, responsable y de cara a los retos del país.

Escuchamos a todas las voces en un ejercicio de parlamento abierto. Asumimos las causas legítimas de todas y todos. En el Grupo Parlamentario de Morena legislamos para el pueblo de México bajo el principio rector de justicia distributiva.

Buscamos con esta Ley de Ingresos finanzas sanas que se reflejen en la economía familiar en el país. La estabilidad macroeconómica nunca debe ser a costa de la pobreza de las mayorías, como solía hacerse en las administraciones pasadas. Por ello, la política económica hoy tiene un enfoque garantista.

Hoy tenemos una Ley de Ingresos responsable para lograr un gasto responsable. Que los recursos vayan a los programas y proyectos prioritarios, que lleguen a donde más se necesitan.

Refrendamos nuestro compromiso de no aumentar impuestos, esto es muy importante de subrayar. En esta administración hay un compromiso y lo estamos cumpliendo.

Reiteramos nuestra convicción para alcanzar la justicia social y por ello acompañamos las modificaciones de la colegisladora, donde estimamos que tienen razón. Como en el caso de la eliminación del cobro extraordinario del uso del agua para fines agrícolas.

Sin embargo, creemos muy importante dar marcha atrás en otro aspecto considerado en esta Ley de Ingresos, el tema de la regularización de los autos chocolate.

Creemos y les convocamos, creemos muy importante revisar este tema y les convocamos a votar a favor de la reserva que se presentará en un momento más, porque hoy tenemos una realidad que hay que atender. De los 48 millones de carros que existen en este país, 18 millones se estima que son carros chocolate, 37.5 del parque vehicular, que ya está en nuestro país.

Es necesario que atendamos este tema, que logremos certeza jurídica para esas familias que tienen escasas posibilidades económicas y que los utilizan para llegar a sus empleos, para llevar a sus hijos a la escuela, que tienen también el derecho a un transporte digno y que en muchos casos, en muchas ciudades no existe ese sistema de transporte que les permita llegar a tiempo a sus responsabilidades.

Es un tema también de seguridad pública. Es importante que sepamos quiénes están manejando esos vehículos y que podamos tener los datos, el registro concreto de cada uno de ellos.

Y hay también que tomar en cuenta un tema, los carros chocolate, en su mayoría, se encuentran en los estados de la frontera norte de nuestro país y allá –soy del estado de Sonora– tenemos condiciones climáticas muy difíciles. Ojalá que podamos ser sensibles a esta reserva y que pueda regresar el décimo quinto transitorio de la Ley de Ingresos, porque estamos convencidos y convencidas que para lograr una administración con justicia y con bienestar, deben ser siempre por el bien de todos primero los pobres. Gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra.

La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, presidente diputado.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Claudia Reyes Montiel: Subo a esta tribuna para reiterar la preocupación de mí partido con relación a la Ley de Ingresos para el año que entra y para hacer consideraciones sobre las modificaciones aprobadas por el Senado de la República.

Entre los cambios aprobados por el Senado en la Ley de Ingresos para 2020, se encuentran: Eliminación del artículo transitorio por el que se contemplaba la regularización de vehículos de procedencia extranjera e ilegal estancia en el territorio nacional.

Especialistas señalan que, de haberse mantenido esto, pudo haber significado la caída de cuando menos el 30 por ciento del mercado formal automotriz en el país.

Vemos también como positivo que se elimine la disposición abusiva contemplada en el artículo séptimo transitorio, el cual facultaba a Hacienda para expedir lineamientos para el uso de recursos no devengados por entidades federativas y municipios.

Quiero centrar mi intervención en el tema de la autorización al Instituto Mexicano del Seguro Social para suscribir convenios de pago en parcialidades, en un plazo máximo de hasta seis años.

Todos sabemos que el IMSS enfrenta una problemática muy compleja, que incluye adeudos de 209 entes públicos y gobiernos de estados y municipios, que estos ascienden a 4 mil 581 millones de pesos, aunque esta cifra equivale solo al 5 por ciento del presupuesto del IMSS, en promedio para cada municipio representa una loza que les aplasta e inmoviliza, pues cada municipio en el país tiene una deuda alrededor de 4 o 5 millones de pesos.

Por ejemplo, Fresnillo debe 78 millones, Ciudad del Carmen 401 millones. Mi grupo parlamentario ve esta situación con preocupación, que por salvar al IMSS se estén estrangulando a los municipios que desde este año fiscal de 2019 enfrentan una situación verdaderamente grave y esto a costa de las participaciones federales y con la amenaza de dejar a los servidores públicos de dichos entes sin seguridad social.

Agrego otro dato grave para las finanzas públicas. ¿A cuánto asciende la deuda que la Ley de Ingresos 2020 autorizó al presidente? La Ley de Ingresos 2020, aprobada por el Senado, autoriza al Ejecutivo federal a contratar una deuda interna hasta por 532 mil 206.1 millones de pesos y un endeudamiento externo neto de 5 mil 300 millones de dólares.

Además, se avaló un techo de endeudamiento de 4 millones de pesos para la Ciudad de México, etiquetado en financiamiento de obra. No se explica con claridad en qué se va a utilizar y, sobre todo, dejan en mera declaración el dicho presidencial de no endeudarse.

La tercera realidad ha hecho que ante una política económica en lo general equivocada y que no genera confianza, hace que el gobierno cada día acuda más a la deuda con pretexto de refinanciarla.

Finalmente, se da otro golpe a la población afectada por la minería, en la Ley Federal de Derechos, en el artículo 271 y 275, donde la propuesta del presidente de utilizar el Fondo Minero y el cual asigna el 80 por ciento de sus programas clientelares y estos los destina a la Secretaría de Educación Pública. Y lo más grave, destina el 5 por ciento para el fortalecimiento minero, impulsando aún más el despojo sin ninguna forma de resarcir el ambiente.

Lo que implica que esta propuesta elimina la inversión para el desarrollo de las poblaciones o rehabilitación de los ecosistemas cuando la actividad minera contamina irremediablemente mantos acuíferos, tierra, aire y dejando a los pueblos con daños a perpetuidad.

El presidente considera como lo menos inconveniente traicionar su palabra y condenar a los pueblos despojados y contaminados.

Por ello, mi bancada votará en contra de este dictamen, es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, para hablar en pro. Diputado del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez: Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez: Compañeras diputadas, compañeros diputados. He pedido esta intervención para pedirles que en el transitorio número quince, el decimoquinto, que nosotros votamos por primera ocasión en esta Cámara, para enviarlo a la Cámara de Senadores, donde ellos discrepan de nuestra posición con un discurso, que no sé de dónde lo sacaron, porque hablar de 18 millones de vehículos chuecos, estaríamos hablando de casi el 50 por ciento del parque vehicular. Cosa que es totalmente falsa, es un discurso que adoptaron los senadores a partir de las recomendaciones que les han dado las armadoras, porque en la última regularización que se dio, solamente, solamente se regularizaron un millón 700 mil vehículos, que dista mucho de hablar de los 18 millones de vehículos que hay en nuestro país.

Eso es una total mentira que se manejó desde la Cámara de Diputados, a recomendación de algunos senadores y empresarios dedicados a la industria automotriz que dicen que nos va a afectar mucho que porque se van a perder empleos, que porque...

Yo les juego desde ahorita que contemos los empleos que se generan en la empresa automotriz, en la industria automotriz, pero contemos los empleos que se generan en la producción de leche. A ver quién genera más, a ver quién hace una mejor distribución de los recursos y de la riqueza que se genera en cada una de las industrias, para que vean que no es cierto.

De ninguna manera es cierto que la industria automotriz tiene una gran influencia en la economía nacional, tienen más influencia los productores de leche. Por ello son...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, diputado. Diputada Margarita García, ¿con qué objeto?

La diputada Margarita García García (desde la curul): Si me permite una pregunta el diputado.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado Eraclio, ¿permite una pregunta a la diputada?

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez: Sí, adelante.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

El diputado Margarita García García (desde la curul): Diputado, quisiera que me pudiera explicar entonces, ¿los senadores están a favor del capitalismo y no del pueblo de Oaxaca y de la cuarta transformación?

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez: Bueno, yo creo que quedó muy manifiesto el planteamiento de los senadores y que están adoptando una actitud de serviles a los grandes capitales o a las grandes empresas trasnacionales. Y que hoy nosotros aquí debemos refrendar el compromiso que tenemos con el pueblo de México, debemos refrendar el compromiso que tenemos con las familias más pobres que son quienes tienen y poseen en este momento los vehículos de procedencia extranjera, y que día con día los ponemos en riesgo, ponemos en riesgo la seguridad, ponemos en riesgo la estabilidad y ponemos en riesgo el patrimonio de estas familias.

Por eso yo creo que hoy nosotros debemos regresarle al Senado este dictamen para que sea reconocido y valorado nuevamente, y que puedan los senadores rectificar su posición y servirle a los más pobres de México atendiendo esta condición.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Diputada Hildelisa González, ¿con qué objeto?

La diputada Hildelisa González Morales(desde la curul): Si le puede preguntar al orador si me permite hacerle una pregunta.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado Eraclio, ¿permite una pregunta más?

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez: Sí, sí, adelante.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Hildelisa González Morales (desde la curul): Compañero diputado, quiero preguntarle a usted si valoró en realidad la argumentación que se hace de que la legalización de los carros chocolate pueda afectar a la industria automotriz y que se perjudique en los empleos. No le encuentro lógica, no se usted qué me pueda contestar, toda vez que los autos que estamos planteando se legalicen, ya están en el país, y quienes compraron esos autos no pueden comprar un auto nuevo obviamente, por eso traen un carro chocolate.

Pero si usted también ha valorado que esta medida pueda ayudar a la seguridad nacional, toda vez que quien trae un carro en estado de ilegalidad, pues puede cometer un ilícito y no hay forma de encontrarlo. Le agradezco sus respuestas, y yo me pronuncio a favor de la legalización de los carros chuecos. Gracias.

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez: Gracias, diputada. Mire, nada más comentarles, diputadas, diputados, que en este país quien gana menos de 16 mil pesos está destinado a no poder comprar un carro nuevo en toda su vida, por la misma condición económica, y en esa condición estamos la mayor parte de los mexicanos.

Entonces, como consecuencia de esto, pues le puedo decir que estos carros que hoy andan circulando a lo largo y ancho del país, creo que desarrollan un trabajo importante para nuestras familias e importante para la seguridad y el bienestar de nuestra gente, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas.

¿Qué pasa con aquellas familias que llevan a sus hijos a las escuelas en este tipo de vehículos, con los compañeros empleados que van a su trabajo en estos vehículos? Es un medio de transporte. Un medio de transporte que el Estado mexicano ha sido incapaz de proporcionar a todos los mexicanos de manera adecuada y que los ciudadanos de este país hemos tenido la necesidad de construir, de construirnos estos medios de transporte y los hemos encontrado muchas veces comprando vehículos en Estados Unidos o en muchas ocasiones con nuestros parientes que nos vienen y nos regalan un vehículo en nuestras comunidades, y en eso nos ha servido de medio de transporte para acudir a nuestros trabajos.

Por eso, compañeros, compañera, yo creo que la valoración de la afectación que tienen las empresas transnacionales es absolutamente nula, no hay nada que ver. Los compañeros, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras compañeras que viven en el medio rural y que se trasladan en este tipo de vehículos jamás van a poder comprar un vehículo nuevo, porque ni siquiera son sujetos de crédito, y eso los limita. Y no los podemos nosotros sentenciar a que siempre anden a pie o anden pidiendo *ride,* cuando hay posibilidades de que hoy sigan utilizando este tipo de vehículos, pero de una manera legal y formal, para que con ello también podemos darle un golpe a la corrupción.

Que la gente que sale en estos vehículos hoy de su casa no tenga que llevar los billetes en la mano para dárselos al tránsito o al policía donde lo va a parar. Que esto le dé seguridad a nuestras familias de que cuando salgan de la casa al a trabajo o a la escuela, vayan en un vehículo debidamente identificado, vayan en un vehículo donde tienen la seguridad de que van regresar a su casa con él.

Por eso estamos haciendo esto. Y creo que todos los diputados que votamos en favor, en un principio, en favor de la Constitución, del transitorio número decimoquinto, creo que dimos en el clavo y que estamos comprometidos en resolver este conflicto, y creo que hoy, yo les pediría, a todos los diputados les pediría...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, ¿concluyó su respuesta?

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez: Sí.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Bien. Diputada Graciela Sánchez, ¿con qué objeto?

La diputada Graciela Sánchez Ortiz(desde la curul): Si me permite el diputado hacerle una pregunta.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado Rodríguez, tiene otra pregunta. ¿La acepta?

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez: Sí, sí la acepto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada Sánchez.

La diputada Graciela Sánchez Ortiz (desde la curul): Si me podría usted contestar si entonces los compañeros senadores están o no a favor del pueblo de México, ya que los mexicanos que quieren legalizar un auto, que de todas manera ya circula en nuestro país, que van a pagar sus impuestos, pero que nunca van a tener la economía necesaria para comprar un auto en las condiciones que los venden aquí, las empresas que trabajan aquí, la empresa automotriz, ¿usted cree que nos están traicionando entonces los senadores? Gracias.

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez: Mire, yo le haría un llamado a los senadores para que no se apartaran de la posibilidad de ofrecerles, de ofertarles a la gente más pobre, una oportunidad para que regularicen sus vehículos.

Yo no quisiera hablar de traiciones, pero sí creo que fue un error de los senadores el haber desechado la propuesta nuestra, en cuanto a la regularización de los vehículos, toda vez que estos vehículos atienden a una necesidad social, atienden a una necesidad de que tenemos una gran parte de los mexicanos y que hoy la

podemos resolver y creo que desde aquí, con la buena voluntad de todos los diputados, vamos a poder resolverla y hacer a los senadores que rectifiquen y atiendan a nuestra demanda.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Diputado Eduardo Ron, ¿Con qué Objeto? Sonido a la curul del diputado Ron.

El diputado Eduardo Ron Ramos (desde la curul): Muy buenas tardes, le agradezco. Diputados, solamente decirles que...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Perdón, perdón, ¿con qué objeto?

El diputado Eduardo Ron Ramos (desde la curul): De una pregunta.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Ah, permítame. Diputado Rodríguez, ¿acepta una pregunta del diputado Ron?

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez: Si, adelante, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado Ron. Sonido.

El diputado Eduardo Ron Ramos (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Comentarles, diputados, que Movimiento Ciudadano está a favor que se legalicen los autor irregulares. Es todo, gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Entonces no tiene usted una pregunta. No hubo una pregunta, diputado. Continúe con su intervención. Actívese el reloj.

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez: Sí, gracias, señor presidente. Ya para concluir, miren, compañeros diputados, compañeras diputadas, yo creo que el darles esta oportunidad, el ofrecerles esta gran oportunidad a las familias poseedoras de este tipo de vehículos, vamos a darles también seguridad a estas familias.

Pero también vamos a ayudar a los municipios y a los estados a que contribuyamos con esta manera y con esta medida a fortalecer el asunto de la legalidad y de la identificación de todos estos vehículos, con la finalidad de fortalecer el sistema de seguridad que tanto hemos estado navegando y batallando para ir formando y creando a lo largo y ancho del país.

Yo creo que la identificación de estos vehículos nos va a dar mucha más seguridad pero además les va a dar un ingreso a los municipios y a los estados que puedan de alguna poder sobrevivir y poder sobrellevar la grande carga social que hoy tienen cada uno de los municipios.

Finalmente, compañeros, compañeras, apelo a la buena disposición de todos. Apelo al compromiso que todos y cada uno de los diputados han manifestado en esta tribuna de ayudar y servir a los más pobres.

Hoy tenemos la gran oportunidad de servir a los más pobres, tenemos la gran oportunidad de ayudarle a la gente que más nos necesita en estos momentos.

Apelo a la buena disposición de todos para que este transitorio número quince persista en la Ley de Ingresos, y que se lo regresemos a la Cámara de Senadoras para que ellos lo analicen y lo revisen. Y también un llamado desde aquí a los senadores para que tomen conciencia de que este quince transitorio significa la seguridad patrimonial de muchas de nuestras familias. Muchísimas gracias por escucharnos.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN para hablar en contra.

El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: Con su permiso, diputado presidente. El día de hoy, compañeras y compañeros diputados tengo esta intervención a título personal. Soy diputado de mayoría por la frontera, en Coahuila, y así como ha habido varias intervenciones, manifiesto mi oposición en esta medida equivocada que

ha tomado el Senado de la República, insensible, en lo relativo a la regularización de los vehículos para los trabajadores de este país.

No hay que llamarles carros chocolates, son los vehículos de los trabajadores de este país. En ese sentido es importante que todos tengamos claro que aquí en México acceder a un vehículo es cada vez más complicado, que no todos los mexicanos tienen acceso al crédito, que no todos los mexicanos tienen la posibilidad de acceder a la movilidad.

Y quienes puedan plantear posiciones radicales en las que se niegue la posibilidad de que puedan tener acceso a un vehículo, es decirles: entonces súbete a un camión o ándate en bicicleta. Esa no es la realidad que nosotros estamos empujando en este Congreso. Aquí no hay mexicanos de primera ni mexicanos de segunda. Eso es lo que nosotros estamos planteando.

Y decirles a los senadores de la República que han traicionado la responsabilidad de la justicia social para los mexicanos.

Por eso propusimos un programa de regularización desde hace meses aquí en la Cámara, que tenga las siguientes características, porque también hay que ser responsables.

La característica de que sea a un bajo costo, que sea accesible, que estos vehículos se regularicen al acceso de la economía de los trabajadores, que sea por una sola ocasión, que paremos la corrupción que existe en las aduanas de este país. Porque tampoco podemos convertir en un vicio de nunca acabar e inundar a este país de vehículos de procedencia extranjera sin la debida importación. Eso es lo que tenemos que hacer con responsabilidad.

El argumento, como ya se ha dicho aquí en varias ocasiones, de que va a afectar a las plantas constructoras de vehículos no lo compartimos. Dios nos diera la licencia de que en este país los obreros tuvieran la posibilidad de ir a una agencia y comprar un carro nacional, pero esa no es la realidad de los salarios de México.

Por eso hablo por los obreros de Acuña y de Piedras Negras, por los mineros de la carbonífera en Coahuila, por los que tienen estos salarios de hambre y de miseria y que tiene la posibilidad hoy de adquirir un vehículo a bajo costo mediante los acuerdos que están incluidos en el Tratado de Libre Comercio.

En ese sentido, hoy vamos a ver en esta Cámara si no hay un doble discurso. Aplaudimos la posición que han asumido diputados de Morena en esta tribuna, pero senadores de Morena traicionaron claramente la posición. Quien encabezó esta posición en el Senado se llama Monreal.

Y aquí hoy, hoy vamos a saber, todo el país se va a enterar si estamos todos en la posibilidad de darles a los mexicanos que tienen un vehículo de procedencia extranjera la regularización accesible para el salario de los trabadores. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.

Quisiera hacer un comentario para informar a la asamblea. En dos ocasiones ha habido oradores que, habiéndose inscrito en un sentido, su discurso parece estar en otro. Lo que quiero precisar a la asamblea es que esta Presidencia ha organizado los turnos asegurando el cumplimiento del Reglamento, el mismo número de diputados en pro y en contra, a fin de que quede claro que la Presidencia ha sido cuidadosa en asegurar que se respete el turno de un orador a favor y un orador en contra.

Si el diputado en su intervención desea cambiar el sentido de su intervención o expresarse con otra orientación, es su derecho.

Lo que quiero aclarar, para que la asamblea tenga la seguridad de la conducción, es que se han anotado el mismo número de oradores a favor y el mismo número de oradores en contra. Esto es importante para conservar la claridad de la orientación del debate.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado Cayetano.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): ¿Se escucha?

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante. ¿Está prendida la luz del micrófono? ¿Tiene sonido? Verifique la Secretaría.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Gracias, presidente. Sobre los comentarios y aseveraciones que hace usted como presidente, me he inscrito para rectificación de hechos.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, está usted anotado, diputado. Adelante, diputado.

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Para esta representación social es de relevancia solicitar el apoyo de mis compañeras y compañeros diputados de la presente legislatura a efecto de respaldar y aprobar el artículo decimoquinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, mismo que representa la oportunidad de regularizar y/o legalizar los vehículos que se han internado en los últimos años de manera ilegal a nuestro país.

En esa virtud, y en apego al marco jurídico vigente, habrán de modificarse las leyes y ordenamientos en la materia y solucionar de lleno una problemática derivado de la posesión y/o utilización de vehículos de procedencia extranjera y que en consecuencia no han cumplido con lo que establece la Ley Aduanera.

En ese sentido, reconocemos el beneficio que representa solucionar el problema legal de vehículos a las personas que menos tienen y donde la mayoría de ellos pertenecen al sector más débil de nuestro país, o sea, la pobreza.

De ahí la importancia que arroja esta iniciativa, pues aparte de generar seguridad en el patrimonio de las familias, da un valor legal al libre tránsito del vehículo en el país y, desde luego, abatir la corrupción en las carreteras nacionales por ser vehículos irregulares.

De igual manera, detener la corrupción y la ilegalidad de diversas organizaciones, que en vez de apoyar y cuidar el patrimonio de la gente, lucran con la necesidad de quienes, con esfuerzo, ponen en riesgo su vida y recursos, para poder adquirir este tipo de vehículos.

Dinero que muchas veces iba a parar a los gobiernos o funcionarios aduanales de ese entonces. Estas organizaciones lo quieren tener cautivo para después utilizarlos con fines electorales.

Finalmente, el llamado para que los legisladores y las legisladoras apoyemos en su totalidad a esa modificación que beneficia a muchos mexicanos y que va en pro de los principios y ejes de la cuarta transformación.

Amigos y amigas diputadas, yo sé que muchos de ustedes, bendito Dios, no tienen la necesidad y nunca tuvieron la necesidad de adquirir un vehículo de esta procedencia. Sin embargo, hoy en día muchos de los partidos, por no hacer algún señalamiento, han lucrado también con este tema de la pobreza de la gente, de los que no han tenido económicamente con qué comprar un vehículo nacional.

Hoy, hoy tenemos la oportunidad de verdaderamente ir unidos como legisladores y apoyar este quinto transitorio, para que podamos darle verdaderamente seguridad social a la gente más necesitada de nuestro país.

El diputado Emilio Manzanilla Téllez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Manzanilla?

El diputado Emilio Manzanilla Téllez (desde la curul): Le quiero hacer una pregunta, si me lo permite, al diputado Borrego.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Acepta usted una pregunta del diputado Manzanilla?

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Claro, adelante.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Emilio Manzanilla Téllez (desde la curul): Diputado Borrego, le comento que que yo fui migrante y el año 90, después de cuatro años en Estados Unidos, me traje una camioneta pick up y con ella inicié un negocio en México, eso ya me permitió estar estable en México y ya no regresé a Estados Unidos.

Yo estoy a favor de esa propuesta, pero quisiera preguntarle en qué considera, qué criterio usted considera que los senadores se basan para estar rechazando esta iniciativa, esa propuesta de legalizar los vehículos extranjeros.

¿Qué estarán pensando los senadores o en qué se basan? ¿Qué criterio utilizan? ¿Estarán favoreciendo a las empresas de vehículos? ¿O qué criterio tiene usted acerca de esa decisión, diputado Borrego?

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Bueno, decirles claramente que este transitorio no debe ser para lucrar. Este transitorio debe ser para apoyar, como ya lo dije anteriormente, apoyar a la gente más necesitada de este país.

Si los señores senadores no se dieron el espacio para meditar y ver el cómo sí pudieran ayudar a las familias más necesitadas de México, seremos respetuosos de su forma de pensar. Pero nunca, nunca estaremos de acuerdo en lo que ellos decidieron en contra del pueblo de México, que deben entender los senadores que en ningún momento se afecta a la industria automotriz. Estos vehículos ya están en el país. Estos vehículos no afectan de ninguna manera con la economía de los industriales, al contrario, benefician la economía de nuestro país.

Hoy en día necesitamos darle mayor seguridad a todos los que transitan en las carreteras estatales, municipales y federales. Y a tratar de acabar con la corrupción de los moches para que ellos puedan transitar con sus vehículos.

En ese sentido, exhorto a los senadores que cuando regrese este transitorio se den el tiempo para meditar y, sobre todo, a los senadores de nuestro partido, a que nos apoyen para que verdaderamente la cuarta T pueda cumplirle al pueblo más necesitado.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Y permítame. La diputada Mirtha Iliana Villalvazo, ¿con qué objeto?

La diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (desde la curul): Pedirle, presidente, que si me puede, por su conducto, hacerle una pregunta al orador.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Acepta la pregunta de la diputada Villalvazo?

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Adelante, diputada.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (desde la curul): Diputado compañero, preguntarle a qué se puede atribuir el hecho de que en un afán, en un supuesto afán de enmendarnos la plana, el Senado, o decirlo con sus letras, algún senador nos haya dado reversa respecto tema de nosotros, que es dar la certeza a toda la gente que tiene un carro chocolate ilegal, nos haya dado para atrás esta reserva, este decreto. ¿Usted sabe? Porque creo que está en esa tribuna en pro y sé que usted votó hace ocho días a favor de esta iniciativa.

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Gracias, diputada. Efectivamente, tenemos que reconocer que en el Senado de la República faltó más análisis del tema, que si bien alguien o alguien de las senadoras o senadores tomaron alguna determinación equivocada, por ahí algún compañero de Sonora creo que fue muy claro. Es tiempo de reconocer que nos podemos equivocar para tomar una decisión, pero también es tiempo de rectificar cuando las cosas las hicimos mal.

Yo exhorto a los senadores y a las senadoras que votaron en contra de este transitorio, que se vuelva a analizar y que verdaderamente nos den el apoyo para que podamos salir adelante con la gente que verdaderamente está esperando una solución de fondo para que esta problemática de la corrupción que hay en esas unidades, puedan legalizarse y puedan tener mayor seguridad en las carreteras y en sus estados. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Permítame. El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Con qué objeto?

El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (desde la curul): Una pregunta, si lo permite el orador.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Acepta usted la pregunta del diputado Ruiz Lustre?

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Adelante.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (desde la curul): Compañero, para mayor ilustración de la gente que nos observa. ¿Usted podría aclararnos si en algún momento del despacho federal, así como de las legislaturas anteriores del Congreso, ha sucedido una aprobación tal cual lo estamos intentando en este momento, de regularizar los vehículos irregulares? ¿Sí me entendió?

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Sí, le entendí, señor. Déjenme nada más que, fui muy claro, compañero diputado, que no iba a hablar en este sentido de los demás partidos por respeto al apoyo que les estoy solicitando, para que de manera puedan hacer generar la votación a favor del tema que estamos transitando en este momento. Entonces decirles que...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Concluyó, diputado?

El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Permítame, presidente. Para concluir quiero ser más claro. Este es un tema social, no es un tema de partido o de colores. Todos debemos ir sumados en las necesidades de la gente que más necesita que la apoyemos. Aquí hemos discutido y nos hemos hecho señalamientos muy tristes y muy feos, y no hemos reconocido a veces que también fallamos.

Hoy en día vayamos juntos, vayamos en global y apoyemos este transitorio, e invitemos juntos a que los senadores verdaderamente cumplan con su obligación a favor del pueblo. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, para hechos, desde su curul, por un minuto.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Gracias, presidente. Con fundamento en el numeral 1 del artículo 121 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le comento a usted que hizo un llamado infundado al orador, durante su intervención, a su par y compañero diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, porque considero que usted no tenía claridad en el sentido en que viene el dictamen que se discute.

El compañero estuvo perfectamente ajustado a la postura a favor del dictamen para lo que fue inscrito por parte de nuestro grupo parlamentario. Amén de que a nadie puede usted reconvenir, le reitero la misma petición de otras veces, que mantenga la imparcialidad y la ecuanimidad que le caracteriza y no se tijeretee el debate.

Vamos a insistir al Senado de la República para que se apruebe lo que nosotros hemos aprobado para la legalización de lo que denominamos autos chocolate.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Estamos con mucha claridad, presidente. Gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Agradezco la atención que tiene a las disposiciones de mi Presidencia. Le reitero mi disposición y compromiso absoluto a usted y a la asamblea de llevar una conducción adecuada. Para la Presidencia fue importante aclarar a la asamblea, que se estaba respetando escrupulosamente el número de diputados a favor y en contra. Respecto a su juicio de valor, lo respeto y queda inscrito en el Diario de Debates. El diputado Luis Miranda, ¿con qué objeto? Sonido.

El diputado Luis Enrique Miranda Nava (desde la curul): Hechos, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra por un minuto, desde su curul.

El diputado Luis Enrique Miranda Nava (desde la curul): Hace menos de ocho días tuvimos una votación sobre este mismo artículo décimo quinto transitorio. Se votaron 316 votos a favor, 6 en contra y 12 abstenciones. Me parece verdaderamente inútil y una pérdida de tiempo volver a discutir un tema en el que cada uno ya expresó su opinión, en el que somos diputados federales y cada uno representa la responsabilidad de la curul que tiene en su asiento.

Entonces, si vamos a repetir una discusión que ya se había dado, un tema que ya habíamos discutido con un criterio que habíamos sostenido los que somos representantes federales y luego cambiarlo, me parece ocioso.

Estamos ya en un momento de decisión. Hemos platicado este tema durante mucho tiempo. La mayoría o creo que los que votaron a favor...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.

El diputado Luis Enrique Miranda Nava (desde la curul): ...no lo harán de manera negativa nuevamente. Por eso pido que se cese la discusión y pasemos a la votación.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Sus expresiones quedan registradas en el Diario de Debates. Y reitero a la asamblea que estamos siguiendo el procedimiento parlamentario.

Agotada la lista de oradores, consulte la secretaría en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Diputadas, diputados solicito su atención, por favor. En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido en lo general.

Se informa a la asamblea que, para el dictamen relativo a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2020, se ha reservado el artículo Decimoquinto transitorio.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular con los artículos no reservados.

(Votación)

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, ¿con qué objeto?

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Es que nuestra pregunta es qué se está votando, porque habíamos hecho algunas reservas, ya no...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informé a la asamblea que está reservado el artículo Decimoquinto transitorio. Estamos votando en lo general, lo no reservado.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: ¿Alguna diputada...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: ¿Me hacen favor de poner sonido a la curul del diputado Rodríguez?

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez (desde la curul): Presidente, para pedirle que aclare lo que se está votando porque hay una confusión aquí entre los diputados, por favor.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Con mucho gusto. Estamos votando el dictamen de la Ley de Ingresos en lo general, salvo el artículo reservado que es el Decimoquinto transitorio. Concluyendo la votación en lo general y de lo no reservado, se presentará la reserva y luego haremos el voto en lo particular. Espero haya sido clara la explicación. Diputado Rodríguez.

El diputado Eraclio Rodríguez Gómez (desde la curul): Sí, enterado, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto?

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informe la Secretaría el resultado de la votación.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Le informo, diputado presidente, que se emitieron 273 votos en pro, 5 abstenciones, 168 en contra.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado en lo general, por 273 votos.

Pasaremos a la discusión en lo particular.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento, se concederá a las y los diputados el uso de la palabra para presentar su propuesta de modificación hasta por cinco minutos.

Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT. Presenta reserva al artículo decimoquinto transitorio.

El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Compañeras y compañeros diputados, una vez más subo a esta tribuna para reiterar que me siento obligado a manifestarles que la eliminación del artículo decimoquinto transitorio en la Ley de Ingresos, que nos remitió la colegisladora, es un error que parece retrasar lo impostergable. Porque lo que en la Cámara de Diputados habíamos aprobado no era más que el mandato de que el Congreso de la Unión legislara para atender la problemática de este tipo de vehículos, en consonancia con lo establecido por una ley vigente como lo es la Ley Aduanera, ni más ni menos.

Es decir, compañeras y compañeros, el texto aprobado por la Cámara de Diputados no señalaba ni siquiera en qué sentido debía legislarse, sino únicamente mandataba al Congreso a legislar en la materia. Y es por eso que llama la atención que el Senado simplemente excluyera el tema del dictamen, lo que refleja con toda claridad que la colegisladora no quiere entrarle al tema.

El Senado, así con sus letras hay que decirlo, cedió ante las presiones de la industria automotriz, que ha dicho que la legislación de autos chocolate impactaría negativamente las ventas del sector con un decremento del 30 por ciento.

Sin embargo, como lo han denunciado integrantes de la Unión de Campesinos e Inmigrantes Mexicanos o la Organización de Comunidades y Ejidos Municipales, los autos chocolate son usados por la delincuencia, tanto común como organizada, para cometer delitos. Y por eso urge legislar en la materia.

Y hay quienes vienen a esta tribuna a darse golpes de pecho y criticar al gobierno por la estrategia contra la delincuencia, pero no están dispuestos a legislar en un tema que tiene implicaciones en materia de seguridad pública.

Por ejemplo, lo vuelvo a reiterar, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de 1994, en su artículo 300 y su anexo, ya se considera la liberalización del mercado de autos usados. Y se establece que a partir del primero de enero de 2019 México no puede restringir o prohibir la importación de autos usados de los países miembros. Además, por si fuera poco, esta disposición también está incluida en el T–MEC, en su artículo 2.11.

Pero no es un error este que estamos señalando solamente porque contravenga a lo establecido en tratados con rango constitucional, no, sino que lo es porque el razonamiento para eliminar el transitorio se sostiene en un conjunto de mitos. Abordaré uno o dos solamente.

El mito de que se protege la industria nacional si se impide el acceso de autos usados a México. Falso. La industria automotriz nacional es una industria de exportación que está controlada por las multinacionales que venden en el mercado local el 15 por ciento de su producción. De hecho, hasta el mes de agosto de este año vendieron menos del 12 por ciento.

En este sentido, la industria automotriz no depende del mercado nacional tanto como del extranjero y, en todo caso, es más apremiante la ratificación del T–MEC que la entrada de autos usados.

Y mito dos, con eso concluyo. Se reducirían las ventas y se causaría incertidumbre en las inversiones extranjeras. Falso. De acuerdo con la encuesta Inegi, Gasto de Hogares 2018, el 10 por ciento más rico de la población gasta más en adquirir autos que el 90 por ciento restante, equivalente al 53 por ciento del mercado. Sí, sorprendentemente el ingreso mensual promedio del 10 por ciento más acaudalado es solo de 16 mil 722 pesos.

Le pediré, diputado presidente, que se pueda registrar mi intervención íntegra en el Diario de los Debates, porque he tomado una decisión. Estoy enterado de que hay varias compañeras y compañeros que presentaron una reserva similar. He revisado la que presentaron mis compañeros de Morena y yo retiro en este momento la mía y me sumo a la de mis compañeros de Morena, con mucho gusto. Es cuanto, diputado presidente.

«Posicionamiento entregado a la Mesa Directiva, por el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya.

• Me siento obligado a manifestarles que la eliminación del décimo quinto transitorio en la Ley de Ingresos que nos remite la Colegisladora es un error que parece retrasar lo impostergable.

• Lo que la Cámara de Diputados había aprobado, no era más que el mandato de que el Congreso de la Unión legislara para atender la problemática de este tipo de vehículos, en consonancia con lo establecido por una ley vigente como lo es la Ley Aduanera. Ni más ni menos.

• Es decir, el texto aprobado por la Cámara de Diputados no señalaba en qué sentido se debía legislar, sino únicamente mandataba al Congreso a legislar en la materia.

• Por eso, llama la atención que el Senado simplemente excluyera el tema del dictamen, lo que refleja con toda claridad, que la Colegisladora no quiere entrarle al tema.

• El Senado cedió ante las presiones de la industria automotriz, que ha dicho que la legalización de autos chocolate impactaría negativamente las ventas del sector con un decremento de 30 por ciento.

• Sin embargo, como lo han denunciado la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos (UCEM) y la Organización de Comunidades y Ejidos Municipales (OCEM), los autos chocolate son usados por la delincuencia, tanto común como organizada, para cometer delitos. Por eso urge legislar en la materia.

• Hay quienes vienen a esta tribuna a darse golpes de pecho y criticar al gobierno por la estrategia contra la delincuencia, pero no están dispuestos a legislar en un tema que tiene implicaciones en materia de seguridad pública.

• En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, en su artículo 300 y su anexo, ya se considera la liberalización del mercado de autos usados.

• Se establece que a partir del 1o. de enero de 2019, México no puede restringir o prohibir la importación de autos usados de los países miembros. Además, esta disposición también está incluida en el T-MEC, en su artículo 2.11

• Pero no es un error solamente porque contravenga lo establecido en tratados con rango constitucional, sino que lo es porque el razonamiento para eliminar el transitorio se sostiene en un conjunto de mitos.

• **Mito 1.** Se protege la industria nacional si se impide el acceso de autos usados a México.

La industria automotriz nacional es una de exportación que está controlada por multinacionales que venden en el mercado local el 15 por ciento de su producción, de hecho, hasta el mes de agosto de este año vendieron menos del 12 por ciento. En este sentido la industria automotriz no depende del mercado nacional tanto como del extranjero y, en todo caso, es más apremiante la ratificación del T-MEC que la entrada de autos usados.

Mito 2. Se reducirían las ventas y se causaría incertidumbre en las inversiones extranjeras.

De acuerdo con la encuesta Ingreso Gasto de los Hogares 2018 del INEGI, el 10 por ciento más rico de la población gasta más en adquirir autos que el 90 por ciento restante, equivalente al 53 por ciento del mercado. Sorprendentemente el ingreso mensual promedio del 10 por ciento más acaudalado es de sólo 16 mil 722 pesos.

Es por esto que la demanda de autos nuevos y usados no compiten entre sí, pero se debe reconocer que los mexicanos que no compran autos nuevos adquieren semi nuevos y las distribuidoras automotrices si compiten en este mercado contra los autos usados foráneos.

En vista de lo anterior, se puede sostener que la reducción de ventas de autos nuevos no se explicaría por autos usados.

Mito 3. La liberalización de autos usados deteriorará el medio ambiente, ya que son de mala calidad o muy viejos.

Los profesores Davis y Kahn, de la Universidad de Michigan y de la Universidad de California en Los Ángeles, respectivamente, plantean que derivado de que los años de uso de un automóvil en los Estados Unidos es de 9.4 comparado con 13.5 en México; los autos usados provenientes del otro lado de la frontera son más contaminantes que los que ya están ahí pero menos que los que circulan en México, por lo que las emisiones promedio por vehículo tienden a disminuir en ambos países.

• Habida cuenta de lo anterior los 3 mitos más recurrentes no se sostienen, pero sí que la negación a la regularización de los autos usados foráneos es uno de los últimos resquicios proteccionistas y debemos ponderar si los costos de la apertura son mayores que los beneficios.

• Beneficiar a los distribuidores para mantener mayores precios y barreras a la entrada a la competencia es en perjuicio de toda la sociedad; si hacemos lo contrario y regulamos, garantizaríamos mayor oferta de automóviles lo que se traducirá en menores precios y en la disminución de las emisiones de carbono en los dos países.

• En vista de que la entrada sin restricciones de vehículos usados es un hecho, porque está en los Tratados Internacionales, lo que le queda al Congreso de la Unión es determinar qué haremos con los automóviles sin registrar que ya se encuentran en circulación y en vista de que urge el fortalecimiento del Estado de Derecho debemos encontrar los mecanismos para que las familias que se encuentran fuera de la norma se atengan a ella, pero no de forma punitiva sino de forma conciliatoria y relativizando que los mexicanos no son delincuentes por buscar un patrimonio para sus familias, no son delincuentes por querer reducir sus tiempos de traslado, tampoco lo son por buscar obtener más por su dinero. ¿Qué acaso no son éstos los valores del libre mercado?

• Contrariamente, si seguimos negando la legalización de estos automóviles estamos promoviendo el mercado negro, fomentado la ausencia de Estado donde bien podríamos actuar, y fortaleciendo a las organizaciones que "registran" cobrando cuotas de forma ilegal.

• No deberíamos desaprovechar esta oportunidad para que en un sólo acto legislativo logremos integrar a Norteamérica, garantizar menores precios y mayor variedad para las familias menos favorecidas del país, fortalecer el Estado de Derecho y las haciendas públicas locales.

• Compañeros diputados, los convido a no ceder a la presión de los agentes económicos de sus localidades y a llamar las cosas por su nombre; los distribuidores de automóviles, en perjuicio de las familias mexicanas, están protegiendo sus ganancias extraordinarias al evitar la competencia y fijando precios por encima de los que los acuerdos internacionales nos pueden brindar.

• Y consecuentemente estoy en contra de la eliminación del transitorio que realizó la Colegisladora.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2019.— Diputado Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Así será, diputado. Se tiene por retirada y se inscribe en el Diario de los Debates su intervención.

Tiene la palabra la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, quien en voz propia y del diputado Heriberto Aguilar Castillo, ambos del Grupo Parlamentario de Morena, presentan reserva al artículo decimoquinto transitorio.

La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz: Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputada.

La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz: Compañeros y compañeras, diputadas, diputados, en este momento volvemos a proponer esta reserva al artículo decimoquinto transitorio del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 2020 y que tiene por objetivo propiciar las condiciones adecuadas para una regularización efectiva de los automóviles de procedencia extranjera que se encuentran circulando en territorio nacional.

Estos que no han cumplido con las disposiciones de la Ley Aduanera, y hago énfasis en lo siguiente, cuyos dueños en su mayoría tienen dichos coches chocolates por necesidad y no por querer desafiar a la legalidad.

Es evidente, como ya hemos escuchado a varios compañeros y compañeras hablar al respecto, que esta reserva la volveremos a votar a favor en esta Cámara y es por ello que mi mensaje en esta ocasión va dirigido a los senadores y las senadoras.

Quizás algunos senadores no conocen la realidad que se vive en el norte de nuestro país, así que rechazaron esta disposición y por esto, desde esta tribuna les digo lo siguiente.

Senadores y senadoras de la República, esta es una problemática real y que debemos enfrentar como representantes populares, atenderla, no evadirla, ser sensibles con las familias que no han tenido las condiciones económicas para adquirir un automóvil nacional y que han optado con sus pocos ahorros y mucho esfuerzo por comprar un automóvil chocolate, ya que ha sido esta la opción más económica disponible.

¿Qué es y qué no es esta reserva? Esta reserva, compañeros y compañeras, no es un incentivo ni un llamado para internar nuevos vehículos. Todo aquel vehículo que se requiera importar tendrá que apegarse a la normatividad existente. No es ir en contra de la industria automotriz nacional.

A las distribuidoras y armadoras automotrices les reiteramos: los automóviles que se pretenden regularizar son los que ya están en territorio nacional. Las personas que circulan en ellos, si estas personas tuvieran el dinero para comprar un automóvil nacional, ya lo habrían hecho desde un principio.

¿Qué es lo que sí es esta reserva? Es la oportunidad para que, en un tiempo establecido hasta ocho meses, una vez que entre en vigor la Ley de Ingresos, nosotros como Congreso de la Unión hagamos las modificaciones correspondientes a la ley y a los ordenamientos, a efecto de solucionar dicha problemática, con la finalidad de que la gente que durante mucho tiempo ha pretendido regularizar sus automóviles que están en territorio mexicano lo hagan.

Es también una oportunidad de disminuir la delincuencia, ya que al tener un registro oficial de estos vehículos será más difícil que se cometan actos ilícitos en ellos sin ser identificados oportunamente.

Y además de todo, al realizarse una regularización de este tipo, podríamos contar con una fuente de ingresos, como ya lo han mencionado otros compañeros, un ingreso extra que se podría destinar a sectores importantes que demandan mayor presupuesto.

Estar en contra de esta reserva resultaría estar en contra de las familias que necesitan de nuestro apoyo para regularizar sus automóviles, a veces único patrimonio que tienen. En contra de la seguridad y en contra de quienes confiaron en nosotros para ser sus voces en estas cámaras.

Senadores y senadoras, en la Cámara baja solicitamos su apoyo, trabajemos en coordinación, seamos sensibles. Los exhortamos a votar a favor y a unirse a nosotros en beneficio de nuestros representados. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se admite a discusión. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para hablar en pro.

El diputado Juan Francisco Espinoza Eguia: Con su permiso, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Juan Francisco Espinoza Eguia: En el Grupo Parlamentario del PRI estamos seguros que los retos de la frontera en la actualidad son mucho más complicados que una falla en la regulación.

Por ello, hemos acompañado al gobierno federal para generar instrumentos que brinden confianza y seguridad a toda la población.

Sin embargo, uno de los problemas que continúa afectando a los habitantes de las zonas rurales, es la ausencia de garantías para sus propiedades, en este caso, en los autos de procedencia extranjera, que con mucho

esfuerzo de sus familias que están aquí y que están del otro lado de la frontera, han adquirido para mejorar sus condiciones de vida.

Y al no tener recursos económicos para poder adquirir uno de procedencia nacional, hacen lo posible por adquirir uno de procedencia extranjera.

Los habitantes de las zonas rurales, para hacer esto, exponen de manera injusta e indirecta y se ven involucrados, en muchos casos, en actos y actividades irregulares.

También, es necesario reafirmar que con esta medida, y que quede claro, no se busca afectar de ninguna manera a la industria automotriz ni a los empleos que genera o a su ingreso, porque los automóviles que se pretenden regularizar ya están aquí, en territorio nacional, ya circulan en calles de México.

Nuestro deber está en apoyar a los mexicanos y ponerle un candado a las extorsiones. Muchos somos testigos de la queja de los ciudadanos que en las carreteras los extorsionan para que puedan circular, y esto es día a día y afecta mucho su economía.

Compañeras y compañeros, en ese contexto, regresar a la redacción original que se le dio a este artículo es la solución para que miles de mexicanos que llevan años buscando regularizar su patrimonio, lo puedan lograr.

De igual forma, aprovecho el momento para dejar constancia, en esta tribuna, que en mi carácter de legislador presenté una reserva específica en la materia y la retiro para sumarme a esta que estoy apoyando.

Estamos convencidos que sin duda esta acción beneficiará en los ingresos que puedan ser perfectamente aprovechados por la gente de nuestro campo.

Compañeras y compañeros, apoyemos la regularización de autos de procedencia extranjera en nuestro país, que apoyan y abonan mucho al sector productivo, especialmente en las zonas rurales de donde somos originarios muchos de nosotros.

Estoy seguro que, así como un servidor y como lo manifestaron muchos de ustedes, no los vamos a dejar solos y si una vez la rechazan, seguiremos insistiendo para que esto sea realidad el día de mañana. Muchas gracias y estamos a favor de esta propuesta. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Se registra el retiro de su reserva particular. Tiene la palabra para hablar en pro de la adición de un artículo transitorio que estamos discutiendo, la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La diputada Adriana Lozano Rodríguez: Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Adriana Lozano Rodríguez: Compañeras diputados, compañeras diputadas. Los integrantes del Grupo Parlamentario del PES estamos a favor de esta reserva, porque es necesario que tanto nosotros desde aquí en el Congreso federal, como en todos los congresos locales, puedan realizar las adecuaciones legales y necesarias para dar solución a la problemática que desde hace años aqueja a diversos sectores de la población.

También esto ha generado inconformidad entre los sectores industriales. Con este transitorio desde el Poder Legislativo apoyamos la creación de un marco normativo completo, que considere mecanismos para el debido cumplimiento de las disposiciones aduaneras en los estados de la frontera norte.

Es sumamente importante trabajar entre todos, sumando esfuerzos con el objetivo de evitar que todos los vehículos que ingresan a nuestro país sean utilizados para cometer un acto ilícito, y esto podremos lograrlo si contamos con un padrón puntual y abrimos la posibilidad de que obtengan permisos de circulación y regulación.

Estoy consciente de la desigualdad que hay en nuestro país. En el PES somos conscientes de los esfuerzos que realizan los mexicanos para poder tener un bien como inmueble, como es un automóvil. Y sobre todo

reconocemos el esmero para cumplir con todos y con todas las obligaciones fiscales que le corresponden a cada ciudadano.

En el PES somos conscientes de la difícil situación de la economía familiar. Adquirir un vehículo a lo mejor para ustedes, diputados, diputadas, es sumamente fácil porque no afecta la economía, pero para el sector del trabajo le es muy complicado, tienen que hacer ahorros familiares.

No es fácil la situación de poder adquirir un vehículo, esto requiere apretar el cinturón en la familia, hacer ahorros, por muchas y muchas horas de trabajo, así teniéndolo que reunir todos y cada uno de los integrantes de la familia.

Por eso nosotros creemos importante que las adecuaciones a las leyes y a los ordenamientos aplicables en la regularización para los automóviles de esta naturaleza puede abrir la posibilidad de generar esquemas tributarios equitativos y sumamente irresponsables.

Reconocemos que la falta de oportunidades ha generado un contexto desigual y que todos los padres de familia buscan siempre la seguridad para cada uno de sus integrantes. No se trata de señalar a quienes adquieren vehículos en el extranjero por ser los costos más accesibles, se trata de respaldar el patrimonio de las familias mexicanas, evitar la extorsión y generar las condiciones necesarias para quien pueda y así lo decida, cuando cuente con un medio de transporte que sea propio y que sea digno.

Por ello, en el Partido Encuentro Social creemos que regularizando los autos conocidos como chocolate en el país, generará una sana competencia basada en mecanismos de transparencia, esto incluye también beneficios para la federación, para los estados y para los municipios.

Por eso yo hoy exhorto a los senadores para que apoyen esta propuesta, porque pensando en los otros, un mejor México es posible. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera suficientemente discutida la adición de un artículo transitorio.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: No se considera suficientemente discutido. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro, por cinco minutos.

La diputada Irma María Terán Villalobos: Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Irma María Terán Villalobos: Compañeras y compañeros legisladores, se estima que en el país están circulando miles de autos que por sus características de ingreso son conocidos como chocolate.

Este parque vehicular tiene una mayor presencia en entidades de la región norte como es Sonora, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, pero también en el sur–sureste como es Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Hay que ser muy, muy claros. Estos vehículos ya están en nuestro país y no solo buscamos regularizarlos, de ninguna manera se busca afectar a la industria automotriz. Por el contrario, generará diversos beneficios entre los que destacan los siguientes:

1. Dentro de estos beneficios pagarán impuestos en favor de las arcas públicas federales cuyos montos podrán ser utilizados para la construcción de infraestructura, la ampliación de la red carretera del país o para el mejoramiento en la prestación de servicios públicos.

2. Inhibirán las extorsiones a los dueños de estos vehículos y se generará certeza sobre su propiedad, ya que como todos ustedes saben, existen denuncias de usuarios de que constantemente son detenidos y extorsionados por agentes de vialidad por el simple hecho de portar un vehículo con estas características.

3. Apoyarán las actividades productivas ya que principalmente en el norte y sur del país, estos vehículos son utilizados en actividades del campo, como es la producción de alimentos y el transporte para su comercialización.

Bajo estas consideraciones, presento una reserva al artículo decimosexto transitorio a fin de establecer que para efectos de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, se contará con un plazo máximo de ocho meses para realizar las adecuaciones que correspondan a las leyes y ordenamientos aplicables. De aprobarse esta reserva se solucionarán a fondo las problemáticas relacionadas con la posesión de los vehículos importados, usados y localizados en el territorio nacional.

Compañeras y compañeros legisladores, les solicito que con el respaldo de su voto generemos juntos mayor certidumbre para los propietarios de esas unidades, los cuales han contribuido al crecimiento económico y desarrollo nacional.

Subrayo y reitero la importancia de que este tema sea apoyado por el Senado para que no quede congelado y se concluya el proceso legislativo y así pueda ser publicado en el Diario Oficial de la Federación junto con todo lo que ya se ha aprobado. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.

El diputado Héctor René Cruz Aparicio: Con su venia, presidente. Honorable asamblea.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Héctor René Cruz Aparicio: Compañeras y compañeros diputados, aprovecho para dirigirme también a los ciudadanos de la frontera particularmente de mi estado y de mi ciudad Tijuana, a quienes interesa este tema. El pasado viernes 18 de octubre se presentó en este recinto legislativo una adición que conllevó a la integración de la fracción XV transitoria a la Ley de Ingresos de la Federación, la cual fue aprobada respectivamente y posteriormente modificada en el Senado de la República, desconociendo desde nuestro punto de vista la problemática real que se vive particularmente en las zonas fronterizas de los llamados autos chocolates.

Es por ello que hoy manifiesto que las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social votaremos a favor de volver al texto original aprobado por esta Cámara de Diputados, así como la adición de un décimo sexto que plantea las reservas, con el fin de promover el saneamiento de los créditos adeudados por concepto de cuotas obrero–patronales, capitales constitutivos y sus accesorios con excepción de las cuotas del seguro de retiro.

Para este efecto votaremos a favor para volver al texto original para que la fracción XV transitoria de la Ley de Ingresos de la Federación, y agregar un décimo sexto. Es de gran importancia la modificación de esta ley ya que tiene como finalidad facilitar los trámites de los contribuyentes para que se adhieran a una cultura de la legalidad.

Además, con esta reforma se pretende la regularización de millones de vehículos, como aquí se ha planteado. Actualmente en la frontera norte la normatividad no favorece a los ciudadanos poseedores de los vehículos usados localizados en territorio nacional, por lo que esta modificación favorece el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Aduanera, cuyos beneficios esperados son los siguientes:

Primero, facilitar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras, evitar que este tipo de vehículos sean utilizados en la comisión de delitos, facilitar la regularización de vehículos a estratos poblacionales de bajos recursos para proteger no solo el patrimonio de esos poseedores, sino el de terceros. Incrementar la recaudación como consecuencia del pago de derechos e impuestos estatales y federales.

Se estiman ingresos para los tres órdenes de gobierno por el orden de los 50 mil millones de pesos que, compañeros, mucha falta hace a los estados y a los municipios.

Regresamos al Senado dicha modificación para su respectiva valoración, reiterando que los diputados y las diputadas de Encuentro Social estamos a favor de esta ley, con la finalidad de optimizar el crecimiento económico del país. Porque estamos conscientes de que los ciudadanos mexicanos que tienen en su posesión un vehículo de procedencia extranjera irregular no lo hacen porque quieran estar en la ilegalidad, lo hacen porque lo adquieren a bajo costo y actualmente las disposiciones aduaneras complican que puedan regularizar esos vehículos. Pero los utilizan para trasladar a sus familias, para trasladar a sus hijos a la escuela, para ir al trabajo y son ciudadanos que quieren estar en la legalidad.

Es por eso que debemos brindarles un voto de confianza a los ciudadanos para que puedan acceder a la regularización de una herramienta que no es un lujo, es una necesidad para la familia de todos los mexicanos.

Les pedimos a los senadores que se solidaricen no con la Cámara de Diputados, sino con los miles o millones de ciudadanos que se encuentran en esta situación. Muchas gracias, es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado.

El diputado Héctor René Cruz Aparicio: Quiero, perdón, señor presidente. Quiero agregar que su servidor, a nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social, presentó una reserva que va en el mismo sentido y en este acto declino la misma, solicitando que se inscriba en el Diario de los Debates. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Así se hará, diputado. Se registra el retiro de su reserva y se inscribe en el Diario de los Debates.

Con fundamento en el artículo 110, numeral 1, fracción IV, de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta si se considera suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido. Ahora consulte la Secretaría si se acepta la modificación presentada por la diputada Teresita de Jesús Vargas.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se consulta si se acepta la modificación presentada por la diputada Teresita de Jesús. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se acepta y se incorpora al texto del dictamen.

Continuamos con las reservas. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Presenta reserva al artículo decimoquinto transitorio con la adición de un párrafo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Compañeros diputados, compañeras diputadas, acabo de votar en favor de la reserva hecha por Morena. Nos comentaba el compañero Pablo Gómez que ellos hicieron una revisión, inclusive técnica, de cuál era la mejor manera de resolver este diferendo que tenemos con el Senado de la República. Así que en ese sentido mi reserva es ya innecesaria.

Solo acudí no solo para retirar esta reserva, sino para hacer primero un reconocimiento al diputado Manuel López Castillo, honor a quien honor merece, que fue quien se subió a tribuna a llamarnos la atención sobre este tema, a plantear que aprobáramos esta determinación, que yo creo que es conveniente hacer.

En segundo lugar, en el Senado de la República nuestro movimiento tiene mayoría de senadores y senadoras. Hay compañeros y compañeras muy destacados, con una trayectoria muy fuerte, hombres surgidos del corazón de nuestro pueblo.

Yo quiero pedirles a mis compañeros y compañeras senadores y senadoras del movimiento que no se enfrasquen en una confrontación con nosotros. Somos pares, aunque les paguen más a los senadores, somos pares, somos exactamente iguales, somos colegisladores y en este tema ellos tienen que reconocer que se equivocaron.

Los argumentos que aquí se han dado tienen un poderoso sentido humano, solidario, comprometido con nuestro pueblo. No estamos tocando ningún interés económico, y aunque lo estuviésemos tocando, lo estaríamos haciendo en favor de nuestro pueblo, de quien nuestro movimiento más se preocupa, que es de los que menos tienen, porque como aquí se ha dicho, muchos de estos vehículos son instrumento de trabajo en el campo.

Así es que es muy importante que el Senado aquí no nos juegue las contras. Particularmente hago un llamado al compañero Ricardo Monreal, quien encabeza la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Nuestro movimiento está urgido de fortalecer su unidad. Nuestro movimiento está necesitado de alzar la mira y de entender que nuestros intereses personales, por legítimos que sean, se subordinan al interés general de nuestro pueblo y de nuestra patria.

La ofensiva que hay contra el compañero presidente. Quien no quiera ver que hay un intento de golpe blando, le llaman, que busca tirar a nuestro gobierno. Quien no quiera ver esta ofensiva general que está determinada a que no concluya su mandato el compañero presidente, no entiende la gravedad del momento y la grandeza de las dificultades que estamos enfrentando y que superaremos, sin duda. Así es que, en ese sentido, el Senado de la República no debe escatimarnos la razón en este tema.

Entendemos que de repente la información no sea clara, se tergiverse. Yo, por ejemplo, en el tema del agua pensé que habíamos cometido un error y la verdad es que no es así, la recaudación era muy menor de 500 millones de pesos, no era una medida recaudatoria, sino buscaba poner orden en todo el tema que el agua representa.

En fin, que no me alargo más, simplemente reitero e insisto, un llamado al Senado de la República, en particular a la coalición mayoritaria Juntos Haremos Historia y en par-ticular al compañero Ricardo Monreal. Es momento de mostrar de qué estamos hechos y de que nuestro compromiso es con el pueblo de México y por supuesto en apoyo al compañero presidente López Obrador. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Háganse los avisos...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, secretaria. Me está aclarando el diputado Noroña que retiró su reserva, así se registra y se inscribe. Y, en consecuencia, no habrá esta consulta que le he instruido hace un momento.

También informe a la asamblea que los diputados Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI, y Héctor René Cruz Aparicio, del Partido Encuentro Social, declinaron su participación, retiraron sus reservas y seguirán el mismo trámite que he comentado hace un momento.

Agotada la lista de reservas, se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados, en términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del artículo décimo quinto transitorio, con la modificación aceptada por la asamblea.

(Votación)

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, estamos en votación, pero sonido a la curul del diputado López.

El diputado Manuel López Castillo (desde la curul): Compañeros de la coalición Juntos Haremos Historia, y también la oposición. Muchísimas gracias por solidarizarse con todos los humildes. Gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, no es el momento de hacer pronunciamientos.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: ¿Alguna diputada, diputado que falte por emitir su voto? ¿No, verdad? ¿Alguna diputada, diputado que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema, compañeros.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informe la Secretaría el resultado de la votación.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Está abierto el sistema aún.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Recójalo de viva voz.

La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): A favor.

La diputada Abelina López Rodríguez (desde la curul): A favor.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 369 votos en pro, 32 en contra y 22 abstenciones.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado en lo general y en lo particular, por 369 votos, el proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020. **Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.**

En tal virtud, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, en los términos del artículo 72 fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si autoriza que la Cámara de Senadores, como Cámara revisora, remita al Ejecutivo federal el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, solo en lo que ha sido aprobado por ambas Cámaras.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se autoriza para que el Senado de la República remita el decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2020, solo con los artículos aprobados por ambas Cámaras. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se autoriza. Comuníquese a la Cámara de Senadores.

Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA
OF. No. D.G.P.L. 64-II-1-1360
Exp. 4353

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s e n t e s.

Tenemos el honor de devolver a ustedes el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, para los efectos de la Fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2019.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Dip. Ma. Sara Rocha Medina
Secretaria

011692

CÁMARA DE SENADORES
SECRETARÍA GENERAL DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS

2019 OCT 30 PM 6 31

RECIBIDO

*lmv**

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTA
PROYECTO
DE
DECRETO

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Capítulo I
De los Ingresos y el Endeudamiento Público

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran:

CONCEPTO	Ingreso Estimado
TOTAL	**6,107,732.4**
1. Impuestos	**3,505,822.4**
11. Impuestos Sobre los Ingresos:	1,852,852.3
01. Impuesto sobre la renta.	1,852,852.3
12. Impuestos Sobre el Patrimonio.	
13. Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones:	1,534,055.8
01. Impuesto al valor agregado.	1,007,546.0
02. Impuesto especial sobre producción y servicios:	515,733.5
01. Combustibles automotrices:	342,053.6
01. Artículo 2o., fracción I, inciso D).	313,321.0
02. Artículo 2o.-A.	28,732.6
02. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:	62,165.7
01. Bebidas alcohólicas.	18,888.4
02. Cervezas y bebidas refrescantes.	43,277.3
03. Tabacos labrados.	43,679.4
04. Juegos con apuestas y sorteos.	2,968.8
05. Redes públicas de telecomunicaciones.	5,923.3

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

		06. Bebidas energetizantes.	11.6
		07. Bebidas saborizadas.	28,660.5
		08. Alimentos no básicos con alta densidad calórica.	23,783.2
		09. Plaguicidas.	758.1
		10. Combustibles fósiles.	5,729.3
	03.	Impuesto sobre automóviles nuevos.	10,776.3
14.		Impuestos al Comercio Exterior:	70,984.6
	01.	Impuestos al comercio exterior:	70,984.6
		01. A la importación.	70,984.6
		02. A la exportación.	0.0
15.		Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables.	
16.		Impuestos Ecológicos.	
17.		Accesorios de impuestos:	41,210.2
	01.	Accesorios de impuestos.	41,210.2
18.		Otros impuestos:	6,850.3
	01.	Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.	6,850.3
	02.	Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación.	0.0
19.		Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	-130.8
2.		**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**	**374,003.2**
21.		Aportaciones para Fondos de Vivienda.	0.0
	01.	Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.	0.0
22.		Cuotas para la Seguridad Social.	374,003.2
	01.	Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores.	374,003.2
23.		Cuotas de Ahorro para el Retiro.	0.0
	01.	Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones.	0.0
24.		Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social:	0.0
	01.	Cuotas para el Instituto de Seguridad y	0.0

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

		Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores.	
	02.	Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares.	0.0
25.		Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.	0.0
3.	**Contribuciones de Mejoras**		**44.8**
31.		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas:	44.8
	01.	Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.	44.8
39.		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
4.	**Derechos**		**51,671.8**
41.		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público:	42,740.8
	01.	Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	346.2
	02.	Secretaría de la Función Pública.	0.0
	03.	Secretaría de Economía.	2,670.7
	04.	Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	8,748.2
	05.	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	11,776.9
	06.	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	72.3
	07.	Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	0.0
	08.	Secretaría de Educación Pública.	0.2
	09.	Instituto Federal de Telecomunicaciones.	19,126.3
	10.	Secretaría de Cultura	0.0
43.		Derechos por Prestación de Servicios:	8,931.0
	01.	Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público:	8,931.0
		01. Secretaría de Gobernación.	91.1
		02. Secretaría de Relaciones Exteriores.	4,915.0
		03. Secretaría de la Defensa Nacional.	145.5
		04. Secretaría de Marina.	445.0
		05. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	588.6
		06. Secretaría de la Función Pública.	23.0

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

		07. Secretaría de Energía.	0.2
		08. Secretaría de Economía.	21.9
		09. Secretaría de Agricultura, y Desarrollo Rural.	42.9
		10. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	1,081.6
		11. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	85.1
		01. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
		02. Otros.	85.1
		12. Secretaría de Educación Pública.	1,255.9
		13. Secretaría de Salud.	0.0
		14. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	9.4
		15. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.	61.1
		16. Secretaría de Turismo.	0.0
		17. Fiscalía General de la República.	0.0
		18. Instituto Federal de Telecomunicaciones.	30.1
		19. Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0
		20. Comisión Reguladora de Energía.	0.0
		21. Comisión Federal de Competencia Económica.	0.0
		22. Secretaría de Cultura.	58.4
		23. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	76.2
	44.	Otros Derechos.	0.0
	45.	Accesorios de Derechos.	0.0
	49.	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
5.		**Productos**	**10,095.3**
	51.	Productos.	10,095.3
		01. Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público.	8.8
		02. Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen	10,086.5

	de dominio público:	
	01. Explotación de tierras y aguas.	0.0
	02. Arrendamiento de tierras, locales y construcciones.	0.3
	03. Enajenación de bienes:	1,859.6
	01. Muebles.	1,743.5
	02. Inmuebles.	116.1
	04. Intereses de valores, créditos y bonos.	7,687.4
	05. Utilidades:	539.1
	01. De organismos descentralizados y empresas de participación estatal.	0.0
	02. De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.	0.0
	03. De Pronósticos para la Asistencia Pública.	538.6
	04. Otras.	0.5
	06. Otros.	0.1
59.	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
6.	**Aprovechamientos**	**103,674.4**
61.	Aprovechamientos:	103,639.0
	01. Multas.	2,190.5
	02. Indemnizaciones.	2,531.7
	03. Reintegros:	166.5
	01. Sostenimiento de las escuelas artículo 123.	0.0
	02. Servicio de vigilancia forestal.	0.1
	03. Otros.	166.4
	04. Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica.	94.8
	05. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación.	0.0
	06. Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación.	0.0

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

07.	Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del Sistema Escolar Federalizado.	0.0
08.	Cooperación de la Ciudad de México por servicios públicos locales prestados por la Federación.	0.0
09.	Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de particulares para alcantarillado, electrificación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas.	0.0
10.	5 por ciento de días de cama a cargo de establecimientos particulares para internamiento de enfermos y otros destinados a la Secretaría de Salud.	0.0
11.	Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica.	947.8
12.	Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.	1,129.7
13.	Regalías provenientes de fondos y explotación minera.	0.0
14.	Aportaciones de contratistas de obras públicas.	7.6
15.	Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal:	0.5
	01. Aportaciones que efectúen los Gobiernos de la Ciudad de México, Estatales y Municipales, los organismos y entidades públicas, sociales y los particulares.	0.0
	02. De las reservas nacionales forestales.	0.0
	03. Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.	0.0
	04. Otros conceptos.	0.5
16.	Cuotas Compensatorias.	142.4
17.	Hospitales Militares.	0.0
18.	Participaciones por la explotación de obras del dominio público señaladas por la Ley Federal del Derecho de Autor.	0.0

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

	19.	Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal.	0.0
	20.	Provenientes del programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras.	0.0
	21.	No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios.	0.0
	22.	Otros:	96,427.5
		01. Remanente de operación del Banco de México.	0.0
		02. Utilidades por Recompra de Deuda.	0.0
		03. Rendimiento mínimo garantizado.	0.0
		04. Otros.	96,427.5
	23.	Provenientes de servicios en materia energética:	0.0
		01. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
		02. Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0
		03. Comisión Reguladora de Energía.	0.0
	62.	Aprovechamientos Patrimoniales.	35.4
		01. Recuperaciones de capital:	35.4
		01. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de Entidades Federativas y empresas públicas.	27.6
		02. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas privadas y a particulares.	7.8
		03. Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.	0.0
		04. Desincorporaciones.	0.0
		05. Otros.	0.0
	63.	Accesorios de Aprovechamientos.	0.0
	69.	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
7.		**Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**	**1,065,166.0**
	71.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad	72,232.9

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

	Social:	
	01. Instituto Mexicano del Seguro Social.	26,920.2
	02. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.	45,312.7
72.	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado:	992,933.1
	01. Petróleos Mexicanos.	574,535.0
	02. Comisión Federal de Electricidad.	418,398.1
73.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.	
74.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.	
75.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	
76.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.	
77.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.	
78.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos.	
79.	Otros Ingresos.	
8.	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**	
81.	Participaciones.	
82.	Aportaciones.	
83.	Convenios.	
84.	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.	
85.	Fondos Distintos de Aportaciones.	
9.	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**	**412,797.7**

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

91.	Transferencias y Asignaciones.	0.0
93.	Subsidios y Subvenciones.	0.0
95.	Pensiones y Jubilaciones.	0.0
97.	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.	412,797.7
01.	Ordinarias.	412,797.7
02.	Extraordinarias.	0.0

0.	**Ingresos Derivados de Financiamientos**	**584,456.8**
01.	Endeudamiento interno:	569,582.1
01.	Endeudamiento interno del Gobierno Federal.	532,266.1
02.	Otros financiamientos:	37,316.0
01.	Diferimiento de pagos.	37,316.0
02.	Otros.	0.0
02.	Endeudamiento externo:	0.0
01.	Endeudamiento externo del Gobierno Federal.	0.0
03.	Financiamiento Interno.	
04.	Déficit de organismos y empresas de control directo.	-47,748.8
05.	Déficit de empresas productivas del Estado.	62,623.5
Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal (0.01.01+0.02.01)		532,266.1

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este precepto.

Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal de 2020, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos.

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2020, se proyecta una recaudación federal participable por 3 billones 394 mil 236.7 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal de 2020, el gasto de inversión del Gobierno Federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto.

Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2020, en términos monetarios, el pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, previsto en la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 895.1 millones de pesos.

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el artículo Segundo Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho Transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por parte del Ejecutivo Federal, de los bienes y derechos del fideicomiso referido en el primer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en cuentas de orden, con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo esas operaciones.

El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará en primer término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las operaciones referidas en el párrafo anterior y, posteriormente, se destinarán para restituir al Gobierno Federal los recursos públicos aportados para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto.

Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2020 se destinen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del ejercicio fiscal de 2020, se instrumenten para potenciar los recursos que, con cargo a dicho fondo, reciben las entidades federativas.

Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El gasto de inversión a que se refiere el párrafo sexto del presente artículo se reportará en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de los ingresos generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.61.22.04 del presente artículo por concepto de otros aprovechamientos. Asimismo, deberá informar los destinos específicos que, en términos del artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan dichos aprovechamientos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2020, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Durante el ejercicio fiscal 2020, los ingresos propios de Petróleos Mexicanos que se generen por un precio promedio anual del barril del petróleo crudo mexicano que exceda de 49.01 dólares de los Estados Unidos de América y hasta los 55.00 dólares de los Estados Unidos de América, deberá destinarlos a mejorar su meta de balance financiero aprobada en el artículo 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 532 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo.

Las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior no deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para el ejercicio fiscal de 2020.

Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente se podrán aplicar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario incluyendo sus artículos transitorios. Sobre estas operaciones de canje y refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión.

El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta propia con los valores referidos.

En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos en la cuenta que, para tal efecto, le lleve el Banco de México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el citado Banco procurará las mejores condiciones para el mencionado Instituto dentro de lo que el mercado permita.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco de México podrá ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Titular de dicha Tesorería, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo.

Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores un monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el Resultado de Operación que considera la Constitución Neta de Reservas Crediticias Preventivas, de cero pesos para el ejercicio fiscal de 2020.

El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización del órgano de gobierno de la entidad de que se trate y con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los montos establecidos en el artículo 1o., numeral 0 "Ingresos derivados de Financiamientos" de esta Ley, así como el monto de endeudamiento neto interno consignado en este artículo, se verán, en su caso, modificados en lo conducente como resultado de la distribución, entre el Gobierno Federal y los organismos y empresas de control directo, de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 1 mil 250 millones de dólares de los Estados Unidos de América; asimismo, se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

Se autoriza para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 835 millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de 508 millones de dólares de los Estados Unidos de América, asimismo se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

El cómputo de lo establecido en los dos párrafos anteriores se realizará en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión de manera trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento.

Artículo 3o. Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020. Asimismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar operaciones de canje, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública de la Ciudad de México.

El ejercicio del monto de endeudamiento autorizado se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 4o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 257,138.2 millones de pesos, de los cuales 100,344.1 millones de pesos corresponden a inversión directa y 156,794.1 millones de pesos a inversión condicionada.

Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad en los términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV, del Reglamento de este último ordenamiento, por un total de 2,760.7 millones de pesos que corresponde a un proyecto de inversión directa.

Artículo 6o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y/o sus empresas productivas subsidiarias deberán presentar las declaraciones, hacer los pagos y cumplir con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, ante la Tesorería de la Federación, a través del esquema para la presentación de declaraciones que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida, previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las modificaciones a los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los pagos establecidos conforme al párrafo anterior, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente a aquél en que se generen dichas modificaciones, así como en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga uso de las facultades otorgadas en el segundo párrafo de este artículo, los pagos correspondientes deberán ser transferidos y concentrados en la Tesorería de la Federación por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a más tardar el día siguiente de su recepción, a cuenta de la transferencia a que se refiere el artículo 16, fracción II, inciso g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos que, hasta antes de la entrada en vigor del "Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en términos del artículo 32 de dicha Ley, serán registrados como inversión.

Capítulo II
De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales

Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:

I. Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate:

1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26 por ciento mensual.

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53 por ciento mensual.

3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.82 por ciento mensual.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización realizada conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos y disposiciones de carácter general expedidos en el Ramo de Hacienda, de las que hayan derivado beneficios otorgados en términos de la presente Ley, así como por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2020, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen.

Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se estará a lo siguiente:

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

I. La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, de similares características, en países con los que México mantiene vínculos comerciales.

II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica y de saneamiento financiero.

III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general.

Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública Federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los aprovechamientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los aprovechamientos que perciba la dependencia correspondiente.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por dicha Secretaría, ya sea de los ingresos que obtengan o con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, o tratándose de recuperaciones de capital o del patrimonio, según sea el caso, los recursos correspondientes se destinarán por la propia Secretaría prioritariamente a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a fomentar acciones que les permitan cumplir con sus respectivos mandatos, o a programas y proyectos de inversión, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente Ley.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de cualquier otra entidad paraestatal distinta de las señaladas en el párrafo anterior, dichos ingresos serán enterados a la Tesorería de la Federación bajo dicha naturaleza, a efecto de que sean destinados a programas presupuestarios que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él deriven.

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 1o., numerales 6.61.11, 6.62.01.04 y 6.61.22.04 de esta Ley por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, aquéllos a que se refieren la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley Federal de Competencia Económica, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo en los plazos que para tales efectos se fijen, el prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación de que se trate, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos.

El prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por aprovechamientos, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de carácter particular, las cuotas de los productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal de 2020, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los productos que se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los productos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019 hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones efectuadas tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como por el Instituto de Administración de Bienes y Activos y los accesorios de los productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en un fondo, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal conforme a las disposiciones fiscales, que hayan sido transferidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la citada entidad transferente, sobre bienes de la misma naturaleza; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en el fondo señalado en el párrafo anterior, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. Un mecanismo como el previsto en el presente párrafo, se podrá aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que, por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deba realizar. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el Instituto de Administración de Bienes y Activos remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados y a su Coordinadora de Sector, un informe que contenga el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las autoridades mencionadas en los párrafos citados.

Los ingresos netos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos se podrán destinar hasta en un 100 por ciento a financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como para el pago de los créditos que hayan sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, siempre que en el acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el convenio que al efecto se celebre se señale dicha situación. Lo anterior no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados a que se refiere el décimo tercer párrafo del artículo 13 de esta Ley. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes en proceso de extinción de dominio y de aquellos sobre los que sea declarada la extinción de dominio y de sus frutos, así como su monetización en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, serán destinados a una cuenta especial en los términos que establece el artículo 239 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 234 y 237 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por productos, así como de la concentración efectuada a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 12. Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2020 se concentrarán en términos del artículo 22 de la Ley de Tesorería de la Federación, salvo en los siguientes casos:

I. Se concentrarán en la Tesorería de la Federación, a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción, los derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, incluidos entre otros las sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, así como los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

II. Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional, sólo registrarán los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente de esta Ley, salvo por lo dispuesto en la fracción I de este artículo, y deberán conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos.

Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere esta fracción, se deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, de los informes avalados por el órgano interno de control o de la comisión respectiva del órgano de gobierno, según sea el caso, especificando los importes del impuesto al valor agregado que hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de los ingresos;

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

III. Las entidades de control indirecto deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en posibilidad de elaborar los informes trimestrales que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reflejen dentro de la Cuenta Pública Federal;

IV. Los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, podrán ser recaudados por las oficinas de los propios institutos o por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la Cuenta Pública Federal, y

V. Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio de la concentración en términos de la Ley de Tesorería de la Federación.

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere esta fracción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de que dichos ingresos hayan sido concentrados en la Tesorería de la Federación.

Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos.

Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se destinarán a las entidades o a las empresas productivas del Estado que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza. Las entidades o las empresas productivas del Estado podrán celebrar convenios de colaboración con la iniciativa privada.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.

Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en la fracción que les corresponda conforme al citado artículo.

Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de concentrar los recursos públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la Federación, en los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato análogo, así como aquellos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según su origen, y se podrán destinar a los fines que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento correspondiente. Asimismo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 6.62.01.04 del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes.

Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son accesorios.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán los netos que resulten de restar al ingreso percibido las erogaciones efectuadas para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a que se refiere el párrafo siguiente.

Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales son los recursos efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones procedentes

que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas. Con excepción de lo dispuesto en el séptimo párrafo de este artículo para los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, los ingresos netos a que se refiere este párrafo se enterarán o concentrarán, según corresponda, en la Tesorería de la Federación y deberán manifestarse tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo acciones, por la enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión de derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la desincorporación de entidades, se les podrá descontar un porcentaje, por concepto de gastos indirectos de operación, que no podrá ser mayor del 7 por ciento, a favor del Instituto de Administración de Bienes y Activos, cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la citada entidad, y se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos podrán destinarse para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente con la opinión favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, sin que sea necesario concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Estos recursos deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica.

Los pasivos a cargo de organismos descentralizados en proceso de desincorporación que tengan como acreedor al Gobierno Federal, con excepción de aquéllos que tengan el carácter de crédito fiscal, quedarán extinguidos de pleno derecho sin necesidad de autorización alguna, y los créditos quedarán cancelados de las cuentas públicas.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, podrán permanecer afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. No se considerará enajenación la transmisión de bienes y derechos al Fondo de Desincorporación de Entidades que, con la opinión favorable de dicha Comisión, efectúen las entidades en proceso de desincorporación, para concluir las actividades residuales del proceso respectivo.

Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos remanentes que les correspondan de dichos procesos ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, como parte de la estrategia de conclusión de los procesos de desincorporación de entidades, entre el Instituto de Administración de Bienes y Activos y las entidades cuyos procesos de desincorporación concluyeron, podrán ser utilizados por éste, para sufragar las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, relativo a la atención de encargos bajo su administración, cuando éstos sean deficitarios. Lo anterior, estará sujeto, al cumplimiento de las directrices que se emitan para tal efecto, así como a la autorización de la Junta de Gobierno del Instituto de Administración de Bienes y Activos, previa aprobación de los órganos colegiados competentes.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Los ingresos obtenidos por la venta de bienes asegurados a favor del Gobierno Federal, incluyendo numerario, cuya administración y destino hayan sido encomendados al Instituto de Administración de Bienes y Activos, en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, serán destinados a un fondo en los términos del artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 90, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Los ingresos provenientes de numerario y de la enajenación de bienes que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos, que hayan sido declarados abandonados por parte de las instancias competentes, distintos a los señalados en el párrafo décimo quinto del presente artículo y que se concentren a la Tesorería de la Federación, se considerarán aprovechamientos y se destinarán al financiamiento de las operaciones del Instituto, en términos de lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Lo

anterior sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 89, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

El numerario decomisado y los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y previa deducción de los gastos indirectos de operación que correspondan, se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al Fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, u otras políticas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la presente Ley.

Los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, serán integrados al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley citada.

Los ingresos provenientes de la enajenación que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos de vehículos declarados abandonados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha dependencia, se destinarán de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. De la cantidad restante a los permisionarios federales se les cubrirán los adeudos generados hasta con el treinta por ciento de los remanentes de los ingresos y el resto se enterará a la Tesorería de la Federación. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 14. Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, entre las que se comprende de manera enunciativa a las siguientes:

I. Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los términos de dichas disposiciones.

Artículo 15. Durante el ejercicio fiscal de 2020, los contribuyentes a los que se les impongan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del citado Código, independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente.

Cuando los contribuyentes a los que se les impongan multas por las infracciones señaladas en el párrafo anterior corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su caso, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación o se notifique la resolución provisional a que se refiere el artículo 53-B, primer párrafo, fracción I del citado Código, pero antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 53-B, los contribuyentes pagarán el 60 por ciento de la multa que les corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2020, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que adquieran el diésel o el biodiésel y sus mezclas, ingresos totales anuales para los efectos

del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos y que para determinar su utilidad puedan deducir dichos combustibles cuando los importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles, en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2, según corresponda al tipo de combustible, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante fiscal de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

1. El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o el biodiésel y sus mezclas, por el número de litros de diésel o de biodiésel y sus mezclas importados o adquiridos.

   En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.

2. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en dichas actividades, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en aduana del pedimento de importación o el precio consignado en el comprobante fiscal de adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas en las estaciones de servicio, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

III. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final en dichas actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la

fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de los artículos 74 y 75 del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2020 y enero de 2021.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diésel o de biodiésel y sus mezclas, en el que asienten mensualmente la totalidad del diésel o del biodiésel y sus mezclas que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diésel o el biodiésel y sus mezclas que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diésel o del biodiésel y sus mezclas utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de

las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de estos combustibles en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda según el tipo de combustible, conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el número de litros importados o adquiridos.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago por la importación o adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas a distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: monedero electrónico autorizado por el Servicio de Administración Tributaria; tarjeta de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante, o bien, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México.

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, se entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal, relacionados con sus actividades económicas, sin que por ello se genere un cobro..

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 300 millones de pesos, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura mencionada hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se realicen los gastos a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación del beneficio contenido en esta fracción.

VI. Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que en su proceso productivo no se destinen a la combustión.

El estímulo fiscal señalado en esta fracción será igual al monto que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda, por la cantidad del combustible consumido en un mes, que no se haya sometido a un proceso de combustión.

El monto que resulte conforme a lo señalado en el párrafo anterior únicamente podrá ser acreditado contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se adquieran los combustibles a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización del combustible no sujeto a un proceso de combustión por tipos de industria, respecto de los litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible de que se trate, adquiridos en un mes de calendario, así como las demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal.

VII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de pesos, consistente en permitir el acreditamiento del derecho especial sobre minería a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos que hayan pagado en el ejercicio de que se trate.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción, únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tengan los concesionarios o asignatarios mineros a su cargo, correspondiente al mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación de esta fracción.

VIII. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos, y que dichos ingresos obtenidos en el ejercicio por la enajenación de libros, periódicos y revistas represente al menos el 90% de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio de que se trate.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior consiste en una deducción adicional para los efectos del impuesto sobre la renta, por un monto equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente.

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV, V, VI y VII de este apartado quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto señalen.

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente apartado no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido en esta Ley.

Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos establecidos en la presente Ley.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno de ellos se establece en la presente Ley.

B. En materia de exenciones:

Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo.

Artículo 17. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el

Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a empresas productivas del Estado, organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza.

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.

Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 18. Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los tribunales administrativos, los órganos autónomos por disposición constitucional, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades, se deberán aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados de la dependencia en la Ley de Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados efectuados por dicha dependencia a la Tesorería de la Federación, en el periodo que corresponda.

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades.

Artículo 19. Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican de la siguiente manera:

I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se generan en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades relacionadas directamente con las funciones recurrentes de la institución.

II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades que no guardan relación directa con las funciones recurrentes de la institución.

III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con las atribuciones de la dependencia o entidad, tales como la recuperación de seguros, los donativos en dinero y la enajenación de bienes muebles.

IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como de los tribunales administrativos y de los órganos constitucionales autónomos. No se incluyen en esta fracción los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ni aquéllos por concepto de derechos y aprovechamientos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, los cuales se sujetan a lo dispuesto en el artículo 12, fracción I, de esta Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades a más tardar el último día hábil de enero de 2020 y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se modifiquen.

Los ingresos a que se refiere la fracción III de este artículo se aplicarán en los términos de lo previsto en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 20. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal de 2020 la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 1.45 por ciento. La metodología para calcular dicha tasa es la siguiente:

I. Se determinó la tasa de rendimiento promedio ponderado de los valores públicos por el periodo comprendido de febrero a julio de 2019, conforme a lo siguiente:

a) Se tomaron las tasas promedio mensuales por instrumento, de los valores públicos publicados por el Banco de México.

b) Se determinó el factor de ponderación mensual por instrumento, dividiendo las subastas mensuales de cada instrumento entre el total de las subastas de todos los instrumentos públicos efectuadas al mes.

c) Para calcular la tasa ponderada mensual por instrumento, se multiplicó la tasa promedio mensual de cada instrumento por su respectivo factor de ponderación mensual, determinado conforme al inciso anterior.

d) Para determinar la tasa ponderada mensual de valores públicos se sumó la tasa ponderada mensual por cada instrumento.

e) La tasa de rendimiento promedio ponderado de valores públicos correspondiente al periodo febrero a julio de 2019 se determinó con el promedio simple de las tasas ponderadas mensuales determinadas conforme al inciso anterior del mencionado periodo.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

II. Se tomaron las tasas promedio ponderadas mensuales de valores privados publicadas por el Banco de México y se determinó el promedio simple de dichos valores correspondiente al periodo de febrero a julio de 2019.

III. Se determinó un factor ponderado de los instrumentos públicos y privados en función al saldo promedio en circulación de los valores públicos y privados correspondientes al periodo de febrero a julio de 2019 publicados por el Banco de México.

IV. Para obtener la tasa ponderada de instrumentos públicos y privados, se multiplicaron las tasas promedio ponderadas de valores públicos y privados, determinados conforme a las fracciones I y II, por su respectivo factor de ponderación, determinado conforme a la fracción anterior, y posteriormente se sumaron dichos valores ponderados.

V. Al valor obtenido conforme a la fracción IV se disminuyó el valor promedio de la inflación mensual interanual del índice general correspondiente a cada uno de los meses del periodo de febrero a julio de 2019 del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

VI. La tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el valor obtenido conforme a la fracción V de este artículo por la tasa correspondiente al último tramo de la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 22. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por el incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades competentes, con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de 1 hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con base en los criterios que se establezcan para tal efecto, los cuales podrán considerar, entre otros, los días de atraso en la atención de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los requerimientos que se hubieran incumplido, o la probable afectación de los intereses patrimoniales de los clientes o usuarios de los servicios financieros.

Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al terrorismo, cometidas por las entidades financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y asesores en inversiones, serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y

de Valores con multa del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del reporte de la operación inusual que no se hubiera enviado, del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario de la que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas conforme a las disposiciones señaladas anteriormente, o bien con multa equivalente en moneda nacional de 10 hasta 100,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el caso de cualquier otro incumplimiento a las referidas disposiciones.

Artículo 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios que, en su caso, corresponda a las actividades mencionadas, mediante la aplicación del esquema de estímulos siguiente:

I. Calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma siguiente:

a) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado en el bimestre de que se trate, considerando el giro o actividad a la que se dedique el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

	Sector económico	Porcentaje IVA (%)
1	Minería	8.0
2	Manufacturas y/o construcción	6.0
3	Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles)	2.0
4	Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares en que se proporcionen servicios de alimentos y bebidas)	8.0
5	Negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y/o medicinas	0.0

Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores económicos mencionados en los numerales 1 a 4 aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante. Se entiende por sector preponderante aquél de donde provenga la mayor parte de los ingresos del contribuyente.

b) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios en el bimestre de que se trate, considerando el tipo de bienes enajenados por el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar

Descripción	Porcentaje IEPS (%)
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea comercializador)	1.0
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea fabricante)	3.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea comercializador)	10.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea fabricante)	21.0
Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante)	4.0
Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante)	10.0
Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador)	1.0
Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el contribuyente sea fabricante)	23.0
Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante)	120.0

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo, cuando hayan pagado el impuesto especial sobre producción y servicios en la importación de tabacos labrados y bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos C) y G) de la Ley del

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, considerarán dicho pago como definitivo, por lo que ya no pagarán el impuesto que trasladen en la enajenación de los bienes importados, siempre que dicha enajenación se efectúe con el público en general.

c) El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta fracción será el monto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios, en su caso, a pagar por las actividades realizadas con el público en general, sin que proceda acreditamiento alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente.

d) El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios deberá realizarse por los períodos y en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades realizadas con el público en general, aquéllas por las que se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado.

Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su deducción o acreditamiento, en donde se traslade en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, dichos impuestos deberán pagarse en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones aplicables, conjuntamente con el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios determinado conforme al inciso c) de esta fracción.

Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios será aplicable, cuando proceda, en la proporción que represente el valor de las actividades por las que se expidieron comprobantes fiscales en las que se haya efectuado el traslado expreso y por separado, en el valor total de las actividades del bimestre que corresponda.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta fracción podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso deberán calcular y pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según se trate, a partir del bimestre en que abandonen la opción. En este caso, los contribuyentes no podrán volver a ejercer la opción prevista en el presente artículo.

II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las actividades realizadas con el público en general en las que determinen el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios con el esquema de porcentajes a que se refiere la fracción I del presente artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente:

a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según corresponda al número de años que tenga el contribuyente tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal:

TABLA

Años	Porcentaje de reducción (%)
1	100
2	90
3	80
4	70
5	60
6	50
7	40
8	30
9	20
10	10

Para los efectos de la aplicación de la tabla el número de años de tributación del contribuyente se determinará de conformidad con lo que al respecto se considere para los efectos del impuesto sobre la renta.

Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, cuyos ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran

excedido de la cantidad de trescientos mil pesos, durante cada uno de los años en que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será de 100 por ciento.

Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por tributar conforme al Régimen de Incorporación Fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán al monto establecido en dicho párrafo. Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto referido, en el ejercicio siguiente no se podrá tomar el beneficio del párrafo anterior.

b) La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de reducción a que se refiere el inciso anterior será acreditable únicamente contra el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, según se trate, determinado conforme a la aplicación de los porcentajes a que se refiere la fracción I de este artículo.

III. El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo no se considerará como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

IV. Se releva a los contribuyentes a que se refiere este artículo de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 24. Para los efectos del impuesto sobre la renta, se estará a lo siguiente:

I. Las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, siempre que dichos apoyos económicos o monetarios se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran zonas afectadas los municipios de los Estados afectados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que se listen en las declaratorias de desastre natural correspondientes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

II. Para los efectos de los artículos 82, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 138 de su Reglamento, se considera que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de dicha Ley, cumplen con el objeto social autorizado para estos efectos, cuando otorguen donativos a organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y cuyo objeto exclusivo sea realizar labores de rescate y reconstrucción en casos de desastres naturales, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos, se deberá cumplir con lo siguiente:

1. Contar con autorización vigente para recibir donativos al menos durante los 5 años previos al momento en que se realice la donación, y que durante ese periodo la autorización correspondiente no haya sido revocada o no renovada.

2. Haber obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior cuando menos de 5 millones de pesos.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

3. Auditar sus estados financieros.

4. Presentar un informe respecto de los donativos que se otorguen a organizaciones o fideicomisos que no tengan el carácter de donatarias autorizadas que se dediquen a realizar labores de rescate y reconstrucción ocasionados por desastres naturales.

5. No otorgar donativos a partidos políticos, sindicatos, instituciones religiosas o de gobierno.

6. Presentar un listado con el nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de las organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con la autorización para recibir donativos a las cuales se les otorgó el donativo.

b) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos, a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán cumplir con lo siguiente:

1. Estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

2. Comprobar que han efectuado operaciones de atención de desastres, emergencias o contingencias por lo menos durante 3 años anteriores a la fecha de recepción del donativo.

3. No haber sido donataria autorizada a la que se le haya revocado o no renovado la autorización.

4. Ubicarse en alguno de los municipios o en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de las zonas afectadas por el desastre natural de que se trate.

5. Presentar un informe ante el Servicio de Administración Tributaria, en el que se detalle el uso y destino de los bienes o recursos recibidos, incluyendo una relación de los folios de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y la documentación con la que compruebe la realización de las operaciones que amparan dichos comprobantes.

6. Devolver los remanentes de los recursos recibidos no utilizados para el fin que fueron otorgados a la donataria autorizada.

7. Hacer pública la información de los donativos recibidos en su página de Internet o, en caso de no contar con una, en la página de la donataria autorizada.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de esta fracción.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Capítulo III
De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento

Artículo 25. Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la

información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.

La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 de marzo de 2020.

Artículo 26. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresividad.

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Artículo 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores lo siguiente:

A. El Presupuesto de Gastos Fiscales, a más tardar el 30 de junio de 2020, que comprenderá los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2021 en los siguientes términos:

I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el Erario Federal.

II. La metodología utilizada para realizar la estimación.

III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida.

IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso.

V. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales.

B. Un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, a más tardar el 30 de septiembre de 2020, en el que se deberá señalar, para cada una la siguiente información:

I. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de nacionales.

II. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de extranjeros.

III. Ingresos por donativos recibidos en especie de nacionales.

IV. Ingresos por donativos recibidos en especie de extranjeros.

V. Ingresos obtenidos por arrendamiento de bienes.

VI. Ingresos obtenidos por dividendos.

VII. Ingresos obtenidos por regalías.

VIII. Ingresos obtenidos por intereses devengados a favor y ganancia cambiaria.

IX. Otros ingresos.

X. Erogaciones efectuadas por sueldos, salarios y gastos relacionados.

XI. Erogaciones efectuadas por aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y jubilaciones por vejez.

XII. Erogaciones efectuadas por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

XIII. Gastos administrativos.

XIV. Gastos operativos.

XV. Monto total de percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos.

El reporte deberá incluir las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los conceptos contenidos en los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en su Reglamento.

C. Para la generación del reporte a que se refiere el Apartado B de este artículo, la información se obtendrá de aquélla que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración de las personas morales con fines no lucrativos correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La información sobre los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos a que se refiere el Apartado B de este artículo, se obtendrá de los datos reportados a más tardar el 31 de julio de 2020, en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en la Sección de Transparencia de Donatarias Autorizadas correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a que se refiere el artículo 82, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se entenderá por gastos administrativos y operativos lo siguiente:

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

I. Gastos administrativos: los relacionados con las remuneraciones al personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento y conservación, los impuestos y derechos federales o locales, así como las demás contribuciones y aportaciones que en términos de las disposiciones legales respectivas deba cubrir la donataria siempre que se efectúen en relación directa con las oficinas o actividades administrativas, entre otros. No quedan comprendidos aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

II. Gastos operativos: aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

La información a que se refieren los Apartados B y C de este artículo, no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2o., fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Artículo 28. En el ejercicio fiscal de 2020, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente:

I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes.

II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.

III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización.

IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años. Se deberá entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de Diputados.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020, salvo lo dispuesto en el transitorio Séptimo, el cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto, mismo que será aplicable en el ejercicio fiscal de 2019 respecto de los recursos que las entidades federativas y municipios hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación en dicho ejercicio, correspondientes a ejercicios fiscales de 2017 y 2018.

Segundo. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se refiere el informe que, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha rendido el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2019.

Tercero. Para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se modifique la denominación de alguna dependencia o entidad o las existentes desaparezcan, se entenderá que los ingresos estimados para éstas en la presente Ley corresponderán a las dependencias o entidades cuyas denominaciones hayan cambiado o que absorban las facultades de aquéllas que desaparezcan, según corresponda.

Cuarto. Durante el ejercicio fiscal de 2020 el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013 continuará destinándose en los términos del citado precepto.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Quinto. Durante el ejercicio fiscal 2020 las referencias que en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, así como en los artículos 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos se entenderán hechas también al Servicio de Administración Tributaria.

Sexto. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales la información sobre los ingresos excedentes que, en su caso, se hayan generado con respecto al calendario de ingresos derivado de la Ley de Ingresos de la Federación a que se refiere el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En este reporte se presentará la comparación de los ingresos propios de las entidades paraestatales bajo control presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado, así como del Gobierno Federal. En el caso de éstos últimos se presentará lo correspondiente a los ingresos provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Séptimo. Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado. Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas, así como la atención de desastres naturales.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Para efectos de lo anterior, los aprovechamientos provenientes de los enteros que realicen las entidades federativas y municipios en términos del presente transitorio, respecto de ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor de las obligaciones de reintegro a la Tesorería de la Federación establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras, siempre y cuando dichas disponibilidades hayan estado depositadas en cuentas bancarias de la entidad federativa y/o municipio.

Octavo. En el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria deberá publicar estudios sobre la evasión fiscal en México. En la elaboración de dichos estudios deberán participar instituciones académicas de prestigio en el país, instituciones académicas extranjeras, centros de investigación, organismos o instituciones nacionales o internacionales que se dediquen a la investigación o que sean especialistas en la materia. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y

Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio fiscal de 2020.

Noveno. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante el ejercicio fiscal 2020 y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requerirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de los pagos a que se refiere el párrafo anterior con cargo a las participaciones y transferencias federales, garantizando que las entidades federativas cuenten con solvencia para la atención de sus necesidades primordiales.

El Instituto, conforme a los modelos autorizados por su órgano de gobierno, podrá suscribir con las entidades federativas y, en su caso, los municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales que correspondan, los convenios para la regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos. El plazo máximo para cubrir los pagos derivados de dicha regularización será de 15 años. Asimismo, en adición a lo previsto en artículo 22 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el marco de la celebración de los referidos convenios, dicho Instituto deberá otorgar descuentos en los accesorios generados a las contribuciones adeudadas excepto los correspondientes a las cuotas y aportaciones que deban ser depositadas en las cuentas individuales de los trabajadores. Para tal efecto, deberán adecuar los convenios de incorporación voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para incluir en el mismo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 204 de dicha Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá aceptar como fuente de pago bienes inmuebles que se considerarán como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse a las cuentas individuales de los trabajadores. El Instituto determinará si los bienes a los que se refiere este párrafo, resultan funcionales para el cumplimiento de su objeto, asegurándose que se encuentren libres de cualquier gravamen o proceso judicial y que el monto del adeudo no sea mayor al valor del avalúo efectuado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. En estos casos, la entidad federativa, municipio, dependencia o entidad del gobierno local, según

corresponda, deberá cubrir los gravámenes y demás costos de la operación respectiva, los cuales no computarán para el cálculo del importe del pago.

Décimo. Las dependencias y entidades que coordinen la operación de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos, salvo los que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concentrarán en la Tesorería de la Federación, en términos de las disposiciones específicas que emita, los recursos públicos disponibles no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 en dichos vehículos, salvaguardando en todo momento los derechos de terceros.

Los aprovechamientos que se generen se destinarán a gasto de inversión así como a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Los programas de inversión deberán registrarse en la cartera de inversión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior no será obligatorio a los instrumentos jurídicos que por disposición expresa de ley los recursos públicos deban permanecer en el patrimonio o afectos a los mismos, así como a aquéllos en materia de pensiones y seguridad social, desastres naturales, infraestructura, estabilización de ingresos incluyendo al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y aquéllos que sirvan como mecanismo de garantía o fuente de pago de obligaciones a cargo del Gobierno Federal o sus entidades paraestatales.

Dicha dependencia deberá señalar en los informes trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas, sobre el monto y el destino que dé a los recursos utilizados conforme a lo previsto en este párrafo.

Asimismo, las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, un informe de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos susceptibles de extinguirse en términos de las disposiciones aplicables, lo anterior a efecto de que durante el ejercicio fiscal 2020 se lleven a cabo los actos necesarios para la extinción de dichos vehículos.

Décimo Primero. Los contratos de fideicomiso y mandato públicos deberán prever que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá disponer en cualquier momento del patrimonio de éstos, asimismo, deberán establecer la obligación de las instituciones fiduciarias o mandatarias, de concentrar trimestralmente en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos, los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado para el cumplimiento de su objeto, salvo disposición de carácter general en contrario.

Las instituciones fiduciarias o mandatarias de fideicomisos, mandatos o análogos públicos, deberán concentrar de forma trimestral en la Tesorería de la Federación los intereses generados por dichos instrumentos financieros, salvo aquéllos que impliquen el pago de gastos de operación de dichos vehículos, bajo la naturaleza de aprovechamientos, y se destinarán a gasto en salud o de inversión en infraestructura, lo anterior con excepción de aquellos vehículos financieros que por disposición expresa de ley, decreto o determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dichos recursos deban permanecer afectos a su patrimonio o destinados al objeto correspondiente. Para efectos de lo anterior, las dependencias coordinadoras de dichos vehículos deberán realizar los actos necesarios para modificar en el primer semestre del ejercicio fiscal los instrumentos jurídicos respectivos.

Décimo Segundo. Se instruye a la institución fiduciaria del fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria para que durante el mes de marzo del presente ejercicio, concentre en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos los recursos que integran el patrimonio fideicomitido a esa fecha a fin de destinarlos, mediante el mecanismo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a proyectos de inversión de infraestructura económica para la construcción, ampliación o rehabilitación de puertos, así como para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros que mejoren la conectividad entre los puertos.

Para efectos de lo anterior, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el citado fideicomiso no podrá asumir compromisos adicionales y únicamente podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción, la cual deberá formalizarse a más tardar en el mes de junio del presente ejercicio fiscal. Las obligaciones asumidas que se tengan con terceros, serán cubiertas con cargo al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Décimo Tercero. Durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2020, la institución fiduciaria del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados deberá concentrar en la Tesorería de la Federación los recursos remanentes previstos en su patrimonio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, o bien, para los destinos establecidos en el Séptimo transitorio de esta Ley.

Décimo Cuarto.- Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Comisión Federal de Electricidad podrá implementar programas de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica de entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y organismos públicos prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos, a través de la celebración de convenios con cualquiera de las personas morales de la administración pública antes mencionadas.

Los programas serán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 y se implementarán a través de la celebración de convenios a los que se refiere el párrafo anterior, se sujetarán, sin perjuicio de las demás disposiciones jurídicas aplicables, a las reglas de operación que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las cuales podrán considerar las características del solicitante, pudiéndose condonar el pago de hasta el 50 por ciento del adeudo, y que el resto de éste sea cubierto mediante parcialidades, y en caso de incumplimiento, los convenios permitirán que la Comisión Federal de Electricidad pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la compensación parcial a cargo de las partidas federales que le correspondan a las entidades federativas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y las disposiciones derivadas de éste, previendo que las entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México cuenten con solvencia para la atención de sus requerimientos de gasto público.

Décimo Quinto. Para efectos de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo de ocho meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos aplicables, a efecto de solucionar la problemática de la posesión de vehículos importados usados localizados en el territorio nacional que no hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Décimo Sexto. Con el fin de promover el saneamiento de los créditos adeudados por concepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos y sus accesorios, con excepción de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, por parte de Entidades Federativas, Municipios y Organismos Descentralizados que estén excluidas o no comprendidas en leyes o decretos como sujetos de aseguramiento, se autoriza al Instituto Mexicano del Seguro Social durante el Ejercicio Fiscal de 2020 a suscribir convenios de pago en parcialidades a un plazo máximo de hasta 6 años.

Para tal efecto, las participaciones que con cargo al Fondo General de Participaciones corresponda recibir a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, servirán como fuente de pago de los importes convenidos, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retendrá el monto correspondiente a las parcialidades determinadas en los convenios y realizará el entero directo de dichos importes al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizando con ello la adecuada financiación de los servicios de salud y seguridad social.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 30 de octubre de 2019

Dip. Marco Antonio Adame Castillo
Vicepresidente

Dip. Ma. Sara Rocha Medina
Secretaria

Se devuelve a la Cámara de Senadores
para efectos de la fracción E del
artículo 72 Constitucional
Minuta CD-LXIV-II-1P-096
Ciudad de México, a 30 de octubre de 2019

Lic. Hugo Christian Rosas de León
Secretario de Servicios Parlamentarios

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXIV LEGISLATURA
OF. No. D.G.P.L. 64-II-1-1345
Exp. 4353

OFICIO
30 OCT 9 35
CAMARA DE SENADORES
SECRETARIA GENERAL DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS
011693

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s e n t e s .

En sesión celebrada en esta fecha la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo que a continuación se transcribe:

"Único.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, manifiesta su acuerdo para que la Cámara de Senadores, como Cámara revisora, remita al Ejecutivo Federal el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, sólo en lo que ha sido aprobado por ambas Cámaras".

Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar.

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2019.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Dip. Marco Antonio Adame Castillo
Vicepresidente

*lmv**

05-11-2019
Cámara de Senadores.
DISCUSIÓN del Artículo Décimo Quinto Transitorio del proyecto de decreto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.
No es Aprobado en lo general y en lo particular, el Artículo Décimo Quinto Transitorio, por 3 votos en pro, 108 en contra y 0 abstenciones.
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates 5 de noviembre de 2019.
Discusión y votación 5 de noviembre de 2019.

DISCUSIÓN DEL ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO DEL PROYECTO DE DECRETO DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesión Pública Ordinaria Celebrada en la Ciudad de México, el 05 de Noviembre de 2019

Hago de su conocimiento que se recibió de la Cámara de Diputados un oficio con el que remite minuta proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2020, devuelta para los efectos de la tercera hipótesis normativa de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Al respecto, informo que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 el 17 de octubre pasado y lo remitió al Senado de la República para los efectos constitucionales correspondientes.

Por su parte, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, en sesión del 24 de octubre de 2019 y, en virtud de que se introdujeron modificaciones al proyecto, se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Finalmente, la Cámara de Diputados, en su sesión de fecha 30 de octubre de 2019 aprobó las modificaciones y adiciones realizadas por el Senado de la República, contenidas en su minuta con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020; sin embargo, insistió en conservar el Artículo Décimo Quinto Transitorio de su proyecto de ley original, por lo que devolvió el asunto a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales aplicables.

En consecuencia, la minuta devuelta por la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional mantiene su propuesta original en el Artículo Décimo Quinto Transitorio del proyecto de ley, que se refiere a la problemática de la posesión de vehículos importados usados, localizados en el territorio nacional, dicho artículo fue eliminado por esta Asamblea.

En consecuencia, procede poner a discusión, únicamente, el Artículo Décimo Quinto Transitorio del proyecto de ley y votar si se acepta la propuesta de la Cámara de Diputados o se insiste en la eliminación del texto de dicho Artículo Transitorio, tal y como lo aprobó esta Cámara de Senadores en su sesión plenaria de fecha 24 de octubre de 2019.

En caso de aceptarse la propuesta de la Cámara de Diputados, el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 tendría un total de 16 Artículos Transitorios.

En caso contrario, si esta Asamblea mantiene su decisión de eliminar dicho Artículo Décimo Quinto Transitorio se estaría en lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional, que establece, en su parte conducente:

Cito: “Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueran reprobadas por la mayoría de los votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de esta.

Y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas al proyecto en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción a)”. Fin de la cita.

A su vez, se informa a la Asamblea que el proyecto viene acompañado de un Acuerdo de la Colegisladora, en donde da su anuencia para que la Cámara de Senadores como Cámara revisora remita al Ejecutivo Federal el Decreto, por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, solo en lo que ha sido aprobado por ambas cámaras.

Procederemos ahora a desahogar el trámite de la minuta que nos ha devuelto la Cámara de Diputados.

Sobre el particular, la Mesa Directiva en su reunión de hoy acordó consultar a la Asamblea si el asunto en referencia se le dispensan todos los trámites para ponerlo a discusión de inmediato.

Por lo anterior, antes de someter a consideración si se dispensan los trámites, sonido al escaño de la Senadora Alejandra León Gastélum.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: (Desde su escaño) Quiero, ante este Pleno, hacer público mi reproche al exceso de la fuerza pública que se utilizó en la caseta de peaje de Malpasito y en donde resultaron muertas tres personas, argumentando en defensa propia.

Y lamentar los hechos ocurridos en Chihuahua y Sonora sobre el cruel atentado y la matanza a la familia LeBarón, creo que en una parte hay ausencia de seguridad y en otra, hay un exceso de la fuerza pública.

Es cuanto.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Su intervención quedará registrada en el apartado correspondiente.

Vamos a continuar con el trámite en el que estamos y, por lo anterior, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si con fundamento en los artículos 95 y 175 del Reglamento del Senado, la Asamblea autoriza que el asunto se considere de urgente resolución y se le dispensen todos los trámites para proceder a su discusión de inmediato.

La Secretaria Senadora Citlalli Hernández Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que el asunto descrito se considere de urgente resolución y se le dispensen todos los trámites para ponerlo a discusión. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Al respecto, es importante aclarar que toda vez que el presente asunto que se somete a consideración del Pleno consta de un solo artículo, el mismo se debatirá y votará en lo general y en lo particular en un solo acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198, numeral 2 del Reglamento del Senado de la República.

En consecuencia, está a discusión, en lo general y en lo particular el Artículo Décimo Quinto Transitorio del proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, contenido en la minuta devuelta por la Colegisladora.

Al no haber oradoras ni oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria Senadora Citlalli Hernández Mora: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general y en lo particular, señora Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Con fundamento en el artículo 200 del Reglamento del Senado, se procederá a recoger la votación del Artículo Décimo Quinto Transitorio del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Para efectos de la votación del presente asunto, informo a la Asamblea que el voto por la afirmativa sería por aprobar que el Artículo Décimo Quinto Transitorio propuesto por la Cámara de Diputados se mantenga en el proyecto de Decreto.

El voto por la negativa sería por no aprobar el Artículo Décimo Quinto Transitorio propuesto por la Colegisladora y que el Senado de la República eliminó en su fase de revisión constitucional.

Voy a repetirlo para que no haya lugar a dudas.

El voto por la afirmativa sería por aprobar el Artículo Décimo Quinto Transitorio propuesto por la Cámara de Diputados para que se mantenga en el proyecto de Decreto.

El voto por la negativa sería por no aprobar el Artículo Décimo Quinto Transitorio propuesto por la Colegisladora y que el Senado de la República eliminó en su fase de revisión constitucional.

En consecuencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.

(VOTACIÓN)

La Secretaria Senadora Citlalli Hernández Mora: Pregunto si falta algún Senador o Senadora de emitir su voto.

Senadora Susana. Senadora Verónica. Sigue abierto el sistema de votación.

Senadora Imelda. Algún otro Senador o Senadora que falta de emitir su voto.

Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 3 votos a favor y 108 en contra.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: No se aprueba el Artículo Décimo Quinto Transitorio al proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, propuesto por la Colegisladora. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Con base en lo anterior, el proyecto de Decreto se ubica en el supuesto previsto en la fracción E del artículo 72 constitucional, que establece la posibilidad de que en la segunda revisión se desechen las adiciones o reformas propuestas por la Cámara de Diputados como Cámara de origen, en cuyo caso, el proyecto en lo que haya sido aprobado por ambas Cámara, **se remitirá al Ejecutivo Federal para los efectos de la fracción A de la disposición antes referida.**

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DECRETO por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Artículo Único. Se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

Capítulo I

De los Ingresos y el Endeudamiento Público

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos que a continuación se enumeran:

CONCEPTO	Ingreso Estimado
TOTAL	**6,107,732.4**
1. Impuestos	**3,505,822.4**
11. Impuestos Sobre los Ingresos:	1,852,852.3
01. Impuesto sobre la renta.	1,852,852.3
12. Impuestos Sobre el Patrimonio.	
13. Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones:	1,534,055.8
01. Impuesto al valor agregado.	1,007,546.0
02. Impuesto especial sobre producción y servicios:	515,733.5
01. Combustibles automotrices:	342,053.6
01. Artículo 2o., fracción I, inciso D).	313,321.0
02. Artículo 2o.-A.	28,732.6
02. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:	62,165.7
01. Bebidas alcohólicas.	18,888.4
02. Cervezas y bebidas refrescantes.	43,277.3
03. Tabacos labrados.	43,679.4
04. Juegos con apuestas y sorteos.	2,968.8
05. Redes públicas de telecomunicaciones.	5,923.3
06. Bebidas energetizantes.	11.6
07. Bebidas saborizadas.	28,660.5
08. Alimentos no básicos con alta densidad calórica.	23,783.2
09. Plaguicidas.	758.1
10. Combustibles fósiles.	5,729.3
03. Impuesto sobre automóviles nuevos.	10,776.3
14. Impuestos al Comercio Exterior:	70,984.6
01. Impuestos al comercio exterior:	70,984.6
01. A la importación.	70,984.6
02. A la exportación.	0.0
15. Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables.	

	16.	Impuestos Ecológicos.	
	17.	Accesorios de impuestos:	41,210.2
		01. Accesorios de impuestos.	41,210.2
	18.	Otros impuestos:	6,850.3
		01. Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.	6,850.3
		02. Impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación.	0.0
	19.	Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	-130.8
2.	**Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social**		**374,003.2**
	21.	Aportaciones para Fondos de Vivienda.	0.0
		01. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.	0.0
	22.	Cuotas para la Seguridad Social.	374,003.2
		01. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores.	374,003.2
	23.	Cuotas de Ahorro para el Retiro.	0.0
		01. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a cargo de los patrones.	0.0
	24.	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social:	0.0
		01. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores.	0.0
		02. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares.	0.0
	25.	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social.	0.0
3.	**Contribuciones de Mejoras**		**44.8**
	31.	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas:	44.8
		01. Contribución de mejoras por obras públicas de infraestructura hidráulica.	44.8
	39.	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0.0
4.	**Derechos**		**51,671.8**
	41.	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público:	42,740.8
		01. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	346.2
		02. Secretaría de la Función Pública.	0.0
		03. Secretaría de Economía.	2,670.7
		04. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	8,748.2
		05. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	11,776.9
		06. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	72.3
		07. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	0.0
		08. Secretaría de Educación Pública.	0.2
		09. Instituto Federal de Telecomunicaciones.	19,126.3
		10. Secretaría de Cultura.	0.0

43.	Derechos por Prestación de Servicios:			8,931.0
	01.	Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público:		8,931.0
		01.	Secretaría de Gobernación.	91.1
		02.	Secretaría de Relaciones Exteriores.	4,915.0
		03.	Secretaría de la Defensa Nacional.	145.5
		04.	Secretaría de Marina.	445.0
		05.	Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	588.6
		06.	Secretaría de la Función Pública.	23.0
		07.	Secretaría de Energía.	0.2
		08.	Secretaría de Economía.	21.9
		09.	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.	42.9
		10.	Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	1,081.6
		11.	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.	85.1
			01. Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
			02. Otros.	85.1
		12.	Secretaría de Educación Pública.	1,255.9
		13.	Secretaría de Salud.	0.0
		14.	Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	9.4
		15.	Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.	61.1
		16.	Secretaría de Turismo.	0.0
		17.	Fiscalía General de la República.	0.0
		18.	Instituto Federal de Telecomunicaciones.	30.1
		19.	Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0
		20.	Comisión Reguladora de Energía.	0.0
		21.	Comisión Federal de Competencia Económica.	0.0
		22.	Secretaría de Cultura.	58.4
		23.	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.	76.2
44.	Otros Derechos.			0.0
45.	Accesorios de Derechos.			0.0
49.	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.			0.0
5.	**Productos**			**10,095.3**
51.	Productos.			10,095.3
	01.	Por los servicios que no correspondan a funciones de derecho público.		8.8
	02.	Derivados del uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público:		10,086.5
		01.	Explotación de tierras y aguas.	0.0
		02.	Arrendamiento de tierras, locales y construcciones.	0.3
		03.	Enajenación de bienes:	1,859.6
			01. Muebles.	1,743.5
			02. Inmuebles.	116.1
		04.	Intereses de valores, créditos y bonos.	7,687.4

			05.	Utilidades:	539.1
				01. De organismos descentralizados y empresas de participación estatal.	0.0
				02. De la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.	0.0
				03. De Pronósticos para la Asistencia Pública.	538.6
				04. Otras.	0.5
			06.	Otros.	0.1
		59.	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.		0.0
6.	**Aprovechamientos**				**103,674.4**
	61.	Aprovechamientos:			103,639.0
		01.	Multas.		2,190.5
		02.	Indemnizaciones.		2,531.7
		03.	Reintegros:		166.5
			01.	Sostenimiento de las escuelas artículo 123.	0.0
			02.	Servicio de vigilancia forestal.	0.1
			03.	Otros.	166.4
		04.	Provenientes de obras públicas de infraestructura hidráulica.		94.8
		05.	Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre herencias y legados expedidas de acuerdo con la Federación.		0.0
		06.	Participaciones en los ingresos derivados de la aplicación de leyes locales sobre donaciones expedidas de acuerdo con la Federación.		0.0
		07.	Aportaciones de los Estados, Municipios y particulares para el servicio del Sistema Escolar Federalizado.		0.0
		08.	Cooperación de la Ciudad de México por servicios públicos locales prestados por la Federación.		0.0
		09.	Cooperación de los Gobiernos de Estados y Municipios y de particulares para alcantarillado, electrificación, caminos y líneas telegráficas, telefónicas y para otras obras públicas.		0.0
		10.	5 por ciento de días de cama a cargo de establecimientos particulares para internamiento de enfermos y otros destinados a la Secretaría de Salud.		0.0
		11.	Participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía eléctrica.		947.8
		12.	Participaciones señaladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos.		1,129.7
		13.	Regalías provenientes de fondos y explotación minera.		0.0
		14.	Aportaciones de contratistas de obras públicas.		7.6
		15.	Destinados al Fondo para el Desarrollo Forestal:		0.5
			01.	Aportaciones que efectúen los Gobiernos de la Ciudad de México, Estatales y Municipales, los organismos y entidades públicas, sociales y los particulares.	0.0
			02.	De las reservas nacionales forestales.	0.0
			03.	Aportaciones al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.	0.0
			04.	Otros conceptos.	0.5

	16.	Cuotas Compensatorias.		142.4
	17.	Hospitales Militares.		0.0
	18.	Participaciones por la explotación de obras del dominio público señaladas por la Ley Federal del Derecho de Autor.		0.0
	19.	Provenientes de decomiso y de bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal.		0.0
	20.	Provenientes del programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras.		0.0
	21.	No comprendidos en los incisos anteriores provenientes del cumplimiento de convenios celebrados en otros ejercicios.		0.0
	22.	Otros:		96,427.5
		01.	Remanente de operación del Banco de México.	0.0
		02.	Utilidades por Recompra de Deuda.	0.0
		03.	Rendimiento mínimo garantizado.	0.0
		04.	Otros.	96,427.5
	23.	Provenientes de servicios en materia energética:		0.0
		01.	Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.	0.0
		02.	Comisión Nacional de Hidrocarburos.	0.0
		03.	Comisión Reguladora de Energía.	0.0
	62.	Aprovechamientos Patrimoniales.		35.4
		01.	Recuperaciones de capital:	35.4
			01. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de Entidades Federativas y empresas públicas.	27.6
			02. Fondos entregados en fideicomiso, a favor de empresas privadas y a particulares.	7.8
			03. Inversiones en obras de agua potable y alcantarillado.	0.0
			04. Desincorporaciones.	0.0
			05. Otros.	0.0
	63.	Accesorios de Aprovechamientos.		0.0
	69.	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.		0.0
7.	**Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos**			**1,065,166.0**
	71.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social:		72,232.9
		01.	Instituto Mexicano del Seguro Social.	26,920.2
		02.	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.	45,312.7
	72.	Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado:		992,933.1
		01.	Petróleos Mexicanos.	574,535.0
		02.	Comisión Federal de Electricidad.	418,398.1
	73.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros.		
	74.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria.		

	75.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.		
	76.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria.		
	77.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria.		
	78.	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos.		
	79.	Otros Ingresos.		
8.	**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones**			
	81.	Participaciones.		
	82.	Aportaciones.		
	83.	Convenios.		
	84.	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal.		
	85.	Fondos Distintos de Aportaciones.		
9.	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**			**412,797.7**
	91.	Transferencias y Asignaciones.		0.0
	93.	Subsidios y Subvenciones.		0.0
	95.	Pensiones y jubilaciones.		0.0
	97.	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.		412,797.7
		01.	Ordinarias.	412,797.7
		02.	Extraordinarias.	0.0
0.	**Ingresos Derivados de Financiamientos**			**584,456.8**
	01.	Endeudamiento interno:		569,582.1
		01.	Endeudamiento interno del Gobierno Federal.	532,266.1
		02.	Otros financiamientos:	37,316.0
			01. Diferimiento de pagos.	37,316.0
			02. Otros.	0.0
	02.	Endeudamiento externo:		0.0
		01.	Endeudamiento externo del Gobierno Federal.	0.0
	03.	Financiamiento Interno.		
	04.	Déficit de organismos y empresas de control directo.		-47,748.8
	05.	Déficit de empresas productivas del Estado.		62,623.5
Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal (0.01.01+0.02.01)				532,266.1

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este precepto.

Se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal de 2020, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

El Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos.

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio fiscal de 2020, se proyecta una recaudación federal participable por 3 billones 394 mil 236.7 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal de 2020, el gasto de inversión del Gobierno Federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto.

Se estima que durante el ejercicio fiscal de 2020, en términos monetarios, el pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, previsto en la Ley que establece, reforma y adiciona las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de 2 mil 895.1 millones de pesos.

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Con el objeto de que el Gobierno Federal continúe con la labor reconocida en el artículo Segundo Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004, y a fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo a que se refiere dicho Transitorio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados.

En caso de que con base en las acciones o esquemas que se instrumenten conforme al párrafo que antecede sea necesaria la transmisión, administración o enajenación, por parte del Ejecutivo Federal, de los bienes y derechos del fideicomiso referido en el primer párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo anterior, las operaciones respectivas, en numerario o en especie, se registrarán en cuentas de orden, con la finalidad de no afectar el patrimonio o activos de los entes públicos federales que lleven a cabo esas operaciones.

El producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos a que se refiere el artículo Segundo Transitorio del Decreto indicado en el párrafo precedente, se destinará en primer término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las operaciones referidas en el párrafo anterior y, posteriormente, se destinarán para restituir al Gobierno Federal los recursos públicos aportados para el resarcimiento de los ahorradores afectados a que se refiere dicho precepto.

Los recursos que durante el ejercicio fiscal de 2020 se destinen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en términos de las disposiciones aplicables, podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que, a fin de mitigar la disminución en participaciones federales del ejercicio fiscal de 2020, se instrumenten para potenciar los recursos que, con cargo a dicho fondo, reciben las entidades federativas.

Hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno Federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local ni la inscripción ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único, previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El gasto de inversión a que se refiere el párrafo sexto del presente artículo se reportará en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública información del origen de los ingresos generados por los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.61.22.04 del presente artículo por concepto de otros aprovechamientos. Asimismo, deberá informar los destinos específicos que, en términos del artículo 19, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su caso tengan dichos aprovechamientos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales que se presenten al Congreso de la Unión en términos del artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal 2020, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

Durante el ejercicio fiscal 2020, los ingresos propios de Petróleos Mexicanos que se generen por un precio promedio anual del barril del petróleo crudo mexicano que exceda de 49.01 dólares de los Estados Unidos de América y hasta los 55.00 dólares de los Estados Unidos de América, deberá destinarlos a mejorar su meta de balance financiero aprobada en el artículo 5 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 532 mil millones de pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal podrá contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar y ejercer en el exterior créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, así como para canjear o refinanciar obligaciones del sector público federal, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 5 mil 300 millones de dólares de los Estados Unidos de América, el cual incluye el monto de endeudamiento neto externo que se ejercería con organismos financieros internacionales. De igual forma, el Ejecutivo Federal y las entidades podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto interno sea menor al establecido en el presente artículo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

También se autoriza al Ejecutivo Federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública. Asimismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo.

Las operaciones a las que se refiere el párrafo anterior no deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para el ejercicio fiscal de 2020.

Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente se podrán aplicar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario incluyendo sus artículos transitorios. Sobre estas operaciones de canje y refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión.

El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta propia con los valores referidos.

En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos en la cuenta que, para tal efecto, le lleve el Banco de México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al

Ahorro Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el citado Banco procurará las mejores condiciones para el mencionado Instituto dentro de lo que el mercado permita.

El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de 15 días hábiles contado a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco de México podrá ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Titular de dicha Tesorería, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo.

Se autoriza a la banca de desarrollo, a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores un monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el Resultado de Operación que considera la Constitución Neta de Reservas Crediticias Preventivas, de cero pesos para el ejercicio fiscal de 2020.

El monto autorizado conforme al párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización del órgano de gobierno de la entidad de que se trate y con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los montos establecidos en el artículo 1o., numeral 0 "Ingresos derivados de Financiamientos" de esta Ley, así como el monto de endeudamiento neto interno consignado en este artículo, se verán, en su caso, modificados en lo conducente como resultado de la distribución, entre el Gobierno Federal y los organismos y empresas de control directo, de los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

Se autoriza para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 10 mil millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de hasta 1 mil 250 millones de dólares de los Estados Unidos de América; asimismo, se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

Se autoriza para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto interno de hasta 9 mil 835 millones de pesos, y un monto de endeudamiento neto externo de 508 millones de dólares de los Estados Unidos de América, asimismo se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o interno, respectivamente, sea menor al establecido en este párrafo en un monto equivalente al de dichas obligaciones adicionales. El uso del endeudamiento anterior deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobado.

El cómputo de lo establecido en los dos párrafos anteriores se realizará en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2020 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará al Congreso de la Unión de manera trimestral sobre el avance del Programa Anual de Financiamiento, destacando el comportamiento de los diversos rubros en el cual se haga referencia al financiamiento del Gasto de Capital y Refinanciamiento.

Artículo 3o. Se autoriza para la Ciudad de México la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 4 mil millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020. Asimismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar operaciones de canje, refinanciamiento o reestructura de la deuda pública de la Ciudad de México.

El ejercicio del monto de endeudamiento autorizado se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 4o. En el ejercicio fiscal de 2020, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la Comisión Federal de Electricidad por un total de 257,138.2 millones de pesos, de los cuales 100,344.1 millones de pesos corresponden a inversión directa y 156,794.1 millones de pesos a inversión condicionada.

Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de inversión financiada de la Comisión Federal de Electricidad en los términos de los artículos 18 de la Ley Federal de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV, del Reglamento de este último ordenamiento, por un total de 2,760.7 millones de pesos que corresponde a un proyecto de inversión directa.

Artículo 6o. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y/o sus empresas productivas subsidiarias deberán presentar las declaraciones, hacer los pagos y cumplir con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros, ante la Tesorería de la Federación, a través del esquema para la presentación de declaraciones que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda facultada para establecer y, en su caso, modificar o suspender pagos a cuenta de los pagos provisionales mensuales del derecho por la utilidad compartida, previstos en el artículo 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará y explicará las modificaciones a los montos que, por ingresos extraordinarios o una baja en los mismos, impacten en los pagos establecidos conforme al párrafo anterior, en un informe que se presentará a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ambos de la Cámara de Diputados, dentro del mes siguiente a aquél en que se generen dichas modificaciones, así como en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.

En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga uso de las facultades otorgadas en el segundo párrafo de este artículo, los pagos correspondientes deberán ser transferidos y concentrados en la Tesorería de la Federación por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a más tardar el día siguiente de su recepción, a cuenta de la transferencia a que se refiere el artículo 16, fracción II, inciso g) de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Los gastos de mantenimiento y operación de los proyectos integrales de infraestructura de Petróleos Mexicanos que, hasta antes de la entrada en vigor del "Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008, eran considerados proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en términos del artículo 32 de dicha Ley, serán registrados como inversión.

Capítulo II

De las Facilidades Administrativas y Beneficios Fiscales

Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:

I. Al 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.

II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate:

1. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será del 1.26 por ciento mensual.

2. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.53 por ciento mensual.

3. Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.82 por ciento mensual.

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización realizada conforme a lo establecido por el Código Fiscal de la Federación.

Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos y disposiciones de carácter general expedidos en el Ramo de Hacienda, de las que hayan derivado beneficios otorgados en términos de la presente Ley, así como por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los que se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los que se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los municipios, por los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal, provenientes de comercio exterior, incluidos los sujetos a un procedimiento establecido en la legislación aduanera o fiscal federal, así como los abandonados a favor del Gobierno Federal.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2020, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen.

Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se estará a lo siguiente:

I. La cantidad que deba cubrirse por concepto del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios que tienen referencia internacional, se fijará considerando el cobro que se efectúe por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, de similares características, en países con los que México mantiene vínculos comerciales.

II. Los aprovechamientos que se cobren por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, que no tengan referencia internacional, se fijarán considerando el costo de los mismos, siempre que se derive de una valuación de dichos costos en los términos de eficiencia económica y de saneamiento financiero.

III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general.

Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública Federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los aprovechamientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los aprovechamientos que perciba la dependencia correspondiente.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por dicha Secretaría, ya sea de los ingresos que obtengan o con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, o tratándose de recuperaciones de capital o del patrimonio, según sea el caso, los recursos correspondientes se destinarán por la propia Secretaría prioritariamente a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a fomentar acciones que les permitan cumplir con sus respectivos mandatos, o a programas y proyectos de inversión, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente Ley.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de cualquier otra entidad paraestatal distinta de las señaladas en el párrafo anterior, dichos ingresos serán enterados a la Tesorería de la Federación bajo dicha naturaleza, a efecto de que sean destinados a programas presupuestarios que permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de él deriven.

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 1o., numerales 6.61.11, 6.62.01.04 y 6.61.22.04 de esta Ley por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, aquéllos a que se refieren la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la Ley Federal de Competencia Económica, y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los accesorios de los aprovechamientos no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

En aquellos casos en los que se incumpla con la obligación de presentar los comprobantes de pago de los aprovechamientos a que se refiere este artículo en los plazos que para tales efectos se fijen, el prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación de que se trate, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos.

El prestador del servicio o el otorgante del uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por aprovechamientos, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de carácter particular, las cuotas de los productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal de 2020, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2020, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2020, los montos de los productos que se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2020. Asimismo, los productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los productos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2020, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2019, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la tabla siguiente:

MES	FACTOR
Enero	1.0360
Febrero	1.0351
Marzo	1.0354
Abril	1.0314
Mayo	1.0308
Junio	1.0338
Julio	1.0332
Agosto	1.0293
Septiembre	1.0288
Octubre	1.0224
Noviembre	1.0195
Diciembre	1.0150

En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en porcentajes, se continuarán aplicando durante el 2020 los porcentajes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2019 hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para el 2020.

Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones efectuadas tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como por el Instituto de Administración de Bienes y Activos y los accesorios de los productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes propiedad del Gobierno Federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la propia Tesorería; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en un fondo, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.

De los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos, respecto de los bienes que pasan a propiedad del Fisco Federal conforme a las disposiciones fiscales, que hayan sido transferidos por el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deberá descontar los importes necesarios para financiar otras transferencias o mandatos de la citada entidad transferente, sobre bienes de la misma naturaleza; del monto restante hasta la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo se depositará en el fondo señalado en el párrafo anterior, manteniéndolo en una subcuenta específica, que se destinará a financiar otras transferencias o mandatos y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables. Un mecanismo como el previsto en el presente párrafo, se podrá aplicar a los ingresos provenientes de las enajenaciones de bienes de comercio exterior que transfieran las autoridades aduaneras, incluso para el pago de resarcimientos de bienes procedentes de comercio exterior que, por mandato de autoridad administrativa o jurisdiccional, el Instituto de Administración de Bienes y Activos deba realizar. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Para los efectos de los dos párrafos anteriores, el Instituto de Administración de Bienes y Activos remitirá de manera semestral a la Cámara de Diputados y a su Coordinadora de Sector, un informe que contenga el desglose de las operaciones efectuadas por motivo de las transferencias de bienes del Gobierno Federal de las autoridades mencionadas en los párrafos citados.

Los ingresos netos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Instituto de Administración de Bienes y Activos se podrán destinar hasta en un 100 por ciento a financiar otras transferencias o mandatos de la misma entidad transferente, así como para el pago de los créditos que hayan sido otorgados por la banca de desarrollo para cubrir los gastos de operación de los bienes transferidos, siempre que en el acta de entrega recepción de los bienes transferidos o en el convenio que al efecto se celebre se señale dicha situación. Lo anterior no resulta aplicable a las enajenaciones de bienes decomisados a que se refiere el décimo tercer párrafo del artículo 13 de esta Ley. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los ingresos provenientes de la enajenación de los bienes en proceso de extinción de dominio y de aquellos sobre los que sea declarada la extinción de dominio y de sus frutos, así como su monetización en términos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, serán destinados a una cuenta especial en los términos que establece el artículo 239 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 234 y 237 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a 10 días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias de la Administración Pública Federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2020, los conceptos y montos de los ingresos que hayan percibido por productos, así como de la concentración efectuada a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Las dependencias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar un informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los primeros 15 días del mes de julio de 2020 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 12. Los ingresos que se recauden durante el ejercicio fiscal 2020 se concentrarán en términos del artículo 22 de la Ley de Tesorería de la Federación, salvo en los siguientes casos:

I. Se concentrarán en la Tesorería de la Federación, a más tardar el día hábil siguiente al de su recepción, los derechos y aprovechamientos, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, incluidos entre otros las sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, así como los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión;

II. Las entidades de control directo, los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos por disposición constitucional, sólo registrarán los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente de esta Ley, salvo por lo dispuesto en la fracción I de este artículo, y deberán conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos.

Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere esta fracción, se deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, de los informes avalados por el órgano interno de control o de la comisión respectiva del órgano de gobierno, según sea el caso, especificando los importes del impuesto al valor agregado que hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de los ingresos;

III. Las entidades de control indirecto deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en posibilidad de elaborar los informes trimestrales que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se reflejen dentro de la Cuenta Pública Federal;

IV. Los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, podrán ser recaudados por las oficinas de los propios institutos o por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la Cuenta Pública Federal, y

V. Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de posgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquier otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio de la concentración en términos de la Ley de Tesorería de la Federación.

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere esta fracción, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de 10 días hábiles, contado a partir de que dichos ingresos hayan sido concentrados en la Tesorería de la Federación.

Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos.

Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se destinarán a las entidades o a las empresas productivas del Estado que los generen, para la realización del proyecto que los generó o proyectos de la misma naturaleza. Las entidades o las empresas productivas del Estado podrán celebrar convenios de colaboración con la iniciativa privada.

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.

Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en la fracción que les corresponda conforme al citado artículo.

Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de concentrar los recursos públicos al final del ejercicio en la Tesorería de la Federación, en los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos públicos que se reintegren de un fideicomiso, mandato o contrato análogo, así como aquellos remanentes a la extinción o terminación de la vigencia de esos instrumentos jurídicos, deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de productos o aprovechamientos, según su origen, y se podrán destinar a los fines que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, salvo aquéllos para los que esté previsto un destino distinto en el instrumento correspondiente. Asimismo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el numeral 6.62.01, con excepción del numeral 6.62.01.04 del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a gasto de inversión, así como a programas que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes.

Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son accesorios.

Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal o gastos de ejecución, serán los netos que resulten de restar al ingreso percibido las erogaciones efectuadas para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a que se refiere el párrafo siguiente.

Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos, negociaciones y desincorporación de entidades paraestatales son los recursos efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas. Con excepción de lo dispuesto en el séptimo párrafo de este artículo para los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, los ingresos netos a que se refiere este párrafo se enterarán o concentrarán, según corresponda, en la Tesorería de la Federación y deberán manifestarse tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo acciones, por la enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión de derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la desincorporación de entidades, se les podrá descontar un porcentaje, por concepto de gastos indirectos de operación, que no podrá ser mayor del 7 por ciento, a favor del Instituto de Administración de Bienes y Activos, cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la citada entidad, y se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27, 89 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos podrán destinarse para cubrir los gastos y pasivos derivados de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, directamente o por conducto del Fondo de Desincorporación de Entidades, siempre que se cuente con la opinión favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, sin que sea necesario concentrarlos en la Tesorería de la Federación. Estos recursos deberán identificarse por el liquidador, fiduciario o responsable del proceso en una subcuenta específica.

Los pasivos a cargo de organismos descentralizados en proceso de desincorporación que tengan como acreedor al Gobierno Federal, con excepción de aquéllos que tengan el carácter de crédito fiscal, quedarán extinguidos de pleno derecho sin necesidad de autorización alguna, y los créditos quedarán cancelados de las cuentas públicas.

Los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades que se encuentren en el Fondo de Desincorporación de Entidades, podrán permanecer afectos a éste para hacer frente a los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación de entidades deficitarios, previa opinión de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. No se considerará enajenación la transmisión de bienes y derechos al Fondo de Desincorporación de Entidades que, con la opinión favorable de dicha Comisión, efectúen las entidades en proceso de desincorporación, para concluir las actividades residuales del proceso respectivo.

Tratándose de los procesos de desincorporación de entidades constituidas o en las que participen entidades paraestatales no apoyadas u otras entidades con recursos propios, los recursos remanentes que les correspondan de dichos procesos ingresarán a sus respectivas tesorerías para hacer frente a sus gastos.

Los recursos disponibles de los convenios de cesión de derechos y obligaciones suscritos, como parte de la estrategia de conclusión de los procesos de desincorporación de entidades, entre el Instituto de Administración de Bienes y Activos y las entidades cuyos procesos de desincorporación concluyeron, podrán ser utilizados por éste, para sufragar las erogaciones relacionadas al cumplimiento de su objeto, relativo a la atención de encargos bajo su administración, cuando éstos sean deficitarios. Lo anterior, estará sujeto, al cumplimiento de las directrices que se emitan para tal efecto, así como a la autorización de la Junta de Gobierno del Instituto de Administración de Bienes y Activos, previa aprobación de los órganos colegiados competentes.

Los ingresos obtenidos por la venta de bienes asegurados a favor del Gobierno Federal, incluyendo numerario, cuya administración y destino hayan sido encomendados al Instituto de Administración de Bienes y Activos, en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, serán destinados a un fondo en los términos del artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, previa deducción de los conceptos previstos en los artículos 90, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Los ingresos provenientes de numerario y de la enajenación de bienes que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos, que hayan sido declarados abandonados por parte de las instancias competentes, distintos a los señalados en el párrafo décimo quinto del presente artículo y que se concentren a la Tesorería de la Federación, se considerarán aprovechamientos y se destinarán al financiamiento de las operaciones del Instituto, en términos de lo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 89, 92 y 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

El numerario decomisado y los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, una vez satisfecha la reparación a la víctima, y previa deducción de los gastos indirectos de operación que correspondan, se entregarán en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía General de la República, al Fondo previsto en la Ley General de Víctimas y al financiamiento de programas sociales conforme a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, u otras políticas prioritarias, conforme lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República, con excepción de lo dispuesto en el párrafo décimo primero del artículo 1o. de la presente Ley.

Los ingresos que la Federación obtenga en términos del artículo 71 de la Ley General de Víctimas, serán integrados al patrimonio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley citada.

Los ingresos provenientes de la enajenación que realice el Instituto de Administración de Bienes y Activos de vehículos declarados abandonados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por dicha dependencia, se destinarán de conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. De la cantidad restante a los permisionarios federales se les cubrirán los adeudos generados hasta con el treinta por ciento de los remanentes de los ingresos y el resto se enterará a la Tesorería de la Federación. Lo previsto en el presente párrafo se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 14. Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, entre las que se comprende de manera enunciativa a las siguientes:

I. Instituto Mexicano del Seguro Social.

II. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los términos de dichas disposiciones.

Artículo 15. Durante el ejercicio fiscal de 2020, los contribuyentes a los que se les impongan multas por infracciones derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, entre otras, las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, con la presentación de declaraciones, solicitudes o avisos y con la obligación de llevar contabilidad, así como aquéllos a los que se les impongan multas por no efectuar los pagos provisionales de una contribución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, con excepción de las impuestas por declarar pérdidas fiscales en exceso y las contempladas en el artículo 85, fracción I del citado Código, independientemente del ejercicio por el que corrijan su situación derivado del ejercicio de facultades de comprobación, pagarán el 50 por ciento de la multa que les corresponda si llevan a cabo dicho pago después de que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se le levante el acta final de la visita domiciliaria o se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, siempre y cuando, además de dicha multa, se paguen las contribuciones omitidas y sus accesorios, cuando sea procedente.

Cuando los contribuyentes a los que se les impongan multas por las infracciones señaladas en el párrafo anterior corrijan su situación fiscal y paguen las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, en su caso, después de que se levante el acta final de la visita domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación o se notifique la resolución provisional a que se refiere el artículo 53-B, primer párrafo, fracción I del citado Código, pero antes de que se notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva a que se refiere el citado artículo 53-B, los contribuyentes pagarán el 60 por ciento de la multa que les corresponda siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos en el párrafo anterior.

Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2020, se estará a lo siguiente:

A. En materia de estímulos fiscales:

I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que adquieran el diésel o el biodiésel y sus mezclas, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 60 millones de pesos y que para determinar su utilidad puedan deducir dichos combustibles cuando los importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de dichos combustibles, en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2, según corresponda al tipo de combustible, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante fiscal de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente:

1. El monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o el biodiésel y sus mezclas, por el número de litros de diésel o de biodiésel y sus mezclas importados o adquiridos.

En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral.

2. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en dichas actividades, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el valor en aduana del pedimento de importación o el precio consignado en el comprobante fiscal de adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas en las estaciones de servicio, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado.

El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

III. Las personas dedicadas a las actividades agropecuarias o silvícolas que se dediquen exclusivamente a estas actividades conforme al párrafo sexto del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final en dichas actividades agropecuarias o silvícolas a que se refiere la fracción I del presente artículo podrán solicitar la devolución del monto del impuesto especial sobre producción y servicios que tuvieran derecho a acreditar en los términos de la fracción II que antecede, en lugar de efectuar el acreditamiento a que la misma se refiere, siempre que cumplan con lo dispuesto en esta fracción.

Las personas a que se refiere el párrafo anterior que podrán solicitar la devolución serán únicamente aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. En ningún caso el monto de la devolución podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales por cada persona física, salvo que se trate de personas físicas que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de las Secciones I o II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales.

El Servicio de Administración Tributaria emitirá las reglas necesarias para simplificar la obtención de la devolución a que se refiere el párrafo anterior.

Las personas morales que podrán solicitar la devolución a que se refiere esta fracción serán aquéllas cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido el equivalente a veinte veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019, por cada uno de los socios o asociados, sin exceder de doscientas veces el valor anual de la

Unidad de Medida y Actualización vigente en el año 2019. El monto de la devolución no podrá ser superior a 747.69 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que exceda en su totalidad de 7,884.96 pesos mensuales, salvo que se trate de personas morales que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos de los artículos 74 y 75 del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuyo caso podrán solicitar la devolución de hasta 1,495.39 pesos mensuales, por cada uno de los socios o asociados, sin que en este último caso exceda en su totalidad de 14,947.81 pesos mensuales.

La devolución correspondiente deberá ser solicitada trimestralmente en los meses de abril, julio y octubre de 2020 y enero de 2021.

Las personas a que se refiere el primer párrafo de esta fracción deberán llevar un registro de control de consumo de diésel o de biodiésel y sus mezclas, en el que asienten mensualmente la totalidad del diésel o del biodiésel y sus mezclas que utilicen para sus actividades agropecuarias o silvícolas en los términos de la fracción I de este artículo, en el que se deberá distinguir entre el diésel o el biodiésel y sus mezclas que se hubiera destinado para los fines a que se refiere dicha fracción, del diésel o del biodiésel y sus mezclas utilizado para otros fines. Este registro deberá estar a disposición de las autoridades fiscales por el plazo a que se esté obligado a conservar la contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales.

La devolución a que se refiere esta fracción se deberá solicitar al Servicio de Administración Tributaria acompañando la documentación prevista en la presente fracción, así como aquélla que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

El derecho para la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha en que se hubiere efectuado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas cumpliendo con los requisitos señalados en esta fracción, en el entendido de que quien no solicite oportunamente su devolución, perderá el derecho de realizarlo con posterioridad a dicho año.

Los derechos previstos en esta fracción y en la fracción II de este artículo no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen el diésel o el biodiésel y sus mezclas en bienes destinados al autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos.

IV. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y que sea para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico, consistente en permitir el acreditamiento de un monto equivalente al impuesto especial sobre producción y servicios que las personas que enajenen diésel o biodiésel y sus mezclas en territorio nacional hayan causado por la enajenación de estos combustibles en términos del artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según corresponda al tipo de combustible, con los ajustes que en su caso correspondan, así como el acreditamiento del impuesto a que se refiere el numeral citado, que hayan pagado en su importación.

Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda según el tipo de combustible, conforme al artículo 2o., fracción I, inciso D), numeral 1, subinciso c) o el numeral 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con los ajustes que, en su caso, correspondan, vigente en el momento en que se haya realizado la importación o adquisición del diésel o del biodiésel y sus mezclas, por el número de litros importados o adquiridos.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se importe o adquiera el diésel o biodiésel y sus mezclas, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Para que proceda el acreditamiento a que se refiere esta fracción, el pago por la importación o adquisición de diésel o de biodiésel y sus mezclas a distribuidores o estaciones de servicio, deberá efectuarse con: monedero electrónico autorizado por el Servicio de Administración Tributaria; tarjeta de crédito, débito o de servicios, expedida a favor del contribuyente que pretenda hacer el acreditamiento; con cheque nominativo expedido por el importador o adquirente para abono en cuenta del enajenante, o bien, transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México.

En ningún caso este beneficio podrá ser utilizado por los contribuyentes que presten preponderantemente sus servicios a otra persona moral residente en el país o en el extranjero, que se considere parte relacionada, de acuerdo al artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Adicionalmente, para que proceda la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas, el beneficiario deberá contar con el pedimento de importación o con el comprobante fiscal correspondiente a la adquisición del biodiésel o sus mezclas, en el que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que se contenga en el caso de las mezclas y tratándose del comprobante de adquisición, deberá contar también con el número del pedimento de importación con el que se llevó a cabo la importación del citado combustible y deberá recabar de su proveedor una copia del pedimento de importación citado en el comprobante. En caso de que en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal de adquisición no se asienten los datos mencionados o que en este último caso no se cuente con la copia del pedimento de importación, no procederá la aplicación del estímulo al biodiésel y sus mezclas.

Los beneficiarios del estímulo previsto en esta fracción deberán llevar los controles y registros que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Para los efectos de la presente fracción y la fracción V de este apartado, se entiende por transporte privado de personas o de carga, aquél que realizan los contribuyentes con vehículos de su propiedad o con vehículos que tengan en arrendamiento, incluyendo el arrendamiento financiero, para transportar bienes propios o su personal, o bienes o personal, relacionados con sus actividades económicas, sin que por ello se genere un cobro.

V. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público y privado, de carga o pasaje, así como el turístico, que utilizan la Red Nacional de Autopistas de Cuota, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que hagan uso de la infraestructura carretera de cuota, ingresos totales anuales para los efectos del impuesto sobre la renta menores a 300 millones de pesos, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la infraestructura mencionada hasta en un 50 por ciento del gasto total erogado por este concepto. El estímulo será aplicable únicamente cuando se cumplan con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. El estímulo no podrá ser aplicable por las personas morales que se consideran partes relacionadas de acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para los efectos de este párrafo, no se considerarán dentro de los ingresos totales, los provenientes de la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad.

Los contribuyentes considerarán como ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta el estímulo a que hace referencia esta fracción en el momento en que efectivamente lo acrediten.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se realicen los gastos a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizarlo con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de acreditamiento por tramo carretero y demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación del beneficio contenido en esta fracción.

VI. Se otorga un estímulo fiscal a los adquirentes que utilicen los combustibles fósiles a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que en su proceso productivo no se destinen a la combustión.

El estímulo fiscal señalado en esta fracción será igual al monto que resulte de multiplicar la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios que corresponda, por la cantidad del combustible consumido en un mes, que no se haya sometido a un proceso de combustión.

El monto que resulte conforme a lo señalado en el párrafo anterior únicamente podrá ser acreditado contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se adquieran los combustibles a que se refiere la presente fracción, utilizando la forma oficial que mediante reglas de carácter general dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria; en caso de no hacerlo, perderá el derecho a realizado con posterioridad.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir reglas de carácter general que determinen los porcentajes máximos de utilización del combustible no sujeto a un proceso de combustión por tipos de industria, respecto de los litros o toneladas, según corresponda al tipo de combustible de que se trate, adquiridos en un mes de calendario, así como las demás disposiciones que considere necesarias para la correcta aplicación de este estímulo fiscal.

VII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales y sustancias a que se refiere la Ley Minera, sean menores a 50 millones de pesos, consistente en permitir el acreditamiento del derecho especial sobre minería a que se refiere el artículo 268 de la Ley Federal de Derechos que hayan pagado en el ejercicio de que se trate.

El acreditamiento a que se refiere esta fracción, únicamente podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tengan los concesionarios o asignatarios mineros a su cargo, correspondiente al mismo ejercicio en que se haya determinado el estímulo.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación de esta fracción.

VIII. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de seis millones de pesos, y que dichos ingresos obtenidos en el ejercicio por la enajenación de libros, periódicos y revistas represente al menos el 90% de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio de que se trate.

El estímulo a que se refiere el párrafo anterior consiste en una deducción adicional para los efectos del impuesto sobre la renta, por un monto equivalente al 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquiera el contribuyente.

Los beneficiarios de los estímulos fiscales previstos en las fracciones I, IV, V, VI y VII de este apartado quedarán obligados a proporcionar la información que les requieran las autoridades fiscales dentro del plazo que para tal efecto señalen.

Los beneficios que se otorgan en las fracciones I, II y III del presente apartado no podrán ser acumulables con ningún otro estímulo fiscal establecido en esta Ley.

Los estímulos establecidos en las fracciones IV y V de este apartado podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos establecidos en la presente Ley.

Los estímulos fiscales que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que los beneficiarios de los mismos cumplan con los requisitos que para cada uno de ellos se establece en la presente Ley.

B. En materia de exenciones:

Se exime del pago del derecho de trámite aduanero que se cause por la importación de gas natural, en los términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo.

Artículo 17. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a empresas productivas del Estado, organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza.

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.

Se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.

Artículo 18. Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, los tribunales administrativos, los órganos autónomos por disposición constitucional, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades, se deberán aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados de la dependencia en la Ley de Ingresos de la Federación, a los enteros acumulados efectuados por dicha dependencia a la Tesorería de la Federación, en el periodo que corresponda.

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso, goce aprovechamiento o explotación de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades.

Artículo 19. Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican de la siguiente manera:

I. Ingresos inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se generan en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades relacionadas directamente con las funciones recurrentes de la institución.

II. Ingresos no inherentes a las funciones de la dependencia o entidad, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades que no guardan relación directa con las funciones recurrentes de la institución.

III. Ingresos de carácter excepcional, los cuales se obtienen en exceso a los contenidos en el calendario de los ingresos a que se refiere esta Ley o, en su caso, a los previstos en los presupuestos de las entidades, por actividades de carácter excepcional que no guardan relación directa con las atribuciones de la dependencia o entidad, tales como la recuperación de seguros, los donativos en dinero y la enajenación de bienes muebles.

IV. Ingresos de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como de los tribunales administrativos y de los órganos constitucionales autónomos. No se incluyen en esta fracción los aprovechamientos por infracciones a la Ley Federal de Competencia Económica, y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ni aquéllos por concepto de derechos y aprovechamientos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico y los servicios vinculados a éste, los cuales se sujetan a lo dispuesto en el artículo 12, fracción I, de esta Ley.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades a más tardar el último día hábil de enero de 2020 y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se modifiquen.

Los ingresos a que se refiere la fracción III de este artículo se aplicarán en los términos de lo previsto en la fracción II y penúltimo párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 20. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal de 2020 la tasa de retención anual a que se refieren los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta será del 1.45 por ciento. La metodología para calcular dicha tasa es la siguiente:

I. Se determinó la tasa de rendimiento promedio ponderado de los valores públicos por el periodo comprendido de febrero a julio de 2019, conforme a lo siguiente:

a) Se tomaron las tasas promedio mensuales por instrumento, de los valores públicos publicados por el Banco de México.

b) Se determinó el factor de ponderación mensual por instrumento, dividiendo las subastas mensuales de cada instrumento entre el total de las subastas de todos los instrumentos públicos efectuadas al mes.

c) Para calcular la tasa ponderada mensual por instrumento, se multiplicó la tasa promedio mensual de cada instrumento por su respectivo factor de ponderación mensual, determinado conforme al inciso anterior.

d) Para determinar la tasa ponderada mensual de valores públicos se sumó la tasa ponderada mensual por cada instrumento.

e) La tasa de rendimiento promedio ponderado de valores públicos correspondiente al periodo febrero a julio de 2019 se determinó con el promedio simple de las tasas ponderadas mensuales determinadas conforme al inciso anterior del mencionado periodo.

II. Se tomaron las tasas promedio ponderadas mensuales de valores privados publicadas por el Banco de México y se determinó el promedio simple de dichos valores correspondiente al periodo de febrero a julio de 2019.

III. Se determinó un factor ponderado de los instrumentos públicos y privados en función al saldo promedio en circulación de los valores públicos y privados correspondientes al periodo de febrero a julio de 2019 publicados por el Banco de México.

IV. Para obtener la tasa ponderada de instrumentos públicos y privados, se multiplicaron las tasas promedio ponderadas de valores públicos y privados, determinados conforme a las fracciones I y II, por su respectivo factor de ponderación, determinado conforme a la fracción anterior, y posteriormente se sumaron dichos valores ponderados.

V. Al valor obtenido conforme a la fracción IV se disminuyó el valor promedio de la inflación mensual interanual del índice general correspondiente a cada uno de los meses del periodo de febrero a julio de 2019 del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

VI. La tasa de retención anual es el resultado de multiplicar el valor obtenido conforme a la fracción V de este artículo por la tasa correspondiente al último tramo de la tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 22. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por el incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades competentes, con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de 1 hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con base en los criterios que se establezcan para tal efecto, los cuales podrán considerar, entre otros, los días de atraso en la atención de los requerimientos, la gravedad de los delitos a los que, en su caso, se refieran los requerimientos que se hubieran incumplido, o la probable afectación de los intereses patrimoniales de los clientes o usuarios de los servicios financieros.

Las infracciones a las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en su caso, financiamiento al terrorismo, cometidas por las entidades financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero, sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y asesores en inversiones, serán sancionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del reporte de la operación inusual que no se hubiera enviado, del 10 por ciento al 100 por ciento del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario de la que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas conforme a las disposiciones señaladas anteriormente, o bien con multa equivalente en moneda nacional de 10 hasta 100,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el caso de cualquier otro incumplimiento a las referidas disposiciones.

Artículo 23. Los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal, previsto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con las obligaciones que se establecen en dicho régimen durante el periodo que permanezcan en el mismo, por las actividades que realicen con el público en general, podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios que, en su caso, corresponda a las actividades mencionadas, mediante la aplicación del esquema de estímulos siguiente:

I. Calcularán y pagarán los impuestos citados en la forma siguiente:

a) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto al valor agregado en el bimestre de que se trate, considerando el giro o actividad a la que se dedique el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

Sector económico		Porcentaje IVA (%)
1	Minería	8.0
2	Manufacturas y/o construcción	6.0
3	Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles)	2.0
4	Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y demás negocios similares en que se proporcionen servicios de alimentos y bebidas)	8.0
5	Negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y/o medicinas	0.0

Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a dos o más de los sectores económicos mencionados en los numerales 1 a 4 aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante. Se entiende por sector preponderante aquél de donde provenga la mayor parte de los ingresos del contribuyente.

b) Se aplicarán los porcentajes que a continuación se listan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las actividades afectas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios en el bimestre de que se trate, considerando el tipo de bienes enajenados por el contribuyente, conforme a la siguiente:

Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar

Descripción	Porcentaje IEPS (%)
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea comercializador)	1.0
Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente sea fabricante)	3.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea comercializador)	10.0
Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea fabricante)	21.0
Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante)	4.0
Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante)	10.0
Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador)	1.0
Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el contribuyente sea fabricante)	23.0
Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante)	120.0

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el presente artículo, cuando hayan pagado el impuesto especial sobre producción y servicios en la importación de tabacos labrados y bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos C) y G) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, considerarán dicho pago como definitivo, por lo que ya no pagarán el impuesto que trasladen en la enajenación de los bienes importados, siempre que dicha enajenación se efectúe con el público en general.

c) El resultado obtenido conforme a los incisos a) y b) de esta fracción será el monto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios, en su caso, a pagar por las actividades realizadas con el público en general, sin que proceda acreditamiento alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente.

d) El pago bimestral del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios deberá realizarse por los periodos y en los plazos establecidos en los artículos 5o.-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 5o.-D de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Para los efectos de la presente fracción se entiende por actividades realizadas con el público en general, aquéllas por las que se emitan comprobantes que únicamente contengan los requisitos que se establezcan mediante reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. El traslado del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios en ningún caso deberá realizarse en forma expresa y por separado.

Tratándose de las actividades por las que los contribuyentes expidan comprobantes que reúnan los requisitos fiscales para que proceda su deducción o acreditamiento, en donde se traslade en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, dichos impuestos deberán pagarse en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y demás disposiciones aplicables, conjuntamente con el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios determinado conforme al inciso c) de esta fracción.

Para los efectos del párrafo anterior, el acreditamiento del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios será aplicable, cuando proceda, en la proporción que represente el valor de las actividades por las que se expidieron comprobantes fiscales en las que se haya efectuado el traslado expreso y por separado, en el valor total de las actividades del bimestre que corresponda.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere esta fracción podrán abandonarla en cualquier momento, en cuyo caso deberán calcular y pagar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios en los términos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado o en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, según se trate, a partir del bimestre en que abandonen la opción. En este caso, los contribuyentes no podrán volver a ejercer la opción prevista en el presente artículo.

II. Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo, por las actividades realizadas con el público en general en las que determinen el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios con el esquema de porcentajes a que se refiere la fracción I del presente artículo, podrán aplicar un estímulo fiscal en la forma siguiente:

a) A los impuestos al valor agregado y especial sobre producción y servicios determinados mediante la aplicación de los porcentajes, se le aplicarán los porcentajes de reducción que se citan a continuación, según corresponda al número de años que tenga el contribuyente tributando en el Régimen de Incorporación Fiscal:

TABLA

Años	Porcentaje de reducción (%)
1	100
2	90
3	80
4	70
5	60
6	50

7	40
8	30
9	20
10	10

Para los efectos de la aplicación de la tabla el número de años de tributación del contribuyente se determinará de conformidad con lo que al respecto se considere para los efectos del impuesto sobre la renta.

Tratándose de contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal, cuyos ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de trescientos mil pesos, durante cada uno de los años en que tributen en el Régimen de Incorporación Fiscal y no excedan el monto de ingresos mencionados, el porcentaje de reducción aplicable será de 100 por ciento.

Los contribuyentes que inicien actividades y que opten por tributar conforme al Régimen de Incorporación Fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, podrán aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán al monto establecido en dicho párrafo. Cuando en el ejercicio inicial realicen operaciones por un período menor a doce meses, para determinar el monto citado, dividirán los ingresos obtenidos entre el número de días que comprenda el período y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto referido, en el ejercicio siguiente no se podrá tomar el beneficio del párrafo anterior.

b) La cantidad obtenida mediante la aplicación de los porcentajes de reducción a que se refiere el inciso anterior será acreditable únicamente contra el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios, según se trate, determinado conforme a la aplicación de los porcentajes a que se refiere la fracción I de este artículo.

III. El estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo no se considerará como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta.

IV. Se releva a los contribuyentes a que se refiere este artículo de la obligación de presentar el aviso a que se refiere el artículo 25, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 24. Para los efectos del impuesto sobre la renta, se estará a lo siguiente:

I. Las personas físicas que tengan su casa habitación en las zonas afectadas por los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que tributen en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no considerarán como ingresos acumulables para efectos de dicha Ley, los ingresos por apoyos económicos o monetarios que reciban de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, siempre que dichos apoyos económicos o monetarios se destinen para la reconstrucción o reparación de su casa habitación.

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran zonas afectadas los municipios de los Estados afectados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, que se listen en las declaratorias de desastre natural correspondientes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

II. Para los efectos de los artículos 82, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 138 de su Reglamento, se considera que las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de dicha Ley, cumplen con el objeto social autorizado para estos efectos, cuando otorguen donativos a organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta y cuyo objeto exclusivo sea realizar labores de rescate y reconstrucción en casos de desastres naturales, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:

a) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos, se deberá cumplir con lo siguiente:

1. Contar con autorización vigente para recibir donativos al menos durante los 5 años previos al momento en que se realice la donación, y que durante ese periodo la autorización correspondiente no haya sido revocada o no renovada.

2. Haber obtenido ingresos en el ejercicio inmediato anterior cuando menos de 5 millones de pesos.

3. Auditar sus estados financieros.

4. Presentar un informe respecto de los donativos que se otorguen a organizaciones o fideicomisos que no tengan el carácter de donatarias autorizadas que se dediquen a realizar labores de rescate y reconstrucción ocasionados por desastres naturales.

5. No otorgar donativos a partidos políticos, sindicatos, instituciones religiosas o de gobierno.

6. Presentar un listado con el nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes de las organizaciones civiles o fideicomisos que no cuenten con la autorización para recibir donativos a las cuales se les otorgó el donativo.

b) Tratándose de las organizaciones civiles y fideicomisos que no cuenten con autorización para recibir donativos, a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, deberán cumplir con lo siguiente:

1. Estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes.

2. Comprobar que han efectuado operaciones de atención de desastres, emergencias o contingencias por lo menos durante 3 años anteriores a la fecha de recepción del donativo.

3. No haber sido donataria autorizada a la que se le haya revocado o no renovado la autorización.

4. Ubicarse en alguno de los municipios o en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de las zonas afectadas por el desastre natural de que se trate.

5. Presentar un informe ante el Servicio de Administración Tributaria, en el que se detalle el uso y destino de los bienes o recursos recibidos, incluyendo una relación de los folios de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y la documentación con la que compruebe la realización de las operaciones que amparan dichos comprobantes.

6. Devolver los remanentes de los recursos recibidos no utilizados para el fin que fueron otorgados a la donataria autorizada.

7. Hacer pública la información de los donativos recibidos en su página de Internet o, en caso de no contar con una, en la página de la donataria autorizada.

El Servicio de Administración Tributaria podrá expedir reglas de carácter general necesarias para la debida y correcta aplicación de esta fracción.

Capítulo III

De la Información, la Transparencia, la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento

Artículo 25. Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.

La realización del estudio referido en el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 de marzo de 2020.

Artículo 26. Los estímulos fiscales y las facilidades administrativas que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresividad.

Para el otorgamiento de los estímulos fiscales deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Artículo 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores lo siguiente:

A. El Presupuesto de Gastos Fiscales, a más tardar el 30 de junio de 2020, que comprenderá los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal.

El presupuesto a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2021 en los siguientes términos:

I. El monto estimado de los recursos que dejará de percibir en el ejercicio el Erario Federal.

II. La metodología utilizada para realizar la estimación.

III. La referencia o sustento jurídico que respalde la inclusión de cada concepto o partida.

IV. Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso.

V. Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales.

B. Un reporte de las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta, a más tardar el 30 de septiembre de 2020, en el que se deberá señalar, para cada una la siguiente información:

I. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de nacionales.

II. Ingresos por donativos recibidos en efectivo de extranjeros.

III. Ingresos por donativos recibidos en especie de nacionales.

IV. Ingresos por donativos recibidos en especie de extranjeros.

V. Ingresos obtenidos por arrendamiento de bienes.

VI. Ingresos obtenidos por dividendos.

VII. Ingresos obtenidos por regalías.

VIII. Ingresos obtenidos por intereses devengados a favor y ganancia cambiaría.

IX. Otros ingresos.

X. Erogaciones efectuadas por sueldos, salarios y gastos relacionados.

XI. Erogaciones efectuadas por aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y jubilaciones por vejez.

XII. Erogaciones efectuadas por cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

XIII. Gastos administrativos.

XIV. Gastos operativos.

XV. Monto total de percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos.

El reporte deberá incluir las entidades federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de donataria de conformidad con los conceptos contenidos en los artículos 79, 82, 83 y 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en su Reglamento.

C. Para la generación del reporte a que se refiere el Apartado B de este artículo, la información se obtendrá de aquélla que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en la declaración de las personas morales con fines no lucrativos correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La información sobre los gastos administrativos y operativos, así como de las percepciones netas de cada integrante del Órgano de Gobierno Interno o de directivos análogos a que se refiere el Apartado B de este artículo, se obtendrá de los datos reportados a más tardar el 31 de julio de 2020, en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria en la Sección de Transparencia de

Donatarias Autorizadas correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a que se refiere el artículo 82, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se entenderá por gastos administrativos y operativos lo siguiente:

I. Gastos administrativos: los relacionados con las remuneraciones al personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles**,** teléfono, electricidad, papelería, mantenimiento y conservación, los impuestos y derechos federales o locales, así como las demás contribuciones y aportaciones que en términos de las disposiciones legales respectivas deba cubrir la donataria siempre que se efectúen en relación directa con las oficinas o actividades administrativas, entre otros. No quedan comprendidos aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

II. Gastos operativos: aquéllos que la donataria deba destinar directamente para cumplir con los fines propios de su objeto social.

La información a que se refieren los Apartados B y C de este artículo, no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establecen los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 2o., fracción VII de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Artículo 28. En el ejercicio fiscal de 2020, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

Toda iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente:

I. Que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes.

II. Que el pago de las contribuciones sea sencillo y asequible.

III. Que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización.

IV. Que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas.

Los aspectos anteriores deberán incluirse en la exposición de motivos de la iniciativa de que se trate, mismos que deberán ser tomados en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las comisiones respectivas del Congreso de la Unión. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales.

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en la misma, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos 5 años. Se deberá entender por memoria de cálculo los procedimientos descritos en forma detallada de cómo se realizaron los cálculos, con el fin de que puedan ser revisados por la Cámara de Diputados.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2020, salvo lo dispuesto en el transitorio Séptimo, el cual entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Decreto, mismo que será aplicable en el ejercicio fiscal de 2019 respecto de los recursos que las entidades federativas y municipios hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación en dicho ejercicio, correspondientes a ejercicios fiscales de 2017 y 2018.

Segundo. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal a las que se refiere el informe que, en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha rendido el propio Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión en el año 2019.

Tercero. Para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, cuando de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se modifique la denominación de alguna dependencia o entidad o las existentes desaparezcan, se entenderá que los ingresos estimados para éstas en la presente Ley corresponderán a las dependencias o entidades cuyas denominaciones hayan cambiado o que absorban las facultades de aquéllas que desaparezcan, según corresponda.

Cuarto. Durante el ejercicio fiscal de 2020 el Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios creado mediante el Quinto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de noviembre de 2013 continuará destinándose en los términos del citado precepto.

Quinto. Durante el ejercicio fiscal 2020 las referencias que en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de las contribuciones se hacen a la Comisión Nacional del Agua en la Ley Federal de Derechos, así como en los artículos 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y Décimo Tercero de las Disposiciones Transitorias del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y las disposiciones que emanen de dichos ordenamientos se entenderán hechas también al Servicio de Administración Tributaria.

Sexto. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá reportar en los Informes Trimestrales la información sobre los ingresos excedentes que, en su caso, se hayan generado con respecto al calendario de ingresos derivado de la Ley de Ingresos de la Federación a que se refiere el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En este reporte se presentará la comparación de los ingresos propios de las entidades paraestatales bajo control presupuestario directo, de las empresas productivas del Estado, así como del Gobierno Federal. En el caso de éstos últimos se presentará lo correspondiente a los ingresos provenientes de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Séptimo. Las entidades federativas y municipios que cuenten con disponibilidades de recursos federales destinados a un fin específico previsto en ley, en reglas de operación, convenios o instrumentos jurídicos, correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2020, que no hayan sido devengados y pagados en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, deberán enterarlos a la Tesorería de la Federación, incluyendo los rendimientos financieros que hubieran generado. Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, para apoyar a las entidades federativas que presenten un desequilibrio financiero que imposibilite el pago de compromisos de corto plazo o, en su caso y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, para mejorar la infraestructura de las mismas, así como la atención de desastres naturales.

Para efectos de lo anterior, los aprovechamientos provenientes de los enteros que realicen las entidades federativas y municipios en términos del presente transitorio, respecto de ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor de las obligaciones de reintegro a la Tesorería de la Federación establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, no se considerarán extemporáneos, por lo que no causan daño a la hacienda pública ni se cubrirán cargas financieras, siempre y cuando dichas disponibilidades hayan estado depositadas en cuentas bancarias de la entidad federativa y/o municipio.

Octavo. En el ejercicio fiscal de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria deberá publicar estudios sobre la evasión fiscal en México. En la elaboración de dichos estudios deberán participar instituciones académicas de prestigio en el país, instituciones académicas extranjeras, centros de investigación, organismos o instituciones nacionales o internacionales que se dediquen a la investigación o que sean especialistas en la materia. Sus resultados deberán darse a conocer a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar 35 días después de terminado el ejercicio fiscal de 2020.

Noveno. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, durante el ejercicio fiscal 2020 y en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado requerirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los pagos correspondientes a los adeudos vencidos que tengan las dependencias o entidades de los municipios o de las entidades federativas, con cargo a las participaciones y transferencias federales de las entidades federativas y los municipios que correspondan.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará el monto de los pagos a que se refiere el párrafo anterior con cargo a las participaciones y transferencias federales, garantizando que las entidades federativas cuenten con solvencia para la atención de sus necesidades primordiales.

El Instituto, conforme a los modelos autorizados por su órgano de gobierno, podrá suscribir con las entidades federativas y, en su caso, los municipios, dependencias y entidades de los gobiernos locales que correspondan, los convenios para la regularización de los adeudos que tengan con dicho Instituto por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos. El plazo máximo para cubrir los pagos derivados de dicha regularización será de 15 años. Asimismo, en adición a lo previsto en artículo 22 de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el marco de la celebración de los referidos convenios, dicho Instituto deberá otorgar descuentos en los accesorios generados a las contribuciones adeudadas excepto los correspondientes a las cuotas y aportaciones que deban ser depositadas en las cuentas individuales de los trabajadores. Para tal efecto, deberán adecuar los convenios de incorporación voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para incluir en el mismo lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 204 de dicha Ley.

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá aceptar como fuente de pago bienes inmuebles que se considerarán como dación en pago para la extinción total o parcial de adeudos distintos de las cuotas y aportaciones que deban depositarse a las cuentas individuales de los trabajadores. El Instituto determinará si los bienes a los que se refiere este párrafo, resultan funcionales para el cumplimiento de su objeto, asegurándose que se encuentren libres de cualquier gravamen o proceso judicial y que el monto del adeudo no sea mayor al valor del avalúo efectuado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. En estos casos, la entidad federativa, municipio, dependencia o entidad del gobierno local, según corresponda, deberá cubrir los gravámenes y demás costos de la operación respectiva, los cuales no computarán para el cálculo del importe del pago.

Décimo. Las dependencias y entidades que coordinen la operación de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos, salvo los que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, concentrarán en la Tesorería de la Federación, en términos de las disposiciones específicas que emita, los recursos públicos disponibles no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 en dichos vehículos, salvaguardando en todo momento los derechos de terceros.

Los aprovechamientos que se generen se destinarán a gasto de inversión así como a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Los programas de inversión deberán registrarse en la cartera de inversión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Lo anterior no será obligatorio a los instrumentos jurídicos que por disposición expresa de ley los recursos públicos deban permanecer en el patrimonio o afectos a los mismos, así como a aquéllos en materia de pensiones y seguridad social, desastres naturales, infraestructura, estabilización de ingresos incluyendo al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y aquellos que sirvan como mecanismo de garantía o fuente de pago de obligaciones a cargo del Gobierno Federal o sus entidades paraestatales.

Dicha dependencia deberá señalar en los informes trimestrales sobre la situación económica y las finanzas públicas, sobre el monto y el destino que dé a los recursos utilizados conforme a lo previsto en este párrafo.

Asimismo, las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, un informe de los fideicomisos, mandatos o análogos públicos susceptibles de extinguirse en términos de las disposiciones aplicables, lo anterior a efecto de que durante el ejercicio fiscal 2020 se lleven a cabo los actos necesarios para la extinción de dichos vehículos.

Décimo Primero. Los contratos de fideicomiso y mandato públicos deberán prever que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá disponer en cualquier momento del patrimonio de éstos, asimismo, deberán establecer la obligación de las instituciones fiduciarias o mandatarias, de concentrar trimestralmente en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos, los rendimientos financieros generados por la inversión del patrimonio fideicomitido o destinado para el cumplimiento de su objeto, salvo disposición de carácter general en contrario.

Las instituciones fiduciarias o mandatarias de fideicomisos, mandatos o análogos públicos, deberán concentrar de forma trimestral en la Tesorería de la Federación los intereses generados por dichos instrumentos financieros, salvo aquéllos que impliquen el pago de gastos de operación de dichos vehículos, bajo la naturaleza de aprovechamientos, y se destinarán a gasto en salud o de inversión en infraestructura, lo anterior con excepción de aquellos vehículos financieros que por disposición expresa de ley, decreto o determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dichos recursos deban permanecer afectos a su patrimonio o destinados al objeto correspondiente. Para efectos de lo anterior, las dependencias coordinadoras de dichos vehículos deberán realizar los actos necesarios para modificar en el primer semestre del ejercicio fiscal los instrumentos jurídicos respectivos.

Décimo Segundo. Se instruye a la institución fiduciaria del fideicomiso Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria para que durante el mes de marzo del presente ejercicio, concentre en la Tesorería de la Federación bajo la naturaleza de aprovechamientos los recursos que integran el patrimonio fideicomitido a esa fecha a fin de destinarlos, mediante el mecanismo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a proyectos de inversión de infraestructura económica para la construcción, ampliación o rehabilitación de puertos, así como para proyectos ferroviarios para transporte de carga y pasajeros que mejoren la conectividad entre los puertos.

Para efectos de lo anterior, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el citado fideicomiso no podrá asumir compromisos adicionales y únicamente podrán llevarse a cabo los actos tendientes a su extinción, la cual deberá formalizarse a más tardar en el mes de junio del presente ejercicio fiscal. Las obligaciones asumidas que se tengan con terceros, serán cubiertas con cargo al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Décimo Tercero. Durante el primer semestre del ejercicio fiscal de 2020, la institución fiduciaria del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados deberá concentrar en la Tesorería de la Federación los recursos remanentes previstos en su patrimonio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Los recursos correspondientes a los aprovechamientos que se obtengan, se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programas de inversión que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, o bien, para los destinos establecidos en el Séptimo transitorio de esta Ley.

Décimo Cuarto. Durante el ejercicio fiscal de 2020, la Comisión Federal de Electricidad podrá implementar programas de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica de entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y organismos públicos prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos, a través de la celebración de convenios con cualquiera de las personas morales de la administración pública antes mencionadas.

Los programas serán vigentes en el ejercicio fiscal 2020 y se implementarán a través de la celebración de convenios a los que se refiere el párrafo anterior, se sujetarán, sin perjuicio de las demás disposiciones jurídicas aplicables, a las reglas de operación que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, las cuales podrán considerar las características del solicitante, pudiéndose condonar el pago de hasta el 50 por ciento del adeudo, y que el resto de éste sea cubierto mediante parcialidades, y en caso de incumplimiento, los convenios permitirán que la Comisión Federal de Electricidad pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la compensación parcial a cargo de las partidas federales que le correspondan a las entidades federativas, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal y las disposiciones derivadas de éste, previendo que las entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México cuenten con solvencia para la atención de sus requerimientos de gasto público.

Décimo Quinto. Con el fin de promover el saneamiento de los créditos adeudados por concepto de cuotas obrero patronales, capitales constitutivos y sus accesorios, con excepción de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, por parte de Entidades Federativas, Municipios y Organismos Descentralizados que estén excluidas o no comprendidas en leyes o decretos como sujetos de aseguramiento, se autoriza al Instituto Mexicano del Seguro Social durante el Ejercicio Fiscal de 2020 a suscribir convenios de pago en parcialidades a un plazo máximo de hasta 6 años.

Para tal efecto, las participaciones que con cargo al Fondo General de Participaciones corresponda recibir a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, servirán como fuente de pago de los importes convenidos, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retendrá el monto correspondiente a las parcialidades determinadas en los convenios y realizará el entero directo de dichos importes al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizando con ello la adecuada financiación de los servicios de salud y seguridad social.

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2019.- Dip. **Laura Angélica Rojas Hernández**, Presidenta.- Sen. **Mónica Fernández Balboa**, Presidenta.- Dip. **Ma. Sara Rocha Medina**, Secretaria.- Sen. **Primo Dothé Mata**, Secretario.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2019.- **Andrés Manuel López Obrador**.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. **Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila**.- Rúbrica.